EL COLEGIO DE MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Juicio de amparo y reforma agraria en el Estado de México, 1917-1971

Tesis presentada por

Nicolás Vázquez Ortega

En conformidad con los requisitos establecidos para optar por el grado de

Doctor en Historia

Directora de Tesis

DRA. ROMANA FALCÓN VEGA

Ciudad de México, febrero de 2023



CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Aprobada por el Jurado Examinador

_____

PRESIDENTE

_____

PRIMER VOCAL

_____

VOCAL SECRETARIO

ÍNDICE

Agradecimientos 9

Introducción

Planteamiento y delimitación del tema 11
El juicio de amparo en materia agraria, breve revisión historiográfica 19
El andamiaje conceptual 25
Objetivos, hipótesis, estructura de la tesis y fuentes consultadas 30

Capítulo 1. El juicio de amparo: aspectos histórico-jurídicos, la cuestión agraria durante la revolución y la naturaleza jurídica del amparo en materia agraria, 1861-1936 36
1.1 El juicio de amparo y su regulación jurídica, 1857-1936 37
1.1.1 La Constitución de 1857 38
1.1.2 Ley de amparo de 1861 43
1.1.3 Ley de amparo de 1869 47
1.1.4 Ley de amparo de 1882 51
1.1.5 El juicio de amparo en los códigos federales de 1897 y 1908 57
1.1.6 El juicio de amparo en la constitución de 1917 60
1.1.7 Ley de amparo de 1919 62
1.1.8 Ley de amparo de 1936 73
1.2 Justicia agraria en la revolución: la visión de las facciones 77
1.2.1 El Partido Liberal Mexicano: el juicio de amparo y su visión agraria 78
1.2.2 Francisco I. Madero y el Plan de San Luis 86
1.2.3 La reforma agraria zapatista 88
1.2.4 La propuesta agraria del villismo 91
1.2.5 El carrancismo, la ley agraria del 6 de enero de 1915 y el juicio de amparo 93
1.3 El juicio de amparo en materia agraria: origen y naturaleza jurídica 98
A manera de cierre 101

Capítulo 2. El juicio de amparo y el agrarismo institucional en el Estado de México, 1917-1931 105
2.1 El artículo 27 constitucional: rector de la reforma agraria 107
2.2 El *Reglamento Agrario* de 1922 112
2.3 El juicio de amparo y la reforma agraria en el Estado de México, 1917-1931 117
2.4 La lucha por el ejido: el caso de Naucalpan de Juárez 133
2.4.1 San Luis Tlatilco 140
2.4.2 San Antonio Zomeyucan 144
2.4.3 San Esteban Huitzilacasco 148
2.4.4 Hacienda San José de los Leones: las defensas del propietario 151
2.4.5 El amparo de los pueblos 162
A manera de cierre 173

Capítulo 3. El juicio de amparo en materia agraria: prohibición y diversos usos, 1931-1945 177
3.1 La reforma de 1931 y la prohibición del amparo en materia agraria 180
3.2 La legislación agraria del periodo: la ley de 1929 y los códigos agrarios (1934, 1940, 1942) 188
3.3 La reforma agraria en el Estado de México, 1931-1945 199
3.4 Otras causas de interposición del amparo en el Estado de México, 1931-1945 208
3.5 La lucha por el ejido: el caso de Santiago Teoyahualco 213
3.5.1 Las defensas del propietario: el juicio de amparo y los efectos de los juicios de nulidad de las resoluciones presidenciales 220
3.5.2 Teoyahualco: la defensa jurídica del pueblo 226
3.6 La conformación del ejido de San Bartolo Tenayuca 239
3.6.1 El cambio en la localización del ejido de Tenayuca y el juicio de amparo 246
A manera de cierre 271

Capítulo 4. El juicio de amparo, la defensa de la pequeña propiedad y los certificados de inafectabilidad, 1945-1960 274
4.1 El *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario* de 1945 276

4.2 La pequeña propiedad, los certificados de inafectabilidad y la reforma de Miguel Alemán, 1942-1946 286
4.3 El juicio de amparo y la pequeña propiedad en el Estado de México, 1948-1960 307
4.4 La dotación de tierras a Chotejé 316
4.5 La inafectabilidad agraria y el juicio de amparo: el rancho Santa Rita 329
A manera de cierre 342

Capítulo 5. Juicio de amparo, reforma agraria e industrialización en el Estado de México (1959-1971) 346
5.1 La política agraria de Adolfo López Mateos (1958-1964) 348
5.2 "La democratización del amparo": el amparo agrario (1959-1962) 355
5.3 La política agraria en el Estado de México, 1958-1964 365
5.4 La dotación de tierras al ejido de Santa Ana Tlapaltitlán 370
5.5 Industrialización y reforma agraria: la expropiación del ejido de Tlapaltitlán 388
5.6 "Desposeídos y despojados": las primeras experiencias del amparo agrario en el Estado de México, el caso de Santa Ana Tlapaltitlán 396
A manera de cierre 414

Conclusiones 418

Anexos
Anexo 1. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1925-1927 430
Anexo 2. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1931-1945 452
Anexo 3. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1948-1960 459
Anexo 4. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1962-1971 463
Anexo 5. Interrogatorio (28 de septiembre de 1950) 466
Anexo 6. Tierras distribuidas por periodos presidenciales, 1920-1985 467

Fuentes y bibliografía 468

Mapas
Mapa 1. Plano de conjunto de los pueblos de San Bartolo Naucalpan 139
Mapa 2. Ubicación del pueblo de Teoyahualco y la Hacienda de Cartagena, 1927 217
Mapa 3. Ubicación del ejido San Bartolo Tenayuca y la hacienda San Javier, 1924 245

Mapa 4. Ubicación de las pequeñas propiedades de los hermanos Rosales y del ejido de Tenayuca 248
Mapa 5. Plano informativo de los ejidos San Juan Evangelista, Tlachichilpa, Chotejé y El Obraje 326
Mapa 6. Ubicación de la posesión parcial al ejido de Chotejé y los terrenos de Jesús Agredano 338
Mapa 7. Ejido de Santa Ana Tlapaltitlán 374
Mapa 8. Proyecto de expropiación de terrenos ejidales del poblado de Santa Ana Tlapaltitlán (detalle) 401
Mapa 9. Estado de México, municipios en 1940 428-429

Cuadros

Cuadro 1. Reparto ejidal en el Estado de México, 1921-1929 119
Cuadro 2. Número de amparos promovidos ante el juez de distrito del Estado de México, 1917 a 1931 122
Cuadro 3. Porcentajes de los municipios del Estado de México que más amparos registraron entre 1917-1930 127
Cuadro 4. Número de amparos en revisión en materia agraria, Estado de México, 1917-1931 128
Cuadro 5. Haciendas y ejidos en Naucalpan, Estado de México 137
Cuadro 6. Amparos en revisión por acción agraria o acto que lo motivaba, Estado de México, 1931-1946 210
Cuadro 7. Amparos en revisión por municipios, Estado de México, 1931-1946 212
Cuadro 8. Características de los delegados al Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario 279
Cuadro 9. Número de certificados de inafectabilidad agrícola expedidos en el gobierno de Miguel Alemán, 1947-1952 303
Cuadro 10. Acuerdos de inafectabilidad agrícola en el Estado de México, 1938-1945 304
Cuadro 11. Acuerdos de inafectabilidad agrícola por periodo presidencial, Estado de México 304
Cuadro 12. Acuerdos de inafectabilidad agrícola, Estado de México, 1946-1952 305
Cuadro 13. Resoluciones agrarias en la gubernatura de Alfredo del Mazo, 1946-1951 311

Cuadro 14. Amparos en revisión en materia agraria, por municipios, Estado de México, 1948-1960 315
Cuadro 15. Colonias establecidas en el Estado de México para 1964 350
Cuadro 16. Resoluciones presidenciales de dotación de tierras 1958-1964 351
Cuadro 17. Resoluciones presidenciales de ampliación de tierras, 1958-1964 352
Cuadro 18. Acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola 1958-1964 352
Cuadro 19. Expropiaciones de bienes ejidales y comunales, por estado y años de realización, 1917-2000 391

Imágenes

Imagen 1. Suprema Corte, último reducto de la reacción capitalista 124
Imagen 2. Anuncio de la CNPP 307

A mi padre, trabajador incansable

A mi madre, obrera doméstica

Agradecimientos

Una tesis es el resultado de un trabajo intelectual colectivo realizado por un sinnúmero de personas, más allá de quien termina sustentándola; pero también de una serie de condiciones materiales que posibilitan su realización. En ese sentido, quiero referirme a un grupo de instituciones y personas que hicieron posible la culminación de esta investigación.

En primer lugar, agradezco a mi directora de tesis la Dra. Romana Falcón, por su guía y acompañamiento durante esta investigación con sus sugerencias y comentarios, sin duda alguna, esta tesis se enriqueció con sus atinadas observaciones. Desde luego que las carencias de la misma son responsabilidad exclusivamente mía. Muchas gracias por todo.

También agradezco a las investigadoras e investigadores que comentaron los textos presentados en el primero y segundo seminario de tesis: Diana Birrichaga y Gloria Camacho, estudiosas de la historia agraria del Estado de México y a José Ramón Cossío y Andrés Lira, especialistas en la historia del derecho, particularmente del juicio de amparo. Sus recomendaciones y comentarios fueron de gran utilidad en el rumbo que tomó esta investigación.

Desde otros espacios, el Dr. Veremundo Carrillo comentó algunos de los avances de esta tesis en las dos Videojornadas de Investigación organizadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), como parte de los Premios para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica, 2022 y la Dra. Rebeca López Mora, quien me sugirió y proporcionó diversos textos sobre los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, mi agradecimiento para ustedes.

En cuanto a las instituciones que hicieron posible que realizara mis estudios de doctorado, agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por haberme otorgado una beca durante el tiempo que duró el programa; a El Colegio de México por la beca de manutención, que me permitió desarrollar esta investigación durante su última etapa y; al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) por honrar a este trabajo con uno de los Premios para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica 2022. Pero sobre todo, a las clases y grupos productores de la riqueza de este país, porque gracias a ustedes, se sostienen estas y otras instituciones públicas.

Gracias al Centro de Estudios Históricos (CEH) de El Colegio de México. A su planta docente por sus enseñanzas, reflexiones y consejos durante mi estadía como estudiante,

porque me permitieron repensar en mis filias y fobias con respecto a determinados temas y periodos históricos. Y desde luego, a todo el personal administrativo, becarias y becarios de investigación por su apoyo en los distintos trámites.

Para mis compañeras y compañeros de la generación 2017-2022, por los espacios formales e informales en donde compartimos parte de nuestros intereses e inquietudes historiográficas, así como preocupaciones por el contexto en el que nos tocó vivir, gracias totales.

A todo el personal del Archivo General Agrario, del Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Toluca, del Archivo Histórico y Fondo Reservado del Estado de México, del Archivo Histórico Municipal de Naucalpan de Juárez, del Archivo Histórico Municipal de Toluca, de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas y de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, mi gratitud por su apoyo en las distintas etapas de esta investigación.

A lo largo de este sinuoso camino compartí diversos comentarios, inquietudes y preocupaciones del rumbo que tomaba esta investigación con colegas (del campo del derecho y de la historia), alumnos y grandes amigas y amigos, gracias a ustedes por escucharme y acompañarme en este proceso.

Finalmente, estaré eternamente agradecido con mi familia por el apoyo brindado durante toda mi formación académica y sobre todo, con todas aquellas personas que de una u otra forma, asumieron parte de mis tareas como padre, mientras realizaba mis estudios doctorales.

Muchas gracias a todas y todos ustedes.

Introducción

Planteamiento y delimitación del tema

Todo trabajo de investigación tiene su propia historia, en este caso, mi interés por el estudio del juicio de amparo surgió en el año 2007. Cursaba el último semestre de la licenciatura en derecho y dos de las áreas que me habían atraído, eran el derecho social (laboral y agrario) y la materia de amparo, por lo que buscaba una institución relacionada con estas materias para realizar mi servicio social. Fue así como llegué a la Procuraduría Agraria (PA) colaborando en un departamento cuya función principal era brindar asesoría a las organizaciones campesinas que lo solicitaran, esto me permitió tener una noción de los distintos conflictos agrarios que se presentaban en el campo mexicano, particularmente los relacionados con la tenencia de la tierra.

De los diversos asuntos que llegué a conocer en la institución, llamaron mi atención las demandas de amparo que tenían como propósito la protección de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios de algún ejido o comunidad, que fueran afectados total o parcialmente; una de las particularidades de este tipo de juicios, a diferencia de otras ramas del derecho como la civil o penal, era que podían interponerse en cualquier momento, además de contar con algunas reglas procesales diferentes. Este fue mi primer acercamiento práctico al amparo en materia agraria.

Lo visto en la PA me motivó a buscar trabajos sobre el tema para elaborar un proyecto de tesis. Dentro de la diversa bibliografía me resultó interesante el texto de Andrés Lira acerca del *amparo colonial,* el cual incrementó mi interés en la figura del amparo, desafortunadamente por distintos motivos no concluí el proyecto.

Unos años después, mientras cursaba la licenciatura en historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de abogados que brindó asesoraría a un grupo de extrabajadores y campesinos que laboraron para un ingenio azucarero en el estado de Puebla. En alguna de las conversaciones que sostuvimos, nos contaron lo importante que era para ellos la tierra, cómo sus anteriores generaciones habían luchado para conseguirla y a pesar de contar con un pedazo de tierra, sus ingresos económicos en muchas ocasiones no eran suficientes, por lo que buscaban trabajo en el ingenio o migraban a otros estados a emplearse por temporadas y regresaban en

la época de zafra (corte de caña). Algunas de estas personas habían tenido conflictos laborales con el ingenio, por lo que promovieron diversos juicios que duraron casi una década y cuyo desenlace se dio en la Suprema Corte, vía el amparo, negándoseles la protección de la justicia federal.

En 2014 nuevamente me reencontré con los amparos. La Dra. Romana Falcón me dio la oportunidad de trabajar para ella como ayudante de investigación en El Colegio de México. En ese entonces se encontraba terminando su libro de *El Jefe Político*, en donde, entre otras cosas, mostraba la manera en que los agraviados con alguna determinación de estos eslabones del poder, promovieron amparos en defensa de sus derechos. En esta ocasión tenía no sólo una perspectiva jurídica sino una visión histórica de la figura, lo cual reavivó mi interés por su estudio.

Finalmente, mientras revisaba diversa documentación en el Archivo General Agrario en búsqueda de material para la elaboración de mi proyecto de tesis de licenciatura en historia, encontré diversas referencias a juicios de amparo promovidos por los afectados con la reforma agraria, sin embargo, no seguí esos indicios.

Con estos antecedentes y dado que el recurrir al juicio de amparo se ha generalizado en la sociedad mexicana, por ejemplo, para reclamar por la imposición de una multa, por una orden de aprensión, ante la expropiación de alguna propiedad y recientemente para exigir la prestación de algún servicio de salud, por solo mencionar algunos casos; opté por realizar una investigación sobre el tema. Por la amplitud del tópico consideré pertinente enfocarse en los juicios originados de la puesta en práctica de la materia agraria, pues han sido poco trabajados por la historiografía, pero también porque a través de su estudio es posible asomarse a parte de la conflictividad del mundo rural de gran parte del siglo XX.

La historia del juicio de amparo cuyo tema principal es la disputa por la propiedad o posesión de tierras se encuentra presente desde el origen de esta figura a mediados del siglo XIX. No obstante, se puede afirmar que uno de sus antecedentes remotos lo encontramos en lo que Andrés Lira llamó el *amparo colonial*, instrumento por medio del cual los pueblos acudían al virrey para pedir se les ampara en la protección de sus derechos, entre ellos, a la posesión de sus tierras comunales.

Teniendo como antecedente la constitución de Yucatán de 1841 y el Acta de Reformas de 1847, se estableció en los artículos 101 y 102 de la constitución de 1857 el

amparo y su primera ley reglamentaria vio la luz en 1861. Desde entonces, las personas físicas y las jurídico-colectivas que, consideraron violados sus derechos, contaban con la posibilidad de acudir al juicio constitucional sobreviviendo la figura a los vaivenes de los acontecimientos nacionales y siendo durante el porfiriato su periodo de consolidación. Prueba de ello son los cientos de asuntos en donde se dirimieron conflictos entre pueblos, entre pueblos y particulares; así como entre particulares y gobiernos locales por la propiedad y posesión de la tierra, deslindes de sus superficies, expropiaciones y por el aprovechamiento de aguas y bosques,[1] con lo que los tribunales se convirtieron en otro de los escenarios de las pugnas por la tierra.

En muchos de los casos esos conflictos no se resolvieron e incluso se agudizaron, por lo que no es de extrañar que, entre otros aspectos, uno de los temas centrales de la revolución mexicana fuera la cuestión agraria, lo que motivó a que las distintas fracciones revolucionarias (magonistas, zapatistas, villistas y carrancistas), plasmaran en sus proyectos diversos mecanismos legales para atender el problema de la tierra. Finalmente, el Congreso Constituyente de 1917 incorporó la cuestión agraria en el artículo 27 constitucional, con lo que se inició la construcción de una nueva rama del derecho: el derecho agrario, el cual ha tenido varias modificaciones, algunas de las cuales se analizan en esta investigación.

Fue así como a lo largo del siglo XX surgieron figuras jurídicas como la dotación y restitución de tierras y aguas; el reconocimiento, la titulación y la confirmación, tratándose de bienes comunales y; en el caso del ejido, su ampliación, su fusión o bien, la división de este. Para dar cauce a la serie de trámites que implicaba cada una de estas acciones agrarias, los diversos gobiernos crearon dependencias como la Comisión Nacional Agraria (CNA), el Departamento Agrario y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), por mencionar algunas de ellas, quedando la atención de la reforma agraria en instituciones dependientes del poder ejecutivo federal, dentro de la rama del derecho administrativo.

Cabe señalar que la existencia de estas dependencias estuvo condicionada por diversos factores, principalmente por la política agraria del gobierno en turno y de las etapas por las que pasó el reparto de tierras; sin embargo, el juicio de amparo estuvo presente en todas esas transformaciones, por lo que se reitera que su estudio puede ser de utilidad para

[1] Para un panorama general del problema agrario y la manera en que se ventilaron estos conflictos en la instancia judicial en el periodo de 1898 a 1914, véase ÁVILA, *El problema agrario*.

entender y profundizar en la comprensión del mundo rural mexicano, particularmente en el ámbito de la justicia.

Como se ha dicho, si bien el reparto agrario fue atendido por las distintas facciones revolucionarias en algunas de las regiones que ocuparon, con base en documentos como el Plan de Ayala o la ley agraria villista, lo cierto es que la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, fue la base legal del posterior artículo 27 constitucional y de las dos acciones principales de la reforma agraria: la dotación y restitución de tierras. Los latifundistas afectados con estas acciones agrarias, entre otras medidas, recurrieron al juicio de amparo en defensa de sus propiedades, tratando de evitar la ejecución de las resoluciones dadas por las autoridades alegando violaciones a sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y propiedad, establecidas en la carta magna. Por este motivo, algunos personajes de la época y parte de la historiografía han considerado que la Suprema Corte estuvo en contra de la reforma agraria, pues en muchos casos otorgó los amparos, lo cual retrasó o frenó la entrega de tierras a los solicitantes.

Este fue uno de los principales argumentos para que, en 1931, en un contexto en el que el entonces presidente de la república, Plutarco Elías Calles, había decretado el fin del reparto agrario, se reformara la legislación en la materia y se prohibiera la interposición de amparos en contra de las resoluciones de gobernadores y del presidente de la república, dejando como único derecho a los afectados, el solicitar en el término de un año la indemnización correspondiente derivada del proceso de expropiación.

Este y otros factores posibilitaron que se llevara a cabo uno de los mayores repartos de tierras en la historia agraria del país durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. A pesar de las limitantes hacia los propietarios, el gobierno federal creó la Oficina de Quejas, que "hacía las veces de órgano de control de la legalidad de las propias resoluciones presidenciales"[2] lo que les permitió seguir contando con una instancia formal para oponerse a la reforma agraria aunado a los juicios ordinarios federales que se analizan más adelante y a la protección a la pequeña propiedad que les reconoció el gobierno federal a partir de 1938, por medio de los certificados de inafectabilidad para aquellas tierras destinadas a la ganadería, extendiéndose posteriormente a la agricultura.

[2] CRUZ, "El amparo", p. 47.

El cambio en la política agraria iniciado por Ávila Camacho y continuado por Miguel Alemán; las presiones ejercidas, principalmente por los propietarios expropiados y; la discusión legal con respecto a la protección a la pequeña propiedad; fueron el contexto en el que se reformó el artículo 27 constitucional, en febrero de 1947, para otorgar protección de la justicia federal a favor de los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación que contaran con certificados de inafectabilidad. Es decir, con un reconocimiento por parte de la máxima autoridad en materia agraria, el presidente de la república, de protección a los predios que fueran considerados por ley como pequeña propiedad y aquellos otros que, de hecho, sin declaratoria presidencial, hubieran quedado reducidos a una extensión mínima.

Otro de los cambios fundamentales que vivió el amparo ocurrió a fines de 1962 cuando se reformó el artículo 107 constitucional y a inicios de 1963 se incorporaron y reformaron diversos artículos a la ley de la materia para establecer y regular formalmente el llamado *amparo agrario ejidal o comunal,* denominado así por el jurista Ignacio Burgoa. La importancia de este radicó en ser procedente cuando se reclamaran actos que tuvieran o pudieran "tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho",[3] mantuvieran el estado comunal o a los ejidatarios o comuneros. Con esto, ejidos y comunidades tuvieron la posibilidad de hacer valer sus peticiones a través de este procedimiento *sui generis*, pues tuvo sus propias reglas.

Vale la pena hacer un alto y señalar que para efectos de esta investigación, y si bien no existe una definición única, se entiende por ejido a "las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio", mientras que, por comunidad en sentido amplio, al "conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y aguas". Por regla general en el derecho agrario, la comunidad y sus bienes fueron reconocidas con base en la legislación anterior a 1992 "mediante acciones restitutorias, confirmatorias o de titulación de sus tierras".[4] A pesar de que a lo largo del texto la legislación se refiere a ambas

[3] "Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal", en *Diario Oficial*, 4 de febrero de 1963, p. 1.
[4] *Glosario de Términos*, pp. 55, 74.

figuras, en esta tesis se pone atención a la dotación de tierras debido a la disponibilidad de fuentes consultadas ocasionada por la pandemia; no obstante, hay que reconocer que el estudio de la restitución de tierras, junto con otras acciones agrarias como la división y fusión de ejidos y el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, aún pueden aportar mayores elementos a la historia agraria del país.

El *amparo agrario* estuvo vigente hasta el año 2013 en que una reforma a la ley de amparo derogó este apartado. Aun así, en caso de que alguno de los sujetos agrarios sufra por un acto de autoridad una posible violación a sus derechos, cuenta con la posibilidad de acudir al juicio de amparo en materia administrativa, de acuerdo con los tiempos y procedimientos marcados por la legislación en vigor.

Siguiendo las etapas del amparo en materia agraria descritas, se puede adelantar que fue una figura a la que acudieron distintos actores: solicitantes de tierras, pequeños y grandes propietarios, ejidatarios y comuneros y todo aquel que se considerara afectado por la implementación de la legislación agraria.

¿Cuáles fueron las características del amparo en materia agraria? ¿En qué consistieron las modificaciones que presentó? ¿De qué forma fue utilizado por distintos actores sociales? ¿Cuál fue la actuación de las partes que intervinieron en el juicio? ¿En qué medida habrán repercutido las sentencias de los jueces de distrito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma agraria mexicana? Son algunas de las preguntas que guían esta investigación y su respuesta busca poner atención en algunos aspectos historiográficos de la reforma agraria mexicana que se explican más adelante.

Para intentar dar respuesta a estas interrogantes y tomando en cuenta que en el catálogo del Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AHSCJN), se tiene un registro de 9 600 sentencias relacionadas con el tema agrario, para un periodo de 75 años; este trabajo se centrará en el Estado de México, por ser uno de los estados con el mayor número de expedientes,[5] pero también por las posibilidades de análisis que aporta una entidad limítrofe a la capital del país, lo que le dio "una posición estratégica en lo político, lo

[5] De acuerdo con una revisión realizada al catálogo de expedientes del Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AHSCJN), poco más del 40% de los amparos corresponden a los estados de Jalisco, México, Veracruz, Puebla y Yucatán.

económico, lo ideológico y lo cultural";[6] además de la complexidad de sus regiones naturales, climas y actividades productivas.

Por los poco más de 22 000 km^2 de extensión territorial con que cuenta el estado, sus 125 municipios (119 en la década de 1940) en que se encuentra dividido, sus 1 062 ejidos (998 hasta 1958) inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) hasta 2013 y sus casi 800 expedientes ubicados en la SCJN, relacionados con diversas acciones agrarias para el periodo 1917-1992; se optó por elegir el estudio de aquellos casos que se consideran distintivos de las etapas del amparo antes descritas. Por lo anterior, el escenario de esta trama se desarrolla en cinco municipios: Naucalpan, Tlalnepantla, Tultepec, San Felipe del Progreso y Toluca. La elección de estas demarcaciones y específicamente de algunos de sus pueblos responde a las posibilidades de análisis que aportan los amparos aquí estudiados, pero también a la localización geográfica que tuvieron algunos de ellos como Naucalpan y Tlalnepantla al ser demarcaciones limítrofes a la capital del país o a su importancia política como Toluca, por ser la capital del estado y en donde confluyó un proceso de modernización y urbanización que condicionó el desarrollo de sus ejidos en la segunda mitad del siglo XX.

Es necesario aclarar que los estudios de caso elegidos no representan la actuación de los sujetos agrarios del municipio respectivo y mucho menos de la entidad en su conjunto pues cada uno de los amparos analizados responde a una etapa específica de la reforma agraria y más aún, a su implementación concreta en una región definida; sin embargo, su análisis permite proponer líneas de investigación, hipótesis e interrogantes más amplias que nos posibilitan acercarnos al mundo de la justicia agraria y sobre todo al actuar de los distintos actores, más que a la labor estatal.

Esta última idea tiene también implicaciones metodológicas e historiográficas, pues esta forma de reconstruir los procesos históricos tiene como propósito separarse de perspectivas maniqueas y poner en su contexto a distintos actores individuales y colectivos que lucharon por acceder a la tierra o defender las que ya poseían, así como a las autoridades agrarias, jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte. La forma de acercarse a "su voz", lo que pensaban y su actuación dentro de los sinuosos caminos del litigio, se miraran principalmente a través de las peticiones, alegatos, resoluciones y sentencias contenidas en los expedientes consultados.

---

[6] FALCÓN, *El jefe político*, p. 45.

Por lo que toca a la delimitación temporal, si bien se realiza un intento por apartarse de aquella historia que pone mayor atención en las políticas agrarias del estado y en el presidente de la república como máxima autoridad en la materia, la tarea no es sencilla en vista de que la puesta en marcha de la reforma agraria quedó en manos de los distintos gobiernos (federal y estatal), razón por la que el mayor cúmulo de documentos para reconstruir esta historia proviene de fuentes oficiales, empero, lo que se privilegia en esta narrativa será el proceder de aquellos sujetos inmiscuidos en los juicios de amparo. Se parte entonces de 1917, año en que se promulgó la constitución política que serviría de base a la reforma agraria mexicana y se concluye en 1970-1971, años en que el reparto de tierras se encontraba prácticamente liquidado en el centro del país y a nivel nacional la reforma agraria tomaba un nuevo rumbo, marcando una etapa distinta en el agrarismo mexicano. En el caso del Estado de México, el reparto ejidal había concluido prácticamente una década antes y diversas zonas de la entidad se encontraban en proceso de urbanización e industrialización, con lo cual la dinámica agraria se había transformado.

Si bien el delimitar una investigación al estudio de algunas regiones del Estado de México en un periodo específico, reduce el análisis a tratar las particularidades de dicho estado, estas pueden permitir captar el desarrollo desigual de un proceso más amplio que se llevó a cabo en todo el país. Basta recordar que la reforma agraria estuvo condicionada por varias diferencias: étnicas, demográficas, geográficas, de vías de comunicación, climáticas, actividades económicas, entre otras; que la hacen hasta cierto punto, un laboratorio en donde los resultados obtenidos fueron desiguales, entre estados e incluso entre regiones de una misma entidad.

Por lo expuesto, una investigación de este tipo se justifica académicamente, ya que, si bien existen trabajos jurídicos al respecto, hacen falta trabajos históricos que con material de archivo permitan profundizar en la forma en que se desahogaron los conflictos agrarios ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que será de utilidad para comprender el actuar de los distintos actores: solicitantes de tierras, autoridades agrarias (presidente de la república, gobernadores, comisiones nacionales, locales y mixtas, etc.), ejidatarios, autoridades judiciales, pequeños y grandes propietarios, así como de las organizaciones campesinas. Finalmente, a pesar de tratarse de una historia en donde el objeto de estudio es una figura jurídica, esta se materializa en personas que elaboran la ley, en aquellas que la

aplican y en los destinatarios de esta, que en el caso de las materias agraria y de amparo, se trataba de actores individuales y colectivos que, al echar a andar la maquinaria institucional, se convirtieron en actores de su propio destino.

El juicio de amparo en materia agraria, breve revisión historiográfica

Las investigaciones acerca del juicio de amparo son vastas, en ellas se discuten diversos temas como su origen, antecedentes, las leyes que lo regularon y su aplicación concreta en varias ramas del derecho como civil, penal y fiscal, principalmente. La discusión es amplia acerca del impacto que tuvo y sigue teniendo esta figura legal en la sociedad mexicana como protectora de las garantías y derechos otorgados por la carta magna, desde su surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX, hasta su reforma más reciente. En este caso, y al ser tan extensa la producción al respecto, pongo énfasis en aquellas investigaciones vinculadas al tema agrario.

Por la naturaleza de la figura que se estudia, los trabajos pueden agruparse en aquellos cuyo contenido es principalmente jurídico y los realizados desde el campo de la historia.

En el primer grupo se ubican cientos de libros, artículos y trabajos de titulación de las universidades en que se imparte la carrera de derecho, todos ellos dirigidos al mundo de los juristas. Las temáticas abordadas van desde el origen del amparo hasta su última reforma, pasando por el estudio particular de alguna de las etapas del procedimiento o el análisis de la reforma a algún artículo en específico; al contar con un enfoque estrictamente legal, su lectura puede ser complicada para los no especialistas en la materia, por lo que solo me remito a ellos en la medida en que son de utilidad para esta investigación.

En un segundo grupo y como se esboza más adelante, se encuentran las investigaciones que cuentan con una perspectiva histórica, si bien alguno de los temas coinciden con los mencionados, en ellas se pone mayor énfasis en otras aristas como la percepción que tuvo la sociedad acerca del amparo, su uso por distintos sectores sociales, las discusiones de los juristas de la época, algún caso particular que tuvo repercusión en la construcción de la figura y al tratarse de un procedimiento de carácter federal, el papel del poder judicial federal, entre otros.

Ahora bien, al ser el amparo en materia agraria una modalidad del amparo en general es necesario referirse, aunque sea de forma breve, a las investigaciones acerca del surgimiento de este juicio, así como a las primeras leyes que lo regularon.

Sin duda alguna, uno de los trabajos fundamentales es el de Andrés Lira quien ha propuesto como un antecedente novohispano del juicio de amparo, el llamado *amparo colonial* al cual ha definido como:

> una institución procesal que tiene por objeto la protección de las personas en sus derechos, cuando estos son alterados o violados por agraviantes, que realizan actos injustos de acuerdo con el orden jurídico existente, y conforme al cual una autoridad protectora, el virrey, conociendo directamente, o indirectamente como presidente de la Real Audiencia de México, de la demanda del quejoso agraviado sabe de la responsabilidad del agraviante y los daños actuales y/o futuros que se siguen para el agraviado, y dicta el mandamiento de amparo para protegerlo frente a la violación de sus derechos, sin determinar en éste la titularidad de los derechos violados, y sólo con el fin de protegerlos de la violación.[7]

Como puede observarse, existe una semejanza de los efectos jurídicos entre esta institución novohispana y el actual juicio de amparo.

En el mismo sentido, Alma Nophal ha propuesto el análisis del Códice de Santa Catharina Ayometla, Tlaxcala, el cual forma parte de un expediente sobre tierras de dicho pueblo. Por medio de estos documentos los representantes del poblado solicitaron al gobernador y teniente capitán de Tlaxcala "amparo de posesión de sus tierras y magueyes".[8] Para la autora esta documentación es un antecedente del juicio de amparo en México.

Con respecto al nacimiento del juicio de amparo mexicano, algunos investigadores han propuesto ubicar su origen en la constitución yucateca de 1841. Uno de esos trabajos es el de José Ramón Narváez,[9] quien analizó el expediente promovido por el abogado Esteban Valay, fundamentado en el artículo octavo de esa constitución, contra la detención de nueve personas, afirmando que en cierto sentido se trata del primer juicio de amparo, tal y como lo concibió Manuel Crescencio Rejón.

Parte de las ideas esgrimidas por Rejón fueron retomadas y replanteadas por Mariano Otero en el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847. El amparo fue elevado a rango

---

[7] LIRA, *El amparo colonial*, p. 35.
[8] NOPHAL, *El amparo colonial*, p. 12.
[9] NARVÁEZ, *Historia social*.

constitucional en 1857 en los artículos 100 y 101 y retomado en la constitución de 1917 en los artículos 103 y 107.

Por lo que toca a los trabajos que se han centrado en el surgimiento de las leyes de amparo, sin duda los textos de José Barragán aportan información pormenorizada acerca de la discusión y aprobación de las leyes de amparo de 1861,[10] 1869[11] y 1882.[12] En el mismo sentido se encuentra el libro *Fuentes para la historia del juicio de amparo*, en donde José Luis Soberanes reproduce dichas leyes incorporando las de 1919 y 1936.

Para el caso del porfiriato, Arnaldo Córdova ha planteado que el estado fue sustituido por "el poder absoluto, personalista y dictatorial; las libertades y derechos del hombre, muertos en el papel", sólo eran efectivos "para el reducido número de los allegados al dictador",[13] esto incluiría al juicio de amparo y en general la subordinación del poder judicial al ejecutivo.

No obstante, en los últimos años algunas investigaciones han matizado esta idea. Dentro de estos trabajos se encuentra la propuesta de José Ramón Cossío quien ha estudiado las particularidades con las cuales funcionó el amparo durante este periodo, destacando los cambios legislativos que presentó durante la primera década del siglo XX, concretamente la entrada en vigor del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.[14]

En la misma línea, Timothy James, en "El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el Porfiriato", identificó "las cambiantes practicas constitucionales relacionadas con el amparo y los derechos constitucionales individuales".[15] Al final de su trabajo presenta ejemplos relativos a la cuestión de la tierra, el reclutamiento forzoso o leva y el encarcelamiento arbitrario para demostrar que en la práctica cotidiana tuvieron repercusiones las decisiones del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, Felipe Ávila ha propuesto revisar la historiografía jurídica del porfiriato por considerar que el poder judicial no actuó como un apéndice de Díaz y subordinado completamente a su voluntad. Para Ávila

---

[10] BARRAGÁN, *Primera ley*.
[11] BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1869*.
[12] BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1882*.
[13] CÓRDOVA, *La ideología*, p. 88.
[14] COSSÍO, *La justicia prometida*, pp. 97-104.
[15] JAMES, "El derecho constitucional", p. 255.

> en los expedientes no se advierte la mano de Díaz ni la de los Gobernadores o de los grandes personajes políticos o poderosos empresarios para inclinar la balanza en su favor. Desde luego que debe haber habido presiones y es indudable que en los juicios las partes querellantes deben haber movido sus influencias y haberse valido de los recursos con los que contaban para obtener una sentencia favorable. Pero no se advierte un sesgo de la justicia a priori en favor de la parte más fuerte si a ésta no le asistía la razón.[16]

Ya para el periodo posrevolucionario, Helga Baitenmann en *Matters of justice*, analiza los dos principales programas revolucionarios (carrancista y zapatista) para determinar lo que los artífices de estas propuestas realmente intentaron lograr y lo que en realidad sucedió a ras de suelo. Destaca la autora que la propuesta agraria del carrancismo excluyó al poder judicial de la cuestión agraria y la ley del 6 de enero de 1915, siguiendo los antecedentes coloniales, restauró un principio que le otorgaba al poder ejecutivo la facultad para resolver disputas por la tierra,[17] lo cual aplicó únicamente para todo lo relacionado con la reforma agraria y específicamente en lo relativo a la restitución de tierras, pues otros conflictos entre pueblos y particulares o entre particulares, continuaron desahogándose por la vía civil, como los procedimientos de apeo y deslinde.

Timothy James en *Revolución social e interpretación constitucional,*[18] dedica un capítulo a la revisión de la jurisprudencia emitida por parte de la SCJN para revalorar su papel durante la reforma agraria, particularmente en los primeros años, periodo en que el máximo tribunal del país se convirtió en un "obstáculo" de la reforma agraria, además de mencionar la forma en que se fueron modificando dichos criterios.

Para la misma década, Sandra Kuntz hizo un recorrido por la legislación agraria y la forma en que se llevó a la práctica en algunos casos de dotación de tierras, particularmente su interés fue rescatar "los fundamentos legales que invocaron los propietarios de tierras afectados, para defender sus intereses",[19] señalando algunos temas como la indemnización y los casos en que solicitaban la protección de sus terrenos porque se encontraban cultivados, este último aspecto se encuentra presente en algunos de los estudios de caso que se presentan a lo largo de esta investigación.

---

[16] ÁVILA, *El problema agrario*, p. 12.
[17] BAITENMANN, *Matters of justice*, p. 8.
[18] JAMES, *Revolución social*.
[19] KUNTZ, *La reforma agraria*, p. 4.

En cuanto a los trabajos que abordan en específico el tema del amparo en materia agraria, se encuentra el libro clásico del jurista Ignacio Burgoa, en el cual presenta una revisión histórico-jurídica y propone una periodización de cuatro épocas para el estudio del amparo: la primera de 1917 a 1931, la segunda de 1932 a 1934, la tercera de 1934 a 1947 y la cuarta etapa de 1947 en adelante. En la segunda parte de la obra analiza lo que denomina el amparo agrario ejidal o comunal, es decir, el amparo surgido a partir de 1962.[20] En cierta medida esta periodización del amparo coincide con la propuesta en esta investigación, pues ambas responden a los principales cambios realizados a la legislación agraria y de amparo.

Lucio Mendieta en *El Problema Agrario de México*, realizó un rastreo de lo que denomina la propiedad agraria desde el periodo prehispánico hasta el siglo XX, señalando las principales leyes en la materia y dedicando un breve apartado a las reformas al artículo 27 constitucional, en donde destaca la procedencia del juicio de amparo en favor de los pequeños propietarios y en un capítulo aparte lo relacionado con los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera.[21]

En la misma línea de analizar el amparo a la pequeña propiedad agraria, se encuentra el libro de Mireya Toto,[22] en el que expone de forma breve la legislación agraria promulgada desde 1915 hasta el decreto de 1931 que suprimió el amparo en materia agraria, así como el camino que siguió la reforma de 1947.

En el marco de celebración de los centenarios de la expedición de la ley agraria de 1915 y de la promulgación de la constitución de 1917, diversas instituciones gubernamentales y académicas publicaron obras relacionadas con la cuestión agraria, de estas investigaciones retomo tres capítulos de libro, útiles para esta investigación.

El primero es el trabajo de Antonio Azuela en donde analiza la jurisprudencia en materia agraria emitida por el Poder Judicial de la Federación durante el siglo XX, para establecer los temas más relevantes que se trataron, así como "explorar el significado de la actividad jurisprudencial más allá de sus contenidos estrictamente jurídicos".[23] En una de sus conclusiones establece que "el Poder Judicial nunca puso en entredicho, en la jurisprudencia, los principios de la reforma agraria que establecía la Constitución. Sin embargo, en sentencias

[20] BURGOA, *El amparo*.
[21] MENDIETA, *El problema*, pp. 411-441.
[22] TOTO, *El amparo*.
[23] AZUELA, "La jurisprudencia", p. 319.

individuales que no generaban tesis, sí se llegó a argumentar en contra de las reglas del nuevo régimen de propiedad (sobre todo en relación con el momento para pagar las indemnizaciones) contradiciendo incluso la propia jurisprudencia".[24]

La segunda investigación por resaltar es la de Nicolás Nieto, quien consultó demandas de amparo promovidas por los afectados de los actos de restitución y dotación entre 1917 y 1921, resguardadas en la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Morelia, Michoacán. Nieto sostiene que "los expedientes revisados demuestran la forma en que los tribunales de amparo intentaron a toda costa proteger el reparto agrario hasta en cuanto las exigencias de legalidad y constitucionalidad (la vida institucional) se los permitieron".[25]

En una vía similar, Inés Ortiz Yam, revisó expedientes localizados en la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Mérida, Yucatán, para el periodo 1921-1928. La autora rescata los principales argumentos utilizados por los hacendados en sus solicitudes, con el propósito de presentar "la percepción, la posición y la acción de los hacendados frente al reparto agrario", así como los criterios de interpretación de la Corte frente a dichas solicitudes.[26] Llama la atención que en una de sus conclusiones establece que la justicia federal no cuidó los intereses de los hacendados, al contrario, "favoreció al proyecto agrario emprendido por el Estado revolucionario, pues los amparos no se convirtieron en diques que impidieran o retrasaran el reparto agrario".[27]

En términos generales, tanto la conclusión de Nieto como la de Ortiz, coinciden en señalar que el actuar de los tribunales no fue en contra de la reforma agraria, cuestión que se explora en esta tesis, aunque Inés Ortiz precisa que los amparos no retrasaron el reparto de tierras, cuestión que para el caso del Estado de México si ocurrió, como se verá más adelante.

No quiero terminar este breve repaso a la historiografía del tema, sin mencionar dos tesis de licenciatura que han dado un peso importante al juicio de amparo en la reforma agraria.

Francisco Ayala Lagunas, estudió el proceso de resistencia de la familia Henkel ante las afectaciones del reparto agrario sobre la hacienda de su propiedad denominada La Huerta, en el municipio de Zinacantepec, en el periodo 1915-1940. En este trabajo, Ayala formula

[24] AZUELA, "La jurisprudencia", p. 430.
[25] NIETO, "Las tensiones", pp. 93-94.
[26] ORTIZ, "El reparto agrario", p. 451.
[27] ORTIZ, "El reparto agrario", p. 500.

un planteamiento sugerente para esta investigación al afirmar que el amparo permite "observar la omisión de las leyes, uso de ambigüedades legales, prestanombres, compra-venta de las tierras que se dotarían, corrupción, el uso de influencias, destrucción de cultivos y predios, e incluso el uso de violencia amedrentando, amenazando o asesinando a los campesinos solicitantes de tierras",[28] tesis que pudiera parecer opuesta a lo propuesto por Inés Ortiz y Nicolás Nieto, sin embargo, propongo ver ambos planteamientos como complementarios.

Finalmente, Jesús López Gutiérrez pone como eje central de su estudio al juicio constitucional "como mecanismo empleado por los hacendados en el Estado de México, para frenar o retardar el reparto agrario de los gobiernos posrevolucionarios"[29] en el periodo 1915-1931. Aspecto fundamental en esta investigación, aunque como se verá más adelante, no sólo los propietarios acudieron al juicio de amparo en defensa de sus intereses. López complementa su análisis con un cuadro clasificatorio de 447 expedientes de los amparos solicitados por los hacendados, que se ubican en la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Toluca.

El andamiaje conceptual

En un texto clásico dentro de la tradición marxista, Lenin reflexionaba sobre el papel del periódico señalando que no solo era un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En ese sentido, lo comparaba con los andamios que "se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos constructores, les ayudan a distribuirse la tarea y a observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado".[30] Siguiendo esta analogía, los conceptos que se utilizan para el análisis de los procesos históricos tienen la misma función de los andamios, son una especie de soportes que sirven para moverse de un lado a otro de la investigación, que conectan los distintos capítulos y que permiten señalar los límites y alcances de las fuentes.

[28] AYALA, "Resistencia de los hacendados", p. 10.
[29] LÓPEZ, "El amparo", p. 2.
[30] LENIN, "¿Por dónde empezar?", p. 480.

Se podrá argumentar que los conceptos, al igual que los andamios, pueden ser desechados una vez que cumplen su función. No obstante, el edificio, en este caso los estudios de caso reconstruidos quedan de pie independientemente de los acabados que se le den.

Si bien el hilo conductor de este trabajo es un procedimiento jurídico, no se busca realizar una genealogía de este, tampoco presentar una cronología del aparato institucional y legal que confluyen en el juicio de amparo, ni reproducir la historia política de la reforma agraria, solo se acude a ellos en la medida en que permiten presentar el marco en el que se desenvolvieron los actores sociales. Lo que se busca en esta investigación es analizar la relación dialéctica entre historia del derecho, historia social e historia agraria, para encaminarse a una historia social del amparo que permita identificar si la institución tuvo vida o no, qué tanto fue útil para garantizar los derechos establecidos en la constitución y sus leyes reglamentarias y, el papel que jugaron los personajes que en el intervinieron.

Aún más, las disputas que se relatan en esta investigación no siempre se presentaron de forma abierta o violenta. Estas luchas por la tenencia de la tierra se desarrollaron dentro de los cauces institucionales (agrarismo institucionalizado) que les otorgó la legislación vigente, por lo que las partes inmiscuidas principalmente los propietarios afectados y los peticionarios de tierras tuvieron la necesidad de actualizarse en los procedimientos, tanto el administrativo ante las autoridades agrarias, como en el juicio de amparo. De ahí que la serie de acciones desplegadas por los distintos sujetos agrarios en defensa de sus derechos e intereses, se materializaran en peticiones, alegatos y prácticas jurídicas, que aquí se resaltan.

Para llevar a cabo el análisis de las tensiones surgidas en los casos estudiados, del discurso de la reforma agraria y de los alegatos presentados en los juicios de amparo, se proponen como conceptos articuladores de esta investigación los de hegemonía y resistencia.

Tratándose del análisis de una figura jurídica en la que se buscan dirimir intereses en pugna, propiedad y posesión de tierras, un concepto que se considera de utilidad es el de *hegemonía* elaborado por William Roseberry, el cual propone utilizar no para explicar el consenso, sino las disputas; las formas en que la dominación

> moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, *las instituciones* y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para *hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella*. Lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un *marco común material* y

> significativo para *vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos*.[31]

Esta noción de hegemonía es apropiada para analizar fuentes judiciales, como las que aquí se utilizan, ya que el marco común material se va a concretar en un lenguaje compartido por los grupos en pugna a través del discurso jurídico contenido en los expedientes. En ese sentido, no se ve a los actores como buenos y malos, se busca presentar a cada parte actuando dentro del marco común que les otorgó la legislación en vigor. En última instancia, lo que se analiza en este trabajo no es un ente abstracto que esté por encima de los actores sociales, sino una serie de instituciones y practicas jurídicas llevadas a cabo tanto por especialistas en derecho como abogados, jueces y ministros, como por los grupos e individuos que adoptaron y adaptaron ese lenguaje y práctica jurídica desarrollando un auténtico arte del litigio, que les permitiría actuar en los espacios que el derecho agrario y la justicia federal les dejaban para defender o acceder a tierras, aguas y bosques.

En cuanto al concepto de *resistencia*, se retoma la noción propuesta por James Scott, que, si bien fue planteada para el estudio de las formas cotidianas de resistencia campesina, en esta investigación es de utilidad para explicar el actuar tanto de los propietarios expropiados como de los solicitantes de tierras y ejidatarios. Para Scott, la resistencia se refiere a cualquier acto o actos realizados por un miembro o miembros de una clase subordinada cuyo propósito es el mitigar o negar reclamos realizados por una clase superior (pueden ser terratenientes o el mismo estado) o bien, para que presenten sus propios reclamos (por ejemplo, trabajo, tierras) a esa clase superior. Si bien esta definición puede tener varias críticas y limitantes, permite explicar actos de resistencia tanto individuales como colectivos y se enfoca en las intenciones más que en las consecuencias, reconociendo que muchos actos de resistencia pueden no lograr el resultado deseado.[32] En este caso, se trata de describir la forma legal en que los propietarios presentaron su inconformidad y resistencia ante el avance de la reforma agraria y la manera en que los pueblos y ejidos acudieron a las autoridades agrarias e instancias judiciales con el fin de obtener tierras y defenderlas cuando ya las poseían.

---

[31] ROSEBERRY, "Hegemonía" p. 220. Las cursivas son mías.
[32] SCOTT, *Weapons of the weak*, p. 290.

Un par de conceptos más apenas se asoman en la documentación consultada, sin embargo, vale la pena mencionarlos por la importancia que pueden tener para investigaciones futuras. El primero de ellos y relacionado con el de resistencia es el de *infrapolítica*. De acuerdo con James Scott, hay que distinguir entre las formas abiertas de resistencia y "la resistencia disfrazada, discreta, implícita, que comprende el ámbito de la infrapolítica", la cual busca "los mismos fines estratégicos" de la primera, pero en este caso "se recurre a una actitud de extrema discreción, mejor preparada para resistir a un enemigo que probablemente puede ganar cualquier enfrentamiento directo".[33] En esta última se encuentran acciones cotidianas como la caza furtiva, la deserción, el rumor y la ocupación de tierras, entre otras. Para el caso de los procedimientos administrativos y los amparos analizados, se deja ver que los solicitantes de ejido recurrieron a la ocupación de las tierras en disputa aun cuando no les habían sido entregadas formalmente; el intento de negociar con los propietarios por fuera del control de las autoridades agrarias y; el negarse a asistir a una asamblea convocada por una dependencia gubernamental como una muestra de descontento por la expropiación de parte de las tierras de su ejido. Si bien se trata de acciones a cuentagotas, permiten observar parte del arcoíris de resistencias con que contaban estos sujetos agrarios.

El segundo concepto es el de *economía moral,* propuesto por el historiador británico Edward Thompson, quien, al estudiar los motines de subsistencia de la Inglaterra del siglo XVIII, identifica que fueron una forma "compleja de acción popular, directa, disciplinada y con claros objetivos", que si bien fueron

> "provocados por precios que subían vertiginosamente, por prácticas incorrectas de los comerciantes, o por hambre. Pero estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización, en la elaboración del pan, etc. Esto estaba a su vez basado en una idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que, tomadas en conjunto, puede decirse que constituían la <<economía "moral" de los pobres>>. Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, constituía la ocasión habitual para la acción directa.[34]

Pese a que en esta tesis no se estudian motines, en algunos de los alegatos presentados ante las autoridades agrarias y en los amparos es posible encontrar argumentos que apelan a

[33] SCOTT, *Los dominados*, p. 233, 218.
[34] THOMPSON, "La economía moral", pp. 65-66.

que se les garanticé un mínimo de bienestar, el conservar las tierras que poseían porque ahí habían nacido o por ser el único medio de subsistencia con que contaban.

A pesar de que este trabajo se avoque específicamente a una entidad federativa, será con este andamiaje conceptual que se busque responder, aunque sea de forma fragmentaria, a una pregunta de mayor alcance: ¿Cómo operaron la resistencia y la negociación dentro del marco jurídico que moldeó la reforma agraria? Todo esto visto, como ya se dijo, a través de la acción desplegada por los diversos sujetos agrarios ante las autoridades agrarias y los tribunales federales.

Por lo que toca a las categorías utilizadas para designar a los actores de esta historia, si bien, dependiendo del periodo de que se trate, uno u otro cobran mayor relevancia, en la medida de lo posible esta investigación busca dar voz a cada uno de ellos, por lo que utilizo las categorías encontradas en las fuentes. En el caso de los propietarios de haciendas, la distinción que se presenta radica en la superficie de tierras que poseían de acorde con la legislación agraria, es así como a lo largo de la narrativa aparecen hacendados y pequeños propietarios. En el caso de los grupos populares, si bien hablar en forma genérica de campesinos podría ser de utilidad, es una noción limitativa que homogeniza a la heterogénea sociedad rural del Estado de México del siglo XX, por lo que se habla de peticionarios y ejidatarios, según el momento del trámite administrativo al que se haga referencia; pero también se retoman las categorías contenidas en los documentos, particularmente en los expedientes de dotación en donde es posible observar a labradores, peones, artesanos, canteros, obreros, comerciantes, según el caso estudiado y aun así se corre el riesgo de no reflejar su diversidad.

Finalmente, al ser una investigación cuyo objeto de estudio es el juicio de amparo, es necesario presentar una definición de este, sin embargo, existen tantas como tratadistas lo han estudiado, tornándose en una discusión amplia que rebasa esta introducción. Además, no se busca elaborar un manual ni un libro de texto, por lo que retomo una de las nociones que considero de utilidad para entender la figura estudiada. Por amparo se entiende "al juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar

dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine".[35]

Para efectos de la narrativa, a lo largo del texto utilizo de forma indistinta los vocablos provenientes del ámbito legal como juicio, institución, medio de control constitucional, juicio constitucional y juicio de garantías para referirme a la figura estudiada. Una distinción importante para tomar en cuenta consiste en la diferencia entre amparo en materia agraria,[36] para referirme de forma genérica al amparo promovido por los sujetos afectados por la aplicación de la legislación en la materia y amparo agrario, para explicar específicamente la figura surgida en 1963.

Objetivos, hipótesis, estructura de la tesis y fuentes consultadas

El objetivo general de este trabajo es analizar una figura jurídica, el juicio de amparo en materia agraria, para intentar entender la serie de cambios que presentó, la manera en que fue utilizada, el impacto que tuvo en la sociedad, el papel que jugaron las partes que en él intervinieron y la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, en suma, se busca pensar y explicar el derecho desde la historia y viceversa, abordando dos niveles, desde arriba explicar las rupturas y continuidades de la legislación en la materia (agraria y de amparo) y desde abajo, el uso del juicio de amparo por parte de distintos sectores.

Derivado de lo anterior, los objetivos específicos de esta tesis buscan: analizar el uso del juicio de amparo por los distintos sujetos que lo promovieron, en las diferentes etapas de la reforma agraria; identificar las respuestas y medidas adoptadas por los propietarios de tierras ante la prohibición del amparo en 1931; describir el proceso que llevó a la restitución del amparo tratándose de la pequeña propiedad y el papel de los certificados de inafectabilidad y; explicar las características del amparo agrario como protector de la propiedad y posesión de los recursos naturales de ejidos y comunidades en un contexto de urbanización e industrialización de algunas zonas de la entidad estudiada.

Como se ha comentado, no se trata de una historia meramente jurídica, por lo que la hipótesis general que guía esta investigación consiste en demostrar que el juicio de amparo

[35] BURGOA, *El juicio de amparo*, p. 177

[36] En 1976, la ley de amparo fue reformada incorporándose el libro segundo titulado "Del amparo en materia agraria", para referirse a lo que en esta investigación he denominado el amparo agrario ejidal o comunal.

en materia agraria no sólo fungió como medio de defensa jurídico ante la posible violación de garantías constitucionales; sino también como un recurso de resistencia utilizado por los distintos sujetos agrarios con el propósito de defender sus propiedades, posesiones, derechos e intereses y; como un observatorio de las tensiones sociales que nos permite apreciar el papel que protagonizaron los distintos actores inmiscuidos en la reforma agraria. Todo ello a pesar de la serie de modificaciones que presentó; las críticas que recibieron esas reformas; los grupos e intereses en pugna y; la difícil ejecución de las sentencias de amparo.

Para el logro de lo anterior, la presente tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos. En el primero de ellos se presenta la evolución histórico-jurídica del juicio de amparo en general, desde mediados del siglo XIX hasta la ley de 1936; un breve acercamiento a la justicia agraria de las principales fracciones revolucionarias como precursora de la posterior reforma agraria y en su caso su postura con respecto al juicio de garantías y; el surgimiento del amparo en materia agraria, sus principales características y su naturaleza jurídica.

Los cuatro capítulos restantes siguen un orden cronológico que corresponde a cada una de las etapas del amparo en materia agraria. Metodológicamente guardan una estructura similar, pues en cada uno de ellos se describe de forma general la política agraria nacional y estatal; la legislación agraria vigente; la regulación o reforma del amparo en la materia y un panorama del número de amparos promovidos en el periodo; las causas que lo originaron y; algunos casos concretos que permitan profundizar la práctica jurídica de los actores inmiscuidos.

El segundo capítulo inicia con una breve presentación del artículo 27 constitucional y algunas de sus leyes reglamentarias, particularmente el *Reglamento Agrario* de 1922; le sigue una descripción general de la política agraria nacional y estatal, poniendo énfasis en el gobierno del gobernador Carlos Riva Palacio y; cierra con el análisis de los juicios promovidos por los afectados con resoluciones de dotación de tierras en esta primera etapa de la reforma agraria; no obstante, una revisión general de los archivos judiciales muestra que también los peticionarios de tierras acudieron al juicio de amparo como un recurso de resistencia, tal fue el caso de los pueblos de San Luis Tlatilco, San Esteban Huitzilacasco y San Antonio Zomeyucan, del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; quienes en 1927, al serles negada la dotación definitiva, promovieron un juicio de amparo que les fue

otorgado dos años después y así pudieron conservar las tierras que poseían de forma provisional.

Distintos personajes de la época criticaron y combatieron el uso y abuso del amparo por parte de los propietarios, al grado que, en 1931 por iniciativa del senador por Zacatecas, Lauro Caloca, y con respaldo de algunas organizaciones campesinas como la Liga Nacional Campesina "Úrsulo Galván" y la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, se reformó el artículo 10 de la ley agraria de 1915, prohibiendo la interposición de amparos en contra de resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras o aguas, dejando como único derecho a los afectados el solicitar en el término de un año la indemnización correspondiente derivada del proceso de expropiación.

Si bien, en el papel esta reforma buscaba hacer más ágil la entrega de tierras, en la práctica judicial esto no ocurrió. Desde al año de 1927, gracias a una jurisprudencia de la Suprema Corte, los propietarios afectados antes de acudir a la justicia federal tenían que agotar el juicio de nulidad de la resolución presidencial y obtenida esta resolución, podían promover el juicio de amparo, lo que lo convirtió en una instancia más. Un ejemplo de ello se presentó en la dotación solicitada por vecinos del pueblo de Santiago Teoyahualco, municipio de Tultepec, cuyo procedimiento pasó por dos resoluciones dotatorias, un juicio de nulidad y tres juicios de garantías (uno promovido por los propietarios y dos por los solicitantes) que se analizan en el capítulo tres.

En este mismo capítulo y a diferencia de los demás, se reconstruye un segundo estudio de caso: se trata del ejido de San Bartolo Tenayuca, municipio de Tlalnepantla, en donde una vez dada la resolución presidencial, la resistencia por parte de los propietarios llevó a las autoridades agrarias a proponer el cambio de localización del ejido. En respuesta, los afectados haciendo uso de las herramientas que les concedía el marco jurídico vigente, acudieron al juicio de amparo en contra de esta resolución.

Conforme avanzó la reforma agraria y se cumplía una de las principales promesas de la revolución: la destrucción del latifundio; los entonces pequeños propietarios (auténticos o simulados) reclamaron al gobierno federal la protección de sus tierras, medida que fue establecida en 1938 por Lázaro Cárdenas, creando los certificados de inafectabilidad para aquellas tierras destinadas a la ganadería, extendiéndose unos años después estos certificados al ámbito agrícola. Ese mismo año, un grupo de diputados propuso una reforma a la fracción

XIV del artículo 27 constitucional para otorgar el amparo a la pequeña propiedad agrícola. La propuesta no prospero, pero la discusión con respecto al tema tampoco quedó cerrada y durante los siguientes años, tanto por resoluciones de la Suprema Corte, como por juristas, legisladores y distintas organizaciones, el debate continuó. Y fue hasta 1947 que, por iniciativa del presidente Miguel Alemán, se reformó la constitución para permitir la interposición del juicio de amparo a favor de los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación que contaran con certificados de inafectabilidad. Es decir, por medio de un reconocimiento por parte de la máxima autoridad en materia agraria, el presidente de la república, se dio protección a los predios que fueran considerados por ley como pequeña propiedad y aquellos otros que, de hecho, sin declaratoria presidencial, hubieran quedado reducidos a una extensión mínima. Un botón de muestra de lo anterior se ofrece en el capítulo cuatro donde se presenta el amparo promovido por los dueños del rancho Santa Rita, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso, quienes al ser afectados por la dotación complementaria otorgada al ejido de Chotejé, promovieron juicio de amparo presentando como principal argumento el contar con un certificado de inafectabilidad que protegía sus tierras. El telón de fondo de este litigio es que el trámite de dotación fue promovido por un grupo de peones acasillados, lo que provocó contradicciones con otros grupos de peones de la zona.

Finalmente, otro de los cambios fundamentales que vivió el amparo ocurrió a fines de 1962 cuando se reformó el artículo 107 constitucional y a inicios de 1963 se incorporaron y reformaron diversos artículos a la ley de amparo para establecer y regular formalmente el llamado amparo agrario. La importancia de este radicó en ser procedente cuando se reclamaran actos que privaran de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o comunidades en lo colectivo o a los ejidatarios o comuneros en lo individual. En ese sentido, esta investigación cierra con el análisis de una de las primeras experiencias en la presentación de este amparo, en un contexto de urbanización e industrialización de la entidad. Se trata del juicio promovido por los ejidatarios de Santa Ana Tlapaltitlán, del municipio de Toluca, en contra de la expropiación decretada por el gobernador Gustavo Baz para la creación de una zona industrial y específicamente para la instalación de la empresa automotriz General Motors de México.

Para construir una historia que busca tender puentes entre la historia del derecho, la historia de la reforma agraria y la historia social y, siguiendo a José Ramón Narváez quien afirma que para encaminarse a una historia social del amparo es necesario recurrir a varias fuentes como "los archivos judiciales, la prensa y la literatura", pero también a "cualquier elemento útil para identificar si una institución tuvo o no vida, si fue o no utilizada";[37] se utilizan como fuentes documentales las sentencias de los amparos en revisión encontradas en el Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AHSCJN); así como los expedientes de amparo resguardados en la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de México, ubicada en la ciudad de Toluca, en donde se encuentran los juicios resueltos por el juez de distrito en el estado. Conjuntar ambos fondos aporta dos posibilidades, por un lado, presentar un panorama cuantitativo por periodo, y por otro, descender las escaleras de los tribunales y tratar de ver a ras de suelo la manera en que los sujetos de a pie se desenvolvieron por los sinuosos caminos de la justicia federal.

Cabe mencionar que el acceso a las fuentes para la elaboración de esta investigación estuvo condicionado por la pandemia que vivió el mundo de 2020 a 2022 y, que en el caso particular de los archivos antes mencionados, se encontraron cerrados durante este tiempo; además de que los amparos promovidos a partir de 1951, no tienen el carácter de históricos y se encuentran bajo resguardo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como archivo de concentración y no hay acceso al público, de modo que la única forma de acceder a ellos es por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con las limitantes que esto conlleva, lo que sin duda condicionó la construcción de los últimos dos capítulos.

Dado que el juicio de amparo se deriva de un acto que origina la posible violación de garantías, en este caso la implementación de la legislación agraria, un tercer fondo fundamental que se consultó fue el Archivo General Agrario (AGA), cuya documentación sirvió para reconstruir las diversas acciones agrarias como la dotación, la declaración de inafectabilidad y la expropiación.

Una fuente complementaria fue el *Semanario Judicial de la Federación*, órgano oficial de difusión de los criterios jurisprudenciales del poder judicial y el *Diario Oficial de la Federación*, en donde se publica la legislación nacional y las resoluciones agrarias expedidas por el presidente de la república.

---

[37] NARVÁEZ, *Historia social*, p. 11.

Otros fondos que se exploraron encontrando información escasa para el propósito principal de esta investigación fue el Archivo Histórico y Fondo Reservado del Estado de México (AHEMyFR) y los archivos históricos municipales de Naucalpan de Juárez y de Toluca.

Capítulo 1

El juicio de amparo: aspectos histórico-jurídicos, la cuestión agraria durante la revolución y la naturaleza jurídica del amparo en materia agraria, 1861-1936

> No! El amparo no es el ave de pesado vuelo que no puede levantarse sobre una cerca de cactus, ni sostenerse en los aires al través del valle; es el águila gigantesca, que abre las alas en toda su magnitud y llega hasta las cumbres, desde donde puede ver hacia abajo las nubes de las violaciones del derecho individual; encima sólo el sol de la humanidad y de la justicia, derramando sobre el mundo de la sociedad y del derecho su calor y su luz.[1]

A lo largo de la historia de México los conflictos por la tenencia de la tierra han ocupado un espacio importante en la esfera pública. Un ejemplo de ello es el periodo posterior a la promulgación de la *Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas,* también conocida como Ley Lerdo, expedida el 25 de junio de 1856. La puesta en práctica de esta norma tuvo diversas consecuencias y respuestas por parte de los afectados en la defensa de sus tierras y los recursos que en ellas se encontraban como aguas, bosques y sus productos. Una de esas respuestas fue la vía jurídica a través de litigios ante los tribunales estatales y como última instancia en el Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo.

No solo los conflictos surgidos de la Ley Lerdo se ventilaron en la instancia judicial, también las controversias por límites entre pueblos y entre pueblos y haciendas se intentaron resolver por medio de los juicios de apeo y deslinde, poco trabajados por la historiografía. Por la naturaleza jurídica de estos juicios, cuando una de las partes se inconformaba con la sentencia tenía la posibilidad de acudir al amparo, también llamado juicio de garantías o juicio constitucional.

Desde su creación, pronto el juicio de garantías tomó un lugar importante dentro del sistema jurídico mexicano, empero, tuvieron que pasar varias décadas y leyes reglamentarias para que tomara forma y se consolidará como la principal institución protectora de las

[1] ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 135. En todas las citas presentadas se ha respetado la redacción original.

garantías individuales establecidas en la constitución. ¿Cómo llegó a tener tal importancia? ¿Cuáles fueron las principales rupturas y continuidades de las leyes que lo regularon? Y sobre todo ¿Cuál es el vínculo del amparo con la cuestión agraria? Son algunas de las preguntas que buscan responderse en este capítulo.

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de este capítulo es presentar de forma general los antecedentes histórico-jurídicos del amparo en el periodo de 1861, fecha en que se promulgó la primera ley de amparo, a 1936, año en que se elaboró la legislación que estuvo vigente durante la mayor parte del siglo XX. Para el logro de lo mencionado, se realiza una breve exposición de las leyes que lo regularon, destacando las etapas del procedimiento, las partes que en él intervinieron, las causas de su interposición y figuras como la improcedencia y el sobreseimiento; en el segundo apartado se presenta una visión general de las diversas formas en que las corrientes revolucionarias propusieron resolver los conflictos agrarios y en su caso, su postura con respecto al juicio de amparo, todo ello como antecedente del derecho agrario surgido con la promulgación de la constitución de 1917 y; finalmente, se esboza la naturaleza jurídica del amparo en materia agraria.

1.1 El juicio de amparo y su regulación jurídica, 1857-1936

Este apartado no busca ser una breve historia del juicio de amparo, autores clásicos como Silvestre Moreno Cora, Ignacio Burgoa y José Luis Soberanes ya se han ocupado de ello; tampoco un análisis profundo de las discusiones dogmáticas, parlamentarias o periodísticas que se suscitaron con la promulgación de las leyes que lo regularon y; mucho menos una reconstrucción de los debates con respecto a cuál documento o periodo histórico, nacional o extranjero, tuvo mayor influencia en el surgimiento del juicio de amparo mexicano. Se trata únicamente de presentar un esbozo de la evolución histórica que tuvo el juicio de garantías desde su primera ley reglamentaria de 1861, hasta su regulación en la ley de amparo de 1936. En los casos en que las fuentes lo permiten, se mencionan algunos aspectos y ejemplos relacionados con la propiedad y posesión de tierras.

Como se mencionó en la introducción, existe una vasta cantidad de investigaciones tanto jurídicas como históricas que dan cuenta de los antecedentes y desarrollo del juicio de amparo. En uno de estos estudios, José Ramón Narváez realiza una distinción entre los antecedentes y el origen de esta institución jurídica. Los primeros se refieren a aquellos

"elementos disímbolos anteriores a la institución"[2] y el segundo, al lugar o fuente del que emerge la misma.[3]

Propongo retomar esta distinción para ubicar, por una parte, la amplia variedad de documentos e instituciones que pueden considerarse antecedentes del juicio de amparo o que pudieron tener alguna influencia como el habeas corpus anglosajón,[4] la figura del justicia mayor en el derecho del reino de Aragón[5] y el amparo colonial novohispano[6] (los cuales por cuestiones de tiempo y espacio no abordo) y; por otra, al hablar del origen o fuente del amparo mexicano, tomo como punto de partida los documentos constitucionales que fueron moldeando el juicio de garantías aquí estudiado: las constituciones de 1857 y 1917; además de las leyes reglamentarias que emanaron de estas.[7]

Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta antes de la revolución, el juicio de amparo estuvo regulado por las leyes de 1861, 1869 y 1882; así como por el Código de Procedimientos Federales de 1897 y el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. Mientras que para el resto del siglo XX el juicio de garantías quedó reglamentado por las leyes de 1919 y 1936.

1.1.1 La Constitución de 1857

Si bien la primera ley reglamentaria del juicio de amparo vio la luz en 1861, es necesario hacer referencia de forma sucinta a dos documentos constitucionales previos: la Constitución de Yucatán de 1841 y el Acta de Reformas de 1847.

La constitución política del estado de Yucatán, firmada el 31 de marzo de 1841, entre sus principales aspectos estableció un apartado de garantías individuales (libertad de imprenta, de trabajo y seguridad jurídica, entre otras), la división de poderes (ejecutivo,

---

[2] NARVÁEZ, *Historia social*, p. 12. Nota al pie número 2.
[3] Otros autores como Soberanes y Martínez han optado por denominarlos antecedentes nacionales directos del juicio de amparo: "Nacionales porque responde a la propia tradición jurídica mexicana, y directos por la inmediación que se detectó entre los mismos y la plasmación normativa de su producto final más depurado", SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, pp. 209-210.
[4] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes,* pp. 123-158.
[5] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, pp. 75-122.
[6] LIRA, *El amparo colonial*; SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes para la historia*, pp. 159-202; NOPHAL, *El amparo colonial*; OLMEDO Y REYES, *El amparo novohispano*.
[7] Si bien distintos autores como MORENO, *Tratado del juicio*, pp. 4-19 y SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, pp. 210-220, han señalado como origen histórico del juicio de amparo mexicano la segunda de las leyes constitucionales de 1836, se omite hacer referencia a ella puesto que no se refiere de forma explícita a los actos de autoridad que violen garantías individuales, sino a la nulidad de leyes.

legislativo y judicial), una administración departamental y el procedimiento para reformar la constitución.

En su artículo octavo señaló que los jueces de primera instancia ampararían en el goce de sus derechos a los que pidieran "su protección contra cualesquier funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados"[8] y se encomendaba a la Corte Suprema el

> *Amparar* en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección *contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios al texto literal de la Constitución*, o *contra de las providencias del Gobernador, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental en los términos expresados*: limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que la Constitución hubiese sido violada.[9]

Uno de los participantes en la elaboración del proyecto constitucional fue Manuel Crescencio Rejón a quién se considera uno de los creadores[10] del amparo mexicano. En palabras de Soberanes y Martínez, si bien no aportó "nada novedoso para el mundo del derecho constitucional, sí lo hizo para nuestro país, puesto que, en suma, venía a diferenciar un control de constitucionalidad, llevado a cabo por la Suprema Corte de Justicia, y un control de las garantías individuales, en cuyo caso la competencia se atribuyó a los jueces de primera instancia o a sus superiores jerárquicos",[11] quienes para el caso yucateco serían los jueces letrados de primera instancia para los asuntos comunes, del ramo civil o criminal. Aquí una de las principales aportaciones del ilustre yucateco.

La vigencia de dicho ordenamiento corrió la misma suerte que el proyecto independentista de Yucatán. Por su origen, se trata de un amparo *sui generis*, pues surgió en un ámbito estatal, cuando dicha entidad no era parte del país. A pesar de ello, la propuesta esbozada por Manuel Crescencio Rejón fue fundamental en el desarrollo de la historia constitucional mexicana.

Por mucho tiempo se afirmó que no se habían encontrado documentos que demostraran la implementación del juicio de amparo en Yucatán.[12] No obstante, José Ramón Narváez analizó el expediente promovido por el abogado Esteban Valay, fundamentado en

---

[8] "Constitución Política de Yucatán", p. 98.
[9] "Constitución Política de Yucatán", pp. 111-112. Las cursivas son mías.
[10] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, p. 234; BURGOA, *El juicio*, pp. 115-119.
[11] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, p. 233.
[12] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, p. 235.

el artículo octavo de la constitución yucateca de 1841, quien solicitó el amparo de la justicia por la detención ilegal de la que había sido objeto junto con otras ocho personas.[13] Este documento ayuda a comprender no solo el origen doctrinal o formal de esta figura jurídica sino su vida material o procesal, lo que permite afirmar que no fue solo "un antecedente aislado sino la noción, la intención y el producto de una cultura jurídica de aquél tiempo".[14]

En cuanto al Acta de Reformas de 1847, hay que recordar que, en el contexto de la guerra con Estados Unidos, el congreso mexicano se instaló como constituyente y una de sus primeras medidas fue restablecer la vigencia de la constitución federal de 1824, desconociendo el gobierno centralista.

En materia de amparo es importante mencionar el voto particular emitido por el diputado de Jalisco, Mariano Otero,[15] quien en su proyecto de Acta de Reformas propuso en el artículo 19 la incorporación del juicio de amparo. Dicha propuesta tuvo una crítica muy puntual por la posible intromisión del poder judicial en la esfera de los otros dos poderes, "debido a que autorizaba anular las leyes expedidas por el legislativo y los actos soberanos del ejecutivo". La solución planteada por Otero fue el precisar el alcance de las sentencias de amparo, de modo tal que solo tuvieran consecuencias para la persona que solicitara el amparo, "es decir, efectos particulares, dejando a salvo la observancia general de las normas y actos",[16] lo que se conoció en la práctica jurídica como la formula Otero o el principio de relatividad de las sentencias, es decir, las sentencias solo vinculaban a las partes involucradas en el juicio respectivo.

La propuesta del diputado jalisciense fue recogida e incorporada en el artículo 25 del Acta de Reformas, quedando de la siguiente manera:

> Los tribunales de la federación *ampararán* a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare.[17]

---

[13] NARVÁEZ, *Historia social*, pp. 59-77.
[14] NARVÁEZ, *Historia social*, p. 79.
[15] Para profundizar en la participación de Otero en el constituyente de 1847 véase GAXIOLA, *Mariano Otero*, pp. 337-355.
[16] *Las propuestas*, p. 8.
[17] *Las propuestas*, p. 9. Las cursivas son mías.

Si anteriormente se había destacado la importancia de Manuel Crescencio Rejón en concebir la figura del juicio de amparo, de igual trascendencia fueron las propuestas de Mariano Otero. Siguiendo a Soberanes y Martínez: "Él es el que hace nacer el amparo con todos los perfiles que le serán inherentes; él es quien encarna el esfuerzo básico para que sus lineamientos generales se plasmen en un texto constitucional de alcance federal por primera vez en la historia de México".[18]

A pesar de no existir una ley reglamentaria en la materia hasta 1861, algunos ciudadanos promovieron demandas de amparo por diversos actos de autoridad que consideraron violatorios de sus garantías.[19] Y aunque algunos de esos juicios no fueron tramitados por los tribunales federales "aduciendo que no existía Ley de Amparo en la cual se reglamentara el procedimiento a seguir",[20] en ellos es posible observar "la tensión que tuvieron que enfrentar los jueces de distrito para contener la arbitrariedad de los gobernantes y las autoridades administrativas de los Estados, así como las dudas ante la falta de una ley procedimental que determinara los detalles de la sustanciación".[21]

La propia Suprema Corte tuvo noción de las dificultades para la aplicación del artículo mencionado y dirigió una carta al Poder Ejecutivo informándole que con fundamento en el artículo 25 del Acta de Reformas algunos individuos habían acudido a ese tribunal quejándose de medidas tomadas por el gobierno que atacaban sus derechos, por lo que exigían se les otorgara la protección señalada. No obstante, se habían abstenido de resolver esos asuntos, por no contar con una ley secundaria que fijara "los casos y circunstancias en que deba tener lugar, determine los medios y maneras con que deban proceder los tribunales para impartir esta protección, con todo lo demás que es indispensable para hacerla real y efectiva en el caso particular que se presente".[22]

Posiblemente a la recurrencia de las demandas de amparo y a la necesidad de dar solución a este problema señalado por la Corte, algunos juristas comenzaron a elaborar

---

[18] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, pp. 270.
[19] Algunos de estos casos son mencionados en CABRERA, *La Suprema Corte*, t. I, pp. 151-155.
[20] ARIZPE, *La primera sentencia*, p. 41.
[21] GONZÁLEZ, *Los amparos primigenios*, p. XIII. En este trabajo, González Oropeza realizó una compilación de nueve demandas de amparo entre los años 1848-1865 tramitadas en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Querétaro, Durango, Puebla, Oaxaca, México y la Ciudad de México.
[22] ARIZPE, *La primera sentencia*, pp. 41-43.

proyectos de ley reglamentaria,[23] que sirvieron para ir dando forma a esta figura jurídica que se elevaría a rango constitucional en 1857**.**

En el Congreso Constituyente de 1856-1857, se discutieron múltiples temas, dentro de ellos destacan los relativos al derecho de propiedad y al juicio de amparo, ambos centrales en esta investigación.

La garantía de propiedad quedó consagrada en el artículo 27 estableciendo que no podía ser ocupada sin el consentimiento de las personas, "sino por causa de utilidad pública y previa indemnización." La ley determinaría los requisitos para llevarse a cabo y la autoridad facultada para ello. También se estableció la limitante legal a las corporaciones civiles o eclesiásticas para "adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única escepcion de los edificios destinados inmedíata y directamente al servicio ú objeto de la institución".[24] Este precepto junto con la llamada ley Lerdo, la ley sobre colonización y compañías deslindadoras de 1883 y la de 1894, sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, condicionaron la política agraria del porfiriato.

Con respecto al juicio de amparo,[25] este quedó regulado por el artículo 101 el cual otorgó facultades a los tribunales de la federación para resolver controversias que surgieran por leyes o actos de autoridad que violaran garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneraran o restringieran la soberanía de los Estados y por las leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadieran la esfera de la autoridad federal.[26] Dichos supuestos fueron retomados en las siguientes leyes, no obstante, para efectos de esta investigación, sólo se hace referencia al primero.

Dichos juicios se seguirían a petición de la parte agraviada, de acorde con los procedimientos y formas que estableciere la ley de la materia, precisando que la sentencia solo se ocuparía de "individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".[27] Aquí vemos claramente dos de los principios contemplados

---

[23] "Proyecto Gamboa sobre Tribunales de Amparo, de 1849", pp. 309-314; "Proyecto de Ley de Amparo, de Vicente Romero, 1849," pp. 329-330; "Proyecto de la Administración, de 1852", pp. 331-334 en *Historia del amparo*.

[24] Acerca de los debates sobre este artículo véase DURAND, *El derecho agrario*, pp. 169-173; ZARCO, *Historia del Congreso*, pp. 989-998.

[25] Para un resumen de las principales posturas véase COSSÍO, *La justicia prometida*, pp. 88-93.

[26] Art. 101 constitucional en ZARCO, *Historia del Congreso*, p. 1357.

[27] Art. 102 constitucional en ZARCO, *Historia del Congreso*, p. 1357.

en los ordenamientos anteriores y que serían retomados en las legislaciones posteriores: instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias o formula Otero.

Una vez que se elevó a rango constitucional la figura del amparo, quedaba pendiente la tarea de legislar su ley reglamentaria, razón por la cual varios juristas elaboraron proyectos al respecto. El primero de ellos fue presentado por Domingo María Pérez Fernández, en la sesión del 16 de noviembre de 1857;[28] uno más fue elaborado por el destacado jurista Manuel Dublán, el 9 de julio de 1861;[29] otro fue formulado por José Ramón Pacheco,[30] también en 1861 y; el proyecto de *Ley Orgánica de los Tribunales de Distrito y de Circuito*, presentado por la Comisión de Justicia el 30 de julio de 1861.[31] De estas propuestas, al parecer la de Dublán fue la que más eco tuvo, ya que fue retomada por los legisladores que elaboraron el proyecto de ley de amparo en 1861.

1.1.2 Ley de amparo de 1861[32]

Antes de iniciar con la descripción de la primera ley de amparo, es importante tener un esbozo de la organización del poder judicial, específicamente de los tribunales federales. Surgidos con la Constitución de 1824, al triunfo del proyecto centralista fueron suprimidos y sustituidos en 1841 por los Tribunales Superiores de los Departamentos. Fueron restablecidos en septiembre de 1846 y abolidos en 1853 por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. Con la promulgación de la ley sobre administración de justicia o Ley Juárez, del 23 de noviembre de 1855 fueron nuevamente restablecidos.[33]

La Ley Juárez estableció una Suprema Corte integrada por nueve ministros y dos fiscales; cinco Tribunales de Circuito (en la capital, Culiacán, Guanajuato, Guadalajara y Mérida), cada uno con jurisdicción en diversos estados y; nueve juzgados de Distrito (Sinaloa, Guadalajara, México, Querétaro-Guanajuato, Campeche, Michoacán, Oaxaca, San Luis y Zacatecas).

---

[28] José Barragán ha destacado los puntos principales de este proyecto, BARRAGÁN, *Primera ley*, pp. 27-34; *Historia del amparo*, pp. 439-443.
[29] BARRAGÁN, *Primera ley*, pp. 35-42; *Historia del amparo*, pp. 445-448.
[30] BARRAGÁN, *Primera ley*, pp. 44-58; *Historia del amparo*, pp. 449-476.
[31] BARRAGÁN, *Primera ley*, pp. 58-66.
[32] Para profundizar en el contenido y comentarios acerca de esta ley véase BARRAGÁN, *Primera ley,* MORENO, *Tratado del juicio*, pp. 19-26; CABRERA, *La Suprema Corte*, t. I, pp. 269-274.
[33] CABRERA, *La Suprema Corte*, t. I, p. 177.

Los acontecimientos políticos derivados de la promulgación de la constitución de 1857 propiciaron que los tribunales dejaran de funcionar y no fue hasta después del restablecimiento de la república en 1861, que retomaron sus labores y la ley de 1855 entró nuevamente en vigor. Dentro de las facultades de los jueces de distrito se encontraban el conocer de los asuntos

> cuyo monto no fuera mayor a 500 pesos y en que estuviera interesada la Federación, y en primera instancia, todos los asuntos que los tribunales de circuito conocieran en segunda instancia. Los juzgados que tuvieran dentro de su jurisdicción algún territorio, se encargarían en segunda instancia de los negocios civiles y criminales del mismo, así como de revisar los fallos de sus jueces y definir su responsabilidad. Igualmente, estaba dentro de sus atribuciones hacer las visitas a cárceles y asesorar a los tribunales militares de su localidad.[34]

Como es de notar, no se hace referencia a la facultad del Juez de Distrito para conocer del amparo, hasta que fue promulgada la ley reglamentaria.

La importancia de la ley de 1861 radica no sólo en ser la primera que reguló el juicio de amparo a nivel nacional, sino porque comienza a esbozar las figuras procesales que le dieron forma: quiénes podrían intervenir, el tiempo para solicitarlo, las causas para promoverlo y las etapas que debía seguir el procedimiento. Incluso, para autores como María José Rhi Sausi, marcó "el inicio de un proceso mediante el cual se configura una nueva cultura jurídica".[35]

Como se mencionó, para la elaboración de esta ley se presentaron distintos proyectos, según el dicho de la comisión redactora, el proyecto final retomado fue el presentado por el destacado jurista Manuel Dublán:

> Discutíamos vagamente en el seno de la comisión acerca de las bases principales en que debiera descansar nuestro proyecto, y sabiendo que llegó a formarse uno sobre el mismo artículo constitucional por algún diputado del congreso de 1857, lo hicimos buscar con empeño en el archivo hasta llegar a persuadirnos de que no existía. Posteriormente lo hemos visto publicado en un periódico de aquella época. Entretanto el Sr. Dublán presentaba a esta asamblea el fruto de sus trabajos personales en tan importante materia, y habiéndolo examinado atentamente, comprendimos desde luego que el Sr. Dublán había acertado con la verdadera inteligencia de la constitución en los artículos 101 y 102.[36]

---

[34] LÓPEZ, "La Ley Juárez" p. 205.
[35] RHI SAUSI, "Derechos y garantías", p. 126.
[36] BARRAGÁN, *Primera ley*, p. 68.

La vigencia y aplicación de la primera ley de amparo o *Ley Orgánica de procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el art. 102 de la Constitución Federal, para todos los juicios de que habla el art. 101 de la misma*,[37] estuvieron condicionadas por la intervención francesa y el Segundo Imperio y por la inestabilidad con la que laboraron los tribunales en ese contexto de guerra. Esta ley estuvo vigente hasta 1869, año en que fue derogada.

La primera ley de amparo, breve comparándola con las que le siguieron, estaba compuesta de 34 artículos, organizados en cuatro secciones,[38] en donde se fijó como competencia exclusiva a los tribunales federales el conocer de este juicio, siempre que se tratara "de rebatir las leyes de la Unión, ó de invocarlas para defender algun derecho"[39] y determinó la facultad de ocurrir a la justicia federal a "todo habitante de la República que en su persona ó intereses" creyera violadas las garantías que le otorgaba la constitución o alguna de sus leyes orgánicas.

Estableció como partes en el juicio de amparo al promotor fiscal, al quejoso y a la autoridad responsable (art. 7), figuras que como se verá en este capítulo, sufrieron distintas modificaciones. La demanda de amparo debía interponerse ante el juez de distrito del estado en que residiera la autoridad responsable de cometer la violación, especificando detalladamente el hecho y señalando la garantía violada. Tanto las partes, como la autoridad ante quien se impondría la demanda de amparo permanecieron en las siguientes leyes.

Por lo que corresponde a la sentencia, el juzgador se limitaría únicamente a declarar si la justicia de la unión amparaba o no a la persona cuyas garantías hubieren sido violadas. Dicha resolución debía ser publicada en los periódicos y comunicada al gobierno del estado para que pudiera "exigirse la responsabilidad" a la autoridad que hubiese dictado "la providencia" (art. 12). En este caso es claro que el razonamiento del legislador tenía dos propósitos, el resarcir al agraviado en el uso y goce de la garantía violada y la sanción para la autoridad o autoridades responsables.

---

[37] "Ley Orgánica de procedimientos", pp. 328-330.

[38] El análisis se centra en la primera sección que se refiere a la violación de garantías y a la cuarta, que se ocupa de las sentencias. Las dos secciones restantes tratan de la vulneración por parte de la federación de la soberanía de los estados y de los actos de autoridad de los estados que invadan las atribuciones de la federación, respectivamente.

[39] "Ley Orgánica de procedimientos", p. 328.

El obligado a dar seguimiento a la ejecución de la sentencia sería el propio juez de distrito "requiriendo formalmente a nombre de la Unión al superior de la autoridad responsable" (art. 14).

Si bien la vigencia de esta norma estuvo supeditada a los vaivenes del contexto político nacional, distintas personas recurrieron a esta figura en diversos temas como impuestos, declaración de inconstitucionalidad, retroactividad de leyes, asuntos penales, expropiaciones y cuestiones de propiedad y posesión.[40]

De lo destacado en esta ley, llama la atención lo relativo a los artículos cuatro, cinco y seis, los cuales fijaron lo que podemos denominar actos previos al juicio, al establecer si era procedente o no su apertura. En ese sentido, Rojas y Pascual señalaron que se había establecido un verdadero antejuicio, el cual buscó "limitar en el terreno práctico, la inútil multiplicidad de los juicios de amparo, por medio de la substanciación del artículo, que venía a ser de previo y especial pronunciamiento, sobre si se debía o no abrirse el juicio".[41]

Otro elemento que resaltar es la facultad que otorgó al juez de distrito para suspender el acto reclamado en casos de urgencia notoria (art. 4), aunque no especificaba cuales eran esos casos.

A pesar de la corta vigencia de este ordenamiento, Lucio Cabrera Acevedo afirma que "casi todas las sentencias dictadas bajo la vigencia de la ley de amparo de 1861 son interesantísimas". Al estudiarlas es posible constatar "que jueces y tribunales federales fueron los modeladores del juicio constitucional, pues las dificultades procesales que iban encontrando las resolvían con un gran tino".[42]

Dentro de las sentencias relacionadas con la cuestión agraria en este periodo, es de destacar el amparo promovido en 1868 por el licenciado José María Echeverría en representación del presbítero José María Gordoa, por la expropiación decretada por el Congreso del estado de Zacatecas de dos sitios de ganado mayor pertenecientes a la hacienda del Maguey a favor del rancho de la Calera.

De acuerdo con la sentencia dictada por el juez de distrito de Zacatecas, Cayetano Arteaga, el artículo 27 constitucional garantizaba el derecho de propiedad, no permitiendo la

---

[40] BARRAGÁN, *Primera ley*, pp. 105-217. En esta obra reproduce 49 sentencias de amparo que nos muestran la diversidad de temas resueltos.
[41] ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 68.
[42] CABRERA, *La Suprema Corte… Siglo XIX*, t. I, p. 411.

expropiación, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización; causas que no se cumplían en este asunto, por lo que otorgó el amparo al quejoso.[43] Sin duda alguna la figura de la expropiación es uno de los temas cuyo estudio puede profundizarse a partir de la revisión de las fuentes judiciales. En el último capítulo de esta tesis se retoma un ejemplo de esta figura en un contexto distinto.

Finalmente, parece que uno de los mayores obstáculos de esta ley fue la ejecución de las sentencias, cuya reticencia en su cumplimiento por parte de las autoridades responsables, hizo necesario que, en junio de 1868, la Secretaría de Justicia dirigiera una circular que se reducía "a la afirmación verdaderamente elemental y que siempre debió verse como indiscutible, de que las autoridades respecto de cuyos actos se hubiese concedido amparo, estaban obligados a respetar esas sentencias".[44]

1.1.3 Ley de amparo de 1869[45]

La primera ley de amparo no sólo presentó obstáculos en la ejecución de las sentencias, desde el ministerio de Justicia e Instrucción Pública se consideró necesario reformarla, ya que "todos los que de cerca han observado esos juicios, están ya de acuerdo en que la reglamentación imperfecta que como primer ensayo tuvo que dárseles en 1861, ha ocasionado abusos verdaderamente escandalosos, que hacen de semejantes recursos el tropiezo constante de la administración y de la justicia".[46]

Es importante señalar que si bien se trata de una figura producto de la cultura jurídica de ese momento, en la iniciativa de reforma se señaló de forma expresa que "la idea cardinal de los juicios de amparo fue tomada de los Estados Unidos; pero lo que no se sabe con tanta generalidad, es, que la formulamos en la constitución de un modo algo diverso, y sobre todo, la hemos puesto en práctica con muy notables diferencias".[47] Con lo cual se reconoció una de las influencias jurídicas recibidas, pero se aclaraba la recepción e implementación que se le dio en el país.

---

[43] *El Derecho, periódico de jurisprudencia y legislación*, t. I, pp. 53-54.
[44] Citado en ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 74.
[45] Para profundizar en el contenido y comentarios acerca de esta ley véase BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1869;* MORENO, *Tratado del juicio*, pp. 26-33.
[46] BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1869*, p. 8.
[47] BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1869*, p. 9.

La *Ley Orgánica Constitucional sobre el recurso de amparo* fue promulgada el 20 de enero de 1869. Compuesta de 31 artículos, organizados en cinco capítulos, en términos generales retomó el procedimiento que debía seguir el juicio de amparo establecido en su predecesora, así como las causas de procedencia señaladas en la constitución de 1857, facultando a los tribunales de la federación para resolver toda controversia que se presentara en los siguientes casos:

> I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad, que violen las garantías individuales.
> II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados.
> III. Por leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal.[48]

En esta segunda ley de amparo se recogieron los principios de instancia de parte y relatividad de las sentencias al señalar que los juicios se seguirían a petición de la parte agraviada y la sentencia se ocuparía de individuos particulares "limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare" (art. 2). Así mismo, se mantuvo la competencia del juez de distrito del lugar en que se ejecutara o tratare de ejecutarse la ley o acto que motivara el amparo y este podía ordenar su suspensión de manera provisional (art. 3).

Tratándose del amparo promovido por violación a una garantía individual, el solicitante debía explicar en su demanda el hecho que lo originaba, así como señalar la garantía vulnerada.

Una novedad en este ordenamiento fue la prohibición para interponer el recurso de amparo en negocios judiciales (art. 8), es decir, en aquellos casos en que se reclamara la violación de garantías derivadas de un acto judicial, como por ejemplo una sentencia emitida en asuntos del ámbito civil o penal, por los tribunales de la república mexicana. Este debate es para algunos juristas uno de los "más apasionantes del constitucionalismo mexicano del siglo XIX",[49] sin embargo, no es el espacio para profundizar en él.

En caso de que el actor o quejoso, solicitare la suspensión del acto o ley que violara sus derechos, el juzgador solicitaba a la autoridad responsable un informe previo con el fin

---

[48] "Ley Orgánica Constitucional", p. 522.
[49] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, p. 307. Para profundizar en la discusión de este punto, véase ROJAS Y PASCUAL, pp. 87-97; SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, pp. 309-335.

de que le explicara el acto que se le imputaba, de ser procedente decretaba la suspensión provisional del acto en tanto se resolvía el juicio de garantías. En casos de urgencia notoria, tal es el caso del reclutamiento forzoso o pena de muerte,[50] el juez debía resolver a la mayor brevedad posible, y con solo el escrito del actor (art. 5).

Resuelto lo relativo a la suspensión, el juez solicitaba el informe justificado a la autoridad responsable que ejecutare o tratare de ejecutar el acto reclamado, cabe señalar que en esta ley no se le consideraba como parte en el juicio. Presentado el informe justificado se daba vista al actor y al promotor fiscal y si el juez consideraba necesario aclarar algún punto, abría un periodo para presentar pruebas. Estas no se recibían en secreto y las partes tenían facultad de conocer las que fueran documentos y de asistir a la sesión en que los testigos rindieran sus declaraciones "haciéndoles las preguntas que estimen conducentes á las defensas de sus respectivos derechos" (art. 11).

Cerrado el periodo de pruebas, las partes formulaban y presentaban sus alegatos por escrito (en caso de no presentarlos podían enviarlos directo a la Corte para ser tomados en cuenta) y el juez pronunciaba su sentencia definitiva. Emitida la resolución, se enviaba el expediente a la Suprema Corte para que la revisara, pudiendo confirmarla, modificarla o revocarla (art. 15), es decir, se trataba de un amparo biinstancial. Si se negaba el amparo, el juez contaba con la facultad de imponer una multa mínima de 100 pesos, salvo en los casos que existiera notoria insolvencia (art. 16).

Otra novedad de dicho ordenamiento es que al mismo tiempo mandataba al tribunal de circuito correspondiente que formara causa "al juez de distrito, para suspenderlo o separarlo si hubiere infringido esta ley", es decir, si se acreditaba la violación constitucional.

Contra la resolución de la Corte no existía recurso alguno y una vez pronunciada se devolvía el expediente al juez de distrito para cuidar su ejecución. El efecto de una sentencia que concedía el amparo era la restitución de "las cosas al estado que guardaban antes de violarse la constitución" (art. 23).

---

[50] Para el caso del Estado de México, Ana Lidia García y Alejandra Suárez han estudiado juicios de amparo promovidos contra penas de muerte, destacando que "la mayoría de los quejosos demandaban la intervención del Juez de Distrito para que no se aplicasen sentencias apresuradas, emitidas por autoridades políticas o judiciales, principalmente jefes políticos, quienes en su mayoría buscaban imponer un castigo ejemplar y expedito que sirviese de escarmiento en sus respectivas jurisdicciones", GARCÍA Y SUÁREZ, "La pena de muerte", p. 53.

Igualmente, estableció como causas de responsabilidad a los jueces, "la admisión o no admisión del recurso de amparo, el sobreseimiento en él, el decretar o no decretar la suspensión del acto reclamado, la concesión o denegación del amparo contra los preceptos de esta ley" (art. 25).

Al igual que en la ley de 1861, las sentencias pronunciadas solo amparaban al solicitante, por lo que no podían ser invocadas "por otros como ejecutorias, para dejar de cumplir las leyes o providencias que las motivaron" (art. 26)

Esta ley tuvo una vigencia de casi 14 años, durante los cuales se fue consolidando esta figura legal, al grado de que "puede decirse que fue cuando el amparo alcanzó su plenitud como institución".[51] En este periodo se resolvieron diversos asuntos, siendo uno de los más importantes el amparo solicitado por el juez de letras de primera instancia de Culiacán, Miguel Vega.[52] En su demanda señaló como agravió la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, que le había revocado una sentencia e impuesto dos penas: separación del cargo como juez por el lapso de un año y durante el mismo periodo la prohibición de ejercer la profesión de abogado.

En el caso del Estado de México,[53] Diana Birrichaga ha analizado la práctica judicial del amparo entre 1869 y 1882, "para explicar el marco de acción de los gobiernos municipales y definir la conflictividad de las relaciones entre los vecinos de los pueblos con las autoridades locales".[54] De la serie de casos presentados, Birrichaga demuestra que la competencia de las autoridades municipales estuvo limitada "con base en la interpretación del alcance de las garantías individuales", destacando que las interpretaciones del juez de distrito "muchas veces fueron contrarias a las resoluciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación",[55] por lo que fueron modificadas, tal y como ocurrió con algunas de las sentencias de amparo en la segunda década del siglo XX, lo cual se analiza en el siguiente capítulo.

---

[51] ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 100.
[52] Sobre el llamado amparo Vega véase CABRERA, *La Suprema Corte*, pp. 459-472. Una edición facsimilar de este asunto se puede consultar en ALVARADO, *El "amparo Vega"*, pp. 37-163.
[53] Para profundizar en los primeros juicios de amparo en la entidad, véase la obra MOLINA, GARCÍA Y GARCÍA, *La vida*, en donde estudian casos relacionados con el derecho a la vida (pena de muerte), la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.
[54] BIRRICHAGA, "Autoridades municipales", p. 102.
[55] BIRRICHAGA, "Autoridades municipales", pp. 121-122.

En materia de tierras, si bien no se trata de la entidad de estudio, vale la pena señalar un amparo promovido en marzo de 1869, por el licenciado Agustín López de Nava, apoderado de Francisco de Paula Gordoa, propietario de la hacienda de Rancho Grande, en contra de la expropiación de "cuatro sitios de ganado mayor, pertenecientes a las haciendas de Rancho Grande y del Mezquite, en favor de los vecinos de la Salada, que se erigió en municipalidad". En este caso el quejoso fundó su reclamo en el artículo 27 constitucional que regulaba la garantía de propiedad, dado que desde su punto de vista no existía la causa de utilidad pública.

En su sentencia, el juez de distrito consideró "que el origen y fundamento de la propiedad" se encontraban en "el derecho natural y la moral, pudiendo la ley civil reglamentar solamente y hasta cierto punto el uso de aquella, es decir, que el reglamento solo alcanzase a evitar el perjuicio de tercero y a salvar la utilidad pública evidente" y específicamente que en este caso de expropiación no existía la causa de utilidad pública establecida por el artículo 27 de la constitución, por lo que se otorgó el amparo al quejoso.[56]

Al igual que su antecesora, esta segunda ley no estuvo exenta de críticas y desde 1877 las comisiones unidas de puntos constitucionales y de justicia de la Cámara de Diputados presentaron una propuesta de reforma y en 1878 el magistrado José María Bautista presentó a la Suprema Corte otro proyecto que fue modificado y se envió al Congreso de la Unión, aunque no fue discutido; estas propuestas serían ejemplos del interés que había despertado en el ámbito jurídico el juicio constitucional.[57]

1.1.4 Ley de amparo de 1882[58]

A diferencia de las leyes anteriores, la *Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857*,[59] promulgada el 14 de diciembre de 1882, estableció con mayor detalle el procedimiento del juicio de amparo. Retomó las causales establecidas en la ley de 1869 fijando su procedencia por leyes o actos de autoridad que violaran las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneraran o

[56] BARRAGÁN, *Primera Ley*, p. 212-217.
[57] ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 110.
[58] Para un análisis detallado de las rupturas y continuidades entre esta ley y su predecesora véase VEGA, *La Nueva Ley*, BARRAGÁN, *Proceso de discusión, 1882;* MORENO, *Tratado del juicio*, pp. 33-39; CABRERA, *La Suprema Corte*, pp. 455-544.
[59] "Ley Orgánica de los artículos 101 y 102", pp. 394-403.

restringieran la soberanía de los estados y; por leyes o actos de las autoridades de éstos que pudieran invadir la esfera de la autoridad federal.

Continuó con los principios de procedencia a petición de la parte agraviada y relatividad de las sentencias, es decir, la sentencia sería personal limitándose a proteger al agraviado "en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".[60] El quejoso que solicitara el amparo por violación a una garantía individual debía exponer en su demanda de manera clara el hecho que la motivaba y especificar la garantía que consideraba se le estaba violando.

El órgano jurisdiccional que conocería del juicio de amparo seguiría siendo el juez de distrito del lugar en que se ejecutara o tratase de ejecutar el acto que motivara el amparo. En esta ley se especificó que en caso de que en el lugar no hubiere juez de distrito, los jueces letrados podían recibir la demanda de amparo, suspender el acto reclamado y realizar las diligencias urgentes, "dando cuenta de ellas inmediatamente al juez de distrito respectivo, y pudiendo, bajo la dirección de este, continuar el procedimiento hasta ponerlo en estado de sentencia" (art. 4), aunque no podían resolver el asunto de forma definitiva.

Al igual que en legislación previa, una de las atribuciones del juez fue la suspensión provisional del acto reclamado a petición del quejoso y de oficio en casos de urgencia, aun si se interponía vía telégrafo. En este supuesto y a diferencia de las leyes anteriores, se estableció la procedencia inmediata de la suspensión tratándose de casos como: pena de muerte; destierro; cuando fuere de difícil reparación física, legal o moral el daño al quejoso en caso de ejecutarse el acto; cuando el amparo se pidiese por violación a la garantía de libertad personal, lo que no implicaba su inmediata libertad, sino su disposición al juez federal que prevenía la ejecución de la sentencia y; en el caso del pago de multas, impuestos y otras exacciones económicas, fijando un depósito por la cantidad de que se tratare (arts. 12-15). Contra el auto que concedía o negaba la suspensión, era procedente el recurso de revisión ante la Suprema Corte (art. 17), más adelante se profundiza en este recurso.

Otra innovación que presentó la ley de amparo de 1882 fue la incorporación de dos capítulos que se convirtieron en relevantes a la hora de sustanciar el juicio y en el momento de resolverlos. El primero, "De las excusas, recusaciones e impedimentos", reguló los casos en que los jueces de distrito o magistrados de la corte estaban impedidos para conocer de un

[60] Artículo 2, párrafo segundo.

asunto[61] y; el segundo, referido a las causas por las cuales el juez no pronunciaría sentencia definitiva, sino que sobreseería el juicio. Dentro de estas causas se encontraba el desistimiento por parte del agraviado o su muerte durante el juicio, cuando la autoridad responsable revocara el acto que se reclamaba o cesaran sus efectos, cuando se hubiere consumado el acto de un modo irreparable y cuando el acto hubiere sido consentido y no fuera de materia penal. El sobreseimiento es una figura relevante para la presente investigación, ya que como se verá en los siguientes capítulos estuvo presente en los juicios de amparo analizados.

Un aspecto más a resaltar es lo relativo a las personas que podían interponer la demanda de amparo, ya que la ley estableció la facultad que tenía cualquier habitante del país para hacerlo por sí o por apoderado y; en casos de urgencia "los ascendientes por los descendientes o viceversa; el marido por la mujer y la mujer por el marido; los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado; los afines hasta el segundo grado" e incluso los extraños siempre que ofrecieran fianza (art. 9).

Resuelto el punto de la suspensión del acto reclamado, el juez solicitaba a la autoridad responsable que ejecutó o tratare de ejecutar el acto, un informe justificado sobre lo manifestado por el actor. En esta ley la responsable tampoco era considerada parte del juicio, no obstante, podía ofrecer pruebas y alegatos. Una vez recibido el informe pasaba el expediente al promotor fiscal para que solicitara lo que considerare conveniente.

Las partes en el juicio de amparo podían ofrecer todas las pruebas que estimaren necesarias para acreditar su dicho y presentar sus alegatos por escrito. El juez emitía su sentencia fundada y motivada en el texto constitucional aplicable y remitía el expediente a la Suprema Corte para su revisión. Aclaraba la ley que la sentencia de los jueces nunca causaría ejecutoria, y no podía ejecutarse hasta antes de la revisión de la Corte, ni aun cuando existiere conformidad entre las partes. En ese sentido, continuaba como un amparo biinstancial.

La resolución de la SCJN podía ir en tres sentidos: revocando, confirmando o modificando la sentencia del juez de distrito, y sería publicada en el periódico oficial del poder judicial (art. 47). Si la Corte lo consideraba necesario, podía mandar practicar las diligencias necesarias para suplir las irregularidades que encontrara en el procedimiento.

[61] Se trata del capítulo IV titulado "De las excusas, recusaciones e impedimentos" que contemplaba causas como la parentela con el quejoso, algún interés en el negocio motivo del amparo o haber sido abogados o apoderados de alguna de las partes.

La Suprema Corte y los juzgados de distrito en sus sentencias podían suplir "el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en auto, aunque no se haya mencionado en la demanda".[62] Esto es un antecedente del principio de suplencia de la queja deficiente que se verá en el último capítulo.

Si se negaba el amparo por falta de motivo para solicitarlo, tanto los jueces de distrito como la Suprema Corte podían imponer al quejoso una multa que iba de los 10 a los 15 pesos. Únicamente la insolvencia podía eximir de esta sanción.

Las sentencias de amparo emitidas por el máximo tribunal del país no contaban con recurso alguno, y tampoco podían cambiarse o modificarse aún por la misma Corte "después de que la haya votado en la audiencia respectiva". El efecto de dicha sentencia buscaba restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de violarse la garantía o derecho reclamado.

Pronunciada la sentencia se devolvía el expediente al juez de distrito quien era el encargado de cuidar su ejecución, si alguna de las partes consideraba que el juez "por exceso o por defecto", no cumplía con la ejecutoria podría recurrir al recurso de queja ante la Suprema Corte.

Un último capítulo de esta ley fijó la responsabilidad de jueces y ministros por los probables delitos en los que incurrieran conociendo del juicio de amparo, destacando que en "la concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes" (art. 70), se castigaría con la pérdida del empleo y prisión de seis meses a tres años si había actuado de forma dolosa, y con la separación del cargo por el periodo de un año, si el juez o magistrado había procedido mal por falta de instrucción o descuido. Aquí encontramos el principio de obligatoriedad de la jurisprudencia.

Durante los poco más de 15 años de vigencia de esta ley se ventilaron ante la justicia federal diversos litigios relacionados con la propiedad o posesión de la tierra, dentro de los que destacan aquellos derivados de los juicios de apeo y deslinde, un tema poco trabajado por la historia agraria.

Un ejemplo de esto se presentó en el año de 1884, aunque de la fuente consultada se desprende que el conflicto contaba con por lo menos cinco décadas. Se trata del juicio de

[62] Artículo 42, "Ley orgánica".

amparo promovido por vecinos del pueblo de Huitziltzingo, Estado de México, en contra del jefe político de Chalco y del juez de primera instancia de ese distrito.[63] El conflicto se suscitó cuando el primero expidió una orden para prohibir que vecinos del referido pueblo hicieran uso de unos terrenos cuya propiedad estaban litigando con vecinos del pueblo de Chimalpa, bajo el argumento de "evitar lamentables consecuencias para unos y otros".

Los quejosos manifestaron que "como individuos particulares y en calidad de legítimos propietarios y poseedores de esos terrenos, conforme a los títulos de adquisición ajustados a la ley de 25 de junio de 1856, su reglamento de 30 de junio y circular de 9 de octubre del mismo año", consideraban violadas sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 27, ante la orden del jefe político y los actos del mencionado juez que se había negado a retirar la restricción del uso de los terrenos y ordenó y practicó un apeo y deslinde en el sitio del litigio.

En el informe rendido por el jefe político manifestó que muchos años previos a la expedición de las leyes de reforma, ambos pueblos disputaban la propiedad y posesión sobre unos terrenos, por lo que la autoridad administrativa los orilló a dirimir sus controversias por vía judicial. El litigio había iniciado en 1838 resultando la sentencia en favor de los vecinos de Chimalpa. Los de Huitziltzingo apelaron la resolución remitiéndose "los autos á la superioridad, agregándose: que, por causales no aclaradas, hubieron de incendiarse en el año de 1854, en el estudio del Lic. D. Carlos Zavala radicado en la capital del Estado".

Ante la imposibilidad de presentar integro el expediente, la "incuria de los indígenas", su falta de recursos y otras razones, el conflicto no se solucionó y aun con la expedición de las leyes de reforma continuó la disputa por lo que la jefatura política siempre había impedido "la adopción de las vías de hecho".

Siendo este el contexto, los de Chimalpa habían informado al jefe político que "algunos de los de Huitziltzingo, apoyados en los títulos expedidos por la misma" habían invadido los terrenos en pugna "sembrándolos y poseyéndolos como legítimos propietarios", por lo que solicitaban se "corrigiera esa invasión como ejecutada sin derecho". La respuesta de la jefatura fue ordenar a los ahora quejosos se abstuvieran de sembrar los predios en litigio, mientras la autoridad resolvía de manera definitiva el caso.

[63] *El Foro*, 27 de diciembre de 1884, pp. 1-2.

Se practicó una "vista de ojos" sobre el terreno objeto del conflicto y se convocó a una reunión de los presidentes y síndicos de ambos ayuntamientos, de los auxiliares y vecinos principales de ambos pueblos, pero no se logró el avenimiento de las partes, por lo que el jefe político se dirigió al gobernador solicitándole otorgara la licencia para poder iniciar el respectivo litigio ante la autoridad competente, dando inicio en diciembre de 1882.

De esa forma el jefe político justifico su actuar conforme al decreto 104 del 17 de octubre de 1878, que lo facultaba para lograr el avenimiento entre los pueblos y evitar los litigios que pudieran surgir entre estos, "vocación de hondas raíces novohispanas, ligada a sus funciones de supervisión e intermediación en la propiedad y el uso y acceso a bienes raíces, a su estrecha supervisión de las finanzas pueblerinas y municipales, así como a su encargo de cuidar trámites y contratos".

Los quejosos dentro de las pruebas ofrecidas presentaron las declaraciones de tres testigos de 65, 74 y 72 años, quienes manifestaron que desde que tenían uso de razón, les constaba la posesión que tenían los pobladores de Huitziltzingo de los terrenos en litigio, además de poseer los títulos de estos, a diferencia de los vecinos de Chimalpa que carecían de ellos.

En la resolución del juzgado de distrito del Estado de México, se señaló que la declaración de los testigos hacía plena prueba conforme a la ley 32, título 16, partida tercera, ya que no había sido desvirtuada de ninguna forma. Cabe precisar que para este periodo es común observar en las resoluciones judiciales algunas citas al derecho novohispano, particularmente a esta partida, puesto que regulaba lo relativo a los testigos.

Además de que los quejosos contaban con títulos de adjudicación y se hallaban en la posesión de los terrenos "que la jefatura política les prohibió sembrar" y tal orden era contraria a la constitución, pues "en las atribuciones de los jefes políticos, no está la de poder suspender o prohibir los trabajos que se hagan en la propiedad particular, ni en general intervenir en cuestiones sobre propiedad o posesión".

Y agregó que la actuación de la responsable no se justificaba pues el conflicto que trataba de evitar pudo hacerlo "sin salir de los limites constitucionales, bien con simples medidas de policía, o bien dando aviso al juez competente, a fin de que este dictara las providencias del caso", por lo que se había violado la fracción primera del artículo 16 constitucional y en el caso de la actuación del Juez de Primera Instancia se habían violado

las garantías contenidas en el artículo 27 constitucional. El juez de distrito otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión y remitió el juicio a la SCJN para su revisión. Desafortunadamente se desconoce la resolución dada por la Suprema Corte, no obstante, queda constancia del uso del juicio de amparo como un medio de defensa utilizado por algunos de los pueblos del Estado de México.

1.1.5 El juicio de amparo en los códigos federales de 1897 y 1908

Para 1897, el juicio de amparo quedó regulado en el *Código de Procedimientos Federales* (CPF),[64] del 6 de octubre. Su propósito fue reunir todos los procedimientos de carácter federal en un solo corpus. Fue así como el amparo quedó comprendido del artículo 745 al 849. En lo general, el procedimiento mantuvo la misma estructura que en la ley de 1882, en su momento señalaron Rojas y Pascual que "dio más fijeza y concisión a muchos preceptos, mejoró en lo general la forma jurídica del juicio é introdujo algunas novedades tan dignas de atención como de aplauso".[65]

Algunas de esas innovaciones se dieron en cuanto a los sujetos facultados para interponer la demanda de amparo, ya que se agregó a la mujer casada y al menor, los cuales podían solicitar amparo "aun sin intervención de su representante legítimo, siempre que el acto reclamado afecte de algún modo su integridad personal". Y agregaba el artículo que con respecto a la mujer casada si tenía un interés opuesto al del marido, tratándose de la propiedad o posesión de bienes, podía "intentar y seguir el juicio sin la licencia de aquel ni autorización judicial" (art. 746). En los juicios de amparo en materia agraria la participación de las mujeres fue limitada, pues de la documentación consultada se desprende que generalmente aparecen como parte cuando han quedado viudas y siguen la sucesión testamentaria de sus esposos. Aun así, es claro que también acudieron a la justicia federal en defensa de sus propiedades, como se muestra en algunos amparos que se reconstruyen más adelante.

---

[64] *Código de Procedimientos Federales*, pp. 152-175. Este ordenamiento en su capítulo del juicio de amparo fue objeto de varias críticas y propuestas de reforma. En 1906, el Colegio de Abogados de México, convocó a un concurso para presentar trabajos que analizaran dicha figura, de los nueve trabajos presentados se eligieron los cinco más destacados elaborados por Miguel Bolaños Cacho y Manuel Olivera Toro, Rodolfo Reyes, Roberto A, Esteva Ruiz, Antonio Ramos Pedrueza y Antonio Díaz Soto y Gama, véase *Indicación motivada*.
[65] ROJAS Y PASCUAL, *El amparo*, p. 148.

Una segunda novedad, es lo destacado por Ignacio Burgoa en su tratado sobre el juicio de amparo con respecto al esbozar el concepto de tercero perjudicado.[66] Al igual que en las leyes anteriores, solo se consideraba como partes al agraviado y al promotor fiscal y se otorgaba la facultad de rendir pruebas y alegatos a la autoridad responsable, ahora se daba este mismo derecho a la parte contraria del quejoso en un negocio judicial del orden civil (art. 753).

Con esta reforma se incorporaba a aquellas personas que pudiesen resultar afectadas por la sentencia de amparo, tal y como ocurrió con los solicitantes de tierras en la primera etapa de la reforma agraria del siglo XX, una vez que los propietarios expropiados recurrieron al juicio de garantías y en caso contrario, cuando los beneficiados fueron los solicitantes de tierras, como se verá en el siguiente capítulo.

Por lo demás, en el CPF se mantuvieron los mismos principios y actos que hasta ese momento regían el juicio de garantías.

El CPF tuvo una vigencia de 11 años, hasta que en diciembre de 1908 se promulgó el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). Este ordenamiento fue aprobado por el presidente Porfirio Díaz el 26 de diciembre de 1908, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para reformar el CPF. El amparo quedó comprendido entre los artículos 661 al 796.

Dentro de los cambios importantes a este ordenamiento, resalta que la autoridad responsable fue considerada como parte del juicio, aspecto fundamental en esta investigación para entender la participación de las autoridades agrarias en los amparos; además, hizo aparición el Ministerio Público Federal (MPF), sustituyendo la figura del promotor fiscal, quien también tendría un papel destacado en los juicios constitucionales del siglo XX. En cuanto a los amparos derivados de negocios civiles, es decir, aquellos que se interpusieran contra las resoluciones emitidas por los jueces estatales, se fijó como única instancia admitiéndose exclusivamente contra sentencias definitivas y una vez que se hubieran agotados los recursos ordinarios. En relación con la suspensión del acto reclamado, se hizo la diferencia entre la de oficio y la solicitada a instancia de la parte agraviada. Un último elemento para considerar fue el énfasis en el papel de la jurisprudencia emanada de la propia

[66] BURGOA, *El juicio*, p. 140.

Corte.[67] Con estas modificaciones, el procedimiento de amparo se iba perfeccionando y poco a poco adoptaba las características que lo distinguieron durante gran parte del siglo XX.

Entre los motivos que se presentaron para la reforma, se destacó el abuso que se había hecho de esta figura en los negocios judiciales del orden civil, el uso "que de él habían hecho muchos litigantes para lograr el retardo de la justicia"[68] y el cúmulo de expedientes que tenía pendientes de resolver la Corte.[69] Vale la pena mencionar que similares argumentos se exhibieron unos años después para prohibir el amparo en materia agraria en 1931 y en algunas de las reformas que se realizaron a la Suprema Corte.

Un caso del uso del amparo en este periodo, también originado de un juicio de apeo y deslinde, se presentó en octubre de 1901, cuando vecinos del pueblo de Tajalpam, Estado de México, presentaron demanda de amparo señalando como autoridades responsables al gobernador del estado y al jefe político de Tenango, quienes se habían negado a solicitar al juzgado de distrito el deslinde de unos terrenos propiedad de dicho poblado. La negativa para llevar a cabo las diligencias se basó en el citado decreto de 1878, que se refería "a los casos en que traten de entrar en litigio dos pueblos", argumentando los pobladores que dicha circunstancia no existía dado que solo solicitaban fijar los límites de sus tierras.[70]

En su informe justificado, el gobernador expresó que los terrenos en disputa eran propiedad de la nación y no de los quejosos, no obstante, había acordado que acudieran al jefe político de Tenango "para que se formara el expediente respectivo si tenían algunos derechos que ejercitar contra los vecinos de los pueblos a que se referían" (Tenango del Valle, San Francisco Tepexozuca, Santa María Xoquingo, San Lucas Tepemajalco). Se resaltó en el escrito que esa era la vía idónea que había adoptado el gobierno para ese tipo de asuntos, "pues en ese expediente que ante el jefe político se instruye, se agregan los títulos y documentos que presentan, sirviendo para que el gobierno dicte la resolución correspondiente sin necesidad de litigio, los cuales siempre procura evitar".

Por su parte, el agente del Ministerio Público destacó que "el acuerdo motivo del amparo se encontraba ajustado a la ley, sin atacar derecho alguno, lo cual lo comprueba el

---

[67] SOBERANES Y MARTÍNEZ, *Apuntes*, p. 362-366.
[68] COSSÍO, *La justicia prometida*, p. 98.
[69] Para las fechas en que se discutía la iniciativa de reformas, se habla de 4 000 expedientes pendientes de resolución, citado por COSSÍO, *La justicia prometida*, p. 99.
[70] AHSCJN, TJA, 2764, 1901, fs. 4-4v.

hecho de no haber podido el promovente designar la garantía violada, debiendo por lo mismo negarse el amparo imponiéndose a los quejosos cuarenta pesos de multa". El juez de distrito retomó el pedimento del ministerio público, negó el amparo e impuso la multa solicitada. Una vez el expediente en revisión por la Suprema Corte, confirmó la sentencia del de distrito negando la protección de la justicia federal y disminuyendo la multa a $10.

Como puede observarse, en los años previos al estallido de la revolución mexicana el juicio de amparo como un medio para canalizar los conflictos por tierras había cobrado un lugar importante, por lo que a pesar de no existir el derecho agrario producto de la reforma agraria del siglo XX, se pueden pensar estos juicios como un antecedente inmediato del amparo en materia agraria.

1.1.6 El juicio de amparo en la constitución de 1917

Durante la revolución mexicana la labor del Poder Judicial Federal fue inestable. En entidades donde se libraron las principales acciones de guerra como Chihuahua, Durango, Morelos y Nuevo León, los juzgados de distrito vieron suspendidas sus labores y para el mes de agosto de 1914 cesaron las labores de la Suprema Corte. No obstante, de acuerdo con el informe presentado por el presidente de la corte, el licenciado Manuel Olivera Toro, en mayo del mismo año, aclaró que la justicia federal había "podido funcionar en toda la plenitud de sus facultades constitucionales, allí donde ha imperado el orden", prueba de ello había sido el número de amparos que ingresaron al máximo tribunal del país lo cual demostraba "de un modo absoluto la confianza que al pueblo mexicano inspira el ejercicio de la acción que otorgan los artículos 101 y 102 del Pacto Federal".[71]

Sin duda alguna, para la primera década del siglo XX el juicio de amparo se había convertido en una figura importante dentro del sistema jurídico mexicano y formaba parte de la cultura jurídica de la época, por lo que no pasó desapercibido por la fracción triunfadora de la revolución.

El 1° de diciembre de 1916, en su discurso de apertura al congreso constituyente, Venustiano Carranza al hacer referencia a la violación de los derechos individuales realizada por los diversos gobiernos, criticó las leyes que habían regulado el amparo por "embrollar la marcha de la justicia", por el número de expedientes que habían acumulado los tribunales

[71] OLIVERA, *Informe*, p. 3.

federales, así como por haberse "convertido en arma política" y en el "medio apropiado para acabar con la soberanía de los estados", pues quedaron sujetos a revisión de la Suprema Corte los actos de las autoridades de aquellos.[72]

No obstante, precisó que existían un "sinnúmero de amparos por consignación al servicio de las armas" y contra las arbitrariedades cometidas por los jefes políticos "que fueron, más que los encargados de mantener el orden, los verdugos del individuo y de la sociedad", aunque el poder judicial no había querido o no había podido reprimir esos abusos.[73]

Finalmente, se refirió al amparo en los juicios civiles al que "el pueblo mexicano está ya tan acostumbrado", por lo que sería "no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, fácil y expedito para que sea efectivo".[74]

Abiertas las sesiones del constituyente, la figura del juicio de amparo fue discutida y aprobada en los artículos 103 y 107 constitucionales. Del amplio debate que se presentó, si bien no se tocó el amparo relacionado con la cuestión agraria, vale la pena mencionar el voto particular presentado por Heriberto Jara e Hilario Medina sobre el artículo 107 que regulaba el amparo contra sentencias definitivas pronunciadas en juicios civiles y penales.

A consideración de los dos diputados, el aprobar este amparo nulificaba "la administración de justicia de los tribunales comunes de los Estados, porque la sentencia pronunciada por éstos será atacada ante la Corte mediante el amparo; y sea que este alto tribunal confronte o revoque aquel fallo, tendrá el derecho de revisión sobre la justicia local, produciendo el desprestigio de ésta", por lo que proponían que fueran los tribunales estatales quienes resolvieran en definitiva estos asuntos en ejercicio de su soberanía,[75] de lo contrario, el juicio de garantías se convertiría en una instancia más y peor aún vulneraría la soberanía de los estados.

El punto presentado por Jara y Medina no tuvo eco y en el artículo 103 se estableció la facultad de los tribunales de la federación para resolver las controversias que se suscitaran por leyes o actos de la autoridad que violaran las garantías individuales, por leyes o actos de

---

[72] *Diario de los debates*, t. I, p. 389.
[73] *Diario de los debates*, t. I, p. 392. Algunos ejemplos de los amparos promovidos contra los jefes políticos en el Estado de México pueden verse en FALCÓN, *El Jefe Político*, pp. 473-474, 653-656.
[74] *Diario de los debates*, t. I, p. 393.
[75] Para profundizar en el debate de estos artículos véase *Diario de los debates*, t. III, pp. 263-310.

la autoridad federal que pudieran vulnerar o restringir la soberanía de los estados y por leyes o actos de las autoridades de los estados que invadieran la esfera de la autoridad federal, retomándose lo estipulado en el artículo 101 de la constitución de 1857.

Mientras que en el artículo 107 se establecieron los principios que regirían el juicio constitucional: seguirse a instancia de la parte agraviada, relatividad de las sentencias, las reglas de procedencia del amparo contra resoluciones definitivas en juicios civiles y penales, la facultad del juez de distrito para conocer de amparos promovidos contra actos de autoridades distintas a la judicial, la suspensión del acto reclamado y los efectos de la ejecución de la sentencia de amparo.

Pero la principal aportación del constituyente del 17 al juicio de amparo, fue el precisar su "doble naturaleza jurídica": como "juicio constitucional (el indirecto)" y como "recurso extraordinario (el directo)", con lo que se "puso fin al debate sobre la naturaleza del amparo que se gestó desde el siglo XIX y que tenía repercusiones en su procedencia".[76] Dicho de otro modo, la Suprema Corte tuvo una doble competencia, por un lado, "como revisora" de las sentencias dictadas por los jueces de distrito y por otro, "como conocedora en única instancia de los juicios de amparo contra las sentencias definitivas recaídas en juicios civiles o penales".[77]

Un par de años después se promulgaría la primera ley reglamentaria del juicio de amparo en el siglo XX que a continuación se revisa.

1.1.7 La ley de amparo de 1919

Antes de describir los aspectos más relevantes de la ley de amparo de 1919, vale la pena señalar la estructura del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomando en cuenta que fue la instancia ante la cual se desahogaba el juicio que aquí se estudia.

De acuerdo con la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* dada el 2 de noviembre de 1917 y publicada el 23 del mismo mes, la SCJN se integraría por 11 ministros que sesionarían en pleno (art. 2), bastando ocho para constituirse y funcionar (art. 3). Dentro de sus tantas atribuciones se encontraba la de designar por mayoría absoluta de votos a los

[76] *Las propuestas de reforma*, p. 53.
[77] BURGOA, *El juicio de amparo*, p. 142.

jueces de distrito (art. 12, fracción III), así como fijar la residencia de dichos juzgados (art. 12, fracción IX).

Los juzgados de distrito estarían integrados por el juez, un secretario, uno o dos actuarios y los demás empleados que determinara la ley (art. 20). Para ser juez de distrito se requería "ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos; mayor de edad; abogado con título expedido por autoridad o corporación legalmente facultada para el efecto; tener dos años cuando menos de ejercicio de la profesión y ser de buena conducta" (art. 21).

Para estos años el PJF quedó integrado por 9 circuitos, siendo el primer circuito conformado por dos juzgados con sede en la ciudad de México, un juzgado establecido en Cuernavaca, Morelos y; el juzgado de distrito del Estado de México, establecido en Toluca (art. 28, fracción I), con jurisdicción en la entidad del mismo nombre (art. 29). Basta recordar que existían juzgados que ejercían jurisdicción en alguna porción de su territorio como el de Oaxaca que excluía los distritos de Juchitán, Tehuantepec y Tuxtepec, que junto con los cantones de Minatitlán y Acayucan del estado de Veracruz constituían un distrito.

La duración de los jueces de distrito (al igual que la de los magistrados de circuito) en su cargo era de cuatro años y los nombrados a partir de 1923 ejercerían el puesto de manera indefinida (art. 44). Quedaba a cargo de los magistrados y jueces de distrito nombrar a los funcionarios y empleados que prestarían "sus servicios en las oficinas que dependen de cada uno de aquéllos"; dichos nombramientos no podían recaer en ascendientes o descendientes "ni en sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad o por afinidad" (art. 48).

Para efectos de este apartado y dado lo extenso del nuevo ordenamiento, sólo se realiza una breve descripción de la ley de amparo de 1919,[78] destacando los aspectos generales del proceso y tratando de relacionarlos con la materia agraria, por ser la norma vigente en los casos que se analizan en los capítulos 2 y 3.

La *Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal*,[79] compuesta de 165 artículos más 4 transitorios tuvo una vigencia de 17 años, hasta que en 1936 se promulgó una nueva ley en la materia.

---

[78] Este ordenamiento fue discutido por la Cámara de Diputados en los meses de junio y julio de 1919. Para un resumen de los principales artículos debatidos véase CABRERA, *La Suprema Corte… (1917-1920)*, pp. 51-54.

[79] A efecto de no reiterar citas, los artículos que se mencionan en este apartado corresponden a la ley reproducida en SOBERANES, *Fuentes para la historia*, pp. 280-332.

En la ley de 1919 se retomaron las causas para interponer el amparo que se han comentado, para el caso que nos ocupa, por la violación de leyes o actos de alguna autoridad que violara las garantías individuales (art. 1); así como la facultad de ser promovido y seguirse por la parte perjudicada y las sentencias solo se ocuparían de amparar a las personas que promovieran el amparo. Se consideraba como partes al agraviado o quejoso, a la autoridad responsable, al Ministerio Público Federal (MPF) y a la contraparte del quejoso, es decir a la persona que hubiera gestionado el acto contra el que se pedía amparo. Por ejemplo, en un caso de dotación de tierras, si el hacendado promovía el amparo, este se convertía en el quejoso; las autoridades responsables podían ser las comisiones locales o la nacional, el gobernador y el presidente de la república; se daba intervención al MPF para que emitiera su opinión y; los pueblos dotados se convertían en el tercero perjudicado.

Una novedad que se incorporó fue la definición de autoridad responsable como aquella que "ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en una resolución judicial o administrativa, se tendrá también como responsable a la autoridad que la haya dictado" (art. 12). En el caso de las resoluciones en materia agraria, las autoridades responsables podrían ser el Comité Particular Ejecutivo (CPE), las comisiones locales, el delegado de la Comisión Nacional Agraria (CNA) en el estado, la CNA, el gobernador y el ejecutivo federal.

Otra innovación y que se puede considerar un reflejo de los cambios que sufrió esta figura, fue lo establecido por el artículo 19 que señaló que cuando en un juicio la queja se presentara "por dos o más personas, ejercitando un mismo derecho, deberán litigar unidas o tener un solo representante común que elegirán ellas mismas". Procesalmente hablando, este artículo fue relevante ya que posibilitaba sobre todo a los solicitantes de tierras el acudir al litigio de forma colectiva, tal y como ocurrió en uno de los casos que se presenta en el siguiente capítulo y que es un botón de muestra de la importancia de esta figura en materia agraria.

El juicio de amparo continuó teniendo el carácter formal y técnico que se comentó en el apartado anterior. La demanda y otras promociones del quejoso debían "hacerse forzosamente por escrito" con excepción de los casos en que se tratara de ataques a la libertad personal, a la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,

la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental), en los que se podía solicitar por comparecencia (art. 22).

Era competente para conocer de la demanda de amparo derivada de un acto en materia agraria (administrativa) el juez de distrito,[80] en cuya jurisdicción se dictara u ordenara, se ejecutara o tratara de ejecutarse, "la ley o acto que lo motiven" (art. 29). En caso de que en el lugar no existiera juez de distrito, los jueces de primera instancia estaban facultados para "recibir la demanda de amparo, suspender el acto reclamado" en los términos prescritos por la ley y "para practicar las diligencias urgentes, dando cuenta de ellos inmediatamente al Juez de Distrito respectivo" (art. 31).[81]

También eran competentes los jueces de paz, alcaldes o conciliadores que únicamente recibían la demanda de amparo y resolvían el incidente de suspensión contra actos del Juez de Primera Instancia, en los lugares en donde no existiera juzgado de distrito. Practicadas esas diligencias, el expediente debía remitirse al del distrito correspondiente (art. 32).

Con respecto a los impedimentos y excusas que podía tener un juez para conocer de un asunto, la ley contempló cuatro supuestos de los cuales destaca el caso de cuando ante un juez de distrito se promoviera un juicio de amparo del que debiera conocer otro, el juez que se considerara incompetente tenía que declararlo, comunicando su resolución al que estimara competente, acompañando la demanda de amparo y enviando el expediente a la Corte, la cual determinaba al juez competente, le enviaba los autos e informaba de su resolución al declarado incompetente (art. 35 fracción IV). De acuerdo con las fuentes consultadas, está práctica fue recurrente por parte de los propietarios afectados, posiblemente por el desconocimiento de la instancia idónea para promover el amparo, por la distancia entre el lugar en que residían y el sitio en que se encontraba el juzgado o como medida para hacer más largo el trámite y seguir aprovechando los productos de sus tierras.[82]

---

[80] De acuerdo con la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* del 2 de noviembre de 1917, este poder quedaba constituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito, el Jurado Popular, los Tribunales de las entidades federativas y del Distrito Federal y Territorios. En materia agraria la principal participación fue del Juzgado de Distrito quien veía el asunto en primera instancia y la Suprema Corte de Justicia en segunda.

[81] Tal fue el caso de los amparos promovidos por Tomás Galarza, ante el Juez de Primera Instancia del Juzgado mixto de Chalco, contra resolución presidencial que otorgaba tierras a vecinos de San Lorenzo Chimalpa, AHCCJT, AI, exp. 344/1925 y por Ángel Arratia ante el Juez de Primera Instancia de Texcoco, contra la dotación definitiva de tierras otorgada al pueblo de Atlatongo, AHCCJT, AI, exp. 14/1926.

[82] Algunos ejemplos de este tipo de asuntos son los siguientes amparos: Antonio Díaz Sánchez contra la resolución presidencial a la Magdalena Chichicaspa, AHCCJT, AI, exp. 197/1925; Saturnino González contra

En el artículo 43 se establecieron las causas de improcedencia de un amparo: contra actos de la Suprema Corte; contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; contra actos que hubieran sido materia de una ejecutoria en otro amparo; contra actos consumados de un modo irreparable; cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado; cuando en los tribunales ordinarios estuviere pendiente un recurso que tuviera por objeto confirmar, revocar o enmendar el acto reclamado; en los casos en que la improcedencia proviniera de alguna disposición de la ley y; contra actos consentidos entendiéndose como tales "aquellos contra los que no se haya interpuesto el amparo dentro de los quince días siguientes al en que se hayan hecho saber al interesado". Esta última causal se presentó en el año 1926, en el amparo promovido por pobladores de San Pedro Xalostoc contra la resolución del gobernador que otorgó tierras a San Juan Ixhuatepec, ya que argumentaron se habían tomado tierras comunales que les pertenecían. El juez de distrito sobreseyó por no interponerse en tiempo.[83]

Por su parte, las causas de sobreseimiento eran tres: cuando el actor o quejoso se desistiera de la demanda o bien, se le diera por desistido de acuerdo con la ley; cuando muriera durante el juicio si la garantía violada afectaba solo a su persona y; cuando durante el juicio sobreviniesen o aparecieren alguna de las causas de improcedencia (art. 44). De estos tres supuestos el que aparece mayormente en las fuentes consultadas fue el desistimiento del promovente del amparo tanto ante el juez de distrito como ante la Suprema Corte, las causas fueron variadas.[84]

En materia agraria, ambas figuras, improcedencia y sobreseimiento, fueron de especial importancia por la manera en que los asuntos fueron resueltos por los jueces de distrito y los ministros de la Suprema Corte, como queda constancia en los cuadros anexos de amparos en revisión que acompañan esta investigación y cuyo análisis se verá en los siguientes capítulos.

---

la dotación presidencial de tierras a San Luis Tlatilco, AHCCJT, AI, exps. 379/1925 y 395/1925; Ignacio Fernández por la resolución presidencial que dotó de tierras a Santa Cruz Acatlán, AHCCJT, AI, exp. 358/1925; José Luis Cuevas por la dotación provisional al pueblo de Santiago Occipaco, AHCCJT, AI, exp. 330/1927, San Juan Totoltepec, AHCCJT, AI, exp. 335/1927 y Los Remedios, AHCCJT, AI, exp. 337/1927.

[83] AHSCJN, AR, exp. 2037/1926.

[84] Son los casos de Carlos B. Zetina contra la resolución del gobernador que dotaba tierras a San Mateo Oztacatipan, AHSCJN, AR, exp. 1689/1925; Rafael Ortiz de la Huerta contra las resoluciones presidenciales favorables a vecinos de San Francisco Zacacalco, AHSCJN, AR, exp. 1283/1926, Tlapanaloya, AHSCJN, AR, exp. 2051/1926, Jilotzingo, AHSCJN, AR, exp. 3172/1926 y Hueypoxtla, AHSCJN, AR, exp. 57/1927.

Adentrándose al procedimiento de amparo, la demanda se continuaba tramitando contra la autoridad que hubiere ejecutado o tratare de ejecutar "el acto que se reclama, contra la autoridad de que haya emanado o contra ambas" (art. 46).

Se retomó lo relativo a la petición del amparo vía telegráfica[85] y el peticionario debía ratificarla por escrito dentro de los tres días siguientes a su solicitud, en caso de no hacerlo se tendría por no interpuesta (arts. 48 y 49).

Una de las figuras más relevantes en el juicio de amparo fue y sigue siendo, la suspensión del acto reclamado, lo que significa dejar las cosas en el estado en que se encuentran en tanto no se resuelva en definitiva el proceso. Esta podía darse de oficio tratándose de pena de muerte o destierro y en caso de que al consumarse el acto se haría físicamente imposible poner al quejoso en el goce de la garantía individual violada. La otra forma de procedencia era a solicitud de la parte interesada (arts. 54-55).

Una vez que el juez tenía conocimiento de la solicitud de suspensión, solicitaba a las autoridades responsables un informe sobre los actos que se le imputaban y citaba a una audiencia en la que después de escuchar al quejoso, al Ministerio Público y al tercero perjudicado, resolvía sobre la procedencia o no de la suspensión. Ante esta resolución procedía el recurso de revisión que se interponía ante el juez de distrito, quien remitía los autos a la Suprema Corte (arts. 59 y 65). En los ejemplos que se presentan más delante, se omite lo relativo al incidente de suspensión, puesto que, aunque en algunos casos se les otorgó a los propietarios, en el recurso de revisión la Corte los revocó sobreseyendo por tratarse de posesiones provisionales que podían ser revisadas por la CNA y el presidente de la república o de resoluciones presidenciales que contaban con un recurso establecido en la ley agraria del 6 de enero, más adelante se profundiza en estos dos aspectos.

Tratándose el juicio de amparo de un procedimiento formal, la legislación exigía se presentara la demanda ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se ejecute o tratare de ejecutar la ley o acto reclamado "expresando con toda claridad y precisión el nombre del quejoso", para el caso de los asuntos administrativos como lo era la cuestión agraria, se debía señalar el domicilio del tercero perjudicado, así como la autoridad contra la que se dirigía la queja y la fracción del artículo primero que servía de fundamento a la demanda, en este caso

[85] Fue el caso del amparo promovido por Norberto Meléndez contra la resolución del gobernador que otorgó tierras al pueblo de San Luis de las Peras, AHSCJN, AR, exp. 4190/1925.

señalando la garantía o garantías individuales violadas (art. 70), que en los asuntos de esta materia se referían específicamente a los artículos 14 (nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos), 16 (nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento) y 27 (que regulaba lo relativo a la cuestión agraria) de la constitución.

Recibida la demanda, el juez la examinaba y si encontraba "motivos manifiestos e indudables de improcedencia", como podría ser que el acto reclamado fuera una sentencia de amparo, debía desecharla sin suspender el acto reclamado (art. 71). Si encontraba alguna irregularidad o no se precisaba el acto o actos que se reclamaban, el juez exigía al quejoso la aclaración procedente y en caso de que no se realizara, informaba al Ministerio Público para que a partir de su dicho diera por admitida o desechada la demanda. Ante esta resolución procedía el recurso de revisión (art. 72).

Si el juzgador no encontraba alguna causa de improcedencia, daba por admitida la demanda, solicitaba un informe a las autoridades responsables (que debían rendir en un plazo de tres días) y fijaba fecha para la audiencia, que se debía llevar a cabo dentro de los siguientes 15 días. En caso de que las autoridades señaladas como responsables no rindieran el informe, se estableció la presunción de ser cierto el acto que se reclamaba (art. 73). Tratándose de los amparos de carácter administrativos se notificaba al tercero perjudicado para que acudiera al juicio si le convenía (art. 74). En la vida cotidiana de los juzgados, estos términos difícilmente se cumplieron.

Al inicio de la audiencia en la que se resolvía el amparo, se leía la demanda y los informes justificados, se recibían las pruebas de las partes, se oían sus alegatos y el juez pronunciaba su sentencia (art. 76). De ahí que en los expedientes se haga referencia de manera indistinta a esta como la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia o audiencia de ley.

En estos juicios se podían presentar toda clase de pruebas, pero en su mayoría y por el tipo de asuntos aquí tratados, se ofrecían documentales como: las resoluciones del gobernador y del ejecutivo federal, planos, contratos de distinto tipo, escrituras, entre otros documentos que pueden ser de utilidad para profundizar en la problemática agraria del

momento. Desafortunadamente no todos los expedientes cuentan con el total de la documentación mencionada y únicamente se menciona que en algún momento fueron exhibidos por las partes interesadas.

Los funcionarios o autoridades tenían la obligación de expedir las copias que solicitaran las partes "para exhibirlas ante el Juez de Distrito, pero si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte que haya pedido la copia ocurrirá quejándose de la falta y pidiendo que se prorrogue la audiencia por un término que no podrá exceder en ningún caso de diez días" (art. 79).[86] Cuestión que fue recurrente en algunos de los amparos analizados en esta investigación.

Cuando el quejoso ofrecía la prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, debía anunciarlo dos días antes de la audiencia "exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de los cuales deben ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos" (art. 82). Se entregaba una copia de estos a las partes para que formularan verbalmente o por escrito repreguntas en la audiencia (un ejemplo de este tipo de interrogatorios puede observarse en el anexo 5).

En caso de que en la audiencia no se pudieran recibir todas las pruebas o "por terminar las horas de despacho no concluyeren los alegatos", la audiencia se suspendía y debía continuar al día siguiente (art. 77). En la práctica judicial cuando se difería una audiencia, difícilmente se cumplía con este precepto pues esto estaba condicionado por varios factores como el nombramiento de los peritos que participarían;[87] las labores del juzgado, dado que en ocasiones se practicaban diligencias urgentes de otras ramas como la penal;[88] la disponibilidad del juez, pues en caso de enfermedad también se llegó a diferir la audiencia;[89]

---

[86] Tal fue el caso del amparo promovido por José Luis Cuevas contra la posesión provisional al pueblo de San Juan Totoltepec, aquí el delegado estatal de la CNA informó al juez de distrito que los abogados del quejoso no habían recogido las copias solicitadas lo cual hizo de su conocimiento "para evitar el que el promovente del amparo, so pretexto de no haber recibido los mencionados documentos, pida de nuevo se difiera la audiencia señalada", AHCCJT, AI, exp. 335/1927, f. 117.

[87] Luis R. Ruiz contra la resolución presidencial que beneficio a pobladores de San Bartolo Naucalpan, AHCCJT, AI, exp. 111/1925; Roberto Martínez contra la resolución presidencial que otorgó tierras a vecinos de San Juan Ixhuatepec, AHCCJT, AI, exp. 67/1926; Ángel Arratia contra la dotación presidencial a Atlatongo, AHCCHT, AI, exp. 14/1926 y; José Luis Cuevas por la dotación provisional al pueblo Los Remedios, AHCCJT, AI, exp. 337/1927.

[88] José Luis Cuevas contra la dotación provisional al pueblo de Los Remedios, AHCCJT, AI, exp. 337/1927, f. 81. Algo similar ocurrió en el juicio iniciado por el mismo propietario contra la posesión definitiva dada a vecinos de Santiago Occipaco, AHCCJT, AI, exp. 330/1927.

[89] Antonio Díaz Sánchez contra la resolución provisional a San Esteban Huitzilacasco, AHCCJT, AI, exp. 43/1925.

la ausencia del Ministerio Público, ya que por el exceso de carga de trabajo en ocasiones manifestaban no haber tenido "tiempo para estudiar con detenimiento" los expedientes del juicio, lo que los limitaba para "presentar las pruebas que a los intereses de su representación" convenían[90] o; porque el funcionario que la presidia no contaba con facultades para resolver.[91]

La sentencia dictada por el juez debía contemplar con "brevedad, precisión y claridad, en párrafos separados", los hechos que daba por probados, así como los fundamentos legales que tenía para declarar si era o no constitucional el acto materia del juicio. Al final de esta, se debía manifestar con claridad cuál era el acto reclamado por el que se negaba o concedía el amparo al quejoso, quedando "terminantemente prohibido usar en la sentencia que recaiga en el juicio de amparo la frase: se concede amparo al quejoso contra los actos de que se queja" (art. 78). Si bien en los documentos consultados no se encontró alguna sentencia con esta frase, es probable que algunos juzgadores la hubieren utilizado en sus resoluciones.

Si el juzgador declaraba improcedente el amparo o lo negaré por haberse interpuesto sin motivo, podía imponer al promovente, a sus representantes o abogado, o ambos, una multa de entre diez y quinientos pesos.[92] La misma ley aclaraba que se consideraba que un amparo había sido interpuesto sin motivo "cuando ninguna prueba se rinda, siempre que no tenga el promovente a su favor la presunción que resulta de la falta del informe, o cuando aparezca, según prudente apreciación, que sólo se interpuso el amparo con el fin de dilatar de mala fe la ejecución del acto" (art. 85).

Ante la sentencia del juez de distrito procedía el recurso de revisión, el cual se podía tramitar ante el mismo juez y este remitía el expediente a la Corte o bien, directamente a la SCJN, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta (art. 86). En el escrito en

---

[90] José Luis Cuevas contra la posesión definitiva dada a vecinos de Santiago Occipaco, AHCCJT, AI, exp. 330/1927, f. 80 y en el amparo promovido por Manuel Anaya contra la resolución presidencial que dio tierras al pueblo de Cuanalán, el agente del Ministerio Público designado para participar manifestó por escrito que no le era "posible ocurrir a ella en virtud de tener asuntos urgentes en el ramo penal", AHCCJT, AI, exp. 168/1925, f. 54.

[91] En el juicio de José Luis Cuevas contra la posesión definitiva dada a vecinos de Santiago Occipaco, el secretario del juzgado presidio la audiencia de ley y manifestó que no contaba con facultades "para fallar en definitiva", por lo que difirió la audiencia, AHCCJT, AI, exp. 330/1927, f.135. Algo similar ocurrió en el amparo promovido por Saturnino González contra la dotación presidencial a San Luis Tlatilco, AHCCJT, AI, exp. 379/1925.

[92] Un caso de esto fue la multa de $40 impuesta al apoderado de Saturnino González en el amparo promovido contra la resolución presidencial que otorgó tierras al pueblo de San Luis Tlatilco, AHCCJT, AI, exp. 395/1925, f. 36.

que se solicitaba la revisión, se debían expresar los agravios que al recurrente causaba la sentencia (art. 87), además de ir acompañado de las respectivas copias de este, una para el expediente y las demás para cada una de las otras partes (art. 88).

Al tratarse de un procedimiento tan técnico, la falta de copias fue motivo para desechar el recurso, tal y como ocurrió en el amparo promovido por Luis R. Ruiz contra la CNA y otras autoridades por ordenar a los vecinos de San Bartolo Naucalpan, dispusieran de unos magueyes que se encontraban en los terrenos expropiados. La Suprema Corte al revisar el escrito del agraviado señaló que, si bien el recurso se había hecho valer en tiempo, no había exhibido dentro del término de ley las copias requeridas, desechándolo "por no haberse interpuesto oportunamente en forma".[93] Lo mismo ocurrió con el recurso de revisión promovido por Antonio Díaz Sánchez, propietario de la hacienda San José de los Leones, del mismo municipio, en el amparo interpuesto por los pueblos de San Antonio Zomeyucan, San Esteban Huitzilacasco y San Luis Tlatilco contra la resolución presidencial que les negó la dotación, caso que se estudia en el siguiente capítulo.

Interpuesto el recurso, el de distrito remitía el expediente original a la Suprema Corte, que al admitirlo señalaba diez días para que los involucrados tomaran apuntes y presentaran alegatos por escrito, pasado este término se corría traslado por diez días al MPF para que formulara lo que estimase conveniente (art. 90).

Transcurrido este tiempo, el máximo tribunal del país debía pronunciar su resolución en los 30 días siguientes (art. 112). La sentencia podía emitirse en tres sentidos: negando, concediendo o sobreseyendo el amparo, dichas resoluciones eran publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación*. Una vez que el juez de distrito era notificado de la sentencia de la Corte, debía darla a conocer a las partes y a la autoridad responsable "para su más pronto y exacto cumplimiento". Si en 24 horas no era cumplida o no estuviere en vías de ejecución, el de distrito "ocurrirá al superior inmediato de dicha autoridad para que hiciera cumplir la sentencia; y si la autoridad ejecutora no tuviere superior, el requerimiento se entendería desde luego con ella misma" (art. 126).

[93] AHSCJN, AR, exp. 2275/1926, f. 10. Otro ejemplo se presentó en el amparo de Alfredo y Manuel Buendía contra la dotación provisional a San Antonio Acahualco, AHSCJN, AR, exp. 4191/1925.

Ahora bien, si alguna de las partes, incluyendo a la autoridad responsable consideraban que el juez, por exceso o por defecto, no cumplía con la ejecutoria de amparo podía ocurrir en queja ante la Corte (art. 129).

Finalmente, otra de las figuras que fueron retomadas en este ordenamiento fue la jurisprudencia, la cual se formaba de las "ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, votadas por mayoría de siete o más de sus miembros", siempre que lo resuelto se encontrara en "cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario" (art. 148). Teniendo un carácter de obligatoria para los "Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios" (art. 149).

La jurisprudencia en materia agraria fue fundamental pues fijó las interpretaciones de la SCJN con respecto a la puesta en práctica de la normatividad en esta rama,[94] a continuación, tres criterios que ilustran esta relevancia. En 1919 se definió el carácter administrativo de los trámites de dotación y restitución de tierras, teniendo el presidente de la república "la última palabra en tales asuntos", pudiendo "acudir a los tribunales para reclamarla";[95] en 1927, se ocupó de uno de los requisitos más controvertidos por los propietarios, tanto en el trámite administrativo como en los tribunales federales, la categoría política requerida a los pueblos, la cual estimó que no podía "considerarse como trivial y de mera forma, y para que exista, no basta que de hecho lo reconozcan las autoridades, sino que es indispensable que haya sido expresamente fijada por una ley"[96] y; en 1925, en una tesis sobre dotación de ejidos, estableció que si bien el ejecutivo federal contaba con la facultad de

> resolver sobre si los pueblos tienen, o no, necesidad de tierras, y respecto de la superficie que sea indispensable para satisfacer esa necesidad, tal facultad no es omnímoda, ni puede ser ejercitada arbitrariamente, toda vez que las leyes agrarias fijan las bases de equidad y los procedimientos que han de seguirse para que aquel funcionario ilustre su criterio y proceda legalmente al otorgamiento de la dotación*; y precisamente las violaciones legales que desde el punto de vista se cometan, son las que han servido de base las ejecutorias en que se ha*

[94] Del 1° de junio de 1917 al 31 de julio de 1922, la Suprema Corte había emitido aproximadamente 170 resoluciones en materia agraria que fueron compiladas en MARTÍNEZ, *Los fallos pronunciados*. Algunas de las más significativas en el tema pueden verse en BURGOA, *El amparo*, pp. 35-46.
[95] *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo V, octubre de 1919, p. 649.
[96] *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XXI, agosto de 1927, p. 336.

> *concedido el amparo*, por no estar justificado que los pueblos tengan necesidad de todas las tierras que solicitan.[97]

Este último argumento fue uno de los principales que tuvo el máximo tribunal del país para otorgar los amparos solicitados por los propietarios, razón por la que se le acusó por diversos actores de la época de ser un freno a la reforma agraria. Más adelante se profundiza sobre este punto.

La importancia de la ley de amparo de 1919 para la reforma agraria es fundamental, ya que durante su vigencia de poco más de 16 años, se llevó a cabo la primera etapa del reparto de tierras y fueron desahogados los juicios promovidos principalmente por los hacendados, hasta su prohibición en 1931, como se verá en el capítulo tres de esta tesis.

1.1.8 La ley de amparo de 1936

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se promulgó una nueva ley de amparo que con distintas modificaciones tuvo una vigencia de 77 años, siendo la que mayor tiempo ha regulado el juicio constitucional, incluyendo los casos de estudio que se presentan en los capítulos cuatro y cinco de esta tesis.

La Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la constitución federal, fue publicada en el *Diario Oficial* el viernes 10 de enero de 1936.[98] En su exposición de motivos, el presidente Cárdenas dejó claro que uno de los motivos para proponer una nueva ley respondía al plan sexenal y a la promesa que había hecho "al pueblo sobre tan interesante materia como la simplificación y adaptación del juicio constitucional de garantías a las modalidades que las leyes revolucionarias y la práctica han venido imprimiendo a nuestra vida jurídica".[99]

Otro de los propósitos de la nueva ley, quizá el principal, fue el reglamentar el amparo en materia del trabajo, hay que recordar que en 1931 se había promulgado la *Ley Federal del Trabajo*, por lo que se buscaba "conjugar el juicio de amparo con las nuevas modalidades que la práctica y las leyes han introducido en las relaciones jurídicas, y de paso para corregir algunos otros defectos que desde antes podían advertirse"[100] en la ley vigente.

---

[97] *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XVII, julio de 1925, p. 230. Las cursivas son mías.
[98] A fin de no ser repetitivo en este apartado, se utiliza la ley publicada en el *Diario Oficial*, viernes 10 de enero de 1936, pp. 15-39.
[99] PALLARES, *Prontuario crítico*, p. 1.
[100] PALLARES, *Prontuario crítico*, p. 2.

De acuerdo con lo señalado, los principales defectos de la legislación de 1919 eran de dos clases: por un lado, los ocasionados por su falta de adaptación a las "nuevas modalidades", provocando el abuso del amparo, "particularmente de la suspensión del acto reclamado" y por otro lado, "los defectos de ordenación de las materias en la Ley, las omisiones y la falta de claridad y, finalmente, el empleo de términos demasiado técnicos para ser comprendidos por quienes, sin tener recursos para hacerse asesorar por abogados, se encuentran en la necesidad de solicitar la protección de la Justicia Federal".[101] Este argumento recuerda lo planteado años atrás por el Partido Liberal Mexicano como se explica en el siguiente apartado.

Siguiendo este argumento, también se señaló el carácter técnico de la figura, que hacía

> casi imposible el claro entendimiento por parte de las clases humildes, cuyos componentes no tienen posibilidad de acudir a juristas que los dirijan para solicitar la protección de la Justicia Federal y, por ello, se hace absolutamente indispensable la adopción de términos que con mayor facilidad pueden ser comprendidos por los ciudadanos, aunque ello no es posible totalmente debido a que en los propios preceptos constitucionales que se reglamentan se usan tecnicismos indispensables, si bien en el proyecto el alcance de cada uno de ellos ha procurado ser explicado del modo más sencillo.[102]

Es necesario mencionar que la promulgación de esta ley no puede entenderse sin los cambios propuestos por Cárdenas al Poder Judicial de la Federación en su conjunto y específicamente al nombramiento de una nueva Suprema Corte de Justicia en 1934, aspecto en el que se profundiza más adelante.

La ley de amparo de 1936 estaba compuesta de cinco títulos y 210 artículos más ocho artículos transitorios. En comparación con las leyes anteriores, esta fue más extensa, pero también con una mayor organización en sus títulos.[103]

---

[101] PALLARES, *Prontuario crítico*, p. 7.
[102] PALLARES, *Prontuario crítico*, p. 11.
[103] El primer título de *disposiciones generales* estableció reglas comunes a los juicios; distinguió entre capacidad y personalidad de las partes; reguló a detalle la forma de hacer las notificaciones; estableció las figuras de la competencia y la acumulación, los impedimentos y los casos de improcedencia del amparo; así como las causas de sobreseimiento; los requisitos de las sentencias; los recursos que podían promover las partes y la forma de ejecución de las sentencias. El título segundo se avocó al amparo promovido ante los juzgados de distrito; el título tercero fijó el procedimiento para del juicio seguido ante la Suprema Corte; el título cuarto reglamentó todo lo relativo a la jurisprudencia de la Corte y; en el título quinto se estableció la responsabilidad que pudieran tener en los juicios de amparo, tanto a los funcionarios que conocieran del juicio, como a las autoridades responsables del acto reclamado.

Dada la extensión de este ordenamiento, y a que en términos generales el procedimiento de amparo ante los juzgados de distrito guardó la misma estructura, únicamente se resaltan las diferencias con su antecesora y las etapas relacionadas con la cuestión agraria.

La primera diferencia de relevancia está relacionada con las partes en el juicio. Si bien en la ley anterior se había establecido como parte a la persona que hubiere gestionado el acto contra el que se pedía el amparo; en la ley de 1936 se estableció de manera explícita la figura del tercero perjudicado, que para el caso que nos ocupa se trataba de "la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo" (art. 5 f. III). En el caso de la autoridad responsable, no distinguió entre quien ejecuta y quien dicta el acto que se reclama, definiendo en términos generales a la autoridad responsable como aquella que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado (art. 11). El quejoso y el Ministerio Público se mantuvieron sin cambios.

La segunda modificación se dio con respecto a las causales de improcedencia. Como se comentó, en la ley de 1919 se establecieron ocho supuestos, mientras que en la de 1936 se aumentaron a 18. Sobresalen los casos en los que no se afecten los intereses jurídicos del quejoso, los actos consumados de un modo irreparable, las resoluciones en materia electoral y los actos de las autoridades distintas de las judiciales, cuando procediera contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual pudieran ser revocados o nulificados. Está ultima causal fue una constante en los juicios en materia agraria (art. 73).

En el caso del sobreseimiento, este procedía cuando el agraviado se desistiera de la demanda; cuando el agraviado muriera durante el juicio, si la garantía reclamada solo afectaba su persona; si durante el juicio aparecía alguna de las causas de improcedencia y; se agregó lo relativo a la inexistencia del acto reclamado o "cuando no se probare su existencia" en la audiencia de ley (art. 74).

Una cuarta modificación que vale la pena señalar corresponde a las causas de interposición del amparo ante los jueces de distrito. La ley de 1919 remitía a los casos previstos por la fracción IX del artículo 107 constitucional y la de 1936 estableció de manera explícita la procedencia: contra leyes, cuando su sola expedición representaré una violación de garantías; contra actos de autoridades distintas de las judiciales o de la juntas de

conciliación y arbitraje, aquí entran las determinaciones de las autoridades agrarias (en estos casos cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podía promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia); cuando se trate de actos de autoridad judicial ejecutados fuera de juicio o después de concluido; contra actos en el juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación; contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afectaran a personas extrañas a él, cuando la ley no estableciera a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pudiera tener por efecto modificarlos o revocarlos y; contra leyes o actos de la autoridad federal o de los estados que invadieran la esfera de alguno de ellos (art. 114).

Finalmente, destaca la integración de un apartado específico acerca de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, la cual únicamente podía referirse a la constitución y las leyes federales (art. 192). A diferencia de la ley anterior, se distinguía entre los criterios de las salas de la corte y el pleno; tratándose de las primeras, las ejecutorias constituían jurisprudencia siempre que se encontraran "en cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario", y que hubieren "sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros"; en cuanto a las ejecutorias dictadas por el pleno, estas podían formar jurisprudencia cumpliendo el mismo requisito, pero que hubieren sido aprobadas por el voto de por lo menos 11 ministros (art. 193). Estos criterios serían publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* (art. 197).

La jurisprudencia tenía carácter de obligatoria para los magistrados de circuito, jueces de distrito, tribunales de los estados, Distrito y Territorios Federales y juntas de conciliación y arbitraje (art. 194) y para que una de las partes la invocara en el amparo, debía hacerlo por escrito, "expresando el sentido de aquella y designando con precisión las ejecutorias que la sustenten" (art. 196).

Por lo demás, el juicio que nos ocupa se siguió tramitando en forma escrita ante los jueces de distrito del lugar en que se cometiera o tratara de cometer el acto reclamado. Admitida la demanda, el juez solicitaba los informes justificados a las autoridades

responsables; notificaba al tercero perjudicado y al ministerio público y; señalaba fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Una vez emitida la sentencia, cualquiera de las partes podía interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estos cambios fueron de gran importancia en el desarrollo del juicio de amparo en materia agraria, pues como se verá en los próximos capítulos, cuando los propietarios de las tierras en disputa acudían a la justicia federal como quejosos, los solicitantes asistían al procedimiento como terceros perjudicados, un porcentaje importante de los juicios se resolvieron por una causa de improcedencia o sobreseimiento y el desarrollo de la jurisprudencia fue trascendental en materia agraria.

Hasta aquí el esbozo del recorrido que siguió la legislación de amparo. Corresponde ahora acercarse al antecedente histórico de la legislación agraria, el otro tema pilar de esta investigación.

1.2 Justicia agraria en la revolución: la visión de las facciones

Ventilar conflictos por la posesión y propiedad de la tierra en los tribunales locales y federales ha sido una práctica utilizada a lo largo de la historia de México, pero en muchos casos sólo se resuelve la parte formal. En la vida diaria las disputas han continuado durante años, décadas e incluso siglos, por lo que no es de extrañar que, en los argumentos esgrimidos por los solicitantes durante el periodo posrevolucionario, hicieran referencia a los tiempos inmemoriales en los que disfrutaban de sus tierras, montes y aguas de forma comunal.

Quizá uno de los periodos históricos en donde se le dio mayor importancia a la cuestión agraria fue la revolución mexicana, siendo una de las principales causas de la incorporación de un número importante de hombres y mujeres del campo a la lucha armada, aunque es importante mencionar que existieron otros problemas en el mundo rural mexicano como

> la desigualdad social, la pobreza, el deterioro en las condiciones de vida, la concentración de la tierra, el caciquismo, el rechazo al avance de las relaciones de mercado y la modernización productiva en algunas áreas, la centralización del poder político en detrimento de las libertades regionales, la oposición a las medidas impuestas por la clase política que restringían los

> derechos y las libertades en los municipios y comunidades, así como el descredito de buen parte de la clase política.[104]

Por esta serie de elementos, el tema agrario va a estar presente en los proyectos de las distintas fracciones revolucionarias, en las discusiones del Congreso de la Unión e incluso en la vida cotidiana de pueblos y comunidades que en plena revolución buscaron la restitución de los terrenos que consideraban despojados o bien, obtener del gobierno en turno una porción de tierra para su subsistencia.

Dado que el hablar de la cuestión agraria en la revolución mexicana es un tema extenso, este apartado se centra únicamente en los principales documentos de las facciones revolucionarias para recuperar parte de sus proyectos jurídicos en materia agraria y cuando aparece, esbozar su perspectiva acerca del juicio de amparo.

1.2.1 El Partido Liberal Mexicano: el juicio de amparo y su visión agraria

Una de las primeras fuerzas revolucionarias que enarboló como bandera de lucha la resolución de la cuestión agraria fue el Partido Liberal Mexicano (PLM). Teniendo como antecedente a los clubes liberales formados en los primeros años del siglo XX, fue creado el 28 de septiembre de 1905, dentro de sus miembros fundadores se encontraban los hermanos Flores Magón, que pronto se pusieron al frente de la dirección del partido.

En julio de 1906, el PLM dio a conocer su programa de lucha. De los puntos que en él se presentaron se destacan dos aspectos relevantes para este trabajo: una breve referencia al juicio de amparo y su propuesta de reparto de tierras.

Por lo que toca al juicio de amparo, en un artículo publicado en *El Colmillo Público*, el 6 de mayo de 1906, se realizó una observación a la junta organizadora del PLM con respecto al programa propuesto pues nada se decía acerca del juicio de amparo.

Para el redactor de la consideración, el amparo era visto como "una válvula de seguridad" para evitar que se consumaran "atentados en la persona de los ciudadanos. Dejar que el juicio de amparo continúe siendo como hasta aquí ilusorio, es, puede decirse, permitir que se perpetúe el abuso, y por lo mismo, la tiranía". La propuesta concreta fue solicitar que el juicio de amparo pudiera "ser pedido sin necesidad de ocupar un abogado, sino que, por el hecho de recibirse la queja del atropellado, aunque no llenen las formalidades estúpidas que

[104] ÁVILA Y SALMERÓN, *Historia breve*, p. 14.

hoy se requieren para atender una petición de Amparo, se atienda al quejoso. Hay que hacer, en una palabra, realmente practicable dicho juicio".[105]

El tema fue retomado y se incluyó en el programa del PLM. En la exposición de motivos se señaló que:

> Un punto de gran importancia es el que se refiere a simplificar los procedimientos del juicio de amparo, para hacerlo práctico. Es preciso, si se quiere que todo ciudadano tenga a su alcance este recurso cuando sufra una violación de garantías, que se supriman las formalidades que hoy se necesitan para pedir un amparo y las que suponen ciertos conocimientos jurídicos que la mayoría del pueblo no posee. La justicia con trabas no es justicia. Si los ciudadanos tienen el recurso del amparo como una defensa contra los atentados de que son víctimas, debe este recurso hacerse práctico, sencillo y expedito, sin trabas que lo conviertan en irrisorio.[106]

La propuesta de hacer práctico el juicio de amparo, simplificando los procedimientos, se incorporó dentro de los puntos generales del programa como número 41. Finalmente, no es de extrañar que los temas jurídicos fueran discutidos por los lectores y escritores de *Regeneración*, basta recordar que en sus inicios el periódico tuvo como lema: "contra la mala administración de la justicia"[107] y sus principales críticas fueran dirigidas al aparato de justicia porfiriano, como se puede apreciar en varios artículos publicados principalmente en los dos primeros años del periódico.

En otro artículo publicado unos días después, también en *El Colmillo Público*, se hizo referencia a la posible restricción del juicio de amparo para evitar que en el máximo tribunal del país se siguieran acumulando los juicios. En ese momento se habla de cerca de cinco mil asuntos pendientes de resolución, pero la crítica puntual era al régimen de Díaz al cual califican de dictadura y a la propuesta de reforma al amparo pues hasta ese momento había sido impracticable y lo seguiría siendo "después de la reforma. Restringiendo el juicio de amparo, será tan ilusorio como lo es ahora. El mal no está en las leyes, sino en los encargados de aplicarlas. Leyes magnificas nos quedan muchas ¿y hay justicia por ellas?…". Y concluían afirmando que el juicio de amparo era ilusorio mientras no hubiera justicia pues el mal estaba en "el sistema todo que nos maltrata y en cuyos rodajes vamos dejando nuestra dignidad y

---

[105] *El Colmillo Público*, núm. 139, 6 de mayo de 1906, p. 287, 288 en http://archivomagon.net/art851/

[106] Programa del PLM en http://archivomagon.net/obras-completas/manifiestos-y-circulares/manifiestos-1906/1906-28/1906-28/

[107] A partir del número 20, del 31 de diciembre de 1901, *Regeneración* cambió su lema por "Periódico independiente de combate", BARTRA, *Regeneración*, pp. 102-103.

nuestro porvenir".[108] Si bien una revisión rápida de *Regeneración* aporta algunos casos concretos de juicios de amparo de la época, en su mayoría corresponden a denuncias de abusos llevados a cabo por jefes políticos, administradores de rentas y funcionarios.

El segundo punto por destacar del magonismo es su propuesta agraria. Cabe subrayar que autores que han realizado investigaciones sobre el PLM como Arnaldo Córdova, Armando Bartra y Salvador Hernández, por solo mencionar a algunos, utilizan la palabra magonismo para referirse al movimiento encabezado por este grupo, teniendo como principal representante a Ricardo Flores Magón. No obstante, Marco Antonio Samaniego López afirma la inexistencia del magonismo, porque en su momento la palabra fue utilizada por los detractores del movimiento como una forma de descalificarlo.[109] Por mi parte, no profundizo en esta discusión y propongo entenderlo como un conjunto de principios, ideas y prácticas políticas que describen el actuar del Partido Liberal Mexicano.

Ahora bien, lo que podríamos llamar la visión agraria del magonismo o "magonismo agrario" no fue expuesto de forma sistemática y organizada en un solo texto, podemos acercarnos a él de forma fragmentaria, a través de los textos publicados principalmente en *Regeneración*. Tampoco son tratados teóricos, son más escritos propagandísticos y de agitación elaborados en un contexto de persecución, encarcelamientos, exilios y lucha.

Esas ideas no fueron estáticas, por lo que propongo ubicarlas en dos momentos. El primero de ellos a partir de la propuesta sobre tierras planteada en el programa del PLM y el segundo, contenido en un manifiesto, fechado el 23 de septiembre de 1911. Cada uno de estos documentos respondió a un momento particular de la lucha política e ideológica, encabezada por Ricardo Flores Magón.

El programa del PLM podemos ubicarlo como parte del desarrollo organizativo del propio partido, en donde se buscó aglutinar a las distintas fuerzas opositoras al gobierno de Díaz, de ahí que algunos de los planteamientos fueran muy generales. Ward Albro, caracteriza a dicho programa como "liberal, reformista y nacionalista. Aunque contenía previsiones detalladas acerca del bienestar social y de cuestiones laborales, en muchos aspectos abogaba por un retorno a muchos de los principios del liberalismo juarista".[110]

---

[108] *El Colmillo Público*, núm. 142, 27 de mayo de 1906, p. 326, 327 en http://archivomagon.net/art857/
[109] SAMANIEGO, "El magonismo".
[110] ALBRO, *Morir de pie*, p. 68.

Independientemente de la caracterización de este manifiesto, es claro que sirvió para agrupar el descontento de distintos grupos del país.

En lo relativo a la cuestión de tierras, estableció la obligatoriedad a los propietarios de "hacer productivas todas las que posean" y en caso de que se dejara alguna extensión improductiva, esta sería tomada por el estado para destinarla a aquellos mexicanos que viviesen en el extranjero y que las solicitaran (para lo cual el gobierno pagaría los gastos de repatriación) y para cualquier otra persona que las pidiera con la única condición de destinarlas a la producción agrícola teniendo prohibido venderlas y fijándoles una extensión máxima. Llama la atención esta propuesta pues contiene algunos elementos de la futura acción agraria de dotación formulada unos años después por Carranza en la ley agraria del 6 de febrero de 1915, ¿habrá tenido alguna influencia esta propuesta del magonismo? Por el momento no se cuenta con elementos para responder esta interrogante. Finalmente, para una mejor explotación de las tierras, el Estado debía crear o fomentar un Banco Agrícola que daría "a los agricultores pobres préstamos con poco rédito y redimibles a plazos".[111]

Como se puede apreciar, en este periodo se ve al estado como el garante de la productividad de las tierras respetando la propiedad privada al solo abocarse a los terrenos improductivos. Estas nociones se modificaron unos años después.

A pesar de lo limitado que pudieron parecer estos puntos, en estos años encontramos algunas revueltas influenciadas o dirigidas por miembros del PLM. Un ejemplo de ello se dio en la región sur del estado de Veracruz y sus límites con Tabasco. En septiembre de 1906, se intentó una sublevación cuya principal demanda fue la restitución de tierras que habían sido despojadas por terratenientes de la zona, aunado a esto, existía un importante descontento provocado por el actuar de diversas autoridades como los jefes políticos, policías y autoridades judiciales, a quienes acusaban de actuar conforme a "los intereses de terratenientes, empresarios y compañías extranjeras, en detrimento de campesinos y obreros, y cuyo interés principal parecía ser el de congraciarse con sus superiores y acatar las consignas oficiales".[112]

A pesar de que el propósito inmediato de la movilización no fue el derrocamiento del gobierno de Díaz, "sino que la lucha iba dirigida en contra de autoridades, caciques y patrones

[111] "Programa del Partido Liberal Mexicano", en *Regeneración*, 1° de julio de 1906, p. 3.
[112] AZAOLA, *Rebelión y derrota*, p. 120.

locales, y tenía que ver con las condiciones de vida y trabajo especificas dentro del marco de una estructura socioeconómica y política local regional",[113] el movimiento fue reprimido y derrotado.

Un destacado militante del PLM, Práxedis Guerrero,[114] nacido en Guanajuato y miembro de una familia acomodada, emigró a Estados Unidos en donde trabajó como obrero y minero, en 1906 estableció relaciones con el PLM y para 1907 fue nombrado delegado especial de la Junta del partido en Arizona; escribió un artículo donde criticó el acaparamiento de tierras por parte de los terratenientes, debido a la violencia y corrupción oficiales y señalando al gobierno como "aliado eficaz de los despojadores". Para Guerrero era claro en este momento que la solución a los problemas del campo era la colectividad, sin embargo, también fue consciente de que las condiciones no eran las propicias, señalando que lo que sí se podía llevar a cabo era lo propuesto en el programa del PLM, es decir, "tomar las tierras que han dejado sin cultivo los grandes propietarios, confiscar los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la actual Dictadura y distribuirlos entre los pobres". Concluía su escrito señalando que el PLM luchaba por las libertades políticas y la emancipación económica del pueblo, con base en el plan que enarbola, por lo que desde ese momento su grito de combate sería: ¡Tierra y Libertad![115] Lema que acompañaría a los magonistas en sus siguientes escritos.

La Junta Organizadora del PLM no era un bloque homogéneo, si bien su actuar tuvo como sustento el programa de 1906, para 1910 Elena Azaola identifica indicios de que por lo menos Ricardo Flores Magón "había rebasado las propuestas formuladas" en el programa del partido, puesto que en sus escritos ya se plantea la lucha directa contra el capital y el estado, así como los recurrentes exhortos a "tomar la tierra para abolir el régimen de

---

[113] AZAOLA, *Rebelión y derrota*, p. 159.

[114] Periodista y revolucionario mexicano, nació el 28 de agosto de 1882 en la Hacienda Los Altos de Ibarra, municipio de San Felipe, estado de Guanajuato. A pesar de ser miembro de una familia acomodada a los 22 años emigró a Estados Unidos en donde trabajó como obrero y minero; editó y colaboró en algunos periódicos. Desde su incorporación al PLM realizó distintas actividades a favor del partido lo que le trajo la persecución del gobierno estadounidense. En diciembre de 1910, decide incursionar en México, "su plan era conquistar los poblados de la región de la frontera, desarmar a la policía federal, sabotear objetivos estratégicos, hacer prosélitos para la revolución y desatar un ataque contra Chihuahua". FERRUA, *Un anarquista*, p. 107.
El 29 de diciembre irrumpió con sus fuerzas en la ciudad de Janos, en donde después de un fuerte enfrentamiento por la plaza, fue muerto por las fuerzas federales en las primeras horas del 30 de diciembre de 1910. Para profundizar en la biografía de este personaje véase, FERRUA, *Un anarquista*; ALBRO, *Morir de pie*.

[115] "Tierra y Libertad", en *Revolución*, 20 de julio de 1907, p. 2.

propiedad privada, metas que no contemplaba el programa de 1906"[116] y que serán distintivas de este periodo.

Unos meses después, Antonio I. Villareal y Juan Sarabia, se deslindaron del partido y se incorporaron a las filas del maderismo.[117] Al parecer estos personajes no estaban dispuestos a ir más allá de lo postulado por el programa de 1906.

En este segundo momento del pensamiento agrario magonista es posible identificar aspectos específicos en los que se deja ver la adopción y adaptación de las ideas anarco-comunistas[118] como: el cuestionamiento sobre el derecho de propiedad; la necesidad de los campesinos por expropiar las tierras y trabajarlas de forma colectiva y; otros elementos propios del contexto de la revolución mexicana como el apoyo al zapatismo y su deslinde con otras facciones revolucionarias.

El propio Ricardo Flores Magón explicó el desarrollo de sus ideas como una secuencia lógica: "Primero creí en política. Creía yo que la ley tendría la fuerza necesaria para que hubiera justicia y libertad. Pero vi que en todos los países ocurría lo mismo que en México, que el pueblo de México no era el único desgraciado y busqué la causa del dolor de todos los pobres de la tierra y la encontré: el capital".[119] Sera entonces el capital el punto de partida del magonismo agrario, aspecto que está en sintonía con las propuestas del anarco-comunismo.

El capital "es en el anarquismo sinónimo de tierra"[120] por lo que, en el caso de una sociedad agraria como la mexicana, el problema fundamental de la revolución social era el de la propiedad y posesión de esta, la cual era vista como la fuente principal de toda riqueza. De la tierra se obtenían las materias primas para la industria, "los granos y los vegetales alimenticios; de sus bosques se obtiene la madera; de sus minas los metales útiles; de sus canteras los materiales de construcción. De la tierra se extrae el carbón piedra; de la tierra viven los ganados cuya carne come el hombre".[121] De ahí la ineludible tarea de los trabajadores por poseerla.

---

[116] AZAOLA, *Rebelión y derrota*, p. 189.
[117] TURNER, *Ricardo Flores Magón*, pp. 258-261; COCKCROFT, *Precursores intelectuales*, pp. 177-182.
[118] Para profundizar en estas ideas ver "El comunismo anarquista" y "La expropiación", en KROPOTKIN, *La conquista*.
[119] "Carta a Luis Rivas", 3 de junio de 1911, en CÓRDOVA, *La ideología*, p. 175.
[120] BLANQUEL, *Ricardo Flores Magón*, p. 90.
[121] "A tomar la tierra", en *Regeneración*, 3 de febrero de 1912, p. 1.

Si en el primer periodo el documento base de acción fue el programa del PLM, en esta etapa cobrará vital importancia el Manifiesto del PLM fechado el 23 de septiembre de 1911, en donde se llama de manera general a la expropiación de tierras. Este cambio en la postura magonista respondió a por lo menos dos factores: el contexto de lucha armada y su desarrollo ideológico. Afirmaba el manifiesto que la expropiación debía ser llevada a cabo "a sangre y fuego durante este grandioso movimiento", como ya se estaba haciendo en "Morelos, sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, norte de Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y regiones de otros estados"; la diferencia con el periodo anterior de expropiación es clara, ahora los campesinos tenían que tomar las tierras sin esperar a que el gobierno lo hiciere por ellos "ya que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos".

El siguiente aspecto que se destaca en el Manifiesto del PLM es el llamado que realizan a trabajar la tierra de forma colectiva, pues en caso de fraccionarse y que cada familia tomare una porción, se corría el riesgo de "caer nuevamente en el sistema capitalista", además de que si las familias trabajaban en individual su porción, tendrían "que trabajar tanto o más que como se hace hoy bajo el sistema de la propiedad individual para obtener el mismo resultado mezquino que se obtiene actualmente; mientras que si se une la tierra y la trabajan en común los campesinos, trabajarán menos y producirán más".[122] Una vez tomadas las tierras, tenían que defenderlas con las armas en la mano.

En este punto existe una aplicación concreta a la realidad mexicana pues el llamado a trabajar la tierra de forma colectiva encontraba un antecedente histórico en el elemento indígena. En una carta dirigida a campesinos de Durango que habían expropiado una hacienda les hicieron el llamado a: "Trabajad en común la tierra, como lo hicieron nuestros padres los indios, y consumid en común según las necesidades de cada cual".[123] En algunos textos magonistas[124] se hará referencia a la forma comunitaria de producción prehispánica y cómo esta se vio interrumpida con la conquista llevada a cabo por los españoles.

---

[122] "Manifiesto. La Junta organizadora del Partido Liberal Mexicano al Pueblo de México", en *Regeneración*, 23 de septiembre de 1911, p. 1.
[123] "Cuestión Agraria", en *Regeneración*, 6 de abril de 1912, p. 3.
[124] "La revolución social en México" y "Orientación de la Revolución Mexicana", en *Regeneración*, 8 de julio de 1911 y 21 de febrero de 1914.

Si en ese momento existía algún grupo político cercano a estas ideas eran las fuerzas comandadas por Emiliano Zapata.[125] Para entonces, el Ejército Libertador del Sur, había tomado tierras, destruido haciendas y expropiado fábricas, lo cual en la práctica demostraba "a los teorizantes del socialismo y del anarquismo, a los que 'dudan, a los 'incrédulos', que no es necesario haberse quemado las pestañas en las escuelas aprendiendo la mar de majaderías para comprender que la tierra es la fuente natural de todas las riquezas, y que, teniendo la tierra, se es dueño de todo".[126] Para el magonismo, la práctica zapatista demostraba en los hechos la posibilidad de llevar a cabo las ideas anarco-comunistas en México.

El magonismo apoyó decididamente a las fuerzas zapatistas, al punto de que Zapata propuso a los dirigentes de *Regeneración* su traslado a las zonas que estaban bajo su control y editar desde allí su periódico, pero el ofrecimiento fue rechazado.

Una revisión rápida de *Regeneración* da cuenta de varios artículos en donde quedan de manifiesto las acciones del Ejercito Libertador del Sur, destacando que

> al llegar a las poblaciones y a las haciendas, lo ponen todo en manos de los desheredados que se visten y comen bien por primera vez en su vida; los burgueses son ahorcados, las autoridades pasadas por las armas, los archivos de los ayuntamientos y de los juzgados reducidos a cenizas, los clérigos vapuleados y expulsados, y, en cuanto a las tierras, son éstas invadidas por nuestros hermanos de miseria, quienes con entusiasmo las labran acompañados de mujeres resueltas, y todos, hombres y mujeres, esperan emocionados la cosecha que se aproxima y que es ya suya: ¡no más para los malditos ricos![127]

Al mismo tiempo que los dirigentes del PLM decidieron apoyar al zapatismo, se deslindaron de las demás fracciones revolucionarias, principalmente de las fuerzas lideradas por Venustiano Carranza y un periodo de los villistas, hasta que la División del Norte se alió al Ejército Libertador del Sur.

Es posible ubicar las críticas a la propuesta agraria del carrancismo en varios de los escritos publicados en la prensa magonista.[128] En un artículo de octubre de 1915, ya

---

[125] Algunos autores como John Hart y Armando Bartra han señalado que el primer contacto entre magonismo y zapatismo se dio desde 1911 con la llegada de un emisario de Flores Magón al campamento de Zapata; HART, *Los anarquistas*, p.159; BARTRA, *Regeneración*, pp.61-62.

[126] "¡Viva Tierra y Libertad!", en *Regeneración*, 27 de enero de 1912, p. 1.

[127] "La Cuestión agraria", en *Regeneración*, 2 de septiembre de 1911, p. 1.

[128] "Carranza traiciona la Revolución" y "Carranza se despoja de la piel de oveja y enseña los colmillos, las circunstancias reclaman el esfuerzo de la dinamita y el filo de la guillotina" en *Regeneración*, 25 de marzo y 26 de agosto de 1916.

promulgada la ley agraria del 6 de enero, se cuestiona que a pesar del reparto agrario en las zonas que controlan las fuerzas constitucionalistas, dichas "reformas no dan muerte al llamado derecho de propiedad privada o individual. Ese derecho inicuo, fuente de todos los males que sufre la humanidad, queda en pie",[129] por lo que no se garantizaba la libertad plena a los campesinos y los llama a hacer suyo el manifiesto del 23 de septiembre de 1911 para luchar por Tierra y Libertad.

Para estos años las fuerzas magonistas se encontraban disminuidas, algunos de los integrantes de las células se habían pasado a otras fracciones revolucionarias, otros habían muerto en combate y los líderes se encontraban exiliados en Estados Unidos en donde también eran hostigados por el gobierno. A pesar de esto, el PLM se seguía esforzando "por encauzar el movimiento mexicano hacia el comunismo anarquista",[130] pero su influencia en el desenlace del proceso revolucionario fue casi nula.

Después de 1915, con la derrota militar de villistas y zapatistas, la balanza de la revolución mexicana se fue inclinando hacia Carranza y su victoria se concretó con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917 y el asesinato de Emiliano Zapata, en 1919. Entre febrero de 1917 y marzo de 1918 se publicaron únicamente 10 números de *Regeneración*, en el último, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera emitieron un *Manifiesto,*[131] por el cual fueron apresados y condenados a 20 y 15 años de cárcel respectivamente y se dejó de publicar el diario que durante 18 años fue la voz del magonismo.

1.2.2 Francisco I. Madero y el Plan de San Luis

Francisco I. Madero se levantó en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz por medio del Plan de San Luis (PSL). Dicho documento estipuló, entre otras cosas, en el párrafo tercero de su artículo 3, que en caso de que pequeños propietarios hubieran sido despojados de sus terrenos, como consecuencia de un abuso de la ley de terrenos baldíos por parte de la Secretaría de Fomento o bien, por los tribunales de la república, se revisarían tales disposiciones o fallos y en caso de proceder, se les exigiría "a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a

[129] "Las reformas carrancistas", en *Regeneración*, 2 de octubre de 1915, p. 1.
[130] "El carácter de la Revolución Mexicana", en *Regeneración*, 25 de diciembre de 1915, p. 2.
[131] Manifiesto de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. A los miembros del partido, a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores en general", *en Regeneración*, 16 de marzo de 1918, p. 2.

quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos".[132] Si bien este documento no se ocupó de manera profunda de la cuestión agraria, tuvo gran importancia en la incorporación de cientos de campesinos de distintas partes del país al movimiento revolucionario.

Una vez que Madero asumió la presidencia de la república, nombró Secretario de Fomento a Rafael Hernández, quien, para atender la serie de peticiones de resolución de conflictos agrarios, emitió una circular en febrero de 1912 en la cual explicó que era "políticamente y económicamente conveniente atender a las demandas y quejas […] y procurar remediarlas en lo que sea posible dentro de su esfera de acción administrativa".[133]

En ese sentido, Helga Baitenmann, nos dice que con la publicación de esta circular fue "notable la expectativa de los pobladores de que el Ejecutivo resolvería los conflictos de manera administrativa".[134] No obstante, la esfera administrativa chocó con la judicial, ya que los funcionarios de la Secretaría de Fomento no contaban con facultades para resolver conflictos por linderos entre particulares y pueblos y "los jueces fallaron en contra del deslinde de los ejidos autorizados por Fomento".[135]

Ante el aumento de reclamos por parte de diversos grupos campesinos, Madero respondió de forma tajante que siempre había "abogado por crear la pequeña propiedad; pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente… una cosa es crear la pequeña propiedad por medio de un esfuerzo constante y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos ni proclamas".[136] Como se verá más adelante, esta postura es similar a la manifestada por Obregón y Calles.

Previo al asesinato de Madero el escenario en cuanto a la cuestión agraria fue el siguiente "los representantes seguían exigiéndole al Ejecutivo la solución de sus conflictos por las tierras fuera de los tribunales, la autoridad judicial continuaba defendiendo su autoridad sobre los asuntos contenciosos, y las voces más radicales en la Ciudad de México

---

[132] "Plan de San Luis Potosí", 5 de octubre de 1910 en http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1910PSL.html Fecha de consulta 1 de octubre de 2019.
[133] Citado en BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", p. 2033.
[134] BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", p. 2035.
[135] BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", p. 2039.
[136] *El Imparcial*, 28 de junio de 1912 citado en CÓRDOVA, *La ideología*, p. 109.

proponían diferentes maneras de esquivar al Poder Judicial en la reivindicación de los terrenos usurpados de los pueblos".[137]

Si bien Madero gobernó el país de noviembre de 1911 a febrero de 1913 y su movimiento se vio truncado por el golpe de estado perpetrado por Huerta,

> su llamado a las armas precipitó el surgimiento y la irrupción de otra revolución. En lugar de la revolución de clases medias urbanas y de los sectores populares de las ciudades, lo que emergió fue una rebelión agraria, de una multitud de campesinos, rancheros, jornaleros y peones movilizados por tres causas fundamentales: la necesidad imperiosa de recuperar o de adquirir tierras para su sustento, los agravios recientes contra las autoridades y las elites locales por los abusos cometidos contra ellos y por lo tanto, la reivindicación de la justicia, y el rechazo a la centralización política, el alza de impuestos y la presencia creciente del Estado central en la vida local.[138]

Y parte de esa rebelión agraria encontró su máxima expresión en los campesinos morelenses quienes el 28 de noviembre de 1911, dieron a conocer el Plan de Ayala, documento base del zapatismo.

1.2.3 La reforma agraria zapatista

Sin duda, el documento pilar del zapatismo fue el Plan de Ayala,[139] al cual Felipe Ávila ha caracterizado como

> heredero de la tradición liberal mexicana, desde la Reforma, hasta el Partido Liberal Mexicano, así como de propuestas hechas ya durante la revolución, como el Plan de Tacubaya, en cuya elaboración y difusión participaron los hermanos Magaña y Paulino Martínez, quienes poco después se unieron al zapatismo. Sin embargo, la aportación central y la originalidad del Plan de Ayala fue su propuesta de resolver de raíz el problema del campo a través de una vía revolucionaria, mediante la ocupación de la tierra por los pueblos y su defensa, con las armas en la mano y de establecer un gobierno comprometido con la revolución.[140]

---

[137] BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", p. 2046.
[138] ÁVILA, *Las corrientes*, p. 103.
[139] Para profundizar en el estudio de este documento, los testimonios de algunos de sus firmantes, su relación con otros programas políticos y su presencia en luchas campesinas posteriores a la revolución véase CASTRO Y PINEDA, *A cien años*.
[140] ÁVILA, *Las corrientes*, p. 178.

En el Plan de Ayala se estipuló el desconocimiento de Madero como presidente y se propuso a Pascual Orozco como jefe de la revolución y en caso de no aceptar asumiría la jefatura Emiliano Zapata. En lo relativo a la cuestión agraria, se propuso que los

> terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fé de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se crean con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.[141]

También hizo referencia a los "pueblos y ciudadanos mexicanos" que no contaran con tierras, para los cuales se expropiarían tierras, montes y aguas, "previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas" a fin de que obtuvieran "ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos".[142] Aquí también se pueden observar algunos elementos de lo que sería la dotación de tierras.

Con base en estos artículos se realizó el reparto de algunas tierras en los territorios controlados por el Ejército Libertador del Sur: Morelos y regiones de los estados de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero. Sin embargo, estas medidas fueron transitorias pues con el triunfo del carrancismo y una vez promulgada la constitución de 1917 esos repartos fueron desconocidos por las nuevas autoridades agrarias y los solicitantes tuvieron que ajustarse a las nuevas disposiciones en la materia. En otros casos, el trámite agrario sirvió para legitimar posesiones con las que ya contaban los pueblos.

Para ejemplificar lo anterior y tratándose esta investigación del Estado de México, se retoma el caso del pueblo de San Bartolomé Tlaltelulco. En 1915 vecinos de este poblado solicitaron restitución de tierras con fundamento en el Plan de Ayala, al ser derrotados los zapatistas el expediente continuó conforme a la ley agraria carrancista.

Para el 24 de octubre de 1916, la Comisión Local Agraria (CLA, en adelante) les manifestó a los solicitantes que tenía el conocimiento de la existencia de un expediente de restitución que habían iniciado durante la época del gobierno de la Convención pero "como el Gobierno Constitucionalista ni reconocía ni ratificaba las determinaciones emanadas de

[141] Artículo 6, "Plan de Ayala", p. 29.
[142] Artículo 7, "Plan de Ayala", p. 29.

aquél régimen ilegal, se les prevenía que si deseaban emprender nuevas gestiones encaminadas a obtener dicha restitución, podían hacerlo ajustándose a lo dispuesto en la Ley de 6 de enero de 1915".[143] Fue así como el reparto tuvo que ajustarse a la nueva normatividad.

Cabe señalar que los vecinos de San Bartolomé Tlaltelulco no fueron los únicos pobladores del Estado de México que buscaron obtener terrenos con fundamento en el Plan de Ayala. Otros casos fueron los pueblos de Tultepec y Santa Cruz Atzcapotzaltongo, al primero se le restituyeron cerca de 909 hectáreas que estaban en posesión de la hacienda de Santa Inés, mientras que el segundo resultó beneficiado con tierras de la hacienda de San Juan de la Cruz.[144]

El propio Zapata se encargó personalmente de atender algunos de los reclamos, por ejemplo, en 1913, vecinos del pueblo de Meyuca, del municipio de Coatepec Harinas, se trasladaron a Morelos para entrevistarse con el jefe suriano y solicitarle la restitución de sus tierras. La respuesta de Zapata fue enviar una carta a Genovevo de la O. en donde le manifestó que

> representantes del pueblo de Meyuca, se han presentado ante mí exponiendo que las Haciendas de Tizates y Chiltepec, desde tiempo hace que se adjudicaron terrenos que los vecinos de dicho pueblo reconocen de su legitima propiedad, según las escrituras primordiales que obran en poder del referido pueblo. En tal virtud, recomiendo a Ud. solucione este asunto de acuerdo con lo que sea de entera justicia, basándose en las disposiciones que a este respecto marca el Plan de Ayala, a efecto de que el mencionado pueblo tome posesión de los terrenos que sean de su propiedad, según las facultades que acerca de esta clase de negocios para su debido arreglo concede el citado Plan de Ayala a los jefes revolucionarios.[145]

Además del Plan de Ayala, otras normas importantes del proyecto agrario zapatista, fueron las *Instrucciones a los jefes y oficiales*, dadas el 28 de julio de 1913; la *Orden general al Ejército Libertador* del 4 de octubre de 1913; el *Decreto de nacionalización de bienes de los enemigos de la revolución*, del 8 de septiembre de 1914 y; la *Ley relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria* del 1° de marzo de 1917; todas estas leyes

[143] *Diario Oficial,* 7 de diciembre de 1928, p. 2.
[144] AGUADO, *Una mirada*, pp. 61-62.
[145] AGUADO, *Una mirada*, p. 59.

en su conjunto pueden ser consideradas un esbozo del derecho agrario zapatista.[146] Otro tema que queda pendiente por trabajar.

1.2.4 La propuesta agraria del villismo

Friedrich Katz ha establecido las diferencias existentes entre las distintas regiones que conforman el país.[147] En el caso del norte, existían menos pueblos indígenas que en el centro-sur, por lo que hubo una escasez de mano de obra y los hacendados tuvieron que ofrecerles mayores salarios para retenerlos y experimentaron nuevos métodos paternalistas como escuelas y servicios médicos. Una realidad totalmente contrastante con la vivida por los campesinos surianos, lo cual hizo que las visiones fueran, sino opuestas, si contrastantes.

Bajo esta premisa es que se propone entender la *Ley general agraria del general Francisco Villa*,[148] dada el 24 de mayo de 1915, unos meses después de la propuesta carrancista. Dado que su influencia en el Estado de México fue nula, únicamente se señalan aspectos generales de esta norma. Dentro de los considerandos de este ordenamiento se estableció que la tierra era la única fuente de riqueza, visión similar a la magonista, empero, "la gran desigualdad en la distribución de la propiedad territorial ha producido la consecuencia de dejar a la gran mayoría de los mexicanos, a la clase jornalera, sujeta a la dependencia de la minoría de los terratenientes, dependencia que impide a aquella clase el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos".

Añadía la necesidad de resolver el problema agrario "bajo un plan sólido y uniforme en sus bases generales, rigiéndose por una misma ley", sin embargo, esta norma únicamente debía contener los principios generales de la reforma agraria

> *dejando que los Estados*, en uso de su soberanía, *acomoden esas bases a sus necesidades locales*; porque la variedad de los suelos y de las condiciones agronómicas de cada región requieren diversas aplicaciones particulares de aquellas bases; *porque las obras de reparto de tierras y de las demás que demanda el desarrollo de la agricultura serían de difícil y dilatada ejecución si dependieran de un centro para toda la extensión del territorio nacional*.[149]

---

[146] Para una noción general del derecho agrario zapatista y sobre los documentos mencionados véase DURAND, *El derecho agrario*, pp. 213-223.
[147] KATZ, *La servidumbre agraria*, pp. 55-62.
[148] "Ley general agraria", pp. 465-470.
[149] "Ley general agraria", p. 466.

Para el logro de su cometido, la norma declaró como "incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales", facultando a los gobiernos de los estados para legislar en la materia y fijar la superficie máxima de tierra que podía ser poseída por un solo dueño (art. 1), tomando en consideración la superficie de la entidad, la cantidad de agua para el riego, la densidad de su población, la calidad de las tierras, las extensiones cultivadas y todos los demás elementos que sirvieran "para determinar el límite más allá del cual la gran propiedad llega a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social".

Así mismo, estableció como de utilidad pública "el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales en la porción excedente del límite que se fije conforme a los artículos anteriores" (art. 3). Cabe señalar que también contempló la expropiación de los "terrenos circundantes de los pueblos de indígenas en la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos que estén en aptitud de adquirir aquéllos, según las disposiciones de las leyes locales" (art. 4). Queda claro que la visión agraria de Villa estaba encaminada a la formación de la pequeña propiedad.

Siguiendo con la figura de la expropiación, se estipuló una parcial que comprendería, "los derechos reales anexos a los inmuebles expropiados, y también la parte proporcional de muebles, aperos, máquinas y demás accesorios que se necesiten para el cultivo de la porción expropiada" (art. 7). En esta propuesta el pago de las indemnizaciones quedaría a cargo de los gobiernos estatales, quienes no podían decretar la ocupación de las propiedades y terrenos expropiados "sin que antes se hubiere pagado la indemnización correspondiente en la forma que disponga la Ley local (art. 11). Algo que contrasta con las expropiaciones de la reforma agraria.

El destino de las tierras expropiadas sería el fraccionamiento inmediato "en lotes que serán enajenados a los precios de costo además de gastos de apeo, deslinde y fraccionamiento, más un aumento de diez por ciento que se reservará a la Federación para formar un fondo destinado a la creación del crédito agrícola del país" (art. 12).

Sin duda, la solución villista para resolver los problemas agrarios correspondía a los factores regionales. Esto queda de manifiesto con la introducción de la figura de la aparcería. Señaló la ley en su artículo 14 que

> Los gobiernos de los Estados modificarán las leyes locales sobre aparcería en el sentido de asegurar los derechos de los aparceros en el caso de que los propietarios abandonen el cultivo de las labores o de que aquéllos transfieran sus derechos a un tercero. Los aparceros tendrán en todo caso el derecho de ser preferidos en la adjudicación de los terrenos que se fraccionen conforme a esta Ley o por los propietarios respecto de las parcelas que hubieren cultivado por más de un año.

Un punto más a destacar fue la incorporación de las empresas agrícolas, a las cuales el gobierno federal podía "autorizar la posesión actual o adquisición posterior de tierras en cantidad mayor que la adoptada como límite", siempre que cumplieran con los siguientes requisitos: tener por objeto el desarrollo de una región, fueran empresas mexicanas y que las tierras y aguas se destinarían al fraccionamiento ulterior en un plazo que no debía exceder los seis años" (art. 18).

Finalmente, este ordenamiento facultó a la federación para expedir otras leyes relacionadas con la materia, como las del "crédito agrícola, colonización y vías generales de comunicación y todas las demás complementarias del problema nacional agrario" (art. 19). La propuesta villista corrió la misma suerte que la zapatista y con el triunfo de Carranza se impuso la ley del 6 de enero de 1915.

1.2.5 El carrancismo, la ley agraria del 6 de enero de 1915 y el juicio de amparo

En el contexto de la guerra y para restarle banderas al zapatismo, Venustiano Carranza expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915.[150] Este ordenamiento reconoció que

> una de las causas más generales del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas del país, ha sido el despojo de los terrenos, de propiedad comunal o de repartimiento, que les habían sido concedidos por el gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de la clase indígena, que, a pretexto de cumplir con la ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos cuantos especuladores.[151]

Además de puntualizar que en el mismo caso se encontraban otros poblados como congregaciones y rancherías, así como diversos "habitantes que se reunían en lugares propicios, para adquirir y disfrutar mancomunadamente, aguas, tierras y montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indígenas". Dichos despojos, se habían hecho

[150] "Decreto de 6 de enero", pp. 228-232.
[151] "Decreto de 6 de enero", p. 228.

no solo por autoridades políticas, sino también por "concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros de Fomento y Hacienda o a pretexto de apeos y deslindes".

Por estas razones, resultaba necesario devolver a los pueblos las tierras despojadas "como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres".

Continuaba la exposición de motivos señalando que en caso de que no se pudiera restituir a los pueblos, por distintos motivos, se facultaba a las autoridades militares superiores a realizar las expropiaciones necesarias y dar "tierras suficientes a los pueblos que carecen de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscritos en el programa de la Revolución, y estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del país". Es aquí donde se encuentran las dos principales acciones agrarias que darían forma al reparto agrario del siglo XX mexicano.

Precisaba la ley que no se trataba de revivir las antiguas comunidades, "ni de crear otras semejantes, sino solamente de dar esa tierra a la población rural miserable que hoy carece de ella, para que pueda desarrollar plenamente su derecho de vida y librarse de la servidumbre económica, a que está reducida". La propiedad de estas tierras no pertenecería al común del pueblo, sino que debía ser dividida en pleno dominio, "aunque con las limitaciones necesarias para evitar que ávidos especuladores, particularmente extranjeros, puedan fácilmente acaparar esa propiedad, como sucedió casi invariablemente con el repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos legales de pueblos, a raíz de la revolución de Ayutla".[152]

Para el logro de estos puntos, declaró nulas las enajenaciones de tierras, montes y aguas "hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local", siempre y cuando contravinieran lo establecido en la ley de 25 de junio de 1856; así mismo, las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes "hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el primero de diciembre de 1876, hasta la fecha" y; todas las diligencias de apeo o deslinde, que se hubieren practicado por "compañías, jueces u otras autoridades, de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos,

[152] "Decreto de 6 de enero", p.230.

terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades" (art. 1).

En el caso de esta investigación se pone énfasis en lo relativo a la figura de la dotación de tierras, por tratarse de la principal acción agraria contra la que se interpusieron el mayor número de juicios de amparo que se encontraron en los archivos, aunque a lo largo del texto también se hace referencia a otros procedimientos como el cambio de localización de los ejidos o la expropiación de tierras ejidales, lo que abre un campo de estudio importante en la historiografía de la reforma agraria.

La dotación de tierras quedó regulada en el artículo tercero, estableciendo que los pueblos que no tuvieran ejidos o no hubieren logrado la restitución por falta de títulos de propiedad, podrían obtener por medio de esta figura "el terreno suficiente para restituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados".

Para llevar a cabo esta política de reparto y como afirma Helga Baitenmann, "los carrancistas crearon órganos y autoridades agrarias dependientes del Poder Ejecutivo federal, no sólo con carácter administrativo sino con el de tribunales especializados, con comisiones locales agrarias y gobernadores fallando en primera instancia, y la Comisión Nacional Agraria (CNA) y el presidente en segunda instancia 'como juez último'".[153] Si bien este elemento es característico del carrancismo y de suma importancia para entender el aspecto legal de la reforma agraria, pues se buscó que el poder judicial no participara, los jueces federales y los ministros de la Suprema Corte se convirtieron en actores importantes de esta trama, pues les correspondió la resolución de los juicios de amparo promovidos por los inconformes con los trámites de dotación.

Para que un pueblo que careciere de tierras, o que no tuviera "títulos bastantes para justificar sus derechos de reivindicación" iniciara un trámite de dotación, era necesario presentar una solicitud al gobernador del estado o a la autoridad política superior del Distrito Federal o territorio correspondiente (art. 6); la autoridad escuchaba la opinión de la "comisión local agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre la conveniencia, necesidad y extensión en las concesiones de tierras para dotar de ejidos" y resolvía sobre la procedencia

[153] BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", pp. 2047-2048.

o no de la dotación solicitada; de ser procedente pasaba el expediente al Comité Particular Ejecutivo (CPE) "a fin de que, identificándose los terrenos, deslindándolos y midiéndolos, proceda a hacer entrega provisional de ellos a los interesados" (art. 7).

Esta resolución tendría el carácter de provisional, pero sería ejecutada por el CPE "y el expediente, con todos sus documentos y demás datos que se estimaren necesarios", se remitirían a la CLA, la que, elaboraría un informe y presentaría ambos a la CNA (art. 8). La Comisión Nacional elaboraría un dictamen que podía aprobar, rectificar o modificar la resolución provisional y con base en este el encargado del Poder Ejecutivo sancionaría "las reivindicaciones o dotaciones expidiendo los títulos respectivos (art. 9).

Si los propietarios a expropiar se consideraban perjudicados por la resolución, el medio de defensa con el que contaban era recurrir "ante los tribunales a deducir sus derechos dentro del término de un año, a contar desde la fecha de dichas resoluciones", pasado este término, ninguna reclamación sería admitida. El mismo plazo operaba para reclamar las indemnizaciones correspondientes (art. 10).

La ley del 6 de enero de 1915 tuvo una primera reforma en septiembre de 1916. El argumento para esta modificación lo encontramos en los considerandos de este decreto, los cuales planteaban que se habían presentado dificultades que frustraban los esfuerzos del gobierno para solucionar el problema agrario y "para evitar esas dificultades y ser más firme y valedera la protección de los pueblos, conviene que las entregas y posesión de tierras que se les confieran, sea a título de restitución o de dotación, no sean provisionales sino definitivas, como consecuencia de una resolución deliberada, pronunciada con pleno conocimiento de causa".[154]

Por lo que hace al procedimiento de dotación se suprimió la obligatoriedad de pasar el expediente al CPE y realizar la entrega provisional. Ahora, solo se consideraba la resolución de los gobernadores favorable o adversa, con carácter transitorio, pero no se ponía en posesión a los pueblos y el expediente era remitido a la Comisión Nacional Agraria, aunque esta disposición fue reformada más adelante, retomándose las resoluciones y posesiones provisionales.

Una vez que la CNA recibía la documentación, dictaminaba sobre la aprobación, modificación o revocación de la resolución; con base en dicho dictamen el encargado del

[154] "Decreto reformando", p. 250.

poder ejecutivo dictaba la resolución definitiva, enviando copia a la CLA correspondiente. En caso de que la resolución fuera favorable se turnaba junto con el expediente al CPE para realizar los trabajos de deslinde y proceder a la entrega de las tierras (art. 9). Contra las resoluciones favorables a los pueblos, el medio de defensa preferido por los propietarios expropiados fue el juicio de amparo.

Finalmente, la ley del 6 de enero de 1915 fue elevada a rango constitucional en el artículo 27. Lo interesante de estos artículos es que sentaron las bases del procedimiento de dotación de tierras: la forma de solicitarlas; las autoridades agrarias que atenderían las peticiones y el derecho de indemnización con el que contaban los propietarios. Al amparo de esta ley inició la reforma agraria mexicana y se establecieron los pilares del derecho agrario mexicano.

Unos meses después de emitida la ley agraria, e1 28 de septiembre, Venustiano Carranza emitió el decreto que restituía el carácter protector del juicio de amparo. El 27 de octubre de 1908 se había reformado el artículo 102 constitucional para que el amparo en materia civil no pudiera promoverse hasta después de pronunciada la sentencia que pusiera fin al litigio y contra la cual no existiera recurso alguno. El propósito de esta modificación era "poner coto al abuso que del recurso de amparo se había hecho en los negocios judiciales del orden civil, produciendo los efectos de enervar y dilatar la acción de los Tribunales Civiles, menoscabar la responsabilidad de la justicia del orden común y desalentar a los encargados de ministrarla".

Carranza señaló la reforma de inadecuada e ineficaz por haber traído más problemas que remedios, además de convertirse "en un poderoso medio de opresión, pues la autoridad judicial pudo impunemente cometer toda clase de atentados contra la propiedad, los derechos de las personas y de las familias". Por lo anterior, derogó la reforma de 1908 y restableció el artículo 102 en donde se establecían los principios del amparo: seguirlo a petición de la parte agraviada, a través del procedimiento marcado en la ley y la sentencia sólo se ocuparía de "individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la Ley o acto que la motivare". Como se vio páginas atrás, el juicio de amparo quedó regulado en los artículos 103 y 107 constitucionales.

Teniendo este panorama general tanto de la evolución del juicio de amparo como de las visiones agrarias de los principales grupos revolucionarios, corresponde establecer la naturaleza jurídica del amparo en materia agraria**.**

1.3 El juicio de amparo en materia agraria: origen y naturaleza jurídica.

Ya se ha comentado que de manera formal la materia agraria inició con la promulgación de la constitución de 1917, sin embargo, los conflictos originados por la propiedad y posesión de la tierra y su resolución por medio del amparo o alguna figura similar no fueron exclusivos del siglo XX. Andrés Lira ha demostrado que desde la época novohispana individuos y pueblos acudieron a las autoridades en defensa de sus propiedades vía lo que denominó el *amparo colonial*, por solo mencionar un ejemplo se tiene el caso de los indios del pueblo de San Miguel, sujetos al pueblo de Querétaro, quienes solicitaron al virrey Luis de Velasco hijo, los amparara ya que ellos contaban con "mucha cantidad de tierras que siembran y cultivan, y que algunas personas se les entran en ellas sin causa más que querer de su autoridad hacerlo, en los cuales han sido agraviados".[155]

Otro episodio en la historia agraria de México en donde los que se consideraron afectados por la implementación de alguna ley acudieron al amparo, fueron los años posteriores a la promulgación de la ley de desamortización. En este caso las investigaciones con un enfoque novedoso han dejado de lado el análisis de la desamortización como un proceso en donde los pueblos fueron despojados de sus terrenos y han optado por estudiar "las consecuencias de algunas medidas tomadas por gobernadores de estados del centro de México (particularmente Puebla, México e Hidalgo) para subsanar los escollos de la desamortización, así como la actuación de los tribunales, puesto que la misma no fue unánime en cada ocasión ni homogénea a lo largo del periodo", como es el caso del trabajo de Daniela Marino[156] o bien, la investigación de Gloria Camacho en donde analiza los juicios de amparo a los que recurrieron las sociedades agrícolas de los pueblos del sur del Valle de Toluca en

[155] LIRA, *El amparo colonial*, p. 23. Siguiendo la noción de amparo colonial Alma Nophal, realizó el estudio de diversa documentación promovida por vecinos de Santa Catarina Ayometla, estado de Tlaxcala, quienes solicitaron amparo en la posesión de las tierras y magueyes que poseían "sin permitir que ninguna personas nos inquiete y perturbe", una transcripción de dicha documentación puede consultarse en NOPHAL, *El amparo colonial*, pp. 29-46.
[156] MARINO, "La medida", p. 288.

defensa de sus bienes comunales y como una respuesta al mencionado proceso desamortizador.[157]

La conflictividad en la sociedad rural porfiriana no estuvo ausente. De acuerdo con Felipe Ávila, a partir de la revisión de expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fines del porfiriato se presentaron litigios por deslindes, expropiaciones, pleitos por aguas, conflictos entre pueblos y entre pueblos y particulares, entre propios particulares y de estos con gobiernos locales; algunos de los cuales escalaron al poder judicial federal vía el juicio de amparo, promovido por individuos, pueblos y comunidades.[158] Sin duda, profundizar en la revisión de esta documentación puede ser de utilidad para la historia agraria y aún más, para la historia social de la justicia en México.

En los ejemplos mencionados el hilo conductor es la disputa por la propiedad y posesión de la tierra en el ámbito judicial, vía los procedimientos establecidos por las leyes civiles, por lo que en caso de que alguna de las partes en litigio no estuviera conforme con la resolución del juez, contaba con los recursos que le otorgaba la legislación en la materia y en caso de acudir al amparo, este se desarrollaba bajo las reglas establecidas para este tipo de casos.

Ahora bien, con la promulgación del artículo 27 constitucional se estableció un nuevo régimen de la propiedad de la tierra, en palabras de la ex ministra de la SCJN, Martha Chávez Padrón, "el nuevo concepto de propiedad con función social, sujeta a las modalidades que dicte el interés público, hizo posible que la Nación recuperara definitivamente y reafirmara su propiedad originaria no sólo como un derecho, sino acaso como una obligación de conservar y regular el adecuado uso de sus recursos naturales".[159] Además de establecer las bases y principios de la reforma agraria como: la destrucción de los latifundios, el desarrollo de la pequeña propiedad, la creación de nuevos centros de población agrícola y las dos acciones agrarias principales, dotación y restitución de tierras.

Para llevar a cabo esta política se crearon distintas autoridades dependientes del poder ejecutivo, lo cual es un punto crucial para entender el desarrollo de los amparos en materia

---

[157] En este capítulo, Gloria Camacho analiza tres juicios de amparo a los que recurrieron las sociedades agrícolas de los pueblos del sur del Valle de Toluca en defensa de sus bienes comunales, véase especialmente CAMACHO, "Las sociedades agrícolas", pp. 260-278.
[158] ÁVILA, *El problema agrario*, pp. 11-12.
[159] CHÁVEZ, *El derecho agrario*, p. 283.

agraria, pues sus actuaciones y resoluciones, a pesar de contar con los elementos de un procedimiento del ámbito jurisdiccional, tenían una naturaleza de carácter administrativo.

En este punto es necesario retomar un planteamiento de Antonio Carrillo Flores quien afirma que desde el surgimiento del amparo en el siglo XIX se dio poca atención al amparo en materia administrativa. Menciona que Silvestre Moreno Cora dedicó varios capítulos a este tipo de amparos únicamente para relatar "los casos más interesantes decididos por la Corte en contra de cada una de las Secretarías de Estado"; en el código de 1908 se estableció "un capítulo especial para el amparo en materia judicial pero no para el amparo en materia administrativa"; en la constitución de 1917 tampoco se dedicó un sitio especial para este amparo y; en la ley de 1919 únicamente se fijó al tercero perjudicado en materia administrativa como el gestor del acto reclamado. Fue hasta la jurisprudencia de 1929, que líneas más abajo se presenta, que se sentaron "las bases para el tratamiento autónomo y específico del amparo administrativo", lo cual no significa que antes no existieran tesis en la materia, en este caso las relativas a la cuestión agraria.[160]

Hasta este momento se ha utilizado de forma genérica las palabras materia agraria o lo agrario para referirse a los temas relacionados con la propiedad o posesión de la tierra, no obstante, para efectos del juicio de amparo en el siglo XX, es pertinente decir que la materia agraria es delimitada por los actos, acuerdos y resoluciones emitidos por las autoridades agrarias, así como la ejecución de estos, que pudieran afectar a "los grandes y pequeños propietarios o poseedores rurales, los ejidos o los núcleos de población en general y los ejidatarios o comuneros individualmente considerados".[161]

Lo anterior sirve para reiterar que en esta tesis se hace la diferencia entre amparo en materia agraria,[162] para referirse de forma genérica al amparo promovido por los sujetos afectados por la aplicación de la legislación en la materia y amparo agrario, para explicar específicamente la figura surgida en 1963, como se verá en el quinto capítulo.

En suma, la naturaleza jurídica del juicio de amparo en materia agraria es de carácter administrativa adoptando sus mismos lineamientos, reglas y jurisprudencias, es decir, quedó

---

[160] CARRILLO, *La justicia federal*, p. 217.
[161] BURGOA, *El amparo*, p. 85.
[162] En 1976, la ley de amparo fue reformada incorporándose el libro segundo titulado "Del amparo en materia agraria", para referirse a lo que en esta investigación y siguiendo a Ignacio Burgoa, se ha denominado el amparo agrario ejidal o comunal.

"sometido al mismo régimen jurídico procesal que éste".[163] A manera de ejemplo, se rescata una tesis de 1929, presentada por el ministro Arturo Cisneros Canto, sobre la necesidad de agotar todos los medios de defensa establecidos en las leyes aplicables, antes de acudir al amparo. De acuerdo con Antonio Carrillo Flores, el ministro Cisneros "parte del supuesto de que el amparo es un recurso constitucional extraordinario, que, por su naturaleza misma, no debe proceder sino cuando el acto impugnado no sea reparable por ningún medio de defensa ordinario"; es decir, si el acto que se reclama cuenta con un recurso dentro de la propia esfera administrativa, debe agotarse antes de acudir a la justicia federal. Como se consigna en el siguiente capítulo, esta tesis fue de gran trascendencia en materia agraria.[164]

Finalmente, es importante señalar que el desarrollo y consolidación del derecho agrario mexicano, con la creación de los procedimientos de dotación y restitución de tierras y el reconocimiento de ejidos y comunidades como entes colectivos titulares de derechos y obligaciones, trajo como consecuencia "un giro radical en la apreciación del amparo, pues de un recurso individualista por naturaleza —como lo consideraban los juristas que trabajaron bajo el régimen de 1857—, pasó a ser un medio abierto a 'sujetos de derecho social', algo insospechado en tiempos anteriores a la segunda década del siglo XX".[165] Basta recordar los votos del ministro Ignacio Vallarta de 1882, por medio de los cuales se estableció que las corporaciones no contaban con la capacidad para adquirir en propiedad o administrar bienes raíces y por lo tanto tampoco tenían la personalidad para litigar en esos casos.

Ese giro en la concepción del amparo llevó a que los tribunales federales se convirtieran en auténticos espacios de conflicto y resistencia en materia agraria, tal y como se verá en los siguientes capítulos.

A manera de cierre

Este primer capítulo permitió presentar las distintas fases de construcción del juicio de amparo, a través de las siete leyes reglamentarias que lo regularon entre 1861 y 1936. En esos 75 años, el amparo se fue consolidando como una instancia protectora de las garantías constitucionales vulneradas por un acto de autoridad, delineándose la serie de actores, etapas,

---

[163] BURGOA, *El amparo*, p. 85.
[164] CARRILLO, *La Justicia Federal*, p. 220. Para profundizar en el tema del amparo administrativo, los argumentos del ministro Cisneros y las críticas a su criterio, véase el capítulo XIV de la obra citada.
[165] LIRA, "Del individualismo", p. 389.

plazos y figuras que lo conforman. En ese sentido, se ve a esta figura como una construcción histórica que, con sus distintas modificaciones sobrevivió a la serie de eventos políticos y militares, tanto internos como externos, por los que atravesó el país desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los primeros años del gobierno del general Lázaro Cárdenas.

Es de destacar que el antecedente inmediato del juicio de garantías se remonta a la constitución yucateca de 1841 y al Acta de Reformas de 1847, documentos constitucionales en cuya discusión y elaboración tuvieron participación Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, considerados dentro de la historia del derecho como los padres del amparo. Retomada la figura por el congreso constituyente de 1856-1857, el juicio de amparo se estableció en el artículo 101, otorgando facultades a los tribunales federales para resolver controversias que surgieran por leyes o actos de autoridad que vulneraran garantías individuales, por leyes o actos de autoridades federales que violaran o restringieran la soberanía de los estados y por las leyes o actos de las autoridades estatales, que invadieran la esfera de la autoridad federal.

Como ocurre muchas veces en el ámbito jurídico, quedaba pendiente la elaboración de la ley reglamentaria, razón por la cual varios juristas realizaron proyectos en la materia, destacando el de Manuel Dublán, que fue retomado en la discusión de la primera ley reglamentaria del amparo en 1861. Si bien esta ley fue corta comparándola con las que le precedieron, tiene gran importancia dentro de la historia del juicio constitucional, porque en ella se comenzaron a esbozar las figuras procesales que lo fueron formando como las partes que en el intervendrían, las características de la demanda, el órgano jurisdiccional competente para resolverlo y los efectos de la sentencia. A lo largo de las restantes seis normas que lo regularon hasta 1936, la figura jurídica que aquí se estudia se fue delineando y consolidando como una de las principales dentro del derecho mexicano.

Establecido el amparo en el sistema jurídico nacional, pronto su uso se extendió a diversas ramas del derecho como la penal, particularmente en lo relativo a la pena de muerte o al ámbito administrativo en cuestiones de impuestos o contra las decisiones de los jefes políticos, por solo mencionar algunos ejemplos. La cuestión agraria no fue la excepción y también se ventilaron asuntos relacionados con expropiaciones y despojos de tierras o conflictos por límites derivados de los juicios de apeo y deslinde, este último tema poco trabajado por la historiografía. Analizar estas causales en su conjunto nos arroja algunos indicios de la conflictividad agraria en diversas regiones del país en la segunda mitad del

siglo XIX, particularmente en el porfiriato, tópico en el que se podría profundizar en futuras investigaciones a partir del estudio de las fuentes judiciales.

A pesar del uso de los tribunales como una instancia en la que se ventilaron los conflictos del mundo rural decimonónico, estos no se resolvieron del todo y algunos de ellos encontraron un cauce con el estallido de la revolución mexicana en donde magonistas, zapatistas, villistas y carrancistas discutieron, aprobaron y en su caso llevaron a la práctica diversos proyectos para atender la cuestión agraria. Si bien estas medidas fueron transitorias y llevadas a cabo en un contexto revolucionario, es importante tomarlas en cuenta como antecedentes del derecho agrario surgido en el siglo XX.

En cuanto al juicio de amparo, llama la atención que uno de los programas revolucionarios, el magonista, retomara la figura y criticara su formalismo, proponiendo que se hiciera práctico, sencillo y expedito, lo cual parece que no ocurrió en los años posteriores a la promulgación de la constitución de 1917, pues en la ley de amparo de 1936 nuevamente se puso énfasis en este punto y aun estuvo presente en la discusión de la reforma constitucional de 1959 que creo el amparo agrario, como se verá en el último capítulo de esta tesis.

Al imponerse la fracción constitucionalista y su ley del 6 de enero de 1915, se dio paso a una reforma cuyas acciones agrarias principales fueron la dotación y la restitución de tierras y en donde jugaron un papel fundamental los órganos administrativos y las autoridades agrarias encargadas de llevarla a cabo, como la Comisión Nacional Agraria, las comisiones locales, los gobernadores y el presidente de la república, este último máxima autoridad en la materia. Es de destacar que el modelo ideado por el constitucionalismo excluyó al poder judicial de la cuestión agraria, posiblemente para llevar el reparto de una manera acelerada; no obstante, al inconformarse los propietarios con las resoluciones presidenciales que afectaban sus haciendas y ranchos e incluso algunos de los solicitantes de tierras a los que se les negó la acción intentada, terminaban acudiendo a la justicia federal a través del juicio de amparo como un mecanismo de resistencia para defender sus intereses o exigir un derecho. Esto provocó que entraran en escena los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y que tuvieran un rol fundamental en la resolución de este tipo de litigios, como se verá más adelante.

Finalmente, es necesario recordar que la naturaleza jurídica del amparo en materia agraria es de carácter administrativa, motivo por el cual siguió sus lineamientos, reglas y jurisprudencia. La diferencia fundamental para entender los casos que se presenten en las páginas que siguen, radica en que el amparo pasó de ser un medio de defensa eminentemente individual, a una institución que también tuteló los derechos de entes colectivos, en este caso de los solicitantes de tierras que después se convirtieron en ejidatarios, temas que se abordan a detalle a lo largo de los siguientes capítulos.

Capítulo 2

El juicio de amparo y el agrarismo institucional en el Estado de México, 1917-1931

El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo:
-No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.
-Es que el Llano, señor delegado...
-Son miles y miles de yuntas.
-Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua.
-¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran.
-Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá.
-Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. *Es al latifundio al que tienen que atacar*, *no al Gobierno que les da la tierra*.[1]

Esta diligencia de posesión de tierras descrita por Juan Rulfo deja ver el papel preponderante que asumió el gobierno posrevolucionario, mostrándose como el agente principal de la reforma agraria. Ahora, el enemigo de los solicitantes de tierras sería el hacendado y no las autoridades agrarias por cuyo conducto podrían acceder a sus peticiones, siempre y cuando cumplieran con los trámites y requisitos exigidos por la legislación vigente. La lucha por la tierra pasaba de la confrontación abierta en el campo de batalla a la disputa legal ante la burocracia agraria y en muchos de los casos al Poder Judicial de la Federación.

Armando Bartra ha definido este proceso como *el agrarismo institucionalizado*, es decir, como "una acción política por la que el Estado ratifica su poder institucional sobre la tenencia territorial, y cuando este poder se materializa en la reforma agraria quien se refuerza, en principio, no es una u otra clase rural sino el propio Estado posrevolucionario, que aparece como instancia superior capaz de arbitrar los conflictos, regular las relaciones entre las clases y eventualmente privilegiar a ciertos sectores".[2] Dicho poder institucional tuvo como fundamento legal el artículo 27 constitucional y sus distintas leyes secundarias.

Fijadas las reglas del juego de este agrarismo hecho gobierno, es decir, establecido el marco común material y simbólico en el que se desenvolverían las disputas agrarias, se puso en práctica el reparto de tierras a nivel nacional. En términos generales, los peticionarios promovieron miles de solicitudes ante las comisiones locales y los gobiernos estatales en una

[1] RULFO, "Nos han dado", pp. 15-16. Las cursivas son mías.
[2] BARTRA, *Los herederos*, p. 22.

primera instancia, quienes emitían una resolución provisional y en su caso ponían en posesión de los solicitantes las tierras dotadas. El expediente se turnaba en segunda instancia a la Comisión Nacional Agraria quien emitía un dictamen puesto a consideración del presidente de la republica quien daba la resolución definitiva.

Dicha resolución dependió no solo de cuestiones legales sino de otros factores como la capacidad de organización y movilización de los peticionarios, que en ciertos casos les permitió legalizar tierras con las que ya contaban, pero que en otros no fueron beneficiados; de la respuesta (legal y extralegal) de los hacendados expropiados y; de la actitud tomada por las autoridades agrarias que en algunas ocasiones fueron acusadas de beneficiar a los propietarios afectados y en otras, su acción hizo posible enfrentar a cacicazgos regionales.

Una vez agotado el trámite ante las autoridades agrarias, cuya naturaleza jurídica era administrativa, tanto propietarios como peticionarios, contaban con la posibilidad de acudir a la instancia jurisdiccional a promover el juicio de amparo ante los juzgados de distrito (dependientes del Poder Judicial Federal), para inconformarse por la resolución presidencial emitida y una vez dada la sentencia por el juez en turno, tenían la facultad de pedir su revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto motivó que en algunas ocasiones se acusara a estos órganos de estar al servicio de los hacendados y de ser un obstáculo a la reforma agraria.

Ante esta descripción, vale la pena retomar algunas de las interrogantes mencionadas en la introducción con respecto al juicio de amparo en esta primera etapa de la reforma agraria: ¿Qué tanto fue utilizado por aquellos que se consideraron agraviados por la puesta en práctica del naciente derecho agrario? ¿En qué condiciones y casos habrá sido un obstáculo para llevar a cabo el reparto de tierras? ¿Cuál fue el papel de las partes inmiscuidas en estos procesos?

A partir de estas preguntas, el propósito de este capítulo consiste en analizar los juicios de amparo promovidos contra el reparto de tierras en el Estado de México, en el periodo 1917-1931, para tratar de determinar su uso y la actuación de cada uno de los participantes en estos litigios. Se adelanta que, si bien la mayoría de los juicios fueron promovidos por los propietarios afectados, hubo casos en que los pueblos también acudieron a los tribunales federales para defender u obtener un derecho.

Para cumplir con este objetivo, este capítulo se encuentra estructurado en cuatro partes. En la primera de ellas se realiza un acercamiento al artículo 27 como rector de la reforma agraria, así como a algunas de sus leyes reglamentarias, poniendo énfasis en el *Reglamento Agrario* de 1922; en segundo lugar, se describe de forma breve la política agraria en el Estado de México; en un tercer apartado se presenta un panorama del uso del juicio de garantías, centrándose en los años 1925-1927, por tratarse del periodo en que se promovió el mayor número de juicios y; por último, se reconstruyen cuatro amparos derivados de los procedimientos de dotación promovidos por tres poblados ubicados en el municipio de Naucalpan de Juárez. Cabe señalar que, si bien se pone la lupa en estos ejemplos, a lo largo del texto se hace referencia a otros amparos consultados tanto en archivo, como en investigaciones ya publicadas.

Tomando en cuenta que la reforma agraria a nivel nacional no siguió una línea recta ni fue homogénea, y sus beneficios tampoco, se trata de poner en el tablero de la justicia agraria a las diversas piezas que jugaron en este enmarañado mundo de litigios.

2.1 El artículo 27 constitucional: rector de la reforma agraria

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva constitución que serviría de base para los distintos gobiernos posrevolucionarios. Siguiendo a Pablo Mijangos, este texto "buscaba compatibilizar los grandes objetivos sociales de la Revolución con el antiguo modelo liberal, basado en la división de poderes, la elección democrática de las autoridades y la protección judicial de los derechos".[3]

Dentro de sus innovaciones, además de lo ya comentado en el capítulo anterior, se pueden destacar los artículos 27 y 123 que establecieron derechos para grupos desfavorecidos de la sociedad mexicana, campesinos y obreros respectivamente. En el caso que nos ocupa, la importancia del artículo 27 como rector de la reforma agraria es crucial para entender las figuras jurídicas que de él surgieron y que regularon las diversas políticas agrarias a lo largo del siglo XX.[4]

[3] MIJANGOS, *Historia mínima*, p. 113.
[4] Sobre la discusión del artículo 27 véase ROUAIX, *Génesis*, pp. 155-191; *Diario de los debates*, t. III, pp. 567-612.

En primer lugar, se señaló a las tierras y aguas como propiedad de la nación, la cual contaba con el derecho de transmitirlas a particulares para constituir la propiedad privada, imponiéndole las modalidades que dictara "el interés público" y únicamente se podría disponer de ella por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Estos serían los principios legales para llevar a cabo el reparto agrario.

Un segundo aspecto fue la regulación del aprovechamiento de los "elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación", además de proponer el establecimiento de las medidas necesarias para fraccionar los latifundios, desarrollar la pequeña propiedad, crear nuevos centros de población agrícola y fomentar la agricultura.

El tercer elemento para resaltar fue la facultad que se otorgó a los pueblos, rancherías y comunidades que carecieran de tierras y aguas, o no las tuvieran en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de su población, para ser dotados de ellas, "tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad", así como la confirmación de aquellas dotaciones que hasta ese momento se hubieren dado de conformidad con la ya comentada ley del 6 de enero de 1915. Es de destacar que en este punto se le da la misma protección constitucional tanto a las dotaciones como a la pequeña propiedad, tema que se toca a profundidad en el capítulo cuatro.

A otro tipo de poblaciones como condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones o tribus que de hecho o por derecho mantuvieran "el estado comunal", se les reconoció la capacidad de disfrutar en común de las tierras, bosques y aguas que ya les pertenecían y aquellas que en un futuro se les restituyeran y en caso de que no procediere la restitución se le otorgarían "en calidad de dotación sin que en ningún caso deje de asignársele las que necesitare". Con ello quedaban elevadas a rango constitucional las dos principales figuras de la reforma agraria mexicana: la dotación y la restitución de tierras y comenzaba a configurarse una nueva rama del derecho en México, el derecho agrario.

Como lo ha expresado Andrés Lira, a pesar de que "en la mente de los legisladores estaba la propiedad individual como la forma más acabada y deseable de derecho y disfrute de la tierra. Aceptaron entonces un colectivismo transitorio, que, como otras soluciones

provisionales, habría de durar para afirmarse y generalizarse".[5] Dicho de otro modo, la inercia del movimiento revolucionario había forzado al constituyente del 17 a reconocer a pueblos, comunidades y otras colectividades como sujetos de derecho, a diferencia de lo planteado por el ministro Vallarta a fines del siglo XIX, como se comentó en el capítulo anterior.

Por su parte, la fracción VII del artículo 27 facultó a las legislaturas estatales para expedir las leyes que servirían de base para el fraccionamiento de las grandes propiedades, fijando la extensión máxima de tierra de que podía ser propietario un "solo individuo o sociedad legalmente constituida"; en caso de quedar un excedente en la extensión fijada, este debería ser fraccionado y puesto a la venta y; en caso de que el propietario se negare a fraccionar, este se llevaría a cabo por el gobierno estatal vía expropiación.[6]

Tomando en cuenta lo anterior, la legislatura del Estado de México al promulgar la constitución en noviembre de 1917 estableció el título cuarto denominado "Bases de la legislación agraria", que en su artículo 203 definió como latifundio a "todas las propiedades rústicas cuya extensión exceda de setecientas hectáreas, en despoblado, y de cien dentro de un círculo de cuatro kilómetros de radio en torno del centro de la plaza principal de todo poblado de más de un mil habitantes".[7]

Los dueños de las fincas que excedieran estas proporciones quedaban obligados a fraccionar la parte excedente a partir de la entrada en vigor de la constitución y hasta el último día de diciembre de 1917. En dichos fraccionamientos los arrendatarios, aparceros y vecinos contaban con derecho de preferencia para la adquisición de las fracciones, en caso de no hacer uso de ese derecho, las tierras podían ser vendidas a terceras personas.[8]

Estos preceptos fueron retomados por algunos hacendados para llevar a cabo los fraccionamientos de sus propiedades, que simulados o no, utilizaron como argumento en algunos de los juicios de amparo que promovieron, al presentar sus terrenos como pequeña propiedad. Timothy James recoge un amparo interpuesto en 1918, por Enrique G. de Salceda en contra de la dotación que beneficiaría al pueblo de San Pedro Totoltepec, en el Estado de

---

[5] LIRA, "Personalidad y propiedad". Agradezco al Dr. Andrés Lira el proporcionarme una copia de esta ponencia.
[6] "Constitución política de los Estados", p. 151.
[7] "Constitución política del Estado Libre", pp. 841-842.
[8] Artículo 205 y 206 en "Constitución política del Estado Libre", p. 842.

México. "De Salceda era el propietario de un bien raíz de gran dimensión" y en el amparo ante la Corte intento probar que sus tierras debían ser protegidas como una pequeña propiedad. Los ministros rechazaron sus alegatos y negaron el amparo.[9] Un caso similar se presentó por parte de José Luis Cuevas, propietario de la Hacienda de Echegaray, ubicada en el municipio de Naucalpan, quien promovió amparo en contra de la resolución presidencial que dotó de tierras al pueblo de Santa Cruz Acatlán, ofreciendo como pruebas varios contratos de compraventa para acreditar el fraccionamiento de su propiedad y así demostrar que se trataba de una pequeña propiedad.[10] El juez de distrito otorgó el amparo al quejoso dando por legal el fraccionamiento y la Suprema Corte sobreseyó el juicio.

Si el artículo 27 fue la base constitucional del reparto de tierras, faltaba la expedición de la respectiva ley reglamentaria, la cual fue elaborada de acorde con la visión agraria del ejecutivo federal en turno, que para el caso del periodo estudiado en este capítulo corresponde a los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, principalmente.

Obregón gobernó el país del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Su política agraria en cifras se reflejó en un total de 1 100 117 hectáreas (ver cuadro anexo 6). De acuerdo con Eduardo Escárcega, en la entidad mexiquense, se otorgaron 46 935 hectáreas resultando 18 242 beneficiados.[11] Este reparto se llevó a cabo con dos instrumentos legales: la *Ley de ejidos* de 1920 y el *Reglamento Agrario* de 1922 que se explica más adelante.

A pesar de que los números nacionales son bajos si los comparamos con el periodo cardenista,[12] la oposición por parte de los hacendados no se hizo esperar y recurrieron a distintos medios para defender sus propiedades como la creación de guardias blancas para intimidar a los solicitantes de tierras, su complicidad con autoridades de distintos niveles y el acudir a los litigios ante los tribunales federales; estas formas de actuar no fueron excluyentes y dependiendo de la zona o región del país de que se trate es posible encontrarlas entrelazadas. Este aspecto es fundamental en las investigaciones acerca de la reforma agraria,

---

[9] JAMES, *Revolución social*, p. 61.
[10] AHCCJT, AI, exp. 114/1925, fs. 12-20.
[11] Existen discrepancias en las cifras presentadas en las distintas investigaciones de la reforma agraria, por solo mencionar algunos autores que se refieren al gobierno de Obregón, Eyler Simpson aporta la cifra de 1.2 millones de hectáreas, al igual que Michel Gutelman y Marte R. Gómez da un número de más de 1.6 millones. En este caso presento los datos dados por Everardo Escárcega, que los recopiló a partir de las resoluciones publicadas en el *Diario Oficial*, ESCÁRCEGA, "El princípio", pp. 65-66.
[12] En dicho periodo se resolvieron 10 398 acciones agrarias que representaron 17 574 876 hectáreas entregadas y 768 182 beneficiados, ESCÁRCEGA, "El principio", pp. 250-251.

ya que, si bien en este trabajo se pone énfasis en la arista jurídica, no deben descartarse la serie de factores que influyeron en la decisión de los jueces y magistrados, ni en el arcoíris de actos de las partes en conflicto.

El primer mandatario si bien manifestó estar de acuerdo con el reparto de tierras, nunca tuvo como propósito acabar totalmente con los latifundios, en un discurso recuperado por Eyler Simpson manifestó: "No debemos destruir las grandes propiedades antes de crear la pequeña propiedad, ya que podría producirse un estado de desequilibrio que nos condujera a la miseria. Soy de la opinión de que debemos proceder con cautela".[13] Y así se mantuvo en los cuatro años de gobierno.

De 1924 a 1928 Plutarco Elías Calles gobernó el país y en materia agraria dio continuidad a la política iniciada por Obregón. Al igual que su predecesor, veía la creación de ejidos como una etapa de transición hacia la pequeña propiedad. En este periodo presidencial se distribuyeron 2 972 876 hectáreas (ver cuadro anexo 6). En el Estado de México se llevaron 165 acciones agrarias, que se materializaron en 111 558 hectáreas para 44 951 solicitantes.[14] De acuerdo con las cifras aportadas por Eduardo Escárcega, en ambos periodos presidenciales la entidad mexiquense fue la que contó con el mayor número de beneficiados de todo el país.

En estos dos periodos presidenciales la reforma agraria "fue más una herramienta de pacificación social", que buscó el impulso del desarrollo capitalista de la agricultura por lo que se incentivó la ocupación de las tierras no cultivadas sobre las que "ya eran productivas y estaban en manos de empresarios modernos" y el ejido fue concebido como "una garantía de la paz social en el campo, un medio de pacificación controlado de manera centralizada por el Estado a través del marco jurídico y financiero, y de una cadena de instituciones y funcionarios jerarquizados a partir del Ejecutivo federal".[15] Cabe mencionar que a nivel estatal e incluso regional, esta generalidad tuvo variaciones dependiendo del ritmo al que se implementó el reparto de tierras y el actuar de los sujetos agrarios.

Para cumplir con ese propósito, Calles dio un impulso a la irrigación de varias regiones del país, al otorgamiento de créditos, a la construcción de caminos, a la organización

---

[13] SIMPSON, "El ejido", p. 54.
[14] ESCÁRCEGA, "El principio", p. 67-68. Para el gobierno de Calles, Simpson da un total de 3.2 millones de hectáreas distribuidas, Gutelman 3 millones y Marte R. Gómez, poco más de 3.3 millones.
[15] MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 75-76.

de los ejidos y a la creación de la pequeña propiedad. "El ejido tenía cabida como una modalidad transitoria hacia el gran objetivo. Por eso los colaboradores y técnicos del régimen, incluso el propio General Calles, consideraron que la etapa del reparto había concluido, argumento que tomaría forma expresa conforme corrían los años para el gobierno Callista".[16] Sobre esto último se regresa más adelante.

Una vez que se tiene una visión general de la política agraria del periodo, toca revisar la legislación que reguló los procedimientos agrarios, por lo que no está de más recordar que el juicio de amparo deriva de una posible violación de garantías en un procedimiento agrario de naturaleza administrativa.

Si bien en la década de los años veinte se promulgaron cuatro leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional (1920, 1922, 1927 y 1929), los casos que aquí se estudian se llevaron a cabo principalmente con el *Reglamento Agrario* de 1922, por lo que se pone énfasis únicamente en esta ley y se realiza una breve referencia a la ley de 1927, retomando algunos elementos de las leyes de 1927 y 1929 en el siguiente capítulo.

2.2 El *Reglamento Agrario* de 1922

En diciembre de 1920, Álvaro Obregón promulgó la *Ley de ejidos*,[17] primera reglamentaria del artículo 27 constitucional. En ella se habían retomado las disposiciones de la ley del 6 de enero de 1915 y de las circulares[18] expedidas por la Comisión Nacional Agraria (CNA) hasta ese momento. A decir de Lucio Mendieta, también introdujo "nuevos preceptos de gran importancia en la dirección de la política agraria"[19] como el intento por definir la extensión de los ejidos, siendo la mínima cantidad aquella que pudiera "producir a cada jefe de familia una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal medio en la localidad"; la definición de ejido como "la tierra dotada a los pueblos"; el que los solicitantes demostraran la necesidad o conveniencia de poseer tierras; la supresión de las posesiones provisionales, punto principal que se consideró necesario para agilizar la entrega de tierras y; la creación de la Junta de Aprovechamientos para administrar las tierras dadas al ejido.

---

[16] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 239.
[17] Para profundizar en los motivos que llevaron a la promulgación de esta ley véase ARBOLEYDA, *El nacimiento*, pp. 49-59.
[18] Desde su creación y hasta la promulgación de la Ley de ejidos, la CNA expidió 48 circulares que sirvieron para resolver los obstáculos a los que se había enfrentado la puesta en acción de la normatividad agraria.
[19] MENDIETA, *El problema agrario*, p. 193.

A pesar de estas primeras definiciones en la materia, el trámite establecido era tardado y complicado al exigir bastantes requisitos, se había establecido "una tramitación tan lenta y engorrosa que hacía muy difícil el cumplimiento de las promesas agraristas de la revolución",[20] aunado a la eliminación de las posesiones provisionales, lo que provocó el descontento de algunos de los solicitantes de tierras.

Posiblemente por estas razones, el 22 de noviembre de 1921, el presidente Obregón emitió un decreto que abrogó la *Ley de ejidos* y otorgó facultades al ejecutivo federal para que dictará "todas las disposiciones conducentes a reorganizar y reglamentar el funcionamiento de las autoridades que para su aplicación creó el Decreto preconstitucional de 6 de enero de 1915". Este decreto también creó la Procuraduría de Pueblos, cuyo fin era patrocinar de forma gratuita a los pueblos que así lo solicitaran, en los procedimientos de restitución o dotación de tierras.[21] A pesar del poco tiempo de vigencia de la *Ley de ejidos*, representó el primer paso en la sistematización de la legislación agraria y en la cimentación del procedimiento dotatorio de tierras.

En uso de las facultades que le confirió el decreto mencionado, Álvaro Obregón promulgó el *Reglamento Agrario*,[22] el 10 de abril de 1922. Este ordenamiento retomó elementos de la *Ley de ejidos* como el requisito a los poblados solicitantes de contar con la categoría de pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades y agregó a los condueñazgos, a los núcleos de población que habitaran haciendas abandonadas y que tuvieran la necesidad de cultivar los terrenos inmediatos para poder subsistir y; las ciudades y villas cuya población hubiese disminuido de forma considerable o bien, perdieran su fuente de riqueza, "así como su carácter de centros industriales, comerciales o mineros" (art. 1). Dicha categoría se acreditaba mediante informe del gobernador del estado o territorio en cuya jurisdicción se ubicara el poblado.

Este listado de categorías serían los únicos facultados para recibir tierras, de no acreditar este requisito quedaban relegados del reparto. Otros grupos que quedaron excluidos por ley fueron los peones acasillados a los que únicamente se les otorgó el derecho de solicitar

---

[20] SILVA, *El agrarismo mexicano*, p. 280.
[21] "Decreto abrogando", p. 309.
[22] Dado que los casos a analizar en este capítulo derivan del trámite de dotación, dejo de lado otros elementos del *Reglamento Agrario*, particularmente lo relacionado con el procedimiento de restitución. En este apartado se utiliza el reglamento publicado en FABILA, "Reglamento Agrario", pp. 327-332.

terrenos nacionales para fundar una colonia (art. 3), siendo hasta el cardenismo que la revolución les hizo justicia y contaron con plena personalidad jurídica para solicitar ejidos. En el capítulo cuatro se profundiza en la regulación jurídica de estos peones.

Un cambio importante fue lo relativo a la extensión de los ejidos, la cual se determinaría conforme a los datos que arrojara el censo de jefes de familia y de varones solteros mayores de 18 años, avecindados en el pueblo solicitante (art. 12); asignándoseles a cada uno de ellos de tres a cinco hectáreas tratándose de tierras de riego o de humedad, de cuatro a seis si eran tierras de temporal con lluvia abundante y de seis a ocho hectáreas de tierras de temporal de otra clase. En regiones áridas o cerriles, la cantidad de hectáreas asignadas podía llegar a ser del triple número de las mencionadas.

Este reglamento incorporó los supuestos en que las propiedades quedarían exentas de ser afectadas. Fue el caso de aquellas que no contaran con más de 150 hectáreas en terrenos de riego o humedad; las no mayores a 250 hectáreas en terrenos de temporal que aprovecharan lluvia anual abundante; las no mayores a 500 hectáreas en tierras de temporal de otras clases y; las propiedades que representaran una unidad agrícola industrial en explotación (art. 14). Si bien no se utiliza el término inafectable, el efecto jurídico es similar al surgido en leyes posteriores, como se verá en otros capítulos de este trabajo.

De decretarse la dotación, quedaban excluidos los edificios de cualquier naturaleza, las huertas o plantaciones de árboles frutales que hubieren sido hechas antes de la promulgación de esta ley, las plantaciones de café, cacao, vainilla, hule y otros similares, las obras de captación y los canales de conducción de aguas cuando fueron destinados a regar terrenos que se encontraran fuera del ejido.

En caso de otorgarse una posesión provisional o definitiva se daría a los propietarios afectados “el tiempo necesario para levantar la cosecha pendiente que exclusivamente corresponderá a ellos”. Tratándose de magueyeras destinadas a la elaboración de bebidas embriagantes, se les condecía el plazo de un año para levantar sus cosechas.

Por lo que toca a las autoridades agrarias, confirmó las ya existentes Comisión Nacional Agraria (CNA), Comisión Local Agraria (CLA) y Comité Particular Ejecutivo (CPE), no obstante, incorporó lo que se podría considerar como el inicio de la profesionalización del sector agrario al precisar que la CNA, estaría integrada por nueve miembros, de los cuales tres serían agrónomos, dos ingenieros civiles, y las restantes,

personas de honorabilidad indiscutible a juicio del presidente de la república. Lo mismo ocurrió con las comisiones locales que quedarían integradas por un agrónomo, un ingeniero civil y tres particulares de reconocida honorabilidad. En ambos casos la ley señaló que al momento de obtener el nombramiento o durante el ejercicio de sus cargos, no debían contar con propiedades que pudieran resultar afectables por alguna restitución o dotación. Llama la atención que en este momento no se consideraran abogados para participar en estos órganos como en años posteriores lo propusieran distintos juristas.

Uno de los cambios más significativos con respecto a la *Ley de ejidos* fue el regreso a la resolución y posesión provisionales dictadas por el gobernador. Llevado el trámite por la comisión local y resuelto como favorable, dentro del mes siguiente el comité particular daba la posesión al pueblo beneficiado y el delegado estatal de la CNA turnaba el expediente a su superior para que consultara el asunto junto con el ejecutivo federal por conducto del Secretario de Agricultura y Fomento, con el fin de emitir la resolución definitiva. Nuevamente el procedimiento dotatorio se tornó biinstancial, lo que en términos jurídicos posibilitó que los afectados por una expropiación intentaran obtener la protección de la justicia federal desde la resolución del gobernador.

Finalmente, el *Reglamento Agrario* estableció de forma explícita el derecho con que contaban los propietarios afectados para presentar "todos los escritos y pruebas" en la defensa de sus intereses. Una vez concluidas las "diligencias respectivas" se les notificaba que contaban con un plazo de 30 días para alegar ante la CNA lo que a su derecho conviniere (art. 28).

Esto fue de gran relevancia, ya que abrió la puerta para que los dueños de las haciendas y ranchos, trataran de desvirtuar las solicitudes de los pueblos alegando la falta de la categoría política; presentaran objeciones a los censos; exhibieran contratos de peonaje o de compraventa (de parte o partes de las haciendas) para acreditar que se trataba de pequeñas propiedades y por ello no fueran consideradas en el trámite y; más aún, alegaran la falta de cumplimiento de las formalidades esenciales de todo procedimiento (ser notificado del inicio, la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de formular alegatos y el obtener una sentencia que dirima las cuestiones debatidas), lo cual vulneraba sus garantías

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.[23] A este conjunto de actividades legales habría que agregar los medios extralegales a los que recurrieron los propietarios en defensa de sus intereses.

Fue así que un "procedimiento que había sido hasta entonces puramente administrativo, expropiatorio por lo que respecta a los propietarios de las fincas afectadas y de simple relación de trámites entre los núcleos de población solicitantes y las autoridades agrarias, se transformó en una verdadera contienda judicial ante autoridades administrativas".[24] Las violaciones a alguna de las etapas de este trámite administrativo seguido en forma de juicio, existieran o no, fueron alegadas en las demandas de amparo que más adelante se analizan.

Siguiendo a Pablo Mijangos, "a partir de 1923 la Corte empezó a conceder un número cada vez mayor de amparos contra resoluciones de restitución y dotación ejidal, por lo general a causa de violaciones a la garantía de audiencia de los terratenientes". La propia Corte señalo que "el otorgamiento de esta clase de amparos no tenía por objeto desconocer 'el derecho de los pueblos para que se les dote de tierras', sino únicamente subsanar las irregularidades cometidas por las autoridades respectivas". Si bien las autoridades agrarias y particularmente el presidente de la república tenían la última palabra en los asuntos sometidos a su consideración, estaban obligadas a seguir el procedimiento establecido en la ley, por lo que los jueces de distrito y la Suprema Corte no podían "ignorar este reglamento en un juicio de amparo".[25]

El *Reglamento Agrario* tuvo varias modificaciones, la más relevante fue el decreto del 23 de julio de 1923, que reformó el artículo 27 estableciendo que el CPE daría la posesión provisional al Comité Particular Administrativo (CPA). Bajo este ordenamiento es que se desahogaron los procedimientos que se estudian en este capítulo.

El reglamento se mantuvo vigente hasta abril de 1927, cuando se promulgó la *Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas*, *Reglamentaria del Artículo 27 de la*

---

[23] Un ejemplo en donde se alegó una violación al artículo 16 constitucional porque el presidente no había motivado legalmente la causa del procedimiento fue el amparo otorgado a Ana Fernández viuda de Sela, contra la dotación de San Mateo Ayecac, estado de Tlaxcala, véase JAMES, *Revolución social*, pp. 66-68.
[24] MENDIETA, *El problema agrario*, p. 206.
[25] MIJANGOS, *Historia mínima*, p. 130.

Constitución, obra del destacado jurista, político y diplomático, Narciso Bassols.[26] Al parecer de Lucio Mendieta, con la nueva reglamentación se intentó resolver "una situación que se hacía insostenible desde el punto de vista político", ya que los pueblos solicitantes de tierras, después de recibir sus ejidos y "de luchar años enteros por conservarlos", en distintas ocasiones se vieron privados de ellos por los amparos concedidos por la Suprema Corte a los propietarios, por alguna deficiencia en el trámite. "Por este motivo, se trató de organizar el procedimiento agrario de acuerdo con una técnica jurídica que lo hiciera inatacable constitucionalmente".[27] A pesar de ello, los afectados con resoluciones dotatorias continuaron promoviendo el juicio de garantías hasta 1931, año en que se reformó la ley de enero de 1915.

Hasta aquí la descripción formal del procedimiento administrativo de dotación, corresponde ahora adentrarse al cómo se implementó esta primera etapa de la reforma agraria en el Estado de México y qué papel jugó el juicio de amparo.

2.3 El juicio de amparo y la reforma agraria en el Estado de México, 1917-1931

Si bien en el capítulo anterior se hizo una breve referencia a la acción agraria del gobierno de Madero, cabe precisar que su llamamiento a la lucha armada tuvo eco en diversos pueblos mexiquenses de las regiones de Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Sultepec, Temascaltepec y Tenancingo, entre otros; que al triunfo de la causa reclamaron tierras, tal fue el caso de Capultitlán y San Felipe Tlalmimilolpan.[28]

Con el rompimiento entre Madero y Zapata, algunos pueblos como Malinalco, Tecomatlán, Meyuca, Jilotzingo y Mexicaltzingo, hicieron suyo el Plan de Ayala y solicitaron la resolución de los conflictos agrarios que tenían con haciendas y otros poblados.[29] Ante el avance de las tropas zapatistas sobre la entidad y tomada la capital en

[26] Narciso Bassols nació el 22 de octubre de 1897, en Tenango del Valle, estado de México. Licenciado en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM (1920), en donde impartió las clases de ética, lógica y derecho constitucional entre 1920-1931, fue director de esta de 1928 a 1929. Fue secretario general del gobierno del Estado de México, durante la gestión de Carlos Riva Palacio (1925-1926) y a nivel federal se desempeñó como secretario de educación pública (1931-1934); secretario de gobernación (1934) y secretario de hacienda (1934-1935). A nivel diplomático, fue designado embajador en Gran Bretaña (1935-1937), Francia (1938-1939) y la Unión Soviética (1944-1946). Falleció el 24 de julio de 1959, CAMP, *Biografía de políticos*, p. 53.
[27] MENDIETA, *El problema agrario*, p. 210.
[28] MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 131-132.
[29] MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 132-134.

diciembre de 1914, fue nombrado Gustavo Baz[30] como gobernador quien para atender la problemática agraria, creó dentro de la Secretaría General de Gobierno, una sección de agricultura. En su breve gobierno, Baz atendió las solicitudes de los pueblos de Zepayautla, Tlacotepec, Tultepec, Atzcapotzaltongo, Huichochitlán, San Pedro Totoltepec y San Buenaventura.[31] Como se mencionó en el capítulo primero, con el triunfo de las fuerzas constitucionalistas la reforma agraria zapatista en el estado fue desconocida y los reclamos de los pueblos tuvieron que ajustarse a la nueva legislación, aunque es probable que algunos de los solicitantes ya contaran con la posesión de los tierras y este reajuste las hubiera cubierto con un nuevo manto de legalidad.

Antes de adentrarse al análisis de los juicios de amparo, es necesario esbozar la política agraria que siguieron los gobernadores de la entidad en el periodo de estudio.

En 1917 fue elegido gobernador Agustín Millán, quien había sido gobernador y comandante militar de Veracruz en 1915 y después del estado de Puebla, al que renunció en 1916 para postularse como candidato a la gubernatura del Estado de México. Durante su gobierno le tocó hacer frente a la epidemia provocada por la llamada gripe española y a la escasez de granos, específicamente maíz; para lo cual autorizó a los presidentes municipales dar posesión temporal de tierras en las que pudieran sembrarse cereales.

De acuerdo con Alfredo Castellanos, "el principal objetivo del gobernador Agustín Millán no fue aplicar las reformas sociales contenidas en la constitución estatal, sino asegurar la hegemonía del grupo carrancista, dada la inestabilidad política que propiciaban los ataques zapatistas, quienes efectuaban incursiones militares en la porción sur y oriente del Estado de México".[32] En materia agraria, Millán "nunca se mostró agresivo con los grandes poseedores de terrenos", por el contrario, "realizó una importante campaña para asegurar la pequeña propiedad".[33]

---

[30] En diciembre de 1914, fuerzas zapatistas dirigidas por el general Francisco V. Pacheco tomaron el control de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México y nombraron gobernador interino al entonces coronel Gustavo Baz Prada, quien declaró que se comprometía a llevar a cabo los postulados del Plan de Ayala. Su gobierno concluyó en octubre de 1915 con el avance de las tropas carrancistas sobre el centro del país. Para tener un panorama general de las acciones en materia agraria de Baz véase ALANÍS, HISTORIA *de la revolución*, pp. 174-186.

[31] MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 136-137.

[32] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 145.

[33] AGUADO, *Una mirada*, p. 64.

Al proclamarse el Plan de Agua Prieta en 1920, el gobernador se mantuvo fiel a Venustiano Carranza, acompañándolo en su camino hacia Veracruz, pero este fue muerto en "Aljibes, Puebla, el 13 de mayo, defendiendo al presidente",[34] lo cual provocó que se nombrara a Darío López como jefe del ejecutivo local, pero no fue ratificado por el Senado nombrándose de manera provisional al general Abundio Gómez, quien ocupó el cargo seis meses y se convertiría en uno de los principales políticos de la entidad.

Entre 1917 e inicios de 1921, se promovieron múltiples acciones agrarias, "de hecho, la información existente permite pensar que el Estado de México fue una de las entidades donde se dieron las primeras acciones de este tipo".[35] Siguiendo a Eduardo Aguado, este reparto se llevó a cabo principalmente en 13 municipios, concentrándose la tercera parte en la región de Toluca. Las poco más de 5 936 hectáreas entregadas beneficiaron a 4 761 solicitantes, lo que representó menos del 1% del total de tierras repartidas hasta 1986. El 78% de esas tierras fueron de superficie laborable y el resto de otro tipo como montes, pastizales y cerriles.[36]

El reparto en el resto de la década quedó a cargo de tres gobernadores que entregaron un total de 264 635 hectáreas beneficiando a 84 185 personas, sin embargo, 142 841 solicitantes, poco más del 58%, quedaron con *derechos a salvo* (ver cuadro 1). En otras palabras, fue mayor el número de sujetos a los que se les reconoció el derecho a tener tierras, que aquellos que realmente la obtuvieron.

Cuadro 1. Reparto ejidal en el Estado de México, 1921-1929

Gobernador	No. de hectáreas	Sujetos beneficiados	Sujetos con derechos a salvo
Manuel Campos (1921)	7 406	2 298	5 231
Abundio Gómez (1921-1925)	64 457	25 386	50 000
Carlos Riva Palacio (1925-1929)	192 772	56 501	87 610
Total	**264 635**	**84 185**	**142 841**

Fuente: elaboración propia con base en AGUADO, *Una mirada*, pp. 69-79.

[34] ARREOLA, *La sucesión*, p. 39.
[35] AGUADO, *Una mirada*, p. 65.
[36] AGUADO, *Una mirada*, pp. 66-68.

La mayor parte de las tierras repartidas se concentró en la gestión de Carlos Riva Palacio, que "sólo fue superada en el periodo cardenista en cuanto a la cantidad de tierra distribuida".[37] Esta etapa, como se verá más adelante, coincide con el mayor número de amparos promovidos en la entidad, por lo que se pone especial atención a la política agraria de este periodo.

La política del gobernador Carlos Riva Palacio,[38] quien también fuera diputado federal, senador y presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR) entre 1933 y 1934, no puede entenderse sin tomar en cuenta que formó parte del proyecto enarbolado por los hermanos Abundio y Filiberto Gómez, quienes tuvieron el control político de la entidad por casi 20 años gracias al apoyo que dieron al Plan de Agua Prieta y a la cercanía con Álvaro Obregón y después con Plutarco Elías Calles.

Para consolidar su control político y a iniciativa de Filiberto Gómez, se fundó en 1925 el Partido Socialista del Trabajo del Estado de México (PSTEM), que pronto se convirtió en "un medio de poder de selección y centralización política", ya que participó en la creación de sindicatos "y en el impulso de movimientos agraristas para fraccionar propiedades de latifundistas no identificados con su grupo"; además de ser el instrumento del gobierno para "meter en cintura" a caciques, terratenientes y a los sectores obreros y campesinos "que no eran afines a sus políticas".[39]

De acuerdo con el estudio de Jenaro Reynoso acerca de las facciones políticas en la entidad, "la experiencia política" desarrollada por el gomismo "le hizo ver que en la agenda pública y en la realidad social existía el problema del campo que debían enfrentar los políticos de esos años, por lo menos para mediatizarlo"; de tal suerte que el partido "se apropió de la bandera del agrarismo".[40] Lo cual quedó plasmado en el programa del PSTEM que entre otras cosas estableció: el combate a los latifundios y su fraccionamiento; la petición al gobierno de otorgar de forma rápida la dotación de ejidos a los pueblos necesitados y; la

[37] AGUADO, *Una mirada*, pp. 68.
[38] Carlos Riva Palacio Carrillo nació en 1892 en la ciudad de Toluca y falleció en 1936 siendo embajador en Costa Rica. Militó en el Partido Socialista de los Trabajadores del Estado de México y fue electo gobernador del estado para el periodo 1925-1929.
[39] MALDONADO, *Grupos políticos*, p. 44.
[40] REYNOSO, "Facciones, elecciones", p. 308.

revisión de los contratos de aparcería y arrendamiento que los latifundistas celebraban, puesto que los utilizaban como un medio de "tenencia indirecta" para proteger sus tierras.[41]

Si bien la facción gomista enarboló el discurso de la reforma agraria, en los hechos estableció alianzas con los grandes hacendados otorgándoles condonaciones de impuestos y los diputados y las autoridades locales, supeditados al partido, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar que los latifundios fueran afectados.[42]

Carlos Riva Palacio fue electo gobernador para el periodo 1925-1929, tiempo durante el cual aumentó considerablemente el número de hectáreas repartidas, sin embargo, el gobernador en su último informe de gobierno fue claro al establecer que si existía reparto era "con el único fin de que la producción de la tierra sea más abundante para beneficio no sólo de los campesinos, sino de todas las clases sociales".[43] Independientemente del motivo para acelerar el ritmo de la reforma agraria, es claro que al existir un aumento en el número de expedientes resueltos, los afectados con las resoluciones provisionales o definitivas, recurrieran a los medios legales y extralegales en la defensa de sus propiedades. En este caso y de acuerdo con las fuentes consultadas, el principal mecanismo legal fue solicitar la protección de la justicia federal por medio del juicio de amparo ante los jueces de distrito.

Antes de adentrarse al análisis del amparo en el periodo propuesto, es necesario hacer un alto para referirse de forma breve a la Suprema Corte por ser el órgano que en última instancia resolvió los juicios promovidos por los distintos sujetos agrarios. Si bien este acercamiento podría realizarse por periodos presidenciales, tal y como lo presenta la obra de Lucio Cabrera Acevedo, este criterio da una importancia primordial al ejecutivo federal, cuando lo que se busca en esta investigación es dar mayor realce a otros actores, por lo que se considera más apropiado hablar de lo que José Ramón Cossío ha denominado la teoría constitucional, es decir, establecer que la Suprema Corte "cuenta con un pensamiento estructurado y continuado de la Constitución, de sus elementos componentes, de la jerarquía de sus normas, de sus criterios de interpretación y de las funciones que debe cumplir respecto de las normas inferiores".[44] En ese sentido es que debe entenderse que las resoluciones del máximo tribunal del país respondieron a contextos históricos muy específicos y no estuvieron

[41] SÁNCHEZ, *El Circulo Rojinegro*, pp. 124-125.
[42] AGUADO, *Una mirada*, pp. 71-72; REYNOSO, "Facciones, elecciones", p. 308, nota al pie 478.
[43] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 219.
[44] COSSÍO, *La teoría constitucional*, pp. 82-83.

exentas de los vaivenes políticos y económicos de la época. En el periodo que se analiza en este capítulo, se pueden mencionar la pugna Carranza-Obregón; los amparos promovidos por las compañías petroleras; las disputas con la iglesia católica que también tuvieron su expresión en los tribunales federales; el intento de reforma al Poder Judicial Federal por parte del presidente de la república en 1922 y que se concretaría en 1928 y; la propia implementación de la reforma agraria.

Siguiendo con la propuesta de Cossío, el primero de los periodos de la teoría constitucional lo denomina constitutivo y lo sitúa de 1917 a 1927, etapa durante la cual la Corte estuvo "constreñida por la proximidad de la Revolución y del Congreso Constituyente. Ello explica que, por una parte, la principal motivación consistiera en conferirle eficacia al texto, resolver los problemas de temporalidad que se suscitaron con el cambio de régimen y Constitución y, lo que es más importante, legitimar a la Corte que debía interpretarlo y aplicarlo".[45]

La segunda etapa de esta teoría constitucional, el periodo liberal (1928-1934), se caracteriza por nuevos criterios "que le confirieron un amplio desarrollo a las garantías individuales a partir de lo que podemos llamar un enfoque liberal", es decir, se buscó dar un sentido amplio a las garantías individuales, con excepción de los temas religiosos, militares y el agrario. En este último caso, debido a la supresión del amparo a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras en 1931, como se verá en el siguiente capítulo.

Será en este periodo liberal en que se lleve a cabo la reforma judicial de 1928 impulsada por Álvaro Obregón. Dentro de sus principales aspectos sobresale el aumento del número de ministros de 11 a 15, quienes sesionarían en pleno o en tres salas y serían inamovibles "salvo cuando observaran mala conducta" y sus nombramientos sería realizados por el presidente de la república y aprobados por el Senado. Señala José Ramón Cossío que dicha iniciativa fue presentada mientras Obregón fungía como candidato presidencial y "no contaba con facultades constitucionales para ello".[46]

Para efectos de esta investigación es importante señalar que uno de los factores que influyó en la reforma al poder judicial fue la cuestión agraria. El propio Álvaro Obregón,

[45] Cossío, *La teoría constitucional*, pp. 95-96
[46] Cossío, *La teoría constitucional*, p. 34.

siendo candidato, en uno de sus discursos de campaña de abril de 1928, estableció que uno de los enemigos del campesinado mexicano era la Suprema Corte:

> Yo quiero hacer saber a ustedes, porque sé que mis palabras serán recogidas con júbilo, que antes de salir de la capital de la República envié a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de reformas que tienden a mejorar la administración de justicia, que tienden a poner coto a muchos de los abusos que ahora cometen los que están encargados de administrarla […] Venimos a recoger impresiones, a conocer las palabras de ustedes y a darles muestras de aliento […] para que vuelva la tranquilidad al espíritu de todos los campesinos, y para que puedan noble y generosamente dedicarse a cultivar sus tierras sin ver un fantasma en la reacción y en la Suprema Corte de Justicia.[47]

Ante el asesinato de Obregón, tocó al presidente Emilio Portes Gil, designar a los nuevos ministros. De acuerdo con Pablo Mijangos, "el presidente interino trató de escoger candidatos que compartieran tres cualidades: su 'probidad', de modo que la Corte se limpiara de 'traficantes de la justicia'; su capacidad, 'garantizada con años de eficiente ejercicio profesional'; y su 'dedicación al trabajo y al estudio'". Portes Gil ratificó únicamente a cuatro ministros de la Corte electa en 1923 "y escogió al resto a partir de las propuestas que le enviaron la Barra Mexicana de Abogados y algunos 'eminentes' letrados. Ésta sería una Suprema Corte más joven y también más respetada por el foro mexicano".[48] Correspondió a esta Corte resolver el mayor número de amparos que se examinan en este capítulo y atender aquellos reclamos por la prohibición del amparo en 1931.

Ahora que se tiene una idea general de los cambios ocurridos en el Poder Judicial de la Federación, es necesario retomar algunas cuestiones historiográficas con respecto al papel de la Corte en la reforma agraria, antes de adentrarse al caso del Estado de México.

Autores clásicos como Marte R. Gómez, calificó a la Suprema Corte como "el baluarte" al que acudieron los terratenientes para frenar la aplicación de la reforma agraria.[49] Por su parte, José Rivera Castro en su ensayo "Política agraria, organizaciones, luchas y resistencias campesinas entre 1920 y 1928", afirma que los terratenientes utilizaron las "componendas legales del amparo como arma para defender sus posiciones e hicieron cómplices a muchos de los funcionarios encargados de dar respuesta a las demandas campesinas. El poder del dinero determinaba las diferentes modificaciones, interpretaciones

[47] MIJANGOS, *Historia mínima*, p. 132.
[48] MIJANGOS, *Historia mínima*, p. 134.
[49] GÓMEZ, *La reforma agraria*, p. 44.

y argucias que sufrían las leyes agrarias".[50] Mientras que Ricardo Zevada en su estudio del gobierno de Calles, puso énfasis en el papel de los abogados de los propietarios, calificándolos como hábiles al promover los juicios de amparo "por violaciones a los artículos 14, 16 y 27 constitucionales de parte de las autoridades agrarias locales y federales en el curso de los procedimientos agrarios".[51]

Es posible que esta percepción acerca del máximo tribunal del país se encontrara en varios ámbitos de la sociedad, la siguiente ilustración elaborada por Diego Rivera es un botón de muestra:

Imagen 1
Suprema Corte, último reducto de la reacción capitalista



Fuente: TANNENBAUM, "La revolución agraria", p. 85.

En contraste con estas visiones, investigaciones de los últimos años han matizado estas ideas. Por ejemplo, Sandra Kuntz afirma que

> la Suprema Corte de Justicia era la única instancia judicial para corregir los errores que pudieran cometer los órganos administrativos (las comisiones agrarias locales, la Comisión Nacional Agraria, etc.) encargados de gestionar la redistribución de la propiedad agraria. Ello no significa, por supuesto, que los propietarios afectados no intentaran acudir a dicha instancia para evitar o retrasar la pérdida de sus propiedades; pero no es a primera vista evidente que ésta se hubiera prestado en forma sistemática a esa manipulación.[52]

Helga Baitenmann menciona que la falta de un recurso judicial ordinario para reparar los abusos cometidos por las autoridades agrarias, tarde o temprano transformó a la Suprema

[50] RIVERA, "Política agraria", p. 23.
[51] ZEVADA, *Calles*, p. 106.
[52] KUNTZ, *La reforma agraria*, pp. 27-28.

Corte "en un obstáculo para la reforma agraria —una historia compleja que aún falta por escribir con base en los expedientes de archivo".[53] Afortunadamente esta penumbra historiográfica ha comenzado a esclarecerse con investigaciones hechas a partir de documentos resguardados en las Casas de la Cultura Jurídica estatales.

Una de esas investigaciones es de Nicolás Nieto, quien estudió demandas de amparo resguardadas en la Casa de la Cultura Jurídica de la ciudad de Morelia, Michoacán, promovidas por los afectados de las acciones agrarias de restitución y dotación entre 1917 y 1921. El autor sostiene que "los expedientes revisados demuestran la forma en que los tribunales de amparo intentaron a toda costa proteger el reparto agrario hasta en cuanto las exigencias de legalidad y constitucionalidad (la vida institucional) se los permitieron".[54]

Para el caso de Yucatán, Inés Ortiz Yam recurrió a los expedientes localizados en la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Mérida, para el periodo 1921-1928. Ortiz retoma los principales argumentos utilizados por los hacendados en sus solicitudes, "con el objeto de recuperar la percepción, la posición y la acción de los hacendados frente al reparto agrario", así como los criterios de interpretación de la Corte frente a dichas solicitudes.[55] En este estado, nos dice la autora que el alcance de los amparos promovidos por los hacendados no fue el esperado, pues el juez de distrito los negó y ya en la Suprema Corte fueron sobreseídos.

Es de destacar que en esta investigación se considera que ambas posturas no son excluyentes pues dependiendo de la zona y el periodo que se estudie, se puede estar ante una interpretación u otra. Basta recordar que el ritmo que tomó el reparto de tierras en el país fue heterogéneo y respondió a diversos factores como la política de los gobernadores, el nivel de organización de los grupos solicitantes y la resistencia de los grandes y pequeños propietarios, por solo mencionar algunos elementos.

Además, tratándose de la interposición de amparos contra resoluciones agrarias, hay que tomar en cuenta que se promovieron en distintos momentos del trámite administrativo (contra la resolución provisional, la resolución definitiva o la ejecución de la sentencia, etc.) por lo que la resolución de estos fue variada. Más aún, a pesar de que el procedimiento que seguían los juicios fue el mismo para todos los amparos a nivel nacional, ninguno es igual a

[53] BAITENMANN, "Ejerciendo la justicia", p. 2061.
[54] NIETO, "Las tensiones", pp. 93-94.
[55] ORTIZ, "El reparto agrario", p. 451.

otro, pues cada uno tuvo su particularidad, en ese sentido esta investigación es un intento por poner en el escenario a los distintos actores inmiscuidos en la trama de la justicia, mostrando un panorama general del periodo y destacando algunos casos concretos ocurridos en municipios específicos del Estado de México.

Adentrándose al tema y tomando en cuenta que la interposición del amparo contra las resoluciones agrarias se presentó desde una época muy temprana, es posible que las autoridades, particularmente las comisiones locales, tuvieran dudas con respecto a su intervención en estos juicios, ya que en agosto de 1917, la CNA emitió la circular número 28 en la que fijó algunas disposiciones a seguir, como el presentar los informes previos y justificados dentro de los plazos fijados por la ley, interponer el recurso de revisión cuando los jueces de distrito concedieran el amparo al propietario y su coadyuvancia con el agente del Ministerio Público Federal.[56]

En el caso de la entidad mexiquense y como ha demostrado Jesús López Gutiérrez, los propietarios afectados recurrieron al amparo como un mecanismo "para frenar o retardar el reparto agrario de los gobiernos posrevolucionarios".[57] Esta investigación aporta un detallado cuadro de 447 amparos promovidos por propietarios entre 1917 y 1931 (ver cuadro 2).

De los datos presentados en la mencionada investigación, resaltan por lo menos dos líneas de análisis. La primera de ellas es que 280 demandas de amparo, que representan poco más del 62%, se interpusieron entre 1925 y 1927, de las cuales 84 fueron denegadas, 119 se otorgaron, 53 se sobreseyeron y en 24 se omitió la resolución, en este último caso se desconocen los motivos. Un segundo elemento es que de 1917 a 1931, únicamente en 36% de los juicios se concedió el amparo, si partimos de que estos fueron promovidos por los propietarios afectados, se puede sugerir que por lo menos para el caso del Estado de México, los jueces de distrito no fueron ese baluarte de los hacendados que comentó Marte R. Gómez, lo cual no impide proponer que usaron esta instancia jurídica como un mecanismo de resistencia para la defensa de sus tierras.

---

[56] FABILA, *Cinco siglos*, pp. 279-280.
[57] LÓPEZ, "El amparo", p. 2. Agradezco a la Dra. Gloria Camacho la referencia sobre este trabajo.

Cuadro 2. Número de amparos promovidos ante el juez de distrito del Estado de México, 1917 a 1931.						
Años	Número de Amparos	Negados	Amparados	Sobreseyendo por desistimiento	Sobreseyendo por improcedencia	Se omite la resolución
1917	1	1	-	-	-	-
1918	4	4	-	-	-	-
1919	2	2	-	-	-	-
1920	4	-	3	-	-	1
1921	6	3	3	-	-	-
1922	4	-	2	-	-	2
1923	25	13	9	1	-	2
1924	48	26	20	2	-	-
1925	129	29	70	13	8	9
1926	97	29	36	8	12	12
1927	54	26	13	2	10	3
1928	28	7	5	3	12	1
1929	31	2	1	2	22	3+1 desechada
1930	14	0	3	1	6	1+3 desechadas
1931	0	0	0	0	0	
Total	**447**	**142**	**165**	**32**	**70**	**38**

Fuente: LÓPEZ, "El amparo", p. 60.

Ahora bien, tomando en cuenta que para ese momento el Estado de México contaba con 119 municipios, es importante establecer que, de los 447 amparos solicitados, el 53% se concentró en 11 municipios, destacando Toluca y Chalco con 41 y 32 respectivamente (ver siguiente cuadro). Dado que estos datos corresponden a los juicios iniciados por los propietarios afectados, agregar otro tipo de amparos, como los promovidos por los solicitantes de tierras, podría darnos una mayor claridad de la importancia que tuvo esta figura jurídica en la reforma agraria.

Cuadro 3. Porcentajes de los municipios del Estado de México que más amparos registraron entre 1917-1930			
No.	Municipio	No. Amparos	Porcentaje
1	Toluca	41	9.15%
2	Chalco	32	7.14%
3	Texcoco	26	5.80%
4	Tlalnepantla	22	4.91%
5	Otumba	21	4.68%
6	Zumpango	19	4.24%
7	Ixtlahuaca	18	4.01%

8	Jocotitlán	17	3.79%
9	Axapusco	16	3.57%
10	Naucalpan	16	3.57%
11	Acolman	14	3.12%
Total		**242**	**53.98%**

Fuente: LÓPEZ, "El amparo", p. 61.

Este panorama presentado por Jesús López corresponde al primer tramo del sinuoso y largo camino que seguía una demanda de amparo. La siguiente instancia correspondía al recurso de revisión ante la Suprema Corte promovido ante la inconformidad de alguna de las partes con la sentencia del juez de distrito. La revisión de la Corte podía confirmar, modificar o revocar la resolución de primera instancia.

Para la elaboración de esta tesis, este segundo tramo se reconstruye a partir de las sentencias de los amparos en revisión encontradas en el Archivo Histórico de la SCJN, en donde fue posible ubicar 354 asuntos, de los cuales 217 (aproximadamente el 61%) se resolvieron en el periodo 1925-1927 (ver siguiente cuadro), coincidiendo este periodo con el de mayor tierras repartidas hasta ese momento.

Cuadro 4. Número de amparos en revisión en materia agraria, Estado de México, 1917-1931

Años	Expedientes
1917	1
1918	1
1919	3
1920	1
1921	8
1922	5
1923	13
1924	35
1925	78
1926	67
1927	72
1928	15
1929	37

1930	12
1931	6
Total	**354**

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ).

Si bien existe una diferencia de 93 amparos entre los datos presentados por Jesús López, es decir entre los promovidos ante el juez de distrito y los revisados por la SCJN, esto puede responder a por lo menos dos variables a considerar: los 32 asuntos en que los propios quejosos se desistieron y los 38 casos en que se omitió la resolución, que posiblemente no acudieron a la revisión, dando un total de 70 juicios. Para tener una precisión del resto de los amparos sería necesario revisar cada uno de los expedientes, sin embargo, la mayor parte del trabajo de fuentes para esta investigación estuvo condicionado por el cierre de los archivos judiciales ocasionado por la pandemia y tal tarea rebasa el propósito de este capítulo.

De las 354 sentencias encontradas se propone realizar el análisis de 217 que corresponden a los años 1925-1927, periodo durante el cual se encuentra el mayor número de amparos interpuestos y de revisiones solicitadas y; en un segundo momento, poner la lupa en casos particulares que permitan asomarse a la práctica cotidiana del juicio de amparo en esta primera etapa de la reforma agraria.

La información de las 217 sentencias (anexo 1), permite sugerir que, el juicio de amparo no sólo fue y sigue siendo un medio de defensa jurídico, sino un recurso de resistencia utilizado principalmente por los propietarios para conservar sus terrenos o por lo menos para frenar de forma momentánea su pérdida, con el objeto de seguir aprovechando sus recursos. Finalmente, en distintas etapas de la historia de México, los grupos de poder también se han organizado y luchado cuando ven afectados sus intereses. Y en este caso, se trata de una más de las expresiones jurídicas en la historia del antiagrarismo mexicano.

Como se mencionó en la introducción, uno de los conceptos pilares de este estudio es el de resistencia propuesto por James Scott, el cual hace referencia a los actos individuales o colectivos llevados a cabo para aminorar o denegar las exigencias hechas por las clases o grupos superiores o bien por el estado, así como para presentar reclamos propios, precisando que muchos de estos actos de resistencia pueden o no conseguir su objetivo.

En esta primera etapa de la reforma agraria en el Estado de México, se trata de acercarse a la forma legal en que los propietarios afectados presentaron su inconformidad y

resistencia ante el avance de la reforma agraria y la manera en que los pueblos acudieron a las autoridades agrarias e instancias judiciales con el fin de obtener tierras y defenderlas cuando ya contaban con ellas. En ambos casos, esta disputa se llevó a cabo dentro del marco hegemónico establecido por el agrarismo institucional.

Siguiendo con el análisis de los amparos (anexo 1), es posible apreciar los nombres de los quejosos o solicitantes de amparo (en su mayoría los propietarios) y de los pueblos que intervinieron como terceros perjudicados (salvo cuando ellos promovieron el juicio y los hacendados ocuparon este lugar). Es de destacar que aproximadamente un 25% de los amparos fueron promovidos por mujeres, como esposas o viudas de los propietarios, lo cual demostraría que también tuvieron un papel activo ante las instancias judiciales. Sin duda, otro de los temas pendientes de la historia de la reforma agraria.

A manera de nota metodológica, se optó por omitir los nombres de los representantes legales ya que en algunos casos estos cambiaron por motivos que no quedan claros en los documentos, aunque sin duda es un dato que permitiría dar mayor profundidad al estudio de la justicia agraria, no obstante, es otro de los temas que queda pendiente para una futura investigación.

En su mayoría, el juicio de garantías se promovió contra las sentencias dotatorias tanto del gobernador como del presidente de la república, excepto en los casos donde se acusó a las autoridades agrarias de autorizar a los solicitantes de tierras el disponer de los cultivos que se encontraban en los terrenos en disputa, un asunto de ampliación de ejidos, un caso en que se negó a los pueblos la dotación solicitada y uno más en donde los quejosos reclamaron el cambio de ubicación de las tierras otorgadas.

Hay que recordar que en las demandas de amparo se señalaba como autoridades responsables a las agrarias en sus distintos niveles: presidente de la república, Comisión Nacional Agraria, delegado de la CNA en el estado y a la Comisión Local Agraria, principalmente. Al presidente y al gobernador se les designaba por ser quienes dictaban la resolución y a las demás autoridades por su ejecución.

El periodo revisado de tres años muestra en términos generales que, de los amparos solicitados por los propietarios, el juez de distrito los otorgó en 125 casos, equivalente a un 57%; lo negó en 48 juicios, 22% y; sobreseyó en 20, correspondiente al 9.2%. Llegados estos expedientes a la Suprema Corte, fueron sobreseídos los asuntos en 161 resoluciones (74%),

en 10 más los desechó (4.6%) y soló lo otorgó en dos ocasiones. De acorde con estos datos se podría pensar que los jueces de distrito apoyaron más a los hacendados, en comparación con la Suprema Corte, sin embargo, es necesario realizar la revisión de cada uno de los casos para profundizar en el tema. Lo que si revelan estos números es que el Poder Judicial de la Federación no fue "el auxiliar más eficaz con que contaron los terratenientes",[58] o no por lo menos en la época de mayor reparto en la entidad, lo cual no fue obstáculo para que los hacendados acudieran a la justicia federal en defensa de sus propiedades y con ello se retrasara el reparto de tierras.

Es evidente que las resoluciones de la SCJN revocaron las decisiones de los jueces de distrito que habían concedido el amparo y sobreseyeron los juicios por dotación, tanto las provisionales como las definitivas. En el caso de las dotaciones del gobernador, el principal argumento fue que por tratarse el acto reclamado de una resolución provisional estaba sujeta a la revisión del presidente de la república y en cuanto a las resoluciones presidenciales, el sobreseimiento se dio ya que el artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915, establecía "que los interesados que se creyeran perjudicados con las resoluciones presidenciales que se dictaren en materia agraria" podían acudir a reclamar sus derechos ante los tribunales en el término de un año.

Esto se reforzó en 1929, cuando por una tesis de la corte (comentada unas páginas atrás) se sobreseyeron todos los juicios de amparo administrativos, incluidos los de materia agraria. Aquellos "en que las leyes preveían procedimientos de oposición —impuestos, aguas, minas y petróleo, vías de comunicación, patentes y marcas y otras más—, los particulares se vieron obligados a recurrir a esos procedimientos". En algunas materias como la fiscal, las leyes contenían procedimientos al respecto, en otras, como la agraria, los juicios se llevaban a cabo sin notificar "a los pueblos favorecidos por las resoluciones agrarias objeto de impugnación; además de que los procesos, seguidos en la vía ordinaria, se prolongaban por años, pues las sentencias que dictaban los jueces de distrito eran reclamables en apelación y éstas a su vez, si eran adversas a los propietarios, podían objetarse en amparo directo ante la Suprema Corte".[59]

[58] GÓMEZ, *Historia*, p. 255.
[59] CARRILLO, *La Justicia Federal*, p. 16.

Al parecer, este último criterio de la Corte complicó la situación, ya que no quedó claro cuál era la naturaleza de ese juicio ordinario, "ni ante qué autoridades habría de intentarse, ni en contra de quién", según Lucio Mendieta, los propietarios presentaron sus demandas ante los jueces de distrito pidiendo la revocación de las resoluciones presidenciales y en ellos no tomaron parte los pueblos, dándose casos en donde los jueces privaron "a los pueblos de las posesiones de tierras y aguas, sin que estos fueran oídos ni vencidos en juicio, con positiva violación de la garantía consignada en el artículo 14 constitucional".[60] Seguir esta línea aportará mayor claridad a esta investigación y en el siguiente capítulo se hace referencia a los efectos que traían este tipo de juicios que buscaban la nulidad de las resoluciones presidenciales.

Si bien hasta este momento se ha centrado la argumentación en los propietarios, quejosos en el juicio de amparo, es necesario resaltar el papel que asumieron los delegados estatales de la Comisión Nacional Agraria y los agentes del Ministerio Público Federal, como las partes que interpusieron el recurso de revisión, lo cual demuestra el rol activo que asumieron en esta instancia. Particularmente llama la atención el caso del Ministerio Público Federal, ya que desde 1923 una resolución del Primer Congreso Nacional Agrarista, convocado por el Partido Nacional Agrarista (PNA), pidió al Procurador General de Justicia girara instrucciones a los agentes que intervinieran en los juicios para que se opusieran "enérgicamente a que los jueces concedan amparos contra las dotaciones y restituciones de tierras, consignando a los jueces que los concedan y pidiendo la aplicación de las penas de ley para los que pidan amparos injustificadamente".[61] A partir de los documentos revisados queda constancia de que, si bien los agentes no siguieron al pie de la letra esta solicitud, si tuvieron un papel importante en los juicios en que tuvieron participación, como se verá en los estudios de caso que se presentan a lo largo de esta investigación.

El último dato que aporta el anexo 1 permite identificar que el 53% de esos amparos en revisión (116), se concentró en 11 municipios: Toluca (20), Naucalpan (14), Texcoco (12), Tlalnepantla (11), Acolman (10), Aculco (9), Chalco (9), Zumpango (9), Zinacantepec (8), Axapusco (7) y San Felipe del Progreso (7). Este porcentaje deja ver que, a diferencia de los

[60] MENDIETA, *El problema agrario*, p. 220.
[61] Otras de las resoluciones del congreso fue el que los campesinos debían informar todo caso de amparo al Partido Nacional Agrarista y pedir a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para evitar que se siguiera abusando de este medio de defensa, RIVERA, "Política agraria", pp. 55-56.

amparos promovidos ante el juzgado de distrito, en este caso cambió la distribución de los municipios en donde se promovieron dichas revisiones. Como se ha señalado, estas cifras no pretenden ser exhaustivas, sino únicamente un indicador del uso del juicio de amparo en este periodo.

Teniendo un panorama cuantitativo de los amparos promovidos en la entidad, se pasa al último apartado de este capítulo, en donde se busca presentar un ejemplo de la lucha por la tierra en los tribunales federales, en última instancia y siguiendo a Alfredo Castellanos, "lo cuantitativo es un resultado de la lucha entre los habitantes rurales, los peticionarios ejidales y las políticas agrarias estatales".[62]

2.4 La lucha por el ejido: el caso de Naucalpan de Juárez

Las investigaciones acerca del reparto de tierras en el Estado de México, se han centrado en regiones concretas como Chalco[63] y Toluca,[64] por solo mencionar un par de ejemplos; en municipios, tal es el caso de Acolman[65] y Teotihuacán[66]; en haciendas como la de Atenco[67] o La Huerta[68] y; en la constitución de un ejido en particular, como el de San Mateo Atenco.[69]

---

[62] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 31.

[63] Dentro de las distintas investigaciones que se han ocupado de los conflictos agrarios en esta zona, destaca el trabajo de Marco Antonio Anaya Pérez quien reconstruye la historia de los pueblos de la región Chalco-Amecameca por recuperar sus recursos naturales, resaltando la rebelión de Julio López. Para el caso de la institucionalización de la lucha por la tierra véase ANAYA, *Rebelión y revolución*, pp. 198-208.

[64] Para tener un panorama general de la formación de los 25 ejidos en este municipio, véase MONTES DE OCA, *El reparto*, pp. 12-32; para el caso particular de los municipios de Lerma y Ocoyoacac véase CAMACHO, *De la desamortización*, pp. 161-204.

[65] José Alfredo Castellanos realizó un estudio pormenorizado de la estructura agraria del municipio, el impacto de la revolución mexicana, la formación de los ejidos y la lucha por las ampliaciones. Afirma el autor que en este municipio existió un contubernio entre jueces y latifundistas "puesto que los representantes de la ley –aprovechando su jurisdicción– 'disparaban' cualquier cantidad de amparos, con los cuales impedían la entrega física de tierras decretadas en dotación, quedando éstas en el papel, y de alguna forma servían de justificación a los gobernadores para no enviar los expedientes a la CNA", CASTELLANOS, *Empeño*, p. 173.

[66] En un estudio comparativo entre el municipio de San Gabriel Chilac, Puebla y San Juan Teotihuacán, Estado de México, Edgar Mendoza analizó el impacto que tuvo la reforma agraria a nivel municipal. Para el caso de Teotihuacán destaca el uso del juicio de amparo por parte de los hacendados en la defensa de sus aguas y tierras, MENDOZA, *Agua y tierra*, pp. 110-114.

[67] Ubicada en el municipio de Santiago Tianguistenco, esta hacienda fue expropiada y repartida a ocho pueblos entre 1930 y 1942, pasando de ser tierras destinadas a la cría de ganado a terrenos dedicados a la siembra de maíz, LOZADA, "Un proyecto."

[68] Localizada en el municipio de Zinacantepec, esta hacienda propiedad de la familia Henkel, fue afectada para la dotación a cuatro ejidos en el periodo 1920-1935. Francisco Ayala en su tesis de licenciatura reconstruye este proceso poniendo especial atención en los medios de defensa utilizados por los propietarios expropiados frente a la reforma agraria, para el caso del uso del juicio de amparo véase AYALA, "Resistencia de los hacendados", pp. 81-89.

[69] LOZADA, "La Lucha".

En todas ellas se hace mención a las diferentes respuestas de los hacendados ante la expropiación de sus tierras, incluyendo la lucha legal, por lo que se propone el estudio de otra región de la entidad que ha sido poco estudiada y con ello presentar una pieza más del rompecabezas de la justicia agraria mexicana del siglo XX. En este caso se pone la lupa en el municipio de Naucalpan de Juárez, que ocupó un décimo lugar en la interposición de demandas de amparo y un segundo, en amparos en revisión.

La elección es motivada por dos aspectos. El primero de ellos responde a la variedad de posibilidades de análisis que aportan los expedientes: las argucias legales y los alegatos presentados por el propietario afectado; el papel de las autoridades agrarias en el juicio de amparo; las resoluciones tanto del juez de distrito como de la Suprema Corte y; el uso del juicio constitucional como un medio de resistencia, por parte de los pueblos solicitantes de tierras. El segundo aspecto está relacionado con una cuestión personal y es que he vivido en este municipio toda mi vida, el ver en las fuentes nombres de lugares que conozco desde niño como Río Hondo, San Bartolo, Los Remedios, Acatlán, San Luis Tlatilco; sin lugar a duda me llevó a querer saber más sobre dichos sitios.

Naucalpan, el vocablo que da nombre a este municipio, es de origen náhuatl y se ha traducido como el lugar de las cuatro casas o sobre los cuatro barrios. Se encuentra ubicado en la meseta central del país. Limita al norte con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Jilotzingo; al oeste nuevamente con Jilotzingo y Xonacatlán; al sur con Lerma y Huixquilucan y; al este colinda con las alcaldías de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (ver mapa 9 en donde está marcado con el número 53). Actualmente cuenta con una extensión de 156.63 km^2 y una población de 844, 210 habitantes.[70]

Su clima es templado y en las zonas más altas es frío, las lluvias van de mayo a septiembre y cuenta con los ríos San Lorenzo, San Juan, Río Hondo y Los Remedios, siete presas, doce manantiales y tres acueductos.[71]

Si bien la historia de la región se remonta al periodo prehispánico tiempo durante el cual fue habitada por la cultura Tlatilca, "considerada como una de las más antiguas del Valle de México", esta civilización desapareció y la zona fue ocupada por distintos grupos. Se sabe que a la llegada de los españoles ese territorio estaba ocupado por nahuas y otomíes que

[70] https://naucalpan.gob.mx
[71] ROBLES, "Archivo Histórico", p. 10.

vivían en pequeños poblados que pasaron a ser dependientes del convento franciscano de San Gabriel Tacuba. Una de las acciones evangelizadoras de los frailes en la región, fue unificar "los nombres indígenas originales con los de santos católicos", lo que dio lugar a los 17 pueblos tradicionales de Naucalpan.[72]

En términos generales estos pueblos contaron con tierras y canteras. Sus tierras las destinaron al cultivo de maíz y maguey (para la elaboración de pulque), así como a la extracción de leña y carbón, productos que comercializaban en la ciudad de México. En el caso de las canteras se convirtieron en un recurso importante ya que de ahí se extrajo el material con el que se decoró la catedral metropolitana,[73] lo cual también provocó conflictos entre los pueblos y los representantes de la iglesia. La pugna por la explotación de las minas de la región fue una constante, por lo menos hasta la segunda década del siglo XX, como se verá más adelante.

En el caso de las haciendas del municipio, estás tienen su origen en el siglo XVI y XVII por medio de diversas mercedes reales estableciéndose la de San Nicolás, conocida después como de Echegaray; la de El Cristo o Santo Cristo; la de El León o San José de los Leones; la del Olivar y; las haciendas Molino del Prieto, Molino Blanco y San José Río Hondo. La producción de estas propiedades se centró en el trigo que era transformado en harina que se vendía en la capital del virreinato; maíz; frijol; cebada; magueyes, para la producción de pulque; además de contar con ganado vacuno, ganado lanar, caballos y mulas. Al igual que otros municipios de la entidad, Naucalpan tuvo "como principal centro de atracción la ciudad de México", por lo que sus productos eran transportados "diariamente a la capital".[74]

Para el siglo XIX y debido a varios factores, particularmente la migración, la población cercana a la cabecera municipal, San Bartolo Naucalpan; fue sufriendo una paulatina transformación, el número de indios disminuyó y la población mestiza se convirtió en la mayoritaria. Un padrón de 1879 reportó que "59.085% del total de la población era mestiza, frente a un 37.37% identificados como indios y un 3.5% de población blanca", una situación similar ocurrió en las haciendas de la zona en donde la mayoría de los trabajadores

[72] LÓPEZ, "Los indios", p. 80.
[73] LÓPEZ, *Naucalpan*, pp. 54-58. Agradezco a la Dra., Rebeca López Mora por facilitarme la versión digital de este texto.
[74] LÓPEZ, *Naucalpan*, p 130.

eran mestizos. La excepción a este cambio se presentó en los pueblos de San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco, con 92.33% y 98.15% de población indígena, respectivamente.[75] Este aspecto es relevante al momento de acercarse al estudio de la reforma agraria, pues a diferencia de otras regiones del estado, el elemento étnico no estuvo presente en las solicitudes.

En el paso del siglo XIX al siglo XX, la población del municipio vivió un considerable aumento, hacia 1890 era de 7 389 habitantes y para 1902 había llegado a 9 185 pobladores.[76]

A pesar de la disminución en el número de indígenas, la base de la economía de Naucalpan durante la segunda mitad del siglo XIX y previo a la revolución, continuó siendo la producción agrícola "a cargo casi completamente de las haciendas" mencionadas. En contraste con otras zonas del estado, y siguiendo a Rebeca López: "en Naucalpan no se presentaban problemas de consideración. Por el contrario, se puede afirmar que existía un equilibrio de fuerzas entre los vecinos de los pueblos y las haciendas que benefició a ambas partes. Muestra de ello fue la prolongada presencia de estas unidades productivas en nuestro municipio".[77]

Como se ha visto, la mayor parte de la producción agrícola y fabril de Naucalpan se comerciaba hacia la ciudad de México, de ahí la importancia de los caminos y puentes y a partir de 1882 del ferrocarril. Así como de otros medios de comunicación como el teléfono, introducido en 1884 y el telégrafo (en 1891 existían dos oficinas de telegráficas).[78] Así las condiciones económicas y sociales del municipio a fines del porfiriato.

Durante la revolución mexicana el municipio no tuvo una participación relevante, ni se suscitaron hechos de armas significativos, salvo la quema de la iglesia del pueblo de San Francisco Chimalpa y la incorporación de algunos de sus habitantes a las filas zapatistas.

Concluida la lucha armada, algunos pueblos del municipio solicitaron tierras desde 1917 y la mayor parte de los ejidos se constituyeron entre 1925 y 1930, expropiándose las principales haciendas de la zona: Echegaray, San José de los Leones, El Cristo y El Prieto (ver plano de conjunto de los pueblos de San Bartolo Naucalpan).

---

[75] LÓPEZ, "Los indios", pp. 93-94.
[76] LÓPEZ, "El impacto hídrico", p. 128.
[77] LÓPEZ, *Naucalpan*, p 134.
[78] ROBLES, "Archivo Histórico", p. 50, 57.

Cuadro 5. Haciendas y ejidos en Naucalpan, Estado de México	
Hacienda afectada	Ejidos constituidos
Echegaray	Los Remedios San Bartolo Naucalpan San Juan Totoltepec San Mateo Nopala Santa Cruz Acatlán Santa María Nativitas Santiago Occipaco
San José de los Leones	San Antonio Zomeyucan San Esteban Huitzilacasco San Francisco Chimalpa San Francisco Cuautlalpan San Luis Tlatilco San Rafael Chamapa
El Cristo	San Mateo Nopala Santa Cruz Acatlán Santiago Occipaco Santiago Tepatlaxco
El Prieto	San Bartolo Naucalpan Santa María Nativitas San Andrés Atoto

Fuente: elaboración propia con base en las resoluciones presidenciales publicadas en el *Diario Oficial*.

Ante las solicitudes de tierras realizadas por los vecinos de los pueblos de la zona, los propietarios recurrieron a distintos mecanismos legales para conservar sus haciendas como: el fraccionamiento y venta de una parte de ellas;[79] solicitar el reconocimiento de sus terrenos como zonas protegidas por parte del gobierno federal (como el caso que se verá más adelante) e; intentar demostrar en el trámite administrativo que los solicitantes no cumplían con alguno de los requisitos solicitados por la ley.[80]

[79] En el juicio de amparo promovido por Pedro Dourritzague, contra la resolución presidencial que concedió tierras a Santa Cruz Acatlán, presentó como principal argumento el fraccionamiento que se había hecho de la hacienda de Echegaray, siendo una de las partes afectadas propiedad del quejoso. El JD negó el amparo contra los actos del presidente, pero lo otorgó contra los actos de ejecución de la resolución, por esta razón, la CNA promovió el recurso de revisión y la SCJN sobreseyó el asunto por improcedente y finalmente se constituyó el ejido, AHCCJT, AI, exp. 242/1925.

[80] José Luis Cuevas en el amparo promovido contra la resolución presidencial que dotó de tierras al pueblo de Santa Cruz Acatlán, presentó objeciones al censo general del pueblo para desvirtuar la calidad y número de personas beneficiadas, AHCCJT, AI, exp. 114/1925, fs. 139-144. Lo mismo ocurrió en el juicio iniciado por Antonio Díaz Sánchez, contra la resolución definitiva que otorgó tierras al pueblo de San Cristóbal Texcaluca,

Hago un paréntesis para reiterar que la elaboración de esta investigación tiene como fuentes principales documentos jurídicos, que por el propósito con el que fueron elaborados, nos permiten dar cuenta de "un claro registro de los conflictos entre intereses particulares que se dirimen en el espacio público de la justicia"[81] y en donde cada una de las partes involucradas recurrió a los medios de defensa que tuvo a su alcance.

El caso elegido corresponde a la Hacienda de El León, también conocida como San José de los Leones cuyo propietario fue Antonio Díaz Sánchez, "ingeniero titulado, y uno de los pocos profesionistas de Naucalpan en 1906. Su larga permanencia en esta hacienda nos indica que fue una empresa muy estable".[82]

Para fines del siglo XIX, San José de los Leones contaba con una extensión de 70 caballerías, poco más de 2 700 hectáreas, siendo la de mayor superficie del municipio, con un valor de $55 579.[83] Sus cultivos principales eran maíz, trigo, frijol, cebada y alverjón; además de maguey, carbón y leña cuya venta estaba destinada a la zona de Tacubaya y a la Ciudad de México,[84] aunque gran parte de sus terrenos eran tepetatosos. Los datos encontrados sobre los habitantes de la hacienda datan de 1893 y arrojan un número de 58 personas (36 hombres y 22 mujeres), mientras que para 1910 eran 64 (35 hombre y 29 mujeres).[85]

La hacienda de El León colindaba al norte con el pueblo de San Bartolo y "con las haciendas de Echegaray y el Cristo;" al sur con los pueblos de Huixquilucan y de Cuajimalpa; al oriente con la ciudad de México "y con la hacienda de Los Morales y por el poniente con los pueblos de Chimalpa y de Mimiapa".[86]

---

del municipio de Huixquilucan, el Juez de Distrito amparó al quejoso, la CNA promovió el recurso de revisión y la Corte sobreseyó el expediente, AHCCJT, AI, exp. 304/1925.

[81] DURÁN, "Apuntes", p. 5.

[82] LÓPEZ, *Naucalpan*, p. 137.

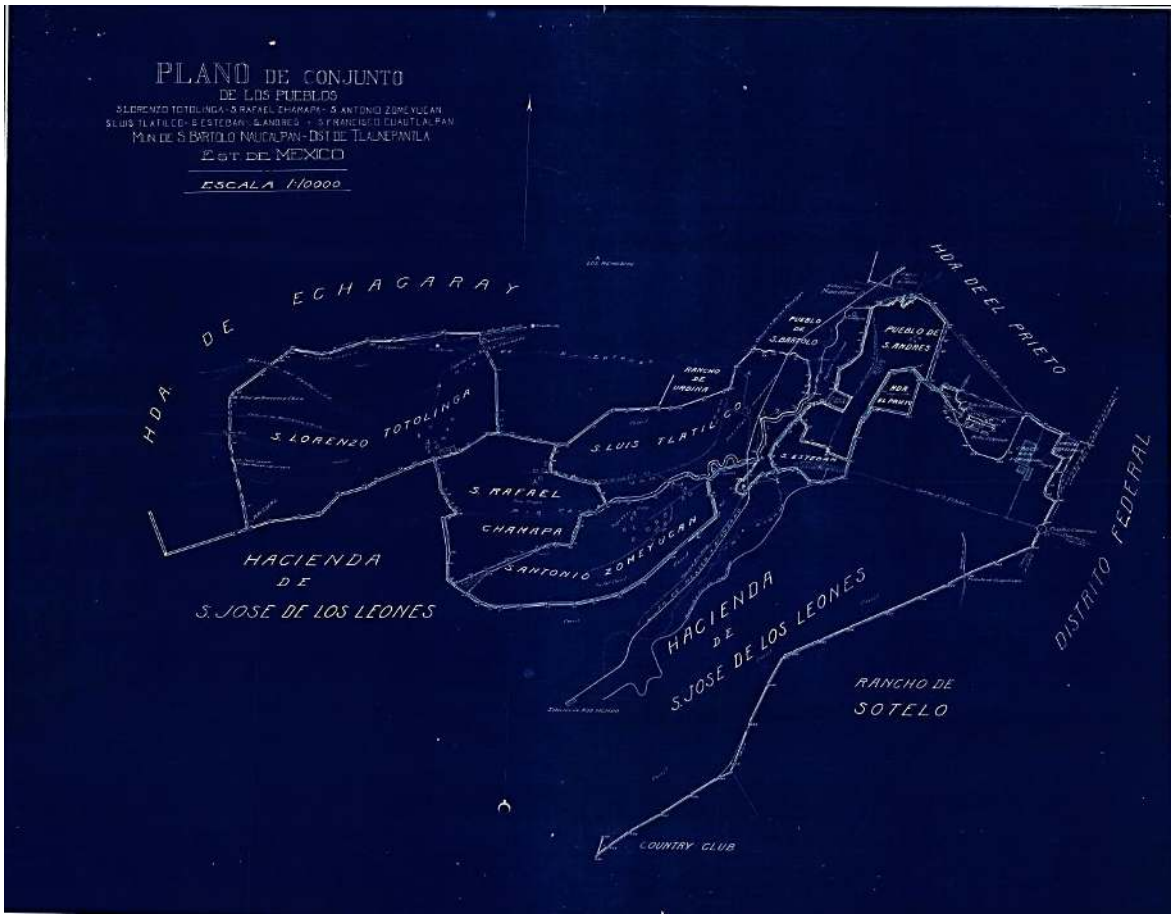
[83] MIÑO Y TÉLLEZ, *Estadísticas*, p. 282.

[84] AHMNJ, FA, SF, SOP, Vol. 1, exp. 21, f. 1.

[85] MIÑO Y VERA, *Estadísticas*, pp. 442, 531.

[86] ROBLES, "Archivo Histórico", p. 44.

Mapa 1. Plano de conjunto de los pueblos de San Bartolo Naucalpan



Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, CGF.MEX.M11.V10.0809

Como puede observarse en el mapa 1, los pueblos habían quedado rodeadas por las haciendas de la zona lo que condicionó la relación entre ellos. Y si bien la hacienda no tuvo "muchos problemas con los pueblos cercanos por la tenencia de la tierra",[87] dicha propiedad fue afectada para constituir los ejidos de San Antonio Zomeyucan, San Esteban Huitzilacasco, San Luis Tlatilco, San Francisco Chimalpa, San Francisco Cuautlalpan y San Rafael Chamapa, razón por la que se "fue vendiendo lo que le restaba a nuevos inversionistas". En lo que fue el casco de la hacienda se estableció el "Foreign Club" (el Club de extranjeros), lugar destinado a la realización de fiestas y eventos privados "a donde

[87] De acuerdo con el multicitado trabajo de Rebeca López Mora, si bien no existieron conflictos agrarios, si se presentaron disputas por la "utilización del agua que corría por los ríos cercanos", LÓPEZ, *Naucalpan*, p. 138.

acudían personas de alto poder económico" y en la actualidad es sede de la Escuela Militar de Transmisiones.[88]

Antes de analizar los estudios de caso elegidos para este capítulo, hay que recordar que los juicios de garantías promovidos tenían como origen el procedimiento administrativo establecido por las leyes agrarias, por lo que primero se reconstruye de manera general el trámite de dotación de los pueblos de San Luis Tlatilco, San Antonio Zomeyucan y San Esteban Huitzilacasco. A diferencia de los procedimientos que se analizan en los siguientes capítulos, en este caso se presenta de forma resumida el trámite de dotación, ya que de acuerdo con las fuentes consultadas el litigio se presentó únicamente entre pueblos y hacienda y dentro del marco establecido por la ley.

Una vez que a los pueblos se les otorgó la posesión provisional, el propietario acudió al amparo y en la segunda instancia, la resolución presidencial les negó la dotación, razón por la que los solicitantes promovieron el juicio de garantías logrando la constitución de sus ejidos. La forma en que se desarrolló esta historia es lo que a continuación se cuenta.

2.4.1 San Luis Tlatilco

El 22 de mayo de 1921 y con fundamento en la *Ley de ejidos*, habitantes del pueblo de San Luis Tlatilco solicitaron dotación de tierras al entonces gobernador Manuel Campos Mena, señalando como posibles haciendas afectables El Prieto y anexos, Echegaray y San José de los Leones.

De acuerdo con lo establecido por la ley, se les notificó a los propietarios para que alegaran lo que estimaren conveniente. En su oportunidad, Ángel López Negrete, dueño de El Prieto, argumentó que el poblado solicitante no contaba con ninguna de las categorías políticas exigidas por la ley, por lo que no tenía derecho a obtener la dotación; Manuel G. Rueda, el propietario de Echegaray, manifestó que San Luis Tlatilco era un barrio sin derecho a solicitar ni obtener tierras, que solo contaba con 25 habitantes y que las tierras de su propiedad constituían una pequeña propiedad alejadas del mencionado barrio; finalmente, Antonio Díaz Sánchez, dueño de San José de los Leones, reconoció que el núcleo solicitante lindaba con su propiedad, sin embargo, sus tierras no eran de labor sino "tepetatosas impropias para la agricultura, y que al acceder a la solicitud de dotación de tierras, dicho

[88] LÓPEZ, *Naucalpan*, p. 184.

núcleo no reportaría ningún beneficio, por la razón indicada, y que en cambio a él se le perjudicaría, privándolo de la explotación que hace de las expresadas tierras, extrayendo de ellas tepetate".[89]

Realizados los estudios técnicos, se constató que en ese momento San Luis Tlatilco contaba con la categoría política de pueblo, con una población de 107 habitantes, de los cuales 42 eran entre jefes de familia y varones mayores de 18 años capacitados para recibir tierras, en el censo agrario estas personas aparecen registrados como jornaleros, obreros, artesanos y comerciantes. Lo que sugiere que posiblemente como consecuencia de la revolución, algunos de los pobladores tuvieron que dedicarse a otras actividades distintas al campo, pero que también existía una pluralidad de actividades económicas en la zona.

Llama la atención que en los documentos se menciona que el pueblo de Tlatilco contaba con poco más de 22 hectáreas de terreno, de las cuales utilizaban únicamente seis para labores agrícolas y tres para la zona urbana, el resto se trataba de pastos de mala calidad, por lo que algunos de los pobladores arrendaban tierras a la hacienda San José de los Leones y a pequeños propietarios de la zona. Esto último es de destacar, pues confirmaría la relación reciproca pueblo-hacienda.

El clima de la zona era cálido; iniciando las lluvias en mayo y finalizando en octubre, con agua escasa y la necesaria para el uso doméstico la extraían de pozos artesianos y; las tierras para pastos eran de mala calidad, compuestas de arcilla, tepetate y arena. Contaba con buenos caminos transitables por camiones y carros.[90] Esta breve descripción del entorno pareciera secundario, empero la calidad de las tierras es fundamental para entender la pugna por su posesión e incluso el posterior desarrollo económico-social de los ejidos.

Tuvieron que transcurrir más de tres años para que el gobernador Abundio Gómez resolviera la solicitud. Con fecha 16 de diciembre de 1924, se declaró procedente la dotación de 145 hectáreas de tierras de temporal que serían tomadas únicamente de la hacienda San José de los Leones. El 21 de febrero de 1925 se otorgó la posesión provisional a los solicitantes y el expediente fue turnado a la CNA el 12 de marzo de ese año. Ante la resolución del gobernador, Antonio Díaz Sánchez promovió un juicio de amparo que se estudia más adelante.

---

[89] AGA, dotación, exp. 23/2296, legajo 2, f. 113v.
[90] AGA, dotación, exp. 23/2296, legajo 2, f. 113v-114.

Para este momento el procedimiento se ajustó conforme a lo estipulado en el *Reglamento Agrario*, por lo que se otorgó a los propietarios afectados 30 días para presentar sus alegatos. Es justo en el análisis de las peticiones y los alegatos en donde es posible identificar la "voz" y la práctica jurídica, tanto de los peticionarios como de los propietarios, pero sobre todo la forma en que adoptaron y adaptaron el discurso legal que les otorgó el marco hegemónico de la reforma agraria y resistieron dentro de él.

El dueño de Echegaray no presentó alegatos, mientras que el propietario de El Prieto manifestó que su hacienda estaba compuesta de tres pequeñas propiedades denominadas El Prieto, San Carlos Atoto y El Blanco contando con una superficie total de 314 hectáreas y agregó que las haciendas de San José de los Leones y Echegaray, si bien habían sido afectadas para dotar a otros pueblos de la región, aun contaban con grandes extensiones por lo que estas debían ser afectadas ya que "no sufrirían grave perjuicio en atención a las superficies que tienen".[91] A pesar de que las fuentes no esclarecen el tipo de relación que tenían los hacendados de la región, queda constancia que tratándose de la defensa de sus fincas, cada uno vio por sus propios intereses.

Por su parte, Antonio Díaz Sánchez manifestó que la dotación que afectaría a su hacienda violaba sus derechos establecidos en los artículos 14 y 27 constitucionales. Cabe recordar que el primero establecía que nadie podía ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplieran las formalidades esenciales de todo procedimiento y en este caso el procedimiento lo seguía una autoridad administrativa; mientras que el artículo 27, señalaba las modalidades de la propiedad de la tierra y la expropiación por causa de utilidad pública, mediante la indemnización correspondiente. Otra de sus defensas se basó en la transgresión a la ley federal de 1919 relativa a la conservación de bosques, pues San José de los leones había sido declarada zona forestal protegida por acuerdo presidencial del 17 de mayo de 1923, el cual había declarado veda absoluta en esos terrenos.

Mientras se llevaba a cabo el procedimiento dotatorio, el dueño de San José de los Leones echó mano de otro recurso de resistencia en defensa de sus tierras: solicitó a la Secretaría de Fomento que declarara zona forestal protegida los terrenos de su propiedad con el propósito de establecer "una veda absoluta para explotaciones de sus bosques" y se

[91] AGA, dotación, exp. 23/2296, legajo 2, f. 113v-115.

reforestara "la parte montañosa desarbolada". Para llevar a cabo dichos trabajos Díaz Sánchez ofreció de forma gratuita los terrenos necesarios para establecer unos viveros en donde se producirían "las plantas destinadas a la reforestación, así como el personal" que lo llevaría a cabo.[92]

Esta maniobra de Díaz Sánchez a todas luces tenía el propósito de frenar el trámite de dotación, ya que, la documentación consultada deja ver que el propietario de San José de los Leones mantenía una explotación constante de los bosques, recordar que, dentro de sus actividades, la hacienda se dedicaba a la producción y comercialización de carbón. Lo que motivó que por medio de una comunicación de Eusebio Arzate, presidente municipal, fechada el 10 de mayo de 1923, se le ordenara "al propietario o encargado de la hacienda de San José de los Leones" que suspendiera la devastación de árboles que había presenciado, "por ser altamente perjudicial tanto a la salubridad pública como a la forestación".[93]

Se desconoce si el propietario contaba con algún vínculo con personas del gobierno federal o alguna autoridad agraria, pero su propuesta fue aceptada y se acordó declarar su hacienda como zona protectora forestal "a fin de asegurar la perpetua conservación y restauración de sus arbolados necesarios para mejorar el clima de la región en beneficio de la salubridad pública y para mantener las aguas de los manantiales que nacen en dichos terrenos y los cuales, además de abastecer los poblados cercanos, son afluentes del Río de San Bartolo, que es de jurisdicción federal".[94]

Cabe mencionar que la cuestión del aprovechamiento de los montes y bosques ya era un tema relevante a nivel estatal. En una circular expedida por el secretario de gobierno el 2 de mayo de 1923, señaló que en los montes de la entidad se había "intensificado la explotación en forma tan alarmante y devastadora que, de no ponerse coto a esta desastrosa tala, no solamente cambiará el régimen de lluvias y climatológico de la región, sino que determinará la disminución o desaparición de los manantiales de agua que abastecen a los poblados, con notable perjuicio para los mismos y para la salubridad pública". Ante esta situación, el gobernador recomendó a los presidentes municipales que dictarán las "ordenes severas" que estimaren convenientes para cesar con la tala y el aprovechamiento de los

[92] *Diario Oficial*, 23 de septiembre de 1923, p. 318.
[93] AHMNJ, FA, SF, SOP, Vol. 1, exp. 23, fs. 2-3.
[94] *Diario Oficial*, 23 de septiembre de 1923, p. 318.

montes y arboladas, además de establecer una zona de protección en los lugares en que brotaran manantiales.[95]

Una vez el expediente ante la CNA, el apoderado de Ángel López Negrete alegó que El Prieto era una pequeña propiedad, por lo que no debía contribuir a la dotación; Antonio Díaz Sánchez reiteró sus argumentos con respecto a la conservación de bosques y la protección de sus tierras por medio del multicitado decreto de 1923 y la objeción al censo agrario por haberse registrado a menores de 18 años y a obreros y artesanos que laboraban en la Fábrica de Hilados y Tejidos de Río Hondo;[96] mientras que el propietario de la Hacienda de Echegaray manifestó que dicha propiedad no existía pues había sido fraccionada desde 1922 y dichas parcelas constituían pequeñas propiedades, así como objeciones al censo en el mismo sentido de lo manifestado por el dueño de San José de los Leones.[97]

Seguido el procedimiento por todas sus etapas, el 18 de noviembre de 1926 se publicó la resolución presidencial que revocó la resolución del gobernador y declaró improcedente la acción solicitada por los de San Luis Tlatilco. Los argumentos presentados por el presidente Calles se centraron en que las tierras afectables eran de "muy mala calidad e inútiles para el cultivo", además de encontrarse "cerca de la zona de urbanización" de la ciudad de México "y por consiguiente, esos terrenos son necesarios para el libre desenvolvimiento de la población, resultando antieconómico una dotación en ese lugar",[98] en páginas anteriores ya se ha destacado la importancia de la relación entre esta región y la capital del país. Ante esta resolución los solicitantes de Tlatilco recurrieron a la justicia federal, junto con otros dos poblados, como se verá más adelante.

2.4.2 San Antonio Zomeyucan

Al igual que los vecinos de Tlatilco, los pobladores de San Antonio Zomeyucan solicitaron dotación de tierras al gobernador del estado en mayo de 1921, argumentando que carecían de las tierras necesarias "en donde poder trabajar para vivir de su cultivo y garantizar su

[95] AHMNJ, FA, SF, SOPIC, Vol. 5, exp. 10, f. 12.
[96] La fábrica de hilados y tejidos de algodón San José Río Hondo, fue fundada en 1866, en la finca de Isidoro de la Torre, que hasta entonces había funcionado como molino de trigo. Para profundizar en el conocimiento de la conformación social y actividades de los habitantes de la zona, así como de las transformaciones que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX véase GARCÍA, "La dinámica social".
[97] AGA, dotación, exp. 23/2296, legajo 2, fs. 42, 57, 66, 68-70.
[98] AGA, dotación, exp. 23/2296, legajo 2, f. 115v

dependencia económica",[99] se integró el expediente y fue turnado a la CLA. El 15 de junio del mismo año se notificó de la acción intentada al propietario de la hacienda San José de los Leones, única propiedad colindante con el poblado solicitante.

En su oportunidad, el ingeniero Antonio Díaz Sánchez, propietario de San José de los Leones, alegó que el poblado no tenía necesidad de tierras[100] porque en él había "bastante terreno y casas abandonadas"; que el número de sus habitantes se había reducido "considerablemente en los últimos tiempos; que los antiguos moradores habían abandonado sus jacales y tierras, permaneciendo éstas sin cultivo y que esos habitantes habían salido a trabajar a la capital de la República y a otras regiones del país y que consecuentemente no existía necesidad de la dotación intentada".[101] Hay que recordar que para ese momento se encontraba vigente la *Ley de ejidos* que exigía como requisito a los peticionarios demostrar la necesidad de las tierras requeridas, razón por la cual los hacendados buscaban poner especial atención en este punto.

También realizó objeciones al censo agrario manifestando que únicamente estaban capacitadas para recibir tierras 32 personas, ya que el resto se dedicaban a laborar en la fábrica de Río Hondo "como obreros o artesanos, teniendo un sueldo mayor de $75.00 mensuales"; otras personas habían emigrado y prestaban "sus servicios en la Ciudad de México en diferentes oficios"; unos más poseían un capital agrícola-comercial mayor de $1000, algunos no eran jefes de familia y "otros son empleados que no deben aparecer consignados en el padrón agrario".[102] Luego entonces, si solo 32 personas tenían derecho a la dotación, las tierras que poseía el pueblo eran suficientes por lo que era improcedente la solicitud.

De los estudios realizados por la Comisión Local Agraria se obtuvieron los siguientes datos: San Antonio Zomeyucan contaba con la categoría política de pueblo, con 91 personas capacitadas para ser dotadas (53 jefes de familia y 38 varones solteros mayores de 18 años),

---

[99] AGA, dotación, exp. 23/2297, legajo 1, f. 2.
[100] Argumentos similares fueron utilizados por los propietarios afectados en otras zonas del país. Tal es el caso de Michoacán en donde pretendieron "descalificar la legitimidad del reclamo de tierras, ya fuera tras alegar que los núcleos de población no acreditaban la posesión previa de las tierras; que ya habían recibido dotaciones con antelación; que sus poblaciones no colindaban con las tierras reclamadas o que no se tenía vocación campesina", NIETO, "Las tensiones", p. 116. Lo mismo sucedió en el amparo presentado por Mercedes Pinkus Lizárraga contra la dotación de tierras al ejido de Temax, en el estado de Yucatán, ORTIZ, "El reparto agrario", p. 462.
[101] AGA, dotación, exp. 23/2297, legajo 2, f. 171.
[102] AGA, dotación, exp. 23/2297, legajo 2, f. 172v.

en el censo agrario fueron registrados como obreros, agricultores, artesanos, jornaleros, comerciantes, canteros, albañiles y pastores; lo que demuestra la diversidad económica de la zona y la necesidad de los pobladores de dedicarse a otras actividades diferentes a la agricultura para solventar sus gastos.

Los de Zomeyucan ya contaban con una posesión de 54 hectáreas, de las cuales cinco formaban la parte urbana y las restantes de tierra cultivable. Dicha superficie se encontraba repartida entre 16 individuos careciendo el resto de los pobladores de tierras, motivo por el cual arrendaban a la hacienda mencionada y a otros pequeños propietarios, "ayudándose también, ya sea trabajando como jornaleros, peones, etc".[103] En cuanto al clima, se dijo que era templado con lluvias de regular intensidad en la primavera y extensas en el temporal, teniendo como cultivos principales maíz, frijol, haba, algunos árboles frutales, predominando la siembra de magueyes, por lo que existe la posibilidad de que también existieran tlachiqueros aunque en las registros no aparezcan consignados como tal.

El pueblo carecía por completo de agua "por lo que solamente puede levantar una cosecha al año en la temporada de lluvias" y la poca que obtenían era de pozos artesianos. Sus vías de comunicación eran amplias y bien conservadas lo cual les permitía estar en contacto con pueblos vecinos, "así como con varias partes del Distrito Federal y aun con la misma Capital de la República".[104]

Es posible que debido a la tardanza en el trámite de dotación, en abril de 1924, un grupo de vecinos del poblado se dirigió al presidente municipal exponiendo que se encontraban "en una situación crítica y sin terrenos donde sembrar un puñado de maíz" y le solicitaron los terrenos que se encontraban sin cultivar de las Haciendas de San José de los Leones y El Prieto, de acorde con lo establecido por la *Ley de Tierras Ociosas*, aunque no queda claro el curso que tomó la petición.[105] Llama la atención que solicitudes parecidas fueron promovidas por vecinos de otros pueblos de la zona como San Esteban, San Rafael Chamapa, Los Remedios, Santa Cruz Acatlán, San Juan Totoltepec y Santa María Nativitas.

Unos meses después y con base en la información obtenida, el gobernador resolvió el 29 de diciembre de 1924, concederles en dotación 100 hectáreas, que serían expropiadas de la Hacienda San José de los Leones. La posesión provisional se llevó a cabo el 15 de enero

[103] AGA, dotación, exp. 23/2297, legajo 2, f. 171v.
[104] AGA, dotación, exp. 23/2297, legajo 2, f. 172.
[105] AHMNJ, FA, SF, SICAA, Vol. 10, exp. 22, f. 11.

de 1925. Del mismo modo que en el caso anterior, el hacendado promovió un juicio de amparo que se analiza en el siguiente apartado.

El interés del propietario para la defensa de sus tierras radicaba en seguir explotando los recursos obtenidos de sus terrenos. En este caso, se sabe que en 1924 firmó un contrato con un particular de nombre Lucio Rodríguez a quien arrendó una mina de arena, que quedó comprendida dentro de la superficie otorgada a los de Zomeyucan, más adelante se abunda en este punto. Al otorgarse la posesión provisional al poblado, la explotación de la mina continuó por lo que los pobladores solicitaron a las autoridades que suspendieran las labores.

En junio de 1925 el gobierno del estado dictó ordenes al presidente municipal para que otorgara garantías a los de Zomeyucan a fin de que el propietario de la hacienda respetara la posesión provisional "y suspendiera los trabajos de explotación de arena". Para noviembre del mismo año, el presidente municipal informó "que aun en contra de aquellas órdenes" se seguía con la explotación y no se respetaba la posesión,[106] lo que ocasionó que las autoridades municipales citaran al propietario y al arrendatario con el objeto de que cesaran en su actuar.

Se desconoce si hubo otros requerimientos, pero lo cierto es que el 18 de marzo de 1926, compareció ante las autoridades municipales el arrendatario de la mina, quien argumentó que no podía suspender los trabajos ya que de ese lugar se extraía arena "para las locomotoras que hacen los servicios de trenes de pasageros y carga, de los Ferrocarriles Nacionales de México, así como para las obras de pavimentación en la Ciudad de México", además de que no contaba con "una orden por escrito de una autoridad competente, para así entregar a los ferrocarriles para que ellos exijan responsabilidades a quien las reporte por el perjuicio que sufran sus trenes por la falta de este material". Y agregó que se iba a dirigir al "Ayuntamiento de la Ciudad de México, previniéndole los perjuicios que podrían sobrevenirle por la falta del material antes dicho".[107]

Por su parte, Antonio Díaz Sánchez no se presentó a la reunión, informando unos días después a las autoridades municipales que se encontraba enfermo "e imposibilitado para poder acudir" a la cita, señalando que su hacienda "como es público y notorio, no produce nada de dinero (ni si quiera para pagar contribuciones) con que pudiera pagar y mandar a un apoderado que me representara", solicitando se le diera un tiempo y tan pronto sanara se

[106] AHMNJ, FA, SF, SOPIC, Vol. 4, exp. 12, f. 19.
[107] AHMNJ, FA, SF, SOPIC, Vol. 3, exp. 8, fs. 20-20v.

presentaría a la presidencia municipal. Desafortunadamente no se conoce el desenlace de este conflicto, pero deja ver que el hacendado también recurrió a otros mecanismos de resistencia para seguir explotando las tierras.[108]

En ese contexto el expediente de dotación pasó a la CNA en donde Antonio Díaz reiteró que el decreto de mayo de 1923 había declarado sus terrenos como zona forestal protegida y en estado de veda absoluta. En la resolución presidencial fechada el 4 de noviembre de 1926, se revocó la resolución provisional del gobernador y se les negó la dotación a los de Zomeyucan, tomando en cuenta los argumentos presentados por el propietario con respecto a la ocupación de los solicitantes, además de que los terrenos afectados eran de mala calidad y que, al estar cercanos a la zona de urbanización de la ciudad de México, podían ser necesarios para el libre desenvolvimiento de la población. Dicha resolución fue la que motivó la interposición del amparo por parte de los pobladores, como se verá más adelante, pues como ya se comentó, para darle mayor claridad a la exposición, primero se presenta el trámite de dotación y después se reconstruyen los respectivos juicios de garantías.

2.4.3 San Esteban Huitzilacasco

En páginas anteriores se ha enfatizado que en esta región de la entidad la relación entre pueblos y haciendas fue menos aguda que en otras zonas del estado, aunque las tensiones no estuvieron ausentes.

Un botón de muestra se presentó en 1889, cuando vecinos de San Esteban Huitzilacasco solicitaron al ayuntamiento su intervención para impedir que Antonio Díaz Sánchez, cerrara el camino que de dicho pueblo conducía a Tecamachalco. Uno de los síndicos habló con el dueño de San José de los Leones quien argumentó que en "años anteriores los mismos quejosos y otros vecinos del propio pueblo de palabra y por escrito" le habían pedido permiso para que les dejara "libre el paso del que se quejan, pero al permitir el tránsito por ese sitio" le resultaba en perjuicio "haciendo que hoy ya no lo consienta".[109] El cabildo acordó realizar una vista de ojos con asistencia del propietario y los pobladores y con ello emitir un informe a la jefatura política para que fuera esta quien resolviera, aunque

[108] AHMNJ, FA, SF, SOPIC, Vol. 3, exp. 8, f. 25.
[109] MARTÍNEZ, "Guía de las actas", pp. 165-166.

se desconoce la solución a la controversia, es claro que existía una relación dialéctica pueblo-hacienda.

En el mismo sentido que San Luis Tlatilco y San Antonio Zomeyucan, en mayo de 1921, vecinos de San Esteban Huitzilacasco solicitaron dotación de tierras al gobernador del Estado de México, es de destacar que con diferencia de días los tres poblados presentaran sus solicitudes de dotación. Si bien en los documentos consultados no aparecen indicios de una acción concertada, ni del actuar de alguna organización regional o estatal que impulsara las demandas agrarias en estos años, es probable que existiera alguna coordinación entre los poblados de la zona.

En este trámite de dotación las posibles fincas afectadas serían la de San José de los Leones y El Prieto. El dueño de la primera, el multicitado Antonio Díaz Sánchez, manifestó su inconformidad con la solicitud debido a que los vecinos antiguos del poblado lo habían abandonado y quedaban "muy pocos teniendo suficientes tierras para sus necesidades agrícolas"; por lo que no existía la necesidad de la dotación "como puede comprobarse con una visita que mande practicar la Local, pues que se trata únicamente de dos o tres personas que desean aprovechar las circunstancias para hacerse de tierras".[110]

Por su parte, Ángel López Negrete, dueño de El Prieto, manifestó como principal oposición que sus propiedades estaban compuestas de tres fracciones de tierras independientes denominadas rancho Atoto, El Blanco y El Prieto, ubicadas parte en el Estado de México y parte en el Distrito Federal, constituyendo pequeña propiedad y encontrándose comprendidas en lo que establecía el artículo 203 de la constitución estatal.

De los datos recabados por la CLA se desprende que San Esteban contaba con la categoría de pueblo, con una población de 222 habitantes de los cuales 72 fueron considerados jefes de familia y mayores de 18 años. El pueblo contaba con 14 hectáreas, de las cuales tres comprendían la zona urbana y el resto era terreno cultivable, en manos de solo 13 vecinos. Los productos que se cultivaban en la zona eran maíz, frijol, haba, trigo, alfalfa y magueyes. Por la parte sur y oeste de los terrenos pasaban canales de agua, uno que iba a Chapultepec y que abastecía a la capital del país "procedente de Río Hondo, y otro, para la hacienda de El Prieto y Anexos"; que no obstante esta situación, a los vecinos les estaba

[110] AGA, dotación, exp. 23/22, legajo 3, f. 1.

"vedado el uso de dichas aguas, obteniendo las que utilizan de pozos artesianos".[111] Su clima era frío, las lluvias iniciaban en mayo, terminando en octubre y sus caminos amplios y en buen estado.

El 13 de febrero de 1925 el gobernador concedió la dotación de 102 hectáreas que afectaban únicamente la hacienda San José de los Leones y la posesión provisional se dio el día 21 del mismo mes. En una comunicación del presidente del CPE al presidente municipal, le informó que no se había presentado ningún incidente.[112] Contra esta resolución provisional, Díaz Sánchez promovió un amparo más, que como se explica más adelante, le fue sobreseído.

Turnado el expediente a la CNA, se emplazó al propietario afectado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Al igual que en los casos anteriores, Díaz Sánchez argumentó que se violaban en su contra los artículos 14, 16 y 27 constitucionales puesto que se le privaba de los derechos que le otorgaba la ley federal de 1919, relativa a la conservación y repoblación de bosques**,** además de no respetarse el multicitado decreto de mayo de 1923.

Por su parte, el dueño de El Prieto refrendó que esta finca era una pequeña propiedad, que las haciendas colindantes eran las de Echegaray y San José de los Leones, que el pueblo solicitante solo contaba con 39 jefes de familia "y considerando que la extensión que deba de corresponder a cada uno de ellos es la mínima por su cercanía a la vía férrea y a grandes centros de población, la cantidad de terreno que deba expropiarse de las haciendas de Echegaray y San José de los Leones es tan pequeña que no resentirán grave perjuicio",[113] como si sucedería con su finca.

En la resolución presidencial, fechada el cuatro de noviembre de 1926, al igual que en los dos casos anteriores, se revocó la resolución del gobernador y se negó la dotación al poblado solicitante por falta de finalidad práctica. Las razones fueron las mismas que en los casos de San Luis y San Antonio: que buena parte de los jefes de familia y varones solteros no se dedicaban exclusivamente a la agricultura, pues muchos trabajan como obreros, artesanos o comerciantes; que las tierras afectables eran "de muy mala calidad, inútiles para el cultivo" y; por su cercanía con la Ciudad de México "pudiendo ser necesarios tales terrenos

[111] AGA, dotación, exp. 23/22, legajo 3, f. 2v.
[112] AGA, dotación, exp. 23/33, legajo 2, f. 15.
[113] AGA, dotación, exp. 23/22, legajo 3, f. 3v.

para el libre desenvolvimiento de la población",[114] lo que terminó ocurriendo unas décadas después. Todo esto en su conjunto fue considerado por la máxima autoridad en materia agraria como una acción antieconómica que dio lugar a negar la dotación. Ante esta decisión, los tres poblados acudieron al juicio de amparo como un recurso de resistencia para defender las posesiones provisionales con que contaban.

Sin duda, profundizar en las particularidades del reparto agrario de estos poblados podría ser de utilidad para entender las dinámicas sociales de la zona, no obstante, esa tarea podría ser objeto de una futura investigación.

Una vez que se cuenta con una visión general de los procedimientos de dotación se llega a los juicios de amparo. En el caso de los tres poblados el gobernador otorgó la posesión provisional, por la cual el propietario de la finca afectada promovió los respectivos juicios de garantías que le fueron sobreseídos; por su parte, ante la resolución presidencial que les negó la dotación a los pueblos de San Luis, San Esteban y San Antonio también recurrieron al amparo, el cual les fue concedido, se repuso el trámite de dotación y la nueva resolución presidencial les otorgó la dotación solicitada. Para una mejor comprensión de los casos, primero se presentan los tres amparos promovidos por el hacendado y en segundo lugar el promovido por los pueblos.

2.4.4 Hacienda San José de los Leones: las defensas del propietario

Como se dijo en la introducción, en esta investigación se reflexiona sobre el uso del juicio de amparo contra actos derivados de la puesta en práctica de la reforma agraria, razón por la que se pone la lupa en dos aspectos de este juicio: las principales causas para promoverlo y el actuar de las partes involucradas en los juicios. A través de estas rendijas, se intenta dar cuenta de uno de los mecanismos de resistencia utilizados tanto por solicitantes de tierras como por los hacendados en defensa de sus derechos, así como de la actuación de estos actores ante el Poder Judicial de la Federación, haciendo suyo y resignificando el discurso de la reforma agraria y el marco legal vigente, todo ello a través de sus peticiones, alegatos y las propias resoluciones de las autoridades agrarias y de los tribunales federales.

En el apartado anterior se presentó de forma sucinta el trámite de dotación llevado a cabo por los pueblos de San Luis Tlatilco, San Antonio Zomeyucan y San Esteban

[114] AGA, dotación, exp. 23/22, legajo 3, f. 4.

Huitzilacasco, del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual obtuvieron las dotaciones provisionales de 145, 100 y 102 hectáreas de tierras, respectivamente. La respuesta del dueño de San José de los Leones, hacienda afectada por estas resoluciones del gobernador, fue el acudir a los tribunales solicitando el amparo y protección de la justicia federal en defensa de su propiedad.

Antes de continuar, es pertinente recordar que en términos generales el juicio de amparo iniciaba con la demanda presentada ante el juez de distrito del lugar en que se cometiera el acto que se reclamaba como violatorio de garantías; admitida esta, se notificaba a las partes; se solicitaba a las autoridades señaladas como responsables que emitieran un informe justificado del hecho y; se señalaba fecha para la audiencia en la que las partes podían ofrecer pruebas y alegatos, y el juzgador emitiría su sentencia. De existir inconformidad por alguna de las partes en la sentencia dada por el juez de distrito, contaba con la facultad de promover el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El primero de los juicios tramitados fue en contra de la resolución provisional que dotó a San Antonio Zomeyucan de 100 hectáreas de tierras de temporal.

Con fecha 23 de enero de 1925, Antonio Díaz Sánchez, presentó demanda de amparo en la que retomó las defensas utilizadas en el trámite de dotación.

En primer lugar, manifestó que su propiedad se encontraba protegida por el multicitado decreto presidencial de 1923. Llama la atención que en este caso incorporó dentro de sus argumentos cuestiones de carácter ambiental al señalar que sus terrenos constituían "las cuencas hidráulicas de los manantiales que en ellos nacen y que abastecen a las poblaciones cercanas" y que era necesario "proteger la vegetación forestal ya escasa en los montes de la hacienda", elementos que en su conjunto serían de utilidad "para regularizar el clima en toda aquella región en beneficio de la Salubridad Pública".[115] Si bien, derivado del estudio de estas fuentes no es posible profundizar en el tema, es importante hacer notar la importancia que pueden tener para la historia ambiental las fuentes judiciales.

También señaló que las tierras de su propiedad no eran laborables sino que eran forestales destinadas a la reforestación; además de que la pequeña parte de la hacienda que colindaba con Zomeyucan constituía "la única fuente de producción de la finca" pues en esa parte se encontraban "las canteras y las minas de arena" que constituían "la única explotación

[115] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 2.

de la hacienda", pudiendo considerarse como una "unidad agrícola industrial en explotación", ya que contaba con "obras apropiadas" para el aprovechamiento de las canteras y la extracción de arena, "existiendo además un escape de ferrocarril" que facilitaba las labores "de la explotación industrial", además de que por esa zona existían "lomas tepetatosas que formaban parte de la explotación industrial agrícola" referida.[116] La importancia de presentar su finca o parte de ella, como una unidad agrícola industrial en explotación, radicaba en que el *Reglamento Agrario* establecía que dichas propiedades quedarían exceptuadas de la dotación.

Insistió en que los pobladores de Zomeyucan no se dedicaban a la agricultura y trabajaban como obreros en la fábrica de Río Hondo, además de que los terrenos que se habían dado de forma provisional a los peticionarios era la zona donde se encontraban las canteras, las minas de arena y las lomas tepetatosas con todo y las obras destinadas a su explotación.

Finalmente, expuso que se violaban sus garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la constitución y el artículo 3 de la ley agraria "en virtud de que el pueblo de San Antonio Zomeyucan, no carece de ejidos tampoco los necesitan por ser obreros y canteros de tepetate en su mayoría y por último se trata de dotárseles con tierras declaradas en estado de veda absoluta". Además de dejarse de aplicar el artículo 14 del *Reglamento Agrario* fracción IV, "toda vez que se trata de afectar una propiedad cuya riqueza suceptible de apropiación la constituye únicamente la explotación agrícola industrial a que se dedica, como se ha dicho antes" y el artículo 23 del mismo reglamento en lo relativo al censo agrario.[117] Queda claro que los hacendados y sus representantes legales tenían claridad absoluta de la legislación agraria.

Mencionó como autoridades responsables al gobernador del estado, a la Comisión Local Agraria, al delegado estatal de la Comisión Nacional Agraria y al Comité Particular Ejecutivo de Naucalpan. En cuanto a los actos reclamados señaló el dictamen emitido por la CLA, la resolución provisional del gobernador y su ejecución, consistente en la posesión dada a los vecinos de Zomeyucan de los terrenos en que se encontraban las canteras y las minas de arena de su propiedad.

---

[116] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 2v.
[117] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 3.

El juez de distrito dio entrada a la demanda, notificó a las partes, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y señaló como fecha de audiencia el jueves 12 de febrero de 1925.

La CLA al rendir su informe justificado manifestó que no existían "las violaciones reclamadas por el demandante, toda vez que la tramitación del expediente de tierras" se había llevado conforme a la ley y solicitó que se declarara la improcedencia del amparo puesto que ya se había otorgado la posesión provisional a los solicitantes. El delegado estatal de la CNA y el gobernador emitieron sus respectivos informes en el mismo sentido.[118]

Este último manifestó que después de haber estudiado con detenimiento el expediente, tomando en cuenta la capacidad jurídica del pueblo solicitante, la necesidad de proveerlo de tierras para que aumentara su ejido y atender sus necesidades agrícolas, había acordado otorgar la posesión provisional, siendo sus actos en este asunto, como en otros, "estrictamente ajustados a lo que disponen las leyes agrarias en vigor".[119] También hizo referencia específica a los puntos manifestados por el quejoso en su demanda. En cuanto a las tierras entregadas señaló que los terrenos no eran forestales sino "laborables, de pasto y cerriles que pueden aprovechar los vecinos para mantener sus ganados; y en cuanto a la existencia de arbolados, están obligados los vecinos del pueblo a mantener, conservar y fomentar la vegetación forestal". Con respecto a las canteras y minas de arena que constituían una unidad agrícola industrial era inexacto pues unas y otras eran "explotadas en arrendamiento por personas particulares"[120] Por estas razones solicitó el sobreseimiento o en su caso la improcedencia de la demanda.

Llama la atención que, en los informes justificados revisados, el argumento de las autoridades es similar, no niegan el acto que se les reclama, pero argumentan su constitucionalidad al llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas por la legislación agraria vigente.

En el mismo sentido, el Comité Particular Ejecutivo de Naucalpan manifestó que la ejecución de la resolución dada por el gobernador se había realizado "con todas las formalidades de ley" y así mismo, que de acuerdo con una ejecutoria de la Suprema Corte dada en septiembre de 1920, aquellos que resultaran afectados con una resolución de dotación

[118] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, fs. 22; 24-25; 29-32.
[119] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 25.
[120] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 32.

podían "reclamar y hacer valer sus derechos en el juicio correspondiente, por lo que, en ese juicio y no en la vía de amparo, es donde el quejoso debió pedir la reparación de los agravios".[121] Al igual que las demás autoridades responsables pidió al juez de distrito la improcedencia del amparo o en su caso, que no se concediera pues no existían violaciones constitucionales.

El día fijado para la celebración de la audiencia se presentó únicamente el agente del Ministerio Público Federal quien pidió al juzgador concediera el amparo solicitado por Antonio Díaz Sánchez tomando en cuenta los argumentos y pruebas presentados por el quejoso, particularmente el decreto forestal de 1923. Terminada la intervención del MPF, el juez decretó la suspensión de la audiencia "por tener que verificar otra, en un incidente de suspensión".[122] Esto último pareciera una cuestión sin importancia, no obstante, al hablar de lo extenso que se tornaban los juicios, es necesario tomar en cuenta la carga de trabajo con la que operaban los juzgados de distrito.

Dentro de las pruebas ofrecidas por el quejoso, exhibió el contrato de arrendamiento firmado con el señor Lucio Rodríguez para explotar la mina de arena mencionada en páginas anteriores. Gracias a ese documento se sabe que la mina se encontraba en la parte conocida como "El Molinito", ubicada en el kilómetro 12 de la vía del ferrocarril a Toluca, que el arrendamiento había sido por tiempo indefinido con un plazo forzoso de dos años, por una cantidad de $600 anuales y en caso de que aumentara el producto de explotación aumentaría la renta. El contrato está fechado el 1° de octubre de 1924,[123] por lo que es claro que su celebración tenía la intención de eludir la legislación agraria y demostrar a las autoridades que se trataba de tierras en explotación con el fin de aprovechar al máximo los recursos de sus terrenos.

La audiencia continuó seis días después, es decir, el 18 de febrero de 1925, en la que el juez de distrito, Leopoldo Vivencio, resolvió negar el amparo en cuanto a la resolución provisional del gobernador y lo otorgó contra los actos de la CLA, de su delegado en el estado y del CPE por la "indebida ejecución de la resolución del gobernador localizando y pretendiendo dar posesión de los ejidos afectando la región forestal de la hacienda San José

[121] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 36v.
[122] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 33v.
[123] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 37-37v.

de los Leones y unas minas de arena en explotación".[124] Dicho de otro modo, dio como constitucional la resolución del gobernador y como ilegal su ejecución. Los argumentos del quejoso habían tenido efecto, lo que demuestra que en el arte del litigio los propietarios y sus abogados supieron utilizar el marco hegemónico de la reforma agraria, es decir, y siguiendo a Roseberry, ese lenguaje común en donde podía "tener lugar la controversia y la lucha".[125]

Las partes no estuvieron conformes con la sentencia y tanto el quejoso como la delegación estatal de la CNA interpusieron el recurso de revisión ante la SCJN. Dentro de sus argumentos, el propietario expresó que se había llevado a cabo la posesión provisional en una parte donde se encontraban "las canteras y las minas de arena y las lomas tepetatosas con todas las otras destinadas a la explotación".[126]

En su pedimento de fecha 4 de septiembre de 1925, el MPF solicitó que se modificara la resolución negándose el amparo en cuanto a su punto dos ya que si al ejecutarse la dotación, se afectaba la zona forestal "esto no quiere decir que tal afectación destruya los efectos del decreto presidencial, pues nada hay que establezca que se quite la zona de veda a que está sujeta".[127] La resolución de la Suprema Corte se dio más de cuatro años después, el 11 de julio de 1929, sobreseyendo el juicio por improcedente ya que se trataba de una resolución provisional del gobernador. El argumento de la Corte fue el que se dio en todos los casos en que el acto reclamado se trataba de la resolución provisional del gobernador:

> Según lo dispuesto por la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, el amparo es improcedente cuando se trata de actos de la autoridad judicial, que tengan una posible reparación, y como existe la misma razón para declarar la improcedencia cuando se trata de amparos del orden administrativo, debe concluirse que el presente juicio de garantías es improcedente, por ser el acto reclamado una resolución provisional del ciudadano Gobernador del Estado de México, que está sujeta a la revisión del ciudadano Presidente de la República, como lo ordena el artículo 9/o de la Ley del 6 de enero de 1915.[128]

Si bien con esta resolución los pobladores seguían conservando las tierras, unos meses atrás el presidente de la república, después de otros procedimientos, ya había concedido la dotación definitiva, por lo que para efectos prácticos esta resolución no hubiere tenido consecuencia alguna, lo que deja ver lo lento que podía llegar a ser un juicio de este tipo.

---

[124] AHCCJT, AI, exp. 13/1925, f. 39v.
[125] ROSEBERRY, "Hegemonía", p. 220.
[126] AHSCJN, AR, exp. 2391/1925, f. 14v.
[127] AHSCJN, AR, exp. 2391/1925, f. 15v.
[128] AHSCJN, AR, exp. 2391/1925, f. 20.

El segundo de los amparos promovidos fue por la posesión provisional dada al pueblo de San Esteban Huitzilacasco. En su demanda, fechada el 23 de febrero de 1925, el quejoso señaló como autoridades responsables al gobernador, al delegado de la CNA, a la CLA y al CPE y como garantías violadas los artículos 14, 16 y 27 constitucionales; así como el artículo 3 de la ley agraria en vigor.

El propietario centró sus alegatos en dos puntos principales: la calidad de las tierras y que parte de los terrenos afectados eran forestales. Precisó que las tierras afectadas eran montañosas, de arcilla y tepetate, por lo que eran impropias para el cultivo y retomó el multicitado decreto de mayo de 1923. Puntualizó que "los intereses que salen más directamente lesionados con la dotación concedida" era la superficie en donde se ubicaban unas minas de arena en explotación llamadas "La chica", lo que convertía a la hacienda en una unidad agrícola industrial en explotación "toda vez que existen obras propias para la extracción de los productos de las minas" y que la actividad principal de la mayoría de los beneficiados era el comercio, pues poseían "tiendas para expender mercancías para los que trafican por el antiguo camino nacional a Toluca", el cual atravesaba la población y que el resto de los habitantes trabajaban en la capital del país dada "la cercanía del poblado con dicho centro".[129]

Al igual que en el amparo anterior, mencionó que el pueblo solicitante no carecía de tierras y aunque careciera de ellas no las necesitaba dado que los habitantes eran comerciantes y obreros en la capital del país, y que las tierras dotadas eran impropias para la agricultura por estar declaradas en zona de veda absoluta. Por lo demás, su demanda fue presentada en los mismos términos que la anterior.

Admitida la demanda, el de distrito solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó como fecha para la audiencia constitucional el 17 de marzo. La CLA confirmó los hechos manifestando que no existieron las violaciones reclamadas por el quejoso y solicitó se negara el amparo.[130] El CPE dijo que los terrenos dotados a San Esteban Huitzilacasco no incluían "la zona forestal de la finca, ni las minas de arena"[131] a que se hacía referencia. El gobernador confirmo los hechos, puntualizando que no hubo violación y la CNA, no considero que existiesen violaciones a la ley, negando que existieran minas de arena

[129] AHyFREM, CAM, Vol. 185, exp. 3, f. 42-43.
[130] AHyFREM, CAM, Vol. 185, exp. 3, f. 45-46.
[131] AHCCJT, AI, exp. 43/1925, f. 21.

en explotación formal ya que se sabía "que una vez en arrendamiento, extraen arena en pequeña escala, personas particulares",[132] solicitando se declarara la improcedencia de la demanda.

El día programado para la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que el juez se encontraba enfermo, señalándose como nueva fecha las 10 horas del tres de abril de 1926. En el mismo sentido que en el juicio anterior, este evento puede considerarse como banal, no obstante, es importante tomar en cuenta que el desarrollo de los juicios pudo verse obstaculizado por este y otro tipo de factores. Lo cual nos permite asomarnos a la cotidianeidad de los juzgados de distrito.

Llegada la nueva fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, y de acuerdo con el expediente, a la hora señalada únicamente se presentó el agente del MPF quien, en uso de la voz, pidió se negara el amparo a Antonio Díaz Sánchez, a pesar de que en el juicio de amparo de Zomeyucan, había pedido que se le concediera, pero en este caso el CPE estaba demostrando que las 103 hectáreas dotadas a San Esteban no se encontraban dentro de la zona forestal.[133]

Es de suponer que en algún momento posterior a que finalizó su intervención el agente del Ministerio Público, se presentó el abogado del quejoso para ofrecer las pruebas y alegatos respectivos. Los puntos principales expuestos se centraron en intentar demostrar que las minas se encontraban dentro de la superficie dada a los de San Esteban y que contaba con el antecedente del amparo otorgado por ese mismo juzgado, contra las mismas autoridades responsables en el caso de Zomeyucan. El juez acordó recibir las pruebas y alegatos exhibidos y que se agregaran al expediente.

Dentro de las pruebas presentadas por el quejoso y haciendo uso de la serie de recursos legales a su disposición, Antonio Díaz Sánchez acudió al juzgado de primera instancia de Tlalnepantla con el fin de realizar una diligencia en la que constara que las minas se encontraban dentro de las tierras dotadas. Exhibió ante el juez de distrito copia de esta actuación y del decreto de 1923 señalando que esta resolución abarcaba "la extensión de todos los terrenos de mi finca y no de solo una parte de ella, pues no solo se ordena la conservación de los bosques existentes sino la restauración, lo que implica el establecimiento

[132] AHCCJT, AI, exp. 43/1925, f. 20v.
[133] AHCCJT, AI, exp. 43/1925, f. 33.

de viveros y demás elementos de reforestación necesarios para conseguir la restauración de la parte desarbolada".[134]

De acuerdo con el acta de la audiencia, a las 11:15 horas el MPF solicitó intervenir para manifestar que en contra de lo establecido por la ley, se había oído a la parte quejosa y recibido sus pruebas; acto contrario a lo establecido por el artículo 76 de la ley de amparo que señalaba "que en el momento, o a la hora señalada para la audiencia, deben recibirse las pruebas; y como la parte quejosa no se presentó a la hora, según consta al principio del acta, es indudable que por ningún motivo debió habérsele oído".[135] En respuesta, el abogado del quejoso, el licenciado Gabriel Gómez Mendoza, manifestó que la audiencia se llamaba de pruebas, alegatos y sentencia, por lo que no concluía hasta que el juez pronunciara su fallo. El juzgador decretó suspender la audiencia por tener que resolver otra en un incidente de suspensión.

Dado que por las mismas fechas se encontraba en ese juzgado el amparo promovido contra la dotación otorgada a San Luis Tlatilco, ambos procedimientos se resolvieron en una sola sentencia (que más adelante se explica), por tratarse del mismo quejoso, mismas autoridades responsables y la misma finca. En la práctica jurídica a esta figura se le conoce como acumulación de autos y estaba reglamentada en la ley de amparo de 1919 en los artículos 24 y 28.

En el caso de San Luis Tlatilco, Antonio Díaz Sánchez, demandó con fecha 7 de marzo de 1925 el amparo y protección de la justicia federal contra actos del gobernador, del delegado estatal de la CNA, de la CLA y del CPE, por violación a las garantías que le otorgaban los artículos 14, 16 y 27 constitucionales.

Su demanda la formuló en los mismos términos que las anteriores y en contra de las mismas autoridades responsables, sin embargo, es de destacar que en este juicio también abundó en los argumentos ambientales en defensa de sus tierras.

En cuanto a la protección de la zona forestal, argumentó que en caso de ser afectada existía "el peligro de una inundación de la Ciudad de México pues hay que recordar que las ha habido en épocas anteriores" y a que "día por día se advierte más la resequedad de la atmósfera"; ambas situaciones "perjudiciales a la salud humana animal y vegetal", podían

[134] AHCCJT, AI, exp. 43/1925, f. 39v.
[135] AHCCJT, AI, exp. 43/1925, f. 41.

evitarse "con el sostenimiento de los montes y arbolados, la reforestación de las partes desarboladas y con el establecimiento de viveros correspondiente".[136]

También se refirió a las cuencas hidráulicas pues

> mientras mas se conserven las aguas en el suelo y subsuelo de la región evitándose los deslaves y las corrientes de agua violentas, mas posibilidad existirá para la rehabilitación de los manantiales que son los que abastecen de agua constantemente a las poblaciones circunvecinas. Antiguamente existían en los terrenos de la Hacienda San José de los Leones, siete manantiales primeramente muy abundantes, actualmente reducidos a menos de la tercera parte de su capacidad y otros totalmente extinguidos. Estos manantiales volverían a su primitivo estado reforestando sus cuencas de alimentación, y traerán, como es natural la riqueza de los poblados de la parte baja.[137]

De la misma forma que en el caso de San Esteban, señaló que los habitantes de San Luis Tlatilco se dedicaban en su mayoría al comercio y poseían tiendas "para expender mercancías para los que trafican por el antiguo camino nacional a Toluca que está cerca de la población" y el resto de los habitantes trabajaba en la capital del país "por razón de la cercanía del poblado con dicho centro, por cuyas razones, los que figuran como habitantes en el censo que no tienen casa propia y comercio"[138] vivían en la ciudad de México.

Admitida la demanda y solicitados los informes justificados se fijó como fecha para la celebración de la audiencia constitucional el ocho de abril de 1925. El día de la audiencia se presentó únicamente el agente del MPF quien promovió el incidente de acumulación de autos con el juicio número 43, iniciado por el mismo quejoso contra actos de las mismas autoridades señaladas en el presente juicio, tomando en cuenta que aquel se encontraba pendiente de sentencia. Siguiendo con su intervención, el Ministerio Público realizó un recuento del procedimiento de dotación y solicitó al juez que negara el amparo al quejoso. Parece que la carga de trabajo en el juzgado de distrito del Estado de México era abundante, pues el juez suspendió la audiencia "por tener otro amparo que resolver".[139]

Los informes de las autoridades responsables se centraron en reconocer los actos que se les imputaban, al igual que la legalidad de estos.

---

[136] AHCCJT, AI, exp. 53/1925, fs. 2v, 3.
[137] AHCCJT, AI, exp. 53/1925, fs. 3-3v.
[138] AHCCJT, AI, exp. 53/1925, f. 4.
[139] AHCCJT, AI, exp. 53/1925, f. 42v.

En su sentencia del 15 de abril de 1925, el juez interino de distrito en el Estado de México, Lic. José Zendejas, resolvió en dos sentidos: en cuanto a San Luis Tlatilco, negó el amparo y por el caso de San Esteban lo otorgó únicamente por los actos de la CNA, la CLA y del CPE, es decir, por una indebida ejecución de la resolución del gobernador al ubicar parte del ejido de San Esteban en la zona forestal y de minas de la Hacienda San José de los Leones.[140]

Inconformes con la sentencia, el Ministerio Público Federal, la delegación de la Comisión Nacional Agraria y el quejoso; promovieron el recurso de revisión ante la Suprema Corte. En su escrito el Ministerio Público y el delegado estatal de la CNA en términos generales argumentaron que las responsables no habían violado ninguna garantía constitucional y al otorgarse el amparo al hacendado se causaban graves perjuicios al poblado beneficiado. Por lo que toca a los razonamientos de Antonio Díaz Sánchez alegó que el juez de distrito no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas, particularmente el decreto forestal de 1923; que los terrenos concedidos no eran laborables y; que los solicitantes no tenían necesidad de tierras "toda vez que la mayor parte de los habitantes trabajan en México como obreros".[141]

Hay que recordar que, en el caso de los amparos en revisión, una vez que era admitido por la Suprema Corte, se daban diez días a las partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para formular su pedimento, es decir, emitir su opinión legal con respecto al caso y solicitar a la corte la revocación o confirmación de la sentencia emitida por el juez de distrito. En este caso, el MPF solicitó en su pedimento fechado el 6 de agosto de 1925, negar el amparo al quejoso por observar dos motivos de improcedencia; el primero, porque en la tramitación del expediente de San Esteban Huitzilacasco se habían llenado todos los requisitos establecidos por la ley del 6 de enero de 1915 y del artículo 27 constitucional y; el segundo, porque tratándose de una resolución provisional del gobernador, no era violatoria de garantías individuales puesto que esas resoluciones tenían "que ser revisadas por la Comisión Nacional Agraria y el C. Presidente de la República" quien dictaba "la última palabra en asuntos de esta naturaleza".[142]

[140] AHyFREM, CAM, Vol. 185, exp. 3, f. 60.
[141] AHyFREM, CAM, Vol. 185, exp. 3, f. 64.
[142] AHSCJN, AR, exp. 2396/1925, f. 13v.

De los documentos consultados en el Archivo General Agrario, en la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca y en la Suprema Corte no queda claro el motivo de la tardanza en resolver este expediente. Posiblemente la carga de trabajo con la que contaba la Corte hizo que, hasta el 11 de julio de 1929, resolviera sobreseyendo por improcedente el amparo "por ser el acto reclamado una resolución provisional del ciudadano gobernador del Estado de México",[143] tal y como había sucedido en el amparo contra la dotación a San Antonio Zomeyucan y siguiendo el criterio jurisprudencial emitido en 1929 que se presentó páginas atrás.

Para este momento ya habían transcurrido ocho años desde la solicitud de los tres poblados enunciados; el propietario afectado tramitado tres amparos contra las posesiones provisionales; los expedientes de dotación habían sido turnados a la CNA y; el presidente de la república emitido su resolución negando la dotación. Inconformes con esta resolución, los pueblos solicitantes acudieron a los tribunales federales y gracias a ello obtuvieron la dotación definitiva, cómo se llegó a ello, es lo que a continuación se cuenta.

2.4.5 El amparo de los pueblos.

Siguiendo el cuadro anexo 1, queda claro que la mayor parte de los juicios de amparo en este periodo fueron promovidos por los propietarios expropiados, empero, hubo casos, quizá excepcionales, en donde los pueblos peticionarios de tierras recurrieron al juicio constitucional para hacer valer sus derechos, como son los dos casos que se presentan en esta tesis. El estudio de estos juicios es importante dentro de la historiografía de la reforma agraria porque permite acercarse al cómo los solicitantes de tierras actuaron dentro de los tribunales federales, aún más, permite observar cómo se apropiaron y resignificaron el discurso jurídico de la reforma agraria desarrollando un auténtico arte del litigio.

Tal fue el caso de los pueblos de San Luis Tlatilco, San Antonio Zomeyucan y San Esteban Huitzilacasco del municipio de Naucalpan de Juárez, quienes haciendo uso del marco común material que les otorgaba la legislación vigente, acudieron al juicio de amparo como un medio de resistencia para proteger las posesiones provisionales con las que contaban. Es de resaltar el actuar colectivo de estos pueblos, por lo menos a nivel judicial, ya que, al recurrir a la justicia federal, litigaron de forma colectiva y no individual.

[143] AHSCJN, AR, exp. 2396/1925, f. 22.

Es necesario recordar que, en noviembre de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles había resuelto los expedientes de dotación de los poblados mencionados, declarándolas improcedentes. En los tres casos la posible hacienda afectada sería la de San José de los Leones, propiedad del ingeniero Antonio Díaz Sánchez. Ante esta negativa los pueblos solicitaron la protección de la justicia federal. El juez de distrito del Estado de México emitió su sentencia en febrero de 1928 concediendo el amparo a los demandantes, cuyo efecto jurídico fue la reposición del procedimiento dotatorio con la consecuente emisión de una nueva resolución presidencial que les otorgó la dotación definitiva.

En los amparos analizados en el apartado anterior se puso énfasis en los argumentos utilizados por el propietario, en este caso, se pone atención en la actuación de los pueblos, ahora quejosos en el juicio de amparo. Vale la pena señalar la posibilidad de que asuntos como este se hayan ventilado en otros lugares del país, por lo que seguir este indicio puede aportar mayor conocimiento a la historiografía agraria y profundizar en el papel activo de los solicitantes de tierras ante las instancias judiciales.

En el ejemplo que a continuación se presenta es en donde se expresa de forma clara la noción de hegemonía, vista desde el lado de los solicitantes de tierras. Como se adelantó en la introducción, este concepto se centra en entender la lucha más que el consenso, lucha que se desarrolla dentro de un marco común material para los contendientes, que en el caso de la cuestión legal se concreta en el lenguaje jurídico utilizado por las distintas partes en el amparo y que quedó plasmado en los expedientes. En ese sentido, se propone pensar los expedientes judiciales como una muestra del lenguaje de protesta adoptado y adaptado tanto por el antiagrarismo como por los grupos solicitantes y, en este caso específico, rescatar la voz de los sectores desposeídos que lucharon por la tierra; finalmente es en las fuentes judiciales, entre otras, en donde "se puede escuchar la voz de los sectores populares, mediatizada, es cierto, pero la voz al fin".[144]

En su demanda fechada el 29 de diciembre de 1926, los tres poblados de Naucalpan se refirieron específicamente a los motivos principales por los que se les había negado la dotación: que no trabajaban las tierras por ser artesanos u obreros en Río Hondo o laboraban en la ciudad de México; la necesidad de urbanización de la capital del país "y su futuro

[144] MAYO, "Plebe urbana", p. 48.

ensanchamiento" y; que se trataba de "terrenos estériles", es decir, impropios para la agricultura.[145]

En la parte relativa a los derechos violados además de referirse a los artículo14, 16 y 27 constitucionales, señalaron la violación a la circular 25 de la CNA que establecía "que todo medio real o simulado" que se utilizara con el propósito de evitar "la aplicación de la Ley del 6 de enero de 1915" sería desechado "por ser radicalmente nulo e ineficaz como absolutamente contrario a una disposición de orden público que no depende en caso alguno del capricho o juego de los particulares".

La forma en que fue presentada la demanda y en que actuaron en las etapas del juicio, demuestra que los solicitantes de tierras, sus representantes legales o ambos, tenían claro el uso del derecho para hacer valer sus intereses; sin embargo, y como se ha comentado, al tratarse de una figura jurídica tan técnica, los pueblos quejosos tuvieron algunas deficiencias en su escrito inicial.

El secretario del juzgado, el licenciado José Zendejas, realizando funciones de juez, en ausencia del titular, al conocer de la demanda pidió a los promoventes que acreditaran la representación que ostentaban. Estanislao Mejía, Rafael Mendoza, Antonio Castañeda y Luis Vargas Rea, presentaron las actas de asamblea celebradas en los tres poblados en donde fueron nombrados sus representantes. En este sentido, los pueblos tuvieron cuidado de llevar a cabo la serie de procedimientos tanto los marcados por la ley como los solicitados por el juzgador, como se presenta a lo largo del análisis de este amparo.

Cumplido ese requisito, con fecha 6 de enero de 1927, el juez de distrito, licenciado Agustín Lira, dio por admitida la demanda, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y fijó como fecha de la audiencia constitucional el día 10 de septiembre "por estar ocupados los días anteriores a esa fecha con otras audiencias en diversos juicios de amparo".[146]

Otro elemento que los quejosos no señalaron en su demanda fue el nombre del entonces tercero perjudicado ni presentaron la respectiva copia de la demanda, solicitándoles el juez cumplir con ese requisito y nombrar dentro de los quejosos a un representante común. Los representantes de los pueblos señalaron al propietario de San José de los Leones, Antonio

[145] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, fs. 1-3.
[146] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, f. 4v.

Díaz Sánchez como tercero perjudicado, presentaron la respectiva copia y nombraron a Antonio Vargas Rea como representante común.

Por su parte, las autoridades responsables emitieron sus respectivos informes justificados. El representante de la CNA expresó que los actos de esta se habían llevado a cabo conforme a lo establecido por la ley vigente, que ningún artículo constitucional se había violado y que los promoventes habían presentado su demanda de forma extemporánea solicitando el sobreseimiento del juicio o en su caso que se negara el amparo.[147] El Ministerio Público exhibió su pedimento en el mismo sentido, solicitando se declarara la improcedencia del amparo por haberse presentado de forma extemporánea.

En el caso del presidente de la república, el informe justificado lo emitió el presidente de la CNA (como su representante), quien señaló que era inexacto que hubieren ocurrido las violaciones constitucionales invocadas por los quejosos, pues los actos del ejecutivo se habían apegado a los preceptos legales de la materia, razón por la cual solicitó que se negara el amparo solicitado.[148]

Llama la atención que en ambos informes la CNA y su delegado en la entidad solicitaran que se negara el amparo tratándose de solicitantes de tierras, pues en otros asuntos fueron ambas autoridades quienes apoyaron a los peticionarios promoviendo los recursos de revisión ante la Suprema Corte (ver anexo 1). En este juicio queda constancia de la defensa de lo mandatado por el presidente de la república, aunque no es claro si fue por un interés en preservar la aparente unidad agrícola-industrial en explotación o por algún vínculo político o personal con el hacendado.

Un par de días antes de celebrarse la audiencia, es decir, el 8 de septiembre de 1927, el tercero perjudicado solicitó su diferimiento pues no contaba con la documentación necesaria para aportar las pruebas y en el mismo sentido se manifestó el representante de la CNA, aunque no precisó el motivo. En atención a lo anterior, el juez interino de distrito, licenciado Luis G. Caballero, fijó como nueva fecha las 11 horas del 30 de noviembre.

[147] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, fs. 22-23.
[148] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, fs. 53-54.

Por su parte, los quejosos revocaron a su representante común puesto que el señor Luis Vargas Rea se encontraba "seriamente enfermo" y nombraron a Estanislao Mejía,[149] personaje que aparece de manera esporádica en otros episodios de esta investigación.

Llegada la nueva fecha, el representante de los quejosos y la CNA, nuevamente solicitaron se difiriera la audiencia. El primero argumentó que no había podido reunir todas las pruebas que iba a ofrecer y el segundo, por existir la posibilidad de que no llegaré oportunamente a ella, la nueva fecha se fijó para el 1° de febrero de 1928.[150]

Como puede observarse, por lo menos en este caso, aunque no debe descartarse que ocurriera algo similar en otros juicios, el que se extendiera la duración de estos también respondió a la actuación de las partes y no sólo a la carga de trabajo de los juzgados de distrito.

Finalmente se celebró la audiencia el primer día del mes de febrero de 1928, presentándose el agente del MPF y el representante de los quejosos, acompañado de su abogado Enrique Flores Magón, uno de aquellos fundadores y militantes del PLM al que se hizo referencia en el capítulo anterior. Enrique vivió exiliado en Estados Unidos de donde regresó en 1923, después de la muerte de su hermano Ricardo. Ya en México una de sus principales actividades fue la asesoría a diversos grupos solicitantes de tierras, como él mismo lo narra en la conversación sostenida con el escritor Samuel Kaplan[151] y para 1933 participó junto con Graciano Sánchez y otras personajes, en la formación de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), organización que respaldó la candidatura de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república.

En uso de la voz, Flores Magón ofreció diversas pruebas documentales en donde destacan un certificado expedido por el jefe de la zona ejidal y un certificado del juez auxiliar del pueblo de Río Hondo. En el primero se daba constancia de que San Luis Tlatilco tenía sembradas un 75% de las tierras dotadas con maíz, cebada y frijol; San Esteban Huitzilacasco, había sembrado el total de la dotación con maíz, cebada, frijol y trigo y; San

[149] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, f. 42. Poco se sabe sobre este personaje, no obstante, vale la pena mencionar que en 1925 era presidente del comité de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de México en la zona y en ese mismo año, de acuerdo con la investigación de Jenaro Reynoso, fue candidato a diputado, REYNOSO, "Facciones", p. 318. Para los años treinta era líder regional del Partido Comunista en la región de Tlalnepantla, ARREOLA, *La sucesión*, p. 150.
[150] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, fs. 49,50.
[151] KAPLAN, *Peleamos contra*, pp. 497-499.

Antonio Zomeyucan tenía sembradas 50% de las tierras otorgadas con maíz, frijol, cebada y alfalfa. El segundo documento certificaba la distancia a que se encontraban los pueblos quejosos del Distrito Federal.[152]

Dentro de sus alegatos recalcaron que las tierras dotadas de forma provisional las estaban trabajando y que el ponente de la CNA encargado de dictaminar el expediente mostraba "simpatías por el hacendado de San José de los Leones". Si bien no se cuenta con mayores elementos para profundizar en este punto, por la forma en que presentan su denuncia, vale la pena reproducir el argumento:

> El tal ponente fue más implacable que la tierra inútil hecha germinar por el sudor del campesino; tuvo en sus manos y en su conciencia el indiscutible derecho de los ejidatarios a las tierras dotadas y cuando estos mismos ejidatarios esperaban que se cumplirían las Leyes emanadas de la revolución a la que dieron pródigamente sus contingentes de sangre, en vez de dictaminar justicieramente, urdió un dictamen atentatorio de los intereses campesinos, contrario al interés público y opuesto absolutamente al espíritu y al texto de las leyes de la materia.[153]

Como puede apreciarse en estas líneas, los peticionarios de tierras habían recogido y hecho suyo el discurso de la reforma agraria en defensa de sus derechos.

De nueva cuenta centraron su argumentación en contravenir las tres principales causas por las que se les había negado la dotación: "que la mayoría de jefes de familia varones y solteros no se dedicaban a la agricultura exclusivamente"; "que las tierras afectables" eran inútiles para la agricultura y; que posiblemente esas tierras serían necesarias "para el desenvolvimiento de la zona de urbanización de la Ciudad de México".

En cuanto a la primera causa, argumentaron que en todo el procedimiento no existía prueba alguna que acreditara que algunos ejidatarios eran obreros "dedicados a ocupaciones distintas de la agricultura" y los censos levantados demostraban lo contrario, además de que tal afirmación no tenía sustento legal "porque dedicar el tiempo desocupado a actividades distintas del cultivo del ejido no lo prohíbe la ley ni disposición alguna".

Sobre el segundo motivo, manifestaron: "Tenemos que hacer un esfuerzo para dominar la indignación y no dejarla que estalle en estos apuntes de alegatos", no existiendo una sola prueba de ese hecho en todo el expediente y, por el contrario, contaban con el

[152] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, fs. 93, 64.
[153] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, f. 101-105.

certificado expedido por el jefe de la zona ejidal en el estado con el cual demostraban "la existencia de los cultivos de maíz, frijol, trigo, cebada y alfalfa" que se producían en la región.

Con respecto a la tercera causa argumentaron que el artículo 14 del *Reglamento Agrario* señalaba las propiedades exceptuadas de dotación y en ninguna de las excepciones se señalaba "la de que no se tomen tierras que puede necesitar la Ciudad, cuando el número de sus habitantes tenga un desarrollo fantástico de millones y no basten las enormes extensiones inhabitadas del Valle y tengan que recurrir a la región montañosa, llena de barrancas y abras en donde se encuentran situadas las pequeñas tierras con que fuimos dotados provisionalmente, para edificar sus casas".

Terminaron su exposición en los siguientes términos:

> ¿Cómo es posible conceder que para no estorbar una incierta y probabílisima comodidad de la Ciudad de México, se condene a la esclavitud y el hambre a la población de los campos? Desgraciados de los pueblos situados dentro del mismo Distrito Federal y que han obtenido dotaciones definitivas, si les toca en suerte un Ponente de la especie que desafortunadamente tocó a los ejidatarios que represento. Si a estos pueblos situados a más de quince kilómetros de los límites del Distrito Federal se les ha negado dotación definitiva en aras del futuro crecimiento de la Ciudad de México, a ellos con mayor razón se le habría negado.

El juez emitió su sentencia en la audiencia del primero de enero de 1928. En términos generales, dentro de sus considerandos señaló que si bien el delegado estatal de la CNA había presentado copias de los oficios de notificación a los quejosos no había probado "que esos oficios hubiesen llegado al lugar de su destino" y mucho menos que los hubieren recibido en la fecha indicada, además de que las autoridades responsables no habían comprobado la existencia de las razones esgrimidas por el presidente de la república en sus resoluciones pues "los informes de las mismas que obran en autos, tienden solamente a sostener la improcedencia del amparo, sin justificar en forma alguna los hechos en que se funda la sentencia presidencial".[154] El juez de distrito estimó que el actuar del gobernador se encontraba ajustado a lo establecido por la ley, por lo que las resoluciones del ejecutivo federal violaban las garantías constitucionales invocadas por los quejosos, concediéndoles el amparo solicitado.

Es de destacar este último argumento pues demostraría que para ese momento existía cierta autonomía del poder judicial respecto del poder ejecutivo, por lo menos a nivel federal.

[154] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, f. 107.

Inconforme con esta sentencia, el 16 de febrero de 1928, el tercero perjudicado, el multicitado propietario de San José de los Leones, promovió el recurso de revisión directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informándolo al juez de distrito en el Estado de México y acompañando dicho escrito con las copias exigidas por el artículo 88 de la ley de amparo.[155]

En su escrito, formuló agravios comunes en donde manifestó: que el amparo otorgado iba en contra del decreto del 17 de mayo de 1923, que había declarado zona forestal y en estado de veda los terrenos en pugna, violándose las disposiciones relativas a la conservación de bosques; que los terrenos no forestales expropiados eran de arcilla y tepetate, siendo de mala calidad e inútiles para el cultivo, violándose el artículo noveno del *Reglamento Agrario*, ya que el "funcionario federal no quiso aceptar el estudio técnico que se llevó a cabo sobre el particular, sino que se guió por el dicho de los interesados sin justificación alguna" y; en su tercer agravio manifestó que si "el Presidente de la República con el elevado cargo que desempeña" había considerado "inconveniente la dotación de ejidos porque están muy cerca los terrenos afectables de la zona de urbanización para el libre desenvolvimiento de la población, se debe al conocimiento exacto que le proporciona su puesto, y debe conceptuarse como bien fundado su acerto",[156] esto último apelando a que la máxima autoridad en materia agraria era el ejecutivo federal.

También presentó agravios específicos a cada poblado: para el caso de San Antonio Zomeyucan retomó el argumento emitido en la resolución presidencial acerca de la actividad de los solicitantes, ya que "la mayoría de los jefes de familia y varones solteros" no se dedicaban a la agricultura, pues trabajaban como obreros "en la fábrica de Río Hondo", otros eran artesanos y algunos más prestaban "sus servicios en la Ciudad de México, dedicándose a diversas actividades"; por lo que toca al pueblo de San Esteban, dijo que la prueba tomada en cuenta por el juez de distrito para otorgar el amparo había sido un certificado del jefe de zona ejidal en el Estado de México, en que hacía constar que los terrenos dotados por el gobernador estaban sembrados y "al tener como justificado el hecho con esa sola constancia proveniente de un correligionario ejidatario se ha cometido un agravio flagrante, máxime por dar mayor crédito al solo dicho de ese Jefe de Zona Ejidal que a lo aseverado por el

[155] AHCCJT, AI, exp. 6/1927, f. 120.
[156] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, fs. 1-1v.

Ciudadano Presidente de la República en su resolución correspondiente" y; de San Luis Tlatilco, manifestó que el juzgador tomó en cuenta que vecinos del pueblo contaban con algunas parcelas de tierra en arrendamiento y de ahí había deducido "que todos los vecinos son agricultores" y por ellos tenían derecho a la dotación.[157]

Al tener conocimiento de ese recurso, Estanislao Mejía, el representante común de los vecinos de los tres poblados, por medio de un escrito fechado el 30 de marzo de 1928, manifestó a la SCJN que "sólo el mezquino interés del acaparador de tierras, rebelándose injustificadamente contra el indiscutible derecho de las comunidades rurales a tener asegurada su subsistencia",[158] había motivado a Díaz Sánchez a interponer el recurso de revisión y refutó los agravios formulados por el quejoso. A pesar de lo extenso de sus argumentos, vale la pena reproducirlos, ya que son una muestra más del uso del discurso de la reforma agraria mexicana y del arte del litigio desarrollado por los pueblos. En lo relativo al decreto de zona forestal y de veda absoluta dijo que si tal declaración

> bastara para que un latifundio de las dimensiones del de San José de los Leones, estuviera a salvo de la repartición de tierras ordenada por la Ley Máxima de la República, con toda seguridad no habría una sola pulgada de tierra con qué dotar a los numerosos grupos de población campesina existentes en el país y serían letra muerta las leyes agrarias, inútil la Revolución y perversas, sino criminales, las aspiraciones del texto constitucional, tendentes a la realización del ideal de una menor desigualdad en el reparto de la riqueza; porque todos los propietarios afectados por la repartición de tierras, procurarían ponerse bajo la fácil bandera de la protección forestal y la veda absoluta.[159]

Respecto a la mala calidad de las tierras en disputa, argumentó que era falsa esa aseveración y que estaba fundamentada "en un considerando ideado por el ponente que nos tocó en suerte hiciera el proyecto de sentencia con el que se sorprendió la buena fe del C. Presidente de la Republica y que estuvo a punto de causar la ruina de los ejidatarios",[160] puesto que el quejoso no había alegado esta circunstancia y únicamente se había opuesto a la dotación con el argumento de la reforestación.

Agregó Mejía que ya habían expuesto su asunto al presidente de la república, que este se había indignado cuando le mostraron las pruebas que acreditaban que los terrenos estaban

[157] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, fs. 2-2v.
[158] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, fs. 7.
[159] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, fs. 7v.
[160] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 8.

> sembrados en proporciones que no lo están la mayoría de los de la República, al grado de que fueron premiados nuestros cultivos en exposición reciente y *nos aconsejó hiciéramos uso del recurso de amparo*, ordenando a la Nacional Agraria se conformara con la sentencia del Juez de Distrito. El funcionario que proyectó la sentencia ya no es miembro de la Comisión Nacional Agraria, lo que quiere decir que su proyecto no se ajustó a ningún estudio técnico, como lo demuestran los hechos y como lo prueba fehacientemente el certificado expedido por el Jefe de la zona ejidal en el Estado, que obra en autos, y que no es un partidario nuestro como afirma dolosamente el recurrente, sino un funcionario, el más alto representante de la Secretaría de Agricultura y Fomento en el Estado".[161]

Llama la atención que en este argumento se haga referencia a una reunión sostenida con el presidente de la república y más aún, a que él fuera quien les aconsejó promover el amparo, pues el mismo presidente Plutarco Elías Calles había negado la dotación definitiva.

En cuanto a la cercanía de las tierras expropiadas de la zona de urbanización, su respuesta fue que se encontraban a 14 kilómetros de los límites del Distrito Federal con el Estado de México, señalando que este argumento tampoco lo había utilizado previamente el recurrente, "sino que se lo proporcionó su auxiliar, el ponente que proyectó la sentencia con qué fue sorprendido el C. Presidente de la República".[162]

Por lo que toca a los alegatos particulares por poblado, en el caso de San Antonio Zomeyucan, Mejía argumentó que habían demostrado con copias de los censos agrarios que todos los solicitantes eran agricultores. En cuanto a San Esteban, aclaró que "sino fuera por la trascendencia de estos hechos, por el dolor y la sangre que se han derramado pródigamente para conseguir las tierras, daría risa este agravio reclamado por el recurrente".[163] Aclaró que no solo respetaban las opiniones del Presidente de la República, "sino que las sostenemos y las hemos sostenido con las armas en la mano, como él mismo lo sabe bien", no obstante, "es claro, que es preferible el certificado de una autoridad que, por su función, está diariamente en las tierras ejidales, que una opinión abstracta, por respetable que sea, de quien no le consta objetivamente un hecho".[164] Sobre San Luis Tlatilco, no expresó algo diferente y únicamente ratificó lo ya expuesto.

Regresando al cauce que tomó el recurso de revisión, una vez recibida la solicitud, la Corte con fecha 9 de abril de 1928, resolvió desechar el recurso, ya que "aunque lo hizo valer

---

[161] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 8. Las cursivas son mías.
[162] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 8v.
[163] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 9.
[164] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 9v.

en tiempo y expresó agravios, no exhibió dentro del término legal las copias a que se refiere el artículo ochenta y ocho de la Ley de Amparo".[165] Después de siete años y con una cuestión de forma se daba por concluido el asunto en esta instancia.

No conforme con esta decisión, el 3 de mayo de 1928, el quejoso presentó escrito a la Suprema Corte donde solicitó la reconsideración de su resolución, por haber cumplido con el mencionado artículo 88 al remitir las copias al juez de distrito, desde el 16 de febrero del mismo año, en que le informó la interposición del recurso directamente ante la Suprema Corte. Al no tener una respuesta, el 29 de mayo presentó un nuevo escrito en el que ratificó el anterior, amplió sus argumentos y adjuntó copia certificada del juzgado de distrito en el Estado de México, en el que constaba que había exhibido las copias correspondientes al recurso de revisión promovido, por lo que carecía de apoyo el auto que lo había desechado. Su principal argumento fue que el mencionado artículo 88 no señalaba termino para dar aviso al juez de los autos sobre la interposición del recurso y entregar las copias "de tal suerte que no habiendo prescripción al respecto y menos sanción, no puede quedar al arbitrio de la Superioridad aumentar o disminuir un periodo que no existe, y menos aplicar una sanción consistente en desechar la revisión".[166]

Y agregó que, si bien el artículo 86 concedía el término de 5 días para interponer el recurso de revisión, "no es posible materialmente que se verifique la entrega de las copias el mismo día, en especial cuando el juicio se radicó en lugar distinto de la capital". En términos prácticos se desconoce porque el quejoso promovió el recurso ante la Suprema Corte, pero no adjunto las copias.

El 15 de junio y vistos los escritos del recurrente, la Corte resolvió confirmar el acuerdo anterior por no estimar procedentes los motivos alegados y ordenó devolver los autos al juzgado de origen. Finalmente, el 4 de octubre de 1928, el juez de distrito informó a la SCJN que se había declarado ejecutoriada la resolución que concedía el amparo a los quejosos de los tres poblados y mandado a archivar el expediente.

El efecto del otorgamiento de este amparo fue el reponerse el procedimiento dotatorio, "es decir, que al conceder a los vecinos inconformes al amparo, el criterio del ciudadano juez

[165] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 10.
[166] AHSCJN, AR, exp. 1113/1927, f. 19.

debe interpretarse en el sentido de que la dotación de ejidos solicitada sí es procedente y en esa virtud, debe otorgarse en la forma y términos de ley".[167]

Así se realizó y con fecha de 28 de febrero de 1929, el presidente provisional Emilio Portes Gil, dotó a los vecinos de San Antonio Zomeyucan con 406 hectáreas, a San Esteban Huitzilacasco con 349 y a San Luis Tlatilco con 145, todas ellas de la hacienda San José de los Leones. Al parecer, el propietario afectado no intentó ningún recurso legal contra estas resoluciones o por lo menos no hay constancia de ello en la documentación revisada.

En suma, habían transcurrido ocho años desde la solicitud de tierras realizada por los tres poblados; se habían promovido tres amparos por parte del dueño de la hacienda expropiada, contra las resoluciones provisionales y; un juicio constitucional por parte de los pueblos, que por esta vía pudieron obtener las tierras reclamadas y que poseían desde 1925 de forma provisional. Sin duda, el juicio de amparo en materia agraria se había convertido en una figura importante en esta etapa de la reforma agraria, aunque no estuvo exenta de críticas por el uso dado por los propietarios expropiados, lo que provocó que se reformara la legislación para prohibir su interposición, tema del siguiente capítulo.

A manera de cierre

Como pudo observarse en este capítulo, el ritmo que tomó el reparto de tierras en una entidad federativa, en este caso el Estado de México, fue heterogéneo y respondió a diversos factores formales como el actuar de las autoridades agrarias; la reacción legal de los hacendados expropiados; la actitud asumida por los grupos solicitantes de tierras ante las instancias administrativas y judiciales y; el papel adoptado por el Poder Judicial de la Federación en dos niveles: los juzgados de distrito y la Suprema Corte. Aunque se debe reconocer que existieron otros factores de carácter político y social como los cacicazgos y liderazgos regionales; la actuación de las agrupaciones campesinas, tanto nacionales como locales; el vínculo entre autoridades y propietarios y; la propia organización de los grupos solicitantes de tierras. A lo largo de este capítulo se tocaron, aunque fuera de forma somera, algunos de estos elementos como parte del contexto en que se desarrollaron los estudios de caso presentados.

[167] AGA, dotación, exp. 23/2297, f. 173v.

Esta primera fase del amparo en materia agraria corresponde a los primeros años de la formación del derecho agrario mexicano y a una primera etapa del reparto de tierras, en donde el grupo gobernante vio al ejido como una figura transitoria que serviría para destruir el latifundio e incentivar la formación de la pequeña propiedad.

Para el caso del Estado de México, es evidente que los propietarios expropiados recurrieron al juicio constitucional no solo como un medio de defensa legal, sino como un mecanismo de resistencia para preservar sus propiedades, utilizando diversas argucias legales para hacer vales sus intereses. Si bien no consiguieron frenar la entrega de las tierras, por lo menos si la retardaron y pudieron continuar aprovechando la explotación de estas. Como fue el caso del dueño de la hacienda San José de los leones, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, cuyo interés fue el seguir explotando los bosques y minas que se encontraban en las tierras expropiadas en favor de los peticionarios. En los alegatos presentados por este propietario, destaca que recurrió a argumentos de carácter ambiental como el deterioro de los manantiales y la protección de los bosques que se encontraban en su finca, lo que puede ser una evidencia de la importancia de las fuentes judiciales para la historia ambiental.

Como se pudo constatar, una vez concedidos los amparos por el juez de distrito, los inconformes recurrieron al recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está, en la mayoría de los asuntos, sobreseyó los juicios, lo que posibilitó la constitución de los ejidos. Esto permite matizar la percepción de que la Corte tuvo un papel contrario a los postulados de la reforma agraria o que fue un baluarte de los hacendados, por lo menos esto no ocurrió en el Estado de México en el periodo analizado, siguiendo la información del cuadro anexo que acompaña a este capítulo. Cabe señalar que dicha tendencia a nivel nacional o comparada con otras entidades federativas puede ser opuesta, por lo que una revisión puntual por estados, incluso por municipios, podría aportarnos una mejor comprensión del fenómeno, lo cual rebasa esta investigación.

Analizar las sentencias de los amparos en revisión, también permitió revalorar el actuar de dos actores centrales en estos juicios, la Comisión Nacional Agraria y el Ministerio Público Federal, que como quedó demostrado tuvieron un rol fundamental en estas instancias de la reforma agraria; aunque a veces contradictorio, como lo fue la CNA pues en algunos casos apoyó a los peticionarios y en otros, o por lo menos en el juicio que se presentó en este capítulo, solicitó se les negara el amparo a los pueblos quejosos, respaldando la resolución

presidencial que les había negado sus tierras. En el caso del Ministerio Público, quedó en evidencia su actuación dentro de los juicios constitucionales, en algunos casos apoyando lo solicitado por los propietarios y en otros dando la razón a los grupos solicitantes de tierras. A pesar del papel que jugaron en esta parte de la historia de la reforma agraria, poca atención les ha prestado la historiografía.

Por otra parte, se demostró que el amparo en materia agraria no fue exclusivo de los hacendados, un caso, quizá excepcional, que ejemplifica su uso por parte de los grupos peticionarios de tierras, lo encontramos en el juicio promovido por los pueblos de San Luis, San Esteban y San Antonio, del municipio de Naucalpan de Juárez, a los que se les había negado la dotación definitiva solicitada. Para defender las tierras que poseían de forma provisional, utilizaron las armas que les proporcionó el agrarismo institucional y litigaron de forma colectiva haciendo valer en los tribunales federales sus defensas y alegatos, consiguiendo la dotación por la que habían luchado, por lo menos a nivel administrativo y judicial, durante ocho años. Al igual que en el caso de la CNA y el MPF, el estudio de los amparos promovidos por los solicitantes de tierras abre un filón importante de la historiografía, pues permitirá rediscutir el uso que hicieron del marco jurídico, así como su actuación ante los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro de los aspectos que se asomaron en estas páginas, fue la cotidianeidad de los juzgados de distrito. Este acercamiento permitió ver que en algunos casos los juicios se alargaban por la carga de trabajo del juzgado, pero también porque las partes así lo solicitaban o por la ausencia del juez. Sin duda, esta aproximación nos lleva a (re)pensar lo complicado que llegó a ser para el poder judicial federal, atender la serie de asuntos que llegaban a sus manos.

En suma, el estudio de estos primeros años de vida del amparo en materia agraria nos permite profundizar en dos de las aristas de la historia de la reforma agraria. En primer lugar, la forma en que el antiagrarismo de los propietarios se manifestó en las instancias judiciales utilizando todos los recursos legales con los que contaron y, en segundo lugar, lo complicado que pudo resultar para los pueblos solicitantes de tierras el acudir a los tribunales con apoyo de la CNA para defender las posesiones otorgadas (provisionales y definitivas), en litigios largos y complejos por el tecnicismo con el que se regía el juicio de amparo.

Esta situación se modificó cuando en diciembre de 1931 se reformó la ley del 6 de enero de 1915 y se prohibió la interposición del amparo en tramites dotatorios y restitutorios, lo que permitió que el ritmo del reparto de tierras se intensificara, particularmente en el periodo cardenista. Sin embargo, el amparo no dejo de promoverse y los motivos para su interposición se modificaron, como podrá observarse en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

El juicio de amparo en materia agraria: prohibición y diversos usos, 1931-1945

> El Presidente de la República resuelve en definitiva la dotación de un pueblo. El pueblo, entusiasmado por la gracia que le concede el Ejecutivo de la República, prepara un banquete humilde al Presidente de la República, al Ministro, a los miembros de la Comisión Nacional Agraria, a ciertos amigos, a políticos, a senadores y a diputados, y allá vamos encantados de la vida a darle la tierra al pueblo. Muy bien, ellos hicieron un gran sacrificio: hubo su barbacoa, su mole, su pulque curado y hasta su cerveza ... (Risas.) Y después de eso muchos discursos, y encantados de la vida. Terminaba la fiesta; ellos se quedaban con su tierra, y nosotros regresábamos encantados de la vida. Pero a los ocho días llegaban las fuerzas federales a quitarles el ejido. Y entonces se preguntaban: ¿Cómo nos quitan las tierras si ya nos la dió el Presidente de la República? Porque en la conciencia de ellos el ciudadano Presidente de la República es todo; ellos no conciben la intervención de la Suprema Corte. "¿Cómo es posible que la Suprema Corte esté arriba del señor Presidente?[1]

La anterior descripción es un ejemplo de lo que en distintos sectores de la sociedad se pensaba con respecto a la actuación de la Suprema Corte en la reforma agraria, opinión que se extendía al Poder Judicial Federal en su conjunto. En concreto, se acusaba a los jueces de distrito y al máximo tribunal del país de ser cómplices de los hacendados por otorgarles los amparos solicitados, lo que provocaba incertidumbre en los beneficiarios de alguna dotación provisional o definitiva, ante la posibilidad de tener que devolver las tierras por las que habían luchado durante años. La solución propuesta por distintos actores fue la prohibición del juicio de amparo tratándose de resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras y aguas.

[1] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, miércoles 2 de diciembre de 1931.

¿Cómo se llevó a cabo dicha reforma a la legislación agraria del 6 de enero de 1915? ¿Cuál fue la respuesta de los hacendados a esta medida? ¿Habrá dejado de promoverse el juicio de garantías? y, sobre todo, ¿Cuál fue la repercusión de la prohibición del amparo en el Estado de México? Son algunas de las preguntas que se intentan responder en este capítulo y que, lejos de constituir una interpretación acabada, se propone verlas como una primera aproximación a la práctica del amparo en materia agraria en la década de los años treinta en la entidad de estudio. Esto permitirá en futuras investigaciones tender puntos de comparación con otras entidades del país o entre las propias regiones del Estado de México.

Al igual que en otros periodos por los que transitó el juicio constitucional y la reforma agraria, la etapa que aquí se propone estudiar está marcada por diversos factores, tanto legales como políticos que, si bien se encuentran vinculados, para efectos de su exposición se enlistan por separado algunos de ellos.

En el caso de la legislación, hay que considerar la ya mencionada prohibición del amparo en materia agraria; las reformas al artículo 27 constitucional de 1933 y 1937 y; la promulgación de los códigos agrarios de 1934, 1940 y 1942; así como diversos decretos presidenciales que crearon dependencias relacionados con el agro como la Oficina de la Pequeña Propiedad o el Departamento de Asuntos Indígenas.

Por lo que toca a los factores políticos, es necesario tomar en cuenta las luchas por el poder tanto a nivel nacional como estatal (pugna Calles-Cárdenas y la sucesión de gobernadores en el estado); los proyectos agrarios de los grupos gobernantes (ejido colectivo, protección a la pequeña propiedad) y; la organización de los distintos grupos peticionarios con su arcoíris de demandas, aunque aquí únicamente se mencionen de pasada. Aun cuando en el capítulo anterior se precisó que la mayoría de los amparos estuvieron relacionados con la dotación de tierras, en este periodo aparecerán otros procedimientos propios del desarrollo de la reforma agraria como la ampliación del ejido o el cambio de su localización.

A lo largo de este capítulo se mencionan estos y otros elementos, empero, sólo se profundiza en aquellos que permiten entender la relación del juicio de amparo con la reforma agraria en el Estado de México para el periodo 1931 a 1945, precisando que el corte temporal responde por un lado al año de prohibición de la interposición del amparo y por otro, a los cambios ocurridos en la política agraria de la entidad estudiada y a la reforma constitucional

que restituyó el juicio de amparo a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras y aguas, tema que se trata en el siguiente capítulo.

El decreto del 23 de diciembre de 1931, que reformó el artículo 10 de la ley agraria del 6 de enero de 1915, prohibiendo el uso del amparo a los propietarios de terrenos afectados con una resolución presidencial de dotación o restitución de tierras y aguas, fue trascendental en la reforma agraria, ya que buscaba hacer los procedimientos más agiles y dar certeza jurídica a los pueblos solicitantes en cuanto al ejido que se les concedía. No obstante, los hacendados expropiados, como se verá más adelante, buscaron otros mecanismos jurídicos que les permitieran conservar sus propiedades o por lo menos retrasar el mayor tiempo posible la entrega de las tierras para continuar aprovechando la explotación de sus recursos. En algunos casos, los litigios continuaron por varios años lo que generó nuevos conflictos o agudizó los ya existentes.

Por su parte, los pueblos solicitantes o bien, los ya ejidatarios, continuaron haciendo uso del juicio de amparo para reclamar sus derechos o defender los ya adquiridos, lo que demuestra que habían hecho suyo el marco hegemónico de la legislación agraria y manifestaban su destreza en el arte del litigio. A diferencia de lo que se vio en el capítulo anterior, las causas por las que acudieron a la justicia federal fueron muy variadas: el cambio en la localización de los ejidos, la ampliación de estos y casos particulares de ejidatarios que se quejaban por la privación de parcelas, sin dejar de lado los amparos por la negación de la dotación solicitada. Por esta variedad de causales, en este capítulo se decidió presentar los litigios ocurridos en dos ejidos de distintos municipios, para mostrar parte de la conflictividad agraria en esta región del estado.

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se presenta una breve descripción del proceso legislativo que posibilitó la reforma a la ley agraria carrancista en 1931 y algunas de las críticas que recibió; el panorama general de la reforma agraria tanto a nivel nacional como en el Estado de México; un balance del juicio de amparo en el periodo 1931-1945 y; la reconstrucción de los juicios de amparo surgidos por la interposición del juicio de nulidad de la resolución presidencial promovido en el procedimiento de dotación de tierras al ejido de Santiago Teoyahualco del municipio de Tultepec y el cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca, municipio de Tlalnepantla.

3.1 La reforma de 1931 y la prohibición del amparo en materia agraria

A fines de 1931, siendo presidente de la república Pascual Ortiz Rubio, la Liga Nacional Campesina "Úrsulo Galván",[2] solicitó a la Cámara de Senadores la derogación del artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915, que facultaba a aquellos que se consideraran perjudicados con una resolución presidencial, acudir a los tribunales para "deducir sus derechos dentro del término de un año". Para ese momento, dicha organización surgida un año antes de la escisión de la Liga Nacional Campesina y cercana al gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, era la más fuerte del país y su petición contó con el respaldado de otras organizaciones como la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, quien también envió una carta al Senado de la República, en el mismo sentido.[3]

El senador por Zacatecas, Lauro G. Caloca,[4] militar y profesor zacatecano que formó parte de las filas villistas y quien tenía conocimientos de la cuestión agraria, debido a que trabajó en la Comisión Nacional redactando "los proyectos de resoluciones que se debían llevar al acuerdo del Presidente de la República";[5] recogió la propuesta de las ligas campesinas y presentó una iniciativa de reforma que proponía la supresión del amparo. La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Agraria del Senado, integrada por Miguel Andreu Almazán, (Puebla), Valentín Aguilar (San Luis Potosí) y Zenón Suárez (Estado de México), quien fuera presidente del PNR de mayo de 1929 a mayo de 1930.

El dos de diciembre de 1931 la comisión presentó su dictamen[6] al pleno para su discusión. La propuesta central establecía que los afectados por resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras y aguas "que se hubiesen dictado en favor de los pueblos o que en lo futuro se dictaren" no tendrían ningún "recurso legal ordinario ni el extraordinario de

---

[2] La Liga Nacional Campesina surgió en 1926 como una iniciativa de las ligas agrarias de Veracruz, Michoacán y Morelos, principalmente, contando con el apoyo del ex gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, quien para ese momento era parte del gobierno de Calles. En su V Congreso celebrado en 1930, la liga se escindió en tres fracciones, una que se unió al PNR liderada por Wenceslao Labra; una cercana al Partido Comunista, bajo la dirección de Manuel Díaz Ramírez y; la tercera liderada por Úrsulo Galván y cercana a Tejeda. Ese mismo año falleció Galván, por lo que la liga adoptó su nombre autodenominándose Liga Nacional Campesina "Úrsulo Galván", HUIZER, *La lucha campesina*, pp. 50-55; REYNOSO, *El agrarismo radical*, p. 38; FALCÓN, "El surgimiento", pp. 354-355; BARTRA, *Los herederos*, p. 33.

[3] *Diario de los Debates de la Cámara de Senadores*, lunes 23 de noviembre de 1931, p. 5.

[4] Lauro G. Caloca, fue un militar y profesor zacatecano nacido en 1883. Participó como asesor de Pánfilo Natera y Francisco Villa, fue impulsor de la escuela rural, además de diputado y senador por su estado, murió en 1955.

[5] GÓMEZ, *Historia*, p. 233.

[6] Para esta parte del capítulo, retomo el proyecto de dictamen y su discusión publicados en el *Diario de los Debates de la Cámara de Senadores*, miércoles 2 de diciembre de 1931, pp. 11-15.

amparo", salvo el pago de la correspondiente indemnización, teniendo un año para reclamarla. En el mismo documento se señaló el respeto a la pequeña propiedad o alguna otra "de las que están exceptuadas de afectación" por la ley, por parte de las autoridades agrarias encargadas de tramitar las solicitudes de los pueblos, "incurriendo en responsabilidad por violaciones a la Constitución", en caso de que llegaran a conceder las solicitudes afectando esas propiedades.

Si bien se trataba de una modificación fundamental que buscaba dar mayor celeridad al reparto agrario, es pertinente apuntar que los artículos transitorios fueron de igual o mayor relevancia, ya que presentaron efectos inmediatos con respecto a los asuntos que se encontraban en trámite.

En el primer artículo transitorio se estableció que en los casos en que se hubiere concedido el amparo en contra de una dotación o restitución, si la ejecución se había cumplido, esta debía respetarse; pero si aún no se cumplía, quedaría sin efecto y los expropiados únicamente contaban con el derecho de reclamar la indemnización correspondiente.

El segundo transitorio fijó el sobreseimiento de los juicios de amparo que se encontraran pendientes de resolverse, fuese ante jueces de distrito o ante la Suprema Corte, dejando a los afectados el derecho a la indemnización correspondiente.

Finalmente, el tercero transitorio hizo referencia a los juicios de nulidad de las resoluciones dotatorias o restitutorias, promovidos conforme al artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915, que se encontraran en trámite, los cuales serían desechados y archivados; y tratándose de aquellos en que se hubiera dictado sentencia, esta solo daría derecho al afectado a obtener la indemnización correspondiente. Los juicios de nulidad, si bien han sido mencionados por algunos autores como Lucio Mendieta o Antonio Carrillo Flores, es otro de los temas que han sido poco trabajados por la historiografía.

La reforma fue aprobada por unanimidad y sin mayor discusión, salvo una intervención del senador Caloca para reforzar su propuesta y en donde afirmó que tanto el presidente Ortiz Rubio como el general Calles, conocían la modificación y estaban de acuerdo con ella. Es probable que esta modificación a la ley del 6 de enero se viera como un paso más para cumplir con el objetivo de terminar con el reparto de tierras, aunque a decir de Romana Falcón, la supresión del amparo en materia agraria "constituía una de las primeras

manifestaciones de la nueva fuerza de quienes se oponían a la política antiagrarista del centro del país"[7] y que se vería consolidada en el periodo cardenista.

Siguiendo con el trámite legislativo y de acuerdo con los documentos consultados, ese mismo día el Senado envió el dictamen aprobado a la Cámara de Diputados para su discusión, designando una comisión que llevaría el proyecto. Entre los comisionados se encontraba el creador de la propuesta Lauro G. Caloca y los miembros de la Comisión Agraria mencionados, más los senadores por Guerrero, Eduardo Neri y el de Tamaulipas, Federico Martínez Rojas.

Los diputados nombraron una comisión que recibió a los senadores y una vez en el recinto se le dio la palabra al senador Lauro Caloca. En una extensa intervención, Caloca hizo un breve recuento histórico del origen de la ley a reformar y puso énfasis en el papel que había tenido la Suprema Corte en la reforma agraria hasta ese momento, señalando que:

> Hasta diciembre de 1928 se habían dictado aproximadamente unas seis mil resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos." - Y escuchen ustedes muy bien sentados esta nota -: "Contra esas resoluciones se habían promovido aproximadamente unos cinco mil quinientos amparos. De estos cinco mil quinientos amparos, las Cortes anteriores a la que comenzó a funcionar el 1o. de enero de 1929, habían resultado aproximadamente y en números redondos, unos dos mil casos, de los cuales, en números redondos, se habían negado cien o doscientos casos.[8]

Agregó el senador que esta reforma era de transcendencia para los campesinos, ya que, si bien no se trataba de una restitución de tierras lo que se les daría, si representaba la:

> restitución de esperanzas, de paz, de tranquilidad, de confianza. Entonces ya sin gritos, sin populacherías, sin nada en su conciencia, dirán: La Revolución ha sido realidad para los hombres del campo. ¡Por eso es tan importante esta reforma! Para mí, yo creo que es más efectiva que cinco años de revolución y que quince años de mal aplicar la Ley Agraria. Con esto afirmamos definitivamente el problema agrario.

En sus palabras, no faltó la referencia a los abogados, cuyo interés no era la reforma agraria "lo que les va a interesar es que de aquí en adelante ya no procede el amparo, y como el amparo se había convertido en explotación, en filón sublime, y ahora no lo hay, naturalmente se viene la gritería".

---

[7] FALCÓN, *El agrarismo*, p. 102.
[8] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, miércoles 2 de diciembre de 1931.

Y reiteró que la modificación se había consultado con el presidente de la república "quien vibró, la afirmó y la elogió" y posteriormente se había sometido "a la consideración del señor general Calles", quien "vibró con entusiasmo; sus palabras fueron de aliento, y yo no quiero repetirlas, porque tengo el temor de no repetirlas exactamente; pero tengo la impresión de que sus palabras fueron de entusiasmo para la Comisión, dejando sentir una esperanza de que este problema se resolviera lo más pronto, para beneficio de los de abajo, para beneficio de los del campo".

Llama la atención este testimonio, pues como se mencionó en el capítulo anterior, en ese momento el gobierno federal buscaba dar por terminado el reparto de tierras. Incluso, unos meses antes el propio Calles había declarado el fin del reparto agrario argumentando que el agrarismo tal y como se había llevado a cabo era un fracaso puesto que la "felicidad de los campesinos" no podía asegurárseles entregando un pedazo de tierra si les faltaban "la preparación y los elementos necesarios para cultivarla". Antes bien, por ese camino se llegaría al desastre, "porque les creamos pretensiones y fomentamos su holgazanería". También criticó que existieran ejidos sin producir y concluyó diciendo que era necesario "que cada uno de los gobiernos" estatales fijara "un periodo relativamente corto en el cual las comunidades que todavía tienen derecho a pedir tierras puedan ejercitarlo, y una vez que haya expirado este plazo, *ni una palabra más sobre el asunto*".[9] De acuerdo con Armando Bartra, entre 1930 y 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio anunció el fin del reparto en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.[10]

De vuelta con la intervención del senador Caloca, este finalizó solicitando a los diputados:

> en nombre de los campesinos y como su representante en estos momentos en el Senado de la República, que declaren este asunto de obvia y urgente resolución, por dos cosas: primero, porque necesitamos solicitar el consentimiento de las legislaturas locales; y segundo, para que el Presidente de la República mande promulgar esta reforma antes de que termine el año, porque si lo dejamos para el que entra, serían ocho meses de angustias, ocho meses de juicios, de idas y venidas y, sobre todo, de que cayeran en garras de los abogados del país a quienes, como ustedes ven, les hemos matado con esto todo el filón del amparo. Apelo al

[9] SIMPSON, "El ejido", p. 66.
[10] BARTRA, *Los herederos*, p. 26.

> revolucionarismo de la Cámara de Diputados para que vibre con nosotros y que su grito sea un mensaje de cariño para todos los campesinos de la República.

Es de destacar que en las palabras del senador zacatecano se dé especial atención a los abogados, lo que demostraría su importancia dentro de la reforma agraria, por lo menos a nivel federal, otro de los temas que se considera merece ser estudiado en un futuro.

Al día siguiente, el jueves 3 de diciembre de 1931, las Comisiones Unidas Primera Agraria y Especial para estudiar el Proyecto de Reformas al Artículo 10 de la Ley de 6 de enero de 1915,[11] presentaron su propuesta de dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, en el que señalaron como de "notoria e imperiosa necesidad" considerar el tema de urgente resolución,

> en vista de la trascendencia que entraña, ya que con estas modificaciones a la Ley mencionada, desaparecerán inevitablemente la tranquilidad e inquietud que hoy agobia a los campesinos de la República, tornándose en bellas realidades las promesas que la Revolución escribiera en su bandera y que los propios campesinos sostuvieron con mano fuerte y vigorosa en los momentos más rudos de la lucha en pro de las reinvidicaciones de las masas laborantes de nuestra Patria.[12]

Dichas comisiones hicieron suyo el proyecto en los mismos términos aprobados por los senadores y solicitaron al pleno su "inmediata discusión". La propuesta no tuvo objeción alguna y las intervenciones de dos miembros de la comisiones, Graciano Sánchez y Guillermo Rodríguez y, de los diputados Práxedis Balboa y Manuel Mijares, fueron a favor de la iniciativa. De estas participaciones se destacan la de Graciano Sánchez y Práxedis Balboa por los elementos que aportan.[13]

El diputado Graciano Sánchez,[14] maestro, militante de las filas villistas y fundador de las ligas agrarias de Tamaulipas y San Luis Potosí; realizó una exposición de los motivos que tuvieron las comisiones para hacer suyo el dictamen enviado por los senadores. Dentro de

---

[11] En las comisiones participaron los senadores Guillermo Rodríguez, Graciano Sánchez, Wenceslao Labra y Miguel Rosado.

[12] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, jueves 3 de diciembre de 1931.

[13] En este caso se retomaron las intervenciones reproducidas en el *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, jueves 3 de diciembre de 1931.

[14] Graciano Sánchez nació en San Luis Potosí en 1888 y estudio en la Escuela Normal de su estado donde obtuvo el título de maestro. Durante la revolución se incorporó a las filas villistas y concluida la lucha armada participo activamente en la fundación de las ligas de comunidades agrarias en Tamaulipas y San Luis Potosí. Fue miembro del Partido Nacional Agrarista, diputado local y federal, gobernador interino de su estado en 1924 y unos de los fundadores de la Confederación Campesina Mexicana (CCM) en 1933, que para 1938 se convirtió en la Confederación Nacional Campesina (CNC), siendo su primer secretario general, así como jefe del Departamento de Asuntos Indígenas en el gobierno de Cárdenas, CAMP, *Biografías de políticos*, pp. 521-522.

sus planteamientos expresó que desde el triunfo de la revolución las autoridades agrarias habían puesto en posesión de tierras a los pueblos solicitantes, sin embargo, los hacendados inconformes con la aplicación de la legislación agraria, habían recurrido "invariablemente al recurso de amparo" o "promovido juicios en contra de los beneficiados con la aplicación de la Ley Agraria, creando en esta forma una situación de verdadera intranquilidad entre todos los elementos campesinos de la República". Y puntualizó que existía una contradicción en que por una parte las autoridades agrarias entregaran tierras a los pueblos y por otra, el poder judicial "aprovechando la circunstancia propicia que ofrecía el artículo 10 de la Ley de 6 de enero de 1915, pusiera en tela de juicio lo hecho por las primeras y muchas veces ordenara la devolución de las tierras a su antiguo propietario". Lo cual en algunos casos fue cierto, pero en otros las deficiencias en el procedimiento administrativo llevaron a que se otorgaron los amparos.

Finalizó su intervención señalando que la reforma en discusión llevaría "tranquilidad y confianza a la clase trabajadora del campo" y sería "el primer paso", "el primer escalón" para resolver de forma "definitiva y segura el problema agrario. Porque no se compadece que por una parte los latifundistas exijan que se termine con el problema agrario, y por otra sean ellos los primeros en entorpecerlo, promoviendo juicios civiles o de otra naturaleza contra la ley que tantas veces he citado" e hizo un llamado al pleno para aprobar la reforma "porque con este paso habremos satisfecho nuestras aspiraciones de revolucionarios habremos cumplido con nuestros compromisos para con los hombres del campo que nos trajeron a estos sitiales".

En su oportunidad, el diputado por Tamaulipas, Práxedis Balboa,[15] quien había sido presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de su estado de 1925 a 1928 y tuvo una participación destacada en la formulación de la *Ley Federal del Trabajo* en 1931, destacó que con la reforma al artículo 10 de la ley de 6 de enero**,** se barrería "de una plumada" con los obstáculos y "triquiñuelas" a los que se enfrentaba la reforma agraria y se terminaría "con

[15] Práxedis Balboa nació en 1900 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue abogado por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM (1925); diputado federal por el IV distrito de Tamaulipas (1934-1937) y gobernador de su estado de 1963 a 1969. Además, ocupó los cargos de jefe del Departamento del Trabajo, Secretaría de Industria y Comercio (1929-1930); representante de la Junta Federal de Conciliación en la Comisión Mixta de Ferrocarriles Nacionales de México (1929) y director del Departamento Jurídico de PEMEX (1940-1957). Al decir de Roderic Ai Camp, "fue en un principio miembro de la camarilla de Emilio Portes Gil, pero más tarde se convirtió en su enemigo político". Falleció el 10 de diciembre de 1980, CAMP, *Biografías de políticos*, pp. 44-45.

el largo procedimiento en que se veían envueltos los campesinos para poder disfrutar del verdadero derecho a la tierra".

El dictamen propuesto fue aprobado en lo general por 84 votos a favor y pasó a las legislaturas estatales para su discusión y en su caso aprobación. Transcurrieron 15 días y para la sesión del 18 de diciembre de 1931,[16] el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le concedía el artículo 135 de la Constitución Federal y previa la aprobación de los congresos de los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, hizo la declaratoria de reforma constitucional del artículo 10 de la Ley de 6 de enero de 1915, quedando en los siguientes términos:

> Artículo 10. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, *no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario ni el extraordinario de amparo*. Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán de ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida.[17]

Además de establecer que las autoridades agrarias: presidente de la república; comisiones locales y nacional y; las demás autoridades encargadas de tramitar las solicitudes de dotación; respetarían la pequeña propiedad y por ningún motivo afectarían las tierras exceptuadas por la ley. Es necesario destacar la relevancia de este aspecto, pues como se verá de forma pormenorizada en el siguiente capítulo, la defensa de la pequeña propiedad se convirtió en el principal argumento utilizado por los afectados con resoluciones agrarias, lo que generó importantes discusiones en los ámbitos jurídico y político a nivel nacional.

Esta modificación, al igual que otras de esta trascendencia, tuvo grupos que la apoyaron y también sus detractores. Dentro de los que recibieron bien la iniciativa se encontraron las organizaciones campesinas y también algunos gobernadores como Ildefonso Turrubiates, de San Luis Potosí y Adalberto Tejeda de Veracruz. Este último envió por medio de un telegrama, una felicitación a la Cámara de Diputados por la reforma aprobada:

---

[16] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 18 de diciembre de 1931.
[17] Las cursivas son mías.

> pues creando y asegurando los intereses de las mayorías es como se asegura la tranquilidad de los pueblos y la estabilidad de las Instituciones. Esa innovación digna de los revolucionarios firmes y verdaderos*, libra a los campesinos a quienes llegó la acción benéfica de la Revolución, de las asechanzas de los latifundistas, quienes emboscados en las sinuosidades y vericuetos de nuestras leyes, como la de amparo, esperaban el momento propicio para desarrollar su nefasta acción de reconquista y de despojo de las tierras*, único patrimonio del humilde, restaurando así sus viejos privilegios adquiridos cómodamente por reales mercedes, producto de clásicas cortesanías de la época de la dominación. Ojalá que esta reforma sea seguida de las que necesita no tan sólo la Ley de Amparo, sino la Constitución misma en los preceptos relativos a esa materia, inspirados en el más reconcentrado individualismo y que tan seriamente afecta la vida institucional del país, estorbando la acción revolucionaria y administrativa en todos sus aspectos, *por la amplitud que la ley da al mismo amparo y el abuso que de ese recurso se hace*.[18]

Finalmente, el decreto fue publicado en el *Diario Oficial* el 15 de enero de 1932 y en enero de 1934 se incorporó al artículo 27 constitucional en su fracción XIV.[19]

Entre las voces que se alzaron en contra de esta prohibición destacaron "las de dos indiscutibles defensores de la reforma agraria: Luis Cabrera, autor de la tantas veces citada ley del 6 de enero de 1915 y Pastor Rouaix, uno de los participantes en la redacción del artículo 27 constitucional".[20]

Cabrera señaló de manera puntual que esta reforma no resolvía el problema agrario, "sino que se limitaba a cerrar la puerta a los remedios judiciales" y la calificó de inconstitucional y absurda, porque equivalía a declarar que, en materia agraria, los propietarios afectados no gozarían "de las garantías constitucionales de los artículos 14, 16 y 27". Desde la visión del autor de la ley agraria carrancista, el amparo no era "más que un síntoma del malestar", debiéndose procurar que no hubiere "motivo de amparo" y que la política agraria se desarrollara "dentro de la ley, con honradez y sobre todo con sentido común"; en consecuencia, propuso la derogación del multicitado artículo 10 de la ley agraria de 1915, la procedencia del amparo únicamente contra las resoluciones presidenciales y el perfeccionamiento de la legislación agraria.[21]

A pesar de que con este decreto se buscaba cerrar las puertas de los tribunales federales a los afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras, los juicios de

---

[18] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 22 de diciembre de 1931. Las cursivas son mías.
[19] FABILA, *Cinco Siglos*, pp. 465-471.
[20] FIX, "Lineamientos", p. 923.
[21] CABRERA, "La reforma", pp. 207-222.

amparo derivados de cuestiones agrarias se continuaron promoviendo, fuese por desconocimiento del cambio legal; como una medida para retardar la expropiación de los terrenos y continuar aprovechando los recursos que les producían; por actos de las autoridades agrarias como la ejecución indebida de la resolución presidencial y; por el cambio en la localización de los ejidos, temas que se analizan a detalle páginas más adelante.

3.2 La legislación agraria del periodo: la ley de 1929 y los códigos agrarios (1934, 1940, 1942)

Ya en el capítulo segundo se hizo referencia a las primeras tres leyes que regularon la reforma agraria en la década de los años veinte, sin embargo, con el propósito de darle mayor claridad a los amparos que se analizan en los siguientes apartados, se retoman algunos aspectos de la ley de 1929 por ser la que reguló los procedimientos de dotación de donde se originaron dichos juicios. En el caso de los códigos agrarios de 1934, 1940 y 1942, el análisis puntual de cada uno de ellos escapa al propósito de este apartado por lo que únicamente se mencionan los procedimientos vinculados a los casos de estudio propuestos, además de que, del código agrario de 1942, se retoman algunas de sus partes en el siguiente capítulo, particularmente lo relacionado a la pequeña propiedad.

Vale recordar que en 1927 se promulgó una nueva ley agraria, también conocida como Ley Bassols, que buscó reorganizar el procedimiento agrario y con ello tratar de evitar los amparos que se promovían por la puesta en práctica de la reforma agraria.[22] No obstante, este ordenamiento tuvo una vigencia de únicamente dos años, ya que en 1929 se promulgó la *Ley que refunde en la de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, las reformas a la misma*, fechada el 21 de marzo.[23]

En términos generales, la ley de 1929 retomó la estructura de la de 1927. Se establecieron las mismas autoridades agrarias: presidente de la república, CNA, gobernadores, CLA, delegados estatales de la CNA y los Comités Particulares Ejecutivos (art. 1). Dentro de las modificaciones significativas, destaca el caso de los impedidos para

[22] Para profundizar en los preceptos y alcances de esta norma, particularmente lo que Bassols denominó el juicio administrativo agrario véase BASSOLS, *La Nueva Ley*, pp. 67-82.
[23] En este caso se utiliza la norma publicada en FABILA, *Cinco Siglos*, pp.433-454.

obtener dotación, incorporándose una definición de los peones acasillados (art. 14),[24] tópico que se retoma en el capítulo cuatro y la reducción de la edad de los capacitados para recibir parcela que pasó de 18 a 16 años, con esto último, es posible que el número de solicitantes se hubiera incrementado, una revisión de los censos de cada uno de los ejidos solicitantes posteriores a esta reforma puede darnos una visión al respecto.

Otro cambio de trascendencia y que se toca en uno de los litigios presentados más adelante, fue lo relativo al fraccionamiento o venta de las propiedades. En este tema se dispuso que en caso de llevarse a cabo "con posterioridad a la publicación o al conocimiento de la solicitud", se impondría al propietario, por parte de la CNA, una multa de 100 a 5000 pesos y el fraccionista o adquirente tendría "derecho a obtener la devolución de las cantidades que hubiere entregado, así como el pago de los daños o perjuicios que hubiere sufrido" (art. 30). Es de suponer que este agregado tenía como intención sancionar a los elementos antiagraristas que buscaban evadir el cumplimiento de la legislación agraria.

La tercera modificación significativa y que buscaba agilizar el procedimiento dotatorio, fue acerca del tiempo con el que contaba el gobernador para resolver el expediente. En la ley de 1929 se estableció un periodo de 180 días a partir de la fecha de publicación de la solicitud en el diario correspondiente, en caso de no resolverlo, se tendría la dotación en sentido negativa, la delegación estatal de la CNA recogería el expediente y lo turnaría a la comisión nacional para su dictamen y posterior resolución presidencial (art. 59).

El último cambio de relevancia para ese momento y para esta investigación, fue que, siguiendo lo señalado en el artículo 10 de la ley de enero de 1915, se estableció de manera explícita la improcedencia del juicio de amparo "y cualquiera otra acción de los interesados contra las dotaciones o restituciones de tierras y su ejecución, antes de dictarse la resolución presidencial" (art. 81). Dicho de otro modo, se prohibía la interposición de amparos contra las resoluciones provisionales de los gobernadores.

Por lo demás, la ley de 1929 conservó los procedimientos y etapas señalados en el capítulo anterior: el expediente de dotación iniciaba con la solicitud por escrito al gobernador;

[24] La definición de peones acasillados fue variando en la legislación agraria, en 1929 se les consideró a "aquellos individuos que recibiendo jornal, o ración y jornal, presten servicios de manera permanente en fincas rusticas, ocupando casa de la propiedad del dueño de la finca sin pagar renta", mientras que para 1934, en el artículo 45 del primer código agrario del país, se les consideró peones acasillados a "aquellos trabajadores de las fincas agrícolas que, ocupando casa en las mismas sin pagar renta, dependan económicamente del salario que perciban por sus servicios".

este la turnaba a la CLA quien daba aviso a la delegación de la CNA en el estado para que designara al personal que llevaría a cabo los trabajos técnicos (planos censos, determinación de tipos y calidad de tierras, etc.) y notificaba a las partes para que ofrecieran las pruebas y alegatos que estimaren pertinentes; con esos datos, la CLA emitía un dictamen que ponía a consideración del gobernador para su resolución que podía ser afirmativa o negativa; dictada la resolución concediendo tierras el expediente se turnaba a la CLA para ejecutar la posesión provisional.

En una segunda instancia, el expediente era enviado a la CNA vía su delegado estatal, para su revisión. Ante la Comisión Nacional las partes también podían rendir pruebas y presentar alegatos; concluidas estas diligencias, el expediente era dictaminado y puesto a consideración del presidente de la república como máxima autoridad agraria, quien emitía su resolución y remitía copia a la delegación de la CNA correspondiente para su ejecución.

Si la resolución declaraba improcedente la dotación y el poblado ya contaba con posesión provisional se procedía a levantar esa posesión mediante notificación al Comité Administrativo (art. 91), dándoles un plazo de 10 días para desocuparlas**,** lo cual en algunos casos generó conflictos por la negativa de los posesionarios a desalojar las tierras. Si transcurrido ese tiempo los campesinos continuaban "invadiendo las tierras devueltas a los afectados", el juez de distrito podía imponerles un "arresto hasta por dos meses" o multa hasta de $30 (art. 97). Salvo que las tierras se encontraran sembradas, concediéndoseles un plazo conveniente para levantar las cosechas (art. 96).

Por el contrario, si se confirmaba la dotación, la entrega de las tierras se consumaba "con sólo dar a conocer al Comité Administrativo del pueblo, la resolución que se ejecuta, y recorrer, en lo posible, los terrenos concedidos" y se levantaba un acta de la diligencia efectuada, con la salvedad de que posteriormente se llevara a cabo el amojonamiento (art. 92). Consumado este acto se tenía a los ejidatarios como poseedores de las tierras, para todos los efectos legales que pudieran surgir (art. 93).

Las resoluciones debían ser publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* y en el periódico oficial del estado, así como inscribirse en los Registros Públicos correspondientes y en el Registro Agrario que llevaba la CNA (arts. 94, 98).

Existe en esta ley un procedimiento al que es necesario referirse, ya que fue una de las causas que motivaron los amparos que se estudian más adelante. Se trata de la figura del

cambio de localización de los ejidos, establecida por primera vez en los artículos 182 a 190 de la *Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas*, de abril de 1927 y retomada por la ley de 1929 en su capítulo XIII, de los artículos 101 a 105.

Para que procediera el cambio de localización de un ejido, dentro del mes siguiente a la fecha en que se ejecutara la resolución presidencial, los propietarios afectados o los representantes de los pueblos dotados, podían solicitar rectificaciones o cambios en la ubicación de las tierras en los siguientes casos:

> a) Cuando la ejecución de los fallos no corresponda a éstos, ya sea por la clase de tierras, o por la cantidad entregada en cada clase;
> b) Cuando no se hayan excluido obras inafectables o tierras exentas, de acuerdo con esta Ley;
> c) Cuando, en los casos de restitución, el propietario de las cincuenta hectáreas, respetadas, desee que éstas se localicen en forma diversa; pues se le dará derecho a que indique la localización de ellas que más le convenga.

Dicha solicitud se presentaba por escrito ante la delegación estatal de la CNA a que correspondiera el poblado beneficiado (art. 102). La delegación concedía a los interesados en el expediente, un plazo de 15 días para que expusieran su opinión al respecto y comisionaba al personal técnico para que estudiara la petición y formulara el dictamen correspondiente, en dicho dictamen se haría constar de manera expresa "la opinión de la mayoría del poblado sobre la modificación" que se solicitaba (art. 103).

Transcurrido el término y formulado el dictamen, se remitía el expediente a la CNA para que resolviera lo conducente; si la resolución decretaba la procedencia del cambio lo comunicaba a la delegación para que ejecutara el acuerdo (art. 104). La ley era clara al establecer que fuera de los casos mencionados no podrían modificarse las localizaciones de los ejidos (art. 105). Vale la pena destacar que solo se trataba de un procedimiento de ejecución, pues únicamente se modificaba el lugar en donde se establecería el ejido, por lo que no tomaba parte ni el gobernador ni el ejecutivo federal.

La incorporación de este procedimiento a la legislación agraria y los casos ubicados en la revisión documental realizada para esta investigación, permiten sugerir que fue un trámite al que pudieron recurrir los propietarios afectados, como un mecanismo más de resistencia para conservar sus mejores tierras, aunque como se verá más adelante, también fue un instrumento utilizado por la CNA para resolver algunos conflictos que se suscitaron entre los pueblos solicitantes.

La ley de 1929 tuvo una vigencia de cinco años, pues en 1934, en el contexto de la sucesión presidencial que daría la victoria al general Lázaro Cárdenas, se promulgó el primer código agrario del país, cuyo origen fue el también primer plan sexenal del PNR, en donde se delineó la política agraria que debía seguir el próximo titular del ejecutivo federal.

El plan sexenal fue producto de la Segunda Convención Nacional Ordinaria del partido, celebrada del tres al seis de diciembre de 1933 en la ciudad de Querétaro. En ella participaron delegados de todo el país y se discutieron modificaciones a los estatutos del PNR, se nombró al candidato a la presidencia de la república y se elaboró el programa de gobierno que debía "normar la actuación de su candidato, si el voto popular lo exalta a la Primera magistratura del país".[25] Analizar ambos documentos puede ser de utilidad para entender el rumbo que tomó el gobierno cardenista, sin embargo, y para efectos de este capítulo se analiza únicamente lo relativo a la cuestión agraria.

En el proyecto de plan sexenal se señaló como el problema social de mayor importancia el:

> relativo a la distribución de la tierra y a su mejor explotación, desde el punto de vista de los intereses nacionales, vinculado íntimamente con la liberación económica y social de los grandes núcleos de campesinos que directamente trabajan la tierra; por lo cual continuará luchando por convertirlos en agricultores libres, dueños de la tierra y capacitados, además para obtener y aprovechar el mayor rendimiento de su producción.[26]

Para atender esta situación, se propuso incrementar el presupuesto destinado al personal encargado de llevar a cabo los procedimientos agrarios; combatir el rezago, es decir, atender las solicitudes de acciones agrarias que se encontraban pendientes de resolución, reformando la legislación agraria para simplificar los procedimientos y "requisitos respectivos sobre la base de que el interés social, superior a todo, exige un pronto despacho de las solicitudes de tierras";[27] incentivar la formación de los ejidatarios en sociedades cooperativas y; el otorgar facultades a los peones acasillados para poder acceder a la dotación de tierras.

Dentro de los asistentes a la Convención hubo voces que manifestaron su inconformidad con lo propuesto, una de las que causó mayor revuelo fue la del secretario de

---

[25] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 9.
[26] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 319.
[27] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 320.

acción agraria de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), Graciano Sánchez, uno de los diputados que había participado en el proceso de reforma de 1931, quien declaró: "no estamos conformes con muchos de los puntos fundamentales del capítulo relativo, porque no resuelven esas dificultades, y la clase campesina seguirá en la misma situación, a pesar de los alardes de revolucionarismo que hacemos a cada momento".[28]

Después de realizar una descripción general de los problemas a los que se enfrentaban los solicitantes de tierras, Sánchez propuso que la CNA se elevará a la categoría de Departamento Autónomo, "organizándola de manera que quede en condiciones de atender no sólo el problema de la distribución de la tierra, sino también el de la Organización Ejidal en todos sus aspectos".[29]

Una segunda proposición fue la reforma a la legislación agraria, la cual debía "ser objeto de nuevo estudio enderezado, igualmente, a abreviar los trámites y requisitos respectivos sobre la base de que el interés social, superior a todo, exige un pronto despacho de las solicitudes de tierras, y a que se distribuya la riqueza rural entre el mayor número de hombres capaces de dedicarse a los trabajos agrícolas".[30] Dentro de esos cambios legales, planteó que los peones acasillados tuvieran derecho a solicitar y a ser dotados de tierras, cuestión que como se verá en el próximo capítulo, tuvo consecuencias en algunas zonas de la entidad.

Finalmente, uno de los cambios fundamentales formulado por Graciano Sánchez fue la supresión de las Comisiones Locales Agrarias y su sustitución por las Comisiones Agrarias Mixtas (CAM) en cada estado "integradas por un representante del Gobierno del Estado, otro del Departamento Autónomo Agrario y un tercero de la Organización Social Campesina".[31] Hay que recordar que para ese momento las comisiones locales se conformaban por cinco miembros (un presidente, tres vocales y un secretario) designados por el gobernador correspondiente, pero la ley no hablaba de representante campesinos.

Si bien estas propuestas no fueron retomadas en los términos esbozados por el representante de la CCM, los temas fueron recogidos y enviados al Congreso de la Unión, en donde se discutieron y aprobaron diversos decretos en la materia.

---

[28] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 104.
[29] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 107.
[30] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 107
[31] *Memoria de la Segunda Convención*, p. 110.

Dos de los decretos más relevantes fueron el del 28 de diciembre de 1933, que concedía un plazo de treinta días para que los propietarios de fincas afectadas por resoluciones provisionales presentaran sus alegatos, durante ese tiempo las autoridades agrarias visitarían los poblados para preguntar sobre la conformidad o inconformidad de las posesiones y vencido ese plazo, en los expedientes que no tuvieran objeciones se formularia de manera automática "resolución presidencial confirmatoria de la sentencia emitida en primera instancia, por las autoridades locales" (art. 3)[32] y el que otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo federal para legislar en materia agraria, lo que daría paso al primer código agrario del país.

Unos días después, el 30 de diciembre de 1933 se emitió el decreto de reforma al artículo 27 de la constitución, estableciendo nuevas autoridades en materia agraria: "una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución"; un cuerpo consultivo; una comisión mixta por estado compuesta de representantes iguales de la federación y de los gobiernos locales y de un representante de los campesinos; los Comités Particulares Ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que tramitaran expedientes agrarios; así como la instalación de los Comisariados Ejidales en cada uno de los núcleos de población que poseían ejidos (art. 27, f. XI).[33] Aspecto fundamental para entender los amparos que se analizan en este capítulo.

En las fracciones XII a XIV, se estableció el procedimiento dotatorio ante las nuevas autoridades agrarias que fue retomado en el código agrario de 1934 y que se explica más adelante. Y se retomó la reforma de 1931, señalando que los afectados con una resolución de dotación o restitución no tenían "ningún recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo", teniendo únicamente el derecho de acudir al gobierno federal dentro del plazo de un año, para reclamar la indemnización correspondiente. Transcurrido ese término, ninguna reclamación sería admitida (fracción XIV).[34]

El siguiente paso consistía en elaborar la legislación reglamentaria, para lo cual se emitió un decreto que facultaba al presidente de la república a expedir una nueva ley de secretarias de estado "*y reformar la legislación agraria*.[35] En este decreto se concedían

[32] FABILA, *Cinco Siglos*, pp. 463-464.
[33] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 468-469.
[34] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 469.
[35] *Diario Oficial,* 12 de enero de 1934, pp. 1-2.

facultades extraordinarias al ejecutivo federal para expedir, adicionar o reformar las leyes relativas a la materia agraria, "en forma que unifique la codificación agraria", además de establecer que dicha potestad terminaría el día 31 de agosto de 1934 y tenía que rendir cuentas al Congreso de la Unión del "uso que hubiere hecho de estas facultades".

Para reformar la legislación agraria el presidente Abelardo L. Rodríguez, conformó una comisión integrada por Ángel Posada (oficial mayor de la CNA); Marte R. Gómez (subsecretario de Hacienda y Crédito Público); Francisco Xavier Gaxiola (secretario particular del presidente de la república); Narciso Bassols (secretario de Educación Pública); Pablo Ferrat (comisionado por la Secretaría de Agricultura), Gilberto Fabila (designado por la Cámara de Diputados) y Melchor Ortega (gobernador de Guanajuato); poco tiempo después se sumó Gabino Vázquez como representante del ya candidato Lázaro Cárdenas.

Francisco Gaxiola como partícipe de la comisión resumió parte de los trabajos:

> Nuestras reuniones fueron diarias y los trabajos se desarrollaron dentro de la mayor armonía; en contadas ocasiones en que fue imposible llegar a un acuerdo, se consultó la opinión personal del Presidente Rodríguez, y él resolvió las diferencias de criterio. Terminadas las labores, el Ingeniero Fabila y yo fuimos comisionados para redactar el texto definitivo del proyecto, y una vez concluido –por acuerdo expreso del Presidente de la República– lo hicimos conocer al General Calles, quien no sólo estuvo conforme con él, sino que lo suscribió en unión de los miembros de la Comisión.[36]

La comisión presentó el proyecto al presidente de la república, este lo promulgó en la ciudad de Durango, el 22 de marzo de 1934 y fue publicado en el *Diario Oficial* el 12 de abril del mismo año. El código agrario incorporó toda la legislación hasta ese momento dispersa, constituyendo un solo cuerpo comprendiendo "la Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas; la de Repartición de Tierras Ejidales y constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, así como la de Creación de Nuevos Centros de Población Agrícola; las disposiciones sobre el Registro Agrario Nacional y la de Responsabilidades en materia agraria, que fue derogada por irrealizable".[37]

Ángel Posada, otro de los participantes en la elaboración de este ordenamiento, sintetizó los elementos más trascendentes del código: "la simplicidad del procedimiento, la generalización del derecho agrario a mayor número de individuos, y la delimitación de los

[36] GAXIOLA, *El presidente Rodríguez*, p. 449.
[37] "Declaraciones", p. 21.

derechos de las partes que interviene en el fenómeno, todo dentro de un criterio ampliamente comprensivo de la economía nacional".[38]

Hacer un análisis detallado de este ordenamiento rebasa los alcances de este apartado,[39] basta con señalar a las nuevas autoridades establecidas y los pasos del trámite de dotación.

En orden descendente las autoridades agrarias serían: presidente de la república; Departamento Agrario (DA); gobernadores de los estados; Comisiones Agrarias Mixtas (CAM), integradas por cinco miembros, dos representantes de la federación, dos de los gobiernos locales y uno de los campesinos; Comités Ejecutivos Agrarios (CEA), conformados por tres miembros nombrados por los gobernadores, de entre los solicitantes agrarios, que cesaban sus funciones al ejecutarse la posesión y; los Comisariados Ejidales (CE), elegidos en asamblea por la mayoría de los ejidatarios.[40]

El procedimiento dotatorio continuó en dos instancias. La solicitud se presentaba por escrito ante el gobernador con copia a la CAM, el mandatario estatal la mandaba publicar y la turnaba a la CAM en un plazo máximo de diez días, en caso de no hacerlo, la propia Comisión iniciaría "el expediente con la copia" que le hubiese sido remitida (art. 22).

La publicación de la solicitud surtía efectos de notificación para todos los propietarios de fincas que se encontraran dentro del radio de siete kilómetros, los cuales se contaban a partir del lugar habitado más importante del núcleo de población solicitante, a pesar de esto, la CAM, también debía notificar por escrito a los posibles afectados (art. 62).

Publicada la solicitud se procedía a la formación del censo agrario y pecuario del nucleó solicitante; a la formación del plano que debía contener "la zona ocupada por el caserío, con la ubicación del núcleo principal de éste; la zona de terrenos comunales; el conjunto de las pequeñas propiedades agrícolas inafectables, y, por último, las porciones de las fincas afectables"; así como a la formación de la comisión que debía rendir el informe complementario al plano mencionado (art. 63).

---

[38] POSADA, "El Código Agrario", p. 205-206.
[39] Para profundizar en los cambios más importantes del código agrario, véase MENDIETA, *El problema agrario*, pp. 235-244.
[40] En este caso se utilizó la edición del Código Agrario publicada por la Secretaria de Acción Agraria del PNR en 1937.

Es importante destacar que el censo agropecuario se llevaba a cabo por una junta censal integrada por un representante de la CAM, un representante de los peticionarios de tierras y un representante de los propietarios. En dicho censo se incluían todos los individuos capacitados (hombres y mujeres) para recibir parcelas, "especificándose sexo, ocupación u oficio, estado, nombre de familiares, etc., y superficie de tierra, número de cabezas de ganado y aperos que posean" (art. 65). Por los datos recabados, este trámite se convirtió en el principal dentro del procedimiento administrativo, pues era la base para determinar el número de beneficiados y hectáreas que se darían a los solicitantes.

Con los datos obtenidos, la CAM emitía un dictamen sobre la "procedencia o improcedencia de la dotación solicitada", en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que quedaba integrado el expediente (art. 67).

Dicho dictamen era puesto a consideración del gobernador, el cual contaba con 15 días para emitir su resolución. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se consideraba que este negaba la dotación turnándose el expediente al Departamento Agrario, para su resolución definitiva. Por el contrario, si la CAM no emitía su dictamen el gobernador podía ordenar la posesión del ejido (art. 68).

Si la resolución del gobernador era favorable, la remitía a la CAM para su ejecución, quien ordenaba al CEA del núcleo solicitante la entrega de las tierras dotadas al comisariado ejidal electo (art. 71). En este caso, la diligencia de posesión consistía en "dar a conocer al poblado el mandamiento respectivo, y en deslindar las afectaciones", con lo que se tenía a los solicitantes como "poseedores de las tierras y aguas materia del mismo", para todos los efectos legales correspondientes (art. 72), concretándose la posesión provisional.

Una vez que el expediente llegaba al Departamento Agrario, el Cuerpo Consultivo lo estudiaba y emitía el dictamen respectivo, pues con base en este se formularía el proyecto de resolución presidencial (art. 75), la cual debía contener:

> a). - Los resultados y considerandos en que se informen y funden;
> b). - Los datos relativos a las pequeñas propiedades agrícolas en explotación que se hubieren determinado durante la tramitación de los expedientes;
> c). - Los puntos resolutivos, que deberán fijar con toda precisión las tierras y aguas que, en su caso, se concedan, y la cantidad con que cada una de las fincas afectables deba contribuir para la dotación; y

d).- Los planos conforme a los cuales habrán de ejecutarse.[41]

Dicha resolución, junto con los planos respectivos eran remitidos a la delegación correspondiente del Departamento Agrario para su ejecución, "procediéndose además a publicarlas en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de las entidades correspondientes" (art. 77).

La posesión definitiva de las tierras se consumaba dando "a conocer a la autoridad ejidal del poblado la resolución que se ejecute y efectuando el apeo o deslinde de las tierras concedidas, levantándose acta de la diligencia" (art. 78), momento desde el que los ejidatarios eran considerados propietarios y poseedores de las tierras y aguas que la resolución otorgaba (art. 79). Simultáneamente a la posesión definitiva debía llevarse a cabo el fraccionamiento de los terrenos de cultivo y cultivables (art. 80).

Aparentemente con este último paso quedaba resuelto el expediente agrario, pues hay que recordar que para estos años los propietarios no contaban con ningún medio de defensa legal salvo exigir la indemnización correspondiente, sin embargo, basta con revisar el anexo 2 para darse cuenta de que los afectados con resoluciones agrarias continuaron promoviendo juicios de amparo, aunque ya no se atacaran de manera directa las resoluciones presidenciales.

El código agrario de 1934 estuvo vigente durante seis años, tiempo durante el cual sufrió una importante reforma en marzo de 1937, que otorgó concesiones de inafectabilidad a aquellas tierras destinadas a la ganadería,[42] aspecto que se retomará en el siguiente capítulo.

Para 1940 se promulgó un nuevo código agrario que en esencia conservó los trámites y procedimientos de su antecesor y solo tuvo una vigencia de dos años, por lo que únicamente se destacan algunos de sus elementos.

Este ordenamiento ha sido uno de los más extensos en su ramo, se integró con 334 artículos más seis transitorios.[43] En cuanto al procedimiento dotatorio, conservó las dos instancias del trámite de dotación, siendo uno de sus principales cambios la distinción entre

[41] Art. 76, Código Agrario.
[42] Para profundizar en la exposición de motivos de esta disposición, véase FABILA, *Cinco Siglos*, pp. 537-539.
[43] Esta ley quedó organizada en siete libros: primero, organización y competencia de las autoridades y de los órganos agrarios; segundo, propiedad agraria; tercero, procedimientos de restitución, dotación, ampliación, nuevos centros de población y propiedad inafectable; cuarto, procedimiento para la nulidad de fraccionamientos; quinto, procedimiento para la titulación, deslindes y conflictos de los bienes comunales; sexto, Registro Agrario Nacional y; séptimo, sanciones en materia agraria.

autoridades agrarias y órganos agrarios. En los primeros se encontraban el presidente de la república; los gobernadores de los estados y el jefe del Departamento del Distrito Federal; el jefe del Departamento Agrario; la Secretaría de Agricultura y Fomento; el jefe del Departamento de Asuntos Indígenas; los ejecutores de las resoluciones agrarias; los Comités Ejecutivos Agrarios y; los Comisariados Ejidales y los de Bienes Comunales (art. 1). En el caso de los segundos, señaló al Cuerpo Consultivo Agrario; al Oficial Mayor y los delegados estatales del Departamento Agrario; a las Comisiones Agrarias Mixtas; a las asambleas generales de ejidatarios y de miembros de núcleos de población, dueños de bienes ejidales; a los Consejos de Vigilancia Ejidales y de Bienes Comunales y; al Banco Nacional de Crédito Ejidal y demás instituciones similares (art. 2).

También se destaca la incorporación de un capítulo sobre inafectabilidad ganadera, retomando las disposiciones contenidas en el código de 1934. De acuerdo con Lucio Mendieta, este ordenamiento buscó la "perfección técnica", al separar la parte sustantiva de la parte adjetiva, "consiguiendo así una estructuración sistemática de su articulado en tres grandes partes fundamentales": autoridades agrarias, derechos agrarios y procedimientos para llevar a cabo esos derechos.[44]

Para el 31 de diciembre de 1942 fue promulgado un nuevo código agrario cuya vigencia fue de casi 29 años, siendo derogado por la Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de abril de 1971. Ya que los casos expuestos más adelante se rigieron por este código, se deja el análisis de algunas de sus partes para el siguiente capítulo.

3.3 La reforma agraria en el estado de México, 1931-1945

El periodo elegido para este capítulo coincide con los gobiernos presidenciales de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, y con las gubernaturas de Filiberto Gómez (1929-1933), José Luis Solórzano (1933-1935), Eucario López (1935-1937), Wenceslao Labra (1937-1941), Alfredo Zarate Albarrán (1941-1942) e Isidro Fabela (1942-1945).

En estos 14 años, el ritmo de la reforma agraria en el Estado de México tuvo variaciones de acuerdo con la política agraria del ejecutivo federal en turno y las tensiones entre los distintos grupos políticos de la entidad. Antes de adentrarse a delinear las

[44] MENDIETA, *El problema agrario*, p. 248.

características que tuvo el juicio de amparo en este periodo, se presenta un panorama general de la política agraria tanto a nivel nacional como a nivel estatal.

En 1930 se llevó a cabo la elección de presidente de la república tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y el interinato de Emilio Portes Gil (1928-1930), resultando ganador Pascual Ortiz Rubio quien gobernó el país de 1930 a 1932, tiempo durante el cual otorgó 1 203 737 hectáreas a 84 009 beneficiados a nivel nacional,[45] correspondiéndole decretar la reforma al artículo 10 de la ley agraria de 1915. En 1932, renunció a la presidencia eligiéndose a Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto.

En materia agraria, el presidente Rodríguez entregó 2 094 638 hectáreas a 161 327 beneficiados,[46] casi el doble que su antecesor, como ya se comentó, también le tocó la promulgación del primer código agrario del país.

Hasta este momento se puede decir que la política agraria nacional se encontraba regida por los postulados establecidos por el grupo sonorense dirigido por el *jefe máximo*, Plutarco Elías Calles: se veía al ejido como una etapa de transición hacia la formación de pequeños propietarios; se protegía la pequeña propiedad privada; se trataba de impulsar la producción del campo y; se intentaba poner fin al reparto de tierras.[47] Sin embargo, organizaciones nacionales como el Partido Nacional Agrarista, el Partido Comunista Mexicano, la Liga Nacional Campesina y la Confederación Campesina Mexicana, en distintos periodos y desde distintos espacios, dieron a conocer su visión del campo, criticaron las propuestas gubernamentales y empujaron sus propias demandas, lo cual puede ayudar a entender los vaivenes en la política agraria en el Maximato.

En cuestiones de justicia, había que precisar que el llamado Maximato "no significó ni tuvo alcances absolutos respecto de todas las posibles formas de expresión del orden jurídico" de ahí que la "Corte pudo construir y desarrollar su propio modelo judicial (aun en contra de las condiciones generales del régimen), o el propio régimen permitió que la Corte estableciera ciertos límites al modelo de dominación".[48] Prueba de ello serían la serie de

[45] GÓMEZ, *La reforma agraria*, p. 29.
[46] GÓMEZ, *La reforma agraria*, p. 126.
[47] Desde mayo de 1930 se había dado un plazo a los estados de Aguascalientes, Tlaxcala, San Luis Potosí, y Zacatecas para dar por terminado el programa ejidal y en junio del mismo año, Calles declaró que "urgía dar garantías a los pequeños y medianos propietarios" para reactivar la economía. FALCÓN, "El surgimiento", p. 355.
[48] COSSÍO, *La teoría constitucional*, p. 105.

casos en los que la Corte resolvió en sentido contrario a lo manifestado por el ejecutivo federal, como el caso de los pueblos de Naucalpan presentado en el capítulo anterior y uno de los juicios que se expone más adelante.

Para 1934 fue elegido presidente de la república Lázaro Cárdenas, quien en un principio daba la impresión de representar "más la continuidad que la ruptura" con el jefe máximo y sería hasta 1936 "cuando las diferencias entre uno y otro llevarían a la ruptura definitiva"[49] y Plutarco Elías Calles sería expulsado del país por "imperativo de salud pública", junto con Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega. En materia agraria y siguiendo a Tzvi Medin, la ruptura de Cárdenas con sus antecesores representó "una inmediata acción antilatifundista en grandes proporciones, propiciando y fomentando fundamentalmente el desarrollo de los ejidos, pero respetando la existencia de la pequeña propiedad privada"[50] e impulsando los ejidos colectivos como una figura permanente y no transitoria, de organización campesina que elevara la producción agrícola del país.

Durante el cardenismo se otorgaron 18 786 131 hectáreas[51] (ver anexo 6), siendo algunos de los casos más relevantes aquellos lugares en donde se constituyeron ejidos colectivos como La Laguna (Coahuila y Durango); el Valle de Mexicali (Baja California); la zona henequenera de Yucatán, las haciendas de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán y la región agroindustrial de Atencingo (Puebla); así como el reconocimiento de tierras a la tribu Yaqui.

Además de la entrega masiva de tierras, la reforma agraria del gobierno cardenista abarcó temas económicos y jurídicos de los cuales se destacan: el otorgamiento de créditos a los ejidatarios con la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1935; la formación de ejidos colectivos para cultivos específicos como el algodón, el henequén o la caña de azúcar; la atención a los pueblos indígenas, para lo cual se creó en 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas; la adición del artículo 52 bis al código agrario en materia de inafectabilidad ganadera con la expedición de su respectivo reglamento (1937); la declaración de jurisdicción federal de todos los conflictos por límites de terrenos comunales

[49] PÉREZ, *Lázaro Cárdenas*, p. 93.
[50] MEDIN, *Ideología y praxis*, p. 160.
[51] *Estadísticas Históricas*, p. 299. Al igual que en otros gobiernos, existe una variación de cifras dependiendo del autor consultado, por ejemplo, Tzvi Medin consigna un total de 17 609 139 hectáreas; Michel Gutelman refiere 17 891 577 y Everardo Escárcega 17 574 876.

en 1937; la creación de la Oficina de la Pequeña Propiedad y de la Confederación Nacional Campesina en 1938 y; la expedición de un nuevo código agrario en 1940, del que ya se resaltaron algunos de sus aspectos principales.

Es pertinente apuntar que en los dos últimos años de gobierno cardenista el ritmo del reparto de tierras disminuyó como consecuencia de las presiones internas y externas surgidas por la expropiación petrolera de 1938. Investigadores del periodo han manifestado que Cárdenas se vio obligado a "buscar todos los apoyos posibles para resistir a las poderosas compañías petroleras", por lo que puso un freno a su política social y, "si bien mantuvo, y aun acentuó, la apariencia de radicalismo del PRM, en la realidad hizo importantes concesiones a algunos grupos conservadores". En ese contexto se debe situar la formación de la Oficina de la Pequeña Propiedad como un espacio para "combatir las invasiones ilegales" e "impedir que los rancheros se unieran a la contrarrevolución".[52]

En 1940 el general Manuel Ávila Camacho asumió la titularidad del poder ejecutivo federal dándole otro rumbo al reparto agrario, lo que representó el fin del proyecto agrario cardenista; empero, la tendencia impulsada por Cárdenas de respeto a la pequeña propiedad se consolidó con el decreto del 25 de enero de 1941, en el que entre otros puntos estableció que los pequeños propietarios afectados por resoluciones ejidales tendrían derecho a que se les compensara el daño, "cediéndoles extensiones equivalentes en valor" a las que se les hubieren expropiado y en el caso de los ejidos que sufrieran "menoscabo por devolución de pequeñas propiedades a sus antiguos poseedores, en virtud de acuerdo presidencial no recurrido y que haya sido ejecutado", podrían obtener compensación con terrenos inmediatos.[53] En el siguiente capítulo se retoma la importancia de esta medida.

Otros elementos de la política agraria de este periodo fueron el impulsó del cambio tecnológico, por ejemplo, la sustitución de los arados tradicionales de madera por los de acero; la promulgación de diversos acuerdos para atender problemáticas agrarias en Sonora, Sinaloa, Chiapas, Distrito Federal y Querétaro;[54] la creación de algunas dependencias como la Dirección de Tierras y Aguas, la Dirección de Derechos Agrarios (1942) y la dirección de

---

[52] GONZÁLEZ, *La Confederación*, pp. 90, 94.
[53] "Acuerdo que define", pp. 4-6. En la misma edición del *Diario Oficial* se puede consultar el reglamento de la mencionada oficina.
[54] Los acuerdos presidenciales mencionados y algunos otros emitidos en la primera mitad de este sexenio pueden consultarse en *Dos años de acción*.

inafectabilidad agraria dependiente del Departamento Agrario (1943); así como la ya comentada promulgación del Código Agrario de 1942.

De acuerdo con las cifras históricas aportadas por INEGI, Manuel Ávila Camacho otorgó 7 287 697 hectáreas (ver anexo 6) para 112 447 beneficiados, resolviendo 2 914 expedientes de forma afirmativa y 3 072 resoluciones negativas, lo que confirmaría el inicio de la regresión en la materia.[55] Hasta aquí con el esbozo de la política agraria del periodo.

La política agraria en el Estado de México no estuvo exenta de los vaivenes nacionales en la materia.

Dado que autores que se citan a lo largo de esta investigación como Carlos Herrejón,[56] Eduardo Aguado y Elvia Montes de Oca, entre otros, han realizado en mayor o menor medida el estudio del reparto agrario en la entidad, únicamente se presenta un panorama general que sirve para caracterizar el periodo aquí estudiado y como contexto de las contiendas legales que se presentan más adelante.

El 16 de septiembre de 1929 tomó posesión como gobernador del estado el coronel Filiberto Gómez,[57] que como se mencionó en el capítulo anterior, junto con su hermano Abundio, fundaron el Partido Socialista del Trabajo del Estado de México (PSTEM) en 1925 y dirigieron la fracción que dominó la política de la entidad por casi una década. Hombre cercano a Plutarco Elías Calles, al inicio de su mandato había considerado continuar "diligentemente las dotaciones de ejidos", después precisó que esta tarea debía realizarse "para beneficio de los pueblos que real y verdaderamente" lo necesitaran. No obstante, ante la declaración hecha por el presidente Calles del fin del reparto agrario, el gobernador se sumó a esta postura y declaró "que el problema agrario, de suyo bien difícil, está próximo a terminar en nuestro estado, pues en la Comisión Local Agraria quedan pocos expedientes por substanciar".[58]

Esta afirmación no era del todo cierta, pues de acuerdo con Eduardo Aguado, debido a la "tardanza o insatisfacción de las expectativas y solicitudes de tierra de los pueblos, no

[55] *Estadísticas Históricas*, p. 299; GÓMEZ, *La reforma agraria*, p. 127.
[56] Ver particularmente los capítulos destinados a la década de los años veinte y al predominio y transformación del Gomismo, HERREJÓN, *Historia del Estado*, pp. 203-256.
[57] Filiberto Gómez, nacido en 1884, combatió en la revolución bajo el mando de Álvaro Obregón. Fundador del Partido Socialista del Trabajo del Estado de México (PSTEM) en 1925, ocupó diversos cargos políticos como diputado local, diputado federal y senador. Presidio la asamblea de creación del PNR en 1929 y formó parte del primer CEN del partido como secretario del exterior. Murió en 1934.
[58] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 231.

tardaron en producirse levantamientos de agraristas, comuneros y gente de las haciendas, teniendo como consecuencia sucesos sangrientos" en lugares como la Trinidad, San Antonio Acahualco, Santa María Chiconautla, Apaxco, Santiago Yeché y Zacatepec de Axapusco.[59]

En el mandato de Filiberto Gómez se otorgaron 92 mil hectáreas, lo que representó 10% del total de la tierra ejidal repartida beneficiando a 19 732 personas y dejando a 13 568 campesinos con derechos a salvo.[60]

Le sucedió en el cargo José Luis Solórzano para el periodo 1933-1937, hombre también cercano a Plutarco Elías Calles y miembro del PSTEM, pero con diferencias políticas con el gomismo, las que manifestó desde el inicio de su gobierno.[61] Una de sus acciones para contrarrestar fuerza política a los Gómez, fue la creación de la Liga Socialista de Obreros y Campesinos del Estado de México y en 1933 recomendó que se reanudara la reforma agraria. Solórzano criticó a su antecesor acusándolo de "negligente ante el reparto agrario" y retomó la entrega de tierras en un contexto de graves problemas en la producción agrícola del estado; así como invasiones de fincas por parte de campesinos inconformes "que, cansados de la esperanza de obtener tierra, entendían que la tramitación legal era larga y en buena parte infructuosa".[62]

De acuerdo con Carlos Herrejón, para mediados de 1935, la agitación en el campo se agudizó, registrándose en Capulhuac "un ataque de 200 hombres"; en San Andrés Cuexcontitlán un "zafarrancho por el corte de árboles" y en Tepetlixpa un motín".[63]

En esta gestión se entregaron 137 561 hectáreas a 23 022 beneficiados, lo que representó un 15% del total repartido entre 1915 y 1986.[64]

Ante la gran cantidad de problemas, su inexperiencia política, las protestas y muestras de descontento de sus grupos adversarios;[65] José Luis Solórzano solicitó una licencia de seis meses por motivo de enfermedad, la cual refrendó por tiempo ilimitado. Ante la ausencia del gobernador, la legislatura local designó como gobernador interino a Eucario López.

---

[59] AGUADO, *Una mirada*, p. 82.
[60] AGUADO, *Una mirada*, p. 84.
[61] HERREJÓN, *Historia del Estado*, pp. 238-244. Sobre las diferencias políticas al interior del PSTEM en este periodo véase MALDONADO, "Rediscutiendo el centralismo", pp. 255-263.
[62] AGUADO, *Una mirada*, p. 85.
[63] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 242.
[64] AGUADO, *Una mirada*, p. 86.
[65] ARREOLA, *La sucesión*, pp. 146-147.

Durante su corto mandato (1935-1937), Eucario López,[66] médico de profesión, puso especial atención en la salubridad pública de la entidad y le tocó enfrentar diversos problemas relacionados con el campo: en 1936 se perdió gran parte de las cosechas debido a la escasez de lluvias en algunas partes e inundaciones en otras; asesinatos de líderes agraristas en Temascaltepec; enfrentamientos entre federales y pobladores, en San Felipe del Progreso y Jalatlaco e; invasiones de tierras ante el retraso en el desahogo de las solicitudes de dotación y ampliación de ejidos pendientes.[67]

A pesar de este panorama, y con el impulso del reparto dado por el presidente de la república, Eucario López otorgó 176 114 hectáreas a 20 105 peticionarios, estas cifras representaron casi el 20% del total repartido en el estado. Este hecho en palabras de Eduardo Aguado constituyó "una muestra palpable de cómo la entidad se adscribió plenamente a la política federal de expansión de la reforma agraria".[68]

En 1937 fue elegido gobernador el oriundo del municipio de Zumpango, Estado de México, Wenceslao Labra. Participe de la revolución por el bando constitucionalista, fue uno de los miembros fundadores del PSTEM, diputado local, diputado federal y senador, además de yerno de Filiberto Gómez.[69] Su llegada a la gubernatura del Estado de México representó la transformación del Gomismo en "cardenismo lugareño, acoplándose a los dos momentos de ese régimen presidencial",[70] tocándole la segunda mitad del mandato cardenista en donde el ritmo de las reformas sociales iba en descenso y los inicios del gobierno de Ávila Camacho, quién como ya se mencionó, dio un viraje en la política agraria de su antecesor.

Labra se convirtió en el último gobernador que realizó una entrega masiva de tierras, comparado con sus sucesores, entregando 95 614 hectáreas a 14 808 campesinos, aproximadamente "10% de lo entregado de 1915 a 1986".[71] Al finalizar su mandato se habían

---

[66] Eucario López nació en San Francisco Tlalcilalcalpan, municipio de Almoloya de Juárez en 1898 y murió el 23 de marzo de 1940. Es de destacar que durante su corto mandato puso especial atención en la salubridad pública de la entidad y en la hacienda estatal, pues debido a la disminución de la producción, habían disminuido los impuestos recibidos por ese rubro, ver HERREJÓN, *Historia del Estado*, pp. 246-247.
[67] HERREJÓN, *Historia del Estado*, pp. 244, 248.
[68] AGUADO, *Una mirada*, p. 88.
[69] Wenceslao Labra nació el 28 de septiembre de 1895, en Zumpango, Estado de México. En su vida política se desempeñó como diputado local, diputado federal por distintos distritos de su entidad en cuatro ocasiones y senador, por el mismo estado. También fue secretario de organización y estadística del CEN del PNR (1936-1937) y uno de los fundadores de la CNC (1938). En las elecciones de 1952 apoyó la candidatura del general Miguel Henríquez Guzmán, CAMP, *Biografías de políticos*, pp. 303-304.
[70] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 249.
[71] AGUADO, *Una mirada*, pp. 90-91.

repartido 771 000 hectáreas correspondientes a casi el 87% del total de hectáreas otorgadas en la entidad, mientras que de 1941 a 1986 se repartió el resto. Por estas cifras se puede afirmar que para 1941 el reparto agrario en la entidad estaba prácticamente concluido, razón por la que los gobernadores posteriores más que continuarlo "intentaron otorgar tierra solamente en aquellos lugares donde persistía inquietud social o donde el reparto había sido exiguo".[72]

También correspondió a este gobernador el consolidar el control de las organizaciones campesinas de la entidad por medio del reparto efectivo de tierras y del caciquismo local en regiones como Tlalnepantla, Cuautitlán, El Oro, Tenango, Ixtlahuaca, Tenancingo e Ixtapan;[73] así como la atención a los problemas que generó la constitución de ejidos como la existencia de tierras sin producir por la carencia de semillas y herramientas; la falta de crédito; la ausencia de sistemas de irrigación; las plagas que atacaban los cultivos y la tala de bosques, entre otros.[74]

Tres meses después de iniciado su mandato, el 19 de diciembre de 1937, quedó formalmente estructurada la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de México, como producto del proyecto cardenista de unificar al movimiento campesino nacional y que se concretaría con la formación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 1938, cuyo primer secretario general fue Graciano Sánchez, aquel diputado que tuvo participación en el debate de la reforma de 1931 y en la elaboración del código agrario de 1934.

El gobierno de Labra siguió el ritmo de la política agraria nacional, pues con la llegada de Manuel Ávila Camacho, en el Estado de México también disminuyó el reparto de tierras. El mismo gobernador en su último informe de gobierno manifestó:

> Nuestros mejores esfuerzos no se fueron hacia la repartición de la tierra, sino hacia la producción y el enaltecimiento del espíritu campesino ya que al año de haber llegado al poder, el aspecto dotatorio de la reforma agraria estaba prácticamente consumado […] Pero hubo que comprender que nuestro campesino es todavía un auténtico paria, y que es menester que los Gobiernos tutelarmente le tiendan la mano.[75]

---

[72] AGUADO, *Una mirada*, pp. 93.
[73] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 249.
[74] MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 181-182.
[75] *Gaceta del Gobierno*, 13 de septiembre de 1941, citado por MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, p. 183.

Como ya se dijo, la gestión de Labra representó prácticamente el fin del reparto agrario en la entidad.

Para el periodo 1941-1945, fue electo Alfredo Zárate Albarrán, sin embargo, fue asesinado en marzo de 1942, por el entonces jefe de tránsito de la ciudad de Toluca y presidente del congreso local, Fernando Ortiz Rubio, hijo del ex presidente de la república, Pascual Ortiz Rubio. Sobre el suceso existen dos visiones; la primera se refiere a un incidente de copas entre los dos personajes y la segunda apunta a un complot político "del régimen avilacamachista, para deshacerse de un gobernador 'problema' y escasamente leal al presidente de la República en turno".[76]

En ese corto periodo, Zárate otorgó 7 202 hectáreas, lo que no representó ni un punto porcentual en beneficio de 604 campesinos.[77]

Después de una serie de negociaciones políticas, se impuso la decisión del presidente Manuel Ávila Camacho, y fue designado como gobernador sustituto Isidro Fabela.[78]

La política de Fabela, de acorde con la nacional, tuvo como eje principal la industrialización de la entidad. En julio de 1942, unos días después de ser declarado gobernador sustituto, Isidro Fabela expresó: "Tengo el propósito de establecer en los linderos del Distrito Federal una ciudad industrial, donde no sólo pueda concederse exención de impuestos a las industrias nuevas, sino toda clase de garantías a quienes inviertan. Quedan, pues, invitados todos los industriales, quienes tendrán el mejor mercado a la puerta de las industrias que establezcan".[79] La cuestión agraria pasaba a segundo plano**.**

Una muestra de lo anterior son los números que arrojó este gobierno, únicamente se entregaron 16 117 hectáreas a 1 488 campesinos, lo que representó el 1.82% del total repartido entre 1915 y 1986.[80]

---

[76] ARREOLA, *La sucesión*, p. 170.
[77] AGUADO, *Una mirada*, p. 96.
[78] Ante la ausencia de Zárate correspondía a la legislatura local nombrar al gobernador interino, no obstante, los diputados locales se reunieron con el presidente Ávila Camacho y estos aceptaron que el nuevo gobernador fuese designado por el Ejecutivo Federal para evitar, según ellos, "agitaciones inútiles en la entidad". El presidente de la república nombró al diplomático atlacomulquense Isidro Fabela. Este tenía la obligación legal de convocar a nuevas elecciones, pero al contar con el apoyo presidencial y del jefe de zona miliar, maniobró para que los diputados locales reformaran la constitución y Fabela se convirtió en gobernador sustituto para cubrir el resto del periodo gubernamental, para una descripción mayor de este suceso véase ARREOLA, *La sucesión*, pp. 178-188.
[79] *El Demócrata*, 13 de julio de 1942 citado por ARREOLA, *La sucesión*, p. 189.
[80] AGUADO, *Una mirada*, p. 97.

Como puede observarse, el ritmo de la reforma agraria en la entidad siguió el del país. De acuerdo con los datos mencionados, el reparto de tierras en el Estado de México había quedado finiquitado hacia inicios de la década de los años cincuenta, pues se habían constituido 992 ejidos[81] de los 1 061 que se encontraban consignados en el Registro Agrario Nacional en el año 2014. Por este motivo, no es de extrañar que en los archivos consultados para este periodo disminuyan los amparos derivados de una acción agraria de dotación de tierras, a pesar de ello, los distintos sujetos agrarios continuaran promoviendo juicios de garantías por otras causas como la ampliación de los ejidos, su división o cambio de ubicación; por el despojo de parcelas y; por el aprovechamiento de algún cultivo como magueyes o alfalfa, tema del siguiente apartado. En ese sentido, van perdiendo protagonismo los propietarios en los tribunales federales, aunque no dejan de estar presentes y cobra mayor relevancia el actuar de los ejidos como sujetos colectivos de derecho agrario.

3.4 Otras causas de interposición del amparo en el Estado de México, 1931-1945

Antes de adentrarse al análisis de los juicios de amparo de este periodo, es necesario referirse a dos elementos centrales para entenderlos en su contexto histórico: la teoría constitucional de la Suprema Corte y su composición a partir de las reformas a la ley orgánica del poder judicial federal.

Como se mencionó en el capítulo anterior y siguiendo la propuesta de José Ramón Cossío, el año de 1931 en que se aprobó la prohibición del amparo en materia agraria, corresponde al periodo liberal de la teoría constitucional de la SCJN, caracterizado por dar un sentido amplio a las garantías individuales, con excepción de algunas ramas del derecho entre ellas, la agraria. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se estableció una nueva etapa de esa teoría, denominada socialista, que "fue la expresión de la ideología a través de la cual se buscó que ella misma participara en un ejercicio social de creciente presencia de lo público frente a lo privado, entendido esto como la subordinación del individuo frente a los colectivos sociales, al Estado o a cualquiera de las formas de 'expresión' social que se habían construido";[82] dicho de otro modo, la Suprema Corte y el derecho en general, se convirtieron en un medio para cumplir con la política marcada por el gobierno en turno.

---

[81] FABILA, *La hacienda*, p. 11.
[82] COSSÍO, *La teoría constitucional*, p. 114.

Electo Lázaro Cárdenas como presidente de la república, el Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario, presentó una iniciativa de reforma al poder judicial cuyas principales propuestas consistieron en el aumento de 16 a 21 miembros de la Suprema Corte, con una duración de seis años en su cargo; la creación de una cuarta sala, avocada a resolver los asuntos en materia laboral (recordar que la primera sala resolvía cuestiones penales, la segunda administrativos y la tercera civiles y mercantiles) y; el cese de los ministros, magistrados y jueces de distrito. Para Cárdenas, los ministros en funciones carecían de "un auténtico espíritu revolucionario",[83] por lo que únicamente ratificó a tres y designó a los 18 restantes. En palabras de Pablo Mijangos, se trató de una Suprema Corte "hecha a la medida del proyecto cardenista y que muy pronto trabajaría con una judicatura federal renovada",[84] pues en 1936 se promulgaron dos normas nuevas: la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* y la ley de amparo, que se comentó en el primer capítulo de esta tesis.

En la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* de 1936,[85] se retomó lo propuesto por el PNR, estableciéndose una Suprema Corte integrada por 21 ministros que funcionarían en pleno (art. 2) y cuatro salas, integradas cada una por cinco ministros (art. 15).

En el caso que nos ocupa, el juzgado de distrito estaría integrado por un juez, nombrado por el pleno de la SCJN y el "número de secretarios, actuarios y empleados" que determinara el presupuesto (art. 37). Para ser juez de distrito se requería ser mexicano por nacimiento, abogado titulado con pleno ejercicio de sus derechos, de buena conducta y con por lo menos con tres años de ejercicio profesional (art. 38).

El juzgado de distrito del Estado de México continuó siendo parte del primer circuito, teniendo jurisdicción en toda la entidad y su residencia en la ciudad de Toluca (art. 72).

Adentrándose al análisis de los juicios promovidos en este periodo y de acuerdo con el anexo 2, el número de amparos interpuestos disminuye considerablemente, de 351 ubicados entre 1917 y 1930, a 53 entre 1931 a 1945. En ese sentido, vale la pena mencionar dos consideraciones metodológicas. La primera de ellas es que estas cifras no buscan ser exhaustivas pues existe la posibilidad de la existencia de otros juicios que no se encuentren consignados en este cuadro, no obstante, los datos aquí presentados se derivan de los expedientes encontrados en el archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que,

[83] COSSÍO, *La teoría constitucional*, p. 106.
[84] MIJANGOS, *Historia mínima*, pp. 141, 143.
[85] *Diario Oficial*, viernes 10 de enero de 1936, pp. 1- 15.

en la casa de la Cultura Jurídica en Toluca, no existen instrumentos de consulta disponibles al público, además de que la contingencia sanitaria condicionó la revisión de este fondo. La segunda consideración se deriva del propio desarrollo histórico del juicio de amparo, pues con la prohibición de 1931 se dio una disminución de este tipo de juicios, ligado al avance rápido de la reforma agraria en la entidad en la década de los años treinta, pues como ya se dijo, para 1940 se habían entregado casi el 87% de las tierras.

Los datos arrojados por estas 53 sentencias permiten observar que, a diferencia del periodo anterior, si bien la mayoría de los amparos interpuestos se derivaron de procedimientos de dotación (24), el resto corresponden a otro tipo de problemáticas que surgieron o se agudizaron conforme avanzaba la reforma agraria (véase anexo 2). Tal es el caso de ampliaciones, cambios de localización o división de los ejidos; afectaciones a pequeñas propiedades; invasión de terrenos; privación o despojo de parcelas a ejidatarios; aprovechamiento de algún cultivo; el impedir trabajar tierras; la localización de terrenos comunales y; la permuta de tierras ejidales (ver cuadro 6). Varias de estas figuras que bien pueden servir como un observatorio, regional y nacional, de la conflictividad agraria, han sido poco trabajadas por la historiografía.

Cuadro 6. Amparos en revisión por acción agraria o acto que lo motivaba, Estado de México, 1931-1946.

Dotación	24
Ampliación	7
Cambio en la localización	7
Pequeña propiedad	4
División	2
Invasión de terrenos	2
Privación o despojo de parcelas	2
Aprovechamiento de algún cultivo	1
Impedir trabajar tierras	1
Localización de terrenos comunales	1
Permuta	1
Sentencia de juicio ordinario civil	1
Total	**53**

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ).

Este periodo de 15 años muestra que, de los amparos solicitados, el juez de distrito en su mayoría los sobreseyó o desecho por improcedentes (particularmente por la reforma multicitada de 1931) y solo los concedió en ocho juicios (seis a favor de los propietarios y dos a favor de los ejidos), de los cuales la Suprema Corte solo en uno modificó la decisión del inferior negando el amparo, caso que se retoma en el siguiente apartado.

Por otro lado, es evidente el cambio de las autoridades señaladas como responsables del acto motivo del amparo. Además del presidente de la república y los gobernadores, ya aparecen instancias como el Departamento Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas, la Oficina de la Pequeña Propiedad y los Comisariados Ejidales, entre otras. De la actuación de estas dependencias, es claro que, a diferencia de la CNA, el Departamento Agrario perdió protagonismo en los juicios, pues únicamente aparece en tres de ellos, lo cual puede ser un indicio de que al sobreseerse los amparos y beneficiar a los núcleos de población, su participación en los tribunales federales no fue necesaria.

En el caso de los quejosos, si bien en su mayoría aparecen los propietarios afectados, empiezan a cobrar mayor relevancia las representaciones legales de los ejidos, como los Comités Particulares Ejecutivos y los Comisariados Ejidales, quienes inician los juicios en ocho casos y en uno más aparece el representante de una cooperativa obrera que había sido expropiada para ampliar un ejido. Esto demostraría que los ahora ejidatarios tenían claro el uso del amparo como uno de los tantos medios de resistencia con los que contaban para hacer valer sus derechos. Es de destacar que aparecen 13 juicios promovidos por mujeres que se ostentan como viudas de los propietarios, lo que refuerza lo planteado en el capítulo dos, con respecto a su papel activo dentro de las instancias judiciales, como se verá en el estudio de caso que se presenta páginas más adelante.

Finalmente, como se puede observar en el siguiente cuadro, los municipios de Cuautitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y Teoloyucan concentraron la tercera parte de los juicios promovidos en este periodo (33.9%); llama la atención que Tlalnepantla y Naucalpan se mantuvieron como dos de las demarcaciones en donde se utilizó de forma recurrente el amparo. Las 35 demandas restantes, se dividieron en 24 municipios.

Cuadro 7. Amparos en revisión por municipios, Estado de México, 1931-1946.		
No.	Municipios	No. Expedientes
1	Cuautitlán	5
2	Tlalnepantla	5
3	Naucalpan	4
4	Teoloyucan	4
5	Toluca	3
6	Acambay	2
7	Almoloya de Juárez	2
8	Ixtlahuaca	2
9	Jilotepec	2
10	San Felipe del Progreso	2
11	Temascalcingo	2
12	Tenango del Valle	2
13	Tultepec	2
14	Tultitlán	2
15	Ecatepec	1
16	Huixquilucan	1
17	Ixtapaluca	1
18	Melchor Ocampo	1
19	Metepec	1
20	Ocoyoacac	1
21	Otumba	1
22	Polotitlán	1
23	Temascaltepec	1
24	Texcoco	1
25	Valle de Bravo	1
26	Villa Cuauhtémoc	1
27	Villa de Allende	1
28	Villa Victoria	1
Total		**53**

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ).

De lo descrito, destacan dos causales de amparo relacionadas con las acciones agrarias del periodo y que han sido poco tratadas por la historiografía: los juicios de nulidad de resoluciones presidenciales y el cambio de localización de ejidos, temas de los siguientes apartados.

3.5 La lucha por el ejido: el caso de Santiago Teoyahualco

Al ser privados de la posibilidad de promover el juicio de amparo y de cualquier otra acción antes de dictarse la resolución presidencial, de acuerdo con el artículo 81 de la ley de enero de 1929 y con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte el mismo año; los propietarios afectados recurrieron a lo establecido por la ley del 6 de enero de 1915 en defensa de sus tierras: los juicios de nulidad de las resoluciones presidenciales, de jurisdicción federal, por tratarse de combatir una determinación emitida por el presidente de la república.

Si bien la legislación agraria no establecía las reglas procesales para llevar a cabo el juicio de nulidad, este se desarrollaba de acorde con el Código Federal de Procedimientos Civiles, cumpliendo las etapas de todo procedimiento: demanda, notificación a las partes, etapa para ofrecer y desahogar pruebas, presentación de alegatos y una sentencia que resolvía la controversia. La interrogante que no se pudo contestar en esta investigación radica en determinar ante quien se interponía dicho procedimiento y sobre todo, qué órgano jurisdiccional resolvía, pues desafortunadamente no se pudo profundizar en la búsqueda de estos juicios y las referencias halladas establecen que algunos fueron resueltos por los juzgados de distrito y otros por la Suprema Corte.[86] Dada la imposibilidad de acceder al juicio de nulidad que se menciona en este apartado, el análisis se centra únicamente en los efectos que produjo la sentencia de la corte y la reforma de 1931.

Para ejemplificar lo complicado que se convirtió el trámite de dotación en este periodo, los efectos de la sentencia de un juicio de nulidad y los alcances de la reforma de 1931, se pone la lupa en el pueblo de Santiago Teoyahualco, municipio de Tultepec. La elección de este caso responde a las variables que presenta, ya que al igual que en el capítulo anterior, es posible identificar de forma clara la actuación de los dos actores principales de las pugnas en el campo, los propietarios promoviendo el juicio de nulidad y el amparo, y los pueblos también acudiendo a la justicia federal.

La palabra Tultepec se compone de las raíces tullin que significa tule; de tepetl, “cerro” y “c” en; por lo que significa en el cerro del tule. Este municipio se ubica en la parte

[86] En el juicio de nulidad de resolución presidencial promovido por un grupo de pequeños propietarios ante el juzgado de distrito del estado de Puebla, contra la dotación de tierras otorgada a vecinos del pueblo de San Martín Tlamapa, municipio de Cholula, del mismo estado. El juez se declaró incompetente para resolver y turnó el expediente a la Suprema Corte, quien absolvió al ejecutivo federal. AHSCJN, JO, exp. 5/1927.

noreste de la entidad. Limita al norte con los municipios de Melchor Ocampo y Nextlalpan; al sur, con Tultitlán y Coacalco; al oriente, también con Nextlalpan y Tultitlán, y al poniente, con Cuautitlán.[87] Cuenta con una extensión de 27.4 km^2 (ver mapa 9 en donde está marcado con el número 37). Del mismo modo que otras regiones de la entidad, sus primeros asentamientos se remiten al periodo prehispánico, durante el periodo virreinal formó parte de la encomienda de Cuautitlán y en esta época comenzaron a establecerse las haciendas en la zona.[88]

El 26 de febrero de 1925, los vecinos de Santiago Teoyahualco, solicitaron al gobernador Abundio Gómez, dotación de ejidos, con fundamento en la ley agraria del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional. Dentro de sus argumentos manifestaron que el pueblo contaba con 180 jefes de familia y únicamente 2.5 caballerías[89] de terreno, poco más de 106 hectáreas, por lo que solicitaban tierras "para la formación de una cooperativa y procurar por cuanto más nos sea posible la formación de un pequeño bosque".[90]

De acorde con el *Reglamento Agrario*, se constituyó la junta encargada de llevar a cabo el censo correspondiente dando un total de 180 capacitados, de los cuales el 82% fueron registrados como jornaleros (149) y el resto como comerciantes (11), agricultores (8), vaqueros (2), un carpintero y algunos más no consignan ocupación.[91] Lo que demostraría que el poblado tenía como actividad principal lo relacionado a la agricultura.

Derivado de la realización de los trabajos técnicos se supo que la superficie del pueblo de Teoyahualco estaba integrada por 36 hectáreas pertenecientes a los vecinos con derecho a dotación, 34 hectáreas pertenecientes a vecinos sin derechos a dotación, 18 hectáreas perdidas en zanjas y caminos y algunas otras hectáreas más de pequeños propietarios. Los cultivos principales de la región eran el maíz y la alfalfa, esta última de gran importancia pues en la zona comenzaba a progresar la ganadería, siendo su negocio principal la

---

[87] VÁZQUEZ, *Tultepec*, p. 17.

88 De acuerdo con el investigador Antonio Vázquez, los primeros pobladores de la zona fueron "descendientes de nahuas y toltecas, y se establecieron en la cima de las lomas; a ese lugar primero lo llamaron Totolla, Totollo y más tarde Tultepec" y agrega que la zona también fue poblada por chichimecas y otomíes. Durante la época virreinal, Tultepec formó parte del señorío de Cuautitlán y de la posterior encomienda del mismo nombre otorgada a Alonso de Ávila (Dávila). En 1610, por acuerdo de las autoridades hispanas, los habitantes de Tultepec (indígenas y españoles), formaron la pequeña comunidad de San Martín Obispo, correspondiendo a los misioneros franciscanos la traza del nuevo pueblo teniendo como patrono a Santa María Nativitas. VÁZQUEZ, *Tultepec*, p. 46-49.

[89] La caballería equivalía a 42.79 hectáreas.

[90] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, f. 2.

[91] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, fs. 157-166.

producción de leche que era enviada para su consumo a la ciudad de México, vía la estación del ferrocarril establecida en el lugar, perteneciente a la línea México-Pachuca. Las propiedades colindantes y posibles afectadas eran la Hacienda de Corregidora, que había sido fraccionada en la parte colindante con el pueblo y se encontraba en promesa de venta a "unos individuos de nacionalidad italiana, quienes han hecho y están haciendo construcciones y siembras de alfalfa"; la Hacienda de Cartagena, cuyas tierras eran de mala calidad y; una pequeña propiedad perteneciente a un señor llamado José Negrete.[92]

Notificados los propietarios de estas fincas, expresaron su inconformidad. Los hermanos Rafael y Luis Roqueñi, propietarios de la Hacienda de Cartagena, manifestaron que la petición formulada por los de Teoyahualco era improcedente debido a que el poblado contaba con "tierras suficientes para sus necesidades", puesto que años atrás la Hacienda de Portales había fraccionado una parte entre los vecinos del pueblo y algunos de estos vendieron sus tierras al mencionado José Negrete; que su propiedad constituía una unidad agrícola industrial en explotación dedicada a la cría de ganado, a la explotación de leche y al cultivo de alfalfa y; que si bien su propiedad tuvo una extensión de 1 655 hectáreas, habían dado a los pueblos de Tultitlán, Chilpa, Buenavista y San Mateo 1 003 hectáreas, quedando a cada uno de los hermanos una extensión de 326 hectáreas.[93]

Esto último es un aspecto que vale la pena resaltar, pues de acuerdo con la resolución del gobernador Abundio Gómez, en el expediente de tierras tramitado por los pueblos de Chilpan y Tultitlán y la ranchería de Buenavista, en 1923 los propietarios de Cartagena propusieron al gobierno estatal, dar en donación parte de sus tierras a los pueblos mencionados, quienes estuvieron de acuerdo con la propuesta. La donación ofrecida fue aceptada por la CLA, y Cartagena quedó "exenta de contribuir a nuevas dotaciones por constituir una unidad industrial y los pueblos se desistieron de su petición".[94] Si bien no se tiene certeza del camino que siguió este trámite, propongo pensar esta maniobra de los propietarios como un medio más de resistencia para defender la porción de tierras que a ellos les importaba conservar.

En cuanto a los propietarios de La Corregidora, los ciudadanos italianos Luis y Bartolo Zanella, manifestaron que desde 1916 habían adquirido las fracciones uno y tres de

[92] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, fs. 196-199.
[93] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, f. 208.
[94] *Gaceta del Gobierno*, sábado 14 de julio de 1923, pp. 25-26.

lo que fue la hacienda de la Corregidora, sumando un total de 134 hectáreas y que en los expedientes de dotación de los pueblos de Tultepec y Melchor Ocampo, habían sido reconocidas como pequeña propiedad por lo que pedían fueran respetadas.[95] Otros pequeños propietarios que habían adquirido otras fracciones de La Corregidora presentaron ante las autoridades agrarias las escrituras de compraventa de sus tierras para evitar la afectación.

En el transcurso del procedimiento administrativo se promulgó la *Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas* de agosto de 1927, razón por la que el procedimiento tuvo que ajustarse a las disposiciones de esta. En abril de 1928 se notificó de nueva cuenta a los posibles propietarios afectados para que designaran representante ante la junta que realizaría el censo agropecuario, el cual arrojó un número de 89 individuos con derecho a ser dotados, el cual contrasta con los 180 que se habían seleccionado originalmente.

Concluidos los demás tramites se acreditó que Teoyahualco contaba con la categoría de pueblo; que poseía 36 hectáreas de terreno; que de los 89 individuos contemplados en el censo se tenían que descontar 34 por "tener ocupaciones distintas a la agricultura y capitales industriales y agrícolas mayores de $1,000 y $2,000 respectivamente", quedando 55 capacitados; que a la Hacienda de Cartagena se le consideró una extensión de 3 095 hectáreas, que si bien había acreditado su carácter de unidad agrícola industrial en explotación y de acuerdo con el *Reglamento Agrario* de 1922 quedaba exceptuada de afectación, no ocurría lo mismo en la ley recién promulgada, por lo que sería la única finca considerada para la dotación.

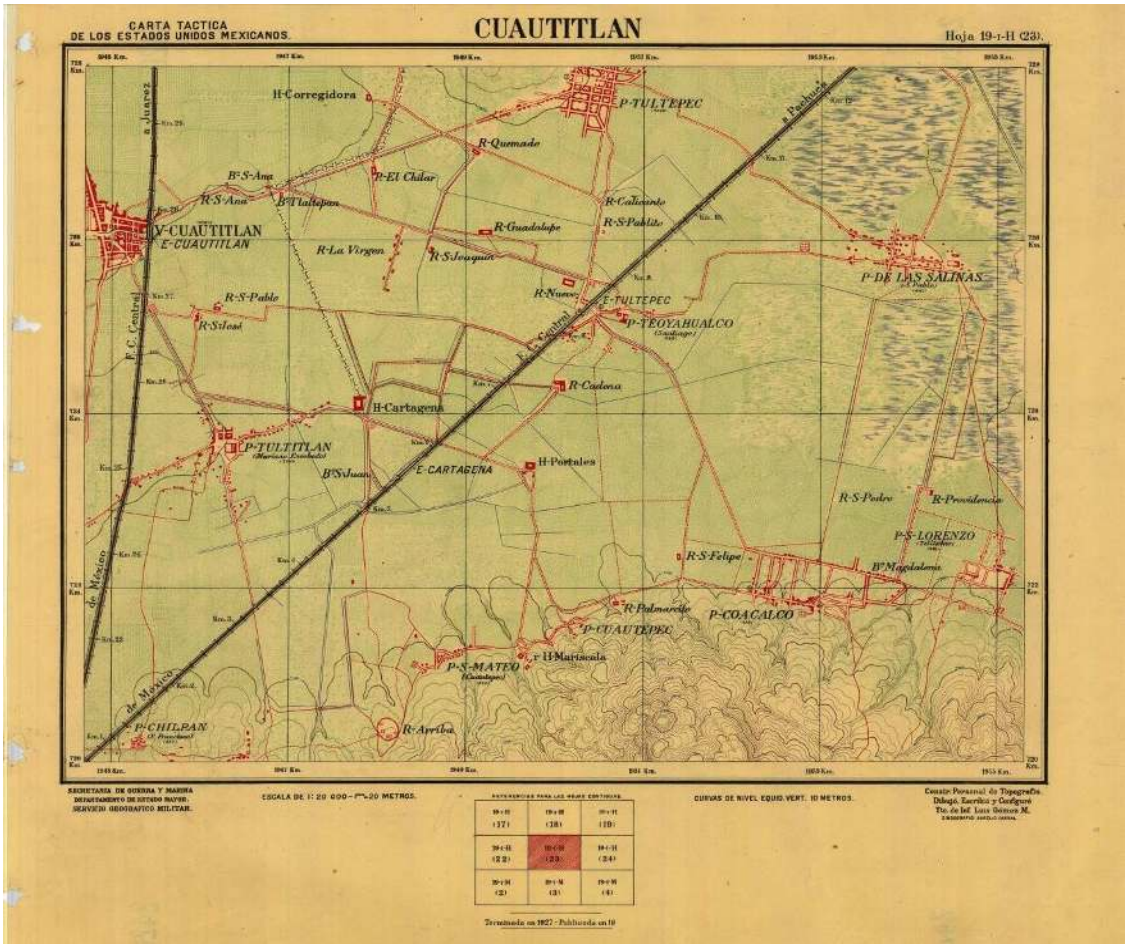
Tomando en cuenta lo anterior, el 11 de enero de 1929, el gobernador Carlos Riva Palacio, concedió una dotación de "184 hectáreas de terrenos de temporal de primera clase que unidas a las 36 hectáreas" que ya poseían, constituirían "su ejido y las cuales se tomarán de la hacienda de Cartagena".[96]

La posesión provisional se dio el 24 de agosto de 1929, pero los de Santiago Teoyahualco se quejaron ante el delegado estatal de la Comisión Nacional Agraria, pues las tierras otorgadas se localizaban a más de 6 kilómetros de su pueblo y en lugar "de las tierras de temporal de primera clase" a que tenían derecho, los habían localizado "en un cerro de mal agostadero" que no les servía para remediar sus necesidades económicas, sin embargo,

[95] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, f. 235.
[96] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, fs. 440-448.

señalaron que aun así tuvieron que aceptarlas y agregaron que ya estaban "cansados de tramitar" los expedientes ante la Comisión Local donde llevaban años "sin que dictara resolución y donde veíamos claro el poco deseo que había de acceder a nuestra petición que creemos ajustada a las disposiciones a la Ley y por el vivo deseo de que tenemos de que la Comisión Nacional Agraria cea la que se encargue de rebisar el expediente y hacernos justicia".[97] Esta descripción nos recuerda el pasaje de Rulfo con el que se inició el capítulo anterior.

Mapa 2. Ubicación del pueblo de Teoyahualco y la Hacienda de Cartagena, 1927.



Fuente: Carta táctica de Cuautitlán en https://mapoteca.siap.gob.mx/wp-content/uploads/imagenes/CGF.MEX.M10.V5.0487.jpg

Efectivamente a petición de los pobladores se asentó en el acta de posesión provisional "que por no haber terrenos de temporal de primera clase, que son los que en la

[97] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, f. 467.

Resolución manda dotar el C. Gobernador del Estado, hubo necesidad de localizar el ejido a mas de 6 kilometros del pueblo, siendo los terrenos en su totalidad cerriles de agostadero, quedando los interesados enteramente conformes".[98]

Como lo marcaba la ley, el expediente fue turnado a la CNA para su análisis en donde los interesados volvieron a expresar sus peticiones señalando que en la primera instancia se había retrasado "la resolución del expediente, hasta que las constantes y enérgicas gestiones del C. Procurador de Pueblos de la Nacional Agraria en el Estado, obligaron al Gobernador a fallarlo y después, nos localizaron el ejido a una distancia enorme de nuestro Pueblo, en un cerro inútil completamente para el cultivo" y pidieron que se les otorgara una dotación suficiente "para satisfacer las necesidades de todos los censados".[99]

Por su parte, la CNA informó que de los 89 capacitados que había dado el censo, sólo había que tomar en cuenta a 83 ya que cinco se habían ausentado del pueblo y uno más era empleado del ferrocarril; que los terrenos con los que contaba el poblado eran "notoriamente insuficientes para la satisfacción de sus necesidades"; que las tierras colindantes al pueblo se trataban de temporal de primera, como consecuencia de obras de irrigación que se habían llevado a cabo y; que de las fincas colindantes, la única afectable sería la Hacienda de Cartagena propiedad de Luis y Rafael Roqueñi, con una extensión de poco más de 1 148 hectáreas, "procurando que sean tierras de labor inmediatas al pueblo las que se concedan en vista de que la protesta del vecindario es justa".[100]

A petición de los solicitantes la CNA rectificó el censo y se obtuvieron 206 capacitados, por su parte, los propietarios de Cartagena alegaron que su finca se trataba de una unidad agrícola industrial que no debía ser expropiada pues de afectarse sería destruida.

Como una forma de presionar a la CNA, el 15 de noviembre de 1929, los miembros del CPA de Teoyahualco se dirigieron a la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de México, presidida por Manuel Beltrán Vázquez y siendo secretario de organización, Estanislao Mejía (el representante de los pueblos de Naucalpan que se presentó en el capítulo anterior), solicitando su intervención ante las autoridades agrarias para la pronta resolución del expediente de dotación. Si bien a lo largo de sus solicitudes los peticionarios no

[98] AGA, dotación, 23/2518, legajo 1, f. 471.
[99] AGA, dotación, 23/2518, legajo 2, f. 2.
[100] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, fs. 62-62v.

manifiestan estar afiliados a alguna organización campesina, cuando así lo consideraron, recurrieron a ellas.[101]

Unos días después el 12 de diciembre de 1929, el presidente interino Emilio Portes Gil, emitió la resolución que declaraba procedente la dotación, pero por los puntos expuestos modificó la resolución provisional. Se tomó en cuenta el número de 206 beneficiados concediéndoles 462 hectáreas, tomadas de la Hacienda de Cartagena (una extensión de 2.2 hectáreas para cada uno, ya que la calidad de las tierras no era uniforme). De acuerdo con la documentación consultada, la posesión definitiva se llevó a cabo el 15 de enero de 1930, sin presentarse incidentes, empero, los dueños de las fincas afectadas acudirían al amparo y al juicio de nulidad para combatir esta resolución presidencial. El primero les fue sobreseído y en el segundo, los hermanos Roqueñi obtuvieron una sentencia favorable, que obligó a las autoridades agrarias a reponer el expediente agrario desde los trámites previos a la rectificación del censo agropecuario y, por ende, al presidente de la república a emitir una nueva resolución. La segunda resolución presidencial fue dada el 6 de marzo de 1931 y su ejecución motivó la interposición de nuevos amparos, en este caso promovidos tanto por los solicitantes de tierras como por los propietarios afectados, juicios que se explican en el siguiente apartado.

Hay algunos aspectos a destacar de esta segunda resolución presidencial.[102] En primer lugar, se informó que la CNA había acatado la sentencia del juicio de nulidad, informando a las partes en litigio y resultando que los de Teoyahualco habían renunciado al "derecho que se le concedía para pedir el levantamiento de un nuevo censo", además de solicitar que "el expediente se terminase a la mayor brevedad posible, negando la dotación", más adelante se profundiza en los motivos de esta petición. Por este motivo, la Nacional Agraria no realizó la rectificación del censo y tomó como base a los "55 capacitados, mismos que arrojó el padrón levantado por la Comisión Local Agraria".

En cuanto a la petición hecha por los pobladores, en el sentido de que se les negara la dotación, se informó que no fue tomada en cuenta, por no ser válida la renuncia de los beneficios que concedían las leyes, máxime cuando estaba "plenamente demostrada la

[101] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, f. 83.
[102] Se reconstruye esta parte con los datos aportados por la resolución presidencial publicada en el *Diario Oficial*, miércoles 22 de abril de 1931, pp. 14-16.

necesidad que los vecinos de Teoyahualco tienen de terrenos para lograr su vida independiente".

El último aspecto por destacar fue el mandato de respetar "la superficie de alfalfa sembrada, y las que comprenden las obras de irrigación establecidas en la finca con su zona de protección correspondiente".

Los vecinos solicitantes de tierras buscaron combatir esta segunda resolución presidencial en dos instancias: vía administrativa, ante las autoridades agrarias y por vía judicial a través del juicio de amparo.

En el ámbito administrativo se dirigieron a la CNA para solicitar se llevará a cabo la rectificación del censo que se había ordenado, logrando su propósito, lo cual llama la atención puesto que ya existía una segunda resolución presidencial que de manera formal cerraba el expediente de dotación, más adelante la Nacional Agraria informó que por error se había ordenado esta diligencia. De igual forma pidieron se ejecutara la resolución de diciembre de 1929 que les otorgaba 462 hectáreas, puesto que la de marzo de 1931 solo les otorgaba 184 hectáreas que se encontraban a nueve kilómetros de distancia del poblado, mientras que las de la resolución de 1929 eran inmediatas al poblado.[103]

Esta segunda resolución trató de ejecutarse por medio del representante de la CNA, el ingeniero Gabino Hernández, el 17 de junio de 1932, pero los pobladores no la aceptaron y acudieron a la justicia federal. Tema que se trata más adelante. Al igual que en el capítulo dos, para una mejor comprensión de lo actuado en la instancia judicial se presentan de forma separada tanto el amparo promovido por el pueblo, como los presentados por los propietarios; ambas partes defendiendo lo que consideraron sus derechos.

3.5.1 Las defensas del propietario: el juicio de amparo y los efectos de los juicios de nulidad de las resoluciones presidenciales

Siguiendo la metodología propuesta para los demás capítulos en que se reconstruyen amparos en materia agraria, en este apartado se optó por separar los juicios promovidos por los propietarios, razón por la cual en un primer momento se presenta el juicio constitucional promovido por los afectados con la primera resolución presidencial, a pesar de que se inició antes de la reforma de 1931, y en un segundo momento los efectos que provocó el juicio de

[103] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, fs. 222-223.

nulidad de la resolución presidencial, para finalizar con los amparos contra la segunda resolución presidencial.

Como se dijo, el 15 de enero de 1930 se dio posesión definitiva de ejidos al pueblo de Santiago Teoyahualco, aparentemente sin presentarse incidentes, a pesar de esto, un día antes, el 14 de enero, los hermanos Rafael y Luis Roqueñi, con fundamento en el artículo 31 de la ley de amparo que establecía que en los lugares donde no residiera juez de distrito, los jueces de primera instancia tendrían facultad para recibir la demanda, suspender el acto reclamado y practicar las demás diligencias urgentes, promovieron demanda de amparo ante el Juez de Primera Instancia del Distrito de Cuautitlán en Auxilio de la Justicia Federal.

Como acto reclamado señalaron la ejecución de la resolución presidencial pues se pretendía realizar un cambio de localización del ejido que se pretendía dar a Teoyahualco, violando los artículos 14, 16 y 27 constitucionales y como autoridades responsables al presidente de la república, el delegado de la CNA en el estado, al ingeniero comisionado por la misma CNA para dar la posesión y al CPA del pueblo de Santiago Teoyahualco.

Manifestaron que como propietarios de la Hacienda de Cartagena se oponían a la dotación por "la falta de necesidad que tenía el pueblo solicitante de tierras, puesto que las que poseía nunca las cultivó y terminó por venderlas" y porque su finca era "una unidad agrícola industrial que no podía ser afectada". Apuntaron que el ingeniero encargado de dar posesión del ejido, no lo había hecho en "terrenos de temporal de primera como lo ordenaba la resolución del Gobernador" por no existir ese tipo de tierras en la zona y en cambio pretendía ponerlos en posesión de "terrenos de riego y sembrados de alfalfa" con lo cual se desobedecía la resolución provisional "puesto que ella excluye de la dotación a los terrenos de riego, a los alfalfares y a las obras de irrigación y es precisamente en estos terrenos en los que se pretende localizar el nuevo ejido para la posesión material del cual se ha señalado el día de mañana a las seis horas".[104]

Nuevamente se refirieron a las dotaciones ejidales de Tultitlán, Chilpa y la Ranchería Buenavista en donde la resolución había considerado su propiedad con el carácter de "una planta agrícola industrial que no conviene destruir, pues se perjudicarían no solo los interesados directamente, sino también los vecinos de los poblados comarcanos y aun la sociedad en general, al restringirse considerablemente la producción y la venta de leche",

[104] AHCCJT, AI, 17/1930, fs. 1-2.

causando perjuicio a "los vecinos de los pueblos comarcanos que en su gran mayoría trabajan en la hacienda".[105]

Los autos fueron enviados al juez de distrito del Estado de México, quien el 27 de enero de 1930, previno a los quejosos para que en un término de tres días mencionaran los nombres de los terceros perjudicados, pues en su demanda no lo había hecho (arts. 19 y 72 de la ley de amparo).[106] Al cumplirse con esta prevención, el 30 de enero de 1930, el juez de distrito Luis Bazdresch, quien unos años después fuera ministro de la Corte durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, dio por admitida la demanda, pero la desechó en cuanto al CPA "porque dicho Comité no es autoridad", solicitó los informes justificados y fijó como fecha para la audiencia constitucional las 10 horas del 18 de marzo de 1930.[107]

En su informe justificado el Secretario de Agricultura y Fomento, como presidente de la CNA informó que la misma no había dictado ninguna disposición con respecto al cambio de localización referido, no existiendo "ninguna de las violaciones invocadas por los quejosos en su demanda", por lo que solicitó que se desechara "o en todo caso declarar que la Justicia de la Unión no ampara ni proteje a Rafael y Luis Roqueñi, por no existir las violaciones que reclamaron en su demanda relativa".[108]

Por su parte, el agente del MPF, señaló dos causas por las que debía sobreseerse el juicio. En primer lugar, señaló que existía jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecía "que en los juicios sobre cuestiones agrarias", era improcedente el amparo, "en vista del procedimiento que el artículo 10 de la ley de 6 de enero de 1915, establece para formular sus reclamaciones las partes interesadas" y en la segunda causa apuntó la inexistencia del acto reclamado, toda vez que de los informes justificados de las responsables, no aparecía que hubieran ordenado el cambio de localización del ejido de Teoyahualco al que se referían los quejosos.[109]

Un día antes de celebrarse la audiencia y con apoyo en el artículo 79 de la ley de amparo, el MPF solicitó al juez de distrito el diferimiento, ya "que teniendo necesidad de presentar a la hora de la audiencia una prueba documental", cuya copia había solicitado a la

[105] AHCCJT, AI, 17/1930, fs. 2-2v.
[106] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 21.
[107] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 26.
[108] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 65-66.
[109] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 72-73.

Comisión Nacional Agraria, no le sería posible hacerlo;[110] aunque no establece el motivo, es probable que la Nacional Agraria no le hubiera proporcionado el documento solicitado. El juzgador atendiendo lo solicitado señaló nueva fecha para el 28 de abril de 1930.

Una muestra más de que los solicitantes de tierras o sus representantes recurrían al uso del derecho en defensa de sus intereses lo tenemos en los alegatos presentados por el CPA en donde hizo hincapié en la jurisprudencia de la Suprema Corte con respecto a que el juicio de amparo era un "remedio constitucional extraordinario" que solo procedía contra actos respecto de los cuales la ley no concedía "remedio alguno, por cuya virtud puedan repararse en la vía común los perjuicios que cause, y en que, por tanto, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios, llamese juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa reparación". De no ser así, el amparo se convertiría en un recurso ordinario más, yendo en contra "del espíritu jurídico y fin político que informaron su creación; pues es notorio que el Constituyente, al fundar dicho juicio no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional preconizado en nuestro derecho público".[111] Y hasta ese momento los hermanos Roqueñi no habían acreditado que hubieran agotado el procedimiento establecido en los artículos 101 al 105 de la *Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas*, sobre el cambio de localización de los ejidos.

Desde su punto de vista era claro que los quejosos debían probar que habían agotado "todos los medios legales para remediar el perjuicio de que se quejan, en la vía común y con los recursos estatuidos por la Ley del acto", de no ser así, el amparo promovido sería improcedente, "toda vez que no es posible hacer de un recurso ordinario, un extraordinario y viceversa", razón por la cual solicitaron se desechara el amparo "por su manifiesta improcedencia".[112]

Llegado el día de la audiencia, el 28 de abril de 1930, el secretario encargado del despacho del juzgado, la dio por iniciada sin la presencia de las partes. De acuerdo con las fuentes, se leyó la demanda, los informes justificados y el pedimento del MP y posteriormente el secretario en función de juez, dio por admitida la documentación y considerando que correspondía el emitir la respectiva sentencia y no contaba con facultad

[110] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 48.
[111] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 90-90v.
[112] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 92.

para realizarlo, suspendió la audiencia y señaló su continuación para las 11 horas del 28 de mayo próximo.[113] El día acordado se reanudó la audiencia y el juez de distrito, licenciado Luis Bazdresch, tomando en cuenta la jurisprudencia relativa a la necesidad que tenían los afectados con resoluciones dotatorias de tierras de acudir al recurso establecido por el artículo 10 de la Ley de 6 de enero de 1915 para la posible reparación de los perjuicios que a los interesados les causaran dichas resoluciones, decretó el sobreseimiento del juicio.[114] Como puede observarse, para estos años tenía especial importancia la jurisprudencia de la Suprema Corte en materia agraria.

Puesto que no se tiene claridad acerca de la fecha en que se promovió el juicio de nulidad de la resolución presidencial, no es posible determinar si se inició al mismo tiempo que el amparo, durante el desarrollo de este o una vez que se conoció la sentencia, lo que podría darnos una mayor idea del uso del derecho por parte de los propietarios. Lo cierto es que los hermanos Roqueñi agotaron el medio de defensa que establecía el artículo 10 de la ley agraria de 1915 y la jurisprudencia dada por la corte en 1929 y promovieron el juicio ante el Juez Cuarto de Distrito en el D.F., en contra del presidente de la república y el pueblo de Santiago Teoyahualco demandando la nulidad de la resolución presidencial. Como se dijo, desafortunadamente no se encontró este expediente, de manera que solo se mencionan los efectos que tuvo la sentencia de este juicio en el trámite de dotación. Seguido por todas sus etapas, el 17 de diciembre de 1930, el juez declaró "ilegal la resolución presidencial", como consecuencia ordenó la reposición del "procedimiento agrario respectivo desde los trámites previos a la rectificación del censo agropecuario".[115] Lo que obligaba al ejecutivo federal a emitir una nueva resolución en este expediente y a los ejidatarios a devolver parte de las tierras que habían obtenido.

Conocida la sentencia del juicio de nulidad, por las partes involucradas, intentaron resolver el conflicto por medio de la negociación, aunque de la documentación consultada no queda claro cuál de las partes tomó la iniciativa, se puede pensar que los propietarios buscaron dirimir la controversia para conservar la superficie en explotación.

De acuerdo con un convenio firmado el 6 de enero de 1931, entre Rafael Roqueñi y los vecinos de Santiago Teoyahualco, el propietario se comprometía a donar a los ejidatarios

[113] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 55v.
[114] AHCCJT, AI, 17/1930, f. 89.
[115] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, f. 99.

200 hectáreas de la Hacienda de Cartagena, construir "un corral con capacidad para cuarenta animales y dentro de él cuatro cuartos, ya para guardar aperos ya para habitación", a constituir una servidumbre de paso a favor de los de Teoyahualco y entregarles la cantidad de $15 000, divididos en implementos agrícolas y efectivo. Por su parte, los de Teoyahualco se comprometían a evitar, "el que los animales de su propiedad causen daños a las siembras o a los terrenos de la Hacienda y en general todos aquellos actos que pudieran ser origen o motivo de fricciones entre la Hacienda y el pueblo".

En caso de no existir impedimento legal se propuso que esta superficie se estableciera como una propiedad privada "fuera del control de las Autoridades Agrarias, formando para su explotación, una cooperativa entre los vecinos del pueblo de Santiago Teoyahualco", de lo contrario se buscaría llevar a cabo el procedimiento administrativo de dotación, obligándose ambas partes "a poner todo lo que de su parte esté para que la nueva dotación, si la hubiere", recayera en las 200 hectáreas mencionadas.[116] El actuar de los peticionarias podría verse como un indicio de esa infrapolítica o resistencia cotidiana, al tratar de negociar con el hacendado en lugar de enfrentarlo, aunque fuera dentro de la establecido por la legislación en vigor.

Es probable que, por la firma de este convenio, días después los ejidatarios se dirigieran a la Comisión Nacional Agraria para manifestarle que renunciaban a su derecho de celebrarse el nuevo censo. Dado que era su deseo que concluyera lo más pronto posible el expediente, pedían que se diera por terminado el plazo dado por la ley para presentar alegatos y que se les negara la dotación solicitada "que ahora nos perjudicaría".[117] Esta decisión de los de Teoyahualco pudo responder a sus deseos por contar de manera pronta con tierras pues ya habían transcurrido casi seis años desde su solicitud y aún quedaba pendiente la nueva resolución presidencial.

Siguiendo el dicho de Rafael Roqueñi, los de Teoyahualco habían tomado posesión desde el 10 de enero de las 200 hectáreas acordadas "sin que mediaran formalismos de ningún genero ni interviniera Autoridad alguna y a continuación principie a remitirles los fondos para la formación de la cooperativa". Recibidas las tierras habían comenzado a trabajarlas sembrando poco más de 30 hectáreas de maíz, sin embargo, desde fines de mayo habían

[116] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, fs. 140-144.
[117] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, fs. 133-135.

recibido la totalidad de los $15 000 y abandonaron "no sólo el ejido sino las siembras efectuadas por ellos mismos" las cuales estaban a punto de perderse, lo cual demostraba la mala fe con la que actuaban. Por este motivo, el propietario solicitó a la CNA nombrara personal que acudiera a la zona a comprobar su dicho.[118]

El jefe de zona ejidal, Andrés Meza Rodríguez, se presentó al lugar el 13 de julio de 1931 y los ejidatarios negaron lo dicho por el propietario, precisando que el administrador de la hacienda únicamente les había indicado la zona donde podían sembrar, que de esas tierras solo eran laborables de 18 a 20 hectáreas que iniciaron a sembrar de maíz, no obstante, suspendieron los trabajos pues una comisión del ejido vecino de Buenavista les informo que esas tierras les pertenecían a ellos en virtud de una resolución presidencial y para evitar conflictos posteriores suspendieron las labores.[119]

La documentación revisada no aporta mayores datos sobre el conflicto y la negociación entorno a este convenio, no obstante, es evidente que tanto propietarios como solicitantes, buscaron hacer valer sus derechos fuera del ámbito agrario, posiblemente por las trabas y retrasos con las que hasta ese momento se habían topado.

3.5.2 Teoyahualco: la defensa jurídica del pueblo

Con fecha 25 de junio de 1932, el Comité Administrativo Agrario de Santiago Teoyahualco presentó demanda de amparo ante el juez de distrito del Estado de México, contra el presidente de la república y la Comisión Nacional Agraria, por tratar de ejecutar la resolución presidencial del 6 de marzo de 1931, que había mandado "reponer el expediente agrario desde los trámites previos a la rectificación del censo agropecuario" con motivo de la solicitud de tierras promovida por dicho pueblo.[120] Como ya se explicó, la CNA no práctico el censo correspondiente argumentando que los ejidatarios habían renunciado a ese derecho, razón por la cual únicamente se consideraron a 55 capacitados y no los 206, con una dotación de 184 hectáreas, debiéndose tomar la resolución presidencial como nula.

[118] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, fs. 129-130.
[119] AGA, ampliación, 23/2518, legajo 13, f. 125.
[120] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 1.

Al igual que en el amparo de los pueblos de Naucalpan presentado en el capítulo anterior, el de distrito solicitó a los quejosos nombraran un representante común, eligiendo a Ezequiel Flores, quien fungía como secretario del CPA del ejido.[121]

Como ocurría en todos los juicios una vez que el juez daba por admitida la demanda solicitaba los informes justificados a las autoridades responsables, emplazaba a los terceros perjudicados y fijaba fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

En su informe justificado, las responsables por medio del Secretario de Agricultura y Fomento, también presidente de la CNA, hicieron referencia a la sentencia emitida en el juicio de nulidad, a la serie de diligencias llevadas a cabo para reponer el procedimiento, al desistimiento realizado por los ejidatarios y a la posibilidad de tratar directamente con los hacendados. Además de precisar que "por un error cometido por la Oficialía Mayor de la Comisión Nacional Agraria", se habían girado instrucciones para que "se efectuase la rectificación del censo o nuevo censo"; y que en la fecha indicada los representantes del poblado, de la CNA y de los propietarios de Cartagena, firmaron un acta en la que se aclaró que "en vista de haberse pronunciado ya la resolución presidencial", el censo que se buscaba levantar "era extemporáneo y por tal motivo debería suspenderse".[122]

Por este conjunto de razones solicitó se declarara improcedente el amparo o en su caso se negara, puesto que no existían las violaciones constitucionales alegadas por los de Teoyahualco, aún más, el juez de distrito no había ordenado "que se practicara una nueva rectificación del censo, sino tan sólo que se llevara adelante o mejor decir se repusiera el procedimiento desde los tramites previos a la rectificación censal"; además de que no existía en la legislación agraria "disposición alguna que obligue a la Comisión Nacional Agraria a proceder en todo caso a las diligencias de rectificación de censos" y; que las partes habían renunciado a la "rectificación del censo y como no existían ningunas otras diligencias que tuvieran que llevarse adelante, por parte de la Comisión Nacional Agraria, ésta procedió a emitir su dictamen, mismo que aprobado por el C. Presidente de la República dio por resultado la resolución presidencial de 6 de marzo de 1931".[123]

El 16 de agosto de 1932, día en que se llevaría a cabo la audiencia constitucional, fue diferida dado que solo se encontraba el secretario del juzgado y no contaba con facultades

[121] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 106.
[122] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 70.
[123] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 75.

"para fallar en definitiva" en este juicio,[124] fijándose las 10 horas del 30 de septiembre próximo para su reanudación.

Celebrada la audiencia constitucional el 30 de septiembre de 1932, a la que acudieron los miembros del CPA; el tercero perjudicado, Luis Roqueñi como albacea de su hermano Rafael (puesto que había fallecido días antes) y; el agente del Ministerio Público Federal. Las partes presentaron como pruebas copias certificadas de diversos documentos como las sentencias multicitadas, las resoluciones presidenciales y las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades agrarias.

En sus alegatos, los quejosos manifestaron entre otras cosas que el presidente de la república había emitido la resolución presidencial fechada el 6 de marzo de 1931 "sin que se hubiese repuesto el procedimiento agrario", tal y como lo había ordenado la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito de D.F en el juicio ordinario civil federal; que la CNA trataba de dar posesión de tierras a los de Teoyahualco de acuerdo con la segunda resolución, la cual no solo era anticonstitucional sino nula de pleno derecho, anticonstitucional por no reponerse el procedimiento y nula, dado que el mencionado juez cuarto había desechado el amparo siguiendo la fracción III del artículo 10 de la ley de 6 de enero de 1915, y "en consecuencia la sentencia Presidencial de fecha 6 de marzo de 1931, quedó ipso-facto por esta resolución, sin efecto, es decir, que no debe tenerse en cuenta" y que únicamente debía tomarse en cuenta la resolución definitiva del 12 de diciembre de 1929.[125]

En el caso del señor Roqueñi, alegó que lo único que reclamaban como acto violatorio de garantías era la ejecución llevada a cabo por la CNA y no el fallo presidencial y en caso de que el juzgador se avocara al examen de dicha resolución, la interposición del amparo se había llevado de forma extemporánea, por lo que se trataba de un acto consentido con lo que la demanda debía sobreseerse.

Por lo que toca al MPF, dentro de su pedimento manifestó dos elementos que merecen ser retomados. En el primero señaló que se encontraba "fundada la queja" de los de Teoyahualco, contra los actos de las autoridades señaladas "y por lo mismo" no procedía el sobreseimiento que pedía la autoridad responsable ni que se les negara la protección de la justicia federal. En el segundo elemento se refirió al desistimiento de los pobladores,

[124] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 107.
[125] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 110.

precisando que no existía "ninguna disposición legal" que lo justificara, por el contrario, subsistía el artículo tercero del decreto de 16 de julio de 1925 que prohibía "terminantemente a los pueblos o sus representantes el desistimiento de la acción dotatoria de tierras o de alguna otra formalidad que tienda a ese mismo objeto"; razones suficientes para pedir al juzgador concediera el amparo solicitado.[126] Sobre esto último, se refiere a un decreto emitido por el presidente Calles en el que se determinó la capacidad jurídica de los Comités Particulares Administrativos.[127]

Llevada a cabo la audiencia de ley, el juez de distrito emitió su sentencia manifestando que tanto las autoridades responsables en sus informes, como los quejosos en sus alegatos, se refirieron a la sentencia presidencial del 6 de marzo de 1931 como acto reclamado, siendo que los quejosos en su demanda habían manifestado el tratar de ejecutar dicha sentencia, por lo que su resolución se concretaba a analizar este último punto.

Dado que las autoridades responsables en sus informes justificados pidieron la improcedencia del juicio por falta de personalidad del CAA para promoverlo, por la prohibición del amparo en materia agraria y por tratarse de un acto consentido por la fecha extemporánea en que se presentó la demanda, el juzgador examinó cada una de estas causas.

Con respecto a la falta de personalidad, el juez determinó que la causa de improcedencia no existía ya que de acuerdo con la ley agraria vigente "el Comité Administrativo de un ejido no solamente tiene facultades de administrar los intereses ejidales, sino de gestionar ante la Comisión Nacional Agraria y demás autoridades, todo lo relativo a dotación y restitución de ejidos"; sobre la prohibición del amparo en esta materia, argumentó que la supresión de ese derecho no abarcaba "a los pueblos interesados en las dotaciones o restituciones de ejidos", sino a los propietarios y; en cuanto a la última causa, señaló que el acto reclamado no era la resolución presidencial sino la ejecución de esta, por lo que tampoco existía causa de improcedencia alguna,[128] dando entrada al amparo solicitado. Sin duda, estos razonamientos reflejan parte de los criterios adoptados por el poder judicial en materia agraria.

Hay que recordar que unos meses antes se había reformado la ley del 6 de enero de 1915 prohibiendo el amparo en materia agraria a los propietarios afectados con resoluciones

[126] AHCCJT, AI, 213/1932, fs. 149-150.
[127] FABILA, *Cinco siglos*, pp. 355-357.
[128] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 46v-46v.

dotatorias o restitutorias de tierras o aguas, por lo que el Juez Cuarto de Distrito del D.F desechó el juicio ordinario federal promovido por los propietarios de Cartagena.[129] Es decir, los actos jurídicos realizados hasta ese momento perdían validez legal quedando sin efectos la rectificación del censo, la segunda resolución presidencial multicitada y los actos que de ella se derivaron, incluyendo el amparo que aquí se expone. Vale reiterar que el estudio de las implicaciones que tuvo la reforma de 1931, particularmente los artículos transitorios, no solo para los propietarios, sino para los procedimientos que se encontraban en trámite, es un tema que aún se puede profundizar dentro de la historia de la reforma agraria mexicana.

Tomando en consideración este cambio legal, el juez de distrito en el Estado de México, en su resolución presentó dos conclusiones con respecto a la sentencia de su homólogo del Distrito Federal.

En la primera de ellas puntualizo que su similar del D.F, había aplicado el artículo tercero transitorio del decreto de diciembre de 1931, desechando el juicio mencionado, por lo que los quejosos podían "acudir a las autoridades responsables haciendo de su conocimiento esa resolución judicial", con el propósito de no ser ejecutada la sentencia presidencial de seis de marzo de 1931, "lo que no aparece que se haya hecho puesto que no lo dicen los quejosos"[130] en su demanda.

La segunda conclusión hizo hincapié en los efectos que tendría su resolución. Por lo relevante del argumento, vale la pena reproducirlo:

> si se concediera el amparo, la sentencia respectiva debería tener el efecto de que las autoridades responsables repusieran el procedimiento agrario a partir del punto en que lo ordenó la sentencia del ciudadano Juez Cuarto de Distrito y cumplieran con dicha sentencia. Pero como, según los mismos quejosos, se han encargado de comprobar plenamente, esa sentencia judicial ya no existe, de antemano se sabe que la sentencia que concediera este amparo no podría tener efectos jurídicos; o en otros términos, no podría discutirse si las autoridades responsables cumplieron o no con una sentencia que ya no tiene existencia legal. Por lo tanto, o bien se sobresee el amparo por haber quedado sin materia jurídica, o bien habría que negarlo por no existir el concepto violatorio alegado.[131]

[129] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 47v.
[130] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 48.
[131] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 48v.

Con base en este razonamiento, el 30 de septiembre de 1932, el juez Manuel Bartlett,[132] abogado tabasqueño que inició su carrera en el Poder Judicial de la Federación en 1929 como juez de distrito en Veracruz, determinó el sobreseimiento por causa de improcedencia. Al no estar de acuerdo los quejosos con esta determinación, promovieron el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Admitido el recurso, las partes formularon sus respectivos alegatos.

El CAA solicitó la revocación de la sentencia del de distrito, ya que la CNA no llevó a cabo la reposición del procedimiento, siendo la única actuación de esta autoridad "entre la fecha de la ejecutoria del C. Juez Cuarto de Distrito y la fecha de la segunda sentencia presidencial", la orden que dio a su delegado en el estado para "que recogiera las tierras que se nos habían dado en posesión definitiva y se las entregara, a la mayor brevedad a los afectados".[133]

También aclararon que ya estando pronunciada la sentencia de 6 de marzo de 1931, la CNA había ordenado la reposición del censo agropecuario "y a ese efecto dio órdenes para que lo formara el Sr. Ingeniero Andrés Meza Rodríguez, quien lo notificó a los interesados", estos nombraron a su representante, "lo cual también hicimos nosotros, dando por resultado que volvieran a quedar inscritos 206 individuos con derecho a parcela, en vez de 55 que señalaba el censo de primera instancia. Desde luego hacemos notar la irregularidad de este procedimiento".[134]

A pesar de esas anomalías, señalaron los pobladores, la CNA a través del ing. Gabino Fernández había intentado llevar a cabo la ejecución de la sentencia, el 17 de junio de 1932, informándoles oficialmente en ese acto el contenido de la resolución, "con lo cual, en ese mismo momento, hicimos saber nuestra inconformidad, porque consideraba a menos ejidatarios, nos daban tierras de menor calidad y las que se señalaban no alcanzaban para los ejidatarios que eramos; por eso presentamos nuestra formal protesta; nos resistimos a recibir la dotación y presentamos acto continuo nuestra demanda de amparo".[135] Al igual que en el

---

[132] Manuel Bartlett Bautista nació en Tenosique, Tabasco, el 23 de diciembre de 1894. Cursó sus estudios profesionales en la Escuela de Jurisprudencia de su estado. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1929 en donde se desempeñó como juez de distrito en Veracruz, Estado de México (1932), Puebla (1935), Distrito Federal (1936) y ministro de la SCJN de 1941-1952. También fue diputado local y gobernador de Tabasco, ver *Ministros*, pp. 61-62.

[133] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 27.

[134] AHSCJN, AR, 12470/1932, fs. 27-28.

[135] AHSCJN, AR, 12470/1932, fs. 28-29.

ejemplo presentado en el anterior capítulo, es de resaltar que los solicitantes de tierras utilizaron de manera magistral las herramientas que les daba el marco común de la legislación agraria y la ley de amparo para defender sus intereses.

La CNA señalada como autoridad responsable, manifestó que su orden se había emitido para cumplir con la sentencia del juez de distrito del D.F., que mandataba reponer el procedimiento, por lo que solicitó a los pobladores que desocuparan los terrenos que se les habían entregado en posesión definitiva sin que tuvieran "derecho a ocupar los alfalfares que quedaron comprendidos dentro del ejido"; debiendo tomar de nuevo posesión de los terrenos que se les habían entregado según la resolución del Gobernador del Estado, ya que está no fue declarada ilegal". De la misma forma se instruyó al ingeniero comisionado para que otorgara "garantías a los señores Roqueñi" para que ocuparan las tierras "que fueron entregadas a los vecinos en posesión definitiva, y las cuales deberán ser devueltas a estos señores a la mayor brevedad".[136] Dicho de otro modo, la CNA reconocía que al tener que reponer el procedimiento de dotación, había pedido a los de Teoyahualco devolvieran las tierras que habían poseído de forma provisional para regresarlas a sus antiguos propietarios.

Por su parte, el agente del Ministerio Público Federal en su pedimento manifestó que no era exacto que los quejosos reclamaran únicamente la ejecución de la resolución del 6 de marzo de 1931, "pues aunque no dicen literalmente que su amparo lo enderezan también contra tal sentencia, debe sostenerse que hay únicamente en su demanda una mala redacción", pero sí reclamaban esa resolución por no llevarse a cabo el censo agropecuario, lo que originaba la "ilegalidad de la sentencia" y no solo los defectos de su ejecución. Y agregó que, dado que la sentencia del juicio ordinario había quedado sin efecto, las autoridades responsables al intentar ejecutarla obraban "con notoria ilegalidad y violando por ende las garantías individuales cuya protección se demanda, debiendo en esa virtud concederse a los quejosos el amparo de la Justicia Federal".[137]

En los considerandos de la sentencia emitida por la Segunda Sala[138] de la Suprema Corte, hay dos que destacan. El primero fue que, del estudio de la demanda de amparo y contrario al criterio del juez de distrito, debían considerarse como actos reclamados la

[136] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 43.
[137] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 52-52v.
[138] Para este momento la Segunda Sala estaba integrada por los ministros José López Lira (presidente), Arturo Cisneros Canto, Jesús Guzmán Vaca, Luis M. Calderón y Daniel V. Valencia.

resolución presidencial y la ejecución de esta; el segundo, es la referencia a la recién reformada ley de 6 de enero de 1915, en lo relativo a los juicios de nulidad. De acuerdo con esto, el Juez Cuarto de Distrito del Distrito Federal, había desechado el juicio federal interpuesto por Rafael y Luis Roqueñi, por lo anterior, la resolución que se intentaba ejecutar era "nula de pleno derecho, es decir que no tiene valor jurídico alguno desde que entró en vigor la reforma constitucional agraria".[139] El efecto jurídico de lo anterior, era la inexistencia del acto reclamado, "no pudiendo causar perjuicios a los agraviados ni dar materia por tanto para el juicio de garantías",[140] concretándose una causal de sobreseimiento.

En cuanto a la ejecución de la sentencia dotatoria, la corte también propuso el sobreseimiento "toda vez que si la resolución pronunciada por el ciudadano Presidente de la República es constitucionalmente nula, esa misma nulidad afecta a la ejecución, que no es sino consecuencia del mandamiento, y el efecto que debe producir esta ejecutoria que sobresee por la sentencia del ciudadano Presidente de la República hará que las autoridades responsables necesariamente no lleven adelante la ejecución".[141]

Por lo expuesto, la Suprema Corte resolvió confirmar el sobreseimiento del amparo con fecha 10 de junio de 1933.

Después de todo el procedimiento dotatorio, un juicio de nulidad promovido por los propietarios y dos juicios de amparo (uno interpuesto por los propietarios y otro por los solicitantes de tierras), la aplicación de la reforma de 1931 dejaba inexistentes todos estos medios de defensa y el conflicto no concluyó aquí.

Como se ha tratado de mostrar en esta tesis, los solicitantes de tierras y sus asesores contaban con conocimientos suficientes de la legislación y los utilizaban para defender sus derechos e intereses. En este caso y ante la falta de certidumbre con respecto a las tierras solicitadas, el 11 de agosto de 1933, los miembros del CPA promovieron el recurso de queja, contra la "Comisión Nacional Agraria y el C. Presidente de la República, por defectos de ejecución, de la ejecutoria dictada por la H. Suprema Corte de Justicia" del 10 de junio de 1933, debido a que el ingeniero comisionado por la CNA para dar cumplimiento a la sentencia, se presentó al poblado y únicamente "se concretó a leernos la ejecutoria de la Corte, en sus puntos resolutivos y a decirnos, que nos dejaba con derecho a las tierras, pero

[139] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 42v.
[140] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 43.
[141] AHSCJN, AR, 12470/1932, f. 43.

que no señalaba si daba plazos o no al hacendado para levantar las cosechas de los sembradíos existentes, porque esto lo haría la Comisión Nacional Agraria, quien nos avisaría en su oportunidad"[142]

Los argumentos principales de los de Teoyahualco fueron que el sobreseimiento dictado por la corte en el amparo que habían promovido tenía "los mismos efectos que si se nos hubiera amparado, por consecuencia la ejecución, debe estimarse y así es, poniéndosenos materialmente en posesión de las tierras que fuimos dotados y cuyas 462 hectáreas, fueron reconocidas de nuestro derecho por la H. Suprema Corte de Justicia"; que el ingeniero comisionado no los había puesto en posesión de las tierras otorgadas ni comunicado al jefe de la escolta federal que resguardaba la hacienda que tenían derecho a disponer de las tierras, puesto que les impedía "entrar a los terrenos y laborar en ellos" y; que la CNA no había otorgado facultades al mencionado ingeniero para notificar al propietario que no contaba con "derecho alguno a las cosechas pendientes".[143]

De la documentación revisada no queda claro el cauce que tomo este recurso, no obstante, el CPA con fecha de 13 de octubre de 1933, acudió nuevamente a la SCJN por medio de un escrito en donde promovían otro recurso de queja, esta vez porque la CNA había otorgado al hacendado el plazo de un año "para explotar todos los alfalfares" que existían en los terrenos que fueron dotados a Santiago Teoyahualco.[144] Cinco días después presentaron un nuevo escrito en el que reiteraron su queja.

El 3 y el 4 de noviembre nuevamente el CPA se dirigió a la Suprema Corte para insistir en que no se les había "puesto en posesión material de las 462 hectáreas de terreno que comprenden la resolución presidencial" a su favor; en contra del plazo otorgado al propietario de Cartagena para levantar las cosechas y; solicitaron se le requiriera por vía telegráfica a la Comisión Nacional Agraria para que cumpliera con la ejecutoria de la Corte, pues consideraban que se trataba de un caso de urgencia, fundando su argumento en que la CNA sesionaba los "sábados por la mañana y de no resolver se nos entregue la posesión el día de hoy, sería quizá, hasta el próximo sábado, con perjuicio de las siembras, dada la época de heladas en que estamos; pues con la última helada, se ha puesto la cosecha en condiciones

[142] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 210v.
[143] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 210v.
[144] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 240v.

tales, que necesita inmediatamente nuestra labor y por no tener la posesión estamos en la imposibilidad de hacerlo".[145]

Es posible que ante la insistencia de los de Teoyahualco, el 6 de noviembre de 1933, la CNA informó al juez de distrito del Estado de México que había comisionado

> a un ingeniero para que en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 10 de octubre próximo pasado, haga entrega real y efectiva a los vecinos de Santiago Toyahualco de las tierras con que se les dotó por Resolución Presidencial de 12 de diciembre de 1929; entendido de que dicho ingeniero deberá notificar a los interesados, que quedan sin efecto los plazos concedidos, con fecha 19 de agosto y 9 de septiembre del año en curso, al propietario de la hacienda de Cartagena y anexas, a fin de que levantara las siembras de alfalfa y de otros cultivos.[146]

Es de suponer que el conflicto terminaría con esta resolución, sin embargo, dos días después, el 8 de noviembre de 1933, nuevamente el representante de los de Teoyahualco se dirigió a la Corte para manifestar que si bien la CNA había cumplido con la ejecutoria, el presidente de la república no lo había hecho puesto que el jefe de la escolta de Cartagena, que dependía directamente del ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Guerra, se negaba "a respetar la posesión efectiva, que nos corresponde sobre nuestros ejidos". Y que Luis Roqueñi, propietario de la hacienda, continuaba "estorbando la posesión definitiva que se nos tiene dada, en el sentido, de seguir metiendo mil trescientas cabezas de ganado de su propiedad, sobre las tierras ejidales, lo que nos está causando perjuicios de carácter irreparable; en virtud de que están trillando materialmente los sembradíos de alfalfa, de tal suerte que está incurriendo en la pena del artículo 95 de la Ley Agraria de 21 de marzo de 1929".[147] Dicho artículo establecía una multa de hasta $1 000 y arresto hasta de cuatro meses a los propietarios o sus empleados, cuyos actos estorbaran la posesión de los ejidatarios "después de ejecutada la resolución respectiva".[148]

Hasta este momento habían pasado ocho años desde la solicitud de tierras, dos resoluciones presidenciales, un juicio de nulidad y dos juicios de amparo con sus respectivos recursos de revisión; con todo esto, la certeza con respecto a la posesión de las tierras en disputa no quedaba resuelta. Si bien con la institucionalización de la reforma agraria se había

[145] AHCCJT, AI, 213/1932, fs. 276, 282.
[146] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 286.
[147] AHCCJT, AI, 213/1932, f. 289.
[148] FABILA, *Cinco siglos*, p. 448

intentado darle un cauce legal a la conflictividad agraria, los tribunales se habían convertido en auténticos campos de lucha por la propiedad y posesión de la tierra.

Unos meses antes de que se resolviera el amparo expuesto, los pobladores de Teoyahualco, intentaron por medio de otro amparo la defensa de las tierras que poseían. Posiblemente para alargar el procedimiento o bien, por considerar que un juez distinto les daría la razón, el Comité Particular Administrativo Agrario presentó demanda de amparo ante el Juez Quinto de Distrito del Distrito Federal, el 28 de abril de 1933, contra actos del secretario de Agricultura y Fomento, del jefe del departamento legal de esa secretaría, del secretario de Guerra y Marina, del presidente de la Comisión Nacional Agraria, del jefe del sector militar en Cuautitlán, del jefe del destacamento en la Hacienda de Cartagena, del presidente municipal de Tultitlán y del comisario municipal, consistentes en ordenar "que las fuerzas públicas de que disponen, les impidan llevar a cabo las labores preparativas de la tierra, motivo de este juicio de garantías"; por tratar de "hacerlos salir de sus ejidos" y; por "la privación que les imponen del usufructo de sus parcelas".[149]

No obstante, y como se ha comentado, de acuerdo con la ley de amparo, en este tipo de casos el juez que admitía la demanda se declaraba incompetente para conocer del asunto, informaba a la Suprema Corte y al juez que estimaba competente para su conocimiento y este terminaba conociendo del juicio, por lo que tocó al juez de distrito del Estado de México resolver el amparo, quien una vez recibidos los autos, fijó como fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia las once horas del 11 de septiembre de 1933.

Al rendir su informe justificado el secretario de agricultura, el jefe del departamento legal y el presidente de la CNA, negaron la existencia del acto; mientras que el presidente municipal de Tultitlán y el comisario de Teoyahualco no rindieron informe.

En el caso del jefe del sector militar en Cuautitlán manifestó que había recibido órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina para que enviara "a la Hacienda de Cartagena de este Distrito, un Destacamento a fin de dar amplias garantías a los propietarios de la misma he impedir que sea invadida por los Pueblos comarcanos como ya fue en el mes de diciembre de mil novecientos treinta y uno"; que era inexacto que las fuerzas a sus órdenes hubieran "desalojado con violencia ni en ninguna otra forma a ningun Pueblo que ocupara terrenos de la Hacienda puesto que, desde que recibi esta Plaza, nunca ha estado el Pueblo de Santiago

[149] AHSCJN, AR, 3449/1933, f. 10.

Teyahualco ocupando ninguna superficie de tierra dentro de los linderos de la Hacienda de Cartagena que me son bien conocidos" y; que tampoco era cierto que los quejosos hicieran "uso del derecho de posesión que dicen tener y hayan ejecutado trabajo alguno de preparación de la tierra para efectuar alguna siembra, pues repito que no es verdad que hayan emprendido trabajo agricola de ningun genero ni hayan ocupado ni esten ocupando porción alguna de la Hacienda".[150]

En cuanto a lo expresado por el jefe del destacamento con residencia en la Hacienda de Cartagena, se adhirió a lo manifestado por el jefe del sector militar y añadió que desde hace unos meses que se desempeñaba como jefe, la situación no había variado y eran los propietarios de la hacienda los que efectuaban "trabajos en toda ella, sin que hasta la fecha ni por unas cuantas horas siquiera hayan efectuado trabajo alguno los vecinos de ningun pueblo, ni haya recibido aviso de ninguna autoridad que diga nada sobre si los vecinos del Pueblo de Santiago deben entrar o no a la Hacienda", ciñéndose su labor a dar garantías a los propietarios y reprimir "cualquier desorden o impedir una invasión que no este fundada y debidamente comprobada" sin haber tenido necesidad "de recurrir a ningun medio represivo pues no ha habido necesidad de ello".[151]

Finalmente, el secretario de Guerra y Marina apuntó que su actuar solo se había limitado a cumplimentar el acuerdo presidencial del 5 de diciembre el cual mandataba que dicha secretaria debería "continuar prestando todas las garantías que sean necesarias al señor Luis Roqueñi a efecto de que al volver al goce de la posesión de los terrenos que ahora han abandonado los ejidatarios de Tultitlán, pueda con entera libertad recoger las cosechas que en la actualidad tiene sembradas".[152]

Llegado el día de la audiencia se presentaron el tercero perjudicado, Luis Roqueñi y el agente del MPF.

Dentro de sus alegatos, el propietario de Cartagena destacó que los quejosos no contaban con la posesión de la tierra como lo afirmaban y prueba de ello era que en su demanda afirmaban que a partir de la ejecutoria de la corte del 6 de abril "se sintieron con derecho" para hacer uso de las tierras "con lo cual confiesan explícitamente que antes de esa ejecutoria" no hacían uso de ellas "ni del derecho de poseerlas puesto que es con fundamento

[150] AHCCJT, AI, 375/33, f. 40.
[151] AHCCJT, AI, 375/33, f. 41.
[152] AHCCJT, AI, 375/33, f. 44.

en la repetida ejecutoria que empezaron a hacer uso de sus terrenos". Por esas consideraciones solicitó al juez que negara el amparo y se impusiera "a los quejosos la sanción a que se han hecho acreedores por su temeridad al interponer esta demanda de amparo".[153] En su pedimento, el agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del juicio en virtud de que las autoridades responsables habían negado el acto reclamado.

En su sentencia, el juez de distrito se refirió a la negativa del acto reclamado por parte de las autoridades responsables y a que los quejosos no habían aportado ninguna prueba de su existencia. Por lo que corresponde a las acciones del secretario de Guerra y Marina, del jefe del sector militar en Cuautitlán y del jefe del destacamento de la Hacienda de Cartagena estimó que el primero se había "limitado a cumplimentar el acuerdo presidencial" por el cual se instruía a la secretaría que continuara "prestando todas las garantías" que fueran necesarias al propietario de Cartagena y de los segundos que no trataban de sacar a los quejosos de las tierras, sino únicamente "impedir que la hacienda Cartagena sea invadida por los pueblos cercanos".[154]

Tomando en cuenta estos elementos el juez de distrito en comisión, Manuel Bartlett, decretó el sobreseimiento del juicio por causa de improcedencia.[155]

Los de Teoyahualco no dudaron en promover el recurso de revisión ante la Suprema Corte y con fecha 21 de septiembre de 1933, Ezequiel Flores, representante del CPA interpuso el recurso, señalando que la sentencia del de distrito les causaba un agravió ya que el juez debió tomar en cuenta lo manifestado por la Secretaría de Guerra en virtud de lo cual el acto reclamado debió tenerse como cierto.[156] Además de que no se había resuelto el amparo sin entrar a la discusión del fondo del asunto.

En su resolución del 27 de agosto de 1935, la Corte confirmó el sobreseimiento por improcedencia, debido a que el acto reclamado tuvo su origen en un acuerdo presidencial y los actos ejecutados por las responsables eran "consecuencia inmediata y directa del Acuerdo Presidencial que no fue reclamado", por lo que debía considerarse "consentido el acto

[153] AHCCJT, AI, 375/33, f. 72v.
[154] AHCCJT, AI, 375/33, fs. 79, 80.
[155] AHCCJT, AI, 375/33, f. 82.
[156] AHCCJT, AI, 375/33, f. 97.

original que motivó los actos subsecuentes reclamados, de las distintas autoridades responsables".[157]

Habían transcurrido 10 años desde la solicitud de dotación, dos resoluciones presidenciales, un juicio de nulidad de resolución presidencial y tres juicios de amparo para que los solicitantes pudieran disfrutar de su ejido. La reconstrucción de estos procedimientos deja en evidencia la manera en que los cambios legislativos permearon en la práctica cotidiana de los tribunales federales y en la implementación de la reforma agraria, particularmente los efectos inmediatos de la prohibición del amparo en 1931, que si bien, en su mayoría fueron resentidos por los propietarios afectados, también influyeron en los procedimientos dotatorios, como se vio en el asunto de Teoyahualco, beneficiándolos con las tierras solicitadas.

3.6 La conformación del ejido de San Bartolo Tenayuca

Como se ha comentado, en este periodo los juicios de amparo que se promovieron en la entidad tuvieron como origen diversas acciones agrarias. Ya no será solamente por la dotación de tierras, pues una vez constituidos los ejidos surgieron los procedimientos de ampliación, división o cambio en su localización; así como conflictos en su régimen interior, por ejemplo, el despojo de parcelas a ejidatarios y; la expropiación por causa de utilidad pública para la construcción de alguna obra gubernamental.

En este caso, se pone atención en el cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca, del municipio de Tlalnepantla (ver mapa 9 en donde está marcado con el número 42), debido a que la ejecución de la resolución presidencial dio paso a un amparo promovido por los afectados y una vez que les fue concedido, la CNA se vio obligada a modificar la ubicación de los terrenos concedidos.

Los propietarios expropiados recurrieron a la justicia federal resolviéndose los juicios casi una década después de decretada la dotación y 15 años después de la solicitud de tierras, lo cual nos da una idea de la serie de dificultades que seguía presentando la puesta en marcha de la reforma agraria, ya con la prohibición de 1931 de por medio.

El vocablo Tlalnepantla significa "la tierra de en medio", ya que se ubicó "en el espacio que mediaba entre los otomíes, que vivían en Teocalhueyacan, una antigua población

[157] AHSCJN, AR, 3449/1933, f. 11.

enclavada en un cerro cercano, y los mexicanos, que ocupaban el antiguo centro ceremonial de Tenayuca". Siguiendo a la historiadora Rebeca López, los mexicanos de Tenayuca provenían de un grupo de chichimecas comandados por Xólotl, "quien llegó a la cuenca de México hacia el siglo XII". En este sitio se estableció un linaje encabezado por Tenacacaltzin, que "fue marginado del poder durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin". La posición geográfica que tenía Tenayuca "era estratégica para Tenochtitlán, ya que unía a este lugar y a Tlatelolco, con una calzada que atravesaba el lago, para conducir a los mexicas hacia tierra firme. Esta calzada, con el tiempo recibió el nombre de Vallejo".[158]

Alrededor de 1550, Tlalnepantla surgió como una congregación religiosa, formada por frailes franciscanos, cuyo propósito principal fue reunir a ambos poblados con fines evangelizadores, pero más allá de la cristianización, "la fundación de Tlalnepantla constituyó el cambio político-territorial más significativo" de la región, "pues respondió de mejor manera a la idea española de lugar central, tratando de pasar por alto las diferencias históricas y culturales de otomíes y mexicanos".[159] Sin embargo, al parecer el proyecto fracasó, pues a fines del siglo XVII cada uno de los pueblos obtuvo su propio gobierno con la instauración de sus respectivos cabildos.[160]

La lucha por la tierra en la región de estudio tiene como antecedente el establecimiento de los españoles desde el siglo XVI, "quienes amparados en mercedes de tierra, se fueron adueñando de terrenos aledaños a sus propiedades, lo que afectó directamente a las comunidades." Dicho proceso marcó la formación de las haciendas que sustituyeron "a las comunidades indígenas como productores de alimentos básicos", que demandaba la ciudad de México y con su expansión, "los pueblos de Tlalnepantla" quedaron "rodeados de las haciendas de españoles".[161] Lo que, de una u otra manera, tuvo consecuencias en la reforma agraria del siglo XX.

El 30 de abril de 1918, vecinos del pueblo de San Bartolo Tenayuca solicitaron dotación de tierras al entonces gobernador Agustín Millán, argumentando que su pueblo

---

[158] Del mismo modo que el municipio de Tultepec, en la época prehispánica la región que hoy ocupa el de Tlalnepantla se encontraba habitada por pueblos otomíes y chichimecas nahuatizados, conocidos como mexicanos, LÓPEZ, "Con poder", pp. 19-20.

[159] LÓPEZ, *Otomíes y mexicanos*, p. 89. Agradezco a la doctora Rebeca López Mora por facilitarme un ejemplar de su obra.

[160] Para profundizar en el proceso de separación de ambos poblados véase LÓPEZ, *Otomíes y mexicanos*, pp. 231-320.

[161] LÓPEZ, *Otomíes y mexicanos*, pp. 127, 196-198.

había perdido tierras porque sus "antepasados las vendieron con terratenientes poderosos y así fueron absorvidas todas las tierras de las comunas que por ejidos les habían dado a los pueblos de la República". Agregaron que contaban con poco más de 26 hectáreas cuya producción no era suficiente para los 335 habitantes del lugar.[162]

Como es de notar en este caso, los peticionarios hicieron referencia a la trayectoria histórica que habían tenido las tierras del poblado y aunque no hablan explícitamente de despojo, bajo el argumento que presentaron pudieron haber solicitado restitución de sus tierras, pero optaron por el trámite de dotación que en el papel era más sencillo.

Es importante tomar en cuenta que el trámite inició en el tiempo en que no existía ley reglamentaria del artículo 27, por lo que la primera parte del procedimiento se desarrolló con base en las circulares expedidas por la CNA hasta ese momento. Por ejemplo, para recabar los datos que debían integrar los expedientes de dotación, las autoridades agrarias se ceñían a la circular 15 expedida el 23 de enero de 1917, la que estableció como requisitos principales: el censo de la población, censo agrario, clasificación de los terrenos con que se dotaría a los pueblos, extensión del lote que debería corresponde a cada jefe de familia, clima del lugar, régimen de lluvias, aspecto físico del terreno y tipo de vegetación, el tipo de cultivo a que se pudieran dedicar los terrenos, la distancia a los pueblos inmediatos, propiedades que pudieran resultar afectadas por la dotación y fecha de fundación del pueblo.[163]

Meses después, el 31 de enero de 1919, la CNA emitió la circular número 34 por la cual solicitaba a las comisiones locales recabaran una constancia en la que los vecinos dotados o próximos a serlo, manifestaran su conformidad de pagar al gobierno "el valor de los terrenos" que recibirían "de acuerdo con la indemnización que la Nación tenga que pagar a los propietarios que sea necesario expresar".[164] El 11 de mayo de 1919 los de Tenayuca expresaron estar conformes en pagar las tierras que les otorgaran, siguiendo al pie de la letra el cumplimiento de los requisitos solicitados. Este requisito fue suprimido en marzo de 1921, por medio de la circular número 44 de la CNA, que estableció que ya no sería necesario que en los expedientes de dotación se solicitara la constancia en la que los solicitantes manifestaran su conformidad de pagar las tierras dotadas.[165]

---

[162] AGA, dotación, 23/2236, legajo 1, f. 45.
[163] FABILA, *Cinco siglos*, pp. 255-256.
[164] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 288.
[165] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 308.

Enterados los dueños de las fincas aledañas de la petición de San Bartolo Tenayuca, se dirigieron a las autoridades agrarias para hacer valer sus derechos. Los propietarios de la Hacienda de San Javier, por medio de la sociedad fraccionadora que habían contratado, expresaron su oposición a la dotación argumentando que el pueblo no necesitaba tierras pues el número de habitantes era de únicamente 167 personas pertenecientes a 28 familias, de estas, 13 no eran originarias, de las 15 restantes, diez se dedicaban a la agricultura y contaban con tierras y una familia más se dedicaba a una actividad distinta, así, sólo carecían "de tierras en propiedad particular, cuatro familias para quienes las tierras comunales están en demasía".[166]

Su segunda defensa la basaron en que el artículo 27 constitucional establecía el respeto a la pequeña propiedad, además de que siguiendo lo establecido en la constitución estatal, habían constituido la Sociedad Fraccionadora de la Hacienda de San Javier para fragmentar y vender en porciones su finca cuya extensión era de 2 371 hectáreas. Señalaron que la pequeña propiedad era la mejor solución del problema agrario

> por encima de la 'dotación' y ésta pequeña propiedad no se puede definir en cincuenta hectáreas con una ley general, pues el criterio que la informa varía según la región y el ramo de Industria Agrícola, y es propiamente materia de legislaciones particulares. El Estado de México, ha establecido en sus leyes fiscales el criterio que debe regir, respecto a pequeña y gran propiedad y no se puede pasar sobre estas leyes sin violar la soberanía del Estado y la justicia más elemental, pues nadie mejor que él, ni con más pleno conocimiento, puede establecer en su territorio el criterio que debe predominar.[167]

Es de destacar que a pesar de que sus argumentos son muy tempranos en la reforma agraria, reflejan lo que se convirtió en una política del gobierno federal, la protección de la pequeña propiedad y en algunos de los principales alegatos en los procedimientos administrativos de dotación e incluso en los juicios de amparo.

El actuar de los propietarios no escapó a los vecinos de Tenayuca y el 14 de julio de 1919, se dirigieron a la CLA para denunciar que los dueños de San Javier habían vendido a los señores Joaquín Rosales, los hermanos José Luis y Federico Coppe y Salvador García Roldan las tierras que ellos solicitaban, "probablemente para esquivar las resoluciones" que pudieran beneficiarles.[168] Es necesario insistir en este punto, pues a pesar de que se trata de

[166] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 63.
[167] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 65.
[168] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 67.

los primeros años de la reforma agraria, ya se denunciaban la serie de maniobras de los hacendados para burlar el reparto de tierras.

Transcurrieron dos años y el asunto no avanzaba, por lo que en marzo de 1920 los pobladores de Tenayuca se dirigieron a la CLA para pedir informes del estado de su expediente. La respuesta de las autoridades agrarias fue que no existían ingenieros disponibles para que llevaran a cabo los datos requeridos por la legislación vigente "pues actualmente se encuentran todos en comisiones de igual índole, pero tan pronto como se desocupe alguno daré a Ud. aviso así como de la fecha en que quede comisionado".[169]

Para junio de 1920 el ingeniero comisionado presentó el informe correspondiente de donde se obtuvieron los siguientes datos: San Bartolo Tenayuca tenía la categoría política de pueblo; contaba con 315 habitantes de los cuales 88 eran jefes de familia; que poseían poco más de 36 hectáreas de tierras de mediana calidad; que las posibles propiedades afectadas eran el rancho de San Javier del señor Antonio H. Rosales, el rancho de San Felipe perteneciente a José y Federico Coppe, el rancho el Tenayo de Salvador García Roldán y el rancho La Cañada, propiedad de Joaquín Rosales Gómez; que dichos ranchos eran fracciones de la Hacienda de San Javier, que había pertenecido a María Luz y Ángela Bringas y Robles, propiedad que fue fraccionada a fines de 1918, es decir, posterior a la solicitud de dotación; que el clima de la zona era templado, con lluvias entre junio y septiembre; que los principales cultivos de la zona eran alfalfa, trigo, cebada y maíz por parte de las haciendas, mientras que los pueblos sembraban maíz y magueyes y; que el pueblo solicitante se encontraba ubicado en los límites del Estado de México y el Distrito Federal.[170]

Los propietarios de las fracciones también manifestaron su inconformidad con el reparto. El 18 de octubre de 1921, Luis Coppe declaró que desde ese momento hacía "las protestas para interponer el juicio de amparo, a la dotación que se pretende hacer afectiva en tierras de mi propiedad, colindantes con el pueblo de San Bartolo", puesto que solo contaba con 53 hectáreas, apoyándose en el artículo 27 constitucional que protegía la pequeña propiedad.[171] Sus hermanos, José y Federico, se manifestaron en el mismo sentido. Por este argumento de Luis Coppe nos damos una idea de que el recurrir al amparo desde los primeros

[169] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 69, 72.
[170] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, fs. 76-82.
[171] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 104.

años de la reforma agraria era un mecanismo al que acudieron los propietarios, ante la afectación de sus haciendas.

En la misma fecha, Antonio Rosales, propietario del rancho San Javier, manifestó que contaba con poco más de 93 hectáreas que no colindaban con el pueblo de Tenayuca por lo que era improcedente su solicitud, puntualizando que era una pequeña propiedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la constitución estatal.[172] Es necesario hacer notar que para este momento los posibles afectados fundamentan sus derechos con base en la legislación estatal.

Un año después, en octubre de 1922, se llevó a cabo un nuevo padrón en donde se registraron 109 jefes de familia, la mayoría dedicados a las labores del campo como jornaleros o agricultores. En este caso llama la atención que Francisco Rosales y los hermanos Federico, José y Luis Coppe presentaron argumentos similares con respecto al censo. Todos los propietarios de las fracciones de la ex Hacienda de San Javier se opusieron al censo pues según su dicho, 332 de los registrados no tenían su residencia en el pueblo o vivían "por accidente" en Tenayuca, de los 76 restantes, había 13 agricultores con tierras, "un empleado, cuatro comerciantes, seis viudas", cuatro obreros y una señora que poseía un capital excedente de mil pesos, quedando únicamente 47 jornaleros, lo que demostraba que el pueblo no era agricultor. Particularmente, Francisco Rosales describió de la siguiente forma a los pobladores:

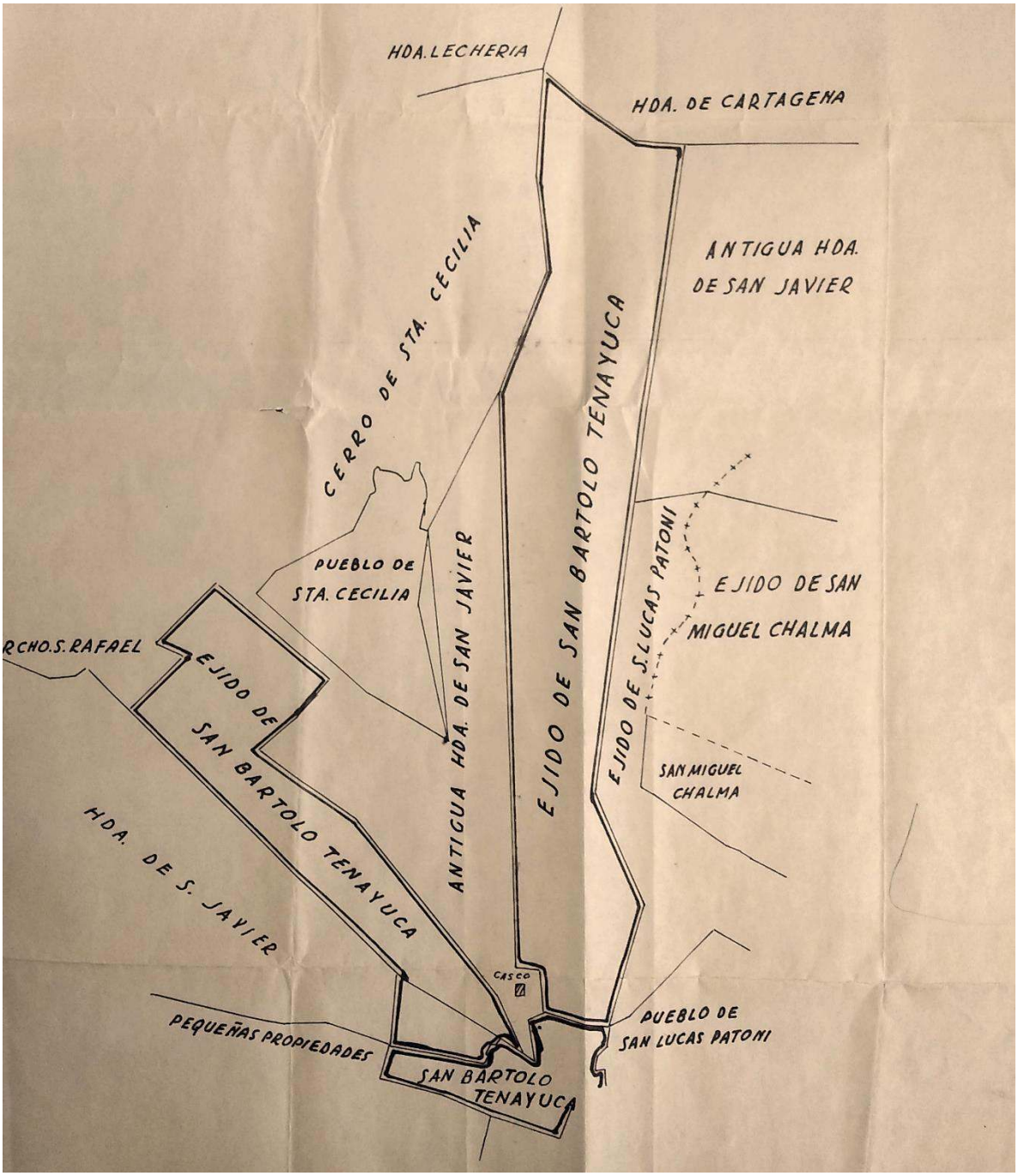
> la casi totalidad de los jornaleros se dedican a extraer arena para las obras de construcción en la capital de la República a extraer tepetate y piedra de las canteras que existen próximas al pueblo, a labrar loza para pavimentación y otros trabajos por el estilo que les producen mayor utilidad que el jornal de campo que es de un peso diario en toda la región y trabajando por su cuenta sacan un promedio de un peso cincuenta centavos a dos pesos diarios, lo que lógica y naturalmente hacen que vean con desprecio las labores del campo.[173]

Dos meses después, Salvador García Roldán, propietario del rancho El Tenayo, enfatizó que sus terrenos no eran laborables "sino cerros pedregosos y tepetates en su totalidad" y que en la zona tenía una "cantera en explotación" con vía de ferrocarril dentro

[172] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 108.
[173] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, fs. 185-186; 195-196, 198-199, 201-202.

de ella, considerando esa parte como "un negocio industrial".[174] Argumento similar al presentado por el propietario de San José de los Leones, como se vio en el capítulo segundo.

Mapa 3. Ubicación del ejido San Bartolo Tenayuca y la hacienda San Javier, 1924.



Fuente: AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 7, s.f.

[174] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 234.

Haciendo eco de estos argumentos, el 29 de mayo de 1923, el gobernador del Estado de México, Abundio Gómez, emitió su resolución negando la dotación al pueblo de Tenayuca "porque todos los predios" que lo rodeaban eran pequeñas propiedades.[175] Hay que recordar que para este periodo los Gómez, Abundio y Filiberto, controlaban la política de la entidad y en materia agraria habían hecho alianzas con algunos de los grandes hacendados, incluso condonándoles impuestos.

Remitido el expediente a la CNA se concedió el plazo de 30 días a la propietaria Luz Bringas y Robles para que manifestara lo que estimara conveniente. Dentro de sus alegatos señaló que de acuerdo con el artículo 203 de la constitución estatal, que consideraba como latifundio más de 700 hectáreas, procedió al fraccionamiento de su hacienda por medio de una sociedad. Sin embargo, la venta de las fracciones se había realizado con posterioridad a la solicitud de dotación realizada por San Bartolo Tenayuca, en consecuencia, se consideraba nula, motivo por el cual la resolución presidencial del presidente Álvaro Obregón, fechada el 28 de agosto de 1924, revocó la resolución del gobernador, desconoció el fraccionamiento practicado y concedió a San Bartolo Tenayuca una dotación de 450 hectáreas, que se tomarían de la hacienda de San Javier.[176] Inconformes con esta resolución presidencial, los dueños de las tierras a expropiar promovieron amparos que en un caso les fue concedido y cuya consecuencia fue el cambio de localización del ejido, juicios que a continuación se reconstruyen.

3.6.1. El cambio en la localización del ejido de Tenayuca y el juicio de amparo

Inconformes con la dotación definitiva a Tenayuca, Salvador García Roldán, Luis Coppe y los hermanos Rosales acudieron a la justicia federal, cada uno por su cuenta, otorgándoseles el amparo. En los dos primeros juicios la Comisión Nacional Agraria promovió los respectivos recursos de revisión y la Suprema Corte decretó el sobreseimiento por improcedentes en 1929.[177] En el caso del tercer amparo, su resolución se llevó a cabo unos meses después y una de sus consecuencias fue el cambio en la localización de las tierras dotadas, lo que provocó que los afectados con esta modificación promovieran juicios de

[175] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 1, f. 267.
[176] AHyFREM, CAM, Vol. 181, exp. 3, fs. 26-31.
[177] AHSCJN, AR, 1855/1925 y AHSCJN, AR, 4219/1925.

garantías que se analizan más adelante. Por lo extenso de este juicio únicamente se presenta un esbozo de sus principales etapas.

Por escrito del 10 de septiembre de 1924, los hermanos Francisco, Joaquín y Antonio Rosales, promovieron juicio de amparo ante el juez primero numerario de distrito en el Distrito Federal, contra actos del presidente de la república, de la CNA y del CPE de San Bartolo Tenayuca. En el caso de las "dos primeras autoridades", por haber otorgado la dotación al pueblo de Tenayuca "a costa de nuestras pequeñas propiedades" (ver mapa 4) y respecto de la última por "pretender localizar y hacer efectiva dicha dotación en esas mismas pequeñas propiedades";[178] violando en su contra los artículos 14, 16 y 27 constitucionales.

En su relación de hechos hicieron referencia a los artículos 203, 204 y 205 de la constitucional estatal, relativos al fraccionamiento de los latifundios; al proceso llevado a cabo por la propietaria de la hacienda para fraccionar su finca; a la compra realizada por los quejosos de tres fracciones de esta y; al trámite de dotación que dio como resultado la resolución presidencial recurrida. Además de mencionar que se habían dejado de aplicar los artículos 14 y 28 del *Reglamento Agrario*. El primero de ellos que establecía las causas de excepción tratándose de dotaciones y en su caso sus propiedades eran menores de 150 hectáreas y de diversas calidades de tierras y en el caso del segundo, argumentaron que no se les había notificado el plazo de treinta días para presentar sus respectivos alegatos.

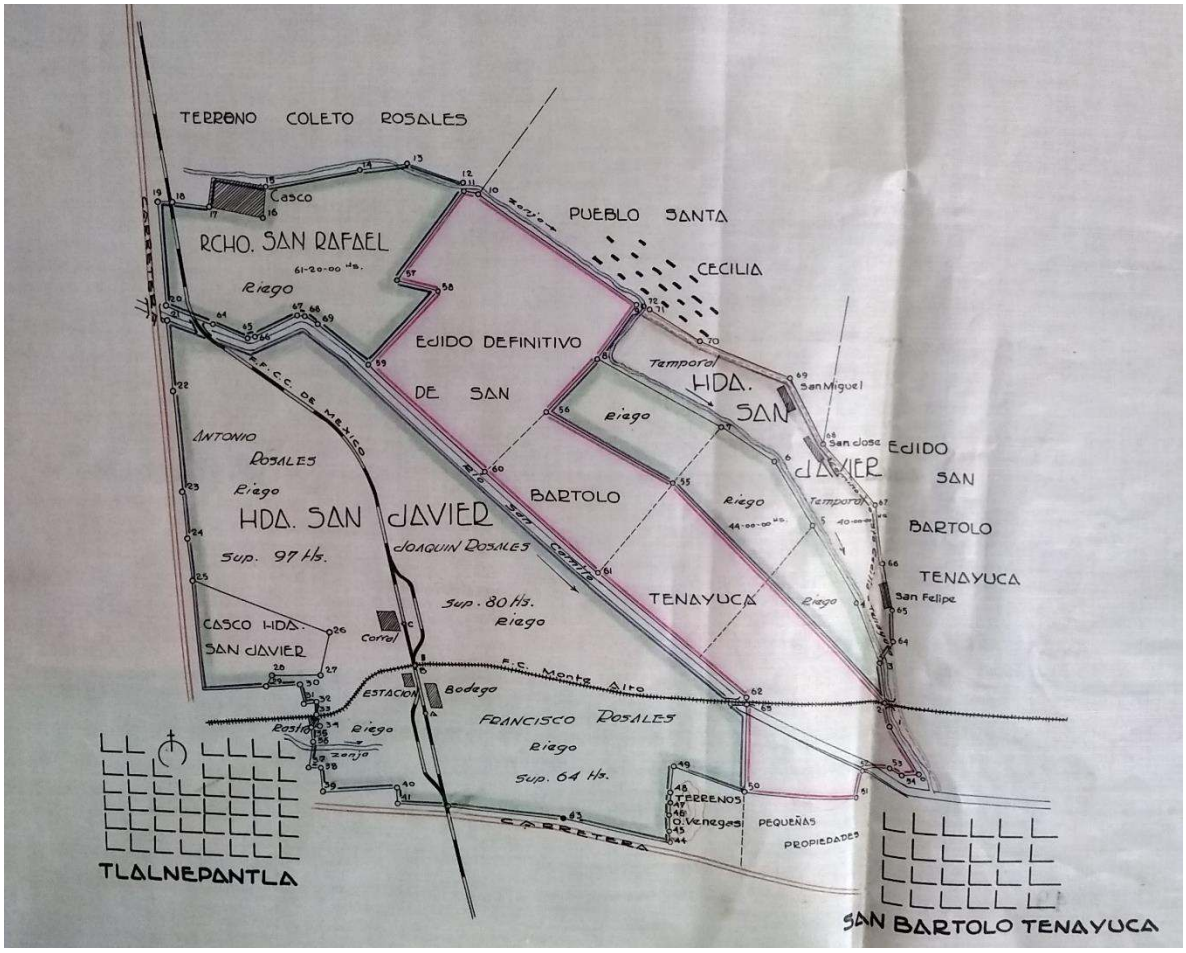
Por lo que toca al artículo 27 señalaron que "uno de los principales anhelos de nuestra Carta Magna es el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, es decir, que considera de interés público ese fraccionamiento pues los legisladores constitucionales esperaban de él grandes beneficios para la Nación". Y enfatizaron que el fraccionamiento de la Hacienda San Javier se había realizado antes de que se notificara al propietario la solicitud de ejidos del pueblo de Tenayuca por lo que tenía que respetarse; pero aun cuando no fuere de esa forma, el propio artículo 27 establecía el respeto a la pequeña propiedad por considerarla de utilidad pública.[179]

---

[178] AHCCJT, AI, 194/1925, f. 1. En la documentación que conforma este expediente se hace referencia de manera indistinta a los juicios 205/1924 y 194/1925. Aunque no queda claro si se trata de dos juicios distintos, es probable que el primer número corresponda al registro obtenido ante el juzgado del Distrito Federal y una vez que fue turnado al del Estado de México, se le inscribiera con el segundo número. Dado que en la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca se encontró con el segundo, se retoma este registro.

[179] AHCCJT, AI, 194/1925, fs. 3v, 4v.

Mapa 4. Ubicación de las pequeñas propiedades de los hermanos Rosales y del ejido de Tenayuca.



Fuente: AGA, ampliación, exp. 25/2236, f. 49.

Presentados los informes justificados del presidente de la república y de la CNA, expresaron que cuando se hizo el fraccionamiento de la Hacienda de San Javier, la sociedad creada para realizarlo "ya tenía conocimiento de la solicitud de dotación", por lo que se buscaba "eludir el cumplimiento de la Ley Agraria y la parte relativa del artículo 27 Constitucional" y en consecuencia eran nulas las ventas. Lo que justificaba que las autoridades agrarias desconocieran "la legalidad del fraccionamiento" y consideraran la superficie total de la hacienda "tal y como se encontraba al iniciarse el expediente de dotación".[180] Solicitando se negara el amparo a los solicitantes por no existir las violaciones invocadas.

[180] AHCCJT, AI, 194/1925, fs. 20-21.

La audiencia constitucional se llevaría a cabo el 28 de enero de 1925, no obstante, la CNA solicitó se difiriera ya que "por el inmenso recargo de quehacer", se había "dado preferencia, a las alegaciones que tienen que presentarse en las audiencias inmediatas" y no había sido posible preparar las pruebas que ofrecería.[181] El juez fijó como nueva fecha las 11 horas del 24 de febrero de 1925.

De las fuentes revisadas no quedan claros los motivos ni las veces que se difirió la audiencia, puesto que la siguiente diligencia se llevó a cabo a las 10 horas del 29 de agosto de 1925, contando con la asistencia de Francisco Rosales, representante de los quejosos, el agente del MPF, el presidente del CPE y el representante de los terceros perjudicados. En uso de la voz, el quejoso manifestó que en el expediente hacían falta los documentos que había anexado a su demanda y como eran parte de las pruebas que ofrecería, pidió al juez se difiriera la audiencia mientras se localizaban los documentos faltantes. El juzgador dio por aceptada la solicitud y fijó como nueva fecha las once horas del 29 de septiembre de 1925.

Llegado el día para reanudar la audiencia de ley, compareció el agente del MPF, el representante del CPE de San Bartolo Tenayuca y Francisco Rosales como representante de los quejosos. La parte quejosa ofreció sus pruebas consistentes en los testimonios notariales relativos a las adquisiciones de las fracciones de la Hacienda San Javier y la resolución dotatoria al pueblo de Santa María Ticomán. Y precisó que el punto sobre el que giraba la procedencia del amparo se refería "a la legitimidad del fraccionamiento de la Hacienda de San Javier, pues si dicho fraccionamiento es legítimo, las pequeñas propiedades de los quejosos, serán inafectables" ya que se encontraban comprendidas dentro de las excepciones establecidas en el artículo 14 del *Reglamento Agrario*. Además de argumentar que el fraccionamiento había sido hecho de buena fe, "pues de el se dio conocimiento al Gobierno del Estado, quien contestó de enterado, en oficio de fecha 17 de diciembre de 1917" y que de acuerdo con la jurisprudencia emitida por la corte en el caso de la dotación al pueblo de Ticomán, "todos los fraccionamientos hechos con anterioridad a la fecha en que se haya notificado a los propietarios, la solicitud del Pueblo, deben considerarse como buenos".[182] Es claro que el quid de este litigio consistía en la legalidad del fraccionamiento de la Hacienda San Javier.

[181] AHCCJT, AI, 194/1925, f. 24.
[182] AHCCJT, AI, 194/1925, fs. 93-93v.

En sus alegatos, el CPE pidió al juez que declarara como legal la resolución presidencial del 28 de agosto de 1924 y la nulidad del fraccionamiento de la hacienda multicitada, "puesto que es palpable el objeto perseguido o sea el de eludir el cumplimiento de la Ley Agraria"; además de que la solicitud de los pobladores era de fecha anterior a las "supuestas ventas". Por su parte, el agente del Ministerio Público Federal en su pedimento manifestó que estaba de acuerdo "con los argumentos de los quejosos, en el sentido de que mucho antes de que los vecinos de San Bartolo Tenayuca elevaran su ocurso en forma legal solicitando ejidos", la propietaria de San Javier "había procedido a la división de su finca, y en esa virtud no puede creerse que lo hizo con el propósito de perjudicar a San Bartolo Tenayuca".[183] Por lo que pidió se concediera el amparo a los quejosos.

En su sentencia fechada el 29 de septiembre de 1925, el juez retomó algunos de los criterios jurisprudenciales emitidos en la materia para referirse al fraccionamiento en cuestión: "Los fraccionamientos que hagan los latifundistas, antes de tener noticia de la petición de tierras que hayan hecho los pueblos colindantes, no puede alegarse que tengan el propósito de eludir el cumplimiento de la Ley Agraria, pues tal fraccionamiento tiende a realizar uno de los muchos fines que persigue el artículo 27 constitucional, que es el desarrollo de la pequeña propiedad". Y en el caso de la Hacienda de San Javier, se realizó "mucho antes que los vecinos de San Bartolo Tenayuca, solicitaran tierras". Por lo que se comprobaba "de manera plena, que se priva a los quejosos de sus propiedades o posesiones, no obstante que, están amparados por títulos, que conforme a la citada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede, siquiera alegarse, se otorgáron con el propósito de eludir el cumplimiento de la Ley Agraria".[184] Bajo este razonamiento se concedió a la parte quejosa la protección de la justicia federal contra los actos reclamados.

Inconformes con esta resolución, el presidente de la república y la CNA promovieron el recurso de revisión. En su escrito, la Nacional Agraria manifestó como agravio principal que el fraccionamiento de la Hacienda San Javier se había llevado a cabo con el fin de eludir el cumplimiento de las leyes agrarias.[185] Mientras que en su pedimento, fechado el 18 de enero de 1926, el agente del Ministerio Público Federal, contrario a lo manifestado por su similar en el juzgado de distrito, coincidió con lo manifestado por la CNA, en el sentido de

[183] AHCCJT, AI, 194/1925, fs. 160, 161v.
[184] AHCCJT, AI, 194/1925, fs. 169v-170.
[185] AHSCJN, AR, 3496/1924, f. 3.

que el fraccionamiento se había llevado a cabo con el propósito de eludir la normatividad agraria, de modo que solicitó a la Corte se revocara la sentencia del de distrito y se negara el amparo.

De la documentación consultada no queda clara la razón de la demora en la resolución del asunto, quizá el cúmulo de asuntos a resolver por parte de la Suprema Corte, pero seis años después de iniciado, el 23 de enero de 1930, Marte R. Gómez,[186] aquel ingeniero participe de las Comisiones Agrarias en Morelos y que había calificado a la Suprema Corte como un baluarte de los hacendados, para ese momento secretario de Agricultura y Fomento y presidente de la CNA, envió un escrito a la Corte solicitando se declara el asunto de urgente resolución.[187]

Para el 3 de abril de ese mismo año, la CNA se desistió de la revisión[188] argumentando que después de realizar un estudio del asunto, habían llegado al "perfecto convencimiento", de que no tenía razón de ser el recurso interpuesto. En el escrito presentado, mencionó que el poblado se encontraba conforme con la resolución del juez de distrito "aun cuando ello no conste de una manera oficial, pero que sí se ha demostrado con los actos de los mismos favorecidos, encaminados a llegar a un acuerdo favorable a los intereses de ambas partes, con los propietarios de las fincas afectadas". Al igual que en el asunto de Teoyahualco visto en el apartado anterior, nuevamente se buscaba la negociación para superar las diferencias entre los solicitantes de tierras y los hacendados.

Y añadió la Comisión Nacional Agraria que el pueblo había demostrado su conformidad con que se hiciera una nueva localización de los tierras concedidas; además de señalar la urgencia de "dejar definitivamente resuelto este asunto para que los favorecidos puedan gozar, desde luego, de los beneficios que la Resolución Presidencial les concede y consecuentemente debe procurarse, principalmente por las Autoridades Agrarias, quitar todas las dificultades que actualmente impidan al pueblo entrar al ejercicio de ese derecho". La Suprema Corte resolvió teniendo por desistido el recurso.

---

[186] Nacido en 1896 en Tamaulipas, se tituló como ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de la que después fue director. En 1915 se unió a la revolución con el Ejército Libertador del Sur. En la política se desempeñó como diputado local (1927), diputado federal (1928-1930), senador (1930-1932) y gobernador por su estado (1937-1941). Durante el sexenio de Cárdenas fue designado por un par de años ministro plenipotenciario en Francia y Austria. Falleció en la ciudad de México en 1973, CAMP, *Biografías de políticos*, p. 230.

[187] AHSCJN, AR, 3496/1924, f. 20.

[188] AHSCJN, AR, 3496/1924, f. 25-26.

La actitud de la Comisión Nacional respondió a que desde el 5 de septiembre de 1929 y ante la inminente entrega de tierras, Francisco y Joaquín Rosales propusieron a las autoridades agrarias el cambio en la localización del ejido y reiteraron que la adquisición de sus tierras fue previa a la solicitud formulada de dotación, por lo que la consideraban legal. En reunión celebrada el 6 de octubre, los de Tenayuca dieron su visto bueno a la propuesta de los hermanos Rosales y para concretar el acuerdo los propietarios habían pedido a la CNA se desistiera del recurso de revisión.[189] Es posible que esta forma de negociar parte de las tierras en disputa a cambio de desistirse de la acción judicial fuera recurrente y no sólo por parte de los afectados, Luis Aboites ha demostrado que en los amparos promovidos por los propietarios expropiados en la región del Valle del Yaqui/Mayo, estado de Sonora, a mediados de la década de los años setenta, fue el propio presidente de la república quien decidió indemnizarlos a cambio de que dejaran la vía judicial, "con el fin de evitar, si tal fuera el desenlace de los amparos, dar marcha atrás a la dotación ejidal echeverrista".[190]

Posiblemente con el propósito de destrabar el conflicto, que ya para este momento llevaba 12 años desde el momento de la solicitud de tierras y tres demandas de amparo con sus respectivos recursos de revisión, un día antes del desistimiento ante la Corte, el 2 de abril de 1930, la CNA acordó el cambio de localización del ejido. Esta decisión originó que los afectados, las personas que habían adquirido las otras porciones de la extinta Hacienda de San Javier, promovieran demandas de amparo alegando la violación a sus garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Estos amparos son los que interesan analizar para el propósito de este capítulo.

El primero de los casos se refiere al rancho San Felipe y Tabla Honda, propiedad de Federico Coppe, en su demanda fechada el 5 de septiembre de 1930, señaló como autoridades responsables a la CNA y a su delegado en el estado, por la orden del cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca, afectándose su propiedad de 21 hectáreas, previniéndosele para desocupar los terrenos sembrados con alfalfa que poseía "en el término de un año y los sembrados con remolacha en igual término".[191] Desafortunadamente no se puede profundizar en las etapas del juicio, debido a que el expediente presenta hongos y no

[189] AGA, dotación, exp. 23/2236, legajo 2, fs. 10-13.
[190] ABOITES, *Los últimos años*, p. 161.
[191] AHSCJN, AR, 708/1931, f. 8.

fue posible consultarlo; por lo que únicamente se presenta un esbozo a partir de lo encontrado en la sentencia emitida por la SCJN en el recurso de revisión.

Admitida la demanda y solicitados los informes justificados, el delegado estatal, negó su participación en el caso y la CNA reconoció el acuerdo emitido y su constitucionalidad. El ministerio público al formular su pedimento solicitó confirmar el fallo del juez, es decir, otorgar el amparo "porque no se trataba de un cambio de localización de tierras de un mismo afectado, sino de envolver las de propiedad del quejoso sin haberlo oído en el proceso agrario".[192]

En la audiencia constitucional el de distrito concedió el amparo por dos motivos "porque en diverso juicio de amparo seguido ante el mismo Juzgado del Estado de México, la Comisión Nacional Agraria se desistió en su nombre y en el del Presidente de la República, del recurso de revisión que había interpuesto", se refiere al desistimiento ya comentado y el segundo motivo, porque la responsable no acreditó "que, hubiese ceñido sus actos estrictamente"[193] a lo dispuesto por los artículos 101 al 105 de la ley agraria de 21 de marzo de 1929. Ante esta resolución, la CNA promovió el recurso de revisión.

Seguido el recurso por todas sus etapas, en su sentencia del 8 de octubre de 1931, la Segunda Sala de la Suprema Corte se avocó al estudio del acuerdo emitido por la CNA. Argumentó que el quejoso no había recurrido la resolución presidencial de 1924, sino únicamente el acuerdo de la Comisión Nacional del 2 de abril de 1930 "y si a esto se agrega la circunstancia de que tenía que cumplirse la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia por la que se amparó a los fraccionistas Rosales contra la afectación que se había hecho de sus propiedades, es indudable que la Comisión Nacional no solamente tuvo el derecho sino la obligación de tomar, de la hacienda, tierras distintas a las de estos señores, para completar la dotación".[194] Por lo anterior, revocó la sentencia del de distrito y negó el amparo al quejoso. Si bien este razonamiento se apega a una aplicación literal de la ley, no debe dejarse de lado que su ejecución ocasionaría conflictos con las demás personas que adquirieron el resto de las fracciones de la hacienda.

Otra de las personas afectadas con el acuerdo de la CNA, fue Josefa Núñez viuda de Llorente quien el 5 de junio de 1931, demandó protección de la justicia federal ante el juez

[192] AHSCJN, AR, 708/1931, f. 9.
[193] AHSCJN, AR, 708/1931, fs. 13v, 14.
[194] AHSCJN, AR, 708/1931, f. 15v.

cuarto de distrito en el D.F, contra actos de la CNA consistentes en haber ordenado la localización del ejido de San Bartolo Tenayuca en los terrenos San Buenaventura, La Lagunita y La Convalescencia, las cuales había adquirido desde hace casi nueve años; "modificando la localización que durante varios años tuvo el ejido", no obstante, que sus tierras eran de riego "y la resolución presidencial respectiva dotó con terrenos de temporal de primera y pastales" y; por la ejecución del acuerdo al delegado estatal de la CNA.[195]

Precisó que los mencionados terrenos los tenía en arrendamiento con el señor Joaquín López Negrete, que no impugnaba la dotación ni la resolución presidencial y mucho menos "la localización que fue su consecuencia", sino "el cambio de localización, que durante varios años estuvo en determinada forma que ahora pretende cambiarse". Además de señalar que la resolución provisional estaba fechada el 29 de mayo de 1923, no le era aplicable la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas en vigor, sino el reglamento agrario de 1922, que no contemplaba la "manera ordinaria o regular de impugnar un cambio de localización de ejido, por lo mismo es indiscutible la procedencia del juicio de garantías para tratar el problema que planteo".[196]

Aunque era una práctica común en las demandas de amparo el incorporar criterios jurisprudenciales relacionados con el asunto en controversia, llama la atención que para reforzar su argumentación y evitar que su demanda fuera desechada o se declarara improcedente, la quejosa citó varias jurisprudencias de las cuales vale la pena resaltar dos de ellas. La primera se refería al supuesto en el que en la demanda de amparo no se reclamara "la resolución presidencial dotatoria de ejidos sino la localización de éstos en terrenos que, según el quejoso, no fueron afectados por la citada resolución presidencial, es evidente que no debe desecharse la demanda, sino dársele entrada". La segunda tesis estaba relacionada con las facultades de la CNA, la cual no estaba "legalmente capacitada para desempeñar otras funciones que no sean las de consultivas del Presidente de la República y de ejecutora de las resoluciones por él dictadas; por tanto, una vez firmado y aprobado el plano de localización de ejidos y dada la posesión definitiva, la indicada Comisión nada puede ya hacer en los expedientes que ante ella se hayan tramitado".[197] En consecuencia la CNA realizaba facultades que no le correspondían y que tampoco establecía la ley.

---

[195] AHCCJT, AI, 316/1931, fs. 1-1v.
[196] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 2v.
[197] AHCCJT, AI, 316/1931, fs. 3v, 4.

Es necesario hacer un paréntesis y mencionar que con fecha del 21 de junio de 1931, unos días después de presentar el amparo, la quejosa informó al juez cuarto de distrito del D.F. que un ingeniero que se ostentó como representante de la Comisión Nacional Agraria, "en unión de cuarenta indígenas se introdujo a mi propiedad denominada 'San Buenaventura' y puso una serie de estacas que indican la formación de parcelas de veinte metros de ancho por toda la longitud del terreno, limitando así las parcelas que iba adjudicando a los que estaban allí presentes y aún a los que no se encontraban en ese lugar" y que días después "varios individuos estuvieron en el mencionado terreno simulando una siembra de maíz en varias de las parcelas que reputaban ser suyas".[198] Esta denuncia deja ver que a la par de desahogarse la instancia legal, en la vía de los hechos se realizaban acciones para poner en posesión de las tierras a los de Tenayuca, desafortunadamente no se cuenta con mayor información al respecto.

Regresando al amparo, tal y como lo establecía la ley para estos casos, el juez del D.F. se declaró incompetente, notificó a su homólogo del Estado de México y turno los autos a la Suprema Corte quien declaró competente al juez de distrito del Estado de México.

En sus informes justificados, el delegado de la Comisión Nacional en el estado "manifestó no tener conocimiento del cambio de localización" a que se refería la señora Josefa Núñez viuda de Llorente y la CNA reconoció que se había "cambiado la localización el ejido de San Bartolo Tenayuca, pero sin afectar los terrenos que la quejosa" señalaba como suyos, tal y como lo acreditaba con "la copia certificada del acta de ejecución que se levantó al realizarse la diligencia respectiva".[199]

La audiencia de pruebas, alegatos y sentencia ante el juzgado de distrito del Estado de México se fijó para las 11 horas del primero de octubre de 1931, sin embargo, la audiencia fue diferida pues no se tenía la constancia de la fecha y hora en que habían recibido los terceros perjudicados la copia de la demanda inicial, por lo que se señaló como nueva fecha las 11 horas del 16 de octubre próximo.[200]

Un día antes de celebrarse la audiencia, el 15 de octubre de 1931, la quejosa informó al juzgado que había solicitado ante la CNA "copias certificadas de varias constancias" que le eran necesarias para su mejor defensa, no obstante, dicha comisión le había solicitado que

[198] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 290.
[199] AHSCJN, AR, 4421/1931, f. 14v. y AHCCJT, AI, 316/1931, f. 74.
[200] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 81.

justificara el carácter con el que promovía su solicitud, razón por la que con fundamento en el artículo 79 de la ley de amparo, solicitaba "diferir la celebración de esta audiencia, señalando nuevo día y hora para que tenga lugar".[201] El juez acordó el diferimiento y estableció como nueva fecha las 10 horas del 11 de noviembre de 1931.

El día y hora fijadas para celebrar la audiencia se presentaron el agente del MPF y el abogado de la quejosa, licenciado Gustavo Díaz Cánovas. La parte quejosa presentó diversos documentos de prueba como las escrituras que acreditaban la adquisición de los terrenos en pugna y el *Diario Oficial* donde se publicó la dotación a Tenayuca; mientras que el MPF no presentó prueba alguna.

En sus alegatos, la quejosa destacó que los de Tenayuca llevaban varios años con la posesión de sus tierras "y que solo debido a no sé que poderosas influencias y después de que había pasado mucho tiempo de estar concluido el asunto definitivamente, se resucitó en el seno de la agraria, si bien guardándolo en absoluta reserva; sin notificarseme, sin seguir en mi contra ningún procedimiento, se determinó el cambio de localización, haciendo que este recayera en el predio de San Buenaventura"; que no se le había notificado del mencionado cambio; que nunca se le había oído "en juicio para privarme de lo que justamente me pertenece", lo cual de acuerdo con "la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia", era violatorio pues no se había "seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos", en el que se cumplieran las "formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho" y; que no podía "modificarse la localización, sino mediante todo un juicio que en el caso no se ha seguido y al hacerlo la autoridad responsable sin haber seguido juicio, claramente violó el precepto constitucional invocado".[202] Como puede observarse, para este momento los propietarios contaban con la suficiente noción de los argumentos que tenía que utilizar en defensa de sus propiedades.

Y concluyó reiterando que la Comisión Nacional Agraria, únicamente contaba con facultades consultivas del ejecutivo federal "y, de ejecutora de las resoluciones por él dictadas"; por tanto no le correspondía "modificar los planos y los proyectos de localización una vez formulados" y en consecuencia era claro que al carecer de dichas atribuciones violaba "los artículos 9° y 10° de la Ley de seis de enero de mil novecientos quince".[203] El

[201] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 92.
[202] AHCCJT, AI, 316/1931, fs. 111-112v.
[203] AHCCJT, AI, 316/1931, fs. 112v-113.

primero que establecía las facultades de la CNA y el segundo el procedimiento a seguir para modificar una resolución presidencial.

Por su parte, el MPF en su pedimento, presentó un esbozo de lo consignado por la quejosa en su demanda y de lo expuesto por la CNA en su informe justificado, concluyendo que "en vista de la negativa de las dos autoridades responsables sobre la inexactitud de la quejosa, o sea que no ha ordenado la ocupación de una parte de los terrenos de la señora Josefa Núñez Bda. de Llorente", pidió al juez el sobreseimiento "por falta de materia" en el amparo.[204]

Con todos esos elementos, el 11 de noviembre de 1931, el juez de distrito sobreseyó el juicio "por juzgar que con las pruebas rendidas no estaba demostrado que el cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca se hubiese hecho en los terrenos que la quejosa señala como de su propiedad".[205]

Inconforme con esa resolución, la quejosa promovió el recurso de revisión, argumentando que se le había causado un agravio "pues los actos de que me quejo existen según confesión de la mencionada Comisión Nacional Agraria", por lo que se le debió de amparar.[206]

El máximo tribunal del país admitió el recurso y los terceros perjudicados, en este caso los pobladores de Tenayuca, por conducto de su Comité Particular Administrativo, solicitaron la resolución de este y otros amparos relacionados con el asunto para terminar con "las molestias y hostilizaciones que venimos sufriendo, con motivo de la posesión definitiva legal de terrenos que nos fueron dados por resolución presidencial".[207]

Para cuando realizó su pedimento el agente del MPF, ya había sido aprobada la reforma al artículo 10 de la ley de 6 de enero de 1915, por lo que este señaló que de acuerdo al artículo segundo transitorio, "respecto a los juicios de amparo que estén pendientes de resolverse ya sea ante los Jueces de Distrito o en revisión o que por cualesquiera otra circunstancia se hallen pendientes ante la Suprema Corte",[208] serían sobreseídos y los

[204] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 145.
[205] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 166.
[206] AHCCJT, AI, 316/1931, f. 154.
[207] AHSCJN, AR, 4421/1931, f. 11.
[208] AHSCJN, AR, 4421/1931, f. 9.

afectados únicamente tendrían el derecho a reclamar la indemnización correspondiente, por lo que solicitó se decretara el sobreseimiento.

En su sentencia del 24 de noviembre de 1932, atendiendo a lo dicho por la CNA, la Segunda Sala de la Suprema Corte confirmó el sobreseimiento dictado por el juez de distrito del Estado de México.

Un tercer amparo derivado del cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca fue el presentado el primero de mayo de 1933, por Ángela Todoberto de Coppe (en su carácter de tutora de su esposo Luis Coppe y como albacea del intestado de José Coppe) y Antonieta Basso viuda de Coppe (como representante de la sucesión de Federico Coppe), ante el juez de distrito del Estado de México. Al igual que en el amparo anterior vemos a las mujeres propietarias actuando ante las instancias de justicia, caso contrario a las mujeres residentes de los poblados solicitantes, pues hay que recordar que el derecho agrario condicionó la participación femenina a tener el carácter de viudas y ser jefas de familia para ser consideradas en la dotación de tierras.

En su demanda expusieron que "sin pretender objetar la resolución presidencial que con toda justicia dotó de tierras al pueblo de San Bartolo Tenayuca, ni el plano de la posesión definitiva que oportunamente fue aprobado", promovían el juicio de amparo contra la Comisión Nacional Agraria porque al mismo tiempo que trataban "de privar al pueblo de San Bartolo Tenayuca de tierras que se le dieron en posesión definitiva y legítimamente le pertenecen, violan también, en nuestro perjuicio, las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la citada Constitución, por cuanto se pretende despojarnos de nuestras pequeñas propiedades a pretexto de rectificarse por segunda o tercera vez una posesión definitiva que ya fue dada desde hace cuatro años".[209]

Como acto reclamado señalaron que la Nacional Agraria había dictado un acuerdo que disponía la entrega a Tenayuca de "varias fracciones de terrenos de las pequeñas propiedades que nosotras representamos", pues tenían conocimiento de que "un ingeniero de la citada Comisión" se había trasladó al poblado mencionado con el propósito de "practicar mediciones sobre las propiedades de nuestros representados, y esto nos confirma en la creencia de que se ha dictado el acuerdo a que aludimos, cuya fecha no podemos citar por

[209] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 1.

ignorarla, ya que no hemos sido notificadas ni se nos han proporcionado ninguna clase de informes oficiales sobre el particular".[210]

En este escrito también se hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte, particularmente a que la CNA no estaba "legalmente capacitada para desempeñar otras funciones" que no fueran "la de Consultiva" del ejecutivo federal y "la de ejecutora de las resoluciones dictadas por este". Aunado a que "una vez aprobado el plano de localización de ejidos dotados" por el presidente de la república, dicho plano formaba parte de la resolución presidencial y no podía ser reformado "por la Comisión Nacional Agraria ordenando nueva localización del ejido".[211]

Como se recordará, para este momento ya se había prohibido la interposición de juicios de amparo contra resoluciones dotatorias, por lo que las quejosas puntualizaron que su demanda no iba contra la resolución presidencial, "ni contra el plano de la posesión definitiva", sino contra los "actos ilegales" de la Nacional Agraria que buscaba "alterar dicha resolución, fuera de tiempo y sin tener ningunas facultades para ello. Por lo tanto, no cabría en el presente caso la causa de improcedencia establecida por el Decreto de 23 de diciembre de 1931, llamado comúnmente 'Ley Caloca'".[212]

Concluyeron su exposición mencionando que "los únicos beneficiados con un cambio de localización, serían los hacendados a quienes se devolvieran las tierras que les fueron afectadas con la localización definitiva dada el 15 de agosto de 1929" y que sus tierras, además de constituir pequeñas propiedades, eran de riego y de primera clase "siendo este el motivo, indudablemente, por lo que no fueron afectadas en la dotación definitiva a que nos referimos, ya que la resolución presidencial dotó a San Bartolo Tenayuca exclusivamente con tierras de temporal, pastales y cerriles".[213]

Como pruebas presentaron las escrituras que acreditaban la propiedad de los terrenos de los hermanos Luis, José y Federico Coppe; la resolución presidencial que otorgó tierras a Tenayuca y; pidieron al juez que por su conducto, solicitara a la CNA copia del plano de

[210] AHCCJT, AI, 194/1933, fs. 2-3.
[211] AHCCJT, AI, 194/1933, fs. 3-4.
[212] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 4.
[213] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 5.

localización de la posesión definitiva y copia del acuerdo que haya "dictado mandando agregar nuestros terrenos o parte de ellos al ejido del pueblo citado".[214]

Como lo marcaba la ley, admitida la demanda se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló como fecha de audiencia las nueve horas del 7 de junio de 1933.

En su informe justificado la CNA realizó un resumen del procedimiento dotatorio precisando que la resolución presidencial no se había ejecutado en su totalidad debido al amparo promovido por los hermanos Rosales, lo que ocasionó que se emitiera el acuerdo de cambio de localización del ejido, el cual no violaba "ninguna garantía" y por el contrario, "si se dejase de realizar se dejaría incumplida una resolución presidencial cuya ejecución es de interés público" y que el fraccionamiento de la Hacienda de San Javier se había desconocido, por lo que eran falsas las afirmaciones de las quejosas; razones por las cuales solicitó al juez negar el amparo "por referirse a un asunto agrario, contra los que son improcedentes los recursos judiciales, inclusive el amparo" de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte y la reforma al artículo 10 de la ley de 6 de enero de 1915.[215]

El día de la audiencia el abogado de las quejosas, con apoyo del artículo 79 de la ley de amparo, solicitó que se difiriera la audiencia dado que habían solicitado a la CNA les expidiera "copia del plano de la posesión definitiva que se dio al pueblo de San Bartolo Tenayuca", y hasta esa fecha no se les había otorgado; además de que se requiriera a la Comisión para que atendiera oportunamente la petición realizada. El juzgador difirió la audiencia y señaló como nueva fecha el 14 de julio de 1933.[216]

Días antes de celebrarse la audiencia, la parte quejosa presentó al juzgado un escrito en donde le hacía saber que la CNA no expediría las copias por "encontrarse pendiente de aprobación el expediente de ejecución" y que una vez aprobado se atendería la solicitud. Dado que Ángela Todoberto de Coppe estaba inconforme con esta respuesta, acudió al juez de distrito para pedir que se le apremiara a la CNA para que expidiera a la mayor brevedad lo solicitado. El juzgador atendió el pedimento y libró oficio a la Nacional Agraria "para que sin excusa ni pretexto de ningún género, y como lo dispone el artículo 79 de la Ley de

[214] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 6.
[215] AHCCJT, AI, 194/1933, fs. 22-23.
[216] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 45.

Amparo, expídanse a la promovente las copias a que se refieren" y en caso de no expedirlas se le impondrían las medidas de apremio establecidas por la ley.

Llegada la nueva fecha, la audiencia nuevamente se difirió para las 11 horas del 14 de agosto de 1933 a petición de la parte quejosa pues "no obstante, las repetidas gestiones" que habían realizado ante la CNA no habían obtenido las copias del plano y de las diversas constancias del expediente agrario de San Bartolo Tenayuca, razón por la cual el juez de distrito requirió a la Comisión Nacional Agraria para que en un plazo no mayor de ocho días expidiera a la quejosa las copias solicitadas.

El 14 de agosto de 1933, se volvió a diferir por "esta única vez" la audiencia para las nueve horas del ocho de septiembre del mismo año, dado que la quejosa informó que la CNA se negaba "terminantemente a expedirnos las copias que oportuna e insistentemente le hemos pedido de varios documentos que nos son indispensables para presentarlos como prueba en el juicio de amparo".

Por escrito del 25 de agosto de 1933 la quejosa reiteró a la CNA su solicitud argumentando que

> no se trata en este caso de un amparo que pudiera perjudicar al pueblo, sino de intereses de pequeños propietarios en contra de un hacendado, al que seguramente esa H. Comisión no podría empeñarse en beneficiar, no podemos ni queremos pensar que esa misma Comisión se obstinara, contra toda ley y justicia, en dificultarnos las defensas que legítimamente deseamos hacer valer tanto la que suscribe, que por su condición de viuda sin más recursos que esta pequeña propiedad merece alguna consideración, y otros pequeños propietarios igualmente escasos de elementos aún para defendernos.

De acuerdo con las fuentes revisadas, el 8 de septiembre se volvió a diferir la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, para las nueve horas del dos de octubre de 1933; ya que la CNA seguía sin expedir las copias solicitadas. En este caso, el juez previno a la Comisión para que en un plazo no mayor de cinco días atendiera la solicitud de la quejosa, de lo contrario se le impondría una multa de $25 a cada uno de los miembros de la referida CNA.[217]

El 27 de septiembre de 1933, Antonieta Basso viuda de Coppe, presentó un escrito a la CNA con copia al juzgado de distrito para manifestarle que había solicitado de forma insistente copias del plano de la posesión definitiva, del acta de posesión definitiva del 15 de

[217] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 99.

septiembre de 1924 y del acta de posesión complementaria del 15 de agosto de 1929. Y no obstante los requerimientos del juez, no se habían expedido los documentos requeridos por lo que le hacía notar a la Comisión que si continuaba la negativa se les causarían "daños y perjuicios pecuniarios de consideración, de los que alguien deberá responder". Así mismo, hacía constar que en el momento en que se le indicara exhibiría el pago de estas y que la negativa en la expedición de las copias no tenía "en este caso la disculpa de que se trata de favorecer al pueblo de San Bartolo Tenayuca, pues este pueblo en varias ocasiones ha manifestado su preferencia por los terrenos de los hacendados Rosales, que son mejores que los de los fraccionistas hermanos Coppe, ya que estos últimos se inundan todos los años y hay que desaguarlos con bombas".[218]

Y finalizó señalando que deseaba "de antemano protestar que no me mueve el propósito de contrariar los elevados fines de esa H. Comisión, sino la necesidad en que se me coloca, de tener que defender hasta lo último el pequeño y único patrimonio, consistente en 53 hectáreas de tierras de labor, que como fruto de sus esfuerzos y economías de toda su vida me legara mi finado esposo el Sr. Federico Coppe".[219]

El dos de octubre de 1933 se llevó a cabo la audiencia constitucional con la asistencia del apoderado de la parte quejosa y del agente del Ministerio Público. El juez dio por admitidas las pruebas "y toda vez que la Comisión Nacional Agraria no ha comprobado haber expedido las copias" del plano de la posesión definitiva, el acta de la posesión definitiva y el acta de la posesión definitiva complementaria, "se suspende la celebración de esta audiencia y se señala para continuarla" las 10 horas del seis de noviembre siguiente "para el solo efecto de recibir las pruebas anteriormente descritas ofrecidas por la parte quejosa y oir los alegatos de las partes". De la misma forma, el juez solicitó al secretario de Agricultura y Fomento le informara al juzgado "a la mayor brevedad posible, acerca de quienes son las personas que integran en la actualidad la Comisión Nacional Agraria, con expresión del nombre de ellas y del cargo que desempeñan".[220] Suponemos que como una forma de hacerle notar que les impondría la medida de apremio comentada.

En sus alegatos del 6 de noviembre de 1933, la parte quejosa reiteró la inconstitucionalidad del cambio de localización del ejido de Tenayuca, la validez del

[218] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 109.
[219] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 110.
[220] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 106.

fraccionamiento de la Hacienda de San Javier, el carácter de pequeñas propiedades de sus terrenos y el retraso por parte de la CNA para expedir las copias solicitadas, lo cual había ocasionado la suspensión en varias ocasiones de la audiencia constitucional. En ese sentido y a diferencia de otros juicios que se alargaban por alguna causa atribuible al juzgado de distrito, es claro que este proceso se alargó por la negativa de la CNA para expedir las copias solicitadas por la quejosa.

Es de destacar que mencionaron la reciente reforma de 1931, conocida "comúnmente con el nombre de 'Ley Caloca'", la cual había creado "una nueva causa de improcedencia de los juicios de amparo", cuando estos se promovían contra las resoluciones presidenciales de dotación y restitución de tierras;

> pero de ninguna manera autoriza ni podría autorizar a la Comisión Nacional Agraria para invadir pequeñas propiedades mediante un simple acuerdo económico, ni menos basándose en una resolución presidencial que ya fue ejecutada definitivamente desde hace bastantes años, sin que se hubieran tocado dichas pequeñas propiedades. Un acuerdo de esta naturaleza no puede calificarse de una resolución agraria, sino de acto arbitrario y atentatorio, no fundado en ninguna Ley, y contra el cual no está establecido ningún recurso ni procedimiento, a excepción del juicio de amparo, por medio del cual se pudieran restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de que se hubiese cometido el hecho violatorio que originó la queja, que son precisamente los efectos restitutorios del juicio de garantías"[221]

Apuntaron que cuando se trataba de una resolución presidencial de dotación, los propietarios afectados contaban con la posibilidad de pedir la indemnización correspondiente de acuerdo con la ley del 6 de enero de 1915; pero cuando un pequeño propietario no había "sido oído en ninguna forma ni se ha enderezado en su contra ninguna acción agraria", existía una "flagrante violación de las garantías constitucionales" establecidas en los artículos 16 y 27 constitucionales, razón por la que era procedente la protección de la justicia federal "como único y supremo recurso para reparar las garantías violadas". Sumado a que el acuerdo de la CNA no era una "resolución agraria dictada dentro del marco de las facultades legales de dicha Comisión, sino simplemente un acto arbitrario y atentatorio por medio del cual se pretende invadir varias pequeñas propiedades, a pretexto del cambio de localización de un ejido que ya se dio definitivamente desde los años de 1924 y 1929".[222]

[221] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 215.
[222] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 215-216.

Finalmente, señalaron que el artículo 101 de la ley agraria estipulaba el procedimiento de cambio de localización de ejidos, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecución de la resolución presidencial tanto por parte de los propietarios afectados, como por los representantes de los núcleos beneficiados y en el caso del ejido de Tenayuca, los afectados se habían presentado pidiendo el cambio varios años después de que la resolución presidencial respectiva había sido ejecutada; "pero suponiendo que su petición la hubieran hecho dentro del mes que concede la Ley, el cambio de localización solo puede consistir en levantar la afectación de unos terrenos para hacerla recaer en otros del mismo propietario, pues hasta ahora a nadie se le ha ocurrido el absurdo de que se pudiera pedir un cambio de localización para librarse de una afectación y obtener que fueran afectadas propiedades de otros dueños".[223]

El agente del MP formuló su pedimento de forma verbal solicitando se desechara la demanda por improcedente.

Dada la sentencia por el juez de distrito, en sus considerandos señaló la existencia del acto reclamado "como legalmente" comprobado, porque la autoridad señalada como responsable, lo había confesado de forma expresa "en su informe y además, porque así aparece de las copias certificadas que remite dicha autoridad con su citado informe, así como de las pruebas rendidas por las quejosas". Sin embargo, también señaló que de las pruebas aportadas se desprendía que los actos reclamados se trataban de la aplicación de los preceptos de las leyes agrarias y la recién reforma al artículo 10 de la ley agraria de 1915, era clara al expresar que los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias, no contaban con ningún recurso legal ordinario, ni el extraordinario del amparo no quedando excluidos los casos de ejecución de dichas resoluciones "ya que el citado artículo 10 no establece excepciones, ni puntualiza distinciones de ningún género y que, al usar el propio artículo la expresión de 'propietarios afectados', significa que el legislador se refiere, sin distinción alguna, a cualesquiera propietarios que en cualquiera forma o por cualquier medio, hayan sido o fueren afectados, lo mismo con la resolución dotatoria o restitutoria, que con la ejecución de ella o con cualquier otro efecto".[224]

[223] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 217.
[224] AHCCJT, AI, 194/1933, f. 219.

Con este criterio el licenciado Manuel Bartlett, juez de distrito en comisión, determinó el sobreseimiento por causa de improcedencia. Inconforme con esta resolución, Ángela Todoberto de Coppe, promovió el recurso de revisión, acompañando su escrito con las copias respectivas.

En esta instancia las quejosas argumentaron que lo establecido en el decreto de 1931 había creado "una nueva causa de improcedencia en los juicios de amparo" cuando se promovían en contra de las resoluciones presidenciales "que mandan afectar propiedades particulares para restituir o dotar de ejidos a los pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia; o bien de los procedimientos de ejecución de dichas resoluciones".[225] Y los hechos que ellas reclamaban no se encontraban comprendidas en los supuestos del decreto mencionado.

Precisaron que en la resolución presidencial de 1924 se habían afectado los terrenos de unos señores de apellido Rosales y no los de los hermanos Coppe a quien ellas representaban, no obstante, la CNA había emitido un acuerdo fechado el 15 de marzo de 1933 en los siguientes términos: "se reforma el acuerdo tomado por la Comisión Nacional Agraria con fecha 2 de abril de 1930, en el sentido de que procede el cambio de localización en el ejido de Tenayuca; pero no sobre los terrenos pertenecientes al rancho de Tenayo, sino sobre los terrenos de los señores pertenecientes a los señores Joaquín López Negrete, Federico y Luis Coppe y Fortunato Carrara".[226]

Dicho de otro modo, la CNA había emitido un nuevo acuerdo para reubicar las tierras del ejido, tomando en cuenta la propuesta de los hermanos Rosales, afectando las otras fracciones de la hacienda San Javier. Hasta este momento habían transcurrido 15 años desde la solicitud de dotación y casi 10 desde la emisión de la resolución presidencial y los pobladores de San Bartolo Tenayuca no contaban con la certeza de aprovechar las tierras recibidas.

Las quejosas impugnaron este nuevo acuerdo por no estar dentro de las facultades legales de la Comisión, lo que constituía un acto arbitrario y fuera de la ley. Y enfatizaron en su escrito que

[225] AHSCJN, AR, 3885/1933, f. 1.
[226] AHSCJN, AR, 3885/1933, f. 2.

> aun suponiendo que los señores Rosales, poderosos terratenientes que fueron afectados por la resolución Presidencial que dotó de tierras al pueblo de Tenayuca, hubieran solicitado el cambio de localización del ejido dentro del plazo de un mes que señala la Ley Agraria, es un absurdo el suponer que un propietario afectado pueda pedir que la localización se cambie levantándola de terrenos de su propiedad, para hacerla recaer, no en otros terrenos que el mismo propietario ofrezca, sino en propiedades ajenas que no fueron incluidas en la posesión definitiva del ejido.[227]

En su pedimento, el agente del MPF solicitó se confirmara la sentencia del juez de distrito sobreseyendo el asunto, por tratarse de una causal de las comprendidas en la reforma de 1931.

El recurso de revisión fue resuelto hasta el 23 de enero de 1935, por la Segunda Sala de la SCJN confirmando el sobreseimiento del juicio. Llama la atención que el argumento principal de la Corte se basó en que el acuerdo de la CNA sobre el cambio de localización del ejido, se trataba de un acto de ejecución de la resolución presidencial de 28 de agosto de 1924 y de conformidad con la ya reformada fracción XIV del artículo 27 constitucional, por Decreto de 30 de diciembre de 1933, "los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo",[228] por lo que era notorio que el amparo era improcedente.

Un último amparo fue promovido por Joaquín López Negrete, propietario del rancho San Rafael, el 18 de julio de 1933, ante el juez de distrito del Estado de México contra actos de la CNA consistente en el acuerdo de dicha autoridad de fecha 2 de abril de 1930, reformado el 15 de marzo de 1933, por el que declaró procedente el cambio de localización del ejido San Bartolo Tenayuca, afectando su propiedad.

En su demanda apuntó que su propiedad contaba con una extensión de poco más de 55 hectáreas sembradas de alfalfa y compuesta de terrenos de riego y que no se encontraba dentro de los terrenos afectados por la resolución presidencial a Tenayuca "ni están señalados en el plano primitivo de dotación ni siquiera pertenecen al rancho del Tenayo que los propietarios de San Javier propusieron en cambio". Y señaló como autoridades responsables a la CNA y al Comité Local Ejecutivo de San Bartolo Tenayuca y como acto reclamado el acuerdo del dos de abril de 1930, reformado el 15 de marzo de 1933. Que en su consideración

[227] AHSCJN, AR, 3885/1933, f. 3.
[228] AHSCJN, AR, 3885/1933, f. 17v.

representaba "un exceso de ejecución de parte de las autoridades agrarias señaladas como responsables".[229]

Dentro de sus argumentos, el quejoso fue cauteloso en señalar que su amparo no estaba "comprendido en las reformas a la Ley de 6 de enero de 1915, porque no se dirige contra la dotación ni trata de estorbar que a los ejidatarios de San Bartolo Tenayuca se les entregue su ejido".[230] Pero si precisó que el rancho de su propiedad no era susceptible de ser afectado pues tenía una superficie de poco más de 55 hectáreas de riego y de acuerdo a la ley, se encontraba exenta de dotación "y aun la resolución presidencial que mandó dotar a San Bartolo Tenayuca, dispuso que se le dieran terrenos de temporal y no de riego como los de San Rafael" y por estas razones el cambio de localización del ejido era "violatorio de las garantías de los artículos 14 y 16 Constitucionales".[231]

Admitida la demanda y solicitados los informes justificados a las autoridades responsables, el juez fijó como fecha para la realización de la audiencia constitucional las 11 horas del 18 de agosto de 1933.

En su informe justificado, la Nacional Agraria expresó que la resolución presidencial de 1924 se había ejecutado de manera parcial debido al amparo promovido por los hermanos Rosales, la cual fue reconocida como pequeña propiedad por el amparo concedido por la Suprema Corte, lo cual "hizo indispensable el cambio de localización para compensar al pueblo de Tenayuca las tierras faltantes"; que dicho cambio se había autorizado sobre "terrenos pertenecientes a los señores Joaquín López Negrete, Federico y Luis Coppe, Josefina González Vda. de Negrete y Fernando Carrara" y no sobre el rancho El Tenayo; que ese acuerdo no violaba ninguna garantía constitucional "sino por el contrario, si se dejase de realizar dicho acuerdo, se dejaría incumplida una resolución presidencial cuya ejecución es de interés público" y; que el amparo solicitado por el quejoso era improcedente pues la multicitada reforma al artículo 10 de la ley agraria del 6 de enero de 1915, expresaba de forma clara "que los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas", no tendrían ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni el extraordinario de amparo, sin establecer excepciones ni distinciones de ningún tipo, pues al prohibir el amparo en materia agraria contra las resoluciones presidenciales lo hacía "también contra la

[229] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 2-2v.
[230] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 2v.
[231] AHCCJT, AI, 328/1933, f.3.

ejecución de las mismas".[232] Con estas consideraciones la CNA solicitó se negara al quejoso el amparo y la protección de la justicia federal que solicitaba.

Al igual que en el amparo promovido por Ángela Todoberto de Coppe la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, se difirió en varias ocasiones a consecuencia de la falta de la expedición de las copias solicitadas a la Comisión Nacional Agraria, lo que hace pensar que bien pudo ser un mecanismo de resistencia de la autoridad para alargar el juicio o solamente la excesiva carga de trabajo de la Nacional Agraria; quien el 1° de septiembre de 1933 informó al juez de distrito que las copias certificadas solicitadas por Joaquín López Negrete habían sido expedidas desde el 17 de agosto pasado y "la única copia que no se expidió fue la del plano, por no ser posible en virtud de encontrarse pendiente de aprobación el expediente de ejecución respectivo".[233]

El 18 de septiembre de 1933, se celebró la audiencia constitucional con la asistencia del licenciado Hilario Medina[234] apoderado del quejoso; el representante de los terceros perjudicados, Cornelio Cedillo y; el agente del MPF. El abogado del quejoso en uso de la voz ofreció diversas pruebas documentales como la resolución presidencial que dotó a Tenayuca; el acta de la ejecución parcial de dicha dotación; el acta de la ejecución definitiva; el acuerdo de la CNA que aprobó el acuerdo de cambio de localización del ejido y; la copia del plano de dotación "la cual no presenta porque la misma Comisión Nacional Agraria se niega a entregarla".[235]

El MPF no ofreció pruebas y el juez de distrito acordó admitir las pruebas presentadas, requirió a la CNA para que expidiera al quejoso dentro del término de ocho días la copia del plano ofrecida como prueba, suspendió la audiencia y señaló como nueva fecha las 11 horas del día nueve de octubre de 1933, "quedando entendidas las partes de que no se admitirá ninguna otra pruebas a más de las admitidas ya en este asunto".[236]

Para el nueve de octubre no se había expedido la copia del plano solicitado, razón por la que el quejoso solicitó nuevamente el diferimiento de la audiencia fijándose las 11 horas

---

[232] AHCCJT, AI, 328/1933, fs. 16-17.
[233] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 48.
[234] A falta de mayores datos, se infiere que se trata de aquel abogado oriundo de Guanajuato, diputado al Congreso Constituyente, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carranza y ministro de la SCJN de 1941 a 1958.
[235] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 57v.
[236] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 58v.

del 15 de noviembre para su reanudación. En este caso, el juez solicitó a la CNA informara si ya había expedido el documento solicitado, en caso contrario que lo hiciera en un plazo de cinco días "en la inteligencia que de no hacerlo se impondrá una multa de cincuenta pesos a cada uno de los miembros que forman dicha H. Comisión Nacional Agraria"

El 15 de noviembre se reanudó la audiencia constitucional, asistiendo únicamente el agente del MPF. Se agregó al expediente la copia del plano solicitado, los alegatos del quejoso y el pedimento del MPF.

Sobre la copia del plano, el quejoso precisó que correspondía al del ejido de San Bartolo Tenayuca de acorde con la resolución presidencial de 1924 en donde se había señalado "en terrenos distintos del rancho de San Rafael de la propiedad de mi representado el señor Joaquín López Negrete; por lo que queda demostrado que San Rafael no fue afectado por esta dotación ejidal"; además de que a dicha copia se le había agregado el texto "nulificado por acuerdo de la Comisión Nacional Agraria".[237]

En sus alegatos del 9 de octubre de 1933, la parte quejosa por conducto de su apoderado el licenciado Hilario Medida puso énfasis en algunos de los aspectos mencionados en su demanda: que el cambio de localización del ejido de Tenayuca, se había realizado "sin apegarse al plano conforme al cual debía haberse hecho la dotación" y que el juez ya conocía "las resistencias que ha venido oponiendo la Nacional Agraria para entregar la copia de este plano y en los momentos de formular este alegato ignoro si por fin se habrá remitido"; que la resolución presidencial ya estaba ejecutada "y al tomar terrenos pertenecientes a personas que no formaron parte del juicio agrario ni fueron oídas ni vencidas en juicio, se violaron en perjuicio de mi representado las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución" y; que en la demanda de amparo no se atacaba la resolución presidencial ni su ejecución, sino "un despojo completamente arbitrario que no tiene ningún fundamento".[238]

Para reforzar sus argumentos, citó diversos criterios jurisprudenciales referentes a expedientes agrarios y a las resoluciones en la materia. En el caso de los primeros, se referían a la audiencia que debía darse a los interesados y que los expedientes agrarios no debían "considerarse como cerrados, sino por la resolución definitiva dictada por el Presidente de la República". En cuanto a las resoluciones agrarias expresó que si el amparo se pedía no contra

[237] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 94.
[238] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 97, 98-98v.

la resolución agraria dotatoria, sino contra su indebida ejecución por parte de "las autoridades agrarias, no es aplicable la jurisprudencia de la Corte respecto de la improcedencia del amparo contra fallos de esta índole y por tanto la demanda debe admitirse sin que por esto se prejuzgue sobre la legalidad de la dotación".[239]

Finalizó su exposición señalando que la reforma de diciembre de 1931 se refería a las resoluciones dotatorias y restitutorias y no a "los actos que envuelven una defectuosa ejecución o los actos arbitrarios cometidos fuera de ejecución".[240] Además de existir la prohibición a las comisiones locales y a la CNA de afectar la pequeña propiedad bajo pena de incurrir en responsabilidad.

Por su parte, el MPF en su pedimento resaltó la improcedencia de la demanda de acuerdo con la reforma de 1931 y a la jurisprudencia emitida por la SCJN referida a la misma reforma, especificando que el multicitado artículo 10 no establecía "excepciones, ni puntualiza distinciones de ningún género y que, al usar el propio artículo la expresión de 'propietarios afectados', significa que el legislador se refiere, sin distinción alguna, a cualesquiera propietarios que en cualquiera forma o por cualquier medio, hayan sido o fueren afectados, lo mismo con la resolución dotatoria o restitutoria; que con la ejecución de ella o con cualquier otro efecto".[241]

En sus alegatos, el CPA argumentó que el quejoso no había podido probar "la ilegalidad de la posesión de los terrenos" otorgados al pueblo de Tenayuca, ya que fueron "consecuencia de la ejecutoria de la Corte, y por esa causa" el juicio debía ser sobreseído"[242], además de la jurisprudencia emitida por la Corte en estos casos, por lo que solicitaron se negara la protección de la justicia federal.

Con base en esos criterios y al igual que en el juicio anterior, el juez de distrito en Comisión, Manuel Bartlett, resolvió el sobreseimiento del amparo por causa de improcedencia. Inconforme con esta sentencia el quejoso interpuso el recurso de revisión y la Corte emitió su sentencia el 18 de enero de 1935, confirmando la resolución de primera instancia, es decir, el sobreseimiento por improcedencia. En este caso su razonamiento lo

[239] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 99.
[240] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 99v.
[241] AHCCJT, AI, 328/1933, fs. 102-103.
[242] AHCCJT, AI, 328/1933, f. 109.

basó en que el acto que se reclamaba se trataba de un acto de ejecución de la resolución presidencial del 28 de agosto de 1924, y resolvió en los mismos términos del amparo anterior.

El sobreseimiento de los amparos expuestos significó para el ejido de Tenayuca el poder disponer de las tierras dotadas. Si bien, se desconocen a profundidad los detalles de la entrega de las tierras o la diligencia de devolución de las tierras a los hermanos Rosales, es evidente que los ejidatarios no quedaron satisfechos, pues dos años después, en diciembre de 1937, solicitaron la ampliación de su ejido.[243]

Para el momento en que se resolvió el último juicio, habían transcurrido 17 años desde la solicitud de dotación, 11 años desde la resolución presidencial y se habían promovido siete amparos relacionados con esta acción agraria: tres contra la resolución presidencial y cuatro contra los acuerdos de la CNA que fijaron el cambio en la localización del ejido.

Sin duda, este ejemplo muestra que la implementación de la legislación agraria continuaba siendo lenta, lo que ocasionaba incertidumbre entre los distintos sujetos agrarios, particularmente entre los solicitantes de tierras, convertidos en ejidatarios y también generó conflictos entre los propietarios.

A manera de cierre

En este capítulo se trató de demostrar que a consecuencia de la percepción que se tenía en distintos ámbitos de la sociedad mexicana, con respecto al uso y abuso del juicio de amparo por parte de los propietarios afectados con resoluciones dotatorias y restitutorias de tierras, distintos grupos y personajes impulsaron una reforma al artículo 10 de la ley agraria de enero de 1915, para prohibir su interposición. Dicho cambio tuvo gran relevancia en el desarrollo de la reforma agraria de la década de los años treinta, pues por una parte buscó que los propietarios afectados dejaran de utilizar el juicio constitucional como un mecanismo de resistencia ante el avance del reparto de tierras; y por otra, trató de hacer los procedimientos de dotación expeditos, lo cual en la práctica jurídica no siempre tuvo el efecto buscado.

En ese sentido, los artículos transitorios de la reforma estudiada tuvieron igual o mayor importancia, pues repercutieron de forma inmediata en los juicios de nulidad de las resoluciones presidenciales que se encontraran en trámite, los cuales serían desechados y con respecto a los amparos pendientes de resolución, se decretó su sobreseimiento. En ambos

[243] AGA, ampliación, exp. 25/2236, legajo 10, f. 2.

casos únicamente se dejó a los propietarios el derecho de reclamar la indemnización correspondiente. Esta modificación en algunos casos favoreció a los peticionarios de ejidos, pero en otros, ocasionó nuevos conflictos, tal y como ocurrió en el caso del trámite dotatorio del poblado de Santiago Teoyahualco, del municipio de Tultepec. Lo cierto es que la prohibición del amparo tuvo repercusión en las sentencias de los jueces de distrito, pues en la mayoría de los casos sobreseyeron los juicios, resoluciones que posteriormente fueron confirmadas por la Suprema Corte.

A pesar de esta prohibición, los hacendados siguieron recurriendo al juicio de garantías ahora por otra serie de acciones propias del desarrollo de la reforma agraria, como ampliaciones, cambios de localización o división de los ejidos; afectaciones a pequeñas propiedades; invasión de terrenos; privación o despojo de parcelas a ejidatarios; aprovechamiento de algún cultivo y; la permuta de tierras ejidales, por solo mencionar algunas de las causales. De estos actos reclamados destacan las sentencias obtenidas en los mencionados juicios de nulidad y el cambio de localización de los ejidos, procedimientos hasta ahora poco trabajados por la historiografía y cuyo estudio abre una veta importante en el análisis de la conformación de los ejidos y de los conflictos que se pudieron suscitar entre pueblos vecinos y entre los mismos propietarios de haciendas y ranchos.

Por su parte, los solicitantes de tierras o ejidatarios nuevamente acudieron al amparo, cuando consideraron que los actos de las autoridades agrarias vulneraban sus derechos, lo que demostraría su papel activo ante la justicia federal, además de que, en este periodo del amparo en materia agraria, comienzan a tener mayor relevancia las representaciones de los ejidos como promoventes del juicio de garantías, es decir, como quejosos.

Un botón de muestra del actuar de los grupos peticionarios se presentó en el expediente de dotación del pueblo de Santiago Teoyahualco, municipio de Tultepec, en donde después de casi cinco años obtuvieron una resolución presidencial favorable, la cual se revocó como consecuencia de un juicio de nulidad promovido por los propietarios de la Hacienda de Cartagena, lo que obligó al ejecutivo federal a pronunciar una nueva resolución que no satisfizo a los pobladores y como medio de resistencia, solicitaron la protección de la justicia federal en defensa de sus tierras. El juicio se sobreseyó como resultado de la aplicación de la reforma ya comentada, pero también se desechó el juicio de nulidad, razón

por la que pudieron ser beneficiados con las tierras solicitadas, pues todas las instancias legales se declararon nulas.

El segundo ejemplo presentado en este capítulo corresponde al cambio de localización del ejido de San Bartolo Tenayuca. En este caso, es de destacar que los propietarios expropiados recurrieron al fraccionamiento para conservar sus tierras o sacar provecho de ellas, además de tratar de hacer valer tanto en el procedimiento administrativo como en el juicio de amparo, la calidad de pequeña propiedad de sus tierras, tema que se toca en el siguiente capítulo. Una vez que algunos de los propietarios obtuvieron la protección de la justicia federal, obligaron a la CNA a emitir un acuerdo que autorizaba el cambio de localización del ejido, lo que originó nuevos conflictos con el resto de los dueños de las fracciones en que se había dividido la hacienda y la interposición de cuatro amparos.

Esta serie de acciones por parte de los propietarios representó para los ejidatarios incertidumbre en el aprovechamiento de las tierras dotadas durante casi dos décadas, lo que demuestra por lo menos dos de las consideraciones enunciadas en los capítulos hasta ahora presentados: que los propietarios siguieron recurriendo al juicio constitucional como un mecanismo de resistencia para la defensa de sus propiedades y que una sentencia de amparo no necesariamente ponía fin a los conflictos por la tenencia de la tierra.

Conforme la reforma agraria fue avanzando, la política del gobierno federal y estatal se modificó y se puso mayor énfasis en la industrialización, sumado a que otros actores de esta trama, como los pequeños propietarios comenzaron a tener mayor relevancia. En el siguiente capítulo se explica parte de ese protagonismo.

Capítulo 4

El juicio de amparo, la defensa de la pequeña propiedad y los certificados de inafectabilidad, 1945-1960

> Por razones de carácter sentimental, más que revolucionario, los gobiernos anteriores se preocuparon preferentemente a resolver la situación angustiosa en su desgracia, de los núcleos de población campesina y peones acasillados carentes del más elemental derecho, aunque los medieros, ahora pequeños propietarios agrícolas, también sufrían casi de igual desamparo; con abundantes leyes, muchas de ellas de carácter tutelar, se ha contribuido a la satisfacción de las necesidades de los primeros, elevando su condición social; y económica y ahora toca, en esta época de consolidación de los principios en realidades y dentro de la marcha progresiva de la Revolución, garantizar y proteger a la clase media rural, que ha permanecido olvidada pero que con la vitalidad de nuestro pueblo, como raza joven, ha logrado subsistir casi sin ayuda y sin garantías, para hacer plena realidad la reforma agraria y a la vez transformarla en fuente inagotable de prosperidad, que influya directamente en las demás actividades, pues con una agricultura anémica sólo tendremos una industria estéril y un Gobierno pobre, que no podrá realizar íntegramente sus programas de índole social.[1]

Con este y otros argumentos, en octubre de 1946, la recién creada Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), presentó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, cuyo punto principal proponía la restitución del amparo a pequeños propietarios que contaran con certificados de inafectabilidad, como se verá más adelante, la propuesta no prosperó, pero formó parte del contexto en que distintos actores impulsaron este cambio a la normatividad agraria vigente.

[1] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 23, martes 22 de octubre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/

En capítulos anteriores se ha recalcado que desde el inicio de la reforma agraria los afectados con la expropiación de sus terrenos, recurrieron a distintos medios tanto legales como extralegales en defensa de sus propiedades. Dentro de los mecanismos jurídicos, además de alegar y presentar pruebas en el procedimiento administrativo agrario para desvirtuar las solicitudes de los distintos grupos peticionarios, promovieron juicios de amparo en donde buscaron acreditar que sus fincas se trataban de pequeñas propiedades, ya fuera porque habían sido afectadas en beneficio de distintos poblados; porque ellos mismos habían decidido fraccionarlas respetando los preceptos constitucionales, federales o locales, en contra del latifundio o bien; habían adquirido alguna fracción de las extintas haciendas.

Y aun con la prohibición de los juicios de amparo en materia agraria, intentaron hacer valer estos y otros argumentos ante los tribunales federales, lo cual les fue favorable en algunos casos en donde se les concedió el amparo, como se vio en el capítulo anterior, o por lo menos les permitió retrasar la entrega de las tierras, con lo cual continuaron aprovechando y explotando sus recursos.

Además, hay que recordar que la pequeña propiedad contaba con protección constitucional desde 1917, de manera que ante la serie de reclamos por parte de los propietarios y de acuerdo con la política económica y social del momento, el presidente Lázaro Cárdenas otorgó protección a las tierras destinadas a la actividad ganadera, creándose los certificados de inafectabilidad en 1938. Extendiéndose unos años después, en 1946, al ámbito agrícola, con lo que quedaron protegidas las tierras destinadas a ambas actividades.

Será este el marco en el que diversos grupos y personajes inconformes con la prohibición del juicio de amparo retomen la discusión y propongan restituir su procedencia para proteger aquellas pequeñas propiedades o terrenos que contaran con un certificado de inafectabilidad, lo cual se conseguiría con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la república.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de los grupos que estaban favor y en contra del juicio de garantías? ¿Cómo se llevó a cabo la reforma constitucional que restituyó el amparo a la pequeña propiedad? ¿Cuál fue el impacto de los certificados de inafectabilidad en el Estado de México? y principalmente, en la práctica cotidiana del amparo ¿Cómo se utilizaron los certificados de inafectabilidad en los juicios? Son algunas de las interrogantes que se buscan responder, por lo menos de forma fragmentaria, en este capítulo.

Tomando en cuenta lo anterior, en las siguientes páginas se busca presentar un acercamiento al estudio de estas dos figuras poco trabajadas por la historiografía agraria mexicana: la pequeña propiedad y los certificados de inafectabilidad agrícola, a partir de su uso en un par de juicios de amparo promovidos en el Estado de México.

Siguiendo esta línea, se pone atención en uno de esos espacios en los que se discutió la regulación del juicio constitucional: el *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario*, destacando algunos de los argumentos principales del debate; en un segundo apartado, se estudia la reforma promovida por el presidente Miguel Alemán en 1946, así como la expedición de los certificados de inafectabilidad en su sexenio; en un tercer momento, se realiza breve balance del uso del juicio de amparo en el Estado de México en el periodo 1948-1960 y; cierra este capítulo con el estudio del conflicto entre los propietarios de la ex hacienda de La Luz y el ejido Chotejé en el municipio de San Felipe del Progreso, por ser un espacio en el que se utilizó el argumento de la pequeña propiedad y los certificados de inafectabilidad, como una de las principales pruebas en los amparos promovidos, pero también por la serie de actores inmiscuidos en este litigio.

4.1 El *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario* de 1945

Si bien no fue el primer espacio público en donde se discutió acerca de la necesidad de reformar la legislación agraria para otorgar protección a la pequeña propiedad y restituir el juicio de amparo, el *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario*, celebrado en la Ciudad de México del 4 al 17 de julio de 1945, si fue el más importante de la época. Este evento fue patrocinado por el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y coordinado por el Departamento Agrario, cuyo titular en ese momento era el abogado jalisciense Silvano Barba González,[2] quien dentro de la política había ocupado el cargo de diputado local y gobernador interino de su entidad, además de ser secretario particular y de

[2] Nacido en Jalisco en 1895. Fue diputado local, gobernador interino de su estado de julio de 1926 a febrero de 1927, rector de la Universidad de Guadalajara entre septiembre de 1928 y agosto de 1929. En 1934 como candidato presidencial, Lázaro Cárdenas lo nombró su secretario particular y una vez en el gobierno ocupó los cargos de jefe del Departamento Federal del Trabajo y Secretario de Gobernación, tocándole la expatriación de Calles. De 1939 a 1943 asumió la gubernatura de Jalisco y de 1944 a 1946 ocupó la jefatura del Departamento Agrario. En el periodo 1952-1958 fue senador por su estado y en 1967 se le designó asesor presidencial, muriendo ese mismo año. *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara* en http://enciclopedia.udg.mx/biografias/barba-gonzalez-silvano consultado el 08-03-22

gobernación de Lázaro Cárdenas. En el ámbito judicial, se desempeñó como juez de distrito en Monterrey, Guadalajara y Tepic, de 1929 a 1933.

El 27 de abril de 1945, el jefe del Departamento Agrario, expidió la invitación a los secretarios de Agricultura y Fomento y de Gobernación; al procurador general de la república; al jefe del Departamento de Asuntos Indígenas; a los secretarios generales de la Confederación Nacional Campesina y de la Sociedad Agronómica Mexicana; al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y; al Cuerpo Consultivo Agrario, para designar uno o dos representantes que integraran el Comité Organizador del Congreso de Derecho Agrario, con el fin de aprobar las bases, finalidad, temario y fecha de inicio de este acto.[3] Es evidente que en esta convocatoria se consideró a dependencias del ejecutivo federal, organizaciones sociales e instituciones académicas; quedando excluido el poder judicial,[4] pues hay que recordar que la reforma agraria quedó en manos de autoridades de carácter administrativo, siendo la máxima autoridad en la materia el presidente de la república, sumado a la prohibición del juicio de amparo en 1931.

Después de varias reuniones en las que se discutió todo lo relativo a la organización del evento, el 8 de junio de 1945 se expidió la convocatoria para el *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario*, cuyas finalidades buscaban:

> a) Recoger la experiencia de los Órganos Administrativos, conectados de algún modo con los trabajos y problemas de la distribución y explotación de la tierra, para recomendar las modificaciones que deben hacerse a la Legislación vigente, en el sentido indicado por esa experiencia.
> b) Aprovechar los conocimientos teóricos y doctrinales en materia de Derecho Agrario, que aporten los Congresistas, con el fin de perfeccionar la expresión jurídica de la Reforma Agraria, en sus diversas leyes.

[3] Por parte de la Secretaria de Agricultura y Fomento se nombró al licenciado Antonio Luna Arroyo y Carlos Andrade; de Gobernación acudieron los licenciados Perfecto Gutiérrez Zamora y Juan Fuentes Ibarrola; por parte de la Procuraduría General de la República asistieron los licenciados Antonio Ortiz Mena y Francisco Carpio; como representante del Departamento de Asuntos Indígenas acudió el Dr. Emmanuel Palacios y Gonzalo Dayo Estrada; como delegados de la CNC los licenciados Leopoldo Flores Zavala y Mario Souza; de la Sociedad Agronómica Mexicana, se nombró al ingeniero Norberto Aguirre; la UNAM nombró representante al destacado jurista, Lucio Mendieta y Núñez; el Departamento Agrario a su titular el licenciado Silvano Barba González, al ingeniero Heriberto Allera y al licenciado Eugenio Macouzet y; finalmente por el Cuerpo Consultivo Agrario acudió el ingeniero Luis G. Alcérreca.

[4] *Memoria. Primer Congreso*, pp. 21-22.

> c) Procurar que se forme criterio unitario respecto de la interpretación y aplicación de los más importantes conceptos agrarios constitucionales, del Código de la materia y de las Leyes que lo complementan.[5]

Con el fin de no dar lugar a que se creyera que el Congreso pretendía transformar los principios fundamentales de la reforma agraria, la convocatoria estableció que tendría un "carácter exclusivamente científico" y sus trabajos deberían orientarse "en un sentido revolucionario, pues lo que se busca es el mejoramiento de la Legislación Agraria creada por la Revolución Mexicana y de ninguna manera el anular las conquistas por ella logradas".[6]

En cuanto a los participantes, se establecieron delegados numerarios y colaboradores. Los primeros, serían acreditados por las secretarías o departamentos de estado cuyas actividades tuvieran relación con los temas que iban a tratarse; los representantes de agrupaciones campesinas, por conducto de su confederación nacional y; los acreditados por las instituciones invitadas por el comité organizador. Los delegados colaboradores serían aquellos designados por las instituciones oficiales o particulares, invitadas por el comité organizador; los representantes de organizaciones obreras que tuvieran carácter de nacionales, "registradas ante las autoridades correspondientes cuando menos seis meses antes de la fecha del Congreso, y que sean invitadas a concurrir y"; las personas a quienes el Comité Organizador acordara invitar.[7]

El congreso sesionaría en pleno y en comisiones. Las sesiones serían públicas y se aclaró que no podrían tratarse asuntos de política-electoral o religiosos y las conclusiones a las que llegara el congreso, serían entregadas como recomendaciones al presidente de la república.[8]

Iniciados los trabajos del evento, se declaró delegados numerarios a representantes del Departamento Agrario; de las secretarias de Agricultura y Fomento, Economía Nacional, Educación Pública, Gobernación, Salubridad y Asistencia Pública, Trabajo y Previsión Social; del Departamento de Asuntos Indígenas; del Banco Nacional de Crédito Agrícola; del Banco Nacional de Crédito Ejidal; de la Procuraduría General de la República; de la Presidencia de la República; de las Cámaras de Diputados y Senadores; de la Asociación

[5] *Memoria. Primer Congreso*, p. 54. Se ha respetado la redacción original.
[6] *Memoria. Primer Congreso*, p. 14.
[7] *Memoria. Primer Congreso*, p. 55.
[8] *Memoria. Primer Congreso*, p. 55.

Nacional de Abogados; de la Confederación Nacional Campesina (CNC); del Frente Socialista de Abogados; del Instituto Mexicano de Derecho; de la Liga de Agrónomos Socialistas; de las Nuevas Generaciones de Abogados; del Partido de la Revolución Mexicana; de la Sociedad Agronómica Mexicana; del Seminario Indigenista de México y; de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como delegados colaboradores participaron miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); del Instituto Indigenista Interamericano; del Sindicato de Abogados del Distrito Federal y de la Universidad Obrera de México.[9]

Si bien las dependencias y organizaciones presentes pueden reflejar una convergencia de actores sociales, como se puede ver en el siguiente cuadro, la mayor parte de los delegados fueron abogados, seguidos de los ingenieros. De ahí que en las discusiones se llegaran a abordar aspectos muy teóricos y técnicos de la disciplina.

Cuadro 8. Características de los delegados al Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario

Categorías	Abogados	Ingenieros	Profesores	Doctores	No profesionistas	**Total**
Numerarios	36	24	3	1	8	**72**
Colaboradores	4	0	1	1	4	**10**
Adjuntos	2	3	0	0	0	**5**

Fuente: *Memoria. Primer Congreso*, p. 66.

En este evento se presentaron 46 ponencias. Los temas discutidos fueron variados, todos relacionados con la materia agraria: reformas en materia fiscal, aguas, tribunales en la materia, juicio de amparo, dotación y organización ejidal; así como salubridad rural, protección forestal, redistribución de la población rural, crédito agrícola, cooperativismo y pequeña propiedad, entre otros.

Sin duda alguna, para esa década esos temas fueron de gran relevancia, ya que atendían aspectos particulares del problema agrario, pero en su conjunto buscaban consolidar los avances de la política agraria nacional y su implementación en los estados.

A pesar de lo relevante que puede ser para la historiografía agraria profundizar en cada uno de esos aspectos, en este caso se retoman únicamente dos de las discusiones

[9] *Memoria. Primer Congreso*, pp. 64-66.

relacionadas con el juicio de amparo y la pequeña propiedad. Dado que los debates fueron extensos, sólo se resaltan los argumentos centrales de la discusión y se mencionan los principales personajes que participan en ellos, sin precisar la delegación que representan, ya que algunos de los delegados estaban acreditados por dos organizaciones, como el caso del sociólogo y abogado especialista en derecho agrario, Lucio Mendieta,[10] quien entre otros cargos se desempeñó como consejero del Departamento de Asuntos Indígenas en 1936, de 1946 a 1948 como oficial mayor del Departamento Agrario y en 1960 fue director del Centro de Investigaciones Agrarias.

La primera ponencia relacionada con el tema se tituló, "Conveniencia de establecer en la ley de amparo vigente, mediante la reforma adecuada, que las autoridades federales deben resolver, con preferencia, los amparos en materia agraria". De acuerdo con la memoria, esta ponencia fue presentada por Lucio Mendieta quien proponía se introdujera en la ley de amparo una reforma con la siguiente redacción: "Los Jueces de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darán extraordinaria preferencia a la tramitación de los juicios de amparo en materia agraria que sean procedentes y los resolverán bajo su responsabilidad en un término perentorio".[11] Es claro que dicha reforma buscaba atender el rezago de los amparos en la materia.

Puesta a discusión la ponencia, la comisión encargada de la discusión la desechó argumentando que entraba en contradicción con la constitución y con el propósito del congreso. Mendieta puntualizó que predominaba la idea de que el amparo en materia agraria sólo procedía en favor de los grandes y pequeños propietarios, "y esto no es cierto; también los pueblos pueden pedir el amparo de la Justicia Federal. Hay muchas demandas en la Corte, en las que los núcleos de población luchan por defender sus derechos, y siempre tratan de que su caso se resuelva lo antes posible".[12] Dos ejemplos de lo dicho por Mendieta se tocaron en los anteriores capítulos.

---

[10] Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1895, sus trabajos jurídicos se centraron en el estudio del derecho agrario. En 1920 se tituló como licenciado en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, en donde posteriormente impartió clases de derecho agrario y sociología. Para 1939 asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en ese mismo año fundó la Revista Mexicana de Sociología. Falleció en la ciudad de México en 1988.

[11] *Memoria. Primer Congreso*, p. 397.

[12] *Memoria. Primer Congreso*, p. 402.

Llama la atención la intervención del licenciado Francisco Carpio (PGR), quien manifestó que la comisión no había interpretado debidamente la propuesta de Mendieta y argumento a favor de esta, en los siguientes términos:

> El artículo 27 de la Constitución establece que el amparo no es procedente contra las resoluciones presidenciales, caso genérico y preciso; pero la cuestión jurídica presenta tantos aspectos, que es imposible, en estos momentos, precisar cuáles circunstancias en particular, pueden afectar a los ejidatarios, a los núcleos de población o a los propietarios, y si dan o no motivos para que hagan procedente o improcedente el amparo. ¿Quién resuelve sobre esa procedencia? La Corte. Luego si la propuesta de Mendieta y Núñez, es dar celeridad al trámite de la Corte, ¿por qué vamos a perjudicar al campesino, negándole la rapidez en el despacho de su negocio?
> El campesino pide amparo. Entonces la Corte dirá rápidamente si tiene o no razón.[13]

Los razonamientos no fueron atendidos y como se mencionó, la proposición de Mendieta fue desechada.[14]

La segunda propuesta a resaltar y una de las más discutidas en el Congreso, o por lo menos así queda de manifiesto en las memorias, fue la ponencia titulada "Reformas al artículo 27 constitucional para hacer procedente el juicio de amparo en defensa de la auténtica pequeña propiedad".[15] Esta ponencia también presentada por el licenciado Lucio Mendieta y Núñez, tenía como propuesta central la procedencia del juicio de amparo únicamente en defensa de la pequeña propiedad; que no se concediera la suspensión del acto reclamado en este tipo de juicios para "no entorpecer el procedimiento agrario" y; que en el caso de que quien solicitara el amparo, no demostrara que se trataba de una pequeña propiedad, perdería "la tierra afectada en beneficio del pueblo interesado", se le impondría una multa y se le sancionaría "con pena de prisión inconmutable".[16] Es necesario hacer hincapié en la propuesta de Mendieta ya que pretendían imponer sanciones ejemplares a aquellos propietarios que intentaran evadir la aplicación de la reforma agraria, pero la proposición no prosperó.

En la visión del referido jurista existía una contradicción entre la parte final del párrafo tercero del artículo 27 constitucional que establecía el respeto a la pequeña propiedad agrícola en explotación y la fracción XIV del mismo artículo, que como ya se comentó en el

---

[13] *Memoria. Primer Congreso*, p. 403.
[14] Para profundizar en la discusión de este punto véase *Memoria. Primer Congreso*, pp. 397-403.
[15] *Memoria. Primer Congreso*, pp. 404-407. Para profundizar en la discusión de esta ponencia ver pp. 409-423.
[16] *Memoria. Primer Congreso*, p. 404.

capítulo anterior, fijó la prohibición del amparo tratándose de resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras y aguas. Para salvar esta confusión, proponía que de manera explícita se fijara en la constitución la procedencia del amparo a los pequeños propietarios.

La comisión encargada de dictaminar la ponencia, integrada por el senador Noé Lecona, el licenciado Miguel Mendoza López de la CNC y el licenciado Alejandro Martínez del Frente de Abogados Socialistas, resolvió rechazarla, entre otras razones, porque "el establecimiento del amparo en favor de los propietarios legalmente afectados, sería un retroceso en el camino de las conquistas agrarias, y un nuevo factor de desconfianza y de prolongación de las incertidumbres y perjuicios; ya que precisamente la experiencia de sus desastrosos resultados, invariablemente contrarios a los campesinos, fue la que motivó la reforma constitucional, para la supresión de tal recurso en esta materia".[17]

Al someterse a discusión el dictamen, Mendieta en una extensa exposición defendió su propuesta señalando de nueva cuenta lo que consideraba era una ambigüedad en el artículo 27 constitucional y destacando el papel de la pequeña propiedad en la reforma agraria y en la economía nacional.

Para el ponente, era necesario conciliar los intereses de ejidatarios y pequeños propietarios. En el caso de los primeros, su interés radicaba en que no se abusara del amparo, de los segundos, el respeto al párrafo tercero del artículo 27 y se preguntaba ¿cómo conciliar ambos intereses? La respuesta la encontró en establecer la procedencia del amparo para la pequeña propiedad, "pero con taxativas tales, que se tenga la absoluta seguridad de que únicamente serán los auténticos pequeños propietarios los que hagan uso de ese recurso".[18]

En el fondo de estos argumentos se encuentra la discusión sobre el papel de la pequeña propiedad en la reforma agraria. Sobre esto, Mendieta afirmó la necesidad de contar con esta "institución revolucionaria", siendo los pequeños propietarios una parte fundamental de esta etapa del reparto agrario

> pues no es posible de la noche a la mañana, poner totalmente la agricultura del país en manos de los ejidatarios, quienes no podrán sustituir, por su falta de experiencia, al latifundio, que, por malo que fuera, desempeñaba una función social. *Por ello se deseó la existencia de la pequeña propiedad como una situación transitoria*. Es también una institución legal, porque es institución de cultura en el campo, donde no hay clase media: la quisieron crear los

[17] *Memoria. Primer Congreso*, p. 407.
[18] *Memoria. Primer Congreso*, p. 413.

> Constituyentes por medio de la pequeña propiedad, para que con el ejemplo de ella, el campesino tuviese el deseo de mejoramiento.[19]

Bajo esta visión, el ejidatario debía aspirar a convertirse en pequeño propietario, ideas similares a las expresadas por Plutarco Elías Calles 15 años atrás.

Si bien la mayor parte de la argumentación se centró en elementos jurídicos, es posible encontrar algunos motivos de carácter económico. En este caso, Mendieta resaltó el grave estado de la economía del país y la necesidad del resurgimiento de la agricultura, "dando garantías a la pequeña propiedad; lo que se consigue únicamente mediante el amparo, que es la forma más perfecta de garantizarla".[20]

En ese momento, no es de extrañar la propuesta del multicitado jurista, ya que, de acuerdo con la política agraria establecida desde el gobierno Cardenista, tanto los ejidos como las pequeñas propiedades serían la base de desarrollo agrícola del país. No obstante, autores como Tzvi Medin, han planteado que el concepto de pequeña propiedad, aunque contaba con la legitimidad revolucionaria, "cubriría y escondería a menudo la acelerada conformación de la burguesía agraria mexicana, a la par que se daba el constante ataque al ejido colectivo y la relegación a un segundo plano del ejido general".[21]

En contra de los argumentos de Mendieta se manifestó el licenciado Miguel Mendoza López, uno de los delegados de la CNC, quien en su argumentación mencionó que no era la pequeña propiedad la que les preocupaba "sino la grande, la que se fracciona simuladamente. Este ha sido el obstáculo de la Reforma Agraria. Y de aquí que no podamos aceptar más el amparo como recurso general para los pequeños propietarios. Si ahora con una prohibición absoluta del amparo (prohibición redactada en términos claros), la Justicia Federal sigue interviniendo, ¿qué será cuando se diga que procede el amparo en favor de la pequeña propiedad?[22]

Mendieta le respondió defendiendo la pequeña propiedad, señalando que esta buscaba la creación de una clase media en el campo e incluso el presidente Cárdenas, "a quien no se podría tachar de reaccionario", había establecido la Oficina de la Pequeña Propiedad, "porque era revolucionario, quería que se respetara la Constitución, obra de la Revolución, y porque

---

[19] *Memoria. Primer Congreso*, p. 414. Las cursivas son mías.
[20] *Memoria. Primer Congreso*, p. 414.
[21] MEDIN, *El sexenio*, p. 124.
[22] *Memoria. Primer Congreso*, p. 417.

era campesino, sabía que es necesario conservar y sostener en el campo a la pequeña propiedad".[23]

Otro de los opositores a la propuesta de Mendieta, fue el senador por Guerrero, Nabor A. Ojeda, quien había sido primer secretario de conflictos de la CNC (1936-1940) y primer secretario general y fundador de la Liga de Comunidades Agrarias de su estado.[24] Ojeda expresó que: "mientras existan pueblos cercados de pequeñas propiedades, cuyos dueños traten de atacar los derechos de aquéllos por medio del amparo, debe negarse este recurso, porque tal cosa es preferible, a dejar morir de hambre a miles de campesinos". Reiteró que no era "del pequeño propietario de quien se recela, sino de los grandes, que siempre quieren desbaratar la Reforma Agraria. En los fraccionamientos de 'La Gavia', fueron los supuestos pequeños propietarios los que mataron más campesinos. Así, pues, con el amparo se perjudica a estos"; que si bien con la propuesta en discusión también se planteaba defender los derechos que tenían los campesinos a poseer ejidos, era "una cortina de humo, para beneficiar a los grandes propietarios" y; consideraba que las medidas propuestas para evitar los amparos que no fueran de pequeñas propiedades no serían eficaces "porque el dinero es suficiente para eludir los castigos y sanciones, y burlará siempre los derechos de los campesinos, aún con las medidas radicales que el Lic. Mendieta y Núñez propone para restringir el amparo".[25]

Mendieta respondió a esta argumentación de forma breve: "Rechazo, enérgicamente, las últimas palabras del Senador Ojeda. No he venido a tender ninguna cortina de humo, ni estoy al servicio de capitalistas ni de nadie. Creo, de manera sincera, que estoy sirviendo a los campesinos, cuando propongo la reforma del artículo 27 constitucional".[26]

Finalmente, el dictamen se sometió a votación rechazándose la propuesta de Mendieta. No obstante, un año después se establecería el amparo a la pequeña propiedad que contara con un certificado de inafectabilidad, tema que se profundiza páginas más adelante.

Una tercera ponencia que vale la pena destacar por ser una respuesta a los argumentos planteados por Mendieta con respecto al artículo 27, fue la presentada por el jefe del

---

[23] *Memoria. Primer Congreso*, p. 419.
[24] Nabor Ojeda nació el 12 de junio de 1894 en Ometepec, Guerrero. Se incorporó a la revolución en 1911 en apoyo a Madero y desempeñó diversos cargos políticos como diputado local (1931-1933), diputado federal (1937-1940, 1967-1970) y senador por Guerrero (1940-1946). CAMP, *Biografías de políticos*, p. 415.
[25] *Memoria. Primer Congreso*, p. 420.
[26] *Memoria. Primer Congreso*, p. 421.

Departamento Agrario, Silvano Barba González, titulada "Alcance de las fracciones XIV y XV del artículo 27 constitucional". En ella argumentó que si se deseaba obtener una "mayor claridad en los textos constitucionales de que se trata", la fracción XIV debería quedar redactada de la siguiente forma: "Los propietarios, sean de grandes o pequeños predios, afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubieren dictado en favor de los pueblos o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho de reclamar esta afectación ni en juicios ordinarios, ni en el extraordinario de amparo".[27] Como es de notar, la propuesta incorporaba la distinción entre grandes y pequeños propietarios para ser más explícita la causal. Barba basó su amplia argumentación en antecedentes históricos del surgimiento del juicio de amparo, del artículo 27 constitucional, diversos argumentos de los legisladores que aprobaron la prohibición del amparo en 1931 y algún criterio jurisprudencial de la Suprema Corte.

Contrario a lo ocurrido con la ponencia de Mendieta, la comisión dictaminadora aprobó la propuesta del jefe del Departamento Agrario y se puso a discusión el dictamen. El único que se opuso a la propuesta fue Lucio Mendieta, principalmente porque a pesar de explicitar la prohibición del amparo a grandes y pequeños propietarios, subsistía el párrafo tercero del artículo 27 que garantizaba la protección a la pequeña propiedad. A pesar de ello, la ponencia fue aprobada.

Los tres ejemplos presentados nos dan una idea de la existencia de por lo menos dos grandes posturas con respecto a la restitución del amparo en materia agraria al interior del Congreso, aunque como se verá en el siguiente apartado, estas dos visiones se habían manifestado en otros ámbitos de la sociedad y con la llegada de un nuevo gobierno, se llevaría a cabo la tan comentada reforma constitucional al artículo 27 constitucional.

Estas discusiones también dejan ver la posibilidad de que existieran diferencias entre Lucio Mendieta y Silvano Barba, ya que para el proceso de elaboración de la memoria del evento se dejó fuera a Mendieta quien había sido nombrado por el congreso como presidente de la comisión relatora. En un artículo publicado en *El Universal*, titulado "Memoria de un Departamento desmemoriado", Mendieta relató que fue excluido de su cargo, a pesar de haber concertado una reunión con el licenciado Silvano Barba, en donde intercambiaron "impresiones sobre la redacción y publicación de la Memoria", acordando una nueva reunión

[27] *Memoria. Primer Congreso*, p. 424.

que ya no se llevó a cabo. Según Mendieta, fue relegado por denunciar que en dicho documento se habían omitido diversos temas como la renuncia del senador Noé Lecona a presidir la Segunda Comisión por diferencias con algunos de los delegados que habían introducido "en las leyes agrarias modificaciones que abiertamente contradicen el más sensato criterio revolucionario y la interpretación elemental de la filosofía y la doctrina de nuestro movimiento renovador".[28]

Así mismo, las resoluciones del Congreso merecieron comentarios en la prensa. Fue el caso de Antonio Díaz Soto y Gama quien lo calificó de fracaso, lo que mereció la respuesta del Departamento Agrario desmintiendo tal afirmación y negó que la única forma de proteger a la pequeña propiedad fuera el juicio de amparo, pues la legislación establecía sanciones en contra de los funcionarios que la afectaran. El licenciado Mariano Alcocer describió el congreso como un espacio en donde se había sembrado "mayor odio entre los mexicanos", luchado "contra el bienestar de la Patria" e intentado "por todos los medios su empobrecimiento". Mientras que *El Universal* dedico varias editoriales al asunto, también calificándolo de fracaso.[29]

Independientemente de las críticas, este primer congreso sentó un precedente en el ramo, pues fue la primera vez que se discutía a profundidad la cuestión agraria de manera amplia entre las diversas dependencias encargadas de la materia. En el caso del amparo, la mayoría de los congresistas se inclinó por su prohibición, pero solo tuvo que transcurrir un año para que se retomara el punto en el Congreso de la Unión y se restituyera su interposición tratándose de pequeñas propiedades, el cómo se llevó a cabo ese cambio constitucional, es lo que a continuación se relata.

4.2 La pequeña propiedad, los certificados de inafectabilidad y la reforma de Miguel Alemán, 1942-1946

Es oportuno reiterar que desde el inicio de la reforma agraria los afectados utilizaron como uno de sus argumentos principales tanto en el procedimiento administrativo, como ante los juzgados federales, que sus terrenos se trataban de pequeñas propiedades, como se vio en los litigios presentados en el capítulo anterior.

[28] MENDIETA, *Política agraria*, pp. 117-121.
[29] MENDIETA, *Política agraria*, pp. 109-112.

Para conservar la propiedad y posesión de las tierras, algunas de las haciendas fueron fraccionadas de forma simulada entre familiares, empleados de confianza o prestanombres; en otros casos y ante el inminente avance de la reforma agraria, los hacendados decidieron vender algunas porciones para recuperar algo de lo que habían invertido en ellas y; finalmente, las dotaciones otorgadas a los pueblos vecinos provocaron que algunas de esas haciendas quedaran reducidas a pequeñas propiedades.

Independientemente de la causa que provocó la reducción de la superficie de haciendas y ranchos, cuando quedaron disminuidas a pequeñas propiedades de acuerdo con lo establecido por la constitución federal o la legislación agraria vigente y estas corrían el riesgo de ser afectadas, los hacendados no vacilaron y acudieron a la justicia federal para hacer valer su calidad de pequeños propietarios, incluso antes de la reforma constitucional de 1947. Un ejemplo de esto fue el caso de los propietarios de la Hacienda San Javier, visto en el capítulo tercero.

Esto permite proponer el análisis de la reforma del presidente Miguel Alemán, no como un hecho aislado, sino como parte de un proceso histórico de lucha, resistencia y negociación, que encabezaron distintos actores sociales, particularmente los propietarios de tierras, en la defensa de sus intereses. En ese sentido, este suceso es un episodio más de la lucha antiagrarista dentro del ámbito jurídico.

Para demostrar lo anterior, a continuación, se retoman algunos casos en que se propuso la restitución del juicio de amparo, previo a la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la república.

A nivel legislativo, la discusión con respecto a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo tratándose de pequeñas propiedades, se encontró presente en el Congreso de la Unión por lo menos desde 1938, lo que permite sugerir que la propuesta impulsada por Miguel Alemán fue únicamente la culminación de un proceso en el que se vieron inmiscuidos los distintos sujetos agrarios.

En 1938, los diputados Alfonso Francisco Ramírez, Jesús Guzmán Vaca, Ismael Falcón, Mariano Vázquez del Mercado, Agustín Franco Villanueva y Luis Viñals León, presentaron una iniciativa de reforma a la fracción XIV del artículo 27 constitucional para otorgar el amparo a la pequeña propiedad agrícola.

Uno de sus principales argumentos fue que los pequeños propietarios, eran indispensables, "para la vida y el desarrollo del país", existiendo la necesidad de unirlos con los ejidatarios, "a fin de que se ayuden mutuamente para lograr un mayor y mejor cultivo de la tierra. El Gobierno está interesado en ayudar a los ejidatarios, como lo está también para los pequeños propietarios, por lo que debe considerarlos igualmente como factores decisivos en la extinción del latifundio, ya que con su fuerza personal han contribuido a una mejor distribución de la propiedad".[30] Cabe recordar que en ese mismo año Lázaro Cárdenas creó la Oficina de la Pequeña Propiedad para dar cauce a los reclamos de los propietarios inconformes con la expropiación de sus tierras.

La propuesta no prosperó, pero la discusión con respecto al tema tampoco quedó cerrada y durante los siguientes años, tanto por resoluciones de la Suprema Corte, como por juristas, legisladores y distintas organizaciones, el debate continuó, teniendo su momento más álgido, como ya se vio, en 1945 con el *Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario* y entre fines de 1946 e inicios de 1947, con la reforma propuesta por el presidente Miguel Alemán. Por lo que se insiste en que esta reforma fue el punto culminante de un proceso de discusión y presiones de distintos grupos, que duró por lo menos una década.

Un ejemplo de lo antes mencionado fue la proposición del abogado Ángel Caso, quien en el mismo año de 1945, presentó al presidente Ávila Camacho una serie de bases para la ley sobre la pequeña propiedad en donde planteaba como principales puntos: que la pequeña propiedad fuera considerada de utilidad pública; que su extensión se fijara "atendiendo a las regiones económicas"; que los estados fijaran la extensión máxima y; que en caso de transgredirse esas disposiciones se sancionara al infractor "con pena corporal" y tratándose de autoridades, serían suspendidas de su cargo.[31] Lamentablemente se desconoce la recepción que tuvo esta propuesta.

De acuerdo con el trabajo de Sergio de la Peña y Marcel Morales, la discusión acerca del juicio de amparo tratándose de pequeñas propiedades, estuvo presente desde el inicio del sexenio de Manuel Ávila Camacho, debido al apoyo que el gobierno otorgó a los productores

[30] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 9, martes 20 de octubre de 1938 en http://cronica.diputados.gob.mx/
[31] CASO, *Derecho Agrario*, pp. 254-255.

privados, siendo un debate "apasionado en extremo por lo que se encendía, se debilitaba y volvía a encenderse".[32] No obstante, el debate no quedó resuelto en ese sexenio.

Otro espacio en donde se desenvolvió la pugna por el amparo en materia agraria obviamente fueron los tribunales federales. En algunos de los asuntos agrarios resueltos por la Corte, se concedió el amparo a los pequeños propietarios que contaban con certificados de inafectabilidad o que acreditaban el carácter de pequeña propiedad de sus tierras. Un par de ejemplos que sirven para ilustrar lo comentado ocurrieron en los primeros años de la década de los años cuarenta. En 1942, la SCJN concedió la protección de la justicia federal a Ignacio Chávez del Toro y Dolores Silva Viuda de Blanco, propietarios de los predios "El Abra" y "El Jaramillo", en el estado de Jalisco y para 1943, en el Estado de México, Sebastián Rivero, Porfirio Rivero y Concepción Quezada, promovieron juicio de amparo contra actos del presidente de la república, del jefe del Departamento Agrario y del presidente municipal de Ecatepec, siendo el acto reclamado la modificación de la resolución que había declarado la inafectabilidad de los ranchos de los quejosos, a favor de ejidatarios de San Andrés Chiconautla.[33]

No obstante, el criterio general de la Corte fue la no intervención del Poder Judicial de la Federación en materia de resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras o aguas, como quedó establecido en 1942 por medio de una jurisprudencia que reiteró la improcedencia del juicio de amparo en materia agraria. Llama la atención que el Ministro ponente de este criterio manifestó a la prensa que la pequeña propiedad debía ser "garantizada eficazmente; pero la conveniencia social de hacerlo por medio del amparo, cede ante la expresión categórica de la ley, ya que la función de la Suprema Corte es la de aplicarla en su letra y en su espíritu".[34] El ministro ponente fue Alfonso Francisco Ramírez,[35] abogado, escritor, político y diplomático que fue designado Ministro de la Suprema Corte en 1940 por

[32] DE LA PEÑA Y MORALES, *Historia de la cuestión*, p. 99.
[33] CABRERA, *La Suprema Corte… (1940-1946)*, pp. 84, 122.
[34] CABRERA, *La Suprema Corte… (1940-1946)*, pp. 85.
[35] Nacido en Oaxaca en 1896, Francisco Ramírez estudió la carrera de derecho en el entonces Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, de donde se graduó en 1919 y en donde también fue profesor de literatura y derecho. Ejerció el periodismo en diversos diarios de México, Colombia, Argentina y Estados Unidos; así como la elaboración de varias obras literarias e históricas de su estado natal. Fue diputado federal en cinco ocasiones entre 1924 y 1940, Ministro Plenipotenciario de México en Colombia y Juez Séptimo y Octavo Correccional, en la ciudad de México. Falleció en julio de 1979, *Ministros*, t. II, pp. 565-566.

el presidente Ávila Camacho y que en 1938 fue uno de los diputados que propusieron la reforma para conceder amparo a los pequeños propietarios.

El debate acerca del amparo también se ventiló en la prensa. Específicamente el licenciado Aquiles Elorduy,[36] seguidor de Madero que posteriormente se incorporó a las filas del constitucionalismo, además de detractor del Plan de Agua Prieta y uno de los miembros fundadores del PAN, declaró a *Excélsior* que era procedente el amparo "contra los ataques que sufría la garantía individual establecida en la fracción XV del artículo del artículo 27 de la Constitución, o sea, contra la pequeña propiedad".[37] Al decir del investigador Lucio Cabrera, la prensa en general apoyaba el amparo en esta materia, salvo *El Nacional*, periódico oficial del gobierno federal.

Un segundo intento de modificación constitucional ocurrió en octubre de 1946, días antes de la toma de posesión de Miguel Alemán y ya conocidas las resoluciones del Congreso de Derecho Agrario comentado. El 17 de octubre de 1946, un grupo de diputados del PAN encabezados por el ya mencionado, Aquiles Elorduy, presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional en los siguientes términos:

> Procederá el amparo de justicia de la Unión en materia agraria: *si el quejoso es una comunidad agraria, un ejidatario o un titular de pequeña propiedad agrícola en explotación o de tierras declaradas inafectables*, la suspensión lo mantendrá en posesión sin impedir el trámite agrario correspondiente en todo lo que éste no afecte a tal posesión; si el quejoso no estuviere comprendido en la numeración que antecede, la suspensión se limitará exclusivamente a mantenerlo en posesión hasta la recolección normal de los frutos pendientes, en los términos del párrafo tercero de la fracción anterior.[38]

Es de destacar que la propuesta tomaba en cuenta en el mismo nivel a actores colectivos como las comunidades agrarias, a sujetos individuales como los ejidatarios

---

[36] Nació en Aguascalientes en septiembre de 1875, estudio la carrera de derecho titulándose como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1903, se adhirió al Partido Nacional Antirreeleccionista en 1909, siendo partidario de Madero y opositor de Huerta por lo que fue encarcelado en 1913. Posteriormente se sumó al constitucionalismo, siendo detractor del Plan de Agua Prieta y de los posteriores gobiernos. Fundador del Partido Acción Nacional en 1939, en donde dirigió la revista "La Reacción", candidato a gobernador de su estado en 1944 y diputado federal por el PAN de 1946 a 1949, siendo uno de los primeros diputados panistas, sin embargo, fue expulsado en 1947, aparentemente por realizar declaraciones anticlericales. De 1952 a 1958 fue electo senador de Aguascalientes postulado por el PRI. Falleció en la ciudad de México el 5 de agosto de 1964, PÉREZ, *Índice biográfico*, pp. 230-231.

[37] CABRERA, *La Suprema Corte… (1940-1946)*, pp. 85.

[38] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 22, 18 de octubre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/ Las cursivas son mías.

(posiblemente ante el despojo de sus derechos agrarios) y a los pequeños propietarios por las expropiaciones que sufrían.

Dentro de los argumentos presentados por los legisladores, afirmaron que la supresión del amparo en materia agraria no solo había perjudicado a "quienes trabajan el campo", sino que había propiciado la arbitrariedad de las diversas instancias que decidían sobre los asuntos agrarios; y aún más, si en el pasado la razón de ser del cambio constitucional había sido la consumación de la reforma agraria, en ese momento tal argumento perdía validez "puesto que, según los mejores datos oficiales, se ha hecho ya la mayor parte de las afectaciones agrarias procedentes y, sobre todo, se ha formado un estado de opinión que favorecerá la aplicación ordenada y normal de la ley". Para este grupo de diputados quedaba claro que el contexto político y social era favorable para impulsar una reforma de este tipo, pues sin el ánimo de ser reduccionista, las dos posiciones con respecto a otorgar el amparo a los pequeños propietarios estaban delimitadas y no faltaría mucho tiempo para que se definieran ante la llegada de un nuevo gobierno.

Acaso un ejemplo de ese "estado de opinión" mencionado por este grupo de legisladores se refería a grupos como la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), quien había envió un documento a la Cámara de Diputados en el que proponía una serie de reformas al artículo 27 constitucional, con el objeto de proteger a la pequeña propiedad "que la propia Constitución creó parangonándola con el ejido y como la dual solución al problema agrario de nuestro país".[39]

A decir del investigador Horacio Mackinlay, la CNPP fue creada en marzo de 1946 "por iniciativa estatal para dividir al sector campesino encabezado por la CNC. También para ofrecer a los propietarios privados distanciados del partido gubernamental una alternativa a la reforma agraria. Su función principal era brindar a sus miembros asesoría jurídica y apoyo para bloquear o retrasar las acciones agrarias emprendidas en su contra".[40] Dentro de sus servicios jurídicos, la CNPP se encargó de tramitar los certificados de inafectabilidad que tanto fueron solicitados después de la reforma constitucional que a continuación se esboza.

---

[39] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 23, martes 22 de octubre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/

[40] MACKINLAY, "Los empresarios agrícolas, p. 128.

Por la forma en que caracterizaron a su organización vale la pena reproducir algunos fragmentos de la propuesta enviada a la Cámara de Diputados, fechada el 10 de octubre de 1946:

> *Nuestra organización es de trayectoria eminentemente revolucionaria*; nació de la unión de auténticos pequeños propietarios, agrupando, dirigiendo y protegiendo a una clase social, productora y de responsabilidad, que surgió al calor de nuestro movimiento social de 1910, ya que está constituida, en su mayoría, por el mediero de la antigua institución colonial de la hacienda, que era tan explotado, como lo fue el peón acasillado, y a quienes la revolución trató de emancipar, haciéndolos partícipes de una vida pública de mejoramiento, de derechos y de obligaciones hacia la colectividad; por eso al plasmar en los textos constitucionales los principios que sirvieron de norma, instituyó como básica para llegar a la reforma agraria, la *coexistencia de dos instituciones igualmente dignas de protección y ayuda por el Estado; el Ejido y la Pequeña Propiedad.*[41]

Luego entonces, el origen de la pequeña propiedad y de esta organización tenían el mismo carácter revolucionario que el ejido, por lo que ameritaba su misma protección e impulso.

Dentro de las propuestas formuladas por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, se encontraba el contar con representantes en el Cuerpo Consultivo Agrario y en las Comisiones Agrarias Mixtas, en virtud de que tanto ejidatarios como pequeños propietarios eran "los elementos fundamentales en que descansa la reforma agraria y, en esa forma, harán una coordinada defensa de los intereses de ambos sectores" y con ello evitar "que grandes propietarios bajo el sistema de fraccionamientos simulados, pretendan obtener la protección que exclusivamente debe corresponder a la pequeña propiedad, e iniciar la cordialidad en el campo, entre sus elementos productores, con una acertada e inicial garantía a los derechos que cada uno corresponden".

Y el conceder a "las comunidades ejidales que hayan sido dotadas, los ejidatarios que hayan recibido su parcela ejidal y los pequeños propietarios agrícolas que posean certificados de inafectabilidad agraria" el derecho al amparo. En este caso su principal argumento fue la "intranquilidad en la conservación patrimonial de la tierra", ante las posibles afectaciones que pudieran sufrir sus propiedades, lo que repercutía en la insuficiencia en la producción agrícola, por existir desigualdad legal en la materia.

---

[41] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 23, martes 22 de octubre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/ Las cursivas son mías.

En la misma sesión de la Cámara de Diputados en que se leyó la propuesta de la CNPP, se presentó una carta fechada el 19 de octubre de 1946, dirigida por la Liga Central de Comunidades Agrarias de la República, quienes manifestaron su oposición a la propuesta presentada por los diputados de Acción Nacional, particularmente a lo relacionado al amparo, señalaron que de aprobarse el proyecto comentado

> aparte de ir contra la médula de la Revolución en la vida social de México, se daría el paso más agigantado de retroceso y, con tal paso, -que el señalado no es demagogia -, se llevaría al pueblo a un nuevo, sangriento y costosísimo movimiento armado de reconquista.
> *En otras palabras, lo que ha costado sangre y lágrimas a los campesinos, como es la abolición del amparo y otros recursos en materia agraria, sería la mayor de las torpezas suprimirlo al sólo llamado de personas interesadas en que la Revolución Social de México sea un fracaso*.

Y finalizaban haciendo un llamado a defender la constitución y "defenderla es evitar que la enmienda proyectada se realice. Hay que evitar que en la fisonomía revolucionaria de la Constitución quede una cicatriz que hablaría de la derrota de la Revolución misma en materia agraria, cicatriz que se encargaría de borrar el pueblo. La enmienda constitucional dicha debe ser rechazada".[42]

De la revisión del *Diario de los Debates* de los días siguientes, no queda claro si la iniciativa fue atendida, sin embargo, en menos de dos meses y por iniciativa del presidente de la república, se facultó a los pequeños propietarios que contaran con predios en explotación solicitar el amparo de los tribunales federales, con lo que se abría un nuevo capítulo en la historia de esta figura jurídica**.**

Para entender la propuesta del presidente Miguel Alemán, es necesario contextualizarla en el México de la posguerra, en donde el país se enfrentaba a diversos problemas económicos como el saldo desfavorable de la balanza de pagos en 1946, que se cubrió con parte de las reservas bancarias; el aumento de la inflación y con ello, la elevación del costo del nivel de vida y; la disminución de la producción agrícola, entre algunos otros.[43]

La política económica de Miguel Alemán se centró en la industrialización del país y en el incremento de la producción agrícola. Ambos aspectos se encontrarían estrechamente unidos, "puesto que el incremento agrícola debería posibilitar el abastecimiento de materias

---

[42] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 23, martes 22 de octubre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/
[43] TOTO, *El amparo*, pp. 87-89.

primas a la industria de transformación, a la vez que el incremento de la renta percibida por los trabajadores del campo debería ampliar progresivamente la capacidad de consumo y el mercado interno de la nueva industria".[44] Bajo esta visión, la pequeña propiedad se convertiría en parte fundamental del proyecto industrializador del país.

Desde su campaña presidencial, Alemán esbozó su punto de vista sobre la pequeña propiedad. En una conferencia titulada *El problema nacional de la agricultura*, abordó temas como el crédito agrícola, "una sana política de precios", el transporte de los productos, la formación de organizaciones de pequeños agricultores y la construcción de escuelas rurales.

En cuanto al pequeño propietario, destacó que adquiría esa calidad por el número de tierras con las que contaba, existiendo variedad en ello, pues podría ir desde una hectárea hasta cien, siendo mayoría los que contaban con 10 hectáreas de extensión. Describió a esos pequeños propietarios en un "estado de indigencia tan palpable" y aunado a la inseguridad de su tierra, lo hacían, sin duda, "la más desamparada clase social de México".[45] Este argumento recuerda a la posición manifestada por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) con la que se inició este capítulo.

Para proteger la pequeña la propiedad, consideró necesario restituir el juicio de amparo como una forma "de restablecer una garantía constitucional, por una parte, y de crear, por otra, un ambiente que haga posibles el crédito y la inversión privados, en la tierra".[46] Dicha propuesta se convertiría en uno de los pilares del plan de desarrollo económico del alemanismo en donde trató de "impulsar una verdadera revolución agrícola por medio de la modernización del trabajo agrícola y las grandes obras de irrigación".[47]

Estas ideas fueron plasmadas en su programa de gobierno, poniendo énfasis en el desarrollo económico del país. En el caso de la agricultura, estableció que debía "orientarse hacia el incremento de la producción tanto de ejidatarios como de pequeños agricultores, encaminada a la obtención de artículos alimenticios, de materias primas para la industria y de productos para la exportación".[48]

---

[44] MEDIN, *El sexenio*, p. 104.
[45] "Novena Conferencia de Mesa Redonda. El problema Nacional de la Agricultura", Universidad de San Nicolás, Morelia, Michoacán, febrero de 1946, en PARRA, *Conferencias*, p. 148.
[46] PARRA, *Conferencias*, p. 149.
[47] MEDIN, *El sexenio*, p. 123.
[48] ALEMÁN, *Programa de gobierno*, p. 19.

Esa producción se enfocaría en maíz, frijol, trigo, azúcar, entre otros productos base de la alimentación de la población; en la producción de las materias primas de origen vegetal necesarias para la industria, como aceites y celulosa; en el aprovechamiento de zonas tropicales con cultivos para la exportación como plátanos y cítricos y; el fomento al cultivo de árboles frutales.[49]

Concretamente para el incremento de la producción agrícola, propuso la ampliación de campos experimentales para el desarrollo de nuevas semillas; la fabricación y distribución de fertilizantes; la instalación de centrales de maquinaria agrícola; el mejoramiento en el combate y erradicación de plagas y enfermedades agrícolas y; el estímulo a los ejidatarios y pequeños agricultores para organizarse en asociaciones o cooperativas.[50]

Por lo que toca a la reforma agraria, precisó que se debía continuar con la política agraria de dotaciones, restituciones, ampliaciones, creación de nuevos centros de población y colonización; la entrega de certificados agrarios para los ejidatarios que ya contaran con parcelas; continuar con el deslinde de ejidos y tierras comunales; un mejor funcionamiento del crédito y; la electrificación del medio rural "para llevar al hogar campesino las comodidades que brinda la civilización, contribuir a la modernización de la técnica agrícola y a la creación de la pequeña industria rural". Para el entonces candidato, era claro que como la industrialización del país dependía "para tener buen éxito, de la capacidad adquisitiva del campesino, el Estado velará porque el campo se convierta en un gran mercado para los productos de la industria".[51]

También se refirió a la pequeña propiedad, considerando "un deber revolucionario e ineludible, mantener la inafectabilidad efectiva de la auténtica pequeña propiedad rural y simplificar los procedimientos para la expedición de los títulos que la garanticen".[52]

Siguiendo esta política, el 3 de diciembre de 1946, y ya como presidente de la república, Miguel Alemán envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a las

[49] ALEMÁN, *Programa de gobierno*, p. 19-20.
[50] ALEMÁN, *Programa de gobierno*, p. 20-21.
[51] ALEMÁN, *Programa de gobierno*, p.23
[52] ALEMÁN, *Programa de gobierno*, p.24

fracciones X, XIV y XV del artículo 27 constitucional.[53] En la exposición de motivos,[54] le dio mayor peso a la situación económica como el principal factor para justificar su propuesta.

Dentro de la visión del ejecutivo federal, la reforma agraria estaba dividida en dos etapas condicionadas por el proceso histórico que había vivido el país. Una "dirigida a quebrantar al poder político, económico y social de los latifundistas" y la segunda que tenía "que caracterizarse por ser técnica, al encaminarse a superar la situación económica y moral del trabajador del campo"; así como al aumento de la producción agrícola.

Para el presidente, en ese momento la base económica de la explotación agrícola del país lo constituían la propiedad ejidal y la pequeña propiedad, de ahí la necesidad de proteger a los pequeños propietarios ante una posible afectación derivada de un proceso de dotación o restitución de tierras o aguas en donde se vieran afectados. Este argumento lo sustentaba en el propio artículo 27 constitucional fracción XV, el cual mandataba a las autoridades agrarias a no afectar en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola en explotación, de lo contrario, incurrirían en responsabilidades, por violar el precepto constitucional. Vale la pena señalar que esta reforma fue establecida por el presidente Abelardo Rodríguez en 1934.

Apuntó en la iniciativa que la reforma de 1931 que prohibía interponer el juicio de amparo había tenido un carácter transitorio para "simplificar los trámites y formalidades agrarias así como para reducir hasta donde fuera posible los procedimientos que podrían estorbar el reparto agrario", en un momento en el que los latifundios caracterizaban a la economía agrícola y cuando el reparto de tierras "exigía un ritmo acelerado", pero para 1947, la reforma agraria se encontraba en otro momento, una etapa "que podríamos llamar como económica", en donde lo prioritario era el desarrollo de la agricultura, vinculada al desarrollo económico y social del país.

Si el propósito de esta nueva etapa era "el mejoramiento económico de la gran masa campesina", este se encontraba condicionado por la política del reparto agrario y "por el respeto a la auténtica pequeña propiedad". Para lograr esa protección, se contaría con los certificados de inafectabilidad, pero se necesitaba la vía del amparo para evitar casos de privación ilegal de pequeñas propiedades.

---

[53] De 1917 al año 2021, el artículo 27 constitucional ha sufrido 20 reformas, la de 1947 fue la quinta de ellas y la última ocurrió en 2016.

[54] "Iniciativa de reformas" en *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 35, jueves 5 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/

En este caso, el poseer un certificado de inafectabilidad se convertiría en el requisito necesario para acudir al amparo, "ya que la expedición de aquéllos es el reconocimiento, de parte del Estado, de que efectivamente se trata de una auténtica pequeña propiedad". [55]

De esta forma quedaba garantizada la protección a los auténticos pequeños propietarios y se mantenía la limitante a los grandes terratenientes.

La reforma propuesta en cuanto al juicio de amparo se estableció en la fracción XIV del artículo 27 constitucional en los siguientes términos: "Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos a los que se haya expedido, o en lo futuro se expida, certificados de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas".

Cabe señalar que en la fracción XV se propuso la definición de pequeña propiedad agrícola a aquella que no excediera de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras, es decir, una hectárea de riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos. También serían consideradas como pequeña propiedad las superficies que no excedieran de 200 hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptible al cultivo; de 150 cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300 cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, o árboles frutales.

Además, se tomaba en cuenta a la pequeña propiedad ganadera, que, si bien no es objeto de estudio en este trabajo, es importante mencionarla por contar también con certificados de inafectabilidad, en este caso, se consideraba a la que no excediera "de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor". Este aspecto fue determinante en los estados del norte del país, no así en los del centro como el Estado de México.

Finalmente, el último supuesto estableció que cuando el propietario o poseedor de una pequeña propiedad que contara con un certificado de inafectabilidad "realizara obras de riego, drenaje o cualquiera otras", por las cuales se mejorara la calidad de las tierras "para la

[55] "Iniciativa de reformas" en *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 35, jueves 5 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/

explotación agrícola o ganadera", dicha propiedad no podría ser afectada "aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida", rebasara las extensiones máximas establecidas por la ley.

La iniciativa fue turnada a la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en ese momento constituida por Ramón V. Santoyo, Luis Díaz Infante y Ernesto Gallardo, quienes presentaron su dictamen retomando de forma íntegra la propuesta presidencial, únicamente incorporando las palabras "en explotación", para referirse a la predios agrícolas o ganaderos tanto en la fracción XIV como en la XV. Lo cual tuvo gran relevancia, pues se buscaba que las tierras fueran productivas.

Presentado el proyecto de reforma al pleno de la Cámara se suscitó una larga discusión. En todas las intervenciones, independientemente de la postura con respecto a la iniciativa, se marcó el carácter revolucionario de la misma, de los propios diputados y del presidente de la república. La iniciativa fue aprobada en lo general por unanimidad de 125 votos y se discutió en lo particular cada una de las fracciones. De los distintos oradores, se rescatan las participaciones que se consideran más relevantes por los argumentos presentados.

La primera intervención que se retoma es la del diputado Jesús Aguirre Delgado,[56] quien estuvo a favor de la reforma y presentó un breve análisis de la situación del mundo rural del momento. Inició señalando que el problema fundamental que afectaba a los mexicanos era el problema agrícola, no por su impacto económico, pues la producción agrícola era solo del 19% "de la producción total del país", sino porque 65% de la población vivía de la agricultura.

Resaltó la importancia de 1 185 000 pequeños propietarios, que para ese momento poseían "cuatro millones setecientas mil hectáreas de temporal y novecientas setenta mil de riego". Motivo por el cual era necesario otorgarles "el derecho de amparo para evitar lesiones en sus propiedades que pudieran gestar en la conciencia pública una desconfianza hacia las fuentes objeto de crédito. Por esto y porque el programa del Gobierno es eminentemente técnico, por esto es que la resolución del problema desde el aspecto jurídico, desde el aspecto económico y desde el aspecto social se plantea en forma numérica".

[56] "Dictamen de la Segunda Comisión", *en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados,* núm. 39, 12 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/.

El argumento principal del diputado Aguirre fue la defensa de la pequeña propiedad, resaltando que al igual que el ejido, había sido creación de la revolución.

Como se ha reiterado, el punto más polémico de la discusión fue la modificación a la fracción XIV del artículo 27. La iniciativa proponía el otorgar el amparo a todos aquellos poseedores o propietarios de tierras agrícolas o ganaderas en explotación, que contaran con un certificado de inafectabilidad. En su intervención, el diputado Blas Chumacero[57] preguntó a la comisión dictaminadora el alcance jurídico de las palabras "dueños o poseedores". La respuesta del diputado Ramón Santoyo es ilustrativa por describir algunas de las situaciones que se vivían en el mundo rural mexicano de mediados del siglo XX:

> En el campo ocurre, señores, que no todos los individuos que son pequeños propietarios tienen efectivamente una titulación capaz de dirimir una contienda jurídica, y precisamente en eso consiste una de las grandes dificultades para los pequeños propietarios. No se imaginen ustedes, naturalmente, que el pequeño propietario es un individuo que tiene un gran establo con vacas, alfalfa, y en consecuencia, un hombre en posibilidad de titular debidamente su terreno; no; ese tiene mucho cuidado en tener listo sus papeles; pero los pequeños propietarios que están abarcados por la palabra "poseedores" para los fines prácticos de esta fracción, son aquellos que han hecho lo que es muy frecuente en el campo: empeñar las escrituras, lo que creen que constituye una hipoteca sobre el terreno, lo cual es falso. Luego, se pierden las escrituras, y de generación en generación aquellos hombres son dueños solamente en forma tradicional de sus pequeñas propiedades. Y esto ocurre con tres, cuatro, siete o diez hectáreas generalmente en los aledaños de la población.[58]

Otro de los temas que causó mayor controversia fue lo relacionado con los certificados de inafectabilidad. Si bien se trataba de una figura establecida desde el periodo cardenista, el hecho de que fuera el requisito previo para poder interponer el amparo suscitó una discusión interesante entre los diputados.

El principal opositor a esta fracción fue el diputado Miguel Ramírez Munguía. El punto fundamental de controversia fue que en el proyecto no se contemplaba que la pequeña propiedad estuviera en explotación, sino solo que se contara con el certificado de

---

[57] Nacido el 18 de enero de 1908 en Puebla, fue diputado federal (1940-1943, 1946-1949, 1952-55, 1958-1961, 1967-1970) y senador (1976-1982) por su estado; secretario de Acción Laboral del CEN del PRI (1964-1982); además de ocupar varios cargos en la CTM, como Secretario de Organización (1943-1946), presidente del Comité de Justicia (1955-1962) y Secretario del Trabajo (1962), CAMP, *Biografías de políticos*, pp. 147-148.

[58] "Dictamen de la Segunda Comisión", en *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 39, 12 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/.

inafectabilidad. En este caso, se trataba de un cambio en los requisitos establecidos por la norma.

Para Ramírez, el certificado como requisito debía suprimirse porque existían casos en los que los "poseedores" de pequeñas propiedades no contaban con ellos por no poder acreditar la propiedad sobre la tierra. En ese caso, quedarían excluidos de la protección de la justicia federal y preguntó al pleno: "¿qué se hará en nuestra patria en favor de esas personas que aquí se han mencionado y que son aquellas que no tienen una titulación correcta, aquellos que no tienen una hectárea de tierra que es la que constituye su pequeña propiedad y que solamente tienen la posesión, ya no digamos por una generación, sino por dos o tres y que no pueden en manera alguna solicitar su certificado de inafectabilidad por carecer de esas escrituras?"[59] Para evitar ese tipo de conflictos, bastaba con un solo requisito y ese sería el demostrar que las tierras se encontraban en explotación.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Antonio Rodríguez,[60] del Partido Acción Nacional (PAN), quien propuso dos vías para sustituir el certificado; por un lado, pensaba en otorgar el amparo de manera directa, pero sin que se detuviera el trámite agrario, la segunda vía coincidía con la postura de Munguía, solicitar únicamente el requisito de la pequeña propiedad en explotación. Finalmente, los argumentos de ambos legisladores no fueron tomados en cuenta y está fracción se aprobó por unanimidad de acorde con el dictamen.

La siguiente fracción que se sometió a discusión contemplaba las definiciones de pequeña propiedad y la serie de cultivos en explotación que quedarían protegidos. Aquí no existió mayor discusión, salvo la propuesta de Miguel Ramírez Munguía, quien solicitó la adición del cultivo del zacatón, que era de "gran importancia en la industria" pero no estaba contemplado; así como "los terrenos en donde hay plantíos de magueyes, que vienen a ser, en la actualidad, un renglón de grandes ingresos en varias entidades federativas del país. Para

[59] "Dictamen de la Segunda Comisión", en *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, núm. 39, 12 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/.

[60] Nacido en Monterrey, Nuevo León en 1899, gran parte de su vida laboró en distintas empresas financieras y comerciales como la Cámara de Comercio de Monterrey (1930-1936) o el Banco Industrial de Monterrey. Fue uno de los miembros fundadores del PAN del que fue Consejero Nacional de 1947 a 1975 y en 1946 electo diputado federal, siendo uno de los cuatro primeros diputados federales de ese partido en su historia, PÉREZ, *Índice biográfico*, pp. 666-667.

la raíz de zacatón, que señalen trescientas hectáreas, y para el maguey, seiscientas".[61] En el amparo que se reconstruye más adelante, la raíz de zacatón toma importancia por ser el principal producto que se explotaba en la región de estudio.

La propuesta de Ramírez quedó desechada y la fracción XV del artículo 27, también fue aprobada por unanimidad.

El proyecto pasó al Senado en donde se aprobó sin mayor contratiempo y el artículo 27 constitucional se modificó estableciendo en la fracción X una superficie o unidad individual de dotación no menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras; en la fracción XIV se dejó subsistente la prohibición del amparo a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, exceptuando a "los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido, o en futuro se expida, certificados de inafectabilidad", quienes podrían promover el amparo "contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas" y; en la fracción XV se estableció la definición de pequeña propiedad en los términos propuestos por el presidente.[62] Con esta modificación el certificado de inafectabilidad se convirtió en el documento clave de los propietarios para hacer vales sus derechos.

Aprobados estos cambios constitucionales, surgieron algunas voces disidentes; por un lado, los que planteaban la reforma como una regresión, como una contrarreforma que perjudicaría el reparto de tierras y; por otro lado, otra postura principalmente de abogados en un sentido más técnico-jurídico.

Una de esas voces fue la de Lucio Mendieta, que, si bien en el congreso de 1945 había propuesto la protección de la pequeña propiedad y con ello el otorgamiento del amparo, se manifestó en contra del concepto de pequeña propiedad y de la forma en que se había establecido la institución jurídica. Con respecto a la pequeña propiedad dijo que para fijar su extensión debía tomarse en cuenta la productividad de la tierra y no el número de hectáreas, "mientras mayor sea la productividad, debería ser menor la extensión y no al contrario".[63] Afirmaba el mismo Mendieta, que los fines de la pequeña propiedad eran económicos y

[61] "Dictamen de la Segunda Comisión", *en Diario de los debates de la Cámara de Diputados,* núm. 39, 12 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/.
[62] "Decreto de reformas", *Diario Oficial*, 12 de febrero de 1947, p. 2.
[63] MENDIETA, *El problema*, p. 415.

sociales. En cuanto al amparo, señaló que la forma de atender el problema no fue la adecuada y era contraria a la esencia del amparo, ya que su interposición se supeditó a contar con un requisito previo, es decir, con un certificado de inafectabilidad expedido por el Departamento Agrario, la misma autoridad responsable de la afectación.[64]

Un tema de esta relevancia para la política agraria del gobierno federal también contó con el respaldo de organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), de los gobernadores, los secretarios generales de las ligas de comunidades agrarias y de la propia Confederación Nacional Campesina (CNC), quien, en voz de su secretario general, Gabriel Leyva Velázquez,[65] "hizo una elaborada justificación con un vocabulario marxista, de las reformas agrarias de Alemán, de su argumentación desaparecieron las bélicas amenazas que durante un lustro hizo a quienes pretendieran conceder el recurso del amparo a los pequeños propietarios" y señaló que el país no tenía otro camino que el del "intensivo y amplio incremento del capitalismo".[66] Desgraciadamente, en la documentación revisada no se encontraron referencias con respecto a la respuesta o recepción de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de México o alguna otra organización agraria de la entidad, ante la restitución del amparo a la pequeña propiedad.

Otro crítico a la reforma fue Narciso Bassols, quien señaló que el problema de la reforma constitucional consistía en que en un país como México, existía "tanta corrupción" que se podía prever que los propietarios de grandes extensiones de tierra obtendrían "protección ilegitima para ellas, sin siquiera sembrarlas con los cultivos protegidos por la ley".[67] Es posible que con una meticulosa revisión de los archivos se pueda profundizar en los casos en que se simuló la producción de cultivos para proteger los latifundios, lo cual escapa al propósito de este apartado.

El cambio constitucional se implementó y no se hizo esperar el cúmulo de solicitudes de los propietarios para obtener un certificado de inafectabilidad. De acuerdo con cifras del Departamento Agrario, en el sexenio de Miguel Alemán se otorgaron un total de 93 826

---

[64] MENDIETA, *El problema*, p. 416.
[65] Nacido en Sinaloa el 30 de junio de 1896. Se unió a la revolución desde 1911, en 1913 combatió a Huerta formando parte de las fuerzas de Obregón y obtuvo varios grados militares (general de brigada en 1946 y posteriormente general de división). Fue diputado federal (1937-1940) y senador por su estado (1940-1946, 1970-1976); así como gobernador de 1957 a 1962. Ocupó la presidencia del CEN del PRI (1952-1956) y la secretaría general de la CNC (1942-1947).
[66] GONZÁLEZ, *La Confederación*, p. 129.
[67] MEDIN, *El sexenio*, p. 126.

certificados de inafectabilidad agrícola (ver cuadro 9). El 87.69% representó certificados que avalaban propiedades de 1 a 10 hectáreas, el 7.70% extensiones de 10 a 100 hectáreas y únicamente el 4.61% predios de más de 100 hectáreas.[68]

Cuadro 9. Número de certificados de inafectabilidad agrícola expedidos en el gobierno de Miguel Alemán, 1947-1952

Años	0.1 a 5 ha	5-10 ha	10-50 ha	50-100 ha	100-200 ha	Más de 200 ha	**Total**
1947	1 524	208	784	952	639	411	4 518
1948	5 775	524	964	553	497	404	8 717
1949	16 874	536	813	747	434	476	19 880
1950	14 995	526	664	488	329	320	17 322
1951	19 783	327	430	341	239	272	21 392
1952	20 822	287	258	225	173	132	21 997
Totales	**79 773**	**2 508**	**3 913**	**3 306**	**2 311**	**2 015**	**93 826**

Fuente: *Seis años de labor*, p. 32.

De los acuerdos de inafectabilidad agrícola emitidos en el primer año del sexenio, la mayor parte fueron para los estados de Jalisco (356), Guanajuato (288) y Sinaloa (111). Mientras que, para el año de 1952, los estados con mayor número de acuerdos fueron Guanajuato (113), Jalisco (106) y Veracruz (60).[69]

En el caso del Estado de México, se obtuvieron 320 acuerdos de inafectabilidad en esos seis años, que amparaban a poco más de 33 000 hectáreas. Para tener una idea de si hubo ruptura o continuidad en este tema, vale la pena realizar la comparación con los sexenios anteriores.

De acuerdo con la memoria 1945-46, publicada por el Departamento Agrario, entre 1938 y 1945, se habían expedido en el país 11 997 acuerdos de inafectabilidad agrícola, que protegían poco más de 1 118 958 hectáreas, en los años cardenistas se entregaron 1 396 acuerdos de inafectabilidad y el resto en el periodo del presidente Ávila Camacho. De estos acuerdos, 332 correspondieron al Estado de México (2.76%), amparando 40 055-22-79 hectáreas (ver siguiente cuadro).

[68] *Seis años de labor*, p. 33.
[69] *Memoria de Labores*, s.f.

Cuadro 10. Acuerdos de inafectabilidad agrícola en el Estado de México, 1938-1945		
Año	Acuerdos	Hectáreas
1938	1	60-70-11
1939	14	2 341-92-25
1940	68	15 487-86-16
1941	84	3 161-23-65
1942	61	7 720-97-75
1943	16	2 650-56-07
1944	47	6 542-80-03
1945	41	2 089-16-77
Total	**332**	**40 055-22-79**

Fuente: elaboración propia con base en *Memoria, 1945-46*, p. 284

No obstante, si se revisan estos datos por periodos presidenciales, existe una diferencia de 54 acuerdos más, suponemos que este número corresponde a los comprendidos a los últimos meses del gobierno de Ávila Camacho, ya que en la estadística se menciona que para los meses de agosto a noviembre de 1946 se realizó un estimado (ver siguiente cuadro):

Cuadro 11. Acuerdos de inafectabilidad agrícola por periodo presidencial, Estado de México		
Periodo	Número de acuerdos	Superficie
1 dic 1934 al 30 de nov 1940	83	17 890-48-52
1 dic 1940 al 30 de nov 1946	303	26 316-51-73
Total	**386**	**44 207-00-25**

Fuente: elaboración propia con base en *Memoria, 1945-46*, p. 310.

Como se ha dicho, en diciembre de 1946 se facultó a los propietarios que contaran con un certificado de inafectabilidad acudir al juicio de amparo. Para efectos del presente apartado vale la pena nuevamente recurrir a las cifras para darse una idea del posible impacto de la reforma constitucional en la expedición de certificados de inafectabilidad en el Estado de México (ver cuadro 12). Cabe señalar que en este caso las memorias del Departamento Agrario consignan los datos para el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto del siguiente año.

Cuadro 12. Acuerdos de inafectabilidad agrícola, Estado de México, 1946-1952[70]		
Periodo	Acuerdos	Propietarios
1946-1947	68	147
1947-1948	104	104
1948-1949	53	53
1949-1950	48	48
1950-1951	32	35
1951-1952	15	21
Total	**320**	**408**

Fuente: elaboración propia con base en las memorias del departamento agrario de 1946 a 1952.

Al comparar las cifras de los acuerdos de inafectabilidad expedidos en los periodos presidenciales de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, con los del sexenio de Miguel Alemán, el número fue mayor en el periodo de 1936 a 1945. Estos números permiten sugerir que, para el caso del Estado de México, la reforma de Miguel Alemán no tuvo el mismo impacto que en otras entidades, y se dio continuidad a una política que ya se estaba implementando. Aunado a que para este periodo el gobierno estatal le dio prioridad a la industrialización y el reparto de tierras se encontraba casi concluido. Sobre la relación entre reforma agraria e industrialización se profundiza en el siguiente capítulo.

Lo que es evidente es el aumento en el número de hectáreas protegidas en el estado, mientras que con Cárdenas fueron 17 000 y con Ávila Camacho, poco más de 26 000; con Miguel Alemán se habla de casi 33 000 hectáreas y en los siguientes cinco años alrededor de 14 000. Estas cifras permiten reiterar la hipótesis de que, en el caso del Estado de México, la política de protección a la pequeña propiedad presenta continuidades por lo menos en cuatro sexenios presidenciales, siguiendo los postulados establecidos en las constituciones, federal y estatal, desde 1917. En contraste, más o menos para el mismo periodo del gobierno de Miguel Alemán, el gobernador Alfredo del Mazo Vélez otorgó únicamente 17 163 hectáreas para 806 beneficiados,[71] es decir, alrededor del 52% del número de hectáreas protegidas.

Diversas reacciones surgieron con la reforma constitucional en marcha. Algunas voces la denunciaron como un recurso utilizado por los grandes hacendados, que utilizaron

[70] En la memoria 1948-1949 se establecen 54 acuerdos de inafectabilidad, siendo uno en sentido negativo, por lo que se recupera el número de resoluciones positivas. En los años de 1950-1951, se consignan un total de 35 certificados, que suponemos corresponde al número de propietarios beneficiados, caso similar de 1951 a 1952, en donde se observaron un total de 21 certificados.

[71] AGUADO, *Una mirada*, p. 98.

la "etiqueta de pequeños propietarios", para detener el reparto de tierras, y sobre todo para "reconstruir un nuevo latifundismo, con especiales características, como los discontinuos fraccionamientos dispersos, y en otros casos el familiar, este último por el que un solo apellido ampara a diversas propiedades de tierra".[72] Tal fue el caso de la región de los valles agrícolas de Culiacán y del Yaqui/Mayo, al noroeste del país, en donde este tipo de fraccionamientos posibilitó "el florecimiento de explotaciones agrícolas a gran escala, de extensión superior a la permitida por la legislación agraria".[73] Caso contrario a lo ocurrido en el Estado de México, pues como ya se dijo, el reparto de tierras prácticamente estaba agotado para mediados del siglo XX, lo cual no impidió que los pequeños propietarios buscaran la obtención de estos certificados, en un contexto en que la política agraria se encontraba en un segundo plano, ya que el gobierno estatal le había dado prioridad a la industrialización, en el siguiente apartado se profundiza sobre este punto.

Una parte de la historiografía de la reforma agraria coincide en que el periodo alemanista significó para la historia rural mexicana del siglo XX, el nacimiento de un neolatifundismo, caracterizado por la "consolidación de nuevas unidades productivas organizadas en algunos casos por ex hacendados, y en otros por políticos y funcionarios del gobierno, fundamentalmente en zonas de riego", a estos supuestos nuevos propietarios, se les llamó "campesinos naylon".[74]

Luego entonces, el certificado de inafectabilidad se convirtió en un poderoso medio de los propietarios para preservar sus tierras. Por todos los medios posibles buscaron obtener ese documento, recurriendo a un trabajo de cabildeo y "hasta lambisconería" con diversas autoridades como caciques locales, gobernadores o "cualquier conocido en el gobierno",[75] hasta que se consiguiese la valiosa firma del presidente de la república, máxima autoridad agraria del país. Incluso, como ya se mencionó, la propia CNPP se encargó de gestionar en distintas entidades estos certificados.

---

[72] GONZÁLEZ, *La revolución social*, p. 393.
[73] ABOITES, *Los últimos años*, pp. 89-90.
[74] DE LA PEÑA, *Historia*, p. 145.
[75] GARCÍA, "El certificado", p. 589.

Imagen 2
Anuncio de la CNPP



Fuente: *El Informador*, martes 8 de agosto de 1950, p. 6.

Sin duda, esta generalidad puede ser confirmada o rechazada, con un minucioso trabajo en los archivos estatales, labor que rebasa por mucho esta investigación, no obstante, un punto de comparación y aproximación al impacto que tuvieron los certificados de inafectabilidad en la protección de las haciendas, lo aporta Mario Ramírez Rancaño, quien para el caso de Tlaxcala ha señalado que se vivió la fiebre de los certificados de inafectabilidad, encontrando que algunos dueños de haciendas gestionaron cinco o más con el propósito de "retener la máxima cantidad de tierra".[76] Su análisis abarca el periodo de 1940 a 1970, tiempo durante el cual fueron amparados 273 predios con certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, que protegieron 78 823 hectáreas, lo que representó un 19.5% de la superficie total de la entidad.

Una vez que se tiene el panorama general de cómo se restituyó el amparo a la pequeña propiedad; algunos de los argumentos a favor y en contra de la reforma y; un esbozo de la importancia de los certificados de inafectabilidad agrícola, toca adentrarse al tema de nuestro objeto de estudio, el juicio de amparo.

4.3 El juicio de amparo y la pequeña propiedad en el Estado de México, 1948-1960

Al igual que en los capítulos anteriores, no se busca dar por agotado el tema, ni mucho menos dar conclusiones definitivas acerca del uso y en algunos casos abuso del juicio de amparo en materia agraria en el Estado de México. Se trata de dar una visión panorámica de esta figura

[76] RAMÍREZ, *El Sistema*, p. 160. Para profundizar en las haciendas que lograron conservar parte de sus tierras y el número de certificados de inafectabilidad que tramitaron, véase particularmente el capítulo 6.

jurídica, poniendo énfasis en los casos en los que los afectados alegaron sus propiedades como pequeñas y además contaban con un certificado de inafectabilidad agrícola, esto entre los años 1948-1960. La elección de este periodo corresponde a la restitución del juicio de amparo comentada páginas atrás y a la entrada en vigor del amparo agrario ejidal o comunal, aunque es de suponerse que aquellos propietarios que sufrían alguna expropiación y contaran con un certificado de inafectabilidad, podían seguir acudiendo al amparo.

Antes de adentrarse al análisis de la documentación encontrada, es importante tener en cuenta la situación agraria en la entidad.

El 21 de diciembre de 1944, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) postuló a la gubernatura del estado a Alfredo del Mazo Vélez. El oriundo de Atlacomulco ingresó a la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, en donde ocupó varios cargos y a la llegada de Fabela a la gubernatura, fue nombrado tesorero y después secretario General de Gobierno.[77]

De acuerdo con el investigador Álvaro Arreola, la elección de Alfredo del Mazo se puede explicar por dos motivos: "en primer lugar, a la eficacia del modelo económico de desarrollo impulsado por el gobierno anterior" y a que del Mazo era "el mejor candidato" para terminar, "con las viejas corrientes políticas regionales desplazadas en la configuración del nuevo modelo político autoritario y elitista".[78] A pesar de ello, la elección no estuvo exenta de controversia. El general Antonio Romero, su principal contrincante, declaró haber sido víctima de un fraude y responsabilizó al presidente de la república y al gobernador saliente. La XXXVI legislatura local dio las elecciones como válidas dando como resultado 157 612 votos para el candidato oficial y 3 417 para el general Romero.[79] Del Mazo ejerció su cargo del 16 de septiembre de 1945 al 15 de septiembre de 1951.

Alfredo del Mazo siguió la política de su antecesor y puso énfasis en la industrialización de la entidad dejando en segundo plano el tema del campo, razón por la que otorgó distintas "facilidades a las empresas industriales", con el propósito de mantener en el estado "un clima de confianza con los grupos empresariales poderosos. En sólo dos años de

---

[77] Alfredo del Mazo Vélez nació en 1904, en el municipio de Atlacomulco. En 1926 ingresó a la Comisión Nacional de Irrigación en donde ocupó "los puestos de contador de costos y jefe de almacenes e inventarios, y donde precisamente formuló el Reglamento e Instructivo para el manejo de sus almacenes". En 1942, siendo gobernador Isidro Fabela fue nombrado Tesorero General del Estado y al año siguiente Secretario General de Gobierno. ARREOLA, *La sucesión*, p. 205.

[78] ARREOLA, *La sucesión*, p. 215.

[79] ARREOLA, *La sucesión*, pp. 217, 227.

gobierno, en el estado de México se instalaron más de 80 grandes empresas industriales, a las que se les concedieron importantes incentivos para su desarrollo".[80]

En el caso de la cuestión agraria y siguiendo la política nacional, dentro de su programa de gobierno, Alfredo del Mazo propuso el reacomodo de los campesinos en las parcelas vacantes, depurando los censos agrarios y otorgando los certificados de derechos agrarios correspondientes; colaborar con la delegación estatal del Departamento Agrario para definir los derechos de los pequeños propietarios "extendiéndoles sus certificados de inafectabilidad, que les permita trabajar tranquilamente sus tierras, sin lesionar en lo absoluto los intereses de la clase campesina" y; auxiliar a la CAM para que resolviera a la brevedad, la revisión y resolución de los expedientes relativos a tierras y aguas y a la creación de nuevos centros de población agrícola.[81]

También se ocupó de temas vinculados directamente a la producción agrícola como el mejoramiento en las semillas; la intensificación en el uso de abonos y fertilizantes; la promoción del sistema de entarquinado; la atención a la conservación y reforestación de los bosques "vigilando, en cooperación con el Departamento Forestal y de Caza, las talas, las exportaciones fraudulentas y las explotaciones inmoderadas, tratando así de poner coto a la terrible devastación que se está haciendo de nuestra foresta";[82] el impulso a la fruticultura, distribuyendo árboles frutales entre los pequeños propietarios y ejidatarios; la extensión e intensificación del crédito agrícola como el ejidal; el otorgar las facilidades "para que a los lados de las carreteras que atraviesan los distritos del Valle de México se establezcan pequeñas granjas que puedan ser irrigadas mediante la perforación de pozos, a efecto de que puedan cultivarse legumbres, que tienen fácil mercado en la ciudad de México, lo que proporcionaría, además, a los dueños de dichas granjas la comodidad de laborar en el campo y vivir a pocos minutos de la capital" y; la intensificación del cultivo del nopal en las laderas y lugares pobres de tierra vegetal que por falta de plantas están erosionándose.[83] Si bien este

[80] ARREOLA, *La sucesión*, p. 232.
[81] FABILA, *Un gobernador*, p. 273.
[82] La protección de los recursos forestales fue uno de los temas principales del gobierno de Alfredo del Mazo, desde el inicio de su mandato solicitó a la Secretaría de Agricultura, por tratarse de un asunto de jurisdicción federal, que actuara "con toda energía, a fin de evitar las despiadadas explotaciones forestales" en la entidad pues "los concesionarios derriban árboles no autorizados y se han descubierto guías forestales falsas; con la complicidad de los vigilantes, una misma guía ampara varias remisiones; se obtienen permisos de explotación de un monte y se trafica con madera de otros, que carecen de posibilidades maderables, etc., etc." FABILA, *Un Gobernador*, p. 123.
[83] FABILA, *Un gobernador*, p. 274-276.

conjunto de medidas nos dan una idea del contexto que se vivía en la entidad, es pertinente destacar que se trata de una visión institucional a falta de mayores datos con respecto a la visión de las organizaciones campesinas que actuaban en el estado.

Además de proponer el mejoramiento de "la habitación del hombre del campo", en dos aspectos. El primero, sustituyendo "el jacal rústico en que viven y que tan perjudicial es para su existencia actual y futura" por construcciones de tabique y teja y en el segundo caso, para mejorar "su habitación y evitar la promiscuidad en que viven", se les proporcionarían "planos de construcción de habitaciones que, además de resultar económicas, reúnan todas las condiciones higiénicas necesarias".[84]

A pesar de estas acciones, tal y como afirma Eduardo Aguado**,** la reforma agraria quedó relegada de las prioridades del gobierno en favor de la industrialización, "especialmente por la ubicación geográfica de la entidad, lo que definió las nuevas funciones del campo mexiquense: proveer de mano de obra, alimentos y materia primas a bajo precio, en la medida en que lo exigieran las zonas urbanas e industriales de creciente formación".[85]

Hay que recordar que, según datos recabados por Gilberto Fabila, para 1940 el Estado de México contaba con 889 ejidos, "concedidos a 129 137 ejidatarios, con una área total de tierra de labor de 257 110 hectáreas (más del 50% de la total en cultivo) y una superficie de todas clases de tierra de 1 123 416 hectáreas (más del 50% del territorio de la entidad)".[86] Hasta ese año, uno de los intereses principales del gobernador en turno, sino el principal, era la cuestión agraria. Posteriormente la política estatal se modificó abruptamente.

Sobre esto último, la historiografía del periodo ha planteado un freno al reparto agrario por parte de los gobernantes e incluso una posición antiagrarista, si bien es cierto, esto puede reflejarse en los números de asuntos resueltos (ver siguiente cuadro), también lo es el hecho de que para 1945, ya se habían "tramitado casi la totalidad de las posibles solicitudes de ejidos, quedando exclusivamente aquellas que, por diversos motivos, habían sufrido un retraso en su presentación o en su resolución, los casos más difíciles o menos posibles".[87]

---

[84] FABILA, *Un gobernador*, p. 276.
[85] AGUADO, *Una mirada*, p. 97.
[86] FABILA, *Un gobernador*, p. 137.
[87] FABILA, *Un gobernador*, p. 137.

Dicho de otro modo y como se precisó en el capítulo tercero, en el Estado de México había llegado a su fin el reparto de tierras, por lo menos desde el punto de vista del agrarismo institucional y del número de ejidos constituidos, lo cual no implicó que estuviera libre de tensiones o de conflictos ante las instancias judiciales, como se desprende de los anexos de amparos que acompañan este y el siguiente capítulo. El propio gobernador informó en 1951 que la distribución ejidal de tierras estaba concluida.

Cuadro 13. Resoluciones agrarias en la gubernatura de Alfredo del Mazo, 1946-1951

Años	Resoluciones del Gobernador	Superficie concedida hectáreas
1946-1947	4	2396
1947-1948	-	1388
1948-1949	15	1022
1949-1950	-	-
1950-1951	2	201

Fuente: FABILA, *Un gobernador*, p. 138.

Si bien estas cifras se refieren exclusivamente a la dotación de tierras, en el caso de otras acciones agrarias como la ampliación de ejidos, tampoco existía la posibilidad de otorgarlas, "por eso, en la mayoría de las solicitudes, la resolución legal es negativa".[88]

A pesar de lo antes descrito, parece que el trabajo de las dependencias agrarias no cesó, debido a las solicitudes en trámite, a las resoluciones pendientes de ejecución y a la atención de las diversas peticiones formuladas por los sujetos agrarios. En 1950, el gobernador

> consideró necesario aumentar el personal y los recursos, tanto como cuando la actividad distributiva fue más intensa, pues que había 52 expedientes de dotación de tierras pendientes, 144 de ampliación y 34 de restitución; 135 pendientes de dotación de aguas, 12 de ampliación y 6 de restitución. Tal medida, dice el informe, persigue que el programa de la mejor distribución de la tierra alcance su máxima aplicación, para beneficio de los campesinos, asumiendo una actitud como la de los mejores tiempos del agrarismo.[89]

[88] FABILA, *Un gobernador*, p. 139.
[89] FABILA, *Un gobernador*, p. 139.

Concluido su gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo había entregado 17 163 hectáreas, lo que representó el 1.93 % del total entregado entre 1915-1986 beneficiando únicamente a 806 campesinos.[90]

El mismo gobernador en una conversación con Gilberto Fabila, reconoció que había hecho poco por la agricultura "según la imparcialidad y documentación con que quiera o pueda juzgarse; hice lo que pude en esa materia. Pero de una cosa sí estoy absolutamente seguro: otros empeños y otras obras, que están ahí en el Estado, son o pueden ser bases sólidas, para afrontar, integral y suficientemente, el progreso inmediato de la agricultura y el problema de elevar las condiciones de la vida de la enorme proporción de la población rural del Estado".[91]

Será en este contexto de la política agraria estatal, que se desenvuelve el estudio de caso que se presenta más adelante.

Retomando la propuesta de periodización formulada por José Ramón Cossío para el estudio de la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió a la primera década del orden constitucional emanado de la carta magna de 1917 como el periodo constitutivo; de 1928 a 1934 como un periodo liberal; al sexenio cardenista de socialista y; le sigue el periodo estatista que abarca de 1940 a 1994, llamado así por estimar "que durante el mismo la Corte sostuvo, ante todo, los valores dominantes del régimen priísta".[92]

Siguiendo a Cossío, el periodo estatista puede calificarse de minimalista, es decir, que en ese lapso la Corte "redujo los contenidos y los alcances de sus decisiones a expresiones mínimas, comparado ello con, por ejemplo, lo que Cortes nacionales anteriores habían resuelto". Para entender este minimalismo es necesario tomar en cuenta diversos factores como la designación de los ministros (quienes formaban parte del régimen político y actuaban en consonancia con él); el papel de los abogados que quedaron sumergidos en el propio discurso de la Corte "y, por lo mismo, terminaron colaborando a su mantenimiento" y; para justificar esa reducción "se mitificó el juicio de amparo a extremos increíbles", al grado de considerarlo "la mayor pieza de nuestra historia nacional y una de las más sobresalientes de la historia universal del derecho. Si esa maravilla era nuestra y disponíamos de ella

[90] AGUADO, *Una mirada*, p. 98.
[91] FABILA, *Un gobernador*, p. 135.
[92] COSSÍO, *La teoría constitucional*, p. 128.

cotidianamente, ¿cómo podríamos criticarla y, lo que es más importante, cómo podríamos suponer que no funcionaba de manera plena en la protección de las garantías individuales?",[93] olvidando que era solo una pieza de todo el rompecabezas de la justicia nacional. Sin ánimo de reducir la interpretación de la obra mencionada, para efectos de esta investigación se retoma la idea de una SCJN cuya actuación fue meramente formalista y defensora del régimen al que pertenecía.

A la mitificación del amparo hay que agregar su "gradual transformación" en una de las "especialidades más difíciles (y caras) del derecho mexicano", pues para asegurar un éxito en el juicio "era necesario contratar abogados profesionales que supieran lidiar con todos sus tecnicismos",[94] lo que posiblemente se vio reflejado en su uso excepcional por parte de los grupos más vulnerables de la sociedad, aunque como se ha descrito en esta investigación, en materia agraria los núcleos de población solicitantes de tierras y los ejidatarios acudieron a este medio de defensa desde el primer periodo de la reforma agraria y en algunos casos contaron con la asesoría de las autoridades agrarias.

Al igual que en los capítulos anteriores, esta parte se reconstruye a partir de la documentación encontrada en el Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AHSCJN). Lamentablemente la búsqueda estuvo condicionada por las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia y que en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ) únicamente aparecieron estas resoluciones derivadas de la implementación de la reforma agraria, lo cual no quiere decir que fueran los únicos juicios promovidos en este periodo, de manera que los números aquí presentados deben verse como una muestra del uso del amparo en este periodo.

Al transformarse la política agraria, también se modificaron las causas para promover el juicio de amparo. Los propietarios que aún continuaban siendo afectados por resoluciones dotatorias, con la reforma de Miguel Alemán volvieron a promover amparos y en los ejidos ya constituidos, se dieron casos en que los ejidatarios en lo individual buscaron la protección de la justicia federal contra actos del comisariado ejidal por el despojo de su parcela o a los mismos ejidos contra alguna expropiación realizada por alguna dependencia gubernamental

[93] COSSÍO, *La teoría constitucional*, pp. 117, 135. Para profundizar en las características y otros factores del minimalismo de la Suprema Corte ver las páginas 114 a 138 de la obra citada.
[94] MIJANGOS, *Historia mínima*, p. 165.

para la construcción de alguna obra, en estos supuestos, la pesquisa en los archivos requiere contar con mayor precisión en los datos de búsqueda.

Un acercamiento a estos amparos lo podemos observar en el anexo 3, en donde de 23 juicios promovidos, únicamente seis estuvieron relacionados con algún trámite de dotación, apareciendo otras acciones agrarias como la confirmación de bienes comunales (4 expedientes), la ampliación de ejidos (3 expedientes) y su división (2 expedientes); así como algunas otras causales propias de los conflictos surgidos al interior de los ejidos como: el despojo o privación de parcelas, la construcción de una escuela, parcelamiento y apeo, trabajos de planificación y la falta de ejecución de una resolución presidencial. Cabe reiterar que los juicios aquí presentados se limitan a documentación encontrada en la Suprema Corte puesto que en la Casa de la Cultura Jurídica únicamente existen documentos hasta 1950 y para años posteriores se encuentran bajo resguardo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como archivo de concentración y no existe acceso al público. En caso de contar con algún dato como el nombre de alguna de las partes o el número del amparo, se puede solicitar la búsqueda del documento vía el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) con la limitante que conlleva ese tipo de trámites y las versiones públicas de cualquier documento.

En cuanto a la parte que lo promueve, los quejosos, es posible apreciar a los dueños de alguna pequeña propiedad que fueron afectados por procedimientos como una dotación complementaria, la ampliación del ejido o la confirmación de bienes comunales y, a los ejidatarios que de forma individual alegaron la desposesión de sus parcelas o bien, de forma colectiva, se inconformaron por la división de su ejido. En ambos ejemplos estas causas podrían ser indicios de los conflictos al interior de los ejidos, tema en el que se puede profundizar a futuro, para entender otro nivel de la reforma agraria.

Por lo que toca a los municipios de donde surgieron estos amparos, destacan los de San Felipe del Progreso, en donde fueron promovidos en defensa de pequeñas propiedades protegidas por certificados de inafectabilidad; Tenancingo, cuyo origen fue la confirmación de bienes comunales; Tepoztlán donde la pugna se suscitó por la división de un ejido y; Zinacantepec, por el despojo de unas parcelas (ver siguiente cuadro). El resto de los juicios se divide en 13 municipios. Al igual que en el capítulo anterior, estos datos no se consideran exhaustivos sino únicamente como una muestra de la conflictividad rural en el Estado de México en la segunda mitad del siglo XX.

Cuadro 14. Amparos en revisión en materia agraria, por municipios, Estado de México, 1948-1960		
No.	Municipios	No. Expedientes
1	San Felipe del Progreso	3
2	Tenancingo	3
3	Tepoztlán	2
4	Zinacantepec	2
5	Acolman	1
6	Aculco	1
7	Almoloya de Juárez	1
8	Coacalco	1
9	Jiquipilco	1
10	Jocotitlán	1
11	Lerma	1
12	Ocoyoacac	1
13	Otumba	1
14	Tlatlaya	1
15	Valle de Bravo	1
16	Zacualpan	1
17	Sin municipio	1
Total		**23**

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ).

Los datos obtenidos por estas 23 sentencias permiten observar que la Suprema Corte sobreseyó los juicios en 12 casos, otorgó el amparo en siete, lo desechó en dos, lo negó en uno y en un caso más se desconoce la resolución. En la mayoría de los asuntos en que se presentaron los comisariados como quejosos los juicios fueron sobreseídos, mientras que los expedientes en que se otorgó la protección de la justicia federal corresponden a pequeños propietarios (dos de los cuales se analizan más adelante) y una resolución favorable a la señora Juana González, quien solicito amparo contra distintas autoridades agrarias, por el despojo de una parcela que poseía.[95]

Nuevamente se puede observar al presidente de la república, al jefe del Departamento Agrario, al Consejo Consultivo Agrario y a la Comisión Agraria Mixta, como las autoridades responsables contra las que se promovió el amparo, apareciendo otras autoridades como el

[95] AHSCJN, AR, exp. 1857/52.

Jefe de Promoción Ejidal y para los conflictos por bienes comunales el Departamento de Asuntos Indígenas.

De estas sentencias se retoman las originadas del proceso de dotación de tierras promovido por un grupo de peones acasillados de la ranchería Chotejé, del municipio de San Felipe del Progreso. En este litigio los propietarios afectados argumentaron ante las autoridades agrarias y en la instancia judicial, que sus tierras se trataban de una pequeña propiedad respaldada por un certificado de inafectabilidad, logrando la protección de la justicia federal. Al igual que para los otros estudios de caso, primero se reconstruye el procedimiento de dotación para después poner la lupa en el juicio de amparo.

4.4 La dotación de tierras a Chotejé

Como se ha intentado mostrar en este capítulo y a lo largo de esta investigación, los propietarios de haciendas (fraccionadas o reducidas a pequeñas propiedades) y ranchos recurrieron al juicio de amparo, como uno de tantos mecanismos de resistencia para la defensa de sus propiedades, incluso en la etapa de la prohibición no dejaron de promoverlo.

Ahora, con la política de protección a la pequeña propiedad iniciada por Lázaro Cárdenas y consolidada en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, no solo contaban con la protección establecida en el código agrario, se le sumaban los certificados de inafectabilidad agrícola y de nueva cuenta la posibilidad de acudir a la justicia federal para solicitar vía del amparo, la protección de sus propiedades.

Un caso que sirve para ejemplificar lo antes descrito, corresponde al litigio surgido entre el rancho Santa Rita y el ejido Chotejé, en el municipio de San Felipe del Progreso.

San Felipe del Progreso se encuentra ubicado en el noroeste de la entidad. Colinda al norte con los municipios de El Oro y Jocotitlán; al sur con Villa Victoria y Villa de Allende; al este con Ixtlahuaca y; al oeste con los municipios de Tlalpujahua, Ocampo, Angangueo y Zitácuaro, todos del estado de Michoacán (ver mapa 9 en donde está marcado con el número 31). Es el municipio con el mayor número de ejidos formados desde el inicio de la reforma agraria hasta 1958, 89 de los 998 del total en la entidad, lo que representó el 8.91%.[96]

Los primeros habitantes que se establecieron en el territorio que ahora comprende el municipio de San Felipe del Progreso, fueron llamados mazahuas, palabra de origen nahua

[96] MONTES DE OCA, *Historia*, p. 205.

que significa "poseedores o dueños de venados, Mazahuatl, es el singular, es decir, uno de los miembros de la colectividad; Mazahuacán se llamó a la provincia donde vivían y quiere decir "región de venados".[97] Los mazahuas junto con los matlazincas llegaron a establecerse en la zona alrededor del siglo VIII de nuestra era.[98]

Al igual que en las regiones analizadas en los capítulos anteriores y dado que reconstruir la historia centenaria de esta zona excede el propósito de este apartado, basta con señalar que el arribo de los españoles se presentó desde mediados del siglo XVI, por medio de diversas mercedes reales otorgadas por el virrey Antonio de Mendoza, formándose varias estancias de ganado en la región. Con el transcurso del tiempo algunas de esas estancias se convirtieron en haciendas y obrajes y dicho crecimiento generó conflictos con los pueblos aledaños.[99] Y para el siglo XIX, existían en el municipio tres tipos de haciendas, las productoras de semilla y ganado (Obraje, Tepatitlán), las dedicadas a la explotación de madera (Yondesé y San Onofre) y las productoras de raíz de zacatón (Mayorazgo, San Nicolás Guadalupe, La Trinidad y Providencia).[100] De la documentación consultada se infiere que la hacienda de La Luz, de la que se habla más adelante, se dedicaba a la explotación de zacatón y su producción era absorbida por la Hacienda de Providencia.

En una situación similar a la ocurrida en la zona estudiada en el capítulo dos, parece ser que, durante la revolución no ocurrieron graves hechos de armas en esta región y la presencia de alguna facción revolucionaria se redujo a alguna incursión zapatista en 1912 a la Hacienda de Providencia o el paso de fuerzas carrancistas por el municipio. No obstante, la reforma agraria inició de manera temprana en poblados como Santa Ana Nichi (1917) y San Antonio Mextepec (1919), mientras que el periodo de mayor intensidad en el reparto de tierras se dio en los años treinta, con más de 60 resoluciones presidenciales publicadas, incluyendo la del poblado de Chotejé, que se analiza más adelante.

A decir de Jesús Yhmoff, la reforma agraria en el municipio de San Felipe del Progreso se caracterizó por la oposición de los latifundistas a la expropiación de sus propiedades; "las invasiones de tierras inafectables" y afectables; la negativa de los peones

---

[97] HERNÁNDEZ Y BLANQUEL, *San Felipe*, p. 112.
[98] YHMOFF, *El municipio*, p.11.
[99] Para fines del siglo XVIII, es posible dar cuenta de 20 haciendas, entre las que se encontraban San Jerónimo, San Onofre, Jaltepec, San Nicolás, Suchitepec y El Obraje. YHMOFF, *El municipio*, pp.15-20, 118-120.
[100] YHMOFF, *El municipio*, pp. 254-255, 258.

acasillados para desalojar sus casas y regresar esos terrenos a pesar de ser dotados con tierras en otro sitio; la "sobreexplotación de pastos, magueyales y bosques por los latifundistas, para dejar lo menos posible a los futuros ejidatarios", como el caso de la hacienda San José de los Leones presentado en el capítulo dos; "invasiones de las tierras de unos ejidos por los ejidatarios de otros", como se verá más adelante y; los conflictos al interior de los ejidos por distintos motivos. "La consecuencia final del reparto agrario fue la desaparición de haciendas y grandes ranchos, aun de las zonas de protección, en unos casos abandonadas por los dueños, o vendidas".[101]

Teniendo una breve descripción del contexto municipal, toca adentrarse al estudio de caso elegido, el litigio surgido entre los solicitantes de Chotejé y los propietarios del Rancho Santa Rita, fracción de la ex Hacienda de la Luz.

El 14 de octubre de 1933, vecinos de la ranchería de Chotejé (agua en el bosque, Tza, teheje, en otomí),[102] del municipio de San Felipe del Progreso, con fundamento en la ley del 6 de enero de 1915, del artículo 27 constitucional y la ley de dotación y restituciones de tierras y aguas vigente, solicitaron al gobernador del estado, José Luis Solórzano, dotación de tierras "por carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades económicas" y señalando como fincas colindantes las haciendas de El Cristo y La Luz.

No queda claro si los solicitantes pertenecían a alguna liga u organización agraria en particular, pues como se verá, en distintos momentos solicitaron la intervención de diversas organizaciones tanto estatales como nacionales para formular sus peticiones a las autoridades agrarias.

En su solicitud de tierras expresaron que en virtud de que todos eran campesinos que carecían de tierras que trabajar se veían "obligados" a prestar sus servicios "en las haciendas cercanas en donde nos pagaban un jornal que no bastaba para cubrir nuestras necesidades más urgentes; pero en la actualidad como todos los núcleos de población colindantes han obtenido ya su dotación de ejidos, las haciendas han reajustado a los trabajadores y nos hemos quedado en situación terrible debido a que, como ya hemos dicho carecemos de tierras de nuestra propiedad y no encontramos donde trabajar";[103] es de destacar que una copia de dicha solicitud fue enviada a la CNA por medio de la Liga Revolucionaria de Comunidades

[101] YHMOFF, *Monografía,* p. 40.
[102] GONZÁLEZ, *Monografía*, p. 16.
[103] AHyFREM, CAM, Vol. 35, exp. 2, f. 3.

Agrarias del Estado de México (miembro de la Confederación Campesina Mexicana), cuyo presidente en ese momento era Estanislao Mejía, aquel representante de los pueblos de Naucalpan que se mencionó en el capítulo dos.

Al tener conocimiento de la solicitud realizada por los de Chotejé, por oficio fechado el 25 de octubre de 1933, la señora Teófila Rivera, propietaria del rancho La Purísima, una de las fracciones de la ex hacienda El Cristo, se dirigió a la Comisión Local Agraria para manifestar que la solitud realizada era improcedente por tratarse de peones acasillados que habitaban las diversas fracciones en que se había dividido dicha hacienda, señalando que además de contar con listas de raya para acreditar su dicho, les proporcionaban "terreno para sembrar maíz como ración, semanariamente su raya en dinero, leña y pastos para sus animales", además de que sus tierras contaban con 200 hectáreas por lo que se trataba de una pequeña propiedad.[104]

No solo los propietarios manifestaron su oposición, el 27 de septiembre de 1933, es decir, días antes de que se promoviera la solicitud de dotación de Chotejé, peones acasillados de las fracciones de la ex hacienda de El Cristo, habían tenido conocimiento que peones de la hacienda colindante de La Luz, solicitarían ejidos señalando como propiedad afectable las tierras donde laboraban, lo que motivó que se dirigieran al gobernador manifestando que:

> Hace un año diez meses que los poseedores de las fracciones en que se dividió la referida ex-Hacienda del Cristo, se preocupan por que trabajemos dichos terrenos para sacar de ellos lo necesario para nosotros, pues ellos, los poseedores, hasta la fecha no han tomado un solo centavo de lo que producen dichos terrenos; nos han pagado religiosamente nuestros salarios, no adeudándonos hasta hoy nada absolutamente; el trato que nos dan es el que deben dar las gentes que consientes de la situación del peón les levantan el espíritu para acoger con agrado su trabajo; si algún préstamo necesitamos y está a su alcance hacerlo nos lo facilitan de buena voluntad; tenemos nuestros pejugales, pastos para nuestros animales, y sabemos que pagan con puntualidad las contribuciones.[105]

Por lo que le solicitaron que no se dejara "sin pan" a sus hijos, pues eran "cuarenta y tantas familias a las que afectaría el acceder a la petición de los peones acasillados de la hacienda de La Luz y que ya que hay patrones que procuran por sus empleados, estimularlos para que si está a su alcance amplíen su ayuda y podamos vivir con tranquilidad y educar a

[104] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 18.
[105] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 23.

nuestros hijos dentro de un medio seguro".[106] Aquí podemos ver parte de esos argumentos de economía moral que se comentaron en la introducción, pues los peones apelaron a contar con un mínimo de subsistencia para ellos y sus familias.

No queda claro si este documento también lo firmaron los de Chotejé, de ser el caso, es probable que al enterarse del interés que tenían otros grupos de trabajadores de la región en esas tierras, ellos se animaran a iniciar su trámite de dotación. Lo que, si comienza a asomarse y se profundiza en ello más delante, es la serie de diferencias y conflictos entre los diversos grupos solicitantes de la zona.

Para el 30 de noviembre de ese año, los dueños de las fracciones I, II, III, IV y V de la ex hacienda del Cristo, señalaron que su propiedad había sido afectada a favor de los pueblos de San Juan Cuajomulco, Pueblo Nuevo y San Pablo con un total de 1 050 hectáreas. Quedando la primera fracción de 150 hectáreas y el resto con 212, por lo que se trataba de pequeñas propiedades; no obstante, deseaban "cooperar a la realización del programa de la Revolución, permitiéndonos rogar a ese Superior Gobierno acepte la cesión de tierras que hacemos en la proporción de seis hectáreas por persona",[107] beneficiando a 42 acasillados de dicha finca, pero quedarían excluidos los solicitantes de Chotejé. Días después el presidente de la CLA, el ingeniero Luis G. Morfín, informó a los propietarios que el gobernador había aceptado su proposición.

Si bien la documentación revisada no aporta mayores elementos para profundizar en la relación propietarios-peones, es de destacar que los primeros hicieron suyo el discurso de la reforma agraria, se infiere que quizá para conservar sus mejores tierras, mientras que los segundos, al manifestar su oposición a la afectación de las tierras en que laboraban y habitaban, presentaron argumentos a favor de sus patrones, lo que deja ver relaciones de paternalismo en esta hacienda.

Esta postura de los dueños de las fracciones de El Cristo contrasta con la que adoptaron con respecto a la solicitud de Chotejé. Con fecha 22 de enero de 1934, Arturo Enríquez de Rivera, propietario de la fracción uno, por medio de un escrito dirigido al presidente de la república y a la CLA, manifestó que su finca contaba con 150 hectáreas de monte, por lo que debía ser considerada una pequeña propiedad y agregó que Chotejé no era

[106] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 23-24.
[107] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 31.

un poblado sino una cuadrilla de peones perteneciente a la ex hacienda, por lo que no contaban con derecho a la dotación.[108] Lo cual fue confirmado por el presidente municipal, pues manifestó que en el bando de policía y buen gobierno no se encontraba ningún rancho, pueblo o hacienda denominado Chotejé, pues ese nombre se le daba "a una cuadrilla que pertenece a la hacienda de El Cristo".[109] Hay que recordar que para ese momento la legislación aun negaba el derecho de solicitar tierras a los peones acasillados y no fue sino hasta la promulgación del código agrario de 1934, que se abrió una rendija para que fueran beneficiados de dotación, siempre que fueran incorporados a los núcleos de población solicitantes y hasta agosto de 1937, con la reforma al artículo 45 del código agrario, obtuvieron plena capacidad jurídica para solicitar tierras por ellos mismos.

La CLA solicitó al secretario general de gobierno del estado que informara si en San Felipe del Progreso existía el poblado mencionado y el funcionario expresó que únicamente existía un paraje con ese nombre perteneciente a la multicitada hacienda.

Guillermo Enríquez de Rivera, propietario de la fracción número tres por medio de escrito fechado el 27 de enero de 1934 manifestó que Chotejé era un paraje habitado por "peones acasillados que gozan gratuitamente de un pegujal" por lo que no tenían derecho a la dotación.[110]

Para abril de 1934, Romualdo Sánchez, representante de los solicitantes, se dirigió al presidente de la comisión local para solicitarle designara un ingeniero que llevara a cabo el censo agropecuario y se abreviara el trámite pues con la tardanza "el vecindario solicitante, ha venido siendo víctima de atropellos y hostilidades por parte de los propietarios, probables afectados, además de que nuestras familias carecen en la actualidad de lo más indispensable para poder subsistir, por carecer nosotros de trabajo o de un pedazo de tierra que cultivar para la manutención de nuestros familiares".[111]

Al momento de integrar la junta censal los propietarios de las fracciones nuevamente manifestaron su inconformidad a la local a participar debido a que los solicitantes eran peones

[108] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 43.
[109] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 44.
[110] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 62.
[111] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 73.

acasillados y sus fincas eras pequeñas propiedades;[112] no obstante, acudió Arturo Enríquez de Rivera como representante de las fincas.

El censo general y agrario se levantó el 25 de junio de 1934, dando como resultado un total de 204 personas, de los cuales 51 contaban con derecho a la dotación y se comprobó que los solicitantes efectivamente eran peones acasillados de El Cristo. Aspecto que fue retomado y reiterado por los propietarios ante la CAM y recurriendo al recién promulgado código agrario, señalaron que por tener esta calidad no tenían derecho a la dotación.[113] Para este momento del procedimiento, ya se encontraban en funciones las nuevas autoridades agrarias.

Otros datos obtenidos de los trabajos técnicos revelaron que el núcleo peticionario se encontraba ubicado dentro de una superficie de 44 hectáreas pertenecientes a la antigua hacienda de El Cristo o Embajamuy, la cual había sido fraccionada entre varias personas; el clima del lugar era frio, con lluvias entre abril y octubre; los poblados más próximos eran San Felipe del progreso (7 kilómetros) y El Oro (17 kilómetros); los cultivos principales de la zona eran el maíz y el trigo y; algunos vecinos se dedicaban a "la manufactura de algunas telas de lana y sarapes".

En capítulos anteriores se ha dado importancia a los alegatos presentados por los hacendados, en los juicios de amparo, empero, vale la pena recuperar los argumentos vertidos en el trámite dotatorio porque son otra muestra de cómo también algunos propietarios adoptaron el discurso de la reforma agraria, específicamente refiriéndose a la pequeña propiedad. En este caso, el mencionado Arturo Enríquez de Rivera señaló:

> El criterio revolucionario traducido en nuestro actual Código Agrario ha sido en el sentido de acabar con los latifundios, estableciendo la pequeña propiedad como medio para el mejor desarrollo de la producción agrícola del país y cultivo de los terrenos, así como beneficio de la clase campesina proletaria; pero al establecerse la pequeña propiedad como unidad prima de posesión y propiedad en la agricultura, la Ley ha querido que sea intocable, que no sea objeto de afectaciones ejidales (artículo 51 del Código Agrario vigente) y esto lo ha hecho con el objeto de infundir seguridad en el propietario y estimular su esfuerzo para el cultivo de su pequeña propiedad en bien de la colectividad y de la Nación en general.[114]

[112] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 77.
[113] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 97.
[114] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 177.

Seguido el trámite por sus etapas el vocal de la CAM expuso en su dictamen "que no obstante que el poblado gestor se encuentra enclavado dentro de las fracciones de la exHacienda de El Cristo, no es posible la afectación de ellas por ser pequeñas propiedades" y "que las objeciones formuladas en el sentido de que los peticionarios son peones acasillados, no deben tomarse en cuenta por no haberse comprobado con documentación legal fehaciente".[115] Este último punto es de destacar, puesto que a lo largo del procedimiento se habla de peones acasillados y en el censo mencionado se registró a los solicitantes como peones de la hacienda El Cristo.

Estos argumentos fueron retomados por el gobernador José Luis Solórzano en su resolución fechada el 3 de agosto de 1935, otorgando una dotación de "766-82-00 hectáreas de tierras, que servirán para satisfacer sus necesidad agrícolas", que se tomarían de las haciendas "La Carrera, 19-20-00 hectáreas de riego y 17-04-00 hectáreas de agostadero, susceptible de cultivo; de la fracción de Rioyos, propiedad de la señora Dolores Carmona de González, 266-16-00 hectáreas de agostadero laborable, 70-60-00 hectáreas de temporal y 177-51-31 hectáreas de agostadero, para cría de ganado; y, por último, de La luz, 23-82-00 hectáreas de temporal, 140-48-69 hectáreas de agostadero, para cría de ganado y 52 hectáreas de monte explotado".[116]

Ante esta resolución y posiblemente al estarles prohibido el juicio de amparo, los propietarios afectados dirigieron distintos escritos al Departamento Agrario para inconformarse por la resolución del gobernador, solicitar su suspensión y modificarla en la resolución definitiva reconociendo el carácter de pequeña propiedad de sus tierras.[117]

Un aspecto relevante por considerar dentro de la reforma agraria es la disponibilidad de personal para llevar a cabo sus tareas. Es posible que los de Chotejé ya tuvieran alguna idea de lo tardado que podía llegar a ser el procedimiento, puesto que una vez que conocieron la resolución del gobernador realizaron gestiones en el mes de noviembre y diciembre ante la delegación del Departamento Agrario para que comisionara un ingeniero que llevara a cabo la ejecución de la resolución provisional, pues el nombrado no había cumplido con su encargo alegando que no contaba con "personal suficiente". A fines de diciembre, el ingeniero encargado de la brigada comisionada a Chotejé, informó que tan pronto los

[115] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 208.
[116] *Gaceta del Gobierno*, miércoles 4 de septiembre de 1935, p. 4.
[117] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, fs. 5, 8-9, 11, 14-17.

ingenieros a sus órdenes concluyeran "los trabajos que actualmente tienen encomendados", comisionaría alguno para llevar a cabo la tarea pendiente.[118] Situación similar a la ocurrida en el caso de los pobladores de Tenayuca 15 años atrás. Sin duda alguna, conocer el funcionamiento interno de las comisiones agrarias es otra de las vetas importantes que nos pueden permitir profundizar en el estudio de la reforma agraria.

Al tratar de ejecutarse la posesión provisional, el 13 de enero de 1936, vecinos de los poblados de Buenavista y de Rio Hoyos, se opusieron "en virtud de que ellos tienen solicitadas esas tierras, ya que dichos poblados están enclavados en los terrenos de la susodicha hacienda de Rio Hoyos; y que no reservándose esos terrenos para su dotación, no existen otros terrenos cerca, para proporcionarles su dotación a que tienen derecho", razón por la cual el personal encargado de realizar esta diligencia dejó pendiente la posesión y sugirió a la CAM que los terrenos se destinaran a "los pueblos enclavados en la misma hacienda" y que para los de Chotejé se le dotara con tierras de la haciendas de la Luz y de La Carrera.[119]

Dos meses después, Arturo Enríquez de Rivera, se presentó a la delegación estatal del Departamento Agrario para manifestar que los de Chotejé habían impedido que se efectuaran trabajos de siembra en las tierras. La autoridad agraria ordenó a los aun solicitantes que no impidieran los trabajos agrícolas, dado que aún no se conocía el destino de las tierras.[120] Al igual que el pueblo de Tenayuca, en este caso se asoman algunas acciones de hecho, lo que revela que los solicitantes no solo hicieron uso del derecho y también recurrieron a diversas formas cotidianas de resistencia.

Ante la falta de resolución del expediente, el 11 de agosto de 1936, nuevamente se dirigieron al delegado estatal del Departamento Agrario para manifestarle que deseaban las tierras donde actualmente se encontraban pues en ese lugar habían "derramado sudores, sacrificando nuestros esfuerzos y martirisados por diferentes capataces desde pequeños en esta hacienda de El Cristo, y debido a ello tenemos derecho a obtener los terrenos que ocupa esta hacienda o sea el suelo natal en que hemos derramado nuestra sangre, habiéndonos solicitado como principal raíz de él. Pues verdaderamente nos encontramos con suma tristeza

[118] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 21.
[119] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 253.
[120] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 1, f. 258.

de saber que tenemos que trasladarnos a otro lugar, es imposible dejar nuestro suelo tan amable, dado todos nuestros esfuerzos".[121]

Finalmente, la resolución presidencial[122] determinó que Chotejé contaba con la capacidad de ser dotado, reconociendo 52 individuos con derecho; que se había considerado de manera indebida la fracción de la hacienda de Rioyos, propiedad de la señora Dolores Carmona, ya que había sido vendida con anterioridad a la solicitud, por lo que únicamente se tomarían terrenos de la hacienda de La Luz, modificándose la resolución del gobernador concediéndoles a los solicitantes 475 hectáreas (entre tierras de temporal, agostadero laborable, terrenos de monte explotado y agostadero para cría de ganado); además, precisó que con las superficies laborables se formarían 30 parcelas, incluyendo la escolar y el resto de las tierras "para los usos comunales del núcleo beneficiado". Se dejaban a salvo los derechos de 23 capacitados para los que no alcanzó la dotación, en virtud de que se debían "reservar superficies para dotar a los otros poblados de la región, a fin de que los ejerciten en los términos de ley".

Asimismo, se puso énfasis en el aspecto forestal señalando que los beneficiados tenían la obligación de

> cooperar con las autoridades municipales, del Estado o de la Federación, en todo caso de incendio de bosques de su región, estándoles prohibido, en términos absolutos, ejecutar todo acto que destruya sus bosques o arbolados. Les será autorizada la explotación de sus bosques cuando el Departamento Forestal los haya organizado en cooperativa forestal y cuando sean atendidos, en caso de que necesiten crédito, por la institución que señala el Gobierno Federal, quedando prohibido, con sanción de nulidad, todo acto o contrato que contravenga este punto resolutivo así como todo acto o contrato de venta o arrendamiento de sus montes en pie y la intervención de personas o empresas extrañas al ejido, en los casos de que se trata.

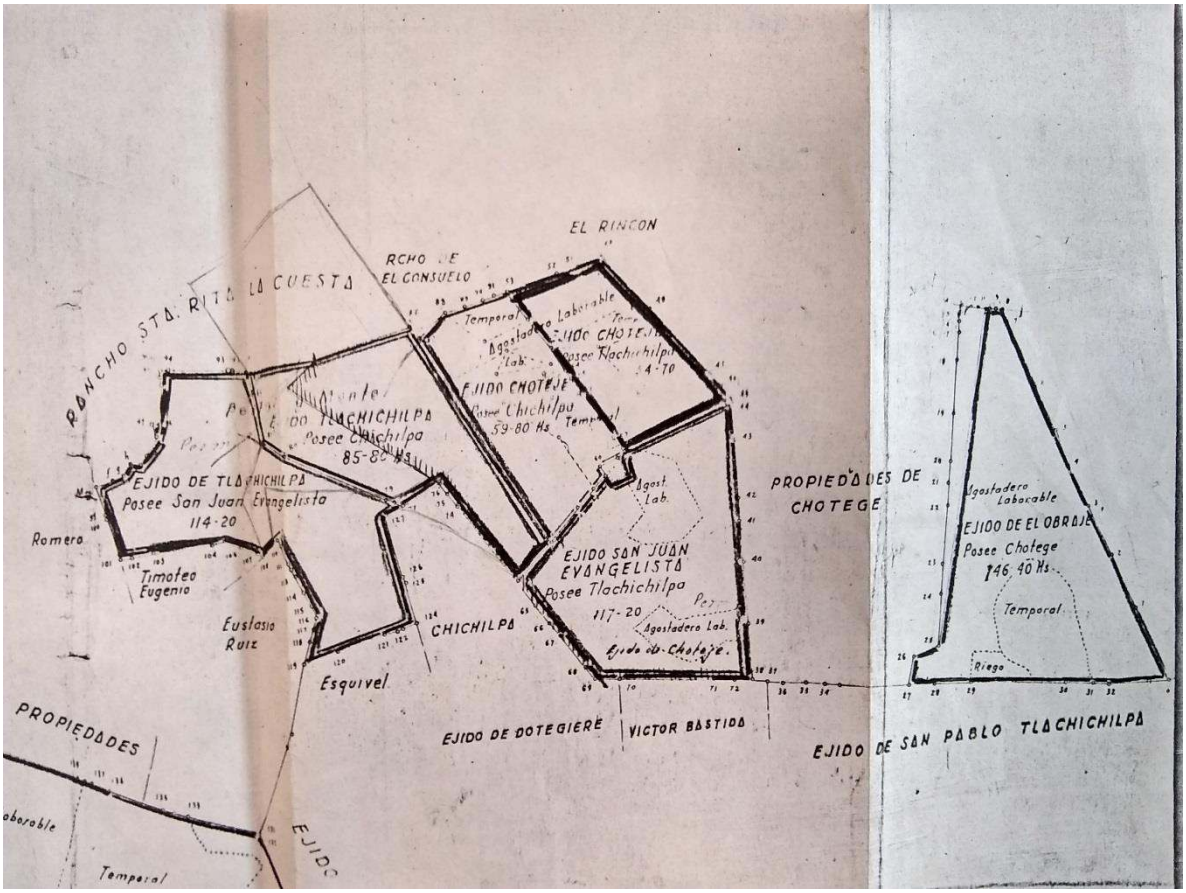
Dicha resolución fue dada por el presidente Lázaro Cárdenas el 30 de septiembre de 1936, siendo jefe del Departamento Agrario Gabino Vázquez y fue publicada en el *Diario Oficial* el 22 de diciembre del mismo año, únicamente tres años después de realizada la solicitud, lo cual contrasta con los casos presentadas en los capítulos anteriores.

Con la resolución presidencial parecía que la petición de Chotejé sería atendida, no obstante, no pudo llevarse a cabo la posesión definitiva, debido a la oposición de los pueblos

[121] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 80.
[122] *Diario Oficial*, martes 22 de diciembre de 1936, pp. 13-15.

de Chichilpa y El Rincón, quienes ya ocupaban parte de las tierras otorgadas (ver siguiente mapa). Lo que demuestra que los peticionarios no solo tuvieron que enfrentar la oposición de los propietarios, sino conflictos con pueblos vecinos.

Mapa 5. Plano informativo de los ejidos San Juan Evangelista, Tlachichilpa, Chotejé y El Obraje



Fuente: AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 11, f. 121.

Por este motivo, los de Chotejé solicitaron al jefe del Departamento Agrario nombrara un inspector que se pusiera en contacto con los tres pueblos para encontrar "la forma de remediar satisfactoriamente el problema planteado, a efecto de que nosotros podamos entrar a trabajar en las tierras concedidas por resolución presidencial".[123] Así se llegó al 9 de enero de 1937, en una reunión celebrada entre representantes de Chichilpa, Chotejé y El Rincón, el presidente municipal y un representante del Departamento Agrario acordaron que el ejido Chichilpa recibiría las tierras de Rioyos y Buena Vista "solo para facilitar al Departamento

[123] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 183.

el que pueda dotar con ellas al poblado de Chotejé", aclarando que ellos seguirían en posesión de las tierras que poseían de forma provisional y que se habían proyectado para Chotejé y también estuvieron de acuerdo en que se les diera al ejido de El Rincón una parte de las tierras de agostadero que poseían provisionalmente, pues reconocían que ese poblado carecía de las que se les habían proyectado. Finalmente, los de Chotejé manifestaron estar de acuerdo en recibir las tierras de Rioyos y Buena Vista "que jurídicamente se le entregan al poblado de Chichilpa", comprometiéndose a que no reclamarían derechos sobre las tierras de los de Chichilpa (ver mapa 5).[124] Como puede observarse, los asentamientos previos a la resolución presidencial condicionaron su ejecución y generaron conflictos con los pueblos vecinos.

A pesar de lo acordado, los conflictos por la tenencia de la tierra no cesaron o por lo menos no de forma inmediata. Poco más de un mes después, el delegado estatal del Departamento Agrario informo a la instancia nacional que los de Chotejé se negaban a acatar los acuerdos,[125] aunque no establece los motivos y la oposición de los propietarios, particularmente de la familia Enríquez de Rivera, nuevamente se hizo evidente pues se opusieron al convenio argumentando que violaba las resoluciones presidenciales otorgadas por el presidente Lázaro Cárdenas.[126]

Transcurrieron tres años y la dotación no se concretaba, pues al parecer los acuerdos adquiridos no se cumplían. Como se ha comentado, los de Chotejé habían sido dotados con tierras de Chichilpa, este pueblo con tierras de Río Hoyos y las tierras en donde se habían asentado los de Chotejé pertenecían al poblado de El Obraje, por lo que el propietario Antonio Enríquez Rivera "tenía la firme intención de obligar a los compañeros de Chotejé, que son en número 52 a que desocuparan ese terreno inmediatamente, haciéndoles que abandonaran sus casas en las que han vivido desde tiempo inmemorial, al mismo tiempo abandonarían con esta disposición del propietario el local que tienen construido para Escuela y que a la fecha funciona con una asistencia regular de 42 niños".[127]

Ante esta situación, la persona comisionada para atender el conflicto, el licenciado Abdón Ayala, con el propósito de "legalizar la estancia" de los de Chotejé, promovió un expediente de tierras ociosas ante el gobierno municipal de San Felipe del Progreso, "por ser

[124] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 184.
[125] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 218.
[126] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, fs. 225-226.
[127] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 245.

esta la única manera de salvaguardar cuando menos por un año más, el caserío que formó el núcleo de ejidatarios de Chotejé".[128] Fue así que el 22 de febrero de 1940, con carácter de tierras ociosas y por un año agrícola, los de Chotejé recibieron en posesión las tierras reclamadas.[129] Este recurso demuestra que en la práctica cotidiana las propias autoridades también tuvieron que recurrir a diversos mecanismos legales, fuera de los procedimientos ordinarios, para atender la serie de obstáculos que enfrentaba la aplicación del derecho agrario.

Después de diversas "gestiones, platicas y avenencias", el 31 de abril de 1939 se celebró un nuevo convenio entre los comisariados de El Obraje, Chichilpa, Chotejé y Rioyos por medio de cual los vecinos del primero aceptaron que se les entregaran a Chotejé las 146-50-00 hectáreas "que les correspondían en la hacienda de El Cristo; Chotejé cedía a Chichilpa las 475-00-00 Hs. concedidas en dotación y afectadas a la hacienda de La Luz y Chichilpa cedía a Rioyos las 396 Hs. de su ejido definitivo y que fueron afectadas a las fracciones I y II de la hacienda de Rioyos".[130] El convenio fue aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario (CCA) el 7 de octubre de 1940, pero al tratar de llevarlo a cabo no se contaba con la cantidad de tierra suficiente por lo que se realizó un ajuste de hectáreas entre Chichilpa y Rioyos.

El 11 de enero de 1941, se llevó a cabo la posesión definitiva a Chotejé. En la diligencia el representante del Departamento Agrario manifestó "que en virtud de que La Luz no cuenta ya con las superficies afectables mencionadas" se hacía una entrega de únicamente 114 hectáreas, de las cuales 40 eran de temporal, 22-50 de agostadero laborable, 20 de monte explotado y 31-50 de agostadero para cría de ganado, estando de acuerdo los ahora ejidatarios y quedando pendientes 361 hectáreas.[131]

A pesar de esta posesión no se solucionó el conflicto. Entre 1942 y 1944 el multicitado Arturo Enríquez de Rivera propietario de una fracción de El Cristo, se dirigió por medio de distintos escritos al jefe del Departamento Agrario en donde denunciaba el convenio al que se ha hecho referencia por ir en contra de las resoluciones presidenciales, a simple vista pareciera que le interesaba llevar a cabalidad los postulados de la reforma agraria, no

[128] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 246.
[129] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 248.
[130] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 274.
[131] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 188.

obstante, lo que perseguía era el recuperar las tierras que ocupaban las casas de los de Chotejé.

Por lo que toca a los propietarios de La Luz, Esperanza de Arriaga y Fernando Arriaga, y como se explica más adelante, habían disuelto su propiedad mancomunada, para posteriormente obtener el certificado de inafectabilidad de las fincas denominadas La Luz y Santa Rita, respectivamente.

Se desconoce a profundidad lo ocurrido en los siguientes años, pero existen constancias de que por lo menos desde 1947 los ejidatarios realizaron diversas solicitudes a las autoridades agrarias para obtener las tierras faltantes. En enero de 1950, los de Chotejé solicitaron se llevará a cabo la posesión complementaria que tenían pendiente. Después de realizar varios estudios, el delegado del Departamento Agrario informaba que no sería "posible proyectar la localización complementaria ordenada sin lesionar la pequeña propiedad denominada 'Santa Rita'".[132]

A pesar de lo anterior, con fecha 2 de junio de 1950, la Dirección de Derechos Agrarios del Departamento Agrario emitió un estudio en el que concluyó que "respetando los terrenos amparados por certificados de inafectabilidad", al Rancho Santa Rita le quedaban disponible una extensión de poco más de 81 hectáreas de agostadero que podían entregarse al ejido de Chotejé, por concepto de una segunda posesión parcial.[133] Con base en este documento se ordenó la ejecución de la segunda posesión de tierras y la localización exacta del ejido definitivo.

Esta situación fue lo que originó que en septiembre de 1950 los dueños del rancho Santa Rita, antes hacienda de La Luz, los señores Jesús Agredano Rodríguez y Blanca Martínez de Agredano, acudieran a la justicia federal para solicitar la protección de sus derechos, el cómo se desarrollaron estos juicios es lo que a continuación se expone.

4.5 La inafectabilidad agraria y el juicio de amparo: el rancho Santa Rita

Mientras se desarrollaba el procedimiento dotatorio, Esperanza M. viuda de Arriaga y Fernando Arriaga, propietarios de la hacienda de La Luz, informaron a las autoridades agrarias que con fecha de 20 de febrero de 1936, habían disuelto la mancomunidad que

[132] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 371.
[133] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 374-375.

poseían de su finca, por lo que solicitaban se les reconocieran sus derechos individuales de 186-80 hectáreas para la primera y 127-54 hectáreas para el segundo, "desde el 5 de agosto de 1926 que es la fecha de la escritura de aplicación de bienes del Licenciado Fernando Arriaga y Uribe, esposo y padre respectivamente de los firmantes".[134] En el mismo escrito informaron que a causa de lo descrito habían solicitado se declaran sus propiedades como inafectables, de acuerdo con lo dispuesto por los artículo 51 y 59 del código agrario. Como es de observarse, para esta etapa de la reforma agraria los propietarios se desenvolvían sin problema alguno por el marco hegemónico que les proporcionaba la legislación agraria vigente.

Si bien en este capítulo se pone mayor atención a los certificados de inafectabilidad por ser un requisito previo para promover un juicio de amparo, es importante hacer una breve mención a la solicitud de declaratoria de pequeña propiedad inafectable, procedimiento establecido en el código agrario de 1934, a la que podían acudir los propietarios para proteger las superficies que no excedieran de 150 hectáreas de terrenos de riego y 300 hectáreas de tierras de temporal (art. 51).

El procedimiento se realizaba ante la CAM presentando la respectiva solicitud, acompañada de un plano topográfico de la propiedad afectable en donde se debía localizar la pequeña propiedad y en su caso la superficie que se segregaría de aquella. La comisión agraria emitiría su dictamen dentro de los siguientes 30 días y enviaba el expediente al Departamento Agrario. Este a su vez, si lo estimaba conveniente, en un término de treinta días propondría al ejecutivo federal la declaratoria de inafectabilidad, la cual se publicaría en el periódico oficial de la entidad respectiva y en el *Diario Oficial*, además de inscribirse en el Registro Agrario Nacional (art. 59).

Siguiendo el trámite descrito, el 20 de marzo de 1936, un mes después de disolver la mancomunidad, Fernando Arriaga propietario del rancho de La Luz, solicitó la declaratoria de inafectabilidad de su propiedad, argumentando que se había llevado a cabo el desprendimiento de la mancomunidad que tenía con su madre Esperanza de Arriaga; que su fracción contaba con una extensión de 127-54 hectáreas "de monte explotado", señalando una superficie de 100 hectáreas como su "propiedad mínima inafectable", cuyo reconocimiento y declaratoria solicitaba y; el resto de la fracción la ponía "a disposición de

[134] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 34.

las autoridades agrarias para los efectos a que haya lugar, pero de ser posible y por ser mi voluntad, solicito que se conceda por vía de dotación a mis peones acasillados de la cuadrilla El Rincón, los que ya tienen formulada solicitud, y cuyo expediente está en trámite".[135] Es importante tomar en cuenta la existencia de los vínculos entre hacendado y peones, que en este ejemplo parece existir una simpatía del propietario hacia sus trabajadores, lo cual también pudo haber sido una maniobra para evitar la entrega de tierras a los de Chotejé y aunque no queda claro si las autoridades agrarias retomaron la propuesta del propietario, lo cierto es que en la resolución presidencial que dotó a los peones de El Rincón, únicamente se tomaron tierras de la hacienda de La Luz, aspecto a considerar para más adelante.

En el mismo sentido promovió la mencionada Esperanza de Arriaga, cuya fracción consistía en 186-80 hectáreas de agostadero, temporal de segunda y monte explotado de renuevo. Igualmente señaló una superficie de 100 hectáreas como propiedad mínima infectable y el resto solicitó que se concediera a los acasillados de la cuadrilla de Santa Rita, que también habían promovido expediente de dotación.[136]

La declaratoria de inafectabilidad del rancho La Luz fue emitida el seis de diciembre de 1939,[137] mientras que la del rancho Santa Rita, el 13 de noviembre de 1940.[138]

Como se mencionó, en 1950 las autoridades agrarias emitieron un acuerdo que aprobó la entrega de las tierras faltantes a los de Chotejé, proponiendo la afectación de los ranchos de La Luz y Santa Rita. En respuesta los propietarios afectados promovieron dos juicios de amparo ante el juzgado de distrito del Estado de México, con sus correspondientes recursos de revisión, los cuales les fueron concedidos. Es necesario apuntar que, a diferencia de los juicios presentados en los dos capítulos que le preceden, sólo se pudo profundizar en uno de ellos, pues como se mencionó en la introducción, de la documentación obtenida por medio del Sistema Nacional de Transparencia no se encontraron datos de relevancia para esta investigación.

El primer juicio de garantías fue promovido por Jesús Agredano Rodríguez, Blanca Martínez de Rodríguez y José Agredano Rodríguez, el dos de septiembre de 1950, contra el jefe del Departamento Agrario, el delegado agrario en el Estado de México, el jefe de

[135] AHyFREM, CAM, Vol. 193, exp. 35, f. 12.
[136] AHyFREM, CAM, Vol. 194, exp. 4, f. 13.
[137] *Diario Oficial*, martes 23 de abril de 1940, p. 2.
[138] *Gaceta del Gobierno*, sábado 28 de marzo de 1942, p. 4.

Promoción Ejidal Agraria de la zona, con residencia en Ixtlahuaca y el presidente del Comisariado Ejidal del ejido de Chotejé. Señalaron como acto reclamado la orden dada por las autoridades mencionadas "para ejecutar trabajos de planificación en el Rancho de Sta. Rita", además de "la prosecución de los trámites de la responsable para acceder a las peticiones de los terceros perjudicados y la desposesión de las porciones de tierra" de su rancho, "para entregárselas a los ejidatarios del poblado de Chotejé, del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México".[139]

Manifestaron que el rancho de Santa Rita lo habían adquirido en compra venta a la señora Esperanza Mendieta viuda de Arriaga en 1945 y que al tomar posesión de este, la propietaria les había hecho entrega del certificado de inafectabilidad que amparaba dicho predio como una pequeña propiedad, pero era de su conocimiento que las autoridades señaladas como responsables habían "ordenado la invasión" de dicho rancho, "tratando de apoderarse de terrenos de agostadero" que les pertenecían.[140]

Al igual que en otros de los amparos en materia agraria que se han mencionado, señalaron como preceptos violados los artículos 14, 16 y 27 constitucionales.

El juez de distrito, licenciado Jesús Báez, dio por admitida la demanda contra los actos del jefe del departamento agrario, de su delegado estatal y del jefe de promoción ejidal. En cuanto al presidente del comisariado ejidal de Chotejé, la desechó "por no tener dicho Presidente el carácter de autoridad",[141] pues de acuerdo con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte,[142] siguiendo lo preceptuado por el código agrario de 1942 y contrario a lo establecido en el código cardenista, los comisariados ejidales dejaron de contar con el carácter de autoridad y fueron considerados órganos de dirección de sus correspondientes ejidos.

Como lo establecía la ley, el juzgador solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y fijó fecha para la audiencia constitucional a las 11 horas del 11 de octubre de 1950. Llegada la fecha, el juez la difirió para el dos de enero de 1951, debido a que "a la hora señalada para la audiencia en este juicio de amparo, ya con anterioridad había

[139] AHCCJT, AI, 999/50, f. 1v.
[140] AHCCJT, AI, 999/50, f. 1.
[141] AHCCJT, AI, 999/50, f. 2.
[142] *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XCI, p. 2808 y Tomo LXXXVIII, p. 2654.

sido señalada la audiencia de derecho" en un diverso juicio de amparo.[143] Nuevamente se presenta un indicio de la carga de trabajo con la que contaba el juzgado de distrito.

Emitidos los correspondientes informes, el jefe del Departamento Agrario, negó el acto reclamado, precisando que ante la ejecución parcial al ejido de Chotejé, "los campesinos beneficiados con el fallo, solicitaron ante este Departamento Agrario se comisionara a un Ingeniero para que se les diera la posesión complementaria de la dotación de ejidos señalada en la resolución presidencial", estudiado el asunto, el Cuerpo Consultivo "aprobó el plano proyecto para localizar la posesión parcial complementaria", sin que existieran violaciones a las garantías constitucionales de los quejosos, "pues se les respetan sus pequeñas propiedades".[144] Motivo por el que solicitó se declarara la improcedencia del amparo.

El delegado estatal del Departamento Agrario declaró que únicamente trataba de ejecutar en forma complementaria parcial la resolución presidencial "y de ninguna manera que haya dado ordenes de invasión de tierras de agostadero pertenecientes al rancho de Santa Rita" y mucho menos que "el Comisariado Ejidal de dicho poblado trate de darle cumplimiento, ya que para llevar a cabo la posesión complementaria mencionada, esa Delegación, comisionó a un ingeniero de esa Delegación, el cual suspendió los trabajos de localización en el terreno de la posesión complementaria".[145]

El jefe de Promoción Ejidal Agraria en Ixtlahuaca, únicamente se concretó "a acusar recibo del oficio por medio del cual se le ordenó rindiera su informe con justificación, sin informar nada al respecto".[146]

Llegado el dos de enero de 1951, dio inicio la audiencia constitucional con la asistencia de la parte quejosa, quien, en uso de la voz, ofreció como pruebas documentales las consistentes en la escritura otorgada a su favor, el periódico oficial del gobierno del estado y la prueba testimonial, es decir, la declaración de tres testigos que deberían contestar una serie de preguntas formuladas por la propia parte quejosa. En los amparos analizados en los capítulos anteriores no se presentó este último tipo de prueba, por lo que a continuación se pone atención en lo dicho por los testigos.

---

[143] AHCCJT, AI, 999/50, f. 13.
[144] AHCCJT, AI, 999/50, f. 14.
[145] AHCCJT, AI, 999/50, f. 59.
[146] AHCCJT, AI, 999/50, f. 59.

El interrogatorio al que respondieron los testigos estaba integrado por 14 preguntas que tenía como propósito principal demostrar que las tierras de Santa Rita eran propiedad de los quejosos, el tiempo que tenían de poseerlas y las actividades que en ellas llevaban a cabo, particularmente que habían instalado un establo y explotaban la raíz de zacatón (ver anexo 5).

De acuerdo con las fuentes, se tomó la protesta de ley a los testigos: Esperanza Mendieta viuda de Arriaga, José Romero Bautista y Jacinto Montaño. La primera había sido propietaria de la finca y los otros dos testigos trabajadores del rancho.

Esperanza Mendieta señaló que conocía el rancho Santa Rita por haber sido propietaria del mismo por mucho tiempo hasta que lo vendió a Jesús y José Agredano Rodríguez y Blanca Martínez de Rodríguez; que le constaba que las labores de cultivo de la finca se encontraban bajo la vigilancia del señor Jesús Agredano y la señora Blanca Martínez; que se explotaba la raíz de Zacatón; que tenían un establo y; que el señor Jesús Agredano les pagaba y dirigía a los peones del rancho.[147]

José Romero Bautista manifestó ser casado, agricultor, de 30 años y tener su domicilio en el rancho Santa Rita donde trabajaba como jornalero. Que le constaba que los señores Agredano eran dueños del rancho, que tenían su domicilio en el mismo, que dirigían las labores de cultivo, que ellos pagaban a los peones del rancho y que habían establecido un establo en la mencionada finca.[148]

Jacinto Montaño Garduño dijo ser originario y vecino del rancho El Porvenir, casado, agricultor y de 48 años; que conocía el rancho Santa Rita porque había laborado en él cuidando ganado; que le constaba que la posesión la tenían los propietarios desde 1939, año en que lo habían comprado; que el ganado de los propietarios pastaba en los terrenos de la finca; que Jesús Agredano explotaba el zacatón; que efectivamente le pagaba a los peones y; que le constaba que tenía establecido un establo.[149]

Pasado al periodo de alegatos, se tuvieron por reproducidos los formulados por las partes, puesto que tanto la parte quejosa como los terceros perjudicados los habían presentado por escrito. Los propietarios precisaron que se encontraban en posesión del inmueble a título de dueños, siendo su posesión "de buena fe, pacifica, continua, pública y cierta" desde hace

[147] AHCCJT, AI, 999/50, fs. 55-55v.
[148] AHCCJT, AI, 999/50, f. 56v.
[149] AHCCJT, AI, 999/50, f. 57-57v.

10 años. También reiteraron que la ejecución de la dotación complementaria dada a los de Chotejé era ilegal, pues "con el pretexto de que no estuvo bien practicada esa resolución presidencial", no era posible volver a practicarla, ya que "cualquiera que sea el pretexto que se esgrima para justificar esa nueva pretención", la Suprema Corte de Justicia de la Nación había "sostenido el criterio de que una vez que las autoridades agrarias han cumplido con llevar a la práctica una resolución dotatoria o ampliatoria de ejidos, no están ya facultados por ninguna ley, cualquiera que sea el pretexto, para volver a ejecutar esa misma resolución".[150]

Por su parte, los ejidatarios de Chotejé expresaron, entre otras cosas, que ignoraban si el quejoso los había señalado "en su demanda como terceros perjudicados" por desconocer el texto, pero que así se consideraban de acuerdo con la ley de amparo vigente, por lo que comparecían ante el juez para que así los considerara". Es de destacar este argumento puesto que, para esta etapa de la reforma agraria, queda comprobado que los ejidatarios contaban con un amplio conocimiento de la legislación y la utilizaban como un medio de resistencia en defensa de sus tierras.

Siguiendo con los alegatos de los ejidatarios, consideraron improcedente la demanda de amparo, porque los terrenos que el quejoso reputaba de su propiedad, era "público y notorio que han pertenecido siempre, durante todo el proceso de la substanciación de nuestro expediente de dotación, a la Hacienda denominada La Luz, y que dicha hacienda fue propiedad de la Sra. Esperanza M. de Arriaga y Lic. Fernando Arriaga". Concluyeron su escrito aludiendo a que de concederse el amparo se les perjudicaría en sus derechos y subsistencia, toda vez que ya tenían en su "poder los certificados de Derechos Agrarios que nos otorgan propiedad sobre las tierras motivo de la demanda, y porque dicha superficie es el único patrimonio con que contamos para el sustento de nuestras familias y de nosotros mismos"; que se lesionaría "el precepto constitucional y jurídico" porque se impediría la ejecución de la resolución presidencial y; "que de concederse el amparo en cuestión, se lesionarían los intereses y derechos colectivos y públicos, mientras que, si la Justicia Federal, consecuente con las Leyes Agrarias del país en vigor, niega el amparo al señor Rodríguez, el núcleo de campesinos pobres que suscribimos la presente intervención, nos veríamos

[150] AHCCJT, AI, 999/50, fs. 27-28.

favorecidos en nuestros escasos intereses y que constituyen todo nuestro patrimonio".[151] Es importante señalar que en estos alegatos existe una mezcla tanto de argumentos jurídicos, lo que demuestra el conocimiento de la legislación que poseían, como aspectos de economía moral, es decir, los de Chotejé apelaron a "la idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad",[152] materializada en el derecho que tenían de contar con un mínimo de bienestar y subsistencia.

Emitida su sentencia, el juez consideró que la existencia de los actos reclamados no se había acreditado en lo referente al jefe del Departamento Agrario y del delegado de esa dependencia en la entidad, "en virtud de que dichas autoridades lo negaron categóricamente, sin que los quejosos, por su parte, hayan aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa, por lo cual resulta improcedente el presente juicio por lo que a dichas autoridades se refiere" y declaraba el sobreseimiento.[153] Por lo que toca a los actos atribuidos al jefe de Promoción Ejidal Agraria en Ixtlahuaca, como dicha autoridad no emitió su informe justificado, sus actos se tuvieron "por acreditados presuncionalmente", de acuerdo con el artículo 149 de la ley de amparo, se le impuso una multa de $50.00 y se concedió el amparo en cuanto a esta autoridad por "ejecutar trabajos de planificación en el rancho de Santa Rita".[154]

Inconformes con esta resolución y con fecha seis de enero de 1951, los terceros perjudicados, es decir, los pobladores de Chotejé, promovieron el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su principal argumento fue que el acto reclamado no se había comprobado y que la resolución del juez de distrito impediría el cumplimiento de un fallo presidencial, siendo procedente su sobreseimiento, al igual que con las otras autoridades señaladas.[155]

En su pedimento, el agente del Ministerio Público Federal solicitó se confirmara la resolución del de distrito, puesto que al no rendir su informe el jefe de promoción ejidal, su actuación debía presumirse como cierta de conformidad con la ley de amparo.[156]

---

[151] AHCCJT, AI, 999/50, f. 46.
[152] THOMPSON, "La economía moral", p. 66.
[153] AHCCJT, AI, 999/50, f. 59v.
[154] AHCCJT, AI, 999/50, f. 59-61.
[155] AHSCJN, AR, 1751/51, fs. 3-5.
[156] AHSCJN, AR, 4837/52, f. 9.

Finalmente, con fecha 16 de agosto de 1951, la Corte confirmó la sentencia del juez de distrito, es decir, sobreseyó el juicio en cuanto a los actos reclamados al jefe del Departamento Agrario y su delegado en el Estado de México, otorgó el amparo en cuanto a los actos atribuidos al jefe de Promoción Ejidal y le impuso una multa de cincuenta pesos.[157]

Si bien los propietarios fueron amparados, para febrero de 1952 la Dirección de Derechos Agrarios del Departamento Agrario, informó a su delegación en el estado que podían continuar con la posesión a Chotejé, dado que se podía garantizar el respeto a las extensiones amparadas en los certificados de inafectabilidad. El delegado respondió que se veía imposibilitado para cumplir con las órdenes dadas, pues precisamente el amparo otorgado a los quejosos les impedía llevar a cabo los trabajos de medición, por lo que le consultaba "si a pesar de lo anterior", podía entregarse a Chotejé "la superficie faltante para cumplir en todos sus términos" la resolución presidencial.[158] Al parecer no hubo respuesta al respecto.

De acuerdo con la documentación consultada, queda claro que la disputa por las tierras no concluyó con la sentencia de la SCJN. Apenas había transcurrido un año y el 2 de septiembre de 1952, Jesús Agredano Rodríguez y Blanca Martínez de Rodríguez, demandaron amparo ante el juez de distrito estatal, contra el jefe del Departamento Agrario y su delegado en el Estado de México, señalando como acto reclamado la orden que dictó el primero para que se ejecutara una dotación complementaria al poblado de Chotejé, afectándose su pequeña propiedad, la cual contaba con un certificado de inafectabilidad que la protegía y de la segunda autoridad, la ejecución de dicha orden.[159] Hay que recordar que a diferencia de los amparos analizados con anterioridad, que se reconstruyeron a partir de las demandas encontradas en la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Toluca, en este caso el único documento al que se tuvo acceso y de forma incompleta, fue el incidente de suspensión; razón por la que solo se hace mención al juicio y se pone especial atención en la sentencia emitida por la Suprema Corte.

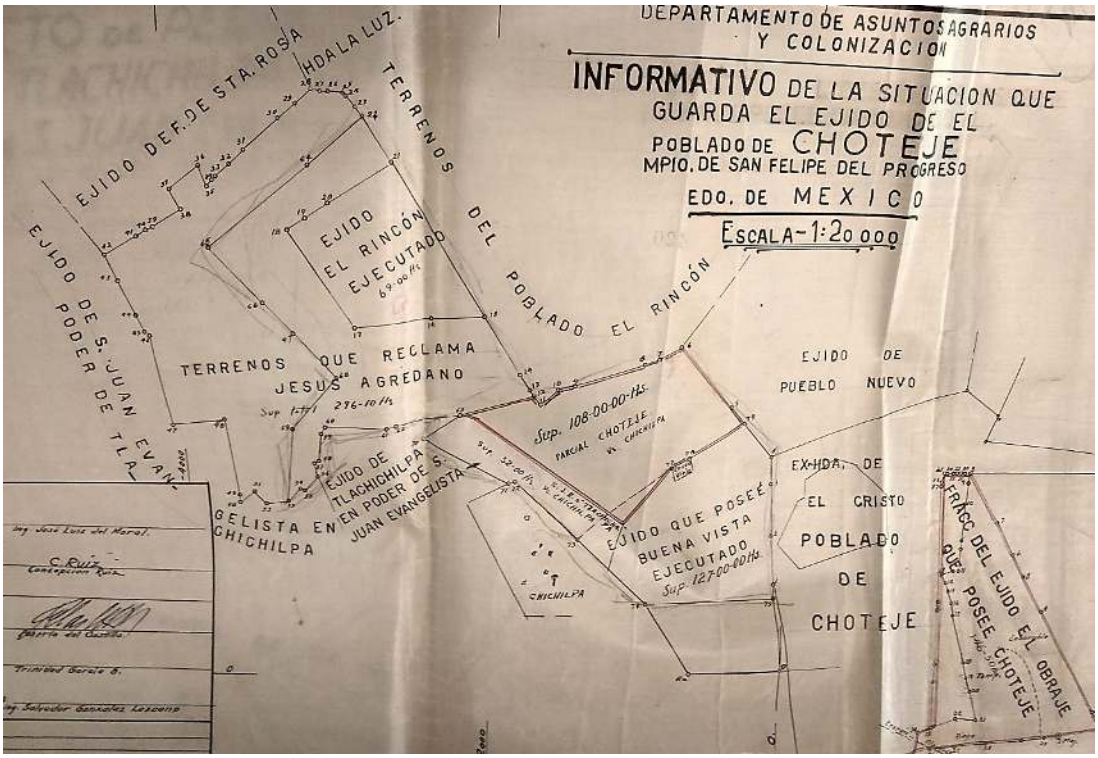
En su demanda argumentaron que "sin previa resolución presidencial, sin fundamento legal alguno y a petición del Comisariado Ejidal" se pretendía afectar "nuevamente nuestra pequeña propiedad y por tanto despojarnos de la misma desposeyéndonos de ella". Para

[157] AHSCJN, AR, 4837/52, fs. 12-14.
[158] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 407.
[159] CAJCJF, JDEM, AI, 567/952, fs. 2-3.

respaldar su argumento retomaron un criterio jurisprudencial de la Corte que establecía la carencia de facultades de las autoridades agrarias

> para intentar nuevos procedimientos de ejecución de la misma, a pretexto de que hubiera faltado por entregar a los campesinos determinada porción de las tierras afectadas, puesto que para que tal cosa fuera factible jurídicamente, sería necesario que así lo estableciera la ley por medio de un procedimiento especial, en el que en todo caso se llenaran determinadas formalidades del procedimiento como las de oir a los que pudieran resentir algún perjuicio con el nuevo procedimiento de ejecución que se intentara; y es sabido que ni la Constitución Federal ni el Código Agrario o ley especial alguna, autorizan ese procedimiento, después de que ha sido ejecutada la resolución presidencial dotatoria correspondiente".[160]

Mapa 6. Ubicación de la posesión parcial al ejido de Chotejé y los terrenos de Jesús Agredano



Fuente: AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 15, s.f.

En los informes presentados por las autoridades señaladas como responsables, reconocieron la existencia del acto reclamado, es decir, que habían ordenado se entregaran a los de Chotejé, "las tierras de agostadero que debían tomarse de la hacienda de la luz como posesión complementaria".[161] A pesar de esto, el juez de distrito negó la protección de la

[160] CAJCJF, JDEM, AI, 567/952, fs. 2-3.
[161] CAJCJF, JDEM, AI, 567/952, s/f.

justicia federal solicitada, debido a que los quejosos no habían comprobado la inscripción de la declaración de inafectabilidad en el Registro Agrario Nacional y únicamente se había realizado en el periódico oficial del estado "antes bien, los quejosos en su libelo de demanda se ostentan como pequeños propietarios derivando su derecho de la declaración de inafectabilidad expedida a favor de la anterior propietaria del rancho de que se trata; pero nada dicen respecto a que, como consecuencia de la adquisición que llevaron a cabo de esa pequeña propiedad, ellos por su parte hayan llevado a cabo la inscripción correspondiente" en el RAN de acuerdo a lo estipulado por el código agrario.[162]

Aún más, desde el punto de vista del juzgador, lo que buscaban los quejosos era que se declara en su favor la inafectabilidad de las tierras en disputa, cuestión que era propia de los procedimientos y autoridades agrarias; además de existir una discrepancia entre la prueba pericial ofrecida por los propietarios y el perito nombrado por el juzgado, consistente en una diferencia de poco más de 84 hectáreas, "diferencia que el perito de los quejosos explica diciendo que se debe a terrenos que se tenían en posesión desde hace algún tiempo".[163] Desafortunadamente no se pudo tener acceso a estos peritajes, lo cual permitiría profundizar en la diferencia apuntada.

Al serles negado el amparo, los quejosos presentaron el recurso de revisión ante la Suprema Corte. Señalaron como agravios que el juez de distrito había confundido lo solicitado "pues no se ocurrió en solicitud de una declaración de inafectabilidad agraria, sino se le planteó la inconstitucionalidad del acto reclamado", consistente en la dotación complementaria al ejido de Chotejé, violando el artículo 27 constitucional y el artículo 104, fracción I del código agrario vigente, que establecía que las superficies que no excederían de 100 hectáreas serían inafectables, puesto que no existía resolución presidencial alguna y las responsables tampoco contaban con facultades "para intentar nuevos procedimientos dotatorios".[164]

Analizado el asunto por la Segunda Sala de la Suprema Corte, determinó que la resolución presidencial que había concedido tierras al poblado de Chotejé se había ejecutado "de acuerdo con los planos respectivos desde el 11 de enero de 1941", por lo que el acto que reclamaban los recurrentes se trataba de una dotación complementaria.

---

[162] AHSCJN, AR, 4837/52, f. 14.
[163] AHSCJN, AR, 4837/52, f. 15.
[164] AHSCJN, AR, 4837/52, f. 17

El máximo tribunal del país había emitido una jurisprudencia en casos similares que por la importancia que presentó, vale la pena reproducir:

> Cumplimentada una resolución presidencial dotatoria o ampliatoria de ejidos, las autoridades agrarias carecen de facultades legales para intentar nuevos procedimientos de ejecución, a pretexto de que hubiere faltado por entregar a los beneficiados determinada porción de las tierras afectadas, o de que se hubieren incluido entre las que fueron entregadas, tierras que no fueron objeto de afectación; ya que para que tal cosa fuera factible jurídicamente, sería necesario que así lo estableciera la Ley, por medio de un procedimiento especial en el que en todo caso, se llenaran determinadas formalidades esenciales del procedimiento, como la de oír previamente en defensa a los que pudieran resentir algún perjuicio con el nuevo procedimiento de ejecución que se intentara; y es sabido, que ni la Constitución Federal ni Código Agrario o ley especial alguna, autorizan ese procedimiento, después de que ha sido ejecutada la resolución presidencial dotatoria o ampliatoria correspondiente.

Con este criterio, la Corte revocó la sentencia del juez de distrito y con fecha 11 de junio de 1953, concedió el amparo a los quejosos, por lo que el asunto se encontraba "totalmente terminado, debiéndose respetar y cumplimentar la ejecutoria dictada".[165] En términos concretos, la obtención del amparo para los propietarios significó la protección jurídica plena de su finca, mientras que para los ejidatarios el que no pudieran disponer de las tierras faltantes.

Si bien el asunto ante la justicia federal concluyó con la ejecutoria de la SCJN, la disputa por las tierras faltantes al ejido no cesó. De acuerdo con las fuentes consultadas, en la siguiente década los de Chotejé realizaron diversas gestiones ante las autoridades agrarias solicitando la ejecución de la posesión complementaria a pesar de existir un amparo de por medio. Una de esas gestiones la realizaron en 1957 por conducto de la mencionada Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), en donde solicitaron se llevara a cabo el deslinde de parte del ejido, consistente en 475 hectáreas, pues si bien Jesús Agredano, dueño de Santa Rita, contaba con un amparo de la Suprema Corte que obligaba a respetar "la pequeña propiedad amparada por el Certificado de Inafectabilidad Agrícola respectiva", dicho certificado no protegía "la invasión que esta haciendo al ejido de Chotejé" el señor Agredano.[166] Lamentablemente no se encontraron mayores datos sobre esta gestión, ni con respecto al papel de la UGOCM en este asunto, aunque en los expedientes revisados queda

[165] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 421.
[166] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, fs. 135-136.

constancia de la intervención de algún representante de esta organización en algunas de las asambleas ejidales y aparece por lo menos una audiencia celebrada entre el comisariado ejidal y personal del DAAC, cuyo resultado fue el solicitar se designara personal que practicara "una minuciosa investigación con respecto a la posibilidad legal" para ejecutar la resolución presidencial pendiente.[167] Realizado el estudio correspondiente se llegó a la conclusión de que debía respetarse la sentencia de la Suprema Corte y que no podían llevarse a cabo trabajos "sobre un predio dos veces protegido, uno por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra por el Certificado de Inafectabilidad que ampara la totalidad de las tierras que tiene la Hacienda de Santa Rita".[168]

Al mismo tiempo los conflictos con los ejidos aledaños continuaron, en abril de 1959 una comisión de Chotejé se presentó a la delegación estatal del DAAC para manifestar que campesinos de Chichilpan y Tlachichilpan habían invadido terrenos de su ejido.[169]

Ese mismo año fue nombrado un inspector del Departamento Agrario que realizó una investigación para determinar la posibilidad legal de ejecutar la resolución presidencial. Dentro de sus labores acudió al poblado para explicarle a los ejidatarios las imposibilidades legales para llevar a cabo la resolución presidencial, derivadas de la ejecutoria dictada por la Suprema Corte, así como por los decretos de inafectabilidad de 1940 y 1957. Los ejidatarios expusieron que seguirían "insistiendo ante las autoridades superiores", hasta conseguir sus tierras pues consideraban "injustos los impedimentos que han obstaculizado hasta ahora la ejecución de dicha resolución".[170] De acuerdo con el acta respectiva, en esta asamblea se encontró presente uno de los auxiliares del Comité Nacional de la UGOCM, lo que demostraría su acompañamiento o asesoramiento a los de Chotejé, por lo menos para estos años.

En 1964 el entonces comisariado ejidal se dirigió al presidente López Mateos para solicitar su intervención en los siguientes términos: "necesitamos que quede liquidado nuestro caso, ya hemos gastado mucho, ya nos han hecho dar muchas vueltas, ya estamos cansados y hasta cierto punto decepcionados y como último recurso nos dirigimos a UD. Sr. Presidente con la remota esperanza de que este oficio llegue a sus manos y se de cuenta de

[167] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 148.
[168] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, fs. 150-151.
[169] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, fs. 160.
[170] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 540.

nuestra situación";[171] en 1968 enviaron una carta al presidente Gustavo Díaz Ordaz en donde mencionaban que la respuesta a todas sus gestiones había sido negativa, razón por la que pedían su intervención en el asunto[172] y; aún en 1981, pedían al delegado estatal del DAAC que comisionara al personal necesario para ejecutar la resolución presidencial "y posteriormente de ser procedente se integre expediente de permuta que culmine en Resolución Presidencial".[173] Habían transcurrido casi 50 años desde la solicitud de tierras y, al parecer, continuaba la incertidumbre por la totalidad de las tierras dotadas al ejido de Chotejé.

A manera de cierre

Como se ha visto en los capítulos anteriores, desde el inicio de la reforma agraria los afectados con resoluciones dotatorias de tierras utilizaron como uno de sus principales argumentos el que sus terrenos se trataban de una pequeña propiedad y bajo el cobijo de la diversa legislación agraria (circulares, leyes y códigos) que señalaba las calidades y extensiones de tierras que serían inafectables, defendieron sus derechos e intereses; siendo en el sexenio de Miguel Alemán que se instituyó dentro del sistema jurídico mexicano un amparo protector de dichas propiedades, exigiendo como requisito previo el contar con un certificado de inafectabilidad que lo reconociera. Sin embargo, la reforma impulsada por el presidente Alemán fue el punto de llegada de un tortuoso camino que por lo menos, se había iniciado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (si no es que desde la promulgación de la constitución de 1917).

En ese trayecto y como se trató de demostrar en este capítulo, diversos sectores de la sociedad mexicana (organizaciones campesinas y de pequeños propietarios; diputados, senadores, juristas) formaron parte del debate con respecto a la conveniencia o no de legislar sobre la materia. Por ejemplo, diversos legisladores presentaron iniciativas de reforma al artículo 27 constitucional para restituir el amparo a la pequeña propiedad, además de la presión ejercida por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) y las propuestas elaboradas por destacados juristas como Lucio Mendieta. En contraposición, en un primer momento las autoridades agrarias y la Confederación Nacional Campesina (CNC),

[171] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 620.
[172] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 3, f. 704.
[173] AGA, dotación, exp. 23/8943, legajo 15, f. 327.

defendieron la prohibición del amparo en materia agraria, cambiando de postura en el año de 1947, plegándose a la propuesta del presidente en turno.

Sin duda alguna, uno de los espacios en donde se enfrentaron ambas posturas, fue el *Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario* de 1945, en donde la posición que estaba en contra del amparo logró salir triunfante, empero, meses después, a fines de 1946, la propuesta de reforma para restituir el juicio de garantías vendría de parte de la máxima autoridad en materia agraria, aprobándose en el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales, con lo que daba inicio una nueva etapa en la historia del juicio de amparo.

Si bien, este cambio constitucional dentro de la historiografía agraria y para algunos actores de la época representó un retroceso o una contrarreforma, lo cierto es que la propuesta de Miguel Alemán fue el punto culminante del proceso de defensa de la pequeña propiedad, garantizada desde la constitución de 1917, regulada desde 1938 por Lázaro Cárdenas y consolidada en 1947 con los certificados de inafectabilidad agrícola como requisito previo para poder promover el juicio de amparo. En ese sentido, la promulgación del amparo a la pequeña propiedad puede verse como uno de los triunfos del antiagrarismo en el siglo XX.

En el caso del Estado de México, los certificados de inafectabilidad no tuvieron el mismo impacto que en otras regiones del país, —puesto que como han demostrado los trabajos de Elvia Montes de Oca y Eduardo Aguado López, para este momento el reparto de tierras prácticamente estaba liquidado y el gobierno estatal ponía mayor atención en la industrialización de la entidad— lo cual no significó que los propietarios de tierras no buscaran obtenerlos para proteger sus terrenos y los hicieran valer ante las instancias administrativas y judiciales cuando se vieron afectados por la implementación de la reforma agraria, ajustando su actuar a las nuevas disposiciones en la materia.

Es necesario reiterar que conforme se transformó la política agraria en la entidad, también se modificaron las causas que originaron el amparo. Como se demostró, aparecieron algunos juicios derivados de conflictos surgidos al interior de los ejidos como el despojo o privación de parcelas o por otras acciones agrarias como la confirmación de bienes comunales, la división de ejidos y los menos por dotación. En algunos de estos últimos procedimientos, los propietarios afectados hicieron uso de los certificados de inafectabilidad para demostrar que sus fincas eran inafectables. Tal fue el caso de los dueños del Rancho Santa Rita (hacienda La Luz), ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso, que

acudieron a la justicia federal promoviendo dos juicios en contra de la dotación complementaria al poblado de Chotejé, obteniendo sentencias favorables para sus pequeñas propiedades.

En este estudio de caso destaca que los solicitantes de tierras eran peones acasillados de una de las haciendas de la región, quienes en el momento de realizar su solicitud no contaban con derechos plenos para obtener ejido y que echaron mano de diversas formas de resistencia para hacer valer sus derechos. En primer lugar, hicieron uso del marco que les proporcionaba la ley, demostrando que contaban con un amplio conocimiento de la legislación, lo cual se puede ver en la serie de peticiones realizadas a las autoridades agrarias y en su actuación en el juicio de amparo, pero también utilizaron argumentos de economía moral para hacerle ver a las dependencias gubernamentales que tenían derecho a un mínimo de bienestar y condiciones mínimas de subsistencia.

Una vez que obtuvieron la resolución presidencial a su favor, los peones de Chotejé, vivieron la incertidumbre por más de cuatro décadas, pues no pudieron tomar posesión de la totalidad de las tierras concedidas, tanto por la resistencia llevada a cabo por los propietarios, por medio del amparo; como por la serie de conflictos que se suscitaron con los ejidos vecinos, constituidos por otros grupos de acasillados, extrabajadores de las haciendas de la región y que contaban con la posesión de parte de la superficie dotada.

Además de que este caso permite analizar a detalle la relación juicio de amparo y pequeña propiedad, reabre una veta historiográfica sobre el actuar de los peones acasillados en el periodo posrevolucionario, específicamente en su papel como sujetos de derecho agrario; su actuar ante las instancias administrativas y judiciales; las formas de resistencia que utilizaron; su vínculo con los hacendados y; los conflictos que presentaron con otros peones y ejidos.

En el caso de la actuación de los propietarios, es pertinente mencionar que existían relaciones complejas con sus trabajadores, puesto que, en algún momento del procedimiento de dotación, algunos de ellos pidieron tierras para sus peones o propusieron donarles parte de sus terrenos y los propios acasillados presentaron argumentos a favor de sus patrones. Estas acciones demostrarían que en esa región del Estado de México aún existían relaciones de paternalismo o bien, que los propietarios solo hicieron suyo el discurso de la reforma agraria para conservar sus mejores tierras.

Como se comentó, para esos años el gobierno estatal impulsaba la industrialización de algunas regiones de la entidad, lo que lo obligó a disponer de las tierras necesarias, incluidas las ejidales, para atender la urbanización e industrialización de esas zonas, tema que se trata en el siguiente capítulo.

Capítulo 5

Juicio de amparo, reforma agraria e industrialización en el Estado de México (1959-1971)

> Hace apenas unos días tuvimos la satisfacción de asistir a la nacionalización de la industria eléctrica y a la reforma constitucional que sustrajo del comercio de la iniciativa privada, el servicio público que puede prestarse con la energía eléctrica. Hoy asistimos a una sesión histórica en que se reforma también la Constitución para lograr, gracias a la iniciativa del señor Presidente de la República, lo que pudiéramos llamar *la democratización del juicio de amparo*.[1]

Con estas palabras, Manuel Hinojosa Ortiz, senador por Michoacán; manifestó su apoyo a la propuesta enviada por el presidente Adolfo López Mateos, para reformar el artículo 107 constitucional y crear un juicio de amparo protector de las tierras, bosques, pastos y aguas, de ejidos y núcleos de población que de hecho o por derecho conservaran el estado comunal.

Para el senador Hinojosa, se trataba de la *democratización del juicio de amparo*, ya que buscaba establecer un procedimiento más accesible para estos sujetos agrarios, sin menos formalismos y que contribuyera a la protección de sus recursos naturales, pues como se mencionó en el capítulo cuatro, el amparo continuaba siendo una de las ramas más especializadas del derecho mexicano. Todo ello en un contexto en el que, de acuerdo con la política del gobierno en turno, la reforma agraria se encontraba en una segunda etapa caracterizada por el apoyo técnico y crediticio a los ejidos que buscaba elevar la producción y el nivel de vida de las familias campesinas, pero también de una represión generalizada a los movimientos sociales, incluyendo la diversidad de protestas en el campo.

El nuevo procedimiento de amparo, al que se denomina aquí como amparo agrario para distinguirlo del amparo en materia agraria que se ha venido analizando en los anteriores capítulos, fue de gran trascendencia para ejidos y comunidades, ya que les otorgó la facultad de acudir al Poder Judicial de la Federación, en defensa de sus recursos naturales;

[1] Palabras del senador Manuel Hinojosa Ortiz en la sesión de discusión de la propuesta de reforma al artículo 107 constitucional en *Diario de los Debates de la Cámara de Senadores*, 4 de noviembre de 1960, p. 12.

independientemente del momento en que hubieran sufrido la afectación, de la inactividad que pudiera darse en el juicio o de la forma en que hubieran expuesto la demanda de amparo, causas por las que los juicios eran desechados o sobreseídos por los jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cómo se desarrolló el procedimiento legislativo que creó esta nueva figura jurídica? ¿En qué contexto se aprobó esta reforma? ¿Cuáles fueron las principales innovaciones de este procedimiento? Y, sobre todo, ¿Cómo se habrá puesto en práctica este juicio? Son algunas de las interrogantes que se tratan de responder, aunque sea de forma parcial, en este capítulo.

En el caso particular del Estado de México se ha mencionado que el reparto de tierras, por lo menos a nivel formal, estaba prácticamente concluido, razón por la cual la política agraria de la entidad había pasado a segundo plano y se daba mayor atención a la industrialización de algunas regiones como Toluca, Chalco y algunos de los municipios limítrofes al entonces Distrito Federal, como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán. Dependiendo de los planes y proyectos para urbanizar e industrializar, el gobierno estatal se vio en la necesidad de expropiar tierras, incluyendo las ejidales, lo que motivó que algunos de los ejidos afectados acudieran al amparo como un recurso de resistencia en defensa de sus bienes. En este caso, la lucha no sería contra los propietarios sino contra el propio gobierno que, en cierto sentido, era juez y parte de la pugna.

Siguiendo esta idea, el propósito principal de este capítulo es presentar algunas de las primeras experiencias de interposición del amparo agrario, figura que hasta ahora ha sido poco trabajada por la historiografía de la reforma agraria.

Para el logro de lo anterior, en este capítulo se presenta la política agraria del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, así como el proceso legislativo (1959-1962) que reformó el artículo 107 constitucional, destacando los principales cambios y características del amparo agrario en la legislación secundaria; se realiza una breve descripción de la política agraria e industrializadora en el Estado de México durante el gobierno de Gustavo Baz, por ser el que promovió la expropiación que dio origen a los amparos que se presentan más adelante; se esboza el procedimiento de dotación de tierras al poblado de Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca y; se cierra con el análisis de dos juicios de amparo promovidos por este ejido en contra del procedimiento expropiatorio que les despojaría de

una porción de sus tierras para ampliar la zona industrial de la capital mexiquense, lo que develaría conflictos internos en este ejido, por lo menos en cuanto a la expropiación.

5.1 La política agraria de Adolfo López Mateos (1958-1964)

Es necesario precisar que, si bien en los tres capítulos que le preceden y en este, se pone énfasis en la política agraria presidencial en turno, es únicamente con el propósito de contextualizar la reforma legal correspondiente, en este caso el surgimiento del amparo agrario y no porque se priorice la versión institucional de la reforma agraria, aunque se tiene claro que esto es difícil cuando el reparto agrario se llevó a cabo de arriba hacia abajo y la máxima autoridad en la materia era el presidente de la república.

Adolfo López Mateos gobernó el país del primero de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Una de las primeras medidas tomadas por su gobierno fue la restructuración de la administración pública federal por medio de la *Ley de Secretarías y Departamentos de Estado* de 1958. En materia agraria, este ordenamiento estableció la creación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), que sustituiría al Departamento Agrario creado en 1934.

El DAAC además de ocuparse de la aplicación de lo establecido en el artículo 27 constitucional, sus leyes y reglamentos; se enfocaría en la creación de nuevos centros de población agrícola; a intervenir en las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales; a planear, organizar y promover la producción agrícola y ganadera de los ejidos y comunidades; a manejar los terrenos baldíos y nacionales y; a proyectar los planes generales y concretos de colonización, entre algunas otras funciones.[2]

El principal eje de la política agraria del sexenio de López Mateos fue la llamada Reforma Agraria Integral consistente en "facilitar, dentro de los cauces legales correspondientes, no sólo las tierras, montes y aguas" que solicitaran los pueblos, sino que además debían proporcionárseles "el crédito, la asistencia técnica necesaria, la escuela,

[2] Artículo 17, "Ley de Secretarías y Departamentos de Estado" en *Diario Oficial*, 24 de diciembre de 1958, pp. 9-10. La estructura orgánica y atribuciones de cada una de las dependencias que integraron el DAAC, quedó establecida en su Reglamento Interior, publicado en el *Diario Oficial* el viernes 1 de julio de 1960.

organizándose servicios complementarios de bienestar social".[3] En palabras del investigador Alejandro Rea Moguel, como la entrega de tierra a los campesinos no resolvía por si sola los problemas que se presentaban en el campo mexicano, era necesario apoyarlos con "los recursos financieros, los recursos técnicos, la organización adecuada, la seguridad en la cosecha, en los precios de venta y en la integridad física de los campesinos mismos y de sus familias".[4] Dichas tareas quedaron en manos de las diversas autoridades agrarias, encabezando la encomienda el recién creado Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

A diferencia de los gobiernos que se han presentado en los capítulos anteriores, la administración de Adolfo López Mateos buscó continuar con el reparto de tierras a partir de terrenos nacionales y baldíos, lo cual hasta cierto punto protegía las grandes extensiones de tierra que se encontraban principalmente en el norte del país y las pequeñas propiedades agrícolas y ganaderas. Además de recurrir a las demasías que tuvieran dichas propiedades, así como aquellas que aún pudieran ser consideradas como repartibles.[5] Además, hay que considerar que la cuestión agraria no le era ajena al presidente, al ser senador por el Estado de México (1946-1952), le tocó participar en la discusión del amparo a la pequeña propiedad. Siguiendo al historiador Ariel Rodríguez Kuri, López Mateos "atajó el argumento de que con la reforma se daba por terminado el reparto", argumentando que el poseedor de un certificado de inafectabilidad no podría, "por ese solo hecho, burlar la ley" ni "detener la reforma agraria ni "simular, en forma alguna, derechos que no le corresponden".[6]

El aprovechar los terrenos nacionales permitió al gobierno federal movilizar a solicitantes de tierras y a aquellos que contaban con sus derechos a salvo, para instalarlos "en parcelas adecuadas a las necesidades de una familia, proporcionándoles, a manera de crédito, los medios económicos para el traslado de los beneficiados de sus lugares de origen hasta las tierras que se les entregaron; así como una cuota diaria, que, sirviera para cubrir los gastos del colono mientras obtuviera la primera cosecha".[7] De acuerdo con el Departamento de

---

[3] Circular número 3 del 25 de enero de 1961, dirigida a los delegados estatales del DAAC en *Seis años de política*, p. 477.
[4] REA, *México y su reforma*, pp. 54-55.
[5] Salvo que se señale lo contrario, los datos aquí presentados fueron tomados de la memoria sexenal *Seis años de política agraria del presidente Adolfo López Mateos, 1958-1964*, publicada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC).
[6] RODRÍGUEZ, "Adolfo López Mateos", p. 199.
[7] *Seis años de política*, p. 379.

Asuntos Agrarios y Colonización, para 1964 existían 1 173 colonias en el país, tres de ellas ubicadas en el Estado de México, compuestas de 60 lotes y una extensión de 1 726-14-52 hectáreas (ver cuadro 15).

Cuadro 15. Colonias establecidas en el Estado de México para 1964

Nombre de la colonia	Municipio	Régimen de propiedad	Clasificación de tierras	No. de lotes	Superficie	Observaciones
El Progreso	San Juan Teotihuacán	Particular	Temporal	14	309-69-00	Con declaratoria
La Esperanza	Tequixquiac	”	”	21	1 291-45-52	”
Roberto Barrios	Villa de Allende	”	”	25	125-00-00	”

Fuente: elaboración propia con base en *Seis años de política*, p. 413.

Otra de las medidas implementadas para “el reacomodo de la clase campesina del país” y como una posible solución a los problemas que originaba el incremento demográfico en el campo, a la reducción de la superficie destinada a uso agrícola y a las exigencias de tierra por parte de los campesinos con derechos a salvo, fue la creación de los Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE), como un sistema complementario a las acciones de dotación, restitución y ampliación. Para ello, el DAAC realizó estudios socioeconómicos en distintas regiones del país, “con objeto de localizar tierras con calidad y extensión suficientes”, para trasladar a los campesinos.[8] En este rubro sobresale la creación de nuevos centros en Campeche (Río Candelaria), Veracruz (Chapacao) y Quintana Roo. En el caso del Estado de México, sólo se constituyó un NCPE con 82 beneficiados en una superficie de 1 840-00-00.

Las dependencias agrarias también atendieron otros aspectos como la solución de conflictos por límites de bienes comunales; la renovación de comisariados y consejos de vigilancia ejidales; la atención al rezago de los asuntos pendientes de resolución y; la organización de ejidos ganaderos (95 ejidos que aglutinaban a 9 863 ejidatarios) y ejidos forestales (para ese periodo existían 380 ejidos y comunidades que contaban con instalaciones para la producción de resina, siendo 42 000 ejidatarios los que trabajaban en estas labores), por solo mencionar algunas de sus actividades.

El propio gobierno federal sintetizaba su política agraria en los siguientes términos:

[8] *Seis años de política*, p. 289.

> La acción se haya enfocada al cumplimiento de los principios jurídicos en que se sustenta el agrarismo mexicano, y el mantenimiento de la unidad campesina, consideramos que si se actúa conforme a derecho y se protegen por igual dentro de las normas constitucionales al ejido y a la pequeña propiedad, se consigue el orden y la tranquilidad, bases del trabajo productivo que permitirá lograr los niveles de vida requeridos por las grandes tareas de la patria.[9]

En cuanto al reparto de tierras otorgado por Adolfo López Mateos y siguiendo la memoria publicada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en 1964, del 1 de septiembre de 1958 al 31 de agosto de 1964, se concedieron 1 134 resoluciones de dotación y 809 resoluciones de ampliación (ver cuadros 16 y 17), sumando poco más de cinco millones de hectáreas. Estos números contrastan con los dados por el Centro de Investigaciones Agrarias quienes hablan de "9 093 357 hectáreas con resoluciones presidenciales efectivamente firmadas en el sexenio"[10] y las presentadas en las *Estadísticas Históricas* publicadas por INEGI, en donde se da un total de 8 870 430 hectáreas,[11] representadas en 2 341 dotaciones, para un total de 148 238 beneficiados. Si seguimos estos últimos datos, el sexenio de Adolfo López Mateos se posiciona en tercer lugar en cuanto al número de tierras distribuidas (ver cuadro anexo 6), sólo por debajo de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, quien otorgó 24 738 199 hectáreas y Lázaro Cárdenas con un total de 18 786 131.

Cuadro 16. Resoluciones presidenciales de dotación de tierras 1958-1964

Años	Concedidas	Hectáreas
1958-1959	80	366 407-09-65
1959-1960	158	522 749-71-04
1960-1961	208	273 161-42-32
1961-1962	189	409 302-85-71
1962-1963	196	575 251-30-28
1963-1964	303	1 156 183-15-46
Total	**1, 134**	**3 303 055-54-46**

Fuente: elaboración propia con base en *Seis años de política*, pp. 84, 106, 132, 160, 188, 216, 241.

[9] *Seis años de política*, p. 79.
[10] Citado en MOGUEL, "La cuestión agraria", pp. 181-182.
[11] *Estadísticas Históricas*, p. 295.

Cuadro 17. Resoluciones presidenciales de ampliación de tierras, 1958-1964		
Años	Concedidas	Hectáreas
1958-1959	51	50 751-00-59
1959-1960	121	255 208-24-17
1960-1961	132	157 933-53-41
1961-1962	108	255 279-87-66
1962-1963	180	481 726-84-07
1963-1964	217	540 690-32-61
Total	**809**	**1 741 589-82-51**

Fuente: elaboración propia con base en *Seis años de política*, pp. 84, 106, 134, 160, 188, 218, 241.

En este punto vale la pena hacer un alto y reiterar que las cifras oficiales presentadas en esta investigación, únicamente tienen el propósito de servir de apoyo en tres sentidos: reconstruir el contexto de la época, presentar un esbozo de la política agraria del gobierno en turno y en algún sentido, identificar el ritmo del reparto de tierras; pues, como se mencionó en la introducción, los números de la reforma agraria varían dependiendo de la fuente consultada (local o nacional) y del momento del trámite agrario al que se haga referencia. Hay que recordar que en dichas cifras no se establece si las resoluciones (provisionales o definitivas) cuentan con algún procedimiento legal que las impugne y que pueda modificar la cantidad otorgada.

Continuando con la política de sus antecesores, López Mateos otorgó 1 276 acuerdos de inafectabilidad agrícola para 194 843-32-56 hectáreas (ciento noventa y cuatro mil ochocientas cuarenta y tres hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y seis centiáreas) siendo el periodo 1962-1963 el de mayor superficie protegida como puede verse en el siguiente cuadro.

Cuadro 18. Acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola 1958-1964		
Años	Concedidos	Hectáreas
1958-1959	394	101 278-91-84
1959-1960	83	14 766-84-73
1960-1961	229	16 243-62-34
1961-1962	141	17 491-84-86
1962-1963	262	26 226-88-74

1963-1964	167	18 835-20-05
Total	**1276**	**194 843-32-56**

Fuente: elaboración propia con base en *Seis años de política*, pp. 88, 110, 136, 162, 190, 220, 244.

En cuanto a la legislación del periodo, además de la creación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y de la reforma al artículo 107 constitucional que se comenta más adelante; el 23 de abril de 1959 se publicó el Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, dando origen al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, cuyos recursos estarían destinados a la realización de programas y planes de fomento económico y social y; se expidieron 83 circulares dirigidas "al personal agrario", que buscaban fijar y orientar "sobre los tipos de acción más propicios a la transformación económica y social del medio rural".[12]

A diferencia de las leyes federales y sus respectivos reglamentos, en las circulares es posible observar criterios sobre situaciones específicas que se presentaban en el acontecer diario del entramado administrativo agrario. Un ejemplo de ello era la falta de atención a las peticiones de los diversos sujetos agrarios, por lo que se instruyó, a los delegados estatales del DAAC, "atender con mayor eficacia los asuntos de los ejidatarios", proponiéndoles "dar audiencia diaria a los campesinos para el trámite de asuntos, ya que con frecuencia éstos sufren retardos innecesarios, por falta de atención inmediata a los mismos".[13]

Hasta aquí un esbozo de las cifras y la política agraria gubernamental.

En contraste con lo antes descrito o bien, la otra cara de la moneda fue la respuesta represiva por parte del gobierno a la movilización campesina que se suscitó en estados como Guerrero, Morelos, Nayarit, Sonora y Baja California; pero también la persecución contra el movimiento urbano como a los ferrocarrileros, magisterio y estudiantes. Armando Bartra resume de manera atinada el contexto del momento: "en los mismos meses en que miles de obreros se iban a la huelga, millares de campesinos tomaban las tierras; si los maestros eran acribillados en el monumento a la Revolución, los campesinos lo eran en el latifundio de Cananea; y poco antes de que Demetrio Vallejo cayera a la cárcel por huelguista, era encarcelado Jacinto López por tomar tierras".[14] Quizá el ejemplo más claro de la represión

[12] *Seis años de política*, p. 463.
[13] Circular 17 dirigida a los delegados del departamento agrario, 17 de noviembre de 1959 en *Seis años de política*, p. 466.
[14] BARTRA, *Los herederos*, p. 79.

contra el movimiento campesino fue el asesinato del veterano zapatista y líder agrario Rubén Jaramillo, junto con su esposa y tres hijos, cerca de la zona arqueológica de Xochicalco, estado de Morelos, el 23 de mayo de 1962, meses antes de la reforma a la legislación de amparo. Además del encarcelamiento en 1969, del pintor David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata, acusándolos del delito de disolución social por su apoyo al movimiento ferrocarrilero.

Sumado a lo anterior, habría que señalar que el control corporativo gubernamental ejercido en el campo a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se encontraba debilitado con la creación de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en 1957 y en este sexenio, en 1963, con la formación de la Central Campesina Independiente (CCI).

La CCI cercana al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) formado en 1961 por Lázaro Cárdenas, Heriberto Jara y Rubén Jaramillo, entre otros líderes sociales y políticos; fue fundada en enero de 1963 por un conglomerado de organizaciones y líderes de "las más diversas corrientes políticas": sectores vinculados al PRI (Baja California), bases campesinas del PCM (Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Morelos), campesinos cardenistas (Michoacán, Guanajuato, Estado de México) y diversos grupos independientes (Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas).[15] En la sesión de clausura celebrada el 8 de enero, se eligió una secretaría general colectiva encabezada por Alfonso Garzón, líder campesino de Baja California; Arturo Orona, líder de La Laguna, y Ramón Danzós Palomino, líder del Valle del Yaqui, los dos últimos miembros del Partido Comunista Mexicano.

La CCI planteó como principales demandas de lucha: "la supresión de las reformas reaccionarias introducidas al art. 27 constitucional y al Código Agrario vigente", se refiere principalmente al amparo a la pequeña propiedad; la expropiación de los latifundios (nacionales y extranjeros) para constituir ejidos; "la cancelación de los certificados de inafectabilidad agraria y concesiones ganaderas y forestales expedidas indebidamente sin antes haber satisfecho las necesidades agrarias de los pueblos"; la reducción de la propiedad agrícola y; "la restitución, a las comunidades indígenas y a los ejidos, de las tierras de que han sido despojados ilegalmente".[16] Estas demandas cuestionaban de fondo la política agraria

[15] BARTRA, *Los herederos*, p. 92.
[16] MOGUEL, "La cuestión agraria", p. 154.

del régimen y enfrentaron a la Central Campesina Independiente con el gobierno federal, gobiernos estatales y empresarios.

Será en este contexto de agitación social y represión gubernamental en que surja el llamado amparo agrario.

5.2 "La democratización del amparo": el amparo agrario (1959-1962)

Como se ha descrito a lo largo de esta investigación, el juicio de amparo derivado de la puesta en práctica de la reforma agraria presentó durante el siglo XX importantes reformas: prohibición de su interposición (1931), protección a la pequeña propiedad (1947) y una tercera que a continuación se presenta: la creación del amparo agrario. Cabe recordar que estos cambios se dieron tanto a nivel constitucional como en las leyes secundarias, por lo que en este apartado se realiza una breve referencia a los principales motivos para su creación, así como a los cambios que trajo a la legislación de amparo.

Existen un par de reformas más a la ley de amparo de igual o mayor trascendencia a las expuestas en esta investigación, que, si bien rebasan el periodo propuesto, vale la pena mencionarlas.

La primera se refiere a la restructuración de la ley de la materia y la creación del Libro Segundo denominado *Del Amparo en Materia Agraria*, en junio de 1976, cuya finalidad fue "tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina". Con este cambio, quedarían regidos por este apartado aquellos juicios en donde ejidos y comunidades, en lo colectivo o individual, reclamaran actos que pudieran privarlos de la propiedad o posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes; en donde los actos reclamados afectaran o pudieran afectar otros de sus derechos agrarios y; "aquellos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros".[17] Sin duda, otro tema pendiente de investigar que aportaría más elementos para analizar la conflictividad agraria del último cuarto del siglo XX, por lo menos en el ámbito legal.

[17] *Diario Oficial*, martes 29 de junio de 1976, pp. 4-5.

El segundo cambio de trascendencia se suscitó en el año 2013 con la abrogación de la ley de amparo de 1936, lo que trajo como consecuencia la desaparición del libro segundo y el cambio del procedimiento en algunas de sus partes, por ejemplo, se redujo el plazo para la interposición del amparo de un tiempo indefinido a siete años.[18] Cambios que en un futuro valdría la pena estudiar a la luz de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992.

Con fecha 26 de diciembre de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de adición a la fracción II del artículo 107 constitucional, en los siguientes términos:

> En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la *propiedad o de la posesión y disfrute* de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, *deberá suplirse la deficiencia de la queja* de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria y *no procederán el desistimiento ni la caducidad de la instancia*.[19]

Dentro de los principales argumentos presentados en la exposición de motivos se destacó, que para ese momento los ejidatarios no contaban con la "posibilidad de utilizar el juicio de amparo en defensa de sus legítimos derechos" y en los casos en que recurrían al amparo, corrían el riesgo de perderlo por sobreseimiento, caducidad y su negación. Un botón de muestra de lo expuesto son los anexos de amparos en revisión que acompañan esta investigación, aunque como puede observarse existen algunos casos, en donde los peticionarios o ejidatarios obtuvieron la protección de la justicia federal, como el caso de los pueblos de Naucalpan presentado en el capítulo dos o el amparo promovido en 1945 por el comisariado ejidal de Santa María Jajalpa, contra la desposesión de 270 hectáreas de tierras pastales que les habían sido dotadas una década antes y su traslado al estado de Querétaro.[20]

Con este escenario se consolidaba y legalizaba "la situación irregular recurrida, ya que al no existir un régimen adecuadamente protector de la garantía social agraria" se deformaba "el régimen jurídico de la propiedad ejidal creado por la Revolución". Por lo

---

[18] El texto completo de esta ley de amparo pude consultarse en *Diario Oficial*, Segunda Sección, martes 2 de abril de 2013, pp. 1-53.

[19] En este caso se retomó la iniciativa presidencial publicada en el documento "Índice del proceso", pp. 2-3. Las cursivas son mías.

[20] Desarrollado el juicio por todas sus partes, el juez de distrito lo sobreseyó por haberse interpuesto fuera de los 15 días establecidos por la ley de amparo. Inconformes los quejosos con esa resolución, promovieron el recurso de revisión ante la Suprema Corte quien revocó la sentencia revisada y concedió el amparo al comisariado ejidal de Jajalpa, AHSCJN, AR, 1051/1945.

anterior, y teniendo en cuenta "los antecedentes históricos de la reforma agraria", se buscaba que el juicio de amparo se convirtiera en "un verdadero instrumento protector de la garantía social que éste consagra", siendo necesario diferenciarlo del amparo "tradicional" implementado en otras ramas como la "civil y mercantil en el que se debaten intereses particulares", como ya ocurría "en materia penal y por lo que respecta a la parte obrera en materia de trabajo, disponiendo que podrá suplirse la deficiencia de la queja". Este último aspecto procesal, la suplencia de la deficiencia de la queja, fue fundamental en el desarrollo de los amparos agrarios pues obligaba al juzgador a subsanar errores u omisiones que hubieran cometido los quejosos en la exposición de su demanda, con el fin de no dejarlos en estado de indefensión por una deficiente argumentación jurídica, pues a pesar de hacer uso del marco legal, no siempre tenían conocimiento de los tecnicismos y formalidades exigidas por el amparo y mucho menos contaban con los recursos económicos para contratar un asesor legal.

Volviendo a la iniciativa presidencial, se acotaba la procedencia de este amparo únicamente para los casos en que el acto u actos reclamados pudieran "tener como consecuencia privar total o parcialmente de sus tierras, bosques, pastos y aguas a los ejidos y núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal". Es de notar que la iniciativa no contemplaba a los ejidatarios y comuneros en particular como finalmente se aprobó.

Finalmente, la propuesta presidencial señalaba que, en caso de aprobarse la adición, quedaría para la ley secundaria, es decir, la ley de amparo; la estructura y reglas (personalidad, términos, demanda, pruebas, etc.) para llevar a cabo el juicio, "con objeto de crear un procedimiento al alcance del campesino que constituya una eficaz defensa de la garantía social agraria". Pareciera que 53 años después de la crítica realizada en la prensa del Partido Liberal Mexicano se atendía este punto.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas del Senado, Primera de Puntos Constitucionales (Juan Manuel Terán Mata, Tamaulipas; Carlos Román Celis, Guerrero y, José Castillo Tielemans, Chiapas) y Primera de Justicia (Ramón Ruiz Vasconcelos, Oaxaca; Alfredo de Lara de Isaacs, Aguascalientes y; Avertano Mondragón Ochoa, Querétaro), cuyo dictamen fue presentado y aprobado por el pleno el 4 de noviembre de 1960, con una modificación significativa que incorporó a la protección de la justicia federal a los ejidatarios

y comuneros de forma individual y el sobreseimiento por inactividad, quedando el texto en los siguientes términos:

> En los juicios de amparo en que reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia *privar* de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, *o a los ejidatarios y comuneros*, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria; y no procederán el desistimiento, *el sobreseimiento por inactividad*, ni la caducidad de la instancia, *cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal*.[21]

De acuerdo con lo recogido en el *Diario de los Debates*, la propuesta no tuvo oposición; por el contrario, los oradores en la sesión presentaron argumentos a favor de la iniciativa presidencial.

El principal defensor de la reforma fue el senador por Michoacán, Manuel Hinojosa Ortiz,[22] quien la definió como la "democratización del juicio de amparo", derivada de la democratización del poder económico "base indispensable para lograr una verdadera democracia política". Señaló que durante muchos años el juicio de amparo se había enfocado desde el punto de vista del hacendado y como un medio para frenar la reforma agraria; y no desde su contraparte, es decir, "presentar el amparo agrario como una fórmula de defensa del campesino, como un escudo del ejidatario, como un arma que mantenga el respeto a la propiedad de las tierras, aguas, bosques y pastos de las viejas comunidades indígenas que todavía tenemos en abundancia". Afirmación parcialmente cierta, porque como se vio en los capítulos segundo y tercero, en distintas etapas de la reforma agraria, los solicitantes de tierras recurrieron en algunos casos a la justicia federal.

Y agregó una idea que, como se presentó en el primer capítulo, se encontraba presente en la discusión del programa del Partido Liberal Mexicano: la formalidad y técnica que exigía el juicio constitucional. A decir del senador Hinojosa, "el amparo clásico" no era de utilidad para la defensa del campesino, se trataba de una "falsa defensa" que resultaba contraproducente, "porque al no interponer con talento el amparo mediante la exposición correcta de los agravios, mediante la extensión correcta de los hechos, venía a transformarse en una trampa para el campesino, quien al perderlo, perdía sus posesiones, sus tierras. En

[21] *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 4 de noviembre de 1960, p. 6. Las cursivas son mías.
[22] Se retoma la intervención del senador Hinojosa Ortiz publicada en el *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 4 de noviembre de 1960, pp. 12-15.

cierto modo las ejecutorias de los jueces venían a consolidar los despojos de los campesinos". Punto que de alguna manera y en términos generales, se ha matizado con el análisis de algunas de las sentencias de amparo que se han presentado en los capítulos anteriores, pues no en todos los juicios los jueces de distrito o la Suprema Corte otorgaron el amparo solicitado por los propietarios.

Esta idea fue reforzada por el también senador de Michoacán, Natalio Vázquez Pallares,[23] un abogado egresado de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo que unos años después sería director general del Banco Nacional de Crédito Agrícola, consejero del DAAC y oficial mayor de la CNC. Vázquez Pallares dijo que un campesino no sabía "formular un amparo", no tenía "dinero para pagar a un abogado" y no podía "defenderse ante los Tribunales, entonces qué debe ser, que el juicio de amparo tenga características especiales con objeto de que se, tramite lo más rápidamente, posible y que ,el Juez supla las deficiencias en la ignorancia del campesino y esta es la gran trascendencia de esta reforma que hoy estamos discutiendo".[24]

El dictamen fue aprobado en lo general y se procedió a su discusión en lo particular, centrándose el debate en los aspectos procesales de la reforma: la suplencia de la queja, el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia.

El único orador fue el senador por Morelos, Eliseo Aragón Rebolledo quien en una larga exposición habló a favor de la propuesta. Resaltó que la prohibición del desistimiento era una "conquista de protección a los derechos colectivos de las grandes masas agrarias, aunque sus representantes o apoderados en juicio quieran después de iniciado, desistirse del procedimiento en perjuicio de sus representantes, no podrán hacerlo bajo ningún concepto",[25]

---

[23] Nació en Coalcomán, Michoacán, el 6 de enero de 1913. Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, donde impartió clases y fue rector. En su estado ocupó varios cargos como Procurador General de Justicia, de 1952 a 1955 jefe del Departamento de Profesiones y secretario particular del gobernador en 1964. Además de diputado federal en la XLI legislatura y senador por su estado de 1958 a 1964. A lo largo de su vida desempeñó varios puestos relacionados con la cuestión agraria: director general del Banco Nacional de Crédito Agrícola, consejero agrario del DAAC (1971-1972), oficial mayor de la CNC (1973), subdirector general del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (1973-1975), coordinador general del Cuerpo Consultivo de la Secretaría de la Reforma Agraria (1977-1978) y en 1980 fundó y dirigió el Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México. Falleció el 26 de marzo de 1981 en la ciudad de México. *Enciclopedia histórica* en http://enciclopedia.udg.mx/biografias/vazquez-pallares-natalio, consultado el 5 de noviembre de 2022.

[24] *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 4 de noviembre de 1960, p. 17.

[25] Se retoma la intervención del senador Aragón Rebolledo publicada en el *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 4 de noviembre de 1960, pp. 17-19.

cuestión que en la práctica jurídica tenía gran importancia en materia agraria, como se verá más adelante.

Con respecto al sobreseimiento por inactividad señaló la importancia de la modificación pues ya no importaría si los ejidatarios o comuneros "a muchos kilómetros de distancia" de la Suprema Corte no contaran con "abogado o gestor" que estuviera solicitando "cada 180 días que se dicte la resolución correspondiente". Con la modificación constitucional el juzgador quedaría obligado "a resolver de todos modos aunque haya transcurrido el plazo que para otras materias señala la propia Ley de Amparo". Algo similar sucedería con la caducidad de la instancia pues la autoridad que conociera del recurso de revisión o del recurso de queja, estaría "obligada a llevar hasta la sentencia aunque la parte que haya promovido la revisión o la queja no haya renovado la instancia".

Finalmente, resaltó la relevancia que tenía la suplencia de la queja, ya que obligaba a los juzgadores federales a dictar su sentencia a pesar de las deficiencias técnicas que tuviera la demanda de amparo, siempre y cuando el acto de autoridad lesionara los derechos colectivos de los quejosos. Esto haría que el procedimiento fuera "más accesible a las grandes masas campesinas" del país. Para enfatizar la importancia que tuvo el estudio de esta figura procesal, es necesario mencionar que la suplencia de la queja, "consiste en la facultad del Juez del amparo de investigar las violaciones constitucionales y legales no obstante que el promovente, por torpeza, ignorancia o falta de técnica, no las hubiese combatido correctamente, o sea, que es posible para el Juzgador, integrar los elementos de la demanda y del material probatorio, como si se hubieren formulado o presentado debidamente".[26] Lo cual, por lo menos en el papel, sería de mucha utilidad para aquellos ejidatarios o comuneros que acudieran al Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa fue aprobada y pasó para su revisión a la Cámara de Diputados. El 22 de noviembre de 1960, la cámara revisora discutió la propuesta, siendo el único orador el diputado por Tlaxcala, Crisanto Cuéllar Abaroa,[27] quien había sido secretario del

[26] FIX, "Lineamientos", p. 927.

[27] Político y escritor originario de Tlaxcala, participó en la revolución dentro de las filas del ejército constitucionalista como telegrafista. En su estado ejerció diversos cargos como actuario del juzgado de distrito, secretario particular del gobernador (1937), director del Archivo Histórico estatal (1951) y gobernador interino entre enero y mayo de 1970. Fue diputado federal, presidente del Comité Regional del PRM en 1945 y del PRI en 1957. *Diccionario de Escritores* en https://www.iifilologicas.unam.mx/dem/dem_c/cuellar_abaroa_crisanto.html consultado del 5 de noviembre de 2022.

departamento de Asuntos Agrarios de su estado. A favor de la reforma, entre otras cosas, expresó que:

> Los ejidatarios y campesinos de México recibirán con júbilo la adición la fracción II del artículo 27 constitucional, y seguirán sosteniendo la leyenda de que Emiliano Zapata no ha muerto y efectivamente, vive y vivirá en el Código Agrario que constantemente mejora su contenido; Emiliano Zapata vive y vivirá en los hogares agraristas y en los verdes maizales del ejido; su nombre continuará escrito, para siempre, en esos los largos renglones que figuran los surcos de la tierra, que es el inmenso libro donde el pueblo mexicano ha escrito, con su sangre, una de las más grandes conquistas de la Justicia Social.[28]

Por unanimidad de 105 votos a favor se aprobó la reforma constitucional y pasó a las legislaturas locales para su discusión y posible aprobación. Para el 21 de diciembre de ese año, 17 congresos estatales (Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) habían aprobado la reforma comentada, con lo que se conseguía la mayoría requerida por la constitución. La reforma fue publicada en el *Diario Oficial* hasta el dos de noviembre de 1962, aunque no quedan claras las razones de ese retraso.

Publicada la reforma constitucional quedaba pendiente la modificación a la ley reglamentaria. De acuerdo con el *Diario de los Debates de la Cámara de Senadores*, el 21 de diciembre de 1962, un grupo de cinco senadores presentó una iniciativa de reforma a la ley de amparo cuyas ideas rectoras fueron: "Democratizar el juicio de amparo", haciéndolo un recurso accesible a ejidos y comunidades en general y a ejidatarios y comuneros en lo particular; una nueva estructura al "amparo en materia agraria no como una simple forma de suplir la queja, sino como un nuevo procedimiento" que estableciera reglas especiales sobre términos, personalidad, simplificación de la demanda, entre otros aspectos y; lograr que por medio "del control de la constitucionalidad", se preservara "el respeto al régimen jurídico ejidal creado por la Revolución Mexicana".[29] Es decir, proteger tanto al ejido como a la pequeña propiedad.

La propuesta consistió en modificar 19 artículos de la ley de amparo y la creación de dos artículos más. No se suscitó mayor controversia en esta instancia; la mayoría de los senadores aprobó el dictamen en los términos planteados. A pesar de no existir una amplia

---

[28] *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 22 de noviembre de 1960 en http://cronica.diputados.gob.mx/

[29] *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 21 de diciembre de 1962, pp. 6-7.

discusión como en otras de las reformas expuestas, vale la pena retomar las siguientes líneas del senador y abogado tamaulipeco Juan Manuel Terán Mata,[30] quien se refirió al amparo como: "un verdadero símbolo del progreso jurídico y social de México", que tenía como uno de sus últimos antecedentes, en el aspecto social a "la llamada suplencia de la deficiencia de la queja de la parte obrera en materia de trabajo".[31] Quizá esta idea acerca del juicio constitucional sea un reflejo de la mitificación del amparo que se comentó en el capítulo anterior, lo cierto es que como ha quedado demostrado, por lo menos en materia agraria era una figura importante para los distintos sujetos agrarios.

Siguiendo el proceso legislativo, la propuesta pasó a la Cámara de Diputados, en donde tampoco existió mayor discrepancia. Incluso, los cinco diputados del Partido Acción Nacional, por conducto de Alfonso Guerrero Briones,[32] abogado potosino y miembro fundador de su partido, manifestaron su aprobación a la reforma por considerar que brindaba a ejidos y comunidades la "protección y seguridad jurídica a que legítimamente" tenían derecho.[33] Con esto quedaba instituido el amparo agrario.

El 4 de febrero de 1963, fue publicada en el *Diario Oficial* la reforma a la ley de amparo que dentro de los aspectos más significativos y procesalmente hablando, retomó lo establecido por el artículo 107 constitucional en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja y a la no procedencia del desistimiento, del sobreseimiento por inactividad o de la caducidad de la instancia cuando el acto reclamado afectara derechos de los ejidos o comunidades, y de ejidatarios y comuneros en particular (art. 2).[34]

Uno de los artículos creados (8 bis) reguló la representación legal para la interposición del amparo, siendo los comisariados ejidales o de bienes comunales o los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, los legitimados para ello; incluso, cualquier

---

[30] Nacido el 2 de marzo de 1917, estudió la licenciatura en derecho, maestría y doctorado en filosofía en la UNAM, donde también impartió diversos cursos y de 1967 a 1977 fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno. En el ámbito político se desempeñó como diputado federal (1952-1955) y senador por su estado (1958-1964). Falleció el 14 de noviembre de 1992 https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/casas-cultura-juridica/nuevo-laredo-tamaulipas/biografia

[31] *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, 22 de diciembre de 1962, pp. 25-26.

[32] Alfonso Guerrero Briones, abogado egresado de la UNAM, nació en San Luis Potosí en 1915. Ocupó varios cargos dentro del PAN: miembro fundador, consejero nacional (1947-1971), integrante del Comité Ejecutivo Nacional (1953-1956; 1961-1966) y miembro del Comité Directivo Regional del Distrito Federal (1958-1960), PÉREZ, *Índice biográfico*, pp. 355-356.

[33] *Diario de los debates de la Cámara de Diputados*, 29 de diciembre de 1962 en http://cronica.diputados.gob.mx/

[34] *Diario Oficial*, 4 de febrero de 1963, pp. 1-3.

ejidatario o comunero perteneciente al núcleo perjudicado si después de 15 días de notificado el acto reclamado el comisariado no lo había hecho.

Para acreditar su personalidad, los sujetos antes mencionados debían presentar las credenciales expedidas por las autoridades agrarias "y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad competente para expedir la credencial" o con la copia del acta de asamblea en donde hubieran sido electos (art. 12).

Sin duda alguna, otro de los cambios relevantes en el juicio de garantías fue lo relativo a los tiempos para interponerlo. Tratándose de la privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad o posesión de las tierras, aguas o bosques de ejidos o comunidades, la demanda de amparo podía interponerse en cualquier tiempo, pero si el acto reclamado únicamente causaba perjuicio a los intereses individuales de ejidatarios o comuneros se estableció el término de 30 días (art. 22).

También se modificó el término para la interposición de los recursos. Tratándose de la materia agraria el recurso de revisión se amplió a 10 días (art. 86) y el recurso de queja podría interponerse en cualquier tiempo, siempre y cuando no se hubiere cumplimentado la sentencia que hubiere concedido el amparo (art. 97).

En otras partes de este trabajo se ha hecho referencia al sobreseimiento del amparo por falta de las copias que debían acompañar el escrito inicial (demanda) y a la serie de requisitos técnicos y formales que presentaba este juicio. En el primer caso, ya no se consideraría como causal para tenerlo por no interpuesto, pues la autoridad judicial mandaría a expedirlas (art. 88), mientras que con la reforma comentada se simplificaron los requisitos de la demanda en materia agraria, pues de acuerdo con el recién creado artículo 116 bis, bastaba con que los promoventes (ejidos, comunidades o ejidatarios y comuneros en particular) presentaran en su escrito el nombre y domicilio del quejoso y de quien promovía en su nombre; el acto o actos reclamados; y la autoridad que ejecutara o tratara de ejecutar el acto reclamado. De ser posible, también debía expresar a la autoridad que hubiese ordenado el acto reclamado y los demás requisitos señalado en la ley.

En caso de que él o los quejosos no pudieran expresar con precisión el acto reclamado, serían prevenidos para que hicieran la aclaración correspondiente en un término de 15 días, en caso de no realizarse, el juez debía realizarla de oficio (art. 146). Con ello, se otorgaba mayor protección a ejidos y comunidades.

El informe justificado rendido por las autoridades responsables también fue objeto de reforma, de acuerdo con las nuevas disposiciones, este debía contener:

> I.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay;
> II.- La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si han realizado otros similares o distintos de aquellos, que tengan o puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;
> III.- Los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar;
> IV.- Si las responsables son autoridades agrarias expresaran además, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas (art. 149).

Junto con el informe debían acompañar copias certificadas de los documentos necesarios para precisar los derechos agrarios del quejoso y los actos que se reclamaban (censos, resoluciones agrarias, actas de posesión y deslinde, planos de ejecución, certificados agrarios, títulos parcelarios, etc.).

Con estas modificaciones, en la práctica jurídica se formuló un nuevo juicio de amparo, "una institución sui-géneris, dotada de principios y reglas procesales propios",[35] que, de acuerdo con sus creadores, buscaba otorgar mayor certeza jurídica a ejidatarios y comuneros, en forma colectiva o individual.

Si bien esta reforma constitucional y los cambios a la legislación secundaria fueron bien recibidos por los campesinos y sus agrupaciones, también encontró oposición, particularmente en el ámbito de los juristas. Uno de los principales detractores de la reforma fue Ignacio Burgoa quien realizó un estudio pormenorizado de cada una de las modificaciones y señaló que se había "convertido a los núcleos de población, comuneros y ejidatarios en verdaderos 'niños mimados' dentro del juicio de amparo, tratándolos como si estuviesen en una situación de 'capitis deminutio'", es decir, con una disminución de su capacidad jurídica, semejante a la que habían creado las "Leyes de Indias en torno al indígena" y sentenció que "esa 'minoría legal' se revertirá en la práctica en contra de los propios pupilos, pues lejos de acelerar la tramitación de los juicios de amparo en que sean quejosos, las modalidades procesales establecidas en su favor la embarazarán".[36]

---

[35] BURGOA, *El amparo*, p. 7.
[36] BURGOA, *El amparo*, pp. 157-158.

Siguiendo a otro destacado jurista, Héctor Fix Zamudio planteó que a partir de la entrada en vigor dichas reformas "existe en el derecho mexicano un amparo en materia agraria, que sin desconocer los lineamientos esenciales del juicio constitucional, puede considerarse como un sector autónomo dentro de la extraordinaria complejidad procesal de nuestro amparo", recordando que "sus principios particulares se aplican exclusivamente" en beneficio de ejidos y comunidades (de hecho o por derecho), "así como de los ejidatarios y comuneros individualmente considerados".[37]

La creación de este tipo de juicio tuvo grandes repercusiones en el mundo rural mexicano puesto que, a partir de 1963, cada que algún ejido o comunidad, o bien, algún ejidatario o comunero en lo particular promovía el juicio de garantías, lo realizaba a partir del procedimiento esbozado. Si bien es necesario realizar un trabajo exhaustivo de archivo para confirmar o refutar tal afirmación, más adelante se presenta una de las primeras experiencias en la interposición del amparo agrario, lo que permite asomarse a la práctica jurídica del juicio constitucional en el Estado de México.

5.3 La política agraria en el Estado de México, 1958-1964

En el capítulo anterior se dijo que los gobernadores mexiquenses, a partir de Isidro Fabela, dieron prioridad a la industrialización de la entidad impulsando la inversión privada, la construcción de vías de comunicación y diversas obras públicas, proceso que se vio favorecido por la cercanía con la capital del país, aunado a que el reparto de tierras prácticamente se había finiquitado durante la década de los años cuarenta, pasando la cuestión agraria a un segundo plano.

Siguiendo esta idea, se propone retomar la noción de *ruralidad desagrarizada* propuesta por la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera, la cual comprende "un conjunto de transformaciones, tanto en el plano económico como en el político y social", particularmente "la pérdida de importancia de la actividad agrícola al ingreso de los hogares rurales y el incremento de actividades extra-agrícolas en las que se insertan los habitantes rurales". Si bien la autora lo utiliza "como un marcador histórico del cambio económico, social, político y cultural" experimentado en cinco ejidos del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México; la idea describe bien el fenómeno que ocurría en la entidad a fines de los años

[37] FIX, "Lineamientos fundamentales", pp. 925-926.

cincuenta. En ese sentido "este concepto se construye como una descripción que señala lo que ya no existe" o en el caso de este capítulo, lo que comienza a desaparecer: "el mundo rural organizado en torno a la agricultura y la tierra como principales recursos económicos locales y fuente de demandas políticas locales y nacionales".[38]

Para el caso concreto de algunas regiones del Estado de México, como la de Toluca, el inicio de la *desagrarización* fue un proceso paralelo a la industrialización y al crecimiento de la ciudad, en donde parte de los ejidos colindantes fueron expropiados para hacer frente a la falta de terrenos que demandaban la expansión de la capital del estado. Ante esta situación, los ejidatarios hicieron uso de los mecanismos de resistencia legales con los que contaban, como el juicio de amparo. Es posible que hubiesen recurrido a otras formas de lucha en defensa de sus tierras, empero, en este apartado se da cuenta de su expresión en el ámbito legal.

Dado que la reforma al juicio de amparo entró en vigor en febrero de 1963, se toma como referencia la gubernatura del doctor Gustavo Baz, por ser quien impulsó la industrialización de la capital del estado y solicitó las expropiaciones ejidales que motivaron los juicios que más adelante se presentan. Esto sin olvidar que el fomento a la industria arrancó con la llegada de Isidro Fabela al gobierno estatal y tocó a Juan Fernández Albarrán, gobernador de 1963 a 1969, concretar la obra iniciada por su antecesor. Un ejemplo de la continuidad en la industrialización llevada a cabo por Fernández Albarrán fue el llamado que realizó en su primer informe de gobierno "a la empresa privada, no sólo de la entidad, sino de todo el país y aun del extranjero", para que vieran al Estado de México como "el campo más propicio" para el "establecimiento de sus plantas, especialmente en la ya importante zona industrial del valle de Toluca".[39]

Gustavo Baz,[40] militante zapatista en la revolución mexicana, ex rector de la UNAM y Secretario de Salubridad en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, gobernó el Estado de

---

[38] TORRES, *La ruralidad urbanizada*, pp. 21-22.
[39] FERNÁNDEZ, *Primer informe*, p. 61.
[40] Gustavo Baz Prada nació el 31 de enero de 1894 en Tlalnepantla, Estado de México. Desde muy joven se integró a las filas zapatistas, al concluir la revolución ejerció su profesión como médico, además de ser maestro, director de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, rector de la misma universidad y director de la Escuela Médico Militar. También fue Secretario de Salubridad de Ávila Camacho y Senador de 1976 a 1982. Al igual que su antecesor Salvador Sánchez Colín, fue el único candidato registrado por el PRI a la gubernatura del estado, la cual ejerció de 1957 a 1963. Falleció en la capital del país en 1987. Sobre su llegada a la gubernatura estatal véase ARREOLA, *La sucesión*, capítulo VI; para profundizar en las actividades

México del 16 septiembre de 1957 al 15 de septiembre de 1963, dando continuidad a la industrialización de la entidad en un contexto totalmente diferente al que le había tocado afrontar en 1914, cuando asumió la gubernatura por algunos meses como representante del zapatismo.

En su último informe de gobierno, Gustavo Baz se refirió al plan de industrialización estatal, el cual había tenido un "desarrollo sin precedentes", propiciado por "la apertura de nuevas fuentes de trabajo", mejorando la economía de los trabajadores y; dando "particular atención a la zona industrial de Toluca; siendo menester armonizar el desarrollo industrial con la actividad económica fundamental agropecuaria".[41]

María Teresa Jarquín y Carlos Herrejón, han planteado que el gobierno de Gustavo Baz centró su política de industrialización en cuatro vías: la supresión de las exenciones totales al pago de impuestos; la asesoría de una Comisión Mixta de Fomento Industrial, en donde participaban representantes del gobierno y de los industriales; su "particular empeño" en que se instalaran en la entidad distintas plantas automotrices (Automex, General Motors, Ford y Promexa) y; el fomento al desarrollo de nuevas zonas industriales en el valle de Toluca, Texcoco y Chalco.[42]

De las zonas mencionadas se destaca la de Toluca por ser la capital y la más "importante del Estado tanto por volumen de sus inversiones, como por la armonía en el desarrollo de las Empresas" que se establecieron; especialmente "la Industria Automotriz y de las que le son conexas".[43]

A pesar de este impulso a la industria, para 1960 la fuerza de trabajo en la entidad era mayoritariamente campesina, alrededor de 400 000 personas (ejidatarios y no ejidatarios). Y algo similar ocurría con la población, el 61.4% era rural y el 38.6% urbana; "sin embargo las tendencias ya apuntaban hacia una inversión de las proporciones".[44] La desagrarización que se comentó páginas atrás.

Un elemento más a considerar fue el crecimiento demográfico. De acuerdo con el investigador Alfonso Sánchez García, para ese periodo la tasa de crecimiento anual en el país

---

revolucionarias de Baz, ver MEDINA, *Gustavo Baz*; y para un acercamiento a sus ideas véase BAZ, *Anecdotarios e ideas*.

[41] BAZ, *Sexto Informe*, p. 68.

[42] JARQUÍN Y HERREJÓN, *Breve historia*, p. 167; HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 296.

[43] BAZ, *Sexto Informe*, p. 78.

[44] HERREJÓN, *Historia del Estado*, pp. 296-297.

se encontraba en un 3.5%, mientras que en el Estado de México era de 7.4% y el área aledaña al Distrito Federal de 17%.[45] En números concretos y de acuerdo con los datos obtenidos de los censos generales de población, en 1940 la entidad contaba con 1 146 034 habitantes; en 1950, 1 392 623; para 1960, 1 897 851 y; en 1970, una población total de 3 833 185. En una década el número de habitantes de la entidad se había duplicado, lo que sin duda cambió su dinámica económica y social.

El poblamiento de la zona conurbada del entonces Distrito Federal "fue anárquico, desorbitado, incontrolable". Los recién llegados a la zona ocuparon "lo mismo propiedades privadas que ejidos, tierras comunales o suelo de la federación. En muchos casos se trató de negociantes sin escrúpulos que traficaron con tierras de ¡quién sabe quién!, parando fraccionamientos fantasmas".[46] Lo cual ocasionó conflictos con los poseedores y propietarios de los terrenos, otro de los temas aún poco trabajados por la historiografía agraria mexicana.

El mismo Gustavo Baz se refirió a este fenómeno en su tercer informe de gobierno en los siguientes términos:

> El incremento demográfico no se detiene y con ello las necesidades se multiplican, pero la tierra es inextensible, por lo cual es necesario afrontar enérgicamente nuestras realidades; necesitamos nueva organización en la explotación de la tierra que determine mayores y suficientes rendimientos en áreas de cultivo, concebidas y trabajadas con criterio de grandes unidades, donde sea posible aplicar no sólo las técnicas más avanzadas, sino invertir créditos recuperables, mediante la creación de entidades de crédito efectivas; en suma, la industria, el comercio, los nuevos centros de colonización, coadyuvarán absorbiendo los márgenes excedentes de población campesina para transformarlos en sujetos de activa economía.[47]

Sin duda, tanto la industrialización de algunas zonas, como la explosión demográfica que se vivió en el estado, condicionaron la política agraria del periodo.

En lo tocante a la cuestión agraria, al iniciar el gobierno de Baz, la entidad contaba con "1 018 ejidos, 1 217 predios de 5 hectáreas o más y 14 300 de 5 hectáreas o menos; es decir se había superado la etapa distributiva de la reforma agraria, que en términos generales aseguraba el acceso de los campesinos a la tierra",[48] pero se vivió un proceso de disminución de la superficie ejidal entre 1950 y 1962, porque en municipios como Tlalnepantla,

[45] SÁNCHEZ, *Historia del Estado*, p. 615.
[46] SÁNCHEZ, *Historia del Estado*, p. 616.
[47] MENDOZA, *Evolución agrícola*, p. 164.
[48] MENDOZA, *Evolución agrícola*, p. 163.

Naucalpan y Toluca, las tierras se destinaron a fines de urbanización e industriales.[49] El propio gobernador se refirió a esta situación señalando que en tres años de gobierno únicamente había acordado una resolución de dotación, 7 ampliaciones y había negado la solicitud en 24 expedientes.[50]

En el resto de su gubernatura la situación no cambió. De acorde con los datos aportados por el investigador Gilberto Mendoza, en 1962 se instauraron únicamente dos expedientes de restitución de tierras y ocho de ampliación; se dictaminó un expediente de dotación por 86 hectáreas y 12 de ampliación por un total de 20 hectáreas. Las resoluciones negativas fueron dos de dotación y 13 de ampliación. En 1963, se inició únicamente un expediente de dotación y seis de ampliación.[51]

Por otro lado, el apoyo a la producción agrícola se mantuvo. Se dio continuidad al Campo Experimental ubicado en Santa Elena "mejorando y distribuyendo semillas", además de contar con las labores del Campo Experimental de Chapingo; se abrieron nuevos campos experimentales para la producción de maíz; se distribuyeron árboles frutales; se impulsó la piscicultura; se repartieron "boletines sobre divulgación agropecuaria"; continuaron sus labores las orientadoras del Hogar Rural, particularmente en lo relacionado a la siembra de hortalizas, a "campañas de vacunación e higiene y a los desayunos escolares".[52]

Será este el contexto en el que el gobernador Gustavo Baz promueva la expropiación de terrenos ejidales para ampliar la zona industrial de la capital del estado, resultando afectada una parte de las tierras que poseía el ejido de Santa Ana Tlapaltitlán,[53] quienes recurrieron a la justicia federal apoyados en el recién creado amparo agrario, caso de estudio que se analiza más adelante. La elección de este asunto responde a por lo menos tres variables que aporta: analizar algunos de los impactos que tuvo la industrialización de la entidad, la manera en que los ejidatarios recurrieron al amparo y los conflictos que se suscitaron al interior del propio ejido. Al igual que en los casos que le preceden, primero se presenta una descripción de la constitución del ejido, pero a diferencia de estos, en este asunto cobra mayor

[49] HERREJÓN, *Historia del Estado*, p. 297.
[50] MENDOZA, *Evolución agrícola*, pp. 164-165.
[51] MENDOZA, *Evolución agrícola*, p. 165.
[52] JARQUÍN Y HERREJÓN, *Breve historia*, p. 168.
[53] En los documentos consultados se encontró el uso de Atlapaltitlán, Atlapatitlán y Tlapaltitlán de manera indistinta para referirse al poblado, en esta investigación se optó por utilizar la última denominación por tratarse del nombre con que aparece en la mayoría de la documentación oficial.

relevancia una expropiación promovida por el gobierno estatal, por lo que se pone énfasis en este proceso y en los amparos que de él se derivaron.

5.4 La dotación de tierras al ejido de Santa Ana Tlapaltitlán

No es posible entender el estudio de caso mencionado y mucho menos la reforma agraria en la región, sin recordar la importancia de la ciudad de Toluca como capital del Estado de México (ver mapa 9 en donde está marcado con el número 59), pues por esa condición le tocó ser partícipe de la serie de cambios políticos derivados de la revolución. Por ejemplo, de noviembre de 1910 a junio de 1917 fueron nombrados diez gobernadores por las distintas facciones revolucionarias, incluyendo la primera administración de Gustavo Baz. Finalmente, en junio de 1917 y bajo lo establecido por la recién promulgada constitución, se convocó a elecciones de gobernador y congreso constituyente del estado, resultando electo el general Agustín Millán.

Centrándose en el tema de la reforma agraria, la historiadora María del Carmen Salinas, plantea que se implementó entre 1917 y 1937, creándose 25 ejidos. Si bien antes de 1917 el gobierno zapatista de Gustavo Baz había otorgado tierras, estas posesiones no fueron respetadas por el constitucionalismo, tal y como se comentó en el capítulo segundo.

El periodo más álgido del reparto de tierras en la zona se dio entre los años de 1920 a 1929, así que, cuando llegó a la presidencia de la república el general Cárdenas, "ya se había asignado 80% de los ejidos disponibles en el municipio de Toluca. Cada cual correspondía a cada uno de los 25 pueblos originales que habían integrado el municipio en la época porfiriana". Cabe señalar que, de estos pueblos, 12 solicitaron restitución de tierras las cuales no procedieron "porque no pudieron demostrar sus títulos de propiedad, presentando en ocasiones títulos apócrifos, o porque el despojo que citaban se había efectuado antes de la Ley de desamortización (25 de junio de 1856)".[54]

Ahora bien, el ritmo de organización de cada uno de los 25 ejidos "tuvo características específicas" dependiendo del tiempo "que tardaron los pueblos en hacer su solicitud", el tipo de solicitud realizada (restitución o dotación de tierras), la fecha de la resolución presidencial,

[54] SALINAS, *En busca*, pp. 283-284.

la cantidad de hectáreas concedidas, la calidad de las tierras, el número de beneficiados, la ocupación de estos y las condiciones económicas del poblado, entre otras.[55]

De los 25 ejidos constituidos en la región, a continuación se realiza el estudio del ejido de Santa Ana Tlapaltitlán, un pueblo de origen prehispánico, cuyo vocablo en náhuatl significa "lugar entre la tierra húmeda", que con fecha del 22 de febrero de 1918 y con fundamento en el artículo 27 constitucional y los artículos 7 y 8 de la ley agraria de 1915, solicitó al gobernador del Estado de México Agustín Millán, dotarlo de "la cantidad de tierras necesarias para cubrir sus necesidades".[56]

En su petición señalaron que en el año de 1563 el virrey Luis de Velasco había otorgado al pueblo una merced de ocho caballerías y dos patrimoniales "para su jurisdicción y congregación". Mientras que, al momento de hacer la solicitud de dotación, únicamente contaban con tres caballerías de tierras "cantidad insuficiente para cubrir las necesidades del pueblo" que contaba con 545 jefes de familia y 2 323 habitantes y designaron al licenciado Carlos Pichardo, Antonio de la Luz López y al auxiliar del pueblo Francisco Peña, como representantes para gestionar todo lo relacionado con el asunto.

Instaurado el expediente de dotación, la CLA solicitó al poblado que aportaran otros datos como la fecha de su fundación, su aspecto físico y vegetación, la clasificación de los terrenos con lo que buscaban ser dotados, el clima del lugar y la superficie y linderos del terreno que poseyeran.[57]

En su respuesta, los solicitantes manifestaron que no contaban con la fecha precisa de la fundación del pueblo, sabiendo que su formación era anterior a la conquista. Sobre el aspecto físico y vegetación señalaron que el sitio en donde se ubicaba el poblado era completamente plano, seco y sin árboles; de "clima extremoso" y con "lluvias regulares". Aclararon que en ese momento el poblado no poseía "ningún egido, ni terrenos de común repartimiento" y los terrenos que existían eran de "propiedad particular", sumando en total tres caballerías de tierra[58], equivalentes a poco más de 115 hectáreas. Si bien no es objeto de esta investigación, es pertinente mencionar que de las fuentes revisadas se sabe que parte de

[55] SALINAS, *En busca*, p. 285.
[56] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 1.
[57] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 20.
[58] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 23.

los terrenos de común repartimiento fueron embargados por las autoridades municipales por adeudos en el pago de contribuciones y unos más fueron vendidos a particulares.[59]

Los propietarios de las posibles fincas afectadas fueron notificados y estos esgrimieron alegatos en defensa de sus propiedades.

Valeriano Lechuga, propietario de Santa Teresa y El Carmen, señaló que dichas fincas eran inexistentes ya que cumpliendo lo establecido por el artículo 27 constitucional y los artículos 203 y 205 de la constitución estatal: "fraccioné esas fincas entre cinco de mis hijos y yo, en fracciones que en su mayor parte no alcanzan las cien hectáreas límite señalado a la extensión territorial".[60] Por lo que no era procedente la afectación.

El propietario del rancho San Juan, José Barbabosa, manifestó que su propiedad contaba con una extensión de 48 hectáreas "por lo que como no es un latifundio, está muy lejos de comprenderse en la ley de repartición".[61]

Por su parte, German de Roth, propietario del rancho San Gabriel, argumentó que el censo presentado por los solicitantes era inexacto y que a partir de dicho documento se comprobaba que casi todos los solicitantes contaban con tierras para cultivo "no habiendo justificado que se dediquen a la agricultura". Además de que su rancho estaba destinado "a la explotación de la industria lechera" contando con

> un número considerable de vacas para cuya alimentación son insuficientes los pastos y demás forrajes que se cultivan con todo esmero en el mismo rancho, de manera que en caso de reducirse su extensión, habría que suprimir o que reducir dicha industria, que no solo contribuye grandemente al abaratamiento de la leche en esta ciudad y en la de México, dando al consumo una cantidad importante del mismo líquido, sino que proporciona trabajo a un gran número de vecinos del mismo Santa Ana y de otros pueblos, que, en otro caso, se quedarían sin tal medio de subsistencia.[62]

La anterior aseveración nos da una idea del vínculo entre pueblos y hacienda.

Además, y siguiendo al investigador José Alfredo Castellanos, "resultaba ventajoso cultivar alfalfa en tierras de riego, contar con establo y vender leche; pues se prolongaba la cosecha, se cuidaban las buenas tierras y era un buen argumento en favor de una unidad agrícola-industrial en explotación", para preservar sus tierras.[63]

---

[59] AHMT, RP, exps. 43/19/1/24/1906, s.f.; 43/19/1/25/1907, s.f.
[60] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 34.
[61] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 46.
[62] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 49.
[63] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 243.

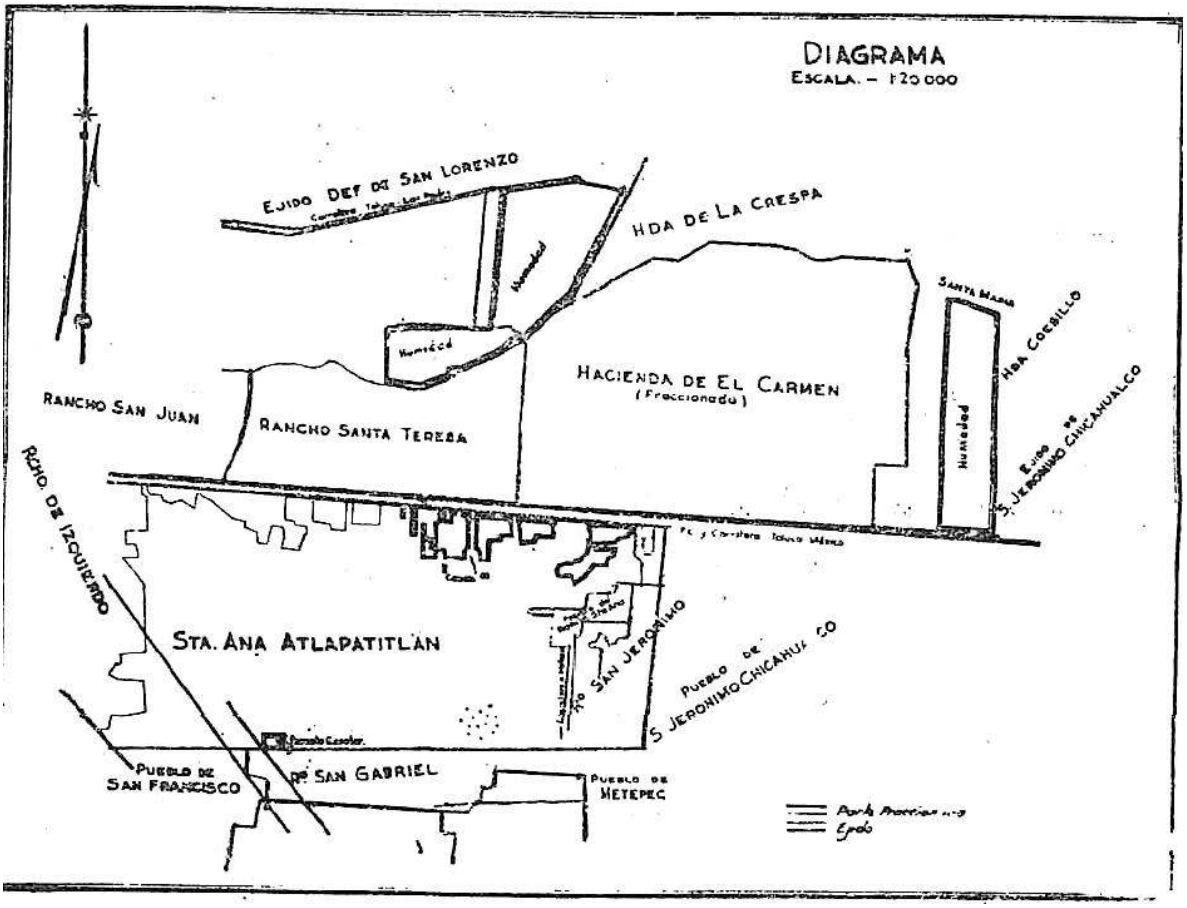
Finalmente, por medio de un escrito fechado el 14 de junio de 1918, Bernardino Trevilla, dueño del rancho Santa Ana, expresó que su propiedad únicamente contaba con una extensión de 42 hectáreas, por lo que era improcedente la solicitud de los de Tlapaltitlán.[64]

Por tratarse de un asunto temprano en la implementación de la reforma agraria, se presentaron distintos obstáculos en el desarrollo del procedimiento, uno de ellos, y que se manifestó a lo largo del reparto de tierras, como ya se ha visto, fue la falta de personal para llevar a cabo las diversas etapas establecidas por la ley. En este procedimiento, se trató de la ausencia de un ingeniero que llevara a cabo los trabajos técnicos y el informe establecidos en el artículo tercero de la ley de 6 de enero de 1915 y la circular número 15 expedida por la CNA, debido a la carga de trabajo de las autoridades en la materia.[65] Fue hasta el 3 de octubre de 1918 que la CLA informó la designación del ingeniero Guadalupe Sánchez.

En su informe fechado el 16 de abril de 1919, el mencionado ingeniero señaló que el pueblo de Santa Ana Tlapaltitlán contaba con 2 323 habitantes, de los cuales 545 eran jefes de familia, 411 contaban con tierra para sembrar y 134 no sembraban "por no tener donde". El clima del lugar era frio y con lluvias que iniciaban entre abril y mayo, terminando en octubre. Y las fincas afectadas serían los ranchos de Barbabosa, Santa Teresa, el del señor Germán Roth y la Hacienda del Carmen[66] (ver siguiente mapa). Vale la pena recordar que, hasta antes de la promulgación de la ley de ejidos en 1920, tanto los requisitos como la información para integrar los expedientes de dotación se regulaban por la ley de 1915 y las circulares expedidas por la CNA, por lo que eran trámites muy específicos que en algún momento del procedimiento podían variar.

[64] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 51.
[65] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 69.
[66] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, fs. 90-91v.

Mapa 7. Ejido de Santa Ana Tlapaltitlán



Fuente: FABILA, *Los ejidos*, p. 786.

En diciembre de ese 1919, de nueva cuenta German Roth, dueño de San Gabriel, se dirigió a la CLA para reiterar los argumentos vertidos y agregó que el pueblo solicitante nunca se había dedicado a la agricultura, sino que por su cercanía prácticamente era un "barrio de la Ciudad de Toluca" y que "todos los varones" de Santa Ana eran "artesanos" que laboraban "en los talleres y en los demás establecimientos industriales de la Capital del Estado; habiendo algunos que se dedican al comercio, para lo cual hacen frecuentes viajes a Tierra Caliente y a la Ciudad de México".[67] Hay que recordar que argumentos similares presentó el propietario de San José de los Leones, del municipio de Naucalpan de Juárez, como se vio en el capítulo segundo de esta tesis.

Al decir de la propia CLA, uno de los factores en el retraso del dictamen del expediente, fue que los pobladores de Santa Ana no habían manifestado si estaban

[67] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 106.

"dispuestos o no, a pagar a la Nación, los terrenos con que pudieran ser dotados, pues ese es el único dato que se espera para poder dictaminar el expediente respectivo".[68] Hay que recordar que para este momento uno de los requisitos exigidos por la circular número 34 expedida por la CNA, mandataba a las comisiones locales que recabaran una constancia en la que los vecinos dotados o próximos a serlo, manifestaran su conformidad de pagar al gobierno "el valor de los terrenos" que recibirían.[69] Un par de meses después los solicitantes de tierras manifestaron su conformidad en pagar la cantidad correspondiente. Aunque como ya se precisó, este requisito fue suprimido por la CNA en marzo de 1921.

El 4 de marzo de 1920, la CLA emitió el dictamen correspondiente señalando que si bien los de Santa Ana habían manifestado al gobernador la obtención de ocho caballerías de tierras por parte del virrey Luis de Velasco en 1563; no obstante, manifestaron que les habían sido

> usurpadas paulatinamente por distintos individuos, entrando a formar parte en la actualidad de las haciendas del 'Carmen y Santa Teresa', y de los ranchos de don Bernardino Triviña, de don Germán Roth, y de otras propiedades pertenecientes a diversos terratenientes, habiendo sido reducidos a la fecha a una superficie de tres caballerías solamente y como su población consta de 2 323 habitantes reunidos en 545 Jefes de familia, les toca por término medio a razón de un cuartillo y medio de sembradura por cabeza, lo que es insuficiente para cubrir sus más ingentes necesidades.[70]

Esta declaración sería un indicio de las posibles tensiones que existieron entre las haciendas y los pueblos de la zona, por lo menos a fines del siglo XIX, no obstante, la relación entre las haciendas de Santa Teresa y del Carmen con el pueblo de Santa Ana era añeja. Como ha demostrado Inés Ortiz, en el siglo XVIII tuvieron un par de conflictos (1740 y 1792), por la falta de cumplimiento de dos contratos que tenían para el aprovechamiento del agua de la región. En el primer caso la orden carmelita, propietaria de las haciendas desvió las aguas "para que éstas entrasen y regasen" sus tierras. La respuesta de los de Tlapaltitlán fue ocupar las tierras de las haciendas y los carmelitas iniciaron "un litigio con las autoridades del corregimiento de Toluca". En el segundo de los conflictos el mayordomo de las haciendas "rompió el acuerdo y despojó a los indios de la posesión y disfrute de las aguas". Esta vez los de Santa Ana acudieron a las instancias judiciales "quienes por cierto ganaron la acción

[68] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 108.
[69] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 288.
[70] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 116.

legal".[71] Esto último confirmaría la experiencia litigiosa de los pueblos desde la época virreinal, razón por la que posiblemente no les fuera complicado adoptar y adaptar el marco legal de la etapa posrevolucionaria.

En el dictamen de la CLA también se retomó lo relativo a la cercanía del poblado con la capital, razón por la cual debía ser considerado uno de sus barrios, pues si bien administrativamente no era considerado como tal esa clasificación se había realizado hace

> muchísimos años cuando las últimas casas de la ciudad, por ese rumbo sólo distaban unos cuatrocientos metros de la plaza mayor; pero hoy que la población se ha extendido y sigue extendiéndose rápidamente por ese viento a tal grado que una y otra población están separadas solamente por el Panteón General y que las primeras casas de Santa Ana se confunden con las últimas de esta capital, como puede verlo cualquier persona que transite por la calzada que une a ambas poblaciones, ya no hay razón para considerar al pueblo de Santa Ana como tal, propiamente hablando, sino como un barrio de la ciudad de Toluca, con tanta mayor razón, cuanto que la mayoría de los varones de aquel poblado trabajan en la Cervecería, en la Fábrica de hilados, en los Talleres de Raíz de Zacatón, y en otras muchas industrias establecidas en esta capital.[72]

En este sentido, se retomó un criterio emitido en la resolución presidencial dada en el expediente de dotación promovido por los vecinos del pueblo de Santa María Yancuitlalpan, otro poblado cercano a la capital, en donde se señaló que por su proximidad a Toluca, las tierras estaban destinadas "a llenar las futuras necesidades del crecimiento urbano de la citada Ciudad, crecimiento al que se pondría por esa parte una barrera infranqueable si se dotara de esas tierras a un pueblo".[73] Es de destacar que las propias autoridades hicieran referencia a las necesidades futuras de la ciudad, pues desde su origen, parece que la existencia de los ejidos quedaba condicionada a la expansión de esta. Hay que recordar que un argumento similar se presentó en el caso de las solicitudes de tierra de los poblados de San Luis Tlatilco, San Antonio Zomeyucan y San Esteban Huitzilacasco del municipio de Naucalpan, presentados en el capítulo segundo de esta investigación. En ambos casos, las tierras fueron expropiadas por el gobierno estatal. Las de Naucalpan para hacer frente al proceso de urbanización de la capital del país y las de Santa Ana para atender el plan industrializador de la capital del Estado de México.

---

[71] ORTIZ, "Convenios", p. 22.
[72] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 121.
[73] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 1, f. 122.

Con estos elementos, el 9 de febrero de 1921, el entonces gobernador provisional Abundio Gómez, negó la dotación de tierras solicitada.

Para el 16 de abril de 1921, el expediente pasó a la CNA, por vía de su delegado en la entidad, quien lo acompañó de un escrito en el que realizó un resumen del asunto planteado y denunció lo que consideró las irregularidades cometidas por la CLA, en los siguientes términos:

> Es ya intolerable lo que acontece en la Comisión Local de este Estado, con los asuntos de egidos a los Pueblos; solo despachan los expedientes en los cuales se afecta a pequeñas propiedades para que la resolución del Gobernador sea desfavorable como lo habrá ya notado esa Superioridad; personalmente le previne al Presidente de la citada Comisión, cesaran tan graves irregularidades y posteriormente le notifiqué por Oficio que todos los expedientes existentes en la local se deberían dictaminar por riguroso turno según las fechas de las solicitudes y aunque me ha expresado su contrariedad por este motivo voy a insistir sobre el mismo punto por que creo que así se pondrá coto a tanta irregularidad que en la actualidad se observa.[74]

A la falta de personal y a la carga de trabajo con la que contaba la CLA, habría que agregar esta denuncia que hace evidente la existencia de diferencias entre ambas autoridades. Existe constancia de que un año antes, en 1920, el delegado de la Comisión Nacional en la entidad "hizo notar a los miembros de la CNA la lentitud e irregularidades estatales" como los 38 expedientes que en ese momento se encontraban en manos del gobernador y agregó el delegado que "si ese gravísimo mal no se corrige en breves días, obraré aún más enérgicamente, desenmascarando a los culpables, sea quienes sean, y comunicaré a esa H. Comisión Nacional el resultado".[75] Es posible que el delegado insistiera en el punto, pues en su sesión del 4 de junio de 1921, la CNA atendió el "cargo concreto, que se formulaba contra el gobernador del Estado de México" y se hacía del conocimiento del presidente de la república que: "hacía más de tres meses que retenían expedientes resueltos por la Comisión Local Agraria, y no había dictado mandamiento sobre ellos".[76]

Un aspecto más a considerar en este asunto fue la instancia diplomática. El mencionado Germán Roth, ciudadano suizo, solicitó la intervención del Cónsul General de la Confederación Suiza en México, quien el 7 de mayo de 1921 se dirigió al presidente de la

[74] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 10.
[75] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 172.
[76] GÓMEZ, *Historia*, p. 243.

CNA pidiendo el respeto de los bienes de su compatriota:[77] "propietario rural en el Estado de México, el que teme ver perjudicados sus intereses, legítimamente adquiridos".[78] Los principales argumentos de Roth se basaron en que la extensión de la propiedad no rebasaba las 100 hectáreas y que su principal actividad era la industria lechera, para lo cual contaba con "ganado fino importado de diversas razas cuya alimentación depende precisamente de la extensión si bien corta de los terrenos que forman su asiento, sí intensamente cultivados".[79]

Es posible que el curso de la solicitud se retrasara más por la gran cantidad de trabajo de la CNA y al seguimiento que le daba la Secretaría de Relaciones Exteriores a las gestiones de Germán Roth, pues en 1923 no se resolvía y los de Tlapaltitlán se dirigieron nuevamente a la Comisión Nacional Agraria para aclarar que su pueblo no se trataba de un barrio de la ciudad de Toluca como se había presentado ante la CLA, presentando diversas pruebas como la constancia de la categoría de pueblo expedida por el ayuntamiento de Toluca y la merced real de 1563, lo que incorporó un elemento más al procedimiento.

Tomás Alarcón, Jefe Paleógrafo de la Sección de Estudio del Departamento de Tramitación y Estudio de la CNA realizó el dictamen de los documentos presentados por los solicitantes, determinando que eran apócrifos "pues ni el carácter de la letra y redacción, lo mismo que el dibujo de las pinturas, papel, etc., corresponden a los de la época a que se refieren, año de 1563, siendo por lo tanto una burda imitación".[80] Ante esta situación, los de Santa Ana solicitaron a la misma Comisión Nacional que se hiciera "la búsqueda de los documentos que acrediten, que el pueblo de referencia, siempre ha sido reconocido como tal y no como Barrio de la Ciudad de Toluca",[81] lo cual se confirmó. Hay que recordar que para ese momento el *Reglamento Agrario* de 1922, exigía como uno de los requisitos para ser beneficiado con dotación, que los solicitantes acreditaran ser pueblos, rancherías, congregaciones, condueñazgos o comunidades, por medio de un informe rendido por el gobernador en donde se demostrara que, de acuerdo con la división política de la entidad,

[77] En mayo de 1924, nuevamente el Cónsul se dirigió a la SRE, quien a su vez informó al Secretario de Agricultura y Fomento para la atención del asunto. Reiteró que en el rancho San Gabriel se encontraba establecida una explotación lechera, "por lo cual esta finca debe considerarse como unidad industrial, y protegida contra el fraccionamiento, en su calidad de pequeña propiedad", AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 201.
[78] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 24.
[79] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 25.
[80] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 75.
[81] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 77.

contaba con la categoría con la que se ostentaban, en caso contrario su solicitud sería rechazada.

Seguido el procedimiento por sus etapas, los propietarios expusieron sus alegatos ante la CNA en términos similares a los presentados más arriba, dado que el trámite se ajustó al *Reglamento Agrario*, centraron su argumentación en tratar de acreditar que sus tierras eran pequeñas propiedades y unidades agrícolas industriales, las cuales se encontraban protegidas por ley y en caso de ser afectadas, los propietarios contaban con la facultad de "ceder una superficie igual a la que les correspondía entregar en terrenos de buena calidad, y en el lugar más inmediato posible" (art. 14, fracción IV).

Por su parte, los vecinos de Tlapaltitlán solicitaron en varias ocasiones, tanto a la CNA como a la presidencia de la república, la atención de su solicitud, dado que habían transcurrido cinco años y no se resolvía el expediente. De la serie de escritos presentados por los pobladores, destaca el fechado el 9 de agosto de 1924, en el que denunciaron a German Roth por obstruir de diversas formas la dotación, "valiéndose de su influencia, de su dinero y alegando su origen extranjero". Precisando que por esos días había hablado con los pueblos colindantes de San Jerónimo y de San Francisco, "aconsejándoles que pidieran tierras pues según les dice él, (el señor Rooth), está dispuesto a darles a ellos de sus propios terrenos antes que convenir se nos den a nosotros".[82] De ser cierta esta aseveración, el propietario buscaría promover conflictos entre estos pueblos como una forma de resistencia que le permitiera continuar frenando el reparto de tierras y seguir aprovechando los beneficios de la explotación lechera, puesto que en las resoluciones presidenciales que dotaron a los poblados señalados, queda claro que en el caso de San Jerónimo Chicahualco, se afectó la hacienda de El Carmen[83] y en la del poblado de San Francisco Coaxusco, el señor Roth se inconformó argumentando que su rancho se trataba de una pequeña propiedad, además de que se negó la dotación al poblado por no existir fincas colindantes que pudieran afectarse.[84]

Transcurrieron dos años más y ante la falta de resolución del expediente, el 29 de noviembre de 1926, los vecinos de Santa Ana decidieron nombrar como nuevos representantes agrarios a Pascual Rosano, Guadalupe Palomino, Domingo Millán y Ricardo Valdés, "en virtud de los malos manejos de los representantes que fueron designados con

[82] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 221.
[83] *Diario Oficial*, lunes 18 de diciembre de 1939, pp. 5-6.
[84] *Diario Oficial*, sábado 11 de septiembre de 1926, pp. 3-5.

anterioridad, a fin de que los nuevos representantes, sigan haciendo las gestiones relativas para que sea resuelto, a la brevedad que requiere la situación de los agricultores" de este poblado.[85] Las autoridades agrarias argumentaron que no podían reconocer esa representación, ya que no procedía "el nombramiento de miembros para integrar Comité Particular Administrativo" en un pueblo que no había recibido ejidos.[86] Este aspecto es de relevancia para entender los futuros conflictos al interior del ejido.

Las discrepancias al interior del grupo peticionario continuaron, pues el 10 de marzo de 1927, uno de los vocales de la CNA se dirigió a los vecinos de Tlapaltitlán para mencionarles que "con alguna frecuencia se han estado presentando en estas oficinas varios individuos diciéndose representantes legales de ese pueblo, a los cuales se les ha atendido debidamente" y en vista de las dificultades que se suscitaban por la representación mencionada, los instaba a no realizar elecciones para aclarar quien contaba con la auténtica representación, pues el expediente estaba "próximo a su resolución" y se les recomendaba "armonía a fin de que el asunto de ese pueblo no reciba más demora por simples caprichos en que tal o cual individuos sea el representante al susodicho pueblo".[87]

Siguiendo nuevamente a José Alfredo Castellanos, "una vez que empezaron a funcionar los ejidos, los asuntos internos adquirieron una variedad de matices", en este asunto, previo a la constitución del ejido, por la representación del poblado ante las instancias agrarias. Cuando los solicitantes o ejidatarios "no eran capaces de solventar ciertas querellas, entonces entraba el gobierno a dirimirlas; con esta facultad el gobierno podía tener injerencia, habiendo motivos o inventándolos, podía estimularlos", lo que posibilitó que el arbitrio gubernamental se fuera ampliando.[88]

Después de nueve años transcurridos desde la solicitud de tierras, por fin llegó la tan esperada resolución presidencial que pedían los de Tlapaltitlán. El 26 de mayo de 1927 y con fundamento en el artículo 27 constitucional, los artículos 3 y 9 de la ley agraria de 1915 y, 1 y 2 del *Reglamento Agrario* de 10 de abril de 1922, se confirmó la resolución del gobernador declarando la improcedencia de la dotación de tierras solicitada "en vista de que todas las fincas que rodean a dicho pueblo, y aun la inmediata, constituyen pequeñas propiedades, no

[85] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 314.
[86] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 316.
[87] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 319.
[88] CASTELLANOS, *Empeño*, p. 231.

afectables, de acuerdo con lo que dispone en el artículo 14 del Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922". Dejando a salvo los derechos de los peticionarios "para que, al variar las circunstancias, puedan formular nueva solicitud y obtener tierras por dotación, las que, en el presente caso se les niega, por imposibilidad material".[89] Esta resolución coincide con la del pueblo colindante de San Francisco Coaxusco a la que ya se hizo referencia.

En el capítulo dos se explicó como ante la negativa de dotación de tierras, algunos pueblos acudieron al juicio de amparo, no obstante, los de Santa Ana, optaron por formular una segunda solicitud, posiblemente siguiendo lo establecido en la resolución presidencial comentada. A pesar de que en términos generales son los mismos actores, tanto peticionarios de tierras como propietarios, modificaron parte de sus defensas por lo que es conveniente presentar de forma sucinta este segundo procedimiento.

El 28 de enero de 1928, los miembros del Comité Particular Ejecutivo del poblado nuevamente solicitaron tierras, ahora con base en la multicitada ley de 1915 y con la recién promulgada *Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas* de 1927. Al igual que en la anterior petición, señalaron "la apremiante necesidad de tierras ejidales, por carecer completamente de ellas y ser un pueblo netamente agricultor" y agregaron que por esta razón se veían "obligados a vender a bajo precio" su trabajo y a "descuidar la educación" de sus hijos.[90]

Señalaron como posibles fincas afectables las conocidas como San Gabriel, propiedad de Germán Roth; la hacienda de El Carmen y su anexo Santa Teresa, de Luis Lechuga; la hacienda Buenavista propiedad de Amado Muciño y; el rancho de San Juan de José Julio Barbabosa.

Hecha la publicación de la solicitud en el periódico oficial estatal, se constituyó la junta censal, sin presentarse representantes de José Luis Barbabosa y de Elvira Durán de Roth, quienes manifestaron que sus fincas se trataban de pequeñas propiedades por lo que no era necesario tomar parte en el asunto.[91] El resto de los propietarios nombraron a sus respectivos representantes para los trabajos censales.

---

[89] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, f. 337.
[90] Por escrito de 7 de marzo del mismo año, los pobladores ratificaron su solicitud en los mismos términos dado que habían electo a un nuevo Comité Particular Ejecutivo. AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 3, 8.
[91] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 34, 36.

Realizados los trabajos técnicos, el 2 de marzo de 1929, uno de los topógrafos auxiliares de la CNA presentó su informe[92] en el que señaló la existencia de 695 jefes de familia con derecho a la dotación, así como los datos de localización del poblado, encontrándose a un kilómetro y medio de distancia de la ciudad de Toluca; que colindaba "al norte con terrenos del rancho de San Juan, el de Trevilla y hacienda Santa Teresa y El Carmen"; al este con el pueblo de San Jerónimo Chicahualco y el rancho San Gabriel; al sur, con "terrenos del mismo rancho así como de los llamados La Providencia, San Carlos, La Purísima y San Javier, y pueblos de San Francisco y Metepec, y al Oeste, el rancho de Isidro Izquierdo, Panteón Municipal de Toluca y pequeñas propiedades de Germán Roth".

También se precisó que el pueblo era poseedor de 363 hectáreas 30 áreas, de las cuales 50 eran de riego y el resto de temporal de primera; que el caserío del pueblo estaba "diseminado en una superficie aproximada de un kilómetro cuadrado o sea 100 hectáreas", de las que la cuarta parte se encontraba ocupada por casas y el resto por "solares cultivables ubicados dentro de estas casas, por lo que la superficie general rebajada de 25 hectáreas que ocupan las casas, constituiría la superficie de terreno que cultiva o sean 338 hectáreas 30 áreas".

Es importante señalar que, en este informe técnico, se describen como actividades de los pobladores "la hechura de canastas de palma", algunos más que laboraban "en el beneficio de la raíz de zacatón en los talleres de Toluca" y otros más dedicados "al comercio en pequeña escala". De acuerdo con el censo practicado, la mayoría de los de Santa Ana fueron registrados como jornaleros, destacando otros oficios como alfareros, carpinteros, albañiles, comerciantes, peones y tejedores. En comparación con los otros censos revisados para esta investigación, en este ejemplo quedó registrada la actividad de las mujeres del poblado como tortilleras, domesticas, costureras y fruteras.

El jornal promedio en el lugar era de 50 centavos. Sus principales cultivos eran el maíz y el trigo y el clima del lugar era templado y frio con lluvias entre junio y octubre.

Concedido el plazo legal a los posibles afectados para formular sus alegatos[93] y presentar las pruebas que consideraran, la señora Margarita Graf de Barrera, copropietaria de

[92] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 59-63.
[93] El resumen de los alegatos presentados por los propietarios fue extraído del dictamen discutido por la CLA, véase AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 252-265.

los ranchos La Providencia y San Javier, manifestó que desde el año de 1908, estos habían sido adjudicados en partes iguales a ella y a otras cinco personas como parte de las sucesiones de Santiago Graf y Rosa Ortiz de Graf; que de acuerdo con la ley agraria en vigor, esos predios eran inafectables no solo por su tamaño, "sino por estarlo definitivamente considerado por repetidas resoluciones presidenciales pronunciadas en los expedientes dotatorios de ejidos de los poblados San Felipe Tlalmimilolpan, Santa María Magdalena Ocotitlán, San Francisco Coaxusco y Metepec" en donde se había reconocido su carácter de pequeñas propiedades y; que el caso del poblado solicitante había sido resuelto por fallo presidencial del 26 de mayo de 1927, por lo que debía ser considerado como concluido.

En el caso de la finca denominada El Coecillo, su propietaria María Fernández de Moreno, argumentó que el artículo 27 constitucional establecía el respeto a la pequeña propiedad, lo cual había sido acreditado en el expediente de dotación de tierras del poblado San Pedro Totoltepec y confirmada en la resolución del trámite dotatorio promovido por vecinos del poblado de San Jerónimo Chicahualco.

Amado Muciño propietario de La Crespa y Buenavista, emitió un argumento en el mismo sentido, ya que sus propiedades habían sido afectadas por otros procesos de dotación, contando en ese momento con una extensión de 58 y 134 hectáreas respectivamente.

Por lo que toca a los dueños de la hacienda El Carmen y su anexo Santa Teresa, representados por Manuel Lechuga, expusieron que dichas fincas se habían dividido "en seis partes menores de 100 Hs. desde el 15 de febrero de 1918, aplicándose cada una de ellas a cada uno de los herederos del finado señor Valeriano Lechuga, quienes las cultivan por su exclusiva cuenta e independientemente unas de otras" y agregaron que "dos de las susodichas sextas partes en que se dividieron las fincas de referencia, se subdividieron después del fallecimiento de su señor padre, entre nueve de sus herederos, correspondiéndoles a cada uno de ellos una fracción de 28 Hs".

En cuanto a lo expuesto por la señora Elvira Durán de Roth, propietaria de los ranchos llamados San Gabriel y San Jerónimo, mencionó que los mismos medían 80 hectáreas y habían sido declarados pequeñas propiedades por la resolución dada en el primer expediente de dotación solicitada; además de que en San Gabriel se contaba con "500 cabezas de ganado fino, constituyendo, por tanto, una unidad agrícola industrial en explotación".

Utilizando el mismo argumento, los propietarios de los ranchos aledaños de San Rafael, Santa Ana, San Carlos Miravalle, La Purísima, San Gabriel, San Jerónimo y San Juan, alegaron que de acuerdo con la legislación agraria cada una de sus propiedades constituían pequeñas propiedades por lo que estaban exceptuadas de ser afectadas. Si bien en el capítulo anterior se hizo referencia a la protección a la pequeña propiedad amparada por un certificado de inafectabilidad, con estos alegatos queda demostrado que los hacendados recurrieron a este argumento desde el inicio de la reforma agraria.

Con esos elementos, la CLA emitió su dictamen fechado el 5 de octubre de 1929, negando la dotación por estimar que subsistía "la misma imposibilidad material de donde tomar tierras para la dotación que solicitan" los pobladores de Santa Ana.[94] Dicho de otro modo, se reconocía a las propiedades cercanas su carácter de pequeñas y por lo tanto de inafectables.

Turnado el expediente al gobernador del estado, en su resolución realizó distintas modificaciones al dictamen emitido por la CLA. La primera de ellas fue el ajuste al censo agrario excluyendo a 61 personas por tener "ocupaciones distintas y no relacionadas con la agricultura", resultando 634 capacitados y precisando que el pueblo contaba "únicamente con 302 hectáreas 10 áreas de superficie laborable, después de restar la parte urbanizada del poblado y las pequeñas propiedades que poseen los vecinos del propio lugar".[95]

La segunda rectificación y la de mayor trascendencia fue la aplicación de la nueva legislación, lo cual daría un vuelco a lo hasta ahora presentado. De acuerdo con los nuevos criterios de la ley que reformaba la de dotaciones y restituciones de tierras y aguas de 1927, se consideraba como una sola propiedad a "los diversos predios que, aunque aislados", fueran "de un solo dueño, o de varios dueños proindiviso"; siempre que estuvieran dentro del radio de siete kilómetros del poblado solicitante. También consideraba como una sola propiedad a las varias "extensiones que un mismo dueño" tuviera en el estado al que correspondiera el poblado solicitante.[96] De acuerdo con este cambio era procedente la dotación solicitada por los de Tlapaltitlán, por lo relevante del argumento de la resolución, vale la pena su transcripción:

---

[94] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, f. 264.
[95] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 277-278.
[96] Art. 27, "Ley que reforma", p. 410.

> debe argumentarse que siendo estas resoluciones de fechas anteriores a la vigencia de la nueva Ley Agraria que establece consideraciones distintas a las de las leyes anteriores, en las que dichas resoluciones se fundaron, y teniéndo en cuenta, que, de acuerdo con el artículo 137 de la última Ley Agraria, los expedientes que en la fecha de su publicación no hubieran sido resueltos provisionalmente se continuarán de acuerdo con las disposiciones de dicha ley, esta es la que debe aplicarse en el presente caso, con tanta más razón cuanto que el punto tercero resolutivo del fallo presidencial de veintiséis de mayo de mil novecientos veintisiete, dejó a salvo los derechos de los vecinos del poblado gestor para que, al variar las circunstancias, puedan formular nueva solicitud y obtener tierras por dotación y que, si las circunstancias del poblado y la extensión de las fincas inmediatas colindantes, no han variado, las condiciones legales de afectabilidad de las propias fincas si han cambiado por completo por virtud de la nueva Ley.[97]

Fue así que se consideró que los ranchos San Gabriel, San Gerónimo, San Carlos Miravalle y La Independencia, eran propiedades que debían considerarse proindivisas, es decir, como una sola, dado que pertenecían a Elvira Durán de Roth y el último a la misma persona y a su esposo Germán Roth, quien también contaba con la finca La Merced, con una extensión de 1 200 hectáreas, motivo por el cual "estas dos últimas deben también computarse como una sola propiedad con el rancho de San Carlos Miravalle, en lo que respecta al señor Germán Roth".[98]

El mismo criterio se aplicó para otras propiedades de la zona. Fue el caso de las haciendas El Carmen y Santa Teresa que habían sido fraccionadas en seis partes, cuatro de las cuales habían sido adquiridas por Enrique Lechuga, María de Jesús Lechuga de Barbabosa y Manuel Lechuga. Así como de las fincas La Crespa y Buena vista, ambas propiedades de Amado Muciño. En el caso del rancho San Juan, de José Julio Barbabosa, a pesar de contar con poco más de 52 hectáreas, también fue considerado en la dotación, ya que el propietario contaba con otras propiedades en el estado. Las haciendas San Javier, La Providencia y El Coecillo, fueron declaradas inafectables por contar con extensiones mínimas.[99]

Tomando en cuenta el cambio legislativo y las reconsideraciones en la afectación de las propiedades, el 25 de noviembre de 1929, el gobernador Filiberto Gómez, concedió una dotación provisional de 368-22-70 ha (trescientas sesenta y ocho hectáreas, veintidós áreas, setenta centiáreas) de terrenos de temporal de primera clase, tomadas de las fincas El Carmen y Santa Teresa (167-96-12), La Crespa y Buenavista (25-47-87), de San Gabriel y San Carlos

[97] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 279.
[98] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 280-281.
[99] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, fs. 283-287.

Miravalle (148-31-53), y del rancho San Juan (26-47-18), "las que unidas a las 302-00-10 que actualmente poseé el pueblo gestor constituirán su ejido".[100] No está por demás reiterar que para esos años el presidente Plutarco Elías Calles había declarado el fin del reparto de tierras, pero la modificación a la legislación agraria posibilitaba la expropiación de propiedades que anteriormente se tomaban como inafectables en beneficio de los solicitantes. Valdría la pena seguir este hilo para profundizar en lo contrastante que fue el declarar el fin de la reforma agraria y al mismo tiempo modificar la ley para afectar propiedades y prohibir el juicio de amparo.

De acuerdo con el expediente dotatorio, el 5 de mayo de 1930, reunidos en la escuela oficial del poblado, se eligió al CPA designándose a José González como presidente, Graciano Hernández, secretario y Pascual Rosano, tesorero. Se dio lectura al fallo del gobernador "y en seguida el ciudadano ingeniero en unión de todos los presentes se dirigió a identificar los terrenos afectados". Al término del recorrido de los linderos el presidente del CPE declaró que en nombre del gobernador y en cumplimiento de su resolución dotatoria, daba "posesión provisional de las tierras que se acaban de recorrer y que están señaladas en el plano respectivo". Por su parte, el presidente del CPA manifestó que en nombre de los vecinos de Santa Ana Tlapaltitlán, "declaro que son de recibirse y se reciben los terrenos con que ha sido provisionalmente dotado el propio poblado, que se compromete a respetar las siembras hechas con anterioridad y que se sujetará para la buena administración del ejido, a las instrucciones dadas o que en lo sucesivo dieren la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento".[101] Sin presentarse incidente alguno.

El delegado de la CNA en el estado remitió el expediente a la Nacional Agraria, proponiendo en su informe reglamentario una dotación de únicamente 112 hectáreas 57 áreas, de la siguiente forma: "1-57 Hs. de los ranchos San Gabriel y San Jerónimo; 55-80 Hs. del de San Carlos Miravalle; 15-20 Hs. de la hacienda Buenavista, y 40 Hs. del rancho San Juan", para un total de 638 individuos.[102] Es decir, 256 hectáreas menos de las otorgadas por el gobernador.

Se notificó a los propietarios afectados para que presentaran las pruebas y alegatos correspondientes, en los cuales reiteraron la calidad de sus fincas y reprodujeron alegatos

[100] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, f. 288.
[101] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 2, f. 308.
[102] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 5, f. 171.

similares a los presentados en la instancia anterior. Por su parte, los de Santa Ana solicitaron se confirmara la resolución provisional del gobernador.

Como sucedía en muchos de los expedientes de dotación, la resolución provisional emitida por los gobernadores no solucionaba ni aminoraba la tensión entre los solicitantes y los propietarios afectados. De acuerdo con una comunicación del CPA de Santa Ana, habían tenido "dificultades" con Luis Lechuga dueño de las fincas del Carmen y Santa Teresa, pues los acusaba de haber "invadido terreno que no nos fue dado, pero nosotros hemos tenido cuidado de respetar todo lo que no se nos ha entregado. En cuanto a los demás propietarios afectados, ninguna dificultad hemos tenido porque hemos respetado tal como nos lo indicó el señor Presidente de la Comisión Local Agraria".[103]

Incluso, el destacado jurista Ángel Caso, llegó a proponer la supresión de estas resoluciones pues eran "la causa de multitud de positivos atentados contra la propiedad", ya que amparándose en la resolución del gobernador "los ejidatarios apoyan, ostentosamente, su rebeldía, franca y decidida, contra el mandato contenido en la resolución presidencial y la ejecución de ésta: la negativa de la posesión definitiva y su natural consecuencia: el desalojo de la propiedad, indebidamente afectada por el Gobernador".[104] Tal y como se ha visto a lo largo de esta investigación.

Finalmente, la resolución presidencial de Pascual Ortiz Rubio fechada el 30 de octubre de 1930, modificó la resolución del gobernador otorgando una dotación de 142 hectáreas 57 áreas, para 638 vecinos del pueblo de Santa Ana Tlapaltitlán, que serían tomadas de la siguiente forma: del rancho de San Juan, 40 hectáreas; de los ranchos San Gabriel y San Jerónimo, una hectárea cincuenta y siete áreas; del rancho de Santa Ana, 30 hectáreas y; de la hacienda de Buenavista, 71 hectáreas".[105] Dicho de otro modo, los solicitantes recibieron una cantidad mayor de la propuesta por el delegado de la CNA pero menor a la otorgada por el gobernador.

El 23 de marzo de 1931 se dio la posesión definitiva al poblado de únicamente 102 hectáreas 57 áreas, debido a que el propietario del rancho San Juan, propuso una permuta de las 40 hectáreas de esta propiedad, por 50 hectáreas de la ex hacienda de El Carmen, también

[103] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 5, f. 141.
[104] CASO, *Derecho Agrario*, p. 297.
[105] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 5, fs. 173v-174.

propiedad de Barbabosa, celebrándose la posesión complementaria el mismo día.[106] El deslinde y amojonamiento de la totalidad de tierras dotadas se llevó a cabo el 5 de agosto de 1931, quedando constituido el ejido.[107]

Habían transcurrido 13 años desde la solicitud de dotación, dos resoluciones provisionales y dos resoluciones presidenciales para que los de Santa Ana Tlapaltitlán pudieran ser beneficiados de la reforma agraria. No obstante, unos años después les tocaría hacer frente a lo que las autoridades agrarias ya vislumbraban: el crecimiento de la ciudad de Toluca. La urbanización e industrialización de la capital del Estado de México, forzó al gobernador en turno a echar mano de las tierras ejidales aledañas, solicitando su expropiación, incluyendo parte del ejido de Santa Ana, en respuesta, los ejidatarios solicitaron la protección de la justicia federal como uno de sus mecanismos de resistencia, tema del siguiente apartado.

5.5 Industrialización y reforma agraria: la expropiación del ejido de Tlapaltitlán

Conforme crecieron las ciudades, principalmente las capitales de los estados y hubo un incremento de la población en el país, los diferentes gobiernos se vieron en la necesidad de disponer de las tierras limítrofes, incluyendo las tierras ejidales, para satisfacer las demandas de habitación, servicios públicos (agua, luz, electrificación, drenaje, escuelas, hospitales, etc.) y vías de comunicación, motivo por el cual recurrieron a la figura de la expropiación para tratar de atender dichos aspectos.

Vale la pena mencionar que si bien en este apartado se pone la lupa en la expropiación de tierras ejidales como consecuencia de la expansión e industrialización de una gran ciudad, los procesos de urbanización también provocaron la expropiación de los mismos ejidos y comunidades, "debido a la poca previsión de las autoridades responsables del crecimiento urbano, que al dotar o restituir tierras a los poblados que las solicitaron, o al reconocer, titular y confirmar los bienes comunales, no tuvieron en cuenta el futuro crecimiento de la población, y en muchos casos sólo marcaron los límites de la zona urbana en ese momento", lo que a la larga provocó "la invasión desordenada de terrenos de uso agrícola o pecuario".[108]

[106] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 9, f. 58.
[107] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 9, f. 39.
[108] MALDONADO, "La reforma agraria", p. 16.

En ese sentido, posiblemente los argumentos presentados por el presidente Calles en 1927 para negar la dotación a los pueblos de Naucalpan que se estudiaron en el segundo capítulo, no estaba tan errada.

En términos generales, la expropiación fue establecida en la constitución de 1917, en el multicitado artículo 27, teniendo como requisitos de procedencia una causa de utilidad pública y mediante indemnización. A pesar de la importancia que tuvo esta figura jurídica para los gobiernos de los distintos niveles, no fue hasta 1936 que se promulgó la *Ley de expropiación*[109] que estableció en su artículo primero como causas de utilidad pública: el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje; los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública y; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación; entre algunas más.

Las expropiaciones sólo podían llevarse a cabo previa declaración del Ejecutivo Federal, además de establecer "la ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad" (art. 2). Dicha declaratoria se publicaría en el *Diario Oficial* y se notificaría de forma personal a los interesados (art. 4).

Los afectados contaban con un periodo de 15 días para promover el recurso administrativo de revocación (art. 5), ante la secretaría que hubiere tramitado el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio (art. 6). En caso de no promover el recurso o de haber sido resuelto en sentido negativo, "la autoridad administrativa que corresponda" procedía "a la ocupación del bien o de cuya expropiación u ocupación temporal" se tratara o impondría la "ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que" procedieran (art. 7).

Si los bienes expropiados no eran destinados al fin que había dado lugar a la declaratoria, dentro del término de cinco años, el afectado podría reclamar la reversión del bien o la insubsistencia del acuerdo de ocupación temporal o limitación de dominio (art. 9).

[109] *Diario Oficial*, miércoles 25 de noviembre de 1936, pp. 1-3.

El monto de la indemnización sería "cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada" pasara a su patrimonio y en caso de pasar a "una persona distinta, esta cubriría dicha indemnización" (art. 19).

En materia agraria la expropiación de los bienes ejidales o de bienes comunales, fue establecida en el Código Agrario de 1940. En el artículo 165 se retomaron las principales causas de utilidad pública relacionadas con los servicios públicos, calles, calzadas, puentes, caminos y ferrocarriles, y se agregaron otras como "la creación o mejoramiento de centros de población", la resolución de conflictos interejidales o entre ejidos y bienes de propiedad comunal y "la resolución de conflictos entre pequeñas propiedades y ejidos o bienes comunales, originados por información defectuosa o por errores de localización".[110]

Al igual que en la ley de la materia, la expropiación de los bienes ejidales se daba mediante decreto presidencial, "previa compensación y substanciándose expedientes en los que conste el parecer de la Comisión Agraria Mixta, de la Dirección de Organización Agraria Ejidal, del Banco Nacional de Crédito Ejidal" y en su caso del gobierno estatal correspondiente y del Departamento Agrario (art. 250). Los expedientes de este procedimiento debían formarse con "los informes, datos previos, avalúos racionales y demás actuaciones tramitadas con la expropiación de que se trate, debiéndose recabar la conformidad de los ejidatarios presuntos afectados sobre la expropiación por conducto de su Comisariado Ejidal" (art. 251).[111]

Para el Código Agrario de 1942[112] se retomó la figura en términos similares, incorporándose dos supuestos de relevancia. El primero se daba cuando la expropiación recayera en la totalidad de "las tierras de un núcleo de población ejidal, de tal suerte que éste" desapareciera como comunidad agrícola, en cuyo caso la indemnización en efectivo debía "destinarse a adquirir tierras para el núcleo expropiado; pero en caso de que los ejidatarios no aceptaren ocupar y explotar las tierras que se les propongan, la indemnización se destinará a realizar obras o a adquirir elementos para impulsar la agricultura ejidal" (art. 189).

---

[110] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 628.
[111] FABILA, *Cinco Siglos*, p. 645.
[112] *Diario Oficial*, martes 27 de abril de 1943, p. 27.

Cuadro 19. Expropiaciones de bienes ejidales y comunales, por estado y años de realización, 1917-2000								
Estado	1917 1940	1941 1950	1951 1960	1961 1970	1971 1980	1981 1990	1991 2000	Total
Aguascalientes			2	1	15	15	27	60
Baja California	2	1	16	8	39	33	75	174
Baja California Sur					16	18	18	52
Campeche		1	1		4	16	41	63
Chiapas		1		1	27	45	123	197
Chihuahua	2	4	5	4	55	52	94	216
Coahuila		2	2	1	59	34	141	239
Colima			1	1	22	47	88	159
Distrito Federal	13	42	33	21	41	58	71	279
Durango		8	2		61	37	146	254
Guanajuato		1	4	4	110	110	187	416
Guerrero	1	6	20	6	22	71	173	299
Hidalgo		2	13	12	121	76	154	378
Jalisco		1	2	9	73	89	234	408
México	**6**	**26**	**111**	**62**	**232**	**295**	**273**	**1 005**
Michoacán	3	3	7	18	98	119	311	559
Morelos	3	9	12	4	35	56	83	202
Nayarit			3	11	30	40	151	235
Nuevo León			2		31	26	49	108
Oaxaca		3	25	3	62	32	86	211
Puebla		8	31	8	121	59	134	361
Querétaro			2	15	70	38	133	258
Quintana Roo			2		6	17	39	64
San Luis Potosí	1		2	9	13	53	77	155
Sinaloa	2	3	20	9	61	81	213	389
Sonora	2	4	6	5	53	40	42	152
Tabasco			2		52	19	38	111
Tamaulipas	1	4	6	3	90	65	118	287
Tlaxcala			1	2	26	16	26	71
Veracruz		9	33	14	329	149	366	900
Yucatán			1	4	16	74	81	176
Zacatecas			6	1	10	34	45	96
No especificados								15
Total	**36**	**138**	**373**	**236**	**2 000**	**1 914**	**3 837**	**8 549**
Porcentaje	**0.4**	**1.6**	**4.4**	**2.8**	**23.4**	**22.4**	**45**	**100**

Fuente: RUIZ Y ÁNGELES, *Guía de expropiación*, pp. 25-27.

El segundo supuesto se daba cuando los bienes expropiados pasaran "a poder de la Nación" y se destinaran "a un fin o servicio público", caso en que el gobierno debía

compensar "a los ejidatarios con bienes equivalentes por cualquiera de los procedimientos agrarios consignados" en la ley, con el fin de entregar a los campesinos "tierras, bosques o aguas" a cambio de la indemnización en efectivo. Si el núcleo de población tenía que desplazarse, los gastos de traslado serían pagados por el gobierno federal (art. 195).

Sin lugar a duda, la expropiación de bienes ejidales y comunales se convirtió en un procedimiento fundamental dentro de los planes de urbanización e industrialización de los distintos niveles de gobierno, especialmente a partir de la década de los años cincuenta y dándose el mayor número de expropiaciones en la última década del siglo XX, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Como puede observarse en el cuadro 19, el Estado de México fue la entidad con el mayor número de expropiaciones en el periodo 1917-2000, con un total de 1 005 procedimientos, seguida de Veracruz (900), Michoacán (559), Guanajuato (416) y Jalisco (408). No obstante, para la década en que se realizó la expropiación que aquí se estudia, únicamente se llevaron a cabo 62 expropiaciones que contrastan con las 111 de los años cincuenta y con las 800 que se realizaron en los últimos 30 años del siglo XX.

Una vez que se tiene una idea del procedimiento expropiatorio y del número de expropiaciones llevadas a cabo en el siglo XX, corresponde adentrarse al caso de estudio elegido: la expropiación de una parte de las tierras del ejido de Santa Ana Tlapaltitlán, para el establecimiento de la zona industrial de Toluca. Dado que reconstruir los años que siguieron a la dotación de tierras escapa al objetivo de este capítulo, sólo se mencionan dos sucesos que son relevantes para contextualizar los juicios de amparo que se presentan más adelante.

Por medio de un convenio celebrado el 20 de mayo de 1958, entre los ejidatarios de Santa Ana Tlapaltitlán y el Gobierno del Estado, representado por el gobernador Gustavo Baz y el secretario de gobierno Jorge Jiménez Cantú,[113] se afectaron terrenos del ejido, que se destinarían a la construcción del nuevo tramo de la carretera Toluca-México. Los afectados manifestaron estar de acuerdo con la medida y dieron "su anuencia" para que las brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas iniciaran "sobre sus terrenos los trabajos de construcción de la carretera nueva", así como "toda su cooperación" para que dicha dependencia gestionara "la expropiación de los terrenos sobre los cuales" se trazaría la

[113] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, f. 49.

carretera. Por su parte, el gobierno estatal se comprometió a pagar el valor de las cosechas y casas afectadas, así como el gestionar ante el gobierno federal nuevas tierras en terrenos de propiedad nacional cercanas a Toluca, para los ejidatarios privados de sus tierras.[114] Aunque de las fuentes revisadas no queda claro el procedimiento de expropiación llevado a cabo, en algunos documentos de este expediente los ejidatarios se refieren a estas tierras como ocupadas por el gobierno estatal sin haber recibido la indemnización correspondiente.

Por los años en que se desarrolla esta historia se daba un proceso similar en el entonces Distrito Federal con la expansión del Periférico hacia el sur de la ciudad, propiciando la urbanización de esa región, sumado al "movimiento migratorio rural urbano más grande" en el siglo XX. Siguiendo a Jorge Durand, la ciudad de México recibió "miles de migrantes y era incapaz de crecer y adaptarse en la misma proporción", lo cual afectó el desarrollo de los ejidos ubicados al sur, que pronto sufrieron ocupaciones y compra de terrenos ilegalmente.[115] En el caso del ejido de Xochimilco, se dio un intento expropiatorio en 1963 por parte de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México "para la legalización del derecho de vía de una línea eléctrica" que buscaba aumentar el suministro de energía eléctrica en el D.F., sin embargo, el trámite no se concluyó.[116]

Regresando al caso de Santa Ana, un segundo hecho de relevancia fue la solicitud del gobernador Gustavo Baz, fechada el 19 de julio de 1961, para la expropiación de 38 hectáreas del ejido San Jerónimo Chicahualco del municipio de Metepec y 59 hectáreas del ejido de Santa Ana Tlapaltitlán, para la ampliación de la zona industrial de la ciudad de Toluca. Dentro de los argumentos presentados señaló que la capital mexiquense al igual que otras capitales estatales, había "venido resintiendo una gran escases de casas habitación y terrenos para las industrias"; que los terrenos solicitados eran los más adecuados por encontrarse en la zona industrial "y a la orilla de la vía del ferrocarril y de la carretera" y; que las parcelas de los ejidos eran reducidas "y por tal motivo, insuficientes para proporcionar medios de vida satisfactorios a los ejidatarios" que las poseían. De llevarse a cabo la expropiación, las

[114] El convenio tardó en cumplirse por parte del gobierno estatal, ya que seis meses después de celebrado, ejidatarios afectados se dirigieron al gobernador para solicitarle su cumplimiento, particularmente en lo relacionado con la entrega de tierras nacionales, desafortunadamente no se sabe el cauce que tomó el asunto, AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, fs. 46-49.
[115] DURAND, *La ciudad invade*, p. 70.
[116] MALDONADO, "La reforma agraria", p. 26.

empresas beneficiadas quedarían obligadas "a dar empleo, preferentemente, a los ejidatarios afectados", lo que mejoraría "su condición económica".[117]

El 16 de septiembre de ese año se celebró una asamblea entre un representante del DAAC, los órganos de representación del ejido y "la mayoría de los vecinos considerados legalmente como ejidatarios y que ocupan la fracción que se ha solicitado en expropiación", en donde los afectados manifestaron estar de acuerdo con la medida.[118] Sin embargo, una vez celebrados los trabajos de medición se obtuvo una superficie de poco más de 49 hectáreas, diez menos de las solicitadas por el gobernador.

De acuerdo con el código agrario vigente, una vez realizada la solicitud de expropiación, se solicitaba la opinión del gobernador (en este caso no aplicó por ser él, quien la solicitó), de la Secretaría de Agricultura y del Banco Nacional de Crédito Ejidal y a la par se llevaba a cabo el avaluó de los bienes a expropiar. Estos documentos se sometían a la consideración del Cuerpo Consultivo Agrario (CCA) que emitía el dictamen correspondiente, el cual se ponía a consideración del presidente de la república, para que resolviera, en definitiva.[119]

Un primer avaluó de los bienes a expropiar se realizó en diciembre de 1961, dando una cantidad de $2 698 150.65 ($2 611 150 del valor de las tierras y $87 000.65 de las construcciones y cultivos); empero, el gobernador no estuvo de acuerdo con la cantidad, por lo que se llevó a cabo un segundo avaluó presentado el 18 junio de 1962, dando un total de $824 058.65 ($737 058 por las tierras y 87 000. 65 por las construcciones y cultivos), poco menos de la tercera parte de la primera cantidad.

Cuatro días después este documento fue remitido al DAAC para continuar con el procedimiento de expropiación y transcurrió poco más de un año para que el Comité Técnico y de Inversión de Fondos del departamento emitiera su opinión favorable con respecto a la expropiación propuesta.[120]

Para febrero de 1964, el comisariado ejidal de Santa Ana presentó una queja ante la presidencia de la república señalando que "a pesar del tiempo transcurrido desde 1958 a la fecha no se compensa a los expropiados para ampliar la carretera, y sin embargo, se aceleran

[117] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, fs. 36-38.
[118] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, fs. 6-7.
[119] Artículos 286-288 del "Código Agrario" en *Diario Oficial*, martes 27 de abril de 1943, p. 36.
[120] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, f. 59.

trabajos para desposeer a más campesinos con pretextos de instalaciones de fábricas, actos que considerados fuera de la ley recurrimos en amparo".[121] En este caso se refiere a otra acción expropiatoria destinada a la instalación de una empresa automotriz, tema que se presenta más adelante.

Mientras el expediente de expropiación se desahogaba, los ejidatarios, si bien habían aceptado la medida, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus reclamos, hicieron uso de los derechos que les concedía la legislación agraria vigente. El 23 de septiembre de 1962, reunidos en asamblea y conforme a lo establecido por la legislación agraria, habían acordado "la transformación del ejido en zona urbana". La principal motivación que expusieron fue que el DAAC había solicitado una expropiación de poco más de 49 hectáreas, sumado a las afectaciones que habían sufrido para la construcción de la carretera México-Toluca, por lo que no era de extrañarse que "de un momento a otro" apareciera "otra solicitud semejante hasta la extinción del ejido".[122] Es de suponer que con la urbanización de sus tierras, los ejidatarios buscaran recibir el solar que legalmente les correspondía de acuerdo con el artículo 177 del código agrario y en caso de existir solares excedentes pudieran arrendarlos o enajenarlos, para obtener ingresos económicos extras. Ante la falta de respuesta a este procedimiento, los de Tlapaltitlán promovieron un amparo que se menciona en el siguiente apartado.

Con este y otros recursos legales, los ejidatarios buscaron proteger las tierras que aún poseían ante la inminente expansión de la ciudad de Toluca. Es posible que sus acciones fueran un factor importante para evitar la expropiación total de las tierras que les quedaban, pues aún en 1970, el entonces gobernador Carlos Hank González solicitó al DAAC que continuara con el trámite del expediente, ya que la superficie en cuestión era "indispensable para la zona urbano-industrial de la región".[123] Desafortunadamente no se conoce el desenlace de este trámite, pues en la documentación oficial consultada no se encontró información al respecto.

[121] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, f. 62.
[122] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, s/f.
[123] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 19, f. 111.

En este contexto y ante la serie de proyectos impulsados por el gobierno estatal, los ejidatarios no dudaron en promover el juicio de amparo como un mecanismo de resistencia en defensa de sus tierras, tema que a continuación se esboza.

5.6 "*Desposeídos y despojados*": las primeras experiencias del amparo agrario en el Estado de México, el caso de Santa Ana Tlapaltitlán

Antes de adentrarse al estudio de caso elegido, es pertinente hacer referencia a los amparos promovidos en este periodo, así sea de forma fragmentaria. Como ya se ha dicho, estas cifras no son exhaustivas y únicamente buscan presentar un acercamiento a las diversas causas por las que se promovieron los amparos, a los actores inmiscuidos y al sentido de las resoluciones, tanto de los jueces de distrito como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya en otros apartados de esta investigación se han comentado las limitaciones en el acceso a las fuentes para este periodo, de modo que solo se destacan algunos de los datos contenidos en el anexo 4.

En contraste con los otros tres anexos, este último consta de únicamente 15 sentencias de amparos en revisión que arrojan algunos indicios de la conflictividad agraria. El primero de ellos relacionado con los actos reclamados, en su mayoría se trata de privación de derechos ejidales o el despojo de parcelas (ocho juicios), lo que sería un indicador de contradicciones al interior de los ejidos; además de dos juicios relacionados con dotación y otras causales como la desposesión de tierras, la expropiación de bienes ejidales, la ampliación de la zona urbana ejidal, la confirmación y titulación de bienes comunales y la ampliación de ejidos, todas estos actos reclamados con un amparo cada uno. Si se toman estos casos como una muestra de lo que acontecía a nivel estatal, es claro que el escenario rural se había modificado radicalmente para la década de los años sesenta.

El segundo de los indicios está relacionado con las propiedades afectadas, pues para este periodo es evidente que ya no se observan haciendas, sino pequeñas propiedades y tierras ejidales, por lo tanto, los sujetos que acudían al amparo se modificaron, tomando un papel protagónico los comisariados ejidales y los ejidatarios en lo individual.

La última de las pistas a destacar es el sentido de las resoluciones. De las 15 sentencias el juez de distrito sobreseyó el amparo en nueve juicios (60%), lo otorgó en cinco (33.3%) y lo negó en uno (6.6%). En el caso de los recursos de revisión resueltos por la Suprema Corte,

en los mismos cinco asuntos confirmo el amparo (33.3%) y en el juicio promovido por el Comisariado Ejidal de Santiago Tequixquiac,[124] se ordenó la reposición del procedimiento (6.6%), los demás fueron sobreseídos o desechados (60%). Las cifras en ambas instancias son similares, en virtud de lo cual se puede afirmar que el Poder Judicial de la Federación constriñó sus decisiones a la literalidad de la norma, aseveración que se podría modificar con una revisión más amplia de los juicios del periodo.

Destaca en este anexo que el 20% de los amparos se concentró en el municipio de Toluca (3) y le siguieron Tejupilco (ver mapa 9 en donde está marcado con el numeral 110) y Naucalpan con dos amparos cada uno. Salta a la vista que Toluca y Naucalpan son dos de los municipios con el mayor número de amparos en todo el periodo estudiado en esta investigación, el primero con 26, mientras que el segundo con 20, lo que mostraría el carácter litigioso de los pueblos y hacendados de esta región limítrofe a la capital del país. El resto de los juicios en este anexo se dividieron en los municipios de San Mateo Atenco, Tultitlán, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Zumpango, Tenango del Valle, Tequixquiac y Valle de Bravo, con un amparo cada uno.

Es oportuno reiterar que esta breve referencia a los amparos de la década de los años sesenta sólo tiene el propósito de contextualizar los juicios analizados en este apartado, puesto que se tiene claro que el número de juicios de garantías debió ser mucho mayor, desafortunadamente no se pudo avanzar en su búsqueda por las razones ya expuestas. Espero que en un futuro alguien retome esta tarea.

Por la ubicación estratégica que tenía el ejido de Santa Ana Tlapaltitlán fue proclive a ser afectado en varios momentos, los ya mencionados de 1958 para la construcción de la carretera México-Toluca; el intento de 1961 para la ampliación de la zona industrial de Toluca, que al parecer no prosperó o por lo menos en la documentación consultada no queda claro el desenlace; una expropiación resuelta de manera favorable al gobierno estatal en 1964 para la instalación de la General Motors y; otra expropiación en 1977, a favor del gobierno del estado. Se sabe que por lo menos en los años de 1963 y 1964 los de Santa Ana promovieron amparos en contra de algunas de esas afectaciones, perdiendo los juicios, el cómo se desarrolló esta trama, es lo que a continuación se relata.

[124] AHSCJN, AR, exp. 9272/1967.

Mientras se desahogaba ante las instancias agrarias la transformación del ejido en zona urbana y se daba cauce al expediente de expropiación iniciado en 1961, para la ampliación de la zona industrial de Toluca. El gobernador del estado solicitó la expropiación de terrenos de Santa Ana, con el mismo fin de la anterior solicitud, destinarlos a la zona industrial de Toluca, pero en este caso específicamente para la instalación de la empresa General Motors de México, S.A de C.V., con lo que se sumó un nuevo actor al litigio, aunque en las fuentes consultadas aparece de forma ocasional.

Ya se ha comentado que uno de los ejes del gobierno de Gustavo Baz fue la industrialización de la entidad y uno de sus principales logros en la materia, la instalación de algunas plantas automotrices en diversas regiones del estado, pero hay que recordar que esta política se formuló de acorde con el proyecto nacional del presidente Adolfo López Mateos. El 23 de agosto de 1962, López Mateos expidió un decreto que prohibía "la importación de motores, como unidades completas, para automóviles y camiones, así como la importación de conjuntos mecánicos armados para uso o ensamble de esos mismos vehículos" a partir del primero de septiembre de 1964; obligaba a las empresas a formular programas para su fabricación en el país y; especificaba que los vehículos ensamblados en el país representarían "cuando menos, el 60% del costo directo del vehículo fabricado en México".[125]

Acorde con este decreto, la General Motors presentó su programa de fabricación de automóviles y camiones que fue aprobado en diciembre de 1962, por la Secretaría de Industria y Comercio.[126] Con el visto bueno del gobierno, la empresa requería establecer una fábrica para llevar a cabo su plan.

Por medio de un escrito fechado el 10 de junio de 1963, el gobernador del Estado de México, Gustavo Baz y su secretario general de gobierno, Jorge Jiménez Cantú, solicitaron al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización "la expropiación de una superficie de 23, 874 metros cuadrados" que formaba parte del ejido de Santa Ana Tlapaltitlán, es decir poco más de 2.3 hectáreas. El argumento principal para la afectación de esos terrenos consistió en que se encontraban "dentro de una región geográfica" que el gobierno estatal había proyectado de acuerdo con la "Ley de Planificación vigente y de acuerdo con la Ley de Comunicaciones, Obras Públicas y Privadas de la Entidad", para la creación de la Zona

[125] "Decreto que prohíbe" en *Diario Oficial*, sábado 25 de agosto de 1962, pp. 4-5.
[126] AGA, expropiación, exp. 272.2/824, legajo 9, f. 21.

Industrial del Valle de Toluca "y en el caso concreto la superficie de la cual se solicita su expropiación es necesaria para que la Empresa General Motors de México, S.A de C.V. pueda realizar adecuadamente las diversas instalaciones de su planta industrial", debido a que el terreno adquirido por la mencionada empresa "a propietarios particulares está rodeado por la franja de terreno ejidal que se trata de expropiar". Según el dicho del gobernador Baz, la instalación de la planta automotriz traería beneficios colectivos para el estado "y en especial para el Municipio de Toluca", con lo que se acreditaba la utilidad pública de la expropiación.[127]

Conforme a lo establecido por la legislación agraria, el expediente se remitió al DAAC, quien designó al ingeniero Rubén Sánchez Serrano, para la realización de los trabajos técnicos e informativos. En su informe señaló que se presentó en el poblado, notificó al comisariado ejidal y realizó la convocatoria para la celebración de la asamblea general de ejidatarios para el 6 de agosto de 1963, pero no se presentó ninguno de los miembros del comisariado ejidal "ni ningún ejidatario, colocándose prácticamente en estado de rebeldía que a nada favorable conduce, si no por el contrario les perjudica, sobre todo a los afectados directamente ya que con la actitud adoptada por sus representantes, ni si quiera les dan oportunidad de defender sus intereses dentro de la ley".[128] Llama la atención esta opinión del ingeniero comisionado pues develaría que los ejidatarios también recurrieron a lo que Scott denominó la infrapolítica de los grupos subordinados, es decir, a formas de resistencia cotidianas para defender sus tierras.

En una segunda convocatoria, el 13 de agosto de 1963, se celebró la asamblea con la presencia del ingeniero comisionado por el DAAC, el comisariado ejidal (Luis Peña, presidente; Francisco Millán, secretario; Benjamín Martínez, tesorero), el delegado municipal (Margarito Plata de Sales) "y un numeroso grupo de ejidatarios". Uno de los ejidatarios, Ángel González, manifestó que no existía

> oposición para la expropiación de que se trata dados sus fines de desarrollo industrial, sino que hay desconfianza por la forma de pago de la indemnización correspondiente, dado que el dinero que la Empresa solicitante tendrá que pagar por dicho concepto, se hará por los medios conocidos y que nunca llegará a poder de los ejidatarios afectados, proponiendo por lo tanto que se haga la gestión correspondiente para que la Empresa deposite dicha indemnización, en

[127] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, f. 19.
[128] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, f. 8.

> un Banco a satisfacción de los afectados, para que estos puedan recibirla como son sus deseos y de justicia, individualmente.[129]

En uso de la palabra el licenciado Eduardo Ibargüengoitia, quien se acreditó como representante de la General Motors, mencionó que la empresa estaba dispuesta a pagar la indemnización correspondiente y el valor de las cosechas existentes en los terrenos afectados.

La asamblea acordó la propuesta expuesta por Ángel González y hacer del conocimiento de la General Motors el monto total de las cosechas.

De acuerdo con los trabajos realizados, 27 ejidatarios resultarían afectados con la expropiación. En cuanto al avalúo, en este se estableció que el terreno a expropiar se encontraba sembrado de maíz, con calidad de tierra de temporal, que no tenía comunicaciones directas, pero existían proyectos para urbanizar el lugar; que existían una casa de madera y una de adobe propiedad de un ejidatario y; que no contaba con servicios públicos valuando la superficie en $47 748.[130] En este monto no fueron considerados los cultivos que ya habían sido pagados a los interesados.

Un día después de emitido el dictamen, el 15 de octubre de 1963, el jefe del DAAC, Roberto Barrios, informó al gobernador Juan Fernández Albarrán, quien había asumido el cargo un mes antes, que autorizaba la ocupación provisional de las tierras a expropiar con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo presidencial de 12 de marzo de 1947, que autorizaba a las autoridades ocupar de forma provisional las tierras, "sin perjuicio de que se siga el trámite de la acción que se intenta y cuyo expediente ya debidamente integrado con los trabajos técnicos e informativos se resolverá en definitiva con el Decreto Presidencial relativo que regularizará dicha ocupación".[131] Este acuerdo del DAAC fue el que motivó la interposición del amparo.

El 28 de enero de 1964, el Comité Técnico y de Inversión de Fondos de la Dirección General de Tierras y Aguas dio su opinión favorable sobre la acción intentada.

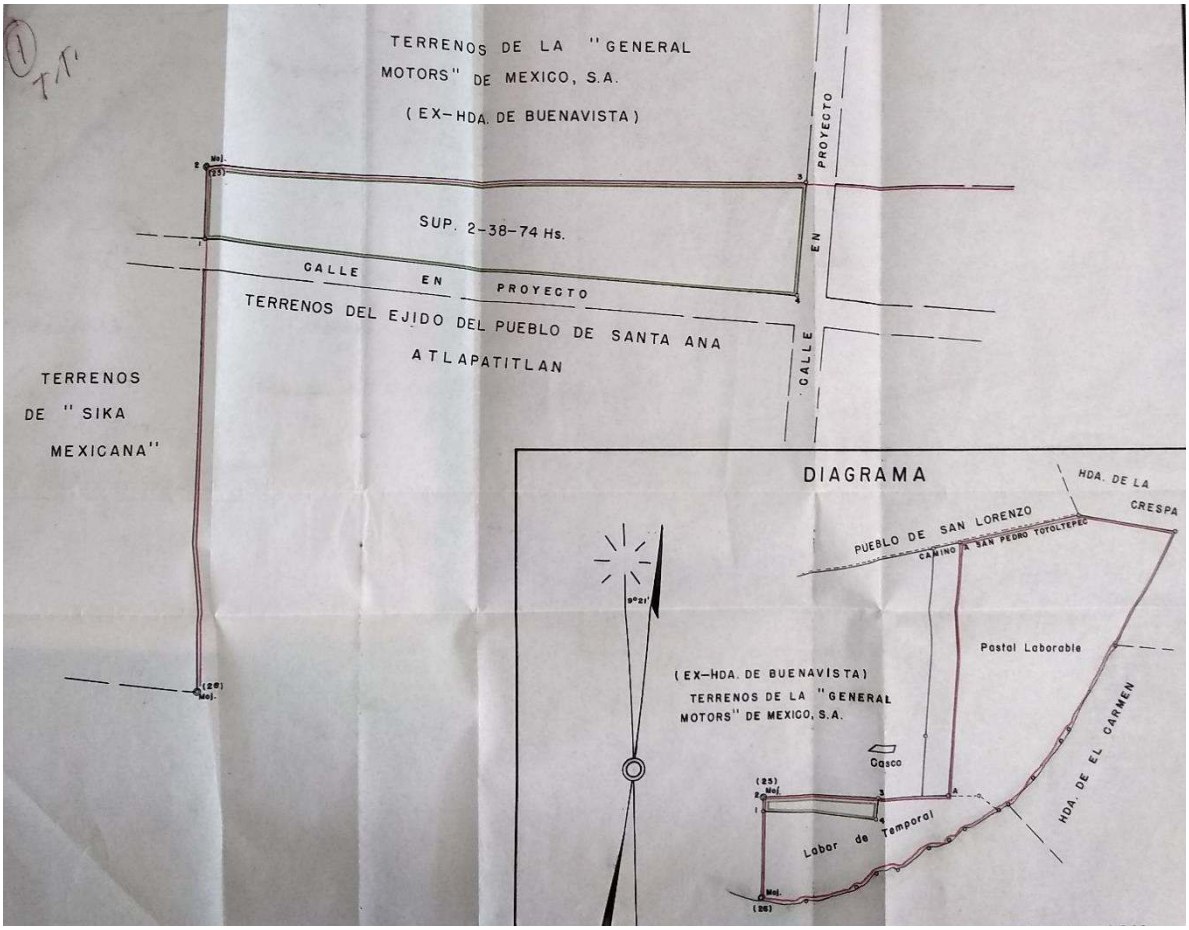
Agotadas todas las instancias del procedimiento, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen el 14 de febrero de 1964, determinando procedente la expropiación de 2-38-73.62 hectáreas del ejido de Santa Ana Atlapatitlán, en favor del gobierno estatal, para

[129] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, f. 9.
[130] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, fs. 22-24.
[131] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, f. 26.

destinarlas a la ampliación de la zona industrial de Toluca, con una indemnización de $47 748.[132]

Con esta información y aparentemente con el consentimiento de los afectados, el 6 de mayo de 1964, el presidente Adolfo López Mateos emitió el decreto de expropiación por causa de utilidad pública de 2-38-73.62 Hs. (dos hectáreas, treinta y ocho áreas, setenta y tres centiáreas, sesenta y dos decímetros cuadrados) de terrenos pertenecientes al ejido de Santa Ana Tlapaltitlán.[133]

Mapa 8. Proyecto de expropiación de terrenos ejidales del poblado de Santa Ana Tlapaltitlán (detalle)



Fuente: AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 9, plano 1.

[132] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 11, fs. 7-10.
[133] *Diario Oficial*, 18 de mayo de 1964, pp. 6-7.

El 27 de junio del mismo año, se reunieron en la escuela del poblado un representante del DAAC estatal (ingeniero Fidencio Hernández Guzmán), un representante del gobierno del Estado de México (ingeniero Manuel Lesama Mayorga), el nuevo comisariado ejidal electo cuatro meses antes (Catarino Sánchez, presidente; Lucio Rodríguez, secretario y; Justo Salazar, tesorero), el delegado municipal (Simón Carreño) y un grupo de ejidatarios; con la finalidad de dar cumplimiento al decreto expropiatorio. Se realizó el deslinde correspondiente y se dio posesión al gobierno del estado.[134]

Los participantes en la reunión se dirigieron a recorrer los linderos y una vez concluido el recorrido cada una de las partes manifestó la formula acostumbrada en las diligencias de posesión y deslinde, la diferencia es que ahora intervenían los tres principales sujetos en la expropiación.

El ingeniero comisionado por el Departamento de Asuntos Agrarios declaró que en nombre del presidente de la república

> y en cumplimiento de su decreto de fecha 6 de mayo del presente año, doy posesión al gobierno del Estado de México, representado por el C. Ingeniero Manuel Lesama Mayorga, de los terrenos que se acaban de recorrer y que son materia de la expropiación para dedicarse a la ampliación de la zona industrial de la ciudad de Toluca, con exclusión de cualesquiera otros usos, terrenos que antes pertenecieron al ejido de Santa Ana Atlapaltitlán, municipio de Toluca, y que hoy salen de su dominio.

Por su parte el ingeniero Manuel Lesama Mayorga, en representación del Gobierno del Estado de México manifestó lo siguiente: "me doy por recibido de los terrenos que se expropian al ejido de Santa Ana Atlapaltitlán en favor del gobierno que represento, cuyos terrenos se destinarán de modo exclusivo a la ampliación de la Zona Industrial de Toluca, según dispone el Decreto Presidencial a que se da cumplimiento".

Finalmente, el presidente del comisariado ejidal expresó su conformidad con la expropiación realizada; con que los terrenos expropiados pasaran "a poder del Gobierno del Estado para destinarlos a la ampliación de la zona industrial de la ciudad de Toluca" y; con que el monto del pago de la indemnización correspondiente ingresara "al fondo común del ejido para que se apliquen según lo dispuesto por el reglamento respectivo".[135]

---

[134] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 13, fs. 38-39.

[135] Como se mencionó líneas arriba, este decreto expropiatorio no fue el único. En marzo de 1977 el gobierno estatal solicitó la expropiación de una superficie de 00-51-11.45 hectáreas para destinarlos a la instalación de oficinas, depósitos e instalaciones para el mantenimiento de maquinaria de su propiedad. El procedimiento

Con estos actos y de acuerdo con la documentación oficial, el decreto presidencial quedaba ejecutado. No obstante, mientras se desarrollaba el procedimiento expropiatorio descrito, el comisariado ejidal en funciones (uno distinto al que estuvo presente en la entrega de las tierras) había promovido un juicio de amparo contra la expropiación, lo que confirmaría la existencia de conflictos al interior del ejido y por lo menos dos fracciones con visiones encontradas con respecto al destino de las tierras. Desafortunadamente las fuentes no permiten profundizar en las motivaciones o filiaciones de cada uno de los grupos o de los habitantes del ejido.

Como se mencionó en el capítulo anterior, los amparos promovidos a partir de 1951 se encuentran bajo resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, de modo que solo se puede acceder a ellos por medio del Sistema Nacional de Transparencia. A diferencia de la documentación obtenida para reconstruir uno de los juicios del ejido de Chotejé, presentado en el capítulo cuatro, en el amparo promovido por los de Santa Ana, la versión pública de los documentos fue más copiosa lo que permitió profundizar en la demanda, alegatos y sentencia presentados en este litigio.

Con fecha 26 de noviembre de 1963, el comisariado ejidal de Santa Ana Tlapaltitlán, electo el 4 de septiembre de 1962, acudió a la justicia federal en demanda de amparo contra los siguientes actos reclamados y autoridades: del jefe del DAAC, la autorización al gobierno estatal para la "mutilación" de su ejido ocupando "en forma provisional, por tener urgencia de iniciar las obras de la zona industrial" unas superficies de 23 874 m^2 y 28 000 m^2; del Director General de Tierras y Aguas del DAAC, la ejecución de la autorización mencionada y la orden dada al delegado estatal de dicho departamento para la realización de trabajos técnicos e informativos de una superficie de 69-61-26 hectáreas del mismo ejido; del gobernador del Estado de México, "el cumplimiento en la ejecución de las ocupaciones provisionales" mencionadas y; del delegado estatal del DAAC, "coadyuvar al cumplimiento en la ejecución de las ocupaciones provisionales", referidas.[136]

---

inició hasta septiembre de 1978, a inicios de 1980 se llevaron a cabo los trabajos técnicos-informativos y para el 13 de noviembre del mismo año fue publicado el decreto expropiatorio véase *Diario Oficial*, viernes 14 de noviembre de 1980, pp. 32-33. Se desconoce si en esta expropiación se promovió algún recurso legal.

[136] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, fs. 1-4. Se reconstruye este juicio con la versión pública de dicho documento, lo cual condicionó la identificación de algunas de sus partes, incluyendo el número de algunas de sus páginas, en este caso se optó por no agregar dicho dato.

Dentro de su exposición manifestaron que "como ejidatarios auténticos" se encontraban en "posesión legal y definitiva" del ejido desde hace más de 30 años; que con fecha 13 de agosto de 1963 reunidos en asamblea fueron "enterados de lo relacionado con la expropiación de terrenos ejidales" de su pueblo, solicitados por el gobernador del estado "para ser destinados a la ampliación de la zona industrial de la ciudad de Toluca" y; que estaban siendo "desposeídos y despojados" de sus tierras "con grave perjuicio" al núcleo que representaban, por lo que habían realizado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal en la entidad "por despojo y otros ilícitos que estimamos configurados en perjuicio del ejido", habiéndose integrado la averiguación 214/63. Penosamente, se desconoce el curso que tomó dicha averiguación.

Desde su perspectiva, la expropiación constituía una "privación, no sólo temporal sino definitiva de los ejidatarios afectados en el goce de sus parcelas", pues no existía resolución presidencial en términos de lo establecido por la ley, que fundara y motivara la mutilación del ejido "y, sin embargo, ya se apresuran, festinadamente, las responsables a iniciar más trabajos, dizque, informativos de expropiación de otra superficie de 68-61-26 Hs. del propio ejido". También señalaron que se trataba de un "procedimiento viciado" desde su inicio, pues estaban "mutilando definitivamente y de hecho el núcleo ejidal", a pesar de que "en la comisión de esos actos, empleen conceptos artificiosos, como 'autorización provisional'". La refutación a los conceptos dados por las autoridades agrarias son un ejemplo más de que, a estas alturas de la reforma agraria, los ejidatarios contaban con amplios conocimientos jurídicos para desenvolverse con eficacia en el complejo arte del litigio.

Al igual que en otras demandas relacionadas con cuestiones agrarias señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16 y 27; así como diversos numerales del código agrario vigente como el 139 que declaraba inexistentes los actos que tuvieran como consecuencia privar total o parcialmente de sus derechos agrarios a los núcleos de población y los relativos al procedimiento expropiatorio (286 al 289).

Como era costumbre en este tipo de asuntos, el juzgador solicitó los informes justificados de las autoridades responsables y señaló como fecha para la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia, las 12 horas del 29 de enero de 1964.

El Director General de Tierras y Aguas del DAAC en su informe justificado reconoció la autorización al gobernador del estado para que ocupara "provisionalmente la superficie de

23 874 m^2 y 28 000 m^2 de terrenos del poblado quejoso por tener urgencia de iniciar obras en la zona industrial, mientras se tramita la expropiación relativa", de acuerdo con este funcionario, no se violaba ninguna garantía constitucional porque todo se había realizado de conformidad con la legislación vigente.[137] El informe del jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Roberto Barrios, se emitió en el mismo sentido, con la única diferencia que se hizo referencia al acuerdo presidencial de 12 de marzo de 1947 en donde se autorizaba "la ocupación de los terrenos necesarios, gestionándose con carácter de urgente la indemnización y compensación respectiva al efecto de que no se lesionen los intereses de los ejidatarios esto es se autoriza la ocupación de los terrenos cuando se aprueba algún proyecto de obras que afecte terrenos ejidales".[138]

Por su parte, el entonces gobernador, Juan Fernández Albarrán, manifestó que no se había violado en perjuicio de los quejosos ninguna garantía individual, pues su participación se había constreñido a dar cumplimiento a las órdenes giradas por el jefe del DAAC " y únicamente en lo que se refiere a la ocupación en forma provisional" de los terrenos ejidales de Tlapaltitlán "sobre una superficie de 51 874 m^2, todo ello con apoyo en lo dispuesto por el Acuerdo Presidencial de fecha 12 de marzo de 1947"; razón por la cual solicitó el sobreseimiento del juicio.[139]

En su informe el delegado estatal del DAAC expresó que eran ciertos "los hechos denunciados", puesto que recibió las órdenes para comisionar un ingeniero que hiciera "entrega de la superficie de 28 000 m^2" que se destinarían a "la ampliación de la Zona Industrial del Valle de Toluca" y dicha posesión provisional se llevó a cabo el 12 de noviembre de 1963, por lo que el amparo era extemporáneo y debía de negárseles.[140]

Llegada la fecha para la audiencia de ley, esta se llevó a cabo sin asistencia de las partes, sin embargo, días antes habían ofrecido por escrito sus pruebas y alegatos. Los quejosos presentaron como pruebas: los informes justificados de las responsables, con lo cual intentaban demostrar la existencia del acto reclamado; la resolución presidencial de dotación del 30 de octubre de 1930; el acta de posesión definitiva y deslinde; el plano del ejido; distintos oficios tanto los dirigidos a distintas autoridades, como los que contenían las

[137] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, fs. 26-27.
[138] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, fs. 28-29.
[139] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, f. 41.
[140] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, s.f.

órdenes de ocupación de las superficies mencionadas y; el convenio celebrado con el ejecutivo estatal el 20 de mayo de 1958. La tercera perjudicada, es decir, la General Motors, por conducto de su representante legal, ofreció copias de los oficios de las autoridades que habían ordenado la posesión provisional de las tierras del ejido y del acta de la asamblea ejidal en donde habían manifestado su conformidad con la expropiación.

En lo tocante a los alegatos, los de Tlapaltitlán, en un extenso documento, manifestaron: su inconformidad por "la expropiación que, en forma inconstitucional y arbitraria, se ha iniciado y se lleva a cabo con flagrante violación del procedimiento a que se refiere el artículo 187 del código agrario"; que la presunción de las autoridades responsables y la tercera perjudicada resultaba "infantil al afirmar que los actos reclamados se han ejecutado por urgencia de iniciar trabajos de la Zona Industrial y que la misma instalación beneficiará no sólo a la economía del Estado sino de todo el país"; que el acuerdo presidencial de 12 de marzo de 1947 era inconstitucional por contravenir lo establecido en el código agrario; que el ejido "en ningún momento" había estado, "tácita ni expresamente, conforme con las solicitudes de expropiación y trabajos informativos" del gobernador y del departamento agrario; que el ejido venía "siendo mutilado sin llenarse los requisitos de expropiación", pues pese a que desde 1958 se había acordado indemnizarlos por las tierras destinadas a la ampliación de la carretera México-Toluca, "hasta la fecha no se ha compensado en forma alguna a los afectados en lo personal, causándose perjuicios al Núcleo que representamos porque, en principio, no se han respetado sus posesiones y derechos, causándose un malestar entre los integrantes del mismo y su desconfianza en la seguridad de seguir dedicándose a sus labores agrícolas con la oportunidad y atención que se requiere"; que la tercera perjudicada había llevado a un grupo de personas a un notario "para hacerles entrega de determinada cantidad con renuncia de derechos que no son renunciables", lo que ocasionaba "confusión entre los componentes del Núcleo agrario por su actitud, culminando al observarse que hizo entrega de dinero a quienes ni siquiera son ejidatarios" y; concluyeron aclarando que si se habían llevado a cabo "trabajos informativos técnicos para más expropiaciones del ejido del Núcleo que representamos, ha sido a espaldas de las correspondientes autoridades y, por lo mismo se nos han hecho víctimas de indefensión".[141]

[141] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, s.f.

Como se ha enfatizado, es evidente que los quejosos tenían un amplio conocimiento del uso de la legislación y de los puntos que tenían que hacer valer en el juicio.

La tercera perjudicada, la General Motors, en sus alegatos señaló como puntos principales que "los actos reclamados y sus efectos y consecuencias" se habían consumado de un modo irreparable, puesto que el gobierno estatal había tomado posesión de las superficies en disputa; que "los legítimos ejidatarios propietarios de dichas parcelas" estuvieron conformes con la afectación de "si se les liquidaba el valor de sus siembras y una casa de madera propiedad de un ejidatario" y aún más, ratificaron ese consentimiento ante notario; que los miembros del comisariado ejidal "conocían las situaciones anteriores y sin ser legítimos propietarios de las parcelas afectadas, temerariamente promovieron el amparo, el cual debe sobreseerse por improcedente", además de que debieron de oponerse a la afectación en la asamblea correspondiente, lo cual no hicieron; que el DAAC autorizó al gobierno estatal y a la General Motors "ocupar en forma provisional" 51 874 metros cuadrados de terreno, con fundamento en el citado acuerdo de marzo de 1947 y la urgencia de llevar a cabo las obras pues se trataba "por una parte de crear la zona industrial de Toluca, y por la otra de concluir la planta para fabricar motores de la tercera perjudicada", quien se había comprometido con el gobierno federal "a integrar la industria automotriz nacional y para ello goza de un plazo perentorio, y si dentro de dicho plazo no cumple con sus compromisos, perderá sus derechos para seguir fabricando motores y en consecuencia sus inversiones también se perderían en perjuicio propio y de la economía del país"; por estas razones debía negárseles la protección constitucional solicitada.

Al emitir su sentencia, el mismo 29 de enero de 1964, el juez de distrito consideró que los actos reclamados se habían comprobado y que del acta de asamblea general de ejidatarios del 13 de agosto de 1963, se desprendía la improcedencia del juicio porque el comisariado ejidal quejoso se encontraba en la asamblea "y, sabedor de los trabajos expropiatorios y de sus consecuencias de hecho y de derecho, no sólo no formuló oposición alguna, sino que, por el contrario, consintió los puntos tratados en forma expresa, como así se desprende de la redacción del acta estudiada",[142] de modo que se trataba de un acto consentido. Con base en este razonamiento, el juez de distrito, Higinio Guerra, sobreseyó el amparo.

[142] CAJCJF, JDEM, AI, 617/963-7, f. 145.

Inconformes con la resolución del juez de distrito, los quejosos promovieron el recurso de revisión ante la Suprema Corte, quien confirmó la sentencia del de Distrito. En este punto cabe hacer un paréntesis para profundizar en el motivo que arguyó la corte para sobreseer el juicio.

De acuerdo con la sentencia emitida, los quejosos promovieron el recurso de revisión el 2 de marzo de 1964; sin embargo, con fecha 25 de febrero de 1964, una asamblea de ejidatarios los había destituido y nombrado un nuevo comisariado ejidal. El 31 de marzo del mismo año, el comisariado recién electo presentó al máximo tribunal del país copia del acta de esa asamblea y un escrito por medio del cual se desistían del recurso promovido por "así convenir a los intereses del comisariado ejidal".[143] Desistimiento que posiblemente no hubiese tenido efecto pues como se mencionó, la normatividad lo prohibía tratándose de amparos interpuestos contra actos que afectaran los derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, de forma total o parcial.

A pesar de que las fuentes no permiten profundizar en el análisis de los conflictos al interior del ejido, se propone como hipótesis que, por lo menos en el ámbito legal, se manifiestan dos posturas opuestas con respecto al destino de las tierras. Una que intentaba proteger lo que quedaba del ejido y se oponía a la expropiación y la segunda, que, ante el inminente avance de la industrialización, buscó obtener una mayor indemnización.

De regreso a la asamblea, el acta de la misma da cuenta de la participación de un representante del DAAC y "una mayoría de ejidatarios" de Santa Ana, cuyo propósito era realizar un "corte de caja" al tesorero, además de investigar el "estado administrativo del ejido", pues algunos ejidatarios se habían quejado de resultar perjudicados "en sus intereses personales, por haber entregado cuotas exigidas por el Comisariado Ejidal", y que según los afectados no se habían destinado "para el objeto que se cobraron".[144]

Abierto el debate, el ejidatario Ángel González, el mismo que en agosto de 1963 se había manifestado a favor de la expropiación, expresó que era cierto el cobro de cuotas, pero que estas habían sido "acordadas en una junta que tuvieron los ejidatarios para costear los gastos en las gestiones que se estaban haciendo para urbanizar al ejido", no obstante, "las cantidades aportadas" no habían sido empleadas para el fin acordado, "pues hasta la fecha"

[143] AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 8-9.
[144] Se reconstruye lo relativo a la asamblea de acuerdo con el acta encontrada en AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 11-12.

no se había presentado el personal que llevaría a cabo "los trabajos de urbanización". Por su parte, las señoras Julia Sánchez y Julia Galeana manifestaron que habían entregado 60 y 50 pesos, respectivamente "sin que se les entregara su recibo", ese dinero estaría destinado a expedírseles "las escrituras de la zona urbana".

De acuerdo con el acta levantada el tesorero no se presentó a la reunión, de modo que se optó por dejar pendiente la rendición de cuentas para una posterior asamblea general de ejidatarios que se convocaría oportunamente y el representante del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización procedió a destituir al comisariado ejidal, siguiendo las instrucciones del Director de Organización Agraria Ejidal, nombrando la asamblea uno nuevo integrado por Catarino Sánchez, Pascual Lucio y Justo Salazar. Es notorio que las autoridades agrarias apoyaron el cambio de comisariado para hacer a un lado a los que se oponían a la expropiación.

Regresando al recurso de revisión derivado del amparo promovido en contra de la ocupación provisional de las tierras ejidales de los de Tlapaltitlán. El 5 de julio de 1964, la General Motors por conducto de su representante, señaló ante la Suprema Corte que el acto reclamado por los quejosos, es decir, la ocupación provisional de una superficie del ejido de Santa Ana, se había "consumado irreparablemente en perjuicio de dichos quejosos", por el decreto expropiatorio emitido por el presidente de la república, solicitando el sobreseimiento del juicio.[145] Días después presentó como prueba una copia certificada del acta de posesión y deslinde del terreno expropiado al ejido "y en cuya acta estuvo conforme el Comisariado Ejidal en funciones",[146] es decir, el nuevo comisariado ejidal.

Por su parte, el Ministerio Público Federal pidió la confirmación del sobreseimiento del juicio de amparo, "en atención a que el acto reclamado" se había "consumado irreparablemente en perjuicio de los quejosos".[147]

Tomando en cuenta lo anterior, la Suprema Corte consideró que a la fecha en que se había promovido el recurso de revisión, los promoventes no contaban con la personalidad jurídica para hacerlo, es decir, ya no se encontraban facultados para representar al ejido "y por lo mismo no pudieron interponer legalmente en su nombre" la citada revisión, por lo que tuvieron el recurso por no interpuesto y confirmaron el sobreseimiento declarado por el juez

[145] AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 14-15.
[146] AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 50-51.
[147] AHSCJN, AR, 2209/64, f. 45.

de distrito. Con esto se cerraba este episodio de la reforma agraria y hasta donde se sabe no existieron mayores inconvenientes para la instalación de la General Motors S.A de C.V.

El análisis de este juicio permite reiterar lo que se expresó en la introducción con respecto al amparo como un observatorio del mundo rural, aquí es claro que los conflictos internos propiciaron la pérdida del juicio, pues de no existir el cambio del comisariado ejidal es posible que el recurso tomara otro rumbo, aun y cuando el gobierno del estado había tomado posesión de las tierras, puesto que no había indemnizado a los ejidatarios por las tierras expropiadas en 1958.

La historia del uso del amparo agrario como un mecanismo de resistencia no terminó con el recurso de revisión reseñado. Existen por lo menos dos juicios más, promovidos por los miembros del comisariado ejidal depuesto. Lamentablemente las limitantes en el acceso a las fuentes no permiten reconstruir a detalle estos amparos, de manera que solo se presenta un esbozo.

La primera de las demandas fue promovida ante el juzgado de distrito del Estado de México, en contra de su remoción como miembros del comisariado ejidal. Luis Peña Rodríguez, Francisco Millán Plata y Benjamín Martínez Almazán expresaron que el acta de posesión y deslinde del 27 de junio no debería tomarse en cuenta porque había sido "practicada por personas que en ningún momento han sido electas para substituirnos en las funciones de Comisariados Ejidales"; que su destitución se había llevado sin cumplir el procedimiento establecido por el código agrario para estos casos y; que habían sido víctimas "de toda clase de persecuciones y arbitrariedades privándosenos de la libertad personal".[148]

Señalaron como autoridades responsables al jefe del DAAC, al delegado del departamento en el estado y al jefe de la décima zona ejidal adjudicándoles como acto reclamado a las dos primeras la orden de su destitución y a la última su ejecución. Precisaron que el actuar de las autoridades responsables violaba diversas disposiciones del código agrario que establecían que los comisariados podían ser removidos por la Asamblea General de Ejidatarios "pero nunca por una orden girada por una delegación de Asuntos Agrarios y Colonización y con el pretexto de integrar debidamente un expediente, ignorando nosotros qué clase de expediente se esté integrando en nuestra contra".[149] Además de que la asamblea

[148] AHSCJN, AR, 2209/64, f. 78-80.
[149] AHSCJN, AR, 2209/64, f. 86.

no había cumplido los requisitos legales, pues solo habían acudido 25 ejidatarios, el presidente y el secretario, quienes se negaron a firmar el acta respectiva por la irregularidad en que se encontraba, mientras que el tesorero se había ausentado por "encontrarse en comisión" relacionada con sus atribuciones en la capital del país.

Según su dicho, ante esta situación acudieron en queja al DAAC y a la presidencia de la república, no obstante, no habían obtenido respuesta y como se dijo, no se conoce el desenlace de este juicio.

Hay que recordar que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno del estado en 1958, particularmente lo relacionado con el otorgamiento de tierras ubicadas en terrenos nacionales, los ejidatarios de Santa Ana acudieron a distintas instancias para expresar su inconformidad y como una medida protectora a sus tierras, en septiembre de 1962 y con fundamento en los artículos 175 a 184, solicitaron a las autoridades agrarias la transformación del ejido en zona urbana, informando por medio de distintos escritos a la presidencia de la república y al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Como lo establecía la ley, dichas comunicaciones se hicieron por medio del comisariado ejidal recién electo para el periodo del 4 de septiembre de 1962 al 4 de septiembre de 1965, nombrándose a Luis Peña Rodríguez, Francisco Millán Plata y Benjamín Martínez Almazán como presidente, secretario y tesorero, respectivamente.[150]

Dado que no obtenían respuesta a su petición, el 6 de febrero de 1963 remitieron a las autoridades mencionadas los "planos de ejecución y de fraccionamiento" del ejido, para acreditar la existencia de "pequeñísimas fracciones de tierra constitutivas de aquél y sancionar, sin demora, la lotificación respectiva de la Zona Urbana".[151] Nuevamente la respuesta no llegaba y acudieron a los tribunales federales.

Con fecha 19 de octubre de 1964, los miembros del comisariado ejidal de Santa Ana Tlapaltitlán acudieron ante el Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal en materia administrativa, solicitando la protección de la justicia federal en contra de los actos del presidente de la república, del jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), del director general de Tierras y Aguas, entre otras autoridades; señalando como

[150] AGA, dotación, exp. 23/2270, legajo 4, s/f.
[151] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 13, f. 6

acto reclamado la "falta de proveído o resolución a la petición que se formuló en 27 de septiembre de 1962, a las 2 primeras responsables y a la tercera en escritos de 6 de febrero de 1963".[152] Es de destacar que para este momento ya había sido emitido el decreto expropiatorio para la ampliación industrial de la ciudad de Toluca, por lo que posiblemente los ejidatarios decidieron promover el amparo para salvaguardar la extensión que les quedaba.

Precisaron los quejosos que a pesar de las diversas gestiones realizadas y al no obtener respuesta, el 6 de febrero de 1963, enviaron a las responsables "los correspondientes planos de ejecución y de fraccionamiento del referido Ejido; el primero, para la localización y el segundo para justificación de existencia de pequeñísimas fracciones de tierra constitutivas de aquel y sancionar, sin demora, la lotificación respectiva".

En este ejemplo y a diferencia de los anteriores estudios de caso, los quejosos alegaron como garantía violada el derecho de petición establecido en el artículo octavo constitucional "por la falta de resolución a una solicitud formulada en los términos respetuosos como la que dirigimos"[153] y que sus argumentos los ajustaron al proceso de urbanización del que eran testigos y participes. En su demanda, hicieron notar al juez que la urbanización solicitada traería un beneficio a la entidad, "al municipio, a los vecinos inmediatos y a los habitantes de la población en general, al determinarse el incremento de los negocios; el ensanchamiento y embellecimiento de la Ciudad a la cual queda agregada, el aumento de trabajo que demandan las construcciones; y, por último, su contribución a librar a la clase campesina de las demás condiciones en que se encuentran los que no tienen hogar propio".[154] Estos argumentos son un botón de muestra de cómo los ejidatarios adoptaron y adaptaron las herramientas que les brindaba el marco jurídico de la reforma agraria, pero también como se convertían en participes de los fenómenos de industrialización y urbanización de su región.

Siguiendo la monografía delegacional de Santa Ana Tlapaltitlán, la industrialización de la región tuvo efectos evidentes "en la vida cotidiana de los habitantes" del poblado "ya que de ser una comunidad cuya base económica era la agricultura, complementándose con las artesanías", paso a ser una población "con un alto porcentaje de obreros, así un número

[152] Se reconstruye esta parte con la información contenida en AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 13, fs. 4-19 y AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 68-72.
[153] AHSCJN, AR, 2209/64, f. 70.
[154] AHSCJN, AR, 2209/64, f. 71.

considerable de habitantes, pasó a formar las filas de los trabajadores en las industrias que existen en el corredor industrial Toluca-México. Además a pasos agigantados también se transformó de comunidad rural a urbana".[155]

El 21 de octubre de 1964 el juzgador de distrito dio por admitió la demanda y solicitó a las autoridades responsables los informes justificados, señalando fecha para la audiencia constitucional el 3 de febrero de 1965.

En su informe justificado el jefe del DAAC, en su nombre y en el del ejecutivo federal, manifestó que la Dirección de Tierras y Aguas de dicha dependencia había aprobado la solicitud realizada por los ejidatarios, informándole al comisariado de Santa Ana "que podía realizar las gestiones necesarias" para la contratación de un ingeniero postulante y solicitó a su delegación estatal que comisionara al personal que llevaría "a cabo los trabajos de localización y lotificación de la zona urbana del ejido", con lo que se había atendido la petición realizada, de manera que solicitó la improcedencia del juicio y en su caso el respectivo sobreseimiento.[156] El director general de Tierras y Aguas emitió su informe justificado en los mismos términos.

Seguido el juicio por todas sus partes, el 30 de diciembre de 1965, el juez de distrito dictó sentencia definitiva, sobreseyendo el asunto, tomando como fundamento principal la negación del acto reclamado por parte de las autoridades responsables y que los quejosos "no demostraron la existencia de dichos actos".[157]

Inconformes con la resolución, el 10 de febrero de 1966, los quejosos promovieron recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien confirmó la sentencia recurrida, sobreseyendo el asunto por medio de resolución fechada el 31 de marzo de 1967.[158]

Lamentablemente no se conoce el cauce que tomó el procedimiento de urbanización mencionado, aun así, es pertinente cerrar este capítulo mencionando que el crecimiento de la ciudad hasta "invadir el ejido", obligó a los ejidatarios a adaptarse a una "nueva situación que se presenta como irreversible". Dicho proceso implicó "problemáticas distintas pero interconectadas; en un mismo campo y espacio de tiempo" se dio la expropiación de parte

[155] LAGUNAS, *Monografía delegacional*, p. 68.
[156] AHSCJN, AR, 2209/64, fs. 73v-74.
[157] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 13, f. 7.
[158] AGA, expropiación, exp. 272. 2/824, legajo 13, f. 19.

del ejido, "la urbanización, la descampesinización y la proletarización".[159] Lo que cambió la dinámica económica y social de Santa Ana Tlapaltitlán, otra de las líneas pendientes por explorar.

A manera de cierre

A lo largo de este trabajo se ha propuesto periodizar el juicio de amparo en materia agraria a partir de las reformas que tuvo su legislación, tanto a nivel constitucional como a las leyes reglamentarias, enmarcándolo en las diversas etapas por las que atravesó la reforma agraria. Siguiendo esta idea, en este capítulo se presentó el surgimiento del amparo agrario como una figura protectora de los recursos naturales de los ejidos y comunidades en general y los derechos de ejidatarios y comuneros en lo particular.

Este tipo de juicio se diferenció del amparo utilizado en otras ramas del derecho como la civil o penal, por buscar la protección de los hombres y mujeres del campo beneficiados por la reforma agraria, para lo cual se fijaron reglas específicas como el número de días para su interposición, la suplencia de la queja deficiente o la caducidad de la instancia, elementos procesales que lo convirtieron en una figura sui generis dentro de la historia del derecho mexicano. Sin duda, en este tema existe un filón historiográfico que en un futuro se puede explotar.

Si bien, desde la primera etapa del reparto agrario algunos pueblos solicitantes de tierras recurrieron al amparo, como quedó demostrado en los capítulos segundo y tercero de esta investigación, el proceso debía seguirse de acorde a las reglas generales establecidas por la ley. Con el nacimiento del amparo agrario, en un contexto de represión a los movimientos sociales, incluyendo el campesino, se buscó crear, por lo menos en el papel, un juicio que fuera más accesible para la gente del campo y pronto se convirtió en una herramienta más de lucha en la defensa de sus tierras, bosques y aguas, durante el tiempo que estuvo vigente (1963-2013). Desafortunadamente la imposibilidad para consultar a profundidad los archivos, solo permite presentar esta aseveración a nivel de hipótesis.

Sin embargo, el cuadro anexo que acompaña este capítulo, muestra de manera preliminar que el escenario rural de la entidad se había modificado radicalmente para la

[159] DURAND, *La ciudad invade*, p. 9-11.

década de los años sesenta, por ejemplo, los actos reclamados por los que se promovía el amparo, se tratan de privaciones de derechos ejidales o despojos de parcelas, lo que sería un indicador de conflictos al interior de los ejidos, además de otras causas propias de esta etapa de la reforma agraria como la expropiación de bienes ejidales, la ampliación de la zona urbana ejidal y la confirmación y titulación de bienes comunales.

Para el caso específico del Estado de México los años en que surge el amparo agrario se caracterizaron por un reparto de tierras prácticamente concluido y donde el gobierno del estado buscaba acelerar el proceso de industrialización que vivían algunas regiones de la entidad. Tal fue el caso de la propia capital del estado y algunos de los municipios limítrofes con el Distrito Federal como Naucalpan y Tlalnepantla.

Será en ese escenario en que el gobierno estatal recurra a la figura de la expropiación de bienes ejidales para solventar la necesidad de tierras ocasionada por la explosión demográfica, con su consecuente urbanización y la industrialización mencionada. Ejemplo de ello fue el proyecto de creación de la Zona Industrial del Valle de Toluca, que contemplaba la ampliación de vías de comunicación y el asentamiento de la empresa automotriz General Motors, lo que propició que se solicitara la expropiación de tierras en posesión de ejidos cercanos.

El caso elegido para esta investigación se trata de la afectación de una parte de las tierras del ejido de Santa Ana Tlapaltitlán y cuya respuesta por parte de los ejidatarios afectados para defender sus tierras, fue recurrir al recién promulgado amparo agrario en contra del decreto expropiatorio, porque a pesar de que desde 1958 habían sufrido una afectación no se les había indemnizado y con la instalación de la General Motors, se buscaba desposeerlos de otra fracción del ejido acto que consideraron "fuera de la ley", razón por la que acudieron a los tribunales federales.

Estos juicios representan algunas de las primeras experiencias llevadas a cabo en el Estado de México. Al igual que otras figuras que se han tratado en los capítulos anteriores, el estudio de la expropiación de bienes ejidales es un campo importante dentro de los estudios agrarios, particularmente esta arista jurídica, pues el juicio de amparo fue y sigue siendo el medio de defensa por excelencia para hacerle frente a los actos de las autoridades administrativas que los llevan a cabo.

Particularmente, los amparos promovidos por los ejidatarios de Tlapaltitlán dejan ver tres aspectos pilares en esta investigación. El primero de ellos, es que al igual que los pueblos de Naucalpan presentados en el capítulo dos y el de Teoyahualco, visto en el capítulo tercero, utilizaron el amparo como un recurso de resistencia en defensa de sus tierras; el segundo elemento, es que contaban con un amplio conocimiento de la legislación, lo que les permitió refutar los dichos de las autoridades agrarias, específicamente el trámite de expropiación al que calificaron de "viciado", este argumento sería un botón de muestra de cómo los ejidatarios habían adoptado y adaptado las herramientas que les brindaba el marco jurídico de la reforma agraria y; el tercer aspecto, que se retoma más adelante, son los conflictos al interior del ejido al manifestarse por lo menos dos grupos, uno que estaba en contra de la expropiación y otro que buscó obtener una indemnización inmediata.

A pesar de que los juicios promovidos por los de Santa Ana fueron perdidos y la expropiación se consumó, la reconstrucción de esta experiencia de lucha permite afirmar que la existencia del ejido estuvo condicionada desde su formación por la cercanía que guardaba con la ciudad de Toluca; pero también demuestra que, para este momento de la reforma agraria, los ejidos en lo colectivo y los ejidatarios en lo particular, siguieron recurriendo a las diversas herramientas que les proporcionaba el marco común material de la legislación, tanto agraria como de amparo, independientemente del resultado obtenido, pues del anexo que acompaña este capítulo se tiene conocimiento de que por lo menos en dos amparos promovidos por los comisariados ejidales de Santa María Totoltepec[160] y San José Potrerillos[161], tanto el juez de distrito como la SCJN les concedieron el amparo, juicios que se podrían estudiar a profundidad para conocer sus particularidades.

Por si fuera poco, los ejidatarios de Santa Ana Tlapaltitlán no estuvieron exentos de hacer frente a los distintos tipos de conflictos que surgieron en los 45 años que transcurrieron entre la solicitud de tierras en 1918 y el decreto expropiatorio de 1963. En un primer momento enfrentaron a los propietarios de las fincas aledañas que utilizaron distintas formas de resistencia en defensa de sus intereses, particularmente el señor German de Roth, quien presentó su finca como una pequeña propiedad y como una unidad agrícola en explotación, dedicada a la producción de leche, en ambos casos protegida por la legislación vigente.

[160] AHSCJN, AR, exp. 3703/1968.
[161] AHSCJN, AR, exp. 3394/1970.

Además de recurrir a la queja ante las instancias diplomáticas por tratarse de un ciudadano suizo.

Habían transcurrido casi tres décadas de vida ejidal, cuando el multicitado proceso industrializador impulsado por el gobernador Gustavo Baz y consolidado por su sucesor Juan Fernández Albarrán, buscó expropiar parte de las tierras de Tlapaltitlán. Al acudir al amparo como un medio de resistir a la expropiación se manifestaron pugnas al interior del ejido; por un lado, un grupo que intentó resistir el proyecto industrializador del gobierno estatal o por lo menos conservar las tierras que tenía en posesión y un segundo grupo, que removió al comisariado ejidal y aceptó la expropiación e indemnización correspondiente. Aunque también se manifestaron otras formas de resistencia cotidiana como la inasistencia a una asamblea convocada por las autoridades agrarias, para demostrar su descontento con la expropiación.

Valga este conflicto intraejidal para reiterar la complejidad de la reforma agraria y de la sociedad rural si se pone mayor énfasis en la práctica cotidiana de los diversos actores sociales, en este caso en su accionar ante las instancias judiciales. Un tema cuyo estudio aún puede aportar bastantes elementos para entender el mundo rural, tanto en el pasado como en el presente.

Conclusiones

Conviene iniciar estas reflexiones finales recordando que el argumento central de este trabajo consiste en proponer el estudio del juicio de amparo desde tres aristas: como una de las principales figuras del sistema jurídico mexicano; como un mecanismo de resistencia utilizado por distintos actores sociales y; como un observatorio de las tensiones sociales en la sociedad rural del Estado de México, todo ello en el periodo de 1917 a 1971.

En ese sentido, esta investigación busca alejarse de la historia del derecho cuya interpretación pone mayor atención en la creación de las leyes y sus reformas, pero también de la historia agraria que privilegia la actuación del estado y su política agraria, para insertarse en la historiografía que busca analizar una figura jurídica, el amparo en materia agraria, para tratar de entender la serie de cambios que presentó; la forma en que fue utilizado por distintos sujetos y; el papel que jugaron las partes que en él intervinieron.

Para el logro de lo anterior, en esta tesis se propuso un cruce entre la historia del derecho, la historia agraria y la historia social para tratar de explicar, o por lo menos, asomarse a la práctica a ras de suelo de una figura jurídica, razón por la que vale la pena mencionar las características principales de las etapas del amparo en materia agraria que se esbozaron a lo largo de cuatro capítulos, para posteriormente destacar lo que se consideran las principales aportaciones historiográficas de esta investigación y finalmente retomar aquellos puntos y vetas que quedaron pendientes y que en un futuro podrían profundizarse.

Desde su nacimiento a mediados del siglo XIX, el amparo fue utilizado por distintos sectores de la sociedad para hacer frente a la serie de abusos cometidos por parte de las autoridades gubernamentales, ejemplos sobran en temas de reclutamiento forzoso al ejército, imposición de pena de muerte, cobro excesivo de impuestos e incluso por la pérdida de la propiedad o posesión de tierras. El juicio constitucional sobrevivió a la serie de acontecimientos políticos y de armas que mediaron entre la promulgación de la constitución de 1857 y la de 1917, teniendo distintas modificaciones que le fueron dando forma y que le permitieron consolidarse durante las primeras décadas del México posrevolucionario, tal y como quedó demostrado en el capítulo primero, en donde se esbozaron las principales rupturas y continuidades del juicio de amparo, desde su primera ley reglamentaria en 1861 hasta la ley de amparo de 1936.

Pronto el amparo se convirtió en una figura importante dentro del sistema jurídico mexicano, al grado de que, dentro de algunos planes revolucionarios elaborados para luchar contra el régimen de Díaz, por lo menos en el del Partido Liberal Mexicano (PLM) se criticó su tecnicismo y lo inaccesible que llegaba a ser para los grupos populares. Punto que al parecer no fue resuelto, pues aún en la década de los años sesenta del siglo XX, se comentaron argumentos similares para la creación del amparo agrario, tema que se abordó en el capítulo quinto.

Al tener como telón de fondo la puesta en marcha de la reforma agraria a partir de la promulgación de la constitución de 1917 o si se quiere, con la expedición de la ley agraria carrancista de 1915 y el marco jurídico que le siguió, pronto distintos pueblos se acogieron a esta legislación y solicitaron tierras en restitución o dotación, mientras los propietarios afectados con el reparto de tierras recurrieron a diversos medios tanto legales como extralegales para evitar la expropiación de sus fincas.

En esta primera fase de la reforma agraria, que en esta investigación se ubicó entre 1917 y 1931, que también corresponde a los primeros años de formación del derecho agrario mexicano y en donde el grupo gobernante vio al ejido como una figura transitoria que serviría para destruir el latifundio e incentivar la formación de la pequeña propiedad; el principal recurso de resistencia legal al que acudieron los afectados con las resoluciones provisionales del gobernador o las resoluciones definitivas del presidente de la república, fue el demandar el amparo de la justicia federal a los jueces de distrito y en una segunda instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus demandas, los dueños de haciendas y ranchos alegaron que los pueblos no contaban con alguno de los requisitos establecidos por la normatividad, que sus propiedades habían sido vendidas o fraccionadas, que se trataba de unidades agrícolas en explotación por lo que no podían ser expropiadas o que eran pequeñas propiedades protegidas por el propio artículo 27 constitucional. Si bien, en este primer periodo del amparo en materia agraria, la mayor parte de los juicios fueron promovidos por los propietarios, en el caso del Estado de México existieron amparos en los que los pueblos afectados por la decisión de alguna autoridad agraria también hicieron uso de esta figura, como fue el caso de Tlatilco, Zomeyucan y Huitzilacasco del municipio de Naucalpan y de Teoyahualco, municipio de Tultepec. Estos ejemplos demuestran que los solicitantes de tierras hicieron

suyo y resignificaron el marco legal de la reforma agraria para adquirir tierras o defender las que ya poseían, lo que los presenta con un papel activo ante las instancias judiciales.

El uso y abuso de este juicio por parte de los propietarios, propició que diversos personajes (organizaciones campesinas, legisladores, gobernadores) promovieran y apoyaran una reforma a la legislación agraria y en 1931, en un contexto en el que desde el gobierno federal se hablaba del fin del reparto de tierras, se modificó la ley agraria de enero de 1915, para prohibir la interposición de amparos en contra de resoluciones presidenciales de dotación y restitución de tierras y aguas. Los efectos de este cambio legal no se hicieron esperar y los juicios de nulidad y de amparo que se encontraban en trámite fueron desechados y sobreseídos por la instancia en donde se desahogaban; no obstante, los amparos se continuaron interponiendo por otras razones propias del desarrollo de la reforma agraria, como una mala ejecución de la resolución presidencial o el cambio de localización de los ejidos, tal y como ocurrió en el ejido de San Bartolo Tenayuca, municipio de Tlalnepantla, visto en el capítulo tercero.

La prohibición del amparo en materia agraria estuvo vigente durante alrededor de 16 años, pues con la llegada del presidente Miguel Alemán, a fines de 1946, se reformó el artículo 27 constitucional y se restituyó el juicio constitucional para aquellas tierras que fueran consideradas pequeñas propiedades en explotación y que contaran con un certificado de inafectabilidad. Hay que recordar que la pequeña propiedad se encontraba protegida por el artículo 27 constitucional desde su promulgación en 1917 y cobró mayor relevancia en la segunda parte del sexenio cardenista. Este episodio no estuvo exento de controversias pues es claro que hasta antes de la iniciativa del presidente Miguel Alemán, se manifestaban dos posturas opuestas sobre el tema. Una que pugnaba por la prohibición total del amparo y otra que abogaba por su restitución, hasta que la mayor parte de los inmiscuidos en la cuestión agraria, incluyendo a la Confederación Nacional Campesina (CNC), se plegaron a la propuesta del ejecutivo federal. Un ejemplo del uso de este tipo de amparos se presentó en el capítulo cuatro, en donde los dueños de una pequeña propiedad ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso, dedicada a la explotación de zacatón y que contaba con un certificado de inafectabilidad, se opusieron a la expropiación de sus tierras, obteniendo la protección de la justicia federal, razón por la que el grupo peticionario conformado por un

grupo de peones acasillados, se vio imposibilitado para disponer de la totalidad de las tierras dotadas.

La última etapa del amparo propuesta en esta investigación va de 1959 a 1971, y corresponde a la creación del amparo agrario o como lo denominara el jurista Ignacio Burgoa, amparo ejidal o comunal, cuyo propósito principal fue la protección de las tierras, aguas, bosques y montes de ejidos y comunidades en general y, de ejidatarios y comuneros en particular. A diferencia de las demás etapas, este juicio tuvo características propias que buscaban solventar los tecnicismos jurídicos y con ello hacerlo más accesible a los grupos campesinos. Una de las primeras experiencias de este tipo de juicios se presentó en el capítulo cinco, en donde el pueblo de Santa Ana Tlapaltitlán acudió a la justicia federal en contra de un decreto expropiatorio que mutilaría parte de su ejido, esta medida de los ejidatarios buscaba hacer frente al proyecto industrializador del gobierno estatal, si bien, el resultado les fue desfavorable, el estudio de este caso demuestra que algunos ejidatarios se desenvolvían sin problemas en los espacios de justicia que les otorgaba el marco común de la legislación agraria y de amparo.

Siguiendo esas etapas y las más de 9 000 sentencias de amparos en revisión ubicadas en el archivo de la Suprema Corte (hasta febrero de 2020), se optó por elegir una de las entidades con el mayor número de juicios promovidos. Fue así como se eligió el Estado de México por la diversidad demográfica, geográfica, económica y social que presenta y, aun así, los más de 700 expedientes ubicados y la pandemia por la que atravesó el mundo, forzaron a delimitar el análisis a una serie de juicios derivados y relacionados con siete ejidos pertenecientes a cinco municipios de la entidad (Naucalpan, Tlalnepantla, Tultepec, San Felipe del Progreso y Toluca). Dicha elección fue motivada por la serie de variables analíticas e historiográficas que aportan estos estudios de caso, pero también a la ubicación geográfica que tienen algunos de estos sitios como Naucalpan y Tlalnepantla al ser demarcaciones limítrofes a la capital del país o a su importancia política como Toluca, por ser la capital del estado.

A manera de nota metodológica, cabe señalar que el estudio de estos amparos no busca generalizar la actuación de los peticionarios de tierras, ejidatarios o propietarios del municipio respectivo y mucho menos de la totalidad de la entidad, pues cada uno de los juicios responde a condiciones geográficas, sociales, políticas y económicas concretas; sin

embargo, su estudio permitió profundizar en algunos aspectos de la sociedad rural asentada en estas regiones y en explicar desde la propia actuación de las partes involucradas, la serie de complicaciones que enfrentó la puesta en práctica de la reforma agraria y su vínculo con el juicio de garantías.

En ese sentido, se buscó poner la lupa en procedimientos poco trabajados por la historiografía de la reforma agraria. Tal fue el caso de los amparos promovidos por solicitantes de tierras; los efectos que ocasionó la prohibición del amparo en 1931; el cambio en la localización de los ejidos; la declaratoria de inafectabilidad de una pequeña propiedad y; la expropiación de bienes ejidales; tópicos que también fueron parte importante de la problemática agraria que se vivió en el país en los 75 años del reparto agrario.

A lo largo de cuatro de los cinco capítulos que integran esta investigación se presentó un acercamiento al amparo como un recurso de resistencia ante la puesta en práctica de la reforma agraria aunque fuera de forma fragmentaria, pues fue posible tener indicios de algunas de las causas por las que los juicios eran tan largos, como la enfermedad del juez que debía resolver o la falta de algún documento que presentaría alguna de las partes del juicio, sumado a la carga de trabajo de jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiendo esta línea y para deslindar de la historia maniquea que presenta el reparto agrario como una pugna entre buenos y malos, dependiendo del lugar en que se coloque la persona que lo cuenta, se reconstruyeron casos en los que unos y otros acudieron a la justicia federal en defensa de sus intereses, de modo que en el caso de los propietarios afectados se asoma la hipótesis general planteada por la historiografía, en donde se ubica al Poder Judicial de la Federación como un baluarte de los hacendados o un freno a la reforma agraria, empero con el análisis de las sentencias de amparo encontradas en el archivo de la Suprema Corte se matizó esta idea, puesto que, si bien es cierto los afectados con resoluciones provisionales o definitivas promovieron el amparo, no siempre se les otorgó y en muchas ocasiones lo único que consiguieron fue retardar la entrega de las tierras para seguir aprovechando la explotación de sus productos, cosa no menor en ese contexto posrevolucionario.

En cuanto a los partícipes de esta trama, se trató de dar mayor realce al actuar de los sujetos, individuales y colectivos, más que a las instituciones con el propósito de intentar superar la historia del derecho centrada en lo meramente formal e institucional. De esa forma,

a lo largo de la narrativa no se habla de campesinos en abstracto, sino de una variedad de autores y actores de su propia historia como solicitantes de tierras; ejidatarios; peones acasillados; grandes y pequeños propietarios de haciendas y ranchos; autoridades agrarias; agentes del Ministerio Público Federal y; miembros del Poder Judicial de la Federación (jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte) como los principales protagonistas. Lo que vemos en estas páginas es a una serie de personajes cuyos intereses se enfrentaron en los tribunales y juzgados federales en defensa de sus derechos e intereses.

Para explicar estos litigios se recurrió a dos conceptos principales: hegemonía y resistencia. En el caso del primero, los distintos actores de la lucha por la tierra fueron moldeando y actuando dentro del marco común material que les brindó la legislación agraria y de amparo, mostrando su destreza ante las autoridades agrarias y los juzgados federales, desarrollando un auténtico arte del litigio. Por lo que toca a la noción de resistencia, quedó evidenciado que los quejosos al promover el amparo buscaron mitigar los reclamos de tierras realizados por los solicitantes y por el propio estado y aprovecharon para presentar sus propias demandas.

Pero la resistencia no solo se manifestó en el campo de la legalidad. Como se mencionó en algunos pasajes, apenas se asomaron algunas acciones como la ocupación de tierras que aún no les habían sido entregadas formalmente a los solicitantes; la negociación entre peticionarios y propietarios por fuera del control de las autoridades agrarias y; la inasistencia a una asamblea convocada por un representante del Departamento Agrario, como una forma de expresar su descontento con la expropiación de parte de su ejido. En su conjunto, estos ejemplos pueden verse como una manifestación de otras formas de resistencia, en este caso de acciones cotidianas a las que acudieron los diversos grupos campesinos.

Con este andamiaje conceptual, una de las principales aportaciones de esta investigación a la discusión historiográfica es que los diversos actores tanto agraristas como antiagraristas se desenvolvieron con destreza por el sinuoso camino marcado por la legislación, a pesar de que no siempre obtuvieron el resultado buscado. Dicho de otro modo, actuaron dentro del marco hegemónico que les proporcionó la legislación, haciendo suyo y resignificando tanto el discurso de la reforma agraria como la serie de procedimientos y figuras jurídicas.

Otro de los hallazgos y que se deriva de las particularidades que se observaron en el análisis de los estudios de caso, es que la actividad productiva de las haciendas fue un factor fundamental para entender la dinámica rural de las regiones, por ejemplo, aparecieron aquellas dedicadas a la explotación de arena y tepetate (San José de los Leones en Naucalpan y San Javier, Tlalnepantla); de madera (San José de los Leones, Naucalpan) y; Zacatón (Santa Rita, San Felipe del Progreso); así como un par de propiedades más destinadas a la producción de leche (Cartagena, Tultepec y el rancho San Gabriel, Toluca); todo ello en su conjunto permite ver la variedad de actividades económicas en la entidad.

Por lo que toca a los dueños de haciendas, ranchos y pequeñas propiedades, a lo largo de tres capítulos fue posible observar que acudieron al amparo como un recurso de resistencia en defensa de sus fincas. Como quedó evidenciado, en un primer momento hicieron uso de la legislación agraria intentando desacreditar la categoría política de los pueblos solicitantes, descalificar los censos agrarios y demostrar la inafectabilidad de sus fincas, ya fuere por tratarse de pequeñas propiedades, por dedicarse a determinada actividad productiva o porque habían sido fraccionadas, de forma real o simulada. Estos mismos argumentos o similares los trataron de hacer valer en el juicio constitucional, como en el promovido por los propietarios del rancho Santa Rita, del municipio de San Felipe del Progreso, que se presentó en el capítulo cuatro.

Pero no solo acudieron al amparo como mecanismo de resistencia. A través de sus demandas y alegatos (tanto ante las autoridades agrarias como en los juzgados federales) se asoman otros de los recursos de resistencia que utilizaron. Fue el caso de intentar que el gobierno federal decretara parte de sus tierras como zona forestal protegida, cuando al parecer el mismo propietario la había deforestado; los fraccionamientos reales o simulados, para hacer pasar sus fincas como pequeñas propiedades pues como se dijo contaban con la protección constitucional; el acudir a la instancia diplomática cuando se trató de ciudadanos extranjeros y; solicitar el apoyo de las fuerzas armadas para evitar lo que consideraron la invasión de sus terrenos por parte de los pueblos solicitantes.

La resistencia de estos propietarios representa parte de las huellas de la historia del antiagrarismo en el Estado de México, pero que bien se puede pensar como parte de un movimiento nacional que se desarrolló a lo largo de los 75 años de reparto agrario. En todo

caso, estos ejemplos son algunas piezas más del rompecabezas, que aún queda pendiente por armar en su totalidad.

En el caso de los solicitantes de tierras y ejidatarios, quedó demostrado que no fueron sujetos pasivos en el entramado mundo rural del Estado de México. En el primero de los casos no sólo actuaron acogiéndose a los postulados del agrarismo institucional, como se vio con los tres pueblos de Naucalpan (capítulo dos) o el de Teoyahualco del municipio de Tultepec (capítulo tres); pues una vez que no les favoreció la resolución presidencial acudieron a la justicia federal, lo que demuestra que habían hecho suyo y resignificado el marco establecido por el orden jurídico mexicano, consiguiendo ser beneficiados con sus ejidos. En contraste, una vez que adquirieron sus tierras y contaban con la calidad de ejidatarios también recurrieron a la defensa de su ejido, esta vez por diversas causas como conflictos con pueblos aledaños o por la urbanización e industrialización de diversas regiones de la entidad, particularmente la capital del estado o la zona limítrofe al entonces Distrito Federal. En esta ocasión acudieron al amparo para impugnar un decreto expropiatorio, pero no lograron su objetivo (capítulo cinco). A pesar de esa derrota y siguiendo a Armando Bartra, "aunque sólo fuera para demostrar que los campesinos han perdido la batalla, sería necesario emprender el rescate historiográfico de sus luchas de agonía".[1]

Dentro de los grupos solicitantes de tierras, merecen especial atención los peones acasillados, por tratarse de un sector que promovió su solicitud de tierras en un momento en que la legislación agraria les imponía restricciones para formar ejidos por sí solos; porque dentro de sus alegatos utilizaron argumentos de economía moral para hacerle ver a las autoridades agrarias que contaban con un derecho mínimo de subsistencia y; porque la propia dinámica agraria de la región que habitaban, propició que tuvieran conflictos con distintos grupos de peones que habitaban en otras de las haciendas aledañas, lo que condicionó su acceso a la totalidad de las tierras que les dotaron.

Retomando las resistencias de unos y otros, una intención historiográfica más de esta investigación es reabrir el debate con respecto al uso del derecho como un medio de resistencia, en este caso, del juicio de amparo, por parte de distintos actores sociales. Siguiendo esta idea y si bien esta tesis se centró en la reconstrucción de unos pocos amparos, se buscó responder a una pregunta de mayor alcance: ¿Cómo operaron la resistencia y la

[1] BARTRA, *Los herederos*, pp. 10-11.

negociación dentro del marco jurídico que moldeó la reforma agraria? Todo esto visto, como ya se mencionó, a través de la acción desplegada por los diversos sujetos agrarios ante el Poder Judicial de la Federación.

Ya se ha hecho referencia al papel de solicitantes de tierras, posteriormente ejidatarios y a los grandes y pequeños propietarios, ahora toca retomar el rol del Poder Judicial de la Federación, instancia encargada de resolver los juicios. Del análisis de los amparos presentados en cada uno de los capítulos, se deja ver que en algún momento el poder judicial federal mostró una relativa autonomía con respecto a los demás poderes, específicamente del ejecutivo, como máxima autoridad agraria del país; pues como se hizo evidente a partir de los cuatro cuadros anexos de sentencias de amparos en revisión, los tribunales federales no siempre otorgaron el amparo a los quejosos y en otros casos, concedieron la protección de la justicia de la unión a pesar de ir en contra de la resolución presidencial. Estos hechos matizan a una parte importante de la historiografía de la reforma agraria que vio a los juzgados de distrito y a la Suprema Corte como un freno a la reforma agraria.

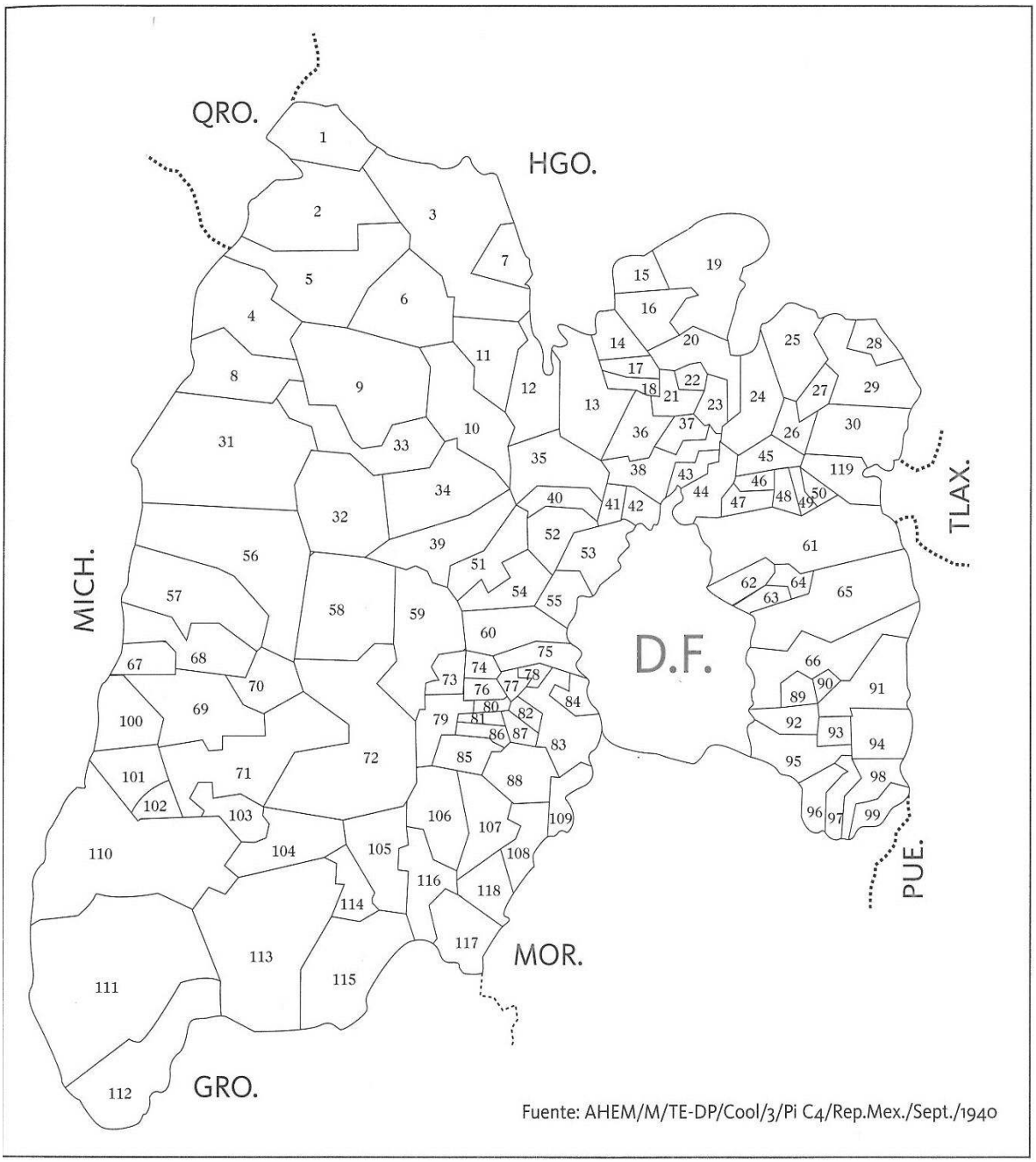
Este matiz con respecto al papel del Poder Judicial de la Federación en el reparto de tierras, si bien es aplicable para la entidad y periodo estudiado, no excluye la posibilidad de que, en otras latitudes o etapas, hubiesen existido sentencias que favorecieron a los propietarios de haciendas y ranchos. En todo caso, representaría una pieza más del rompecabezas de la justicia agraria.

A partir de la reconstrucción de los amparos estudiados también aparecieron destellos de algunos otros temas que en un futuro valdría la pena ampliar. Tal es el caso de los intentos de negociación llevados a cabo por los propietarios afectados para entregar tierras a cambio del desistimiento del amparo; procedimientos agrarios aun poco trabajados por la historiografía como el cambio en la localización de los ejidos o los propios juicios de nulidad de resoluciones presidenciales; el papel de las mujeres ante las instancias judiciales, siendo propietarias de haciendas y ranchos; la actuación de los peones acasillados ante las autoridades agrarias como solicitantes de tierras, en un periodo en que la ley limitaba sus derechos en la materia y; la serie de contradicciones y diferencias entre las diversas autoridades agrarias, como se evidenció con las quejas presentadas por el delegado estatal de la Comisión Nacional Agraria contra los miembros de la Comisión Local por el retraso en la resolución de los expedientes y su posible complicidad con algunos hacendados del estado o

las discrepancias entre el jefe del Departamento Agrario, Silvano Barba y el jurista Lucio Mendieta a raíz de las discusiones del congreso de derecho agrario de 1945.

Finalmente, queda por señalar que esta investigación puede dejar más dudas que certezas, pues el panorama aquí presentado se ciñe a una serie de estudios de caso y no se pretende explicar el todo a través de algunas de sus partes, sin embargo, bien puede ser un punto de partida para (re)discutir y profundizar en el tan olvidado tema de los conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, aun presentes en varias regiones del México del siglo XXI.

Mapa 9. Estado de México, municipios en 1940



Fuente: MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, p. 201.

Municipios del Estado de México, 1940					
1	Polotitlán	**48**	Chiconcuac	**95**	Juchitepec
2	Aculco	**49**	Chiautla	**96**	Tepetlixpa
3	Jilotepec	**50**	Papalotla	**97**	Ozumba
4	Temascalcingo	**51**	Otzolotepec	**98**	Atlautla
5	Acambay	**52**	Jilotzingo	**99**	Ecatzingo
6	Timilpan	**53**	Naucalpan	**100**	Santo Tomás
7	Soyaniquilpan	**54**	Xonacatlán	**101**	Otzoloapan
8	El Oro	**55**	Huixquilucan	**102**	Zacazonapan
9	Atlacomulco	**56**	Villa Victoria	**103**	San Simón de Guerrero
10	Morelos	**57**	Villa de Allende	**104**	Texcaltitlán
11	Chapa de Mota	**58**	Almoloya de Juárez	**105**	Coatepec Harinas
12	Villa del Carbón	**59**	Toluca	**106**	Villa Guerrero
13	Tepotzotlán	**60**	Lerma	**107**	Tenancingo
14	Huehuetoca	**61**	Texcoco	**108**	Malinalco
15	Apaxco	**62**	Chimalhuacán	**109**	Ocuilan
16	Tequixquiac	**63**	La Paz	**110**	Tejupilco
17	Coyotepec	**64**	Chicoloapan	**111**	Amatepec
18	Teoloyucan	**65**	Ixtapaluca	**112**	Tlataya
19	Hueypoxtla	**66**	Chalco	**113**	Sultepec
20	Zumpango	**67**	Ixtapan de Oro	**114**	Almoloya de Alquisiras
21	Melchor Ocampo	**68**	Donato de Guerra	**115**	Zacualpan
22	Jaltenco	**69**	Valle de Bravo	**116**	Ixtapan de la Sal
23	Nextlalpan	**70**	Amanalco	**117**	Tonatico
24	Tecámac	**71**	Temascaltepec	**118**	Zumpahuacán
25	Temascalapa	**72**	Zinacantepec	**119**	Tepetlaoxtoc
26	Teotihuacan	**73**	Metepec		
27	San Martín de las Pirámides	**74**	San Mateo Atenco		
28	Nopaltepec	**75**	Ocoyoacac		
29	Axapusco	**76**	Mexicalcingo		
30	Otumba	**77**	Atizapán		
31	San Felipe del Progreso	**78**	Capulhuac		
32	Ixtlahuaca	**79**	Calimaya		
33	Jocotitlán	**80**	Chapultepec		
34	Jiquipilco	**81**	San Antonio la Isla		
35	Nicolás Romero	**82**	Almoloya del Río		
36	Cuautitlán	**83**	Tianguistenco		
37	Tultepec	**84**	Jalatlaco		
38	Tultitlán	**85**	Tenango del Valle		
39	Temoaya	**86**	Rayón		
40	Iturbide	**87**	Texcalyacac		
41	Zaragoza	**88**	Joquicingo		
42	Tlalnepantla	**89**	Temamatla		
43	Coacalco	**90**	Cocotitlán		
44	Ecatepec Morelos	**91**	Tlalmanalco		
45	Acolman	**92**	Tenango del Aire		
46	Tezoyuca	**93**	Ayapango		
47	Atenco	**94**	Amecameca		

Fuente: MONTES DE OCA, *Historia de la lucha*, pp. 201-202.

Anexo 1. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México 1925-1927[1]											
Núm.	Exp. SCJN	Año	Quejoso	Autoridad responsable	Acto reclamado	Tercero perjudicado	Propiedad afectada	Municipio	Resolución JD	Interpuso recurso	Resolución SCJN
1	64	1925	Ignacio de la Torre	Gob., Del. CNA, CLA	Dotación gobernador	San Bartolo Otzolotepec	Hacienda Santa Catarina	Lerma	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
2	79	1925	Lorenzo Ríos Cano	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	Santiago Oxthoc	Potrero Los Lirios	Aculco	Concedió el amparo	Del. CNA	Se negó el amparo
3	143	1925	Alberto de Abiega	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Villa Nicolás Romero	Haciendas Lanzarote y La Encarnación	Tepotzotlán	Concedió el amparo	M.P	Se sobresee por improcedente
4	146	1925	Celestino Bautista y coagraviados	Gob., Del. CNA, CLA	Dotación gobernador	San Felipe Zacatepec	Hacienda San José Salinas	Axapusco	Sobreseyó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
5	156	1925	Amalia Becerril	Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Francisco Xonacatlán	Hacienda de Mayorazgo	Otzolotepec	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
6	274	1925	María del Valle viuda de Mier y Terán	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Los Reyes	Hacienda de Pastejé, Cañicuá y Tiacaque	Jocotitlán	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
7	421	1925	Guillermo de Landa y Escandón	Gob., CPE	Dotación gobernador	San Juan Zitlaltepec	Hacienda de Xalpa	Zumpango	Concedió el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
8	627	1925	Antonio Díaz Sánchez	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Cristóbal Texcaluca	Hacienda San José de los Leones	Huixquilucan	Concedió el amparo	Pdte., CNA y Del. CNA	Se sobresee por improcedente
9	649	1925	José de la Macorra JR.	Pdte., CNA, Gob., CPE	Dotación presidencial	San Diego Huehuecalco	Hacienda San Juan de Guadalupe	Ozumba	Sobreseyó en cuanto al gob.; lo concedió contra las demás responsables	Pdte., CNA, CPE	Se sobresee por improcedente

[1] Elaboración propia con base en los expedientes encontrados en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ) del AHSCJN.

10	694[2]	1925	María Concepción Capetillo de Valero	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Villa Nicolás Romero	Hacienda La Encarnación	Villa Nicolás Romero			Se concedió la suspensión
11	698	1925	Brigido y Vicente Cerón	Pdte., CNA, CPA	Dotación presidencial	Pueblo de Tezoyuca	Rancho El Santo Llano	Texcoco	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se negó el amparo
12	709	1925	Eva M. Scales	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa María Nativitas	Molino de Flores	Texcoco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
13	752	1925	María Beaurang Vda. De Matty	Gob., CPE, Pdte. Mpal.	Dotación gobernador	Santiago Tolmán	Hacienda Cerro Gordo	San Martín de las pirámides	Sobreseyó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
14	774	1925	Manuel Anaya	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Tezoyuca	Rancho Cuanalán	Tezoyuca	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del CNA, M.P	Se negó el amparo
15	940	1925	Miguel Icaza Contreras	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo Otzolotepec	Hacienda de Buenavista	Temoaya	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
16	1042	1925	Enrique J. Ortiz	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Santiago Oxthoc	Hacienda de Nado	Aculco	Concedió el amparo	Del. CNA y M.P	Se sobresee por improcedente
17	1045	1925	Alberto de Abiega, Tirso Cascajares y Leonardo Montiel	Gob., CLA, CPA	Dotación gobernador	San Juan Teotihuacán y anexos	Hacienda Santa Catarina, Cadena, Concepción Tlajinga, Ostoyahualco	Acolman	Concedió el amparo a Abiega y Cascajares; sobreseyó a Montiel	CPA	Se sobresee por improcedente
18	1047	1925	Tomás Roldán	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	San Antonio Soyatzingo	Hacienda de Retana	Amecameca	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
19	1077	1925	Ildefonso Fernández	Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Felipe Zacatepec	Hacienda de Salinas (Santa Clara)	Axapusco	Concedió el amparo	M.P	Se sobresee por improcedente
20	1078	1925	Enrique J. Ortiz	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	Santiago Oxthoc	Hacienda El Jazmín	Aculco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee

[2] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión.

21	1455	1925	Juana Guerrero Vda de Aliphat y coagraviado	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Santa Ana Ixtlahuazingo	Rancho Monte del Pozo	Tenancingo	Sobreseyó en una parte y concedió en otra	M.P, CPE	Se sobresee por improcedente
22	1687	1925	Ramón Rodríguez	Gob., CPE	Dotación gobernador	Cacalomacan	Hacienda la Garceza y la Macaria	Toluca	Concedió el amparo	Terceros perjudicados, CPE	Se sobresee por improcedente
23	1689	1925	Carlos B. Zetina y coagraviados	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Mateo Oztacatipan	Hacienda Santín	Toluca	Concedió el amparo	Quejoso	Se sobresee por desistimiento del quejoso
24	1855	1925	Salvador García Roldám	Pdte., CNA, CPE, CPA	Dotación presidencial	San Bartolo Tenayucan	Rancho El Tenayo	Tlalnepantla	Concedió el amparo	Pdte., CNA, M.P	Se sobresee por improcedente
25	1856	1925	Ángel Arratia	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	San Juan Teotihuacán y anexos	Hacienda Santa Catarina (Ajapuxco)	Acolman	Concedió contra actos del Pdte., CNA, Del. CNA, CPE; sobreseyó Gob., CLA	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Se otorgó el amparo
26	1965	1925	Tomás Galarza	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Martín Xico	Hacienda San Juan de Dios	Chalco	Concedió el amparo	CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
27	2020	1925	Juana Torres Vda. De Osio	Pdte., CNA, Gob., CLA, CPE, CPA	Dotación presidencial	San Juan Zitlaltepec	Hacienda Bocanegra	Zumpango	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
28	2263	1925	Rodolfo y Manuel Sotomayor, Francisco Gil	Gob., CNA, CPE	Dotación gobernador	Xoloc	Hacienda de Guadalupe	Tecámac	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
29	2306	1925	Vicente Cordero Montes de Oca	Gob., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Mateo Atenco	Hacienda de Buenavista	Ixtapaluca	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA, CPE, M.P	se resolvió el amparo y este trámite se quedó sin materia
30	2372	1925	Luis Fernández Campos	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo Morelos	Hacienda de Xinte (Xhuite)	Jilotzingo	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente

31	2391	1925	Antonio Díaz Sánchez	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Antonio Zomeyucan	Hacienda San José de los Leones	Naucalpan	Negó el amparo en cuanto al Gob., lo otorgó en cuanto Del. CNA, CLA, CPE	Quejoso y Del. CNA	Se sobresee por improcedente
32	2396	1925	Antonio Díaz Sánchez	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	San Esteban Huiztilacasco	Hacienda San José de los Leones	Naucalpan	Negó el amparo en cuanto al Gob., lo otorgó en cuanto Del. CNA, CLA, CPE	Quejoso, Del. CNA y M.P	Se sobresee por improcedente
33	2611[3]	1925	Leopoldo de Rosenzweig	Gob., CPE	Dotación gobernador	Tlachaloya	Hacienda El Cerrillo	Toluca	Concedió el amparo		se resolvió el amparo y este trámite se quedó sin materia
34	2662	1925	Ricardo García	CPE	Prohibición de explotación de magueyes	Xometla	Rancho Nextlalpan	Acolman	Concedió el amparo	CPA	Se sobresee por improcedente
35	2668	1925	Juan Henkel	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Mateo Oztacatipan	San José y su anexo Guadalupe	Toluca	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA, CPE, M.P	Se sobresee por improcedente
36	2861	1925	Manuel Anaya	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Cuanalán	Hacienda La Grande (Rancho Cuanalán)	Atenco	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
37	2990	1925	José Contreras	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Tlachaloya	La Trinidad	Toluca	Concedió el amparo	Del. CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
38	2991	1925	José Joaquín Cordero	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Francisco Chalchihuapán, San Pedro del	Hacienda Siffari, Rancho El Nogal	Atlacomulco	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente

[3] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión.

						Rosal, San Antonio Enchisi					
39	3049	1925	Pedro Dourritzague	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa Cruz Acatlán	Hacienda El Cristo	Naucalpan	Negó el amparo en cuanto al Pdte.; las demás autoridades	Pdte., CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
40	3052	1925	Jesús Valdés Jiménez y vecinos de Cacalomacán	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	Santa Cruz Cuautenco	Haciendas de Cano	Toluca	Negó el amparo en cuanto al gobernador; lo concedió por las demás autoridades	Del. CNA	Se negó el amparo
41	3080	1925	José de la Macorra	Pdte., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	San Pedro Nexapa	Hacienda San Juan de Guadalupe	Amecameca	Concedió el amparo	Quejoso, Pdte., Del. CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
42	3297	1925	Antonio Díaz Sánchez	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Magdalena Chichicaspa	Hacienda San José de los Leones	Huixquilucan	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA, M.P	Se sobresee por improcedente
43	3390	1925	María Vélez de Mora	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE, Juez de Primera Instancia de Tlalnepantla, Encargado del RPP	Dotación presidencial	San Juan Iztacala	Hacienda San Pablo de en medio (Rancho San Antonio)	Tlalnepantla	Concedió el amparo contra Del. CNA, CPE JPI; lo negó en cuanto al Pdte., CNA	Del. CNA, CNA y la quejosa	Se sobresee por improcedente
44	3448	1925	Ramón Rodríguez	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Cacalomacan	La Garcesa, La Macaria, Panzacola	Toluca	Concedió el amparo	Pdte., por medio del Srio. de Agricultura	Se sobresee por improcedente
45	3653	1925	Miguel Icaza Contreras	Gob., CLA	Dotación gobernador	San Lorenzo Oyamel	Hacienda Buenavista	Temoaya	Concedió el amparo	Srio. Gral. De gobierno, CNA	Se sobresee por improcedente
46	3705	1925	Luis R. Ruíz y Eduardo de Najera	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Naucalpan	Hacienda de Echegaray	Naucalpan	Concedió el amparo	Quejoso, Del. CNA,	Se sobresee por improcedente

										M.P, CNA, CPE	
47	3727	1925	José Luis Cuevas, Alfonso Cuevas, Eduardo de Najera,	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Santa Cruz Acatlán	Hacienda de Echegaray	Naucalpan	Luis Cuevas se desistió, a los demás quejosos se les concedió, sobreseyendo en cuanto al Gob., y CLA	M.P, Del. CNA, CNA	Se sobresee por improcedente
48	3802	1925	Adolfo Granados	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Pablo Atlazalpan	Hacienda San José Atzalco y Asunción del Monte	Chalco	Concedió el amparo	Pdte., Del. CNA, M.P	Se sobreseyó por actos del CPE y se negó en cuanto al resto de autoridades
49	3873	1925	Guadalupe Espinosa vda. de Avilés	Gob., CPE	Dotación gobernador	Teoloyucan	Hacienda San José de Teja	Tepotzotlán	Concedió el amparo	M.P, CPE	Se sobreseyó por desistimiento del quejoso
50	3881	1925	Guadalupe Cordero de Suárez	Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo Morelos	Rancho San Antonio Trojes	Ixtlahuaca	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
51	3884	1925	Catalina Polo Vda. de Ruíz	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Lucas	Rancho La Cofradía	Aculco	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA	Se sobresee por improcedente
52	3893	1925	Antonio Pliego Pérez	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Mateo	Hacienda de Pastejé	Ixtlahuaca	Concedió el amparo	CLA	Se sobresee por improcedente
53	3894	1925	Miguel Saldivar y Flores	Gob., CLA, CPE, CPA	Dotación gobernador	Coatepec	Hacienda de Coxtitlán	Ixtapaluca	Concedió el amparo	M.P	Se sobresee por improcedente
54	3896	1925	Morelos Rivero	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Teoloyucán	Hacienda de Tetla	Teoloyucán	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
55	3897	1925	Guillermo de Landa y Escandón	Pdte., CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	San Juan Zitlaltepec	Hacienda de Jalpa	Huehuetoca	Sobreseyó	Quejoso	Se sobresee por improcedente

56	3933	1925	Dolores Icaza	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa Cruz Acatlán	Hacienda El Cristo	Naucalpan	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA, M.P	Se sobresee por improcedente
57	3990	1925	Ramón Rodríguez	Pdte., CPE	Dotación presidencial	Ocoyotepec	Haciendas del Salitre y Las Tablas	Almoloya de Juárez	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
58	4018	1925	Loreto Espinosa (Vicente Ortega)	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Xoloc	San Juan de la Labor	Zumpango	sobreseyó en cuanto a la CNA; lo concedió en cuanto a las demás autoridades	Gob., CLA, CPE	Se sobresee por improcedente
59	4020	1925	Eva M. Scales	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Nicolás Tlaminca	Molino de Flores	Texcoco	Concedió el amparo	M.P, Del. CNA, CLA, Gob.	Se sobresee por improcedente
60	4026	1925	Rafael de la Mora y Trueba	Pdte., Del. CNA, Juez de primera instancia de Tlalnepantla, CPE	Dotación presidencial	San Juan Ixtacala	Hacienda de Enmedio	Tlalnepantla	Concedió el amparo	M.P, Pdte., Del. CNA, quejoso	Se sobresee por improcedente
61	4046	1925	Miguel Zaldivar y Flores	Gob., CNA, CLA, CPE, CPA	Dotación gobernador	Santa María Chimalhuacán	Hacienda Coxtitlán	Chicoloapan	sobreseyó en cuanto a la CNA; lo concedió en cuanto a las demás autoridades	M.P., CLA, Gob., CPE	Se sobresee por improcedente
62	4052[4]	1925	Norberto Salgado	Gob., CLA, CPE	Restitución	San Pablo Huantepec	Hacienda La Cañada y Caltengo	Jilotepec			Se otorgó la suspensión
63	4102	1925	Amado Mociño	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Ocoyotepec	El Salitrillo	Almoloya de Juárez	Concedió el amparo	Del. CNA, M.P., CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
64	4103	1925	Juana de la Garza	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Ocoyotepec	Haciendas de Enyege, El Salitre y Salitrillo	Almoloya de Juárez	Concedió el amparo	Pdte., CNA, CPE, M.P	Se sobresee por improcedente

[4] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión.

65	4111	1925	Antonio Pliego Pérez	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Santa Cruz Cuautenco	Hacienda de Cano y su anexa San Antonio de Abajo	Toluca	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Se sobresee por improcedente
66	4112	1925	Loreto Espinosa (Vicente Ortega)	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Xoloc	San Juan de la Labor	Zumpango	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
67	4133	1925	Tomás y José Galarza	Pdte., CNA, CPA	Dotación presidencial	San Pablo Atlazalpan	Hacienda San Juan de Dios	Chalco	Concedió el amparo	Pdte., CNA, CPA	Se concedió amparo contra actos del Pdte. Y CNA; se sobreseyó en cuanto al CPA
68	4158	1925	Pascual Becerril, Filomena Mociño	CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa Ana Jilotzingo	Rancho del Osco	San Bartolo Otzolotepec	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
69	4187	1925	Josefa Albarrán Vda de Silva	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Tecatzic (Tecaxic)	Rancho Serratón	Toluca	Concedió el amparo	M.P., Gob., Del. CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
70	4188[5]	1925	Antonio Pliego Pérez	Gob., Del. CNA, CPE	Orden verbal a vecinos de Cacalomacán de cortar trigo propiedad del quejoso	Cacalomacan	Hacienda de Cano	Toluca			Se negó la suspensión
71	4190	1925	Norberto Meléndez (telégrafo)	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Luis de las Peras	Hacienda de la Cañada	Chapa de mota	Concedió el amparo	CLA, M.P, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
72	4191	1925	Alfredo y Víctor Manuel Medina	Gob., CLA, CPA	Dotación gobernador	San Antonio Acahualco	Hacienda de San Pedro	Zinacantepec	Negó el amparo	Quejoso	se desechó por no promoverse en forma
73	4199	1925	Joaquín Albarrán	Gob., CNA, Del. CNA, CLA, CPE, CPA	Dotación gobernador	Santa María del Llano	Rancho amarillas	Ixtlahuaca	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente

[5] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión.

74	4219	1925	Luis Coppe	Pdte., CLA, CPE, CPA	Dotación presidencial	San Bartolo Tenayucan	Hacienda de San Javier	Tlalnepantla	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
75	4225	1925	María Vélez de la Mora y coagraviados	Gob., Del. CNA, CLA, CPE, CPA	Dotación gobernador	San Pablo Xalpa	Hacienda de Enmedio	Tlalnepantla	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
76	4227	1925	Alfredo y Víctor Manuel Medina	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Cristóbal Tecolit	Hacienda de San Pedro	Zinacantepec	Concedió el amparo	Del. CNA, Gob.	Se sobresee por improcedente
77	4412	1925	Guillermo de Landa y Escandón	Pdte., CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	Huehuetoca	Hacienda de Jalpa	Huehuetoca	Sobreseyó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
78	4514	1925	M. Elssaser y Cía.	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Xoloc	Hacienda Santa Lucia	Tecámac	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
79	3474[6]	1926	Merced Aguilar Vda. De Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	San Felipe del Progreso			Incompetencia de la Corte
80	3475	1926	Mariano Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	San Felipe del Progreso			Incompetencia de la Corte
81	3476	1926	Simón Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	San Felipe del Progreso			Incompetencia de la Corte
82	3477	1926	Rosalio Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	San Felipe del Progreso			Incompetencia de la Corte
83	198	1926	Dolores Icaza de Fernández	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Endaré	Haciendas Villeje y Caspi	Ixtlahuaca	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA, CLA, M.P	Se sobresee por improcedente
84	207	1926	Negociación Agrícola de Xico	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Villa de Chalco	Haciendas de Xico y La Compañía	Chalco	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA	Se sobresee por improcedente
85	281	1926	Ignacio Gil y María Ortega de Gil	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Huehuetoca	Hacienda de Jalpa	Huehuetoca	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente

[6] En el caso de los juicios marcados con los números 3474, 3475, 3476 y 3477, pertenecientes a la familia Dorantes, se trata de resoluciones en donde la Corte se declaró incompetente y turnó los expedientes al juez de distrito.

86	300	1926	Erasmo Ocampo y coagraviados	Gob., CNA, Pdte. Mpal.	Dotación gobernador	Huitzoltepec	Tierras del pueblo La Unión	Almoloya de Alquisiras	Sobreseyó	Quejosos	Se sobresee por improcedente
87	420	1926	Joaquín López Negrete	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Oxtotitlán	Hacienda Barbabosa	Zinacantepec	Concedió el amparo	Pdte., CNA, M.P	Se sobresee por improcedente
88	690	1926	María Goribar de Saldivar	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Felipe Zacatepec	Hacienda Los Reyes	Nopaltepec	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
89	782	1926	Juan Henkel	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Otzacatipan	Rancho San José y su anexo Guadalupe	Toluca	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
90	910	1926	María Vélez de la Mora	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Los Reyes	Ranchos San Antonio y Sandia	Tlalnepantla	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA, CLA, M.P	Se sobresee por improcedente
91	975	1926	Agustín Espinosa	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Ranchería Xhimojay	Hacienda Doxichó	Jilotepec	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
92	1003	1926	Luis Fernández Campos	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Morelos	Rancho Xhinte (Hacienda Santa Cruz)	San Bartolo Morelos	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
93	1016	1926	María Vélez de la Mora	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Santiago Atepletac	Ranchos Santa Teresa y Santa Rosa (Hacienda de En medio)	Guadalupe Hidalgo (D.F)	Sobreseyó por desistimiento de la quejosa	Quejosa	Se sobresee por improcedente
94	1021	1926	Guillermo Cordero y coagraviados	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Santiago Cuautlalpan	Hacienda San José de Santiago	Cuautitlán	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
95	1022	1926	Eva M. Scales	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Miguel Tlaixpan	Hacienda Molino de Flores	Texcoco	Concedió el amparo	CNA, CLA	Se desechó por extemporánea y no promoverse en forma
96	1023	1926	Juana Guerrero Vda. De Aliphat	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa Ana Ixtlahuacingo	Hacienda Monte del Pozo	Tenango del Valle	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
97	1024	1926	Mariano Muñoz	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE, Juez de Primera	Dotación presidencial	Santiago Cuautlalpan	Hacienda La Concepción	Tepotzotlán	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente

				Instancia de Cuautitlán							
98	1076	1926	Sociedad J. H Robertson y Cía.	Pdte., CNA	Dotación presidencial	San Mateo Tezoquiapan	Hacienda de Miraflores	Chalco	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
99	1078	1926	Francisco Iglesias	Pdte., CPE	Dotación presidencial	San Mateo Otzacatipan	Rancho San Diego	Toluca	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
100	1079	1926	Mariano Vicencio	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Otzacatipan	Hacienda de la Crespa	Toluca	Concedió el amparo	Del. CNA	Se sobresee por improcedente
101	1107	1926	Francisco Díaz Lara	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	San Felipe Zacatepec	Finca La Puerta	Axapusco	Concedió el amparo	CNA., Del CNA	Se sobresee
102	1164	1926	Ramón Rodríguez	Gob., CPE	Dotación gobernador	San Jerónimo Zacapezco	Finca La Silla	Villa del Carbón	Concedió el amparo	Gob., M.P	Se sobresee por improcedente
103	1283	1926	Rafael Ortíz de la Huerta	Pdte., CPE, Juez de Primera Instancia de Zumpango	Dotación presidencial	San Francisco Zacacalco	Hacienda de Bata	Zumpango	Concedió el amparo	Pdte., M.P	Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
104	1302	1926	Juan M. Vélez	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Tecoloápam y Atizapán de Zaragoza	Hacienda San Mateo	Atizapán	Concedió el amparo	Pdte., CNA, CLA, M.P.	Se sobresee por improcedente
105	1405	1926	Josefa Albarrán Vda. De Silva	Gob., Del. CNA, CPE	Dotación gobernador	San Jerónimo Zacapezco	Hacienda de Niginí	San Bartolo Morelos	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA, CPE, M.P	Se sobresee por improcedente
106	1467	1926	Tomás Galarza	Pdte., CNA, CPA	Dotación presidencial	San Lorenzo Chimalpa	Hacienda San Juan de Dios	Chalco	Concedió el amparo	CNA, CPA	Se otorgó el amparo contra Pdte. y CNA; se sobreseyó en cuanto al CPA
107	1474	1926	Trinidad Pérez (Representante de San Felipe Zacatepec)	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Ildefonso Fernández	Haciendas de Salinas, La Puerta y Los Reyes	Axapusco	Concedió el amparo	Tercero perjudicado	Se sobresee por improcedente

108	1588	1926	Francisco Mijares	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE, encargado del RPP	Restitución presidencial	San Martín Cuautlalpan	Hacienda de González	Chalco	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA,	Se sobresee por improcedente
109	1619	1926	María Cabello Vda. De Espinosa	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Pablo Atlazalpan	Hacienda San José Axalco	Chalco	Sobreseyó	M.P	Se sobresee por improcedente
110	1629	1926	Amado Mociño	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Otzacatipan	Hacienda de la Crespa	Toluca	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
111	1630	1926	Alberto de Abiega	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Atlatongo	Hacienda de la Cadena	San Juan Teotihuacán	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
112	1983	1926	Salvador García Roldán	Gob., CPE	Dotación gobernador	San Lucas Patoni	Rancho del Tenayo	Tlalnepantla	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
113	1986	1926	Dolores Icaza de Fernández	Pdte., CNA	Dotación presidencial	San Pedro de los Baños	Haciendas Pasteje, Enyeje y Villeje	Ixtlahuaca	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
114	2037	1926	San Pedro Xalostoc y Santa Clara Coatitlan	CNA, CPE, CPA	Dotación gobernador	San Juan Ixhuatepec	Hacienda El Risco; terrenos comunales	Tlalnepantla	Sobreseyó por extemporáneo	Quejosos	Revocó la resolución del JD
115	2051	1926	Rafael Ortíz de la Huerta	Pdte., Del. CNA, CNA, CPE	Dotación presidencial	Tlapanaloya	Hacienda Casa Blanca	Hueypoxtla	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA	Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
116	2275	1926	Luis R. Ruíz	CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Ordenado que vecinos de San Bartolo dispusieran de las magueyeras	San Bartolo Naucalpan	Ex hacienda de Echegaray	Naucalpan	Negó el amparo	Quejoso	se desechó el recurso por copias extemporáneas
117	2297	1926	Mariano Garduño Zepeda	Gob., CNA, CPE	Dotación gobernador	Santa Ana Niche	Hacienda La Labor	San Felipe del Progreso	Concedió el amparo	Gob., Del. CNA,	Se sobresee por improcedente

118	2305	1926	Pedro Escudero y Echanove	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CPE, CPA	Dotación presidencial	San Bartolo Acolman	Hacienda San José Acolman	Acolman	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA, CPA	Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
119	2405	1926	Eva M. Scales	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Dieguito	Hacienda Molino de Flores	Texcoco	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
120	2550	1926	José Cotero	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Santa Ana Ixtlahuacingo	Hacienda Santa Ana	Tenancingo	Concedió el amparo	Pdte., CLA	Sobreseimiento por la CLA, Concedió el amparo por las demás autoridades
121	2560	1926	Francisco Díaz Lara	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Zacatepec	Hacienda de La Puerta	Axapusco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
122	2626	1926	Josefa Albarrán Vda. De Silva	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Tecaxic	Hacienda Serratón	Toluca	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
123	2693	1926	Eduardo Najera y Arturo García	CNA, Del. CNA, CLA, CPE, CPA	Disposición de magueyeras	Santa Cruz Acatlán	Hacienda de Echegaray	Naucalpan	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee en cuanto a la CLA y CPA; se negó por las demás autoridades
124	2811	1926	María Pliego y Madrid	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Metepec	Rancho San Antonio	Metepec	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
125	2819	1926	Germán Ignacio Roth	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Mateo Otzacatipan	Rancho La Independencia	Toluca	Concedió el amparo	Del. CNA	se desechó el recurso por falta de personalidad del promovente
126	2834	1926	María del Valle Vda. De Mier	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CLA, CPE, CPA	Dotación presidencial	Los Reyes	Fincas Cañicuá y Tiacaque	Jocotitlán	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente

127	3053	1926	Antonio Pliego	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Metepec	Hacienda La Asunción	Metepec	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
128	3172	1926	Rafael Ortíz de la Huerta	Pdte., CPE, Juez de Primera Instancia de Zumpango	Dotación presidencial	Jilotzingo	Hacienda Casa Blanca	Hueypoxtla	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por desistimiento del quejoso
129	3754	1926	Guillermo de Landa y Escandón	Pdte., CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	San Juan Zitlaltepec	Hacienda de Jalpa	Huehuetoca	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
130	3889	1926	María de las Mercedes Cortina de Zubiaur	Pdte., CNA, CPA	Dotación presidencial	San Juan Xoconusco	Hacienda San Bartolo	Donato Guerra	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
131	3988	1926	Dolores Quintanilla Vda de Orvañanos	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa María Citendejé	Hacienda de Toshi	Atlacomulco	Concedió el amparo en cuanto al Pdte. y Del. CNA; negó en cuanto al CPE	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
132	4285	1926	Rosalio Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación	San Lucas Patoni	Hacienda de la Concepción	Aculco	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
133	4286	1926	J. H. Robertson y Cía.	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Lorenzo Tlalmimilolpan	Hacienda de Miraflores	Chalco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
134	4287	1926	Alberto de Abiega	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San José el vidrio	Hacienda de Lanzarote	Villa Nicolás Romero	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
135	4290	1926	Concepción Capetillo de Valero	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Villa Nicolás Romero	Hacienda La Encarnación	Villa Nicolás Romero	Negó el amparo	Quejosa	Se desecho por no interponerse en forma
136	4334	1926	Dolores Icaza de Fernández	Pdte., CPE	Dotación presidencial	Santa María Endaré	Haciendas Caspi y Villeje	Jocotitlán	Concedió el amparo	CNA, CPE	Se sobresee por improcedente
137	4451	1926	Ignacio de la Torre y Mier	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa María Tlalmimilolpan	San Nicolás Peralta y Santa Catarina	Lerma	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente

138	901[7]	1926	Angela Esquivel Vda de Esquivel	CNA, Gob.	Dotación	Santa Ana Niche	Rancho San Antonio de las huertas	San Felipe del Progreso			
139	975[8]	1926	Agustín Espinosa	Gob., CLA, CPE	Dotación	Ranchería de Xhimojay	Doxicho	Jilotepec			Se negó la suspensión
140	1087[9]	1926	Pedro Pliego	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación	Santa Cruz Tejalpa	Hacienda Tejalpa	Zinacantepec			Se negó la suspensión
141	1517[10]	1926	Rosario Altamirano Vda de Ávila	Gob., CLA, CPE	Dotación	San Andrés Chiautla	Hacienda Santo Tomás	Texcoco			Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
142	1689[11]	1926	Carlos B. Zetina	Gob., CLA, CPE	Dotación	San Mateo Otzacatipan	Hacienda Santín	Toluca			Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
143	2308[12]	1926	Braulio Iriarte	CPE	Dotación	El Calvario Acolman	Hacienda San Antonio Acolman	Acolman			Se negó la suspensión
144	2561[13]	1926	Mercedes Cervantes	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación	Ranchería San Antonio Coayuca	Rancho San Alfonso	Axapusco			Se negó la suspensión
145	3041[14]	1926	Guillermo Landa y Escandón	Gob., Del. CNA., CLA, CPE	Dotación	San Juan Zitlaltepec	Hacienda de Xalpa	Zumpango			Se negó la suspensión
146	1695[15]	1927	Norberto Meléndez Vega	CNA	posesión provisional	San Luis de las Peras	Predio La cañada	Chapa de mota			

[7] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[8] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[9] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[10] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[11] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[12] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[13] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[14] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[15] Se trata de una resolución en donde la Corte se declaró incompetente y turnó el expediente al juez de distrito, en la clasificación se ubica como amparo directo.

147	56	1927	María de Jesús Aguilar Vda. De Pliego	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Cabecera de indígenas Asunción Malacatepec	Hacienda San Antonio Hidalgo o San Martín	Donato Guerra	Concedió el amparo	Del. CNA, CLA, Gob.	Se sobresee por improcedente
148	57	1927	Rafael Ortiz de la Huerta	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Hueypoxtla	Hacienda Casa Blanca	Hueypoxtla	Concedió el amparo	CNA	Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
149	156	1927	Mariano Muñoz	Pdte., CPE	Dotación presidencial	Tepotzotlán	Hacienda de la Concepción	Tepotzotlán	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
150	246	1927	Rafael Ortiz de la Huerta	Pdte., CNA, Comisario ejidal	Cambio de localización del ejido	San Francisco Zacacalco	Hacienda Bata, anexa a Casa Blanca	Hueypoxtla	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee en cuanto al comisariado ejidal; se negó en cuanto a la CNA
151	320	1927	Mariano Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	Aculco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
152	359	1927	Simón Dorantes	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	Aculco	Concedió en cuanto al Pdte., lo negó por las demás autoridades	CNA	Se sobresee por improcedente
153	645	1927	Eva M. Scales	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Tlaminca de Texcotzingo	Hacienda Molino de Flores y El Batán	Texcoco	Negó el amparo	Quejosa	Se desechó por no promoverse en forma
154	648	1927	Merced Aguilar	Pdte., Gob., CLA	Dotación presidencial	San Lucas	Rancho de la Concepción	Aculco	Sobreseyó por falta de personalidad	Quejosa	Se sobresee
155	982	1927	Carmen García Toriello de del Pando y Soto	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo del Llano	Hacienda La purísima	Axapusco	Desechó por improcedente	Quejosa	Se ordenó fuera admitida la demanda
156	985	1927	Bucio Timber & Railway S. A.	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Ranchería Madó	Hacienda Arroyo Zarco	Acambay	Se concedió en cuanto al Gob., y CLA; se negó en	Gob., CLA	Se sobresee por improcedente

									cuanto a la CNA y CPE		
157	1044	1927	Samuel Ríos Cano	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Ranchería Datojé	Rancho Cañada	Acambay	Sobreseyó	Quejoso	Se sobresee por improcedente
158	1096	1927	Norberto Salgado	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Pablo Huantepec	Hacienda La Cañada	Jilotepec	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
159	1113	1927	Pueblos de San Antonio Zomeyucan, San Esteban Huitzilacasco y San Luis Tlatilco	Pdte., CNA, Del. CNA	Se negó la dotación a los pueblos	Antonio Díaz Sánchez	Hacienda San José de los Leones	Naucalpan	Concedió el amparo	Tercero perjudicado	Desechado por no interponerse en forma
160	1151	1927	Martín Oyamburu	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Acolman	Hacienda San José Acolman	Acolman	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Se sobresee por improcedente
161	1269	1927	Rafael Capetillo y Servín	Pdte., CNA	Dotación presidencial	Loma alta	Rancho San Juan (Hacienda de la Encarnación)	Villa del Carbón	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
162	1272	1927	Pascual Becerril	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Otzolotepec	Hacienda Mayorazgo	Lerma	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
163	1392[16]	1927	Feliciano Cobián	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Martín Obispo	Hacienda Lechería	Cuautitlán			desistimiento del quejoso
164	1394[17]	1927	Dolores T. Vda de Campos	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE, CPA	Dotación presidencial	Santiago Cuautenco	San Miguel Panoaya	Amecameca			se negó la suspensión
165	1396	1927	Manuel Arratia y Díaz	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Acolman	Hacienda de Santa Catarina	Acolman	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente

[16] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[17] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.

166	1398	1927	Ignacio de la Torre y Mier	Pdte., CNA, Del. CNA,	Dotación presidencial	Santa María Zolotepec	Hacienda de Santa Catarina	Lerma	Negó el amparo	Quejoso	se desechó por no promoverse en forma
167	1399	1927	Dolores Icaza de Fernández	Pdte., CNA, CPE	Dotación	Santa María Nativitas Zocoyahualco	Hacienda del Cristo y Rancho Colorado	Naucalpan	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
168	1400	1927	Martín Oyamburu	Pdte., CNA, CPE	Dotación	Atlatongo	Hacienda San José Acolman	San Juan Teotihuacán	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
169	1408[18]	1927	Josefa Albarrán Vda. De Silva	Gob., CNA, CPE	Dotación gobernador	San Luis Mextepec	Hacienda Serratón	Zinacantepec	Sobreseyó por desistimiento de la quejosa		
170	1449	1927	Pedro Pliego y Sánchez	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE, CPA	Dotación presidencial	San Cristóbal Tecolit	Hacienda de Tejalpa	Zinacantepec	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
171	1451	1927	Ignacio de la Torre y Mier	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Otzolotepec	Hacienda San Nicolás Peralta	Lerma	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
172	1492	1927	Ramón Rodríguez	Pdte., CNA,	Dotación presidencial	San Felipe Tlalmimilolpan	Hacienda de Panzacola	Toluca	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
173	1543	1927	Pedro Pliego y Sánchez	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Juan de las Huertas	Hacienda de Tejalpa	Zinacantepec	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
174	1544	1927	Manuel Arratia y Díaz	Pdte., CNA, Del. CNA, CLA, Gob., CPE, CPA	Dotación presidencial	Atlatongo	Hacienda de Santa Catarina	Acolman	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
175	1545	1927	Ángel Arratia	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CLA, CPE, CPA	Dotación presidencial	Atlatongo	Hacienda de Santa Catarina	Acolman	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
176	1613[19]	1927	Josefa Albarrán Vda. De Silva	Pdte., CNA	Dotación presidencial	San Luis Mextepec	Hacienda de Serratón	Zinacantepec			se negó la suspensión

[18] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión.
[19] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.

177	1657	1927	Frederick Mac-Daniels y Francisco C. Galán	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE, CPA	Dotación presidencial	San simón y su barrio Texopa	Hacienda El Batán	Texcoco	Negó el amparo	Quejosos	Se desechó por no promoverse en forma
178	1826	1927	Dolores García	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa María Citendejé	Caro	Jocotitlán	Negó el amparo	Quejosa	Se desechó por no promoverse en forma
179	1888	1927	Frederick Mac-Daniels y Francisco C. Galán	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Miguel Tlaixpan	Hacienda Molino de Flores y El Batán	Texcoco	Negó el amparo	Quejosos	Se sobresee por improcedente
180	1890	1927	Eva M. Scales	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Miguel Tlaixpan	Hacienda Molino de Flores y El Batán	Texcoco	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
181	1906	1927	Enrique Ortiz	Pdte., CPE, CPA	Dotación presidencial	Santiago Oxthoc Toxhié	Hacienda de Nadó	Aculco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
182	1915	1927	María Vélez de la Mora y Rafael de la Mora y Vélez	Pdte., Del. CNA, Encargado RPP, Comisario ejidal	Dotación presidencial	Los Reyes	Hacienda de Enmedio	Tlalnepantla	Negó el amparo por el RPP, concedió por las otras autoridades	Pdte., Del. CNA, Comisariado	Se sobresee por improcedente
183	2327	1927	Antonio R. Escandón	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Pablo Huantepec	Hacienda San Antonio y anexos	Jilotepec	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por desistimiento del quejoso
184	2374	1927	Vicente Pérez	Pdte., CNA, Del. CNA, CPA	Dotación presidencial	San Luis de las Peras	Hacienda San José Taxhimay	Villa del Carbón	Concedió amparo en cuanto al CPA, negó por las otras autoridades	Quejoso, CNA	Se sobresee por improcedente
185	2406	1927	Juana Guerrero Vda. de Aliphat, Encarnación y María Guerrero	Pdte., CNA	Dotación presidencial	San Pedro Zictepec	Hacienda Monte de Pozo	Tenango del Valle	Negó el amparo	Quejosas	Se sobresee por improcedente

186	2576	1927	Braulio Iriarte	Pdte., CNA, Del. CNA, CPE	Ampliación presidencial	San Mateo Chipiltepec	Hacienda San Antonio Acolman	Acolman	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
187	2589[20]	1927	Dolores Quintanilla Vda de Orvañanos	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Pedro Potla	Hacienda Toshi	Temascalcingo			se negó la suspensión
188	2718	1927	José Luis Cuevas y Eduardo de Nájera	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Mateo Nopala	Ex hacienda de Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó	Quejoso	Se sobresee por improcedente
189	2829	1927	José Luis Cuevas y coagraviados	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Juan Totoltepec	Ex hacienda de Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó	Quejoso	Se sobresee por improcedente
190	2859	1927	Jesús y Mariano Garduño	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	Santa Ana Niche	Hacienda La Labor	San Felipe del Progreso	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
191	2887	1927	Trinidad Schlotz	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Apasco	Hacienda Atotonilco y Montero	Zumpango	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente
192	3334[21]	1927	José Luis Cuevas	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Los Remedios	Ex hacienda de Echegaray	Naucalpan			se negó la suspensión
193	3020	1927	Miguel Saldivar y Flores	Pdte., CPE, CPA	Dotación presidencial	Coatepec	Hacienda Coxtitlán	Ixtapaluca	Concedió el amparo	CNA	Se sobresee por improcedente
194	3056	1927	Manuel Sotomayor	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo Cuautlalpan	Hacienda de Guadalupe	Zumpango	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseimiento por desistimiento del quejoso
195	3057	1927	Manuel Sotomayor	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	San Bartolo Cuautlalpan	Hacienda de Guadalupe	Zumpango	Sobreseyó	Quejoso	desistimiento del quejoso
196	3120	1927	Ignacio L. Pliego	Pdte., CNA, Del. CNA	Dotación presidencial	San Miguel Ameyalco	Hacienda de Jajalpa	Lerma	Concedió el amparo	CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente

[20] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.
[21] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.

197	3202	1927	Ignacio Fernández de Icaza	Pdte., CPE, CPA	Dotación presidencial	San Bartolo Otzolotepec	Hacienda San José Buenavista	Otzolotepec	Concedió el amparo	Pdte., CNA, M.P	Se sobresee por improcedente
198	3217	1927	José Contreras	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Tlachaloya	Hacienda La Trinidad	Toluca	Concedió por Pdte. y CNA; sobreseyó por CPE	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
199	3334	1927	José Luis Cuevas y coagraviados	Gob., Del. CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	Los Remedios	Ex hacienda de Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó	Quejosos	Se sobresee por improcedente
200	3403	1927	Juan G. y Adolfo G. y González	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Marcos Tlazalpa	Hacienda El Salto	Morelos	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
201	3404	1927	María de las Mercedes Cortina de Zubiaur	Gob., CNA, CLA, CPE	Dotación gobernador	San Miguel Balderas	Hacienda el Veladero	Tenango del Valle	Desechó por improcedente	Quejosa	Se ordenó fuera admitida la demanda
202	3594	1927	Luis Fernandez Campos	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Marcos Tlazalpa	Hacienda Santa Cruz, anexo Xhinte	Morelos	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
203	3603	1927	Concepción Marroquín	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Temascalapa	Rancho El Herradero	Temascalapa	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
204	3604	1927	Dolores Marroquin	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	Temascalapa	Rancho El Herradero	Temascalapa	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
205	3673	1927	Saul Benavides	Gob.	Dotación gobernador	Apasco	Hacienda Rincón de Guadalupe	Tequixquiac	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Se sobresee por improcedente
206	3688	1927	José Ríos Méndez	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Ranchería Datejé	Hacienda de Toto	Acambay	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Se sobresee por improcedente
207	3919	1927	Miguel Saldivar y Flores	Pdte., CPE, CPA	Dotación presidencial	San Sebastián Chimalpa	Hacienda Coxtitlán	Texcoco	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por improcedente
208	3936	1927	Guadalupe Cordero de Suárez	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Morelos	Hacienda San Antonio Trojes	San Bartolo Morelos	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente

209	4404[22]	1927	Feliciano Cobián	Pdte., Del. CNA,	Dotación presidencial	Tepujaco	Hacienda Cuamantla	Tepotzotlán			se negó la suspensión
210	4081	1927	Rafael de la Mora y Trueba	Pdte., Del. CNA, CPE	Dotación presidencial	San Pablo Jalpa	Hacienda de Enmedio	Tlalnepantla	Concedió contra actos del Del. CNA y CPE; negó en cuanto al Pdte.	Quejoso; CPE	Se sobresee por improcedente
211	4346	1927	Guadalupe Moreno Vda. De Fernández	Pdte., Del. CNA	Dotación presidencial	Calixtlahuaca	Hacienda Nova	Toluca	Concedió el amparo	Pdte., Del CNA	Se sobresee por improcedente
212	4438	1927	Julio Cordero	Pdte., CNA, Del. CNA, Gob., CLA, CPE	Dotación presidencial	Villa Nicolás Romero	Hacienda San José Santiago	Cuautitlán	Concedió el amparo	Pdte., CNA, Del. CNA	Se sobresee por improcedente
213	4506	1927	Juan Galindo Pimentel	Gob., CLA, CPE	Dotación gobernador	Ozumbilla	Hacienda El Tular	Cuautitlán	Concedió el amparo por la CLA y CPE; lo negó por el Gob.	Quejoso	Se sobresee por improcedente
214	4540	1927	Roberto Martínez	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	San Juan Ixhuatepec	Hacienda El Risco	Tlalnepantla	Concedió el amparo	Pdte., CNA	Se sobresee por improcedente
215	4561	1927	Concepción Espinosa Vda. De Ramos	Pdte., Del. CNA,	Dotación presidencial	Cuijingo	Hacienda de Joyoacán	Juchitepec	Negó el amparo	Quejosa	Se desechó por no promoverse en forma
216	4589	1927	Rafael Ortiz de la Huerta	Pdte., CNA, CPE	Dotación presidencial	San Bartolo Cuautlalpan	Hacienda Casa Blanca	Hueypoxtla	Negó el amparo	Quejoso	Se sobresee por desistimiento del quejoso
217	4641	1927	Josefina de la Vega	Pdte., CNA, CLA, CPE	Dotación presidencial	Papalotla	La Blanca	Texcoco	Negó el amparo	Quejosa	Se sobresee por improcedente

[22] Sólo se encontró la sentencia del incidente de suspensión, en la clasificación se ubica como amparo.

Anexo 2. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1931-1945[1]											
Núm.	Exp. SCJN	Año	Quejoso	Autoridad responsable	Acto reclamado	Tercero perjudicado	Propiedad afectada	Municipio	Resolución JD	Interpuso recurso	Resolución SCJN
1	402	1931	Antonio Pliego Pérez (suc.)	CNA, Del. CNA, CPE	cambio en la localización de ejidos	Villa de Metepec	Hacienda de la Asunción	Metepec	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
2	708	1931	Federico Coppe	CNA	cambio en la localización de ejidos	San Bartolo Tenayuca	Rancho San Felipe y Tabla Honda	Tlalnepantla	Otorgó el amparo	CNA	Negó el amparo
3	1378	1931	José y Francisco Basso	CNA, Del. CNA, Dpto. de Org. Agra.	Dotación	Santa Barbara	Rancho Guadalupe y su anexo Santa Elena	Cuautitlán	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
4	2141	1931	Fortunato Carraro	CNA, CPE	cambio en la localización de ejidos	San Bartolo Tenayuca	Rancho San Miguel Trípoli	Tlalnepantla	Se declaró sin materia		
5	3126	1931	Juan F. García	CNA, jefe de zona ejidal	Dotación	San Felipe del Progreso	Hacienda El Obraje	Ixtlahuaca	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
6	4421	1931	Josefa Nuñez Vda de Llorente	CNA, Del. CNA,	cambio en la localización de ejidos	San Bartolo Tenayuca	San Buenaventura, La Lagunita, La Convalescencia	Tlalnepantla	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
7	12102	1932	CPA de Oxtotipac	JD	Sentencia del Juicio Ord. Civ.	Rafael Manterola		Otumba			
8	12470	1932	CPA Santiago Teoyahualco	Pdte., CNA	Dotación	Rafael y Luis Roqueñi		Tultepec	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente

[1] Elaboración propia con base en los expedientes encontrados en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ) del AHSCJN.

9	1310	1933	Luis R. Ruiz	CNA	Dotación	San Bartolo Naucalpan	Hacienda Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
10	1375	1933	Ismael Arias	Del. CNA, Pdte. Mpal. Jilotepec	Aprovechamiento de magueyes	Agua Escondida	Rancho de Vargas o Buenavista	Jilotepec			
11	1375	1933	Eduardo Nájera	CNA	Dotación	San Juan Totoltepec	Hacienda Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
12	1505	1933	Alfonso Cuevas	CNA	Dotación	Santa María Nativitas	Hacienda Echegaray	Naucalpan	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
13	3155	1933	Dolores Quintanilla	Pdte., CNA, Del. CNA	Dotación	Temascalzingo	Hacienda de Solis, La Huerta, Toshi, La Jordana	Temascalcingo	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
14	3213	1933	María Téllez de Álvarez	Gob., CLA, Del. CNA, CPA	Dotación	El Obraje	Rancho La Virgen	San Felipe del Progreso	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
15	3449	1933	CPA Santiago Teoyahualco	Sria Agri., Sria. Gue., CNA, CPA, Pdte. Mpal.	Impidieron trabajar las tierras		Hacienda Cartagena	Tultitlán	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
16	3885	1933	Federico Coppe	CNA	cambio en la localización de ejidos	San Bartolo Tenayuca		Tlalnepantla	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
17	4155	1933	Dolores Quintanilla	Pdte., CNA, Del. CNA	Dotación	Barrio de Andaro	Hacienda de Solís y anexos	Temascalcingo	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
18	6215	1933	Joaquín López Negrete	CNA, CPE	cambio en la localización de ejidos	San Bartolo Tenayuca	Hacienda de San Javier	Tlalnepantla	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente

19	1297	1936	Ignacio Morelos	Pdte, Dpto. Agrario, Del. Dpto.	Dotación	Pueblo Nuevo	Ranchos San Isidro y Chichicuilote	Acambay	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
20	2264	1936	María Barra de Servín	Gob., CAM, Dpto. Agrario, Del. Dpto., CEA	Dotación	San Jerónimo Totoltepec y San Lucas Tecaxtitlán	Hacienda San Nicolás Tolentino	Valle de Bravo	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
21	6708	1936	Juan Monroy	Gob., Pdt. Mpal.	Dotación	Ranchería Tecolopan	Las Animas	Jilotepec	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
22	7288	1936	Coleta Acevedo de Cruz	Sria Agri., Adms.	Privación de un lote		Colonia agrícola de Santo Tomás	Teoloyucan	Sobreseyó por haber cesado los efectos del acto	Quejoso	Sobreseyó por haber cesado los efectos del acto
23	7348	1936	Francisco Pizarro Suárez	CAM	Ampliación de ejidos	Ejido Santa María Tepezoyuca	Hacienda Texcalpa	Ocoyoacac	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
24	2311	1937	Matilde Montoya	Pdte., Dpto., Agrar.,	Dotación	Santa María Huecatitla		Cuautitlán	Desechó por improcedente	Quejoso	Dio por admitida la demanda
25	3226	1937	Carlos Paredes (Cooperativa Obrera Toluca)	Gob., CAM, Del. Dpto Agr., Comisariado	Ampliación de ejidos	San Felipe Tlalmimilolpan	Rancho de la Virgen	Toluca	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
26	921	1938	Mardonio Pérez y otros (ejidatarios)	Dpto. Agrar	Dotación			Melchor Ocampo	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
27	6259	1938	Esteban Schiavón y otros	Pdte., Dpto., Agrar., Del. Dpto. Agrar.,	Dotación	San Antonio, Tepotzotlán, Tultitlán		Cuautitlán	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente

28	4262	1939	Ángel López Negrete	Pdte., Dpto. Agrar., Comité Ejecutivo del poblado	Dotación	San Andrés Atoto	El Prieto	Naucalpan	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
29	6849	1939	Comisariado ejidal de San Diego	Pdte., Jefe Oficina de la pequeña propiedad, Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar	Deslinde de tierras por ser pequeña propiedad	Enrique y Eduardo Pliego y Lebrija		Almoloya de Juárez	Otorgó el amparo	Terceros perjudicados	Otorgó el amparo
30	8659	1939	Tomás Taborga	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar., Comisariado Melchor Ocampo	Invasión de terrenos		El Paredón (Hacienda de San Mateo y a Garita)	Teoloyucan			
31	8670	1939	José Espeso	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar., Comisariado Melchor Ocampo	Invasión de terrenos		La Virgen y San Quirino	Teoloyucan			
32	1621	1940	Gabina López y Magdalena Rosales	Dpto. Agrar., JPE, CE	Privación de parcelas	San Antonio Tultitlán		Tultitlán	Otorgó el amparo	Sria. AyF	Reposición del procedimiento
33	4982	1940	Matilde Montoya	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.	Dotación	Santa María Huecatitla		Cuautitlán	Otorgó el amparo	Santa María Huecatitla	Otorgó el amparo

34	6837	1940	Rafael Barbosa	Pdte., Dpto. Agra., Del. Depto Agra., Gob	Dotación	San Diego de los Padres y San Andrés Cuexcontitlán	San Diego de los Padres	Toluca	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
35	7674	1940	Alvaro Salgado	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.	Ampliación de ejidos	Loma de Juárez	Ex hacienda El Pilar	Villa de Allende	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
36	7977	1940	Faustino Camino	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.	localización de terrenos comunales	San Francisco Ayotusco		Huixquilucan			
37	8519	1940	Carlos León	Sría, Agri y Fom., Direcc. Org. Agra., Del. Promo. Ejidal	ocupación pequeña propiedad	San Agustín, Laguna Seca, Taborda, Santiago del Monte		Villa Víctoria			
38	151	1941	Sara Meana Vda. Garduño	Pdte., Dpto. Agrar., CAM, Gob.	Dotación	Atlatlahuca	Predio Cuitláhuac	Tenango del Valle	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
39	753	1941	Sebastián Rivera y coagraviados	Pdte.,	Ampliación de ejidos	Santa María Chiconautla	Pequeña propiedad	Ecatepec		Aut. Resp.	
40	3560	1941	María de las Mercedes Cortina de Zubiaur	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar, Gob.	Dotación	Santa María Totoltepec	Hacienda San Nicolás Tolentino	Toluca	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
41	7039	1941	Rosalío Arista	Pdte., Dpto. Agrar,	Ampliación de ejidos	Tlalpizahua	San Isidro	Ixtapaluca	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
42	7921	1941	Ernesto Medina	Pdte., Dpto. Agrar.,	Dotación	Santiago Talxilacal	El Cerrillo	Almoloya de Juárez			

43	8060	1941	J. Refugio del Valle y coagraviados	Dpto. Agrar.	Fracc. Pequeña prop.	Tezoyuca	Terreno "Cooperativa"	Texcoco	Negó el amparo	Quejoso	Negó el amparo
44	9197	1941	Trinidad Terán Vda. De López	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto Agra.	Dotación	Ruano	Rancho de Taxto	Polotitlán	Desechó por improcedente	Quejoso	Desechó por improcedente
45	2679	1942	Ramón Rodríguez y Sabás Heredia	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar., Procu., M.P	Permuta	San Bartolo Tlaxihuicalco	Pequeña propiedad (Hac., Maxaxay)	Teoloyucan	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Otorgó el amparo
46	4481	1942	Casimiro Balderas y coagraviados	Sria. Fom, Com. Eji. Tultitlán	Despojo de parcelas	San Antonio Tultitlán	Parcelas	Tultitlán	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Otorgó el amparo
47	6418	1943	Antonio y José Tazzer	Pdte., Dpto Agra., CEA, Com. Eji.	Dotación	San Mateo Ixtacalco	Hacienda Casco de Jaltipa	Cuautitlán	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Otorgó el amparo
48	3100	1944	Comisariado ejidal Villa Cuauhtémoc	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.,	Ampliación de ejidos	Camilo Jacobo y Dolores Becerril	Rancho Santa Rosalía	Villa Cuauhtémoc	Otorgó el amparo	Terceros perjudicados	Otorgó el amparo
49	5136	1944	Francisco Quijada y coagraviados	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.,	División del ejido		Ejido San Juan de las Manzanas	Ixtlahuaca	Sobreseyó por falta de materia	Quejoso	Sobreseyó
50	1051	1945	Comisariado Ejidal Santa María Jajalpa	Pdte., Dpto. Agrar., Gob., Pdte. Mpal.	cambio en la localización de ejidos	San Lucas Tepemajales	El Contadero	Tenango del Valle	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Otorgó el amparo
51	6649	1945	Adelina Hill de Rocha y coagraviados	Dpto. Agrar.	Ampliación de ejidos	Tultepec	Ex Hacienda San Mateo	Tultepec	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Otorgó el amparo

52	5841	1946	Raymundo Medina y coagraviados	CCA, Depto., Agrar., Del. Depto. Agrar., Dir. Org. Agrar. SAyF	División del ejido	Ejido Cieneguillas (revisar)		Temascaltepec	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó
53	8210	1946	Comunidad indígena Pueblo Nuevo	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.	Dotación	La Soledad		Acambay			

Anexo 3. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1948-1960[1]											
Núm.	Exp. SCJN	Año	Quejoso	Autoridad responsable	Acto reclamado	Tercero perjudicado	Propiedad afectada	Municipio	Resolución JD	Interpuso recurso	Resolución SCJN
1	3452	1948	Sixto López	Pdte., Dpto. Agra., Dpto. Asuntos Indígenas, Pdte. Mpal.	Confirmación de bienes comunales	Pueblo de Maxtleca	El Cedro, San Isidro, Desbarrancadero	Tenancingo	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Otorgó el amparo
2	3458	1948	Leonardo D. Díaz	Pdte., Dpto. Agra., Dpto. Asuntos Indígenas, Pdte. Mpal.	Confirmación de bienes comunales	Pueblo de Maxtleca		Tenancingo	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
3	3500	1948	Ezequiel López	Pdte., Dpto. Agra., Dpto. Asuntos Indígenas, Pdte. Mpal.	Confirmación de bienes comunales	Pueblo de Maxtleca	El Potrero	Tenancingo	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	negó el amparo en cuanto al pdte., lo otorgo por el D.A
4	183	1950	María Teresa González Vda., de Valencia	Dpto., Agrar., CCA,	Dotación	Santa Barbara	Cuautenco y Xochihuacán	Otumba	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por caducidad
5	5810	1950	Comisariado San Antonio Mextepec	Pdte. Mpal., Gob., Del. Dpto. Agrar.	Construcción de una escuela			San Felipe del Progreso			
6	1751	1951	Jesús y José Agredano Rodríguez	Dpto. Agrar., Jefe de Promoción Ejidal	Trabajos de planificación	Ejido Chotejé	Rancho Santa Rita	San Felipe del Progreso	Otorgó el amparo	Ejido Chotejé	Otorgó el amparo
7	1760	1951	Ricardo Zamora y Coagra.	Pdte., otras autoridades	Acuerdo que revoco el parcelamiento, apeo y						Desechó por extemporáneo

[1] Elaboración propia con base en los expedientes encontrados en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ) del AHSCJN.

					adjudicación de unos terrenos						
8	6114	1951	Comisariado San Miguel Tenoxtitlán	Pdte., Gob., CAM, Dpto. Agrar.	Ampliación de ejidos		Hacienda Concepción Caro	Jocotitlán	Negó el amparo	Quejoso	Negó el amparo
9	1382	1952	Juan Guadarrama y coagraviados	Dpto. Agrar y Del., C.E	Despojo de parcelas		Ejido La Puerta	Zinacantepec	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó por improcedente
10	1824	1952	CEA Agua Dulce	Pdte.,	Negar dotación			Zacualpan	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Sobreseyó
11	1857	1952	Juana González	Dpto. Agrar., Del., CCA, jefe de zona ejidal	Desalojo de parcelas	Cirilo Rivero	Ejido El Calvario	Acolmán	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Otorgó el amparo
12	4837	1952	Jesús Agredano y Coagraviados	Dpto. Agrar.,	Dotación complementaria	Ejido Chotejé	Rancho Santa Rita	San Felipe del Progreso	Negó el amparo	Quejoso	Otorgó el amparo
13	1769	1953	Comisariado Ejidal Mayorazgo	Dpto Agrar. y Del.	Desalojo de parcelas	Ejido Mayorazgo	Hacienda del Río	Almoloya de Juárez	Sobreseyó por improcedente	Quejoso	Sobreseyó
14	4189	1953	Ascensión Peñaloza y coagraviados	Dpto. Agrar., Direc. Der. agrar., jefe Ofic, resol. Presi., SDN, Gob.	Falta de ejecución de resolución presidencial			Valle de Bravo	Sobreseyó y negó el amparo	Quejoso	Sobreseyó
15	435	1954	Comisariado Ejidal San José Huilango	Pdte., Dpto. Agrar.	División del ejido	La Piedad		Tepotzotlán	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó por caducidad

16	1572	1954	Francisco Sánchez	Dpto. Agrar., CCA, Del. Dpto. Agrar.	Segunda ejecución dotación	Comisariado San Lorenzo Tetlixtac	Predio San Pablo	Coacalco	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó
17	2169	1954	Manuel Silva Albarrán	Del. Dpto Agrar., CAM, Del. Dpto. Agrar	Segunda ampliación	Santa Cruz Tepexpan	Predio Los Corrales	Jiquipilco	Sobreseyó respecto al Jefe del Dpto. Agrar y CAM; Otorgó respecto a las demás autoridades	Quejoso	Sobreseyó por caducidad
18	1846	1955	Othon Macedo	Dpto. Agrar.,	Dotación complementaria	Comisariado ejidal Coatepec	Barranca del Mamey	Tlataya	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Sobreseyó por caducidad
19	6582	1955	Benito Sánchez Henkel	Dpto. Agrar.,	Confirmación de bienes comunales	Santa Cruz Cuautenco	Ex Hacienda de la Huerta	Zinacantepec	Otorgó el amparo	Dpto. Agrar.	Desechó por extemporáneo
20	1366	1956	Vecinos de San Pedro Cholula	Pdte., Dpto. Agrar., Pdte. Mpal.,	Dotación	San Pedro Tultepec	Hacienda del Río Lerma	Ocoyoacac	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó por caducidad
21	5531	1958	Manuel e Isauro Padilla	Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.,	Ampliación de ejidos	San Andrés Timilpan	Predio Barrancas y Berdolaguitas (Ex hacienda Arroyo Zarco)	Aculco	Sobreseyó por falta de interés jurídico	Quejoso	Otorgó el amparo
22	1110	1959	Comisariado Ejidal San José Huilango	Pdte., Dpto. Agrar., Del. Dpto. Agrar.,	División del ejido	La Piedad		Tepotzotlán	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó

23	2971	1960	Saturnino de Jesús Loperena	Dpto. Asuntos Agrarios,	Privación de una parcela			Lerma	Negó el amparo	Quejoso	Sobreseyó en cuanto al Del. Dpto. Asuntos Agrarios.; otorgó en cuanto al Jefe Dpto. Asuntos Agrarios

Anexo 4. Resoluciones de amparos en revisión, Estado de México, 1962-1971[1]											
Núm.	Exp. SCJN	Año	Quejoso	Autoridad responsable	Acto reclamado	Tercero perjudicado	Propiedad afectada	Municipio	Resolución JD	Interpuso recurso	Resolución SCJN
1	393	1962	Serafín Escutia León y coagraviada	Jefe DAAC, Dir Gral Der Agra, Dir Gral Org Agra y Ejidal, Del DAAC, Jefe de Zona Ejidal, Agente M.P	Desposesión de una parcela	Gonzalo Castañeda	Parcela ejidal	San Mateo Atenco	Negó en cuanto al jefe del DAAC Sobreseyó por las demás autoridades	Quejoso	Sobreseyó por caducidad
2	7855	1962	Mariano López Sánchez	Dir. Gral. Der Agrar., Dir, Org Agra Eji, Del. Dpto. de Asuntos Agrarios, Jefe de Zona Ejidal,	Privación de derechos ejidales	Candelaria Ortiz	Parcela ejidal	Tultitlán	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó
3	6209	1962	Marcelino Rojas	Jefe DAAC, Dir Insp Proc y Quejas, Dir Der Agra, Del DAAC, Jefe de Zona Ejidal	Desposesión de una parcela	Juana Lorenzo Rojas	Parcela ejidal	San Miguel Chapa de Mota	Concedió el amparo	Autoridad responsable	Concedió el amparo
4	2209	1964	Comisariado Ejidal Santa Ana Tlapaltitlán	Jefe DAAC, Direc. Gral Tierra y aguas, Gob., Del DACC,	Expropiación	General Motors de México S.A de C.V.	Tierras ejidales	Toluca	Sobreseyó	Quejoso	Tuvo por no interpuesto el recurso y confirmó el sobreseimiento
5	6542	1965	Leobardo Ríos Morales	Jefe DAAC, Direc Gral Org Agra Eji, Del DACC, Jefe de Zona Ejidal	Privación de derechos ejidales		Parcela ejidal	Toluca	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó
6	4817	1966	Álvaro Salgado González	Jefe DAAC, Srio Gral Asunt Agra, Dir Gral	Ampliación	Comisariado Ejidal de El Rincón	Los Perales (pequeña propiedad)	Ixtlahuaca	Concedió el amparo	Autoridad responsable	Concedió el amparo

[1] Elaboración propia con base en los expedientes encontrados en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales (SACEJ) del AHSCJN.

				Der Agrar, Del DAAC, Ingeniero Comisionado							
7	6600	1966	San Juan Acatitlán	Jefe DAAC,	Confirmación y Titulación de bienes comunales			Tejupilco	Concedió el amparo	Autoridad responsable	Concedió el amparo
8	10018	1966	Mario Piñuñuri Moncada	Jefe DAAC, Srio Gral Asunt Agrar y Col, CCA, Direc Tierras y Aguas, Del. DAAC, Jefe de Zona Ejidal	Ampliación zona urbana ejidal	San Esteban Huitzilacasco	Predios rústicos La Repartidora y Loma de la Repartidora	Naucalpan	Negó el amparo	Quejoso	Decretó la caducidad de la instancia
9	5102	1967	Manuel Falcón Umaya y Coagr.	Jefe de Zona Ejidal y agente del Ministerio Público	Desposesión de una parcela	Santiago Tequixquiac	Parcela ejidal	Zumpango	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó
10	6136	1967	Vicente Ruiz Martínez	Gob., Del DAAC,	Desposesión de una parcela		Parcela ejidal	Naucalpan	Sobreseyó	Quejoso	Decretó la caducidad de la instancia
11	6174	1967	Manuel Estrada Ferreira	Jefe DAAC, Del DAAC, Jefe de Zona Ejidal,	Desposesión de una parcela	Lucas López	Parcela ejidal	Tenango del Valle	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó
12	9272	1967	Comisariado Ejidal Santiago Tequixquiac	Del DAAC, Jefe de Zona Ejidal, Agente del M.P	Desposesión de una parcela	Vecinos de San Juan Zitlaltepec		Santiago Tequixquiac	Sobreseyó	Quejoso	Ordenó la reposición del procedimiento
13	3703	1968	Comisariado Ejidal Santa María Totoltepec	Jefe DAAC, Srio Gral. DAAC, Del DAAC,	Dotación	Gloria Presa de Mier y José Serafín Silva		Toluca	Concedió el amparo	Autoridad responsable	Concedió el amparo
14	7021	1968	Comisariado Ejidal Los Limones	Jefe DAAC, Direc Gral Tierras y Aguas, Del DAAC, Ingeniero comisionado	Desposesión de tierras	Viverto Gómez Díaz		Tejupilco	Sobreseyó	Quejoso	Sobreseyó

15	3394	1970	Ejido San José Potrerillos (trancas)	Jefe DAAC, Direc Der Agra,	Falta de respuesta en la solicitud de ejidos			Valle de Bravo	Concedió el amparo	Autoridad responsable	concedió el amparo

Interrogatorio (28 de septiembre de 1950)[1]

1. Dirán sus generales los testigos, y si no les tocan las de la ley con la parte que los presenta.
2. Dirán si conocen y desde que tiempo al señor Jesús Agredano Rodríguez, y la señora Blanca Martínez de Rodríguez y al señor José Agredano Rodríguez.
3. Dirán si conocen y desde cuando, el Rancho de Santa Rita, ubicado en términos del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México se les leerá en lo conducente la demanda inicial donde se describe y deslinda dicho rancho.
4. Dirán si saben y les consta que los precipitados Jesús Agredano Rodríguez, Blanca Martínez de Rodríguez y José Agredano Rodríguez, están en posesión del citado Rancho de Santa Rita.
5. Dirán si saben y les consta que la posesión que tienen dichas personas de esa finca es a título de dueños.
6. Dirán si saben y les consta que esa posesión ha sido pacífica, continua, pública, cierta y de buena fe.
7. Dirán desde cuando están en la posesión los señores Jesús Agredano Rodríguez, Blanca Martínez de Agredano y José Agredano Rodríguez del repetido Rancho de Santa Rita, según lo han manifestado.
8. Dirán si saben y les consta que el señor Jesús Agredano Rodríguez personalmente, ha cultivado, en su parte cultivable, el repetido Rancho, auxiliado de la señora Blanca Martínez de Agredano.
9. Dirán si saben y les consta que el ganado de la propiedad del señor Jesús Agredano Rodríguez, siempre ha pastado en los potreros de esa finca mencionada.
10. Dirán si saben y les consta que el señor Jesús Agredano Rodríguez ha tenido establecido su domicilio, en donde ha vivido con su familia, en el referido Rancho de Santa Rita.
11. Dirán si saben y les consta que en la actualidad, las labores de cultivo en dicha finca, se realizan bajo la dirección y cuidado del señor Jesús Agredano Rodríguez y de la señora Blanca Martínez de Agredano.
12. Dirán si saben y les consta que el señor Jesús Agredano Rodríguez, últimamente ha explotado la raíz de zacatón que ha sacado del repetido rancho.
13. Dirán si saben y les consta que desde hace años, quien paga y dirige a los peones que trabajan en el Rancho de Santa Rita, es el señor Jesús Agredano Rodríguez.
14. Dirán si saben y les consta han tenido establecido hasta hace poco tiempo, un establo en la mencionada finca de Santa Rita.

[1] AHCCJT, AI, 999/50, f. 19.

Anexo 6. Tierras distribuidas por periodos presidenciales, 1920-1985					
Presidente	Fecha final del periodo	Total de hectáreas	% de la Superficie del país	Total de hectáreas acumuladas	% de la superficie del país
Venustiano Carranza	21-V-1920	166 936	0.1	167 936	0.1
Adolfo de la Huerta	30-IX-1920	33 696	0.0	201 632	0.1
Alvaro Obregón	30-XI-1924	1 100 117	0.6	1 301 749	0.7
Plutarco Elías Calles	30-XI-1928	2 972 876	1.5	4 274 625	2.2
Emilio Portes Gil	04-II-1930	1 707 750	0.9	5 982 375	3.1
Pascual Ortiz Rubio	03-IX-1932	944 538	0.5	6 926 913	3.5
Abelardo L. Rodriguez	29-XI-1934	790 694	0.4	7 717 607	3.9
Lázaro Cárdenas	29-XI-1940	18 786 131	9.6	26 503 738	13.5
Manuel Ávila Camacho	30-XI-1946	7 287 697	3.7	33 791 435	17.3
Miguel Alemán Valdéz	30-XI-1952	4 633 321	2.4	38 424 756	19.6
Adolfo Ruiz Cortines	30-XI-1958	6 056 773	3.1	44 481 529	22.7
Adolfo López Mateos	30-XI-1964	8 870 430	4.5	53 351 959	27.2
Gustavo Díaz Ordaz	30-XI-1970	24 738 199	12.6	78 090 158	39.9
Luis Echeverría Alvarez	30-XI-1976	12 773 888	6.5	90 864 046	46.4
José López Portillo	30-XI-1982	6 397 595	3.3	97 261 641	49.7
Miguel de la Madrid Hurtado[1]	30-XI-1988	1 557 558	0.8	98 819 199	50.5

Fuente: elaboración propia con base en *Estadísticas Históricas*, p. 299.

[1] Cifras hasta el 18 de febrero de 1985.

Fuentes y bibliografía

Siglas y referencias de Archivos

AGA	Archivo General Agrario
AHCCJT	Archivo Histórico Casa de la Cultura Jurídica, Toluca
	AI (Amparo Indirecto)
AHMNJ	Archivo Histórico Municipal de Naucalpan de Juárez
	FA, SF, SICAA (Fondo Ayuntamiento, Sección Fomento, Serie Industria, Comercio, Asuntos Agrarios)
	FA, SP, SNE (Fondo Ayuntamiento, Sección Presidencia, Serie Noticias Estadísticas)
	FA, SF, SOP (Fondo Ayuntamiento, Sección Fomento, Serie Obras Públicas)
	FA, SF, SOPIC (Fondo Ayuntamiento, Sección Fomento, Serie Obras Públicas, Industria y Comercio)
AHMT	Archivo Histórico Municipal de Toluca
	RP (Ramo Pueblos)
AHSCJN	Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
	AR (Amparo en revisión)
	JO (Juicio Ordinario)
	TJA (Toca al Juicio de Amparo)
AHyFREM	Archivo Histórico y Fondo Reservado del Estado de México
	CAM (Comisión Agraria Mixta)

CAJCJF Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal

JDEM, AI (Juzgado de Distrito en el Estado de México, Amparo Indirecto)

Fuentes impresas

Acuerdo

"Acuerdo que define la competencia de la Oficina de la pequeña propiedad" en *Diario Oficial*, sábado 25 de enero de 1941, pp. 4-6.

ALEMÁN, Miguel

Programa de Gobierno, México, s.e, 1945.

ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús

El "amparo Vega". El amparo judicial y la protección de los derechos constitucionales, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José

Primera ley de amparo de 1861, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José

Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José

Proceso de discusión de la Ley de amparo de 1882, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993.

Código Agrario

Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Expropiación, México, La Impresora, 1937.

"Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos" en *Diario Oficial*, martes 27 de abril de 1943, pp. 9-43.

Código de procedimientos, 1898

Código de Procedimientos Federales, México, Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, 1898.

Constitución

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México" en MCGOWAN, Gerald L. (coord.), *El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de México, 1917*, Zinacantepec, Estado de México, El Colegio Mexiquense, Gobierno del Estado de México, 2016, pp. 791-850.

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857" en *Diario oficial,* órgano del gobierno provisional de la República Mexicana, lunes 5 de febrero de 1917, Tomo V, núm. 30, pp. 149-161.

"Constitución Política de Yucatán de 1841" en *Homenaje a Don Manuel Crescencio Rejón*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1960, pp. 94-116.

Declaraciones

"Declaraciones del señor general Abelardo L. Rodriguez, presidente de la república, al margen del Código Agrario en *Código agrario de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Expropiación*, México, La Impresora, 1937, pp. 15-24.

Decreto

"Decreto abrogando la Ley de Ejidos de 28 de diciembre de 1920" en FABILA, Manuel, *Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940*, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981, pp. 309-310.

"Decreto de 6 de enero de 1915, declarando nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856", en FABILA, Manuel, *Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940*, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981, pp. 228-232.

"Decreto de reformas a las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 constitucional", en *Diario Oficial*, 12 de febrero de 1947, pp. 1-2.

"Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal", en *Diario Oficial*, 4 de febrero de 1963.

"*Decreto que faculta al Ejecutivo de la Unión para expedir una Nueva Ley de Organización de Secretarías de Estado y reformar la legislación agraria*" en *Diario Oficial*, 12 de enero de 1934, pp. 1-2.

"Decreto que prohíbe la importación de motores para automóviles y camiones, así como de conjuntos mecánicos armados para su uso o ensamble a partir del 1° de septiembre de 1964" en *Diario Oficial*, sábado 25 de agosto de 1962, pp. 4-5.

"Decreto reformando los arts. 7°, 8° y 9° de la ley de 6 de enero de 1915" en FABILA, Manuel, *Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940*, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981, pp. 250-252.

Dictamen

"Dictamen de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales referente a la iniciativa del Ejecutivo que reforma las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 constitucional", en *Diario de los debates de la Cámara de Diputados*, núm. 39, Legislatura XL, 12 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/. Consultado el 20 de diciembre de 2020.

Indicación

Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Federales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo (estudio introductorio Miguel Bonilla López), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011 (edición facsimilar).

Índice

"Índice del proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de noviembre de 1962" en https://www.constitucion1917-

2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/059%20-%2002%20NOV%201962.pdf

Iniciativa

"Iniciativa de reformas a las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 constitucional", en *Diario de los debates de la Cámara de Diputados*, núm. 35, Legislatura XL, jueves 5 de diciembre de 1946 en http://cronica.diputados.gob.mx/. Consultado el 20 de diciembre de 2020.

Ley

"Ley de Secretarías y Departamentos de Estado" en *Diario Oficial*, 24 de diciembre de 1958, pp. 1-11.

"Ley general agraria del general Francisco Villa" en CÓRDOVA, Arnaldo, *La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen*, México, Ediciones Era, 1983, pp. 467-470.

"Ley Orgánica Constitucional sobre el recurso de amparo" en Dublán, Manuel y Lozano, José María, *Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, t. X, México, Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez, 1878, pp. 521-525.

"Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857" en DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, *Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, t. XVI, México, Imprenta y litografía de Eduardo Dublán y Comp., 1887, pp. 394-403.

"Ley Orgánica de procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el art. 102 de la Constitución Federal, para todos los juicios de que habla el art. 101 de la misma" en DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, *Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, t. IX, México, Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez, 1878, pp. 328-330.

"Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación" en *Diario Oficial*, 23 de noviembre de 1917, pp. 461-463.

"Ley que reforma la de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, de 23 de abril de 1927" en FABILA, Manuel, *Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940*, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981, pp. 405-426.

Memoria

Memoria de Labores (septiembre de 1951-agosto de 1952), México, Departamento Agrario, 1952.

Memoria de la Segunda Convención Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, México, PNR, 1934.

Memoria del Departamento Agrario (septiembre de 1946-agosto de 1947), México, Departamento Agrario, 1947.

Memoria. Primer Congreso Nacional Revolucionario de Derecho Agrario, Departamento Agrario, México, 1946.

MORENO CORA, Silvestre

Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2008 (edición facsimilar).

PARRA, Manuel Germán

Conferencias de mesa redonda, presididas durante su campaña electoral por Miguel Alemán, 27 de agosto de 1945-17 de junio de 1946, México, Imprenta de Juan Pablos, Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, 2009.

Plan de Ayala

"Plan de Ayala" en *El plan de Ayala*, Ciudad de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Fondo de Cultura Económica, 2019, pp. 21-33.

Reglamento

*"*Reglamento Agrario*"* en Fabila, Manuel, *Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940*, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981, pp. 327-332.

Seis años

Seis años de labor agraria, México, Departamento Agrario, 1952.

Seis años de política agraria del presidente Adolfo López Mateos, México, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 1964.

VEGA, Fernando

La nueva ley de amparo de garantías individuales orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitución: comentarios acerca de sus disposiciones más importantes. Ensayo crítico filosófico de la ley, México, Imprenta de J. Guzmán, 1883.

Bibliografía

ABOITES, Luis

Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991. Una historia política desde el noroeste, Ciudad de México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2022.

AGUADO LÓPEZ, Eduardo

Una mirada al reparto agrario en el Estado de México, 1915-1992: de la dotación y restitución a la privatización de la propiedad social, Toluca, El Colegio Mexiquense, 1998.

ALANÍS BOYZO, Rodolfo

Historia de la revolución en el Estado de México. Los zapatistas en el poder, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1987.

ALBRO, Ward S.

Morir de pie: vida, época y escritura de Práxedis G. Guerrero, Ciudad de México, H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Casa de El Hijo del Ahuizote, 2017.

ANAYA PÉREZ, Marco Antonio

Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca, Estado de México, 1821-1921, t. 2, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 1997.

ARBOLEYDA CASTRO, Ruth

El nacimiento del ejido moderno. La ley de ejidos de 1920, México, Yehuetlatolli, 1998.

ARIZPE NARRO, Enrique

La primera sentencia de amparo, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.

ARREOLA AYALA, Alvaro

La sucesión en la gubernatura del estado de México, en el vaivén de la pluralidad y el unipartidismo, 1917-1993, Toluca, El Colegio Mexiquense, 1995.

ÁVILA, Felipe y SALMERÓN, Pedro

Historia breve de la Revolución Mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Siglo XXI Editores, 2015.

ÁVILA ESPINOSA, Felipe Arturo

El problema agrario a fines del Porfiriato y en los comienzos de la Revolución, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.

Las corrientes revolucionarias y la Soberana Convención, Aguascalientes, Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2014.

AYALA LAGUNAS, Francisco

"Resistencia de los hacendados ante el proceso de reforma agraria. El caso de la hacienda de 'La Huerta', propiedad de la familia Henkel, 1915-1935", Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018.

AZAOLA, Elena

Rebelión y derrota del magonismo agrario, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

AZUELA DE LA CUEVA, Antonio

"La jurisprudencia y la formación del régimen agrario en el siglo veinte mexicano" en *Los pueblos indígenas y la constitución de 1917: una revalorización del pasado hacia el presente*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, pp. 319-461.

BAITENMANN, Helga

"Ejerciendo la justicia fuera de los tribunales: de las reivindicaciones decimonónicas a las restituciones de la reforma agraria", en *Historia Mexicana*, April 2017, Vol.66 (4 (264)), pp.2013-2072.

Matters of Justice: Pueblos, the Judiciary, and Agrarian Reform in Revolutionary Mexico, University of Nebraska Press, 2020.

BARTRA, Armando

Regeneración 1900-1918, la corriente más radical de la revolución de 1910 a través de su periódico de combate, México, Hadise, 1972.

Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios de México, 1920-1980, México, Ediciones Era, 1992.

BASSOLS, Narciso

La Nueva Ley Agraria. Antecedentes, México, s.e, 1927.

BAZ, Gustavo

Sexto Informe de Gobierno del Estado de México, 1962-1963, México, Editorial Jus, 1963.

Anecdotario e ideas, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1978 (Testimonios del Estado de México).

BIRRICHAGA, Diana

"Autoridades municipales, garantías individuales y amparo en el Estado de México, 1869, 1882" en MIRANDA PACHECO, Sergio (coord.), *Nación y municipio en México, siglos XIX y XX*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2012, pp. 101-124.

BLANQUEL, Eduardo

Ricardo Flores Magón y la Revolución mexicana, y otros ensayos históricos, México, El Colegio de México, 2008.

BURGOA, Ignacio

El amparo en materia agraria, México, Porrúa, 1964.

El juicio de amparo, México, Porrúa, 1983.

Cabrera Acevedo, Lucio

La Suprema Corte de Justicia a principios del porfirismo (1877-1882), México, SCJN, 1990.

La Suprema Corte de justicia en el siglo XIX, t. I, México, SCJN, 1997.

La Suprema Corte de justicia durante los años constitucionalistas (1917-1920), t. I, México, SCJN, 1995.

La Suprema Corte de justicia durante el gobierno del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), México, SCJN, 2000.

CABRERA, Luis

"La reforma del Artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915" en *La Revolución es la Revolución. Antología*, México, Comisión Nacional Editorial del CEN del PRI, 1985, pp. 207-222.

CAMACHO PICHARDO, Gloria

"Las sociedades agrícolas en los pueblos del sur del Valle de Toluca y la desamortización (1856-1900)" en MOLINA SUÁREZ, César de Jesús, GARCÍA CASTRO, René y GARCÍA PEÑA, Ana Lidia, *La vida, el trabajo y la propiedad en el Estado de México. Los primeros juicios de amparo en la segunda mitad del siglo XIX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, pp. 247-278.

De la desamortización a la reforma agraria, 1856-1930. Los pueblos y sus tierras en el sur del valle de Toluca, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015.

CAMP, Roderic Ai

Biografías de políticos mexicanos, 1935-1985, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

CARRILLO FLORES, Antonio

La Justicia Federal y la Administración Pública, México, Editorial Porrúa, 1973.

Caso, Ángel

Derecho Agrario. Historia, Derecho Positivo, Antología, México, Editorial Porrúa, 1950.

CASTELLANOS SUÁREZ, José Alfredo

Empeño por una expectativa agraria: experiencia ejidal en el municipio de Acolman, 1915-1940, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Universidad Autónoma Chapingo, 1998.

CASTRO ZAPATA, Édgar y PINEDA GÓMEZ, Francisco (comps.)

A cien años del Plan de Ayala, México, Ediciones Era, Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución, 2013.

CHÁVEZ PADRÓN, Martha

El derecho agrario en México, México, Editorial Porrúa, 1983.

COCKCROFT, James

Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, 1900-1913, México, Siglo XXI, 1968.

CÓRDOVA, Arnaldo

La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Ediciones Era, 1983.

COSSÍO DÍAZ, José Ramón

La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México, Fontamara, 2002.

La justicia prometida: El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.

CRUZ REYES, Eucario

"El amparo en materia agraria", en *Revista de los Tribunales Agrarios*, núm. 60, (Octubre – Diciembre, 2012), pp. 39-64.

DE LA PEÑA, Sergio y MORALES IBARRA, Marcel

Historia de la cuestión agraria mexicana. El agrarismo y la industrialización de México 1940-1950, México, Siglo XXI, CEHAM, 1989.

Departamento Agrario

Dos años de acción agraria del Presidente Avila Camacho, México, Departamento Agrario, 1943.

Diario de los debates

Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Cultura, 2016.

Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. III, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Cultura, 2016.

DURÁN, Claudia,

"Apuntes sobre la fuente judicial como recurso para la investigación social" en *Sociohistórica*, núm. 6, 1999, pp. 233-241. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2815/pr.2815.pdf Fecha de consulta 23 de abril de 2020.

DURAND ALCÁNTARA, Carlos Humberto

El derecho agrario y el problema agrario de México (su proyección histórico-social), México, Editorial Porrúa, 2002.

DURAND, Jorge

La ciudad invade al ejido. Proletarización, urbanización y lucha política en el Cerro del Judío, D.F., México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1983.

ESCÁRCEGA LÓPEZ, Everardo

"El principio de la reforma agraria" en ESCÁRCEGA LÓPEZ, Everardo (coord.), *Historia de la cuestión agraria mexicana. El cardenismo: un parteaguas histórico en el proceso agrario 1934-1940*, México, Siglo XXI, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1990, pp. 39-251.

FABILA, Gilberto

Un gobernador. Crítica de su actuación. México, s.e, 1952.

Los ejidos del Estado de México. Catálogo, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1958.

La hacienda, la pequeña propiedad rural y el ejido en el Estado de México, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1959.

FABILA, Manuel

Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940, México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1981.

FALCÓN, Romana

El agrarismo en Veracruz, la etapa radical (1928-1935), México, El Colegio de México, 1977.

"El surgimiento del agrarismo cardenista. Una revisión de las tesis populistas" en *Historia Mexicana*, núm., 107, Vol. XXVII, enero-marzo, 1978, pp. 333-386.

El jefe político: un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911, México, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2015.

FERNÁNDEZ ALBARRÁN, Juan

Primer Informe de Gobierno, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1964.

FERRUA, Pietro

Un anarquista en la Revolución Mexicana: Praxedis G. Guerrero, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2012.

FIX ZAMUDIO, Héctor

"Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en el derecho mexicano" en *Revista de la facultad de derecho de México*, núm. 52, 1963, pp. 893-938.

GARCÍA GÓMEZ, María José

"El certificado de inafectabilidad agraria en la economía mexicana del siglo XX", en ROJAS, Laura y DEEDS, Susan (coords.), *México a la luz de sus revoluciones*, México, El Colegio de México, 2014, pp. 575-604. Vol. 2.

GARCÍA LÁZARO, Andrés

"La dinámica social de una comunidad fabril. La transformación de la fábrica de hilados y tejidos de algodón 'San José Río Hondo', 1865-1902" en *Legajos*, núm. 1, enero-marzo, 2014, pp. 13-31.

GARCÍA PEÑA, Ana Lidia y SUÁREZ DOTTOR, Alejandra

"La pena de muerte y el juicio de amparo en el Estado de México, segunda mitad del siglo XIX" en MOLINA SUÁREZ, César de Jesús, GARCÍA CASTRO, René y GARCÍA PEÑA, Ana Lidia (coords.), *La vida, el trabajo y la propiedad en el Estado de México. Los primeros juicios de amparo en la segunda mitad del siglo XIX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, pp. 33-103.

GAXIOLA, Francisco Jorge

Mariano Otero: creador del juicio de amparo, México, Cultura, 1937.

GAXIOLA, Francisco Javier

El presidente Rodríguez (1932-1934). Por encima de las convenciones de la política, las imposiciones del deber, México, Editorial Cultura, 1938.

GÓMEZ, Marte R.

La reforma agraria de México. Su crisis durante el período 1928-1934, México, Porrúa, 1964.

Historia de la Comisión Nacional Agraria, México, Centro de Investigaciones Agrarias, Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1975.

GONZÁLEZ, Carlos Héctor

Monografía del municipio de San Felipe del Progreso, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1973.

GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés

La Confederación Nacional Campesina. Un grupo de presión en la reforma agraria Mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.

GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel

Los amparos primigenios (1848-1865), México, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2012.

GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel

La revolución social de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, vol. III.

GUTELMAN, Michel

Capitalismo y reforma agraria en México, México, Ediciones Era, 1985.

HART, John M

Los anarquistas mexicanos: 1860-1900, México, Secretaría de Educación Pública, 1974.

HERNÁNDEZ REYES, Lorena y BLANQUEL MORÁN, Mario

San Felipe del Progreso. Monografía municipal, Toluca, Gobierno del Estado de México, Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.

HERREJÓN PEREDO, Carlos

Historia del Estado de México, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1985.

HUIZER, Gerrit

La lucha campesina en México, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970.

INEGI

Estadísticas Históricas de México, t. 1, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Aguascalientes, México, 1990.

JAMES, Timothy

Revolución social e interpretación constitucional: la Suprema Corte y la reforma social revolucionaria 1916-1934, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.

"El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato", en LUNA-FABRITIUS, Adriana, MIJANGOS, Pablo, ROJAS, Rafael (coords.), *De Cádiz al siglo XXI: doscientos años de constitucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012)*, México, Taurus, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012, pp. 253-290.

JARQUÍN ORTEGA, María Teresa y HERREJÓN PEREDO, Carlos

Breve historia del Estado de México, México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1995.

KAPLAN, Samuel

Peleamos contra la injusticia. Enrique Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, cuenta su historia a Samuel Kaplan, t. II, México, Libro Mex Editores, 1960.

KATZ, Friedrich

La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, México, Era, 1984.

KROPOTKIN, Piotr

La conquista del pan, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2005.

KUNTZ FICKER, Sandra

La reforma agraria durante los años veinte en los expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011.

LAGUNAS RUIZ, Hilda

Monografía delegacional de Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Ayuntamiento de Toluca, 2000.

LENIN

¿Por dónde empezar? en *Obras escogidas en doce tomos*, t. 1, Moscú, Progreso, 1975, pp. 474-482.

LIRA, Andrés

El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano: antecedentes novohispanos del juicio de amparo, México, FCE, 1972.

"Del individualismo a la socialización del amparo, 1900-1935" en SPECKMAN Elisa y LIRA, Andrés (coords.), *El mundo del derecho II: Instituciones, Justicia y Cultura Jurídica*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, 2017, pp. 367-393.

"Personalidad y propiedad. Contestaciones, alegatos y sentencias sobre pueblos y comunidades de indios, 1848-1917". Ponencia presentada en el coloquio 500 años de historia indígena: reflexiones y debates, Ciudad de México, septiembre de 2019.

LÓPEZ GONZÁLEZ, Georgina

"La Ley Juárez: reflejo de la cultura jurídica y legal de la primera mitad del siglo XIX" en Vázquez, Josefina Zoraida (coord.), *Juárez: historia y mito*, México, El Colegio de México, 2010, pp. 191-213.

LÓPEZ GUTIÉRREZ, Jesús

"El amparo como recurso de resistencia de los hacendados ante el reparto agrario, en Estado de México, 1915-1931", Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma del Estado de México, 2013.

LÓPEZ MORA, Rebeca

"Los indios de Naucalpan, pasado y presente de un legado cultural" en MÁYNEZ, Pilar (edit.), *El mundo indígena desde la perspectiva actual. Aproximación multidisciplinaria*, vol. II, México, Editorial Grupo Destiempos, 2013, pp. 77-99.

"Con poder y sin linaje: Los caciques indios en Tlalnepantla, siglo XVIII en Iracheta, María del Pilar (Coord.), *Tlalnepantla*, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2016, pp. 17-35.

"El impacto hídrico de la metropolización de la Ciudad de México: el caso de Naucalpan de Juárez, México, 1890-1990" en *Agua y territorio*, núm. 7, enero-junio de 2016, pp.125-138 en https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/2967/2381 fecha de consulta 3 de junio de 2020

Naucalpan ante el Bicentenario. Una mirada al pasado, Naucalpan, H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 2010.

Otomíes y Mexicanos en la tierra de en medio. Pueblos de indios en el norponiente del Valle de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Históricos/Acatlán, 2011.

LOZADA ESQUIVEL, Claudia

"Un proyecto de la Reforma Agraria. La Expropiación de la Hacienda de Atenco, (1930-1940)", Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma del Estado de México, 2017.

"La lucha del pueblo de San Mateo Atenco por el ejido entre 1915 y 1981", Tesis de maestría en Historia, El Colegio Mexiquense, 2022.

MACKINLAY, Horacio

"Los empresarios agrícolas y ganaderos y su relación con el Estado mexicano en la época del Partido Revolucionario Institucional" en *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, vol. 2, núm. 4, segundo semestre, 2004, pp. 113-144.

MALDONADO ARANDA, Salvador

Grupos políticos y cacicazgos sindicales en el estado de México, Zamora, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de México, 2002.

"Rediscutiendo el centralismo político: elites políticas, el Gomismo y el PST en el Estado de México (1923-1940)" en *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, vol. XXI, núm. 82, 2000, pp. 233-267.

MALDONADO SALAZAR, Ismael

"La reforma agraria y los procesos de urbanización de ejidos y comunidades. Los casos de Xochimilco y Santa María Chimalhuacán" en *Estudios campesinos en el Archivo General Agrario*, vol. 3, México, Registro Agrario Nacional, Archivo General Agrario, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2001, pp. 13-115.

MARINO, Daniela

"«La medida de su existencia». La abolición de las comunidades indígenas y el juicio de amparo en el contexto desamortizador (Centro de México, 1856-1910)", en *Revista de Indias*, 2016, vol. LXXVI, núm. 266, pp. 287-313.

MARTÍNEZ CRUZ, Cinthia

"Guía de las actas de cabildo del Archivo Histórico Municipal de Naucalpan, 1881-1889", Tesis de licenciatura en Historia, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2009.

MARTÍNEZ PASTOR, Manuel

Los fallos pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 1o de junio de 1917 al 30 de junio de 1922, relativos al problema agrario, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1923.

MAYO, Carlos, MALLO Silvia, BARRENECHE, Osvaldo

"Plebe urbana y justicia colonial: las fuentes judiciales. Notas para su manejo metodológico" en *Frontera, Sociedad y Justicia Coloniales*, núm. 1, 1989, pp. 47-80.

MEDIN, Tzvi

Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, México, Siglo XXI, 1975.

El sexenio alemanista: ideología y praxis política de Miguel Alemán, México, Era, 1990.

MEDINA NERI, Héctor

Gustavo Baz, guerrillero de Emiliano Zapata, México, 1979.

MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio

El problema agrario de México, México, Porrúa, 1954.

Política Agraria, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1957.

MENDOZA GARCÍA, Edgar

Agua y tierra en San Gabriel Chilac, Puebla, y San Juan Teotihuacán, Estado de México: el impacto de la reforma agraria sobre el gobierno local, 1917-1960, México, Publicaciones de la Casa Chata, 2016.

MENDOZA VARGAS, Gilberto

Evolución agrícola en el Estado de México 1940-1975, México, Gobierno del Estado de México, 1979.

MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Pablo

Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México, Ciudad de México, El Colegio de México, 2019.

MIÑO GRIJALVA, Manuel y TÉLLEZ GONZÁLEZ, Mario

Estadísticas para la historia económica del Estado de México, 1824-1911, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1999.

MIÑO GRIJALVA, Manuel y VERA BOLAÑOS, Marta

Estadísticas para la historia de la población del Estado de México, 1826-1910, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1998.

MOGUEL, Julio

"La cuestión agraria en el periodo 1950-1970" en MOGUEL, Julio (coord.), *Historia de la cuestión agraria. Política estatal y conflictos agrarios 1950-1970*, México, Siglo XXI, CEHAM, 1989, pp. 103-220.

MOLINA SUÁREZ, César de Jesús, GARCÍA CASTRO, René y GARCÍA PEÑA, Ana Lidia (coords.)

La vida, el trabajo y la propiedad en el Estado de México. Los primeros juicios de amparo en la segunda mitad del siglo XIX, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007.

MONTES DE OCA, Elvia

El reparto de tierras en el municipio de Toluca, Toluca, El Colegio Mexiquense, 2001.

Historia de la lucha por la tierra en el estado de México, 1915-1958, Toluca de Lerdo, Gobierno del Estado de México, 2009.

NARVÁEZ, José Ramón

Historia social de la defensa de los derechos en México. El origen del Juicio de Amparo en la Península Yucateca, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.

NIETO NAVA, Nicolás

"Las tensiones del reparto agrario: La justicia y la vida institucional. Una perspectiva desde el juicio de amparo en Michoacán (1917-1921)" en TAPIA, Regina y ANDREWS, Catherine (coords.), *La reforma agraria desde los Estados: ensayos en conmemoración del centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915*, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018, pp. 93-140.

NOPHAL DE PARRA, Alma

El amparo colonial en Tlaxcala, como antecedente del juicio de amparo en México, de acuerdo al códice de Santa Catharina Ayometla, Tlaxcala, 1691-1696, Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 1985.

OLIVERA TORO, Manuel

Informe del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, México, Imprenta El Automóvil en México, 1914.

OLMEDO GARCÍA, Marina del Pilar y REYES RAMÍREZ, Lidía del Rocío

El amparo novohispano del estado de Oaxaca. Caso de estudio, México, Tirant Lo Blanch, 2017.

ORTIZ YAM, Inés

"Convenios para el uso del agua. El pueblo de Santa Ana y las haciendas Santa Teresa y Nuestra Señora del Carmen. Toluca, siglo XVIII" en *Boletín del Archivo Histórico del Agua*, México, vol. 16, núm. 19, septiembre-diciembre, 2001, pp. 18-22.

"El Reparto Agrario en Yucatán desde los Juicios de Amparo (1921- 1928)" en *La justicia federal en las entidades federativas durante la revolución y después de la Constitución de 1917*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, pp. 449-505.

PALLARES, Eduardo

Prontuario crítico de la nueva ley de amparo, con el texto de la ley, exposición de motivos, ley orgánica del poder judicial de la Federación, índice de materias y formularios, México, Porrúa, 1936.

PÉREZ FRANCO, Aminadab Rafael

Índice biográfico de legisladores federales del PAN, 1946-2008, México, Tatevari Ediciones, 2008.

PÉREZ MONFORT, Ricardo

Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX (tomo 2), México, Debate, 2019.

POSADA, Ángel

"El Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos" en *La cuestión agraria mexicana. Ciclo de conferencias organizado por la Secretaría de Acción Agraria del Partido Nacional Revolucionario*, México, PNR, 1934.

Procuraduría Agraria

Glosario de términos jurídico-agrarios, México, Procuraduría Agraria, 2009.

RAMÍREZ RANCAÑO, Mario

El sistema de haciendas en Tlaxcala, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.

REA MOGUEL, Alejandro

México y su reforma agraria integral, México, Antigua Librería Robredo, 1962.

REYNOSO JAIME, Jenaro

"Facciones, elecciones y política en el Estado de México: en busca de la legitimidad (1919-1926), Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras/UNAM, 2008.

REYNOSO JAIME, Irving

El agrarismo radical en México en la década de 1920. Úrsulo Galván, Primo Tapia y José Guadalupe Rodríguez (una biografía política), México, Investigación patrocinada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009.

RHI SAUSI, María José

"Derechos y garantías: el juicio de amparo y la modernización jurídica liberal" en Pani, Erika (coord.), *Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908*, México, CIDE, FCE, INEHRM, Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010, pp. 120-162.

RIVERA CASTRO, José

"Política agraria, organizaciones, luchas y resistencias campesinas entre 1920 y 1928" en Montalvo, Enrique, (coord.), *Historia de la cuestión agraria mexicana. Modernización, lucha agraria y poder político 1920-1934*, México, Siglo XXI, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1988, pp. 21-149.

ROBLES SÁNCHEZ, Mónica Paulina

"Archivo Histórico Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México: Proceso de organización y clasificación. Catalogación del Fondo Documental Fomento", Tesis de Licenciatura en Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2011.

RODRÍGUEZ KURI, Ariel

"Adolfo López Mateos y la gran política nacional" en HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rogelio (coord.), *Adolfo López Mateos. Una vida dedicada a la política*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2015, pp. 187-218.

ROJAS, Isidro y PASCUAL, Francisco

El amparo y sus reformas, México, Tip. de la Compañía Editorial Católica, 1907.

ROSEBERRY, William

"Hegemonía y lenguaje contencioso", en JOSEPH, Gilbert y NUGENT, Daniel (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*, México, Ediciones Era, 2002, pp. 213-226.

ROUAIX, Pastor

Genesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, México, Comisión Nacional Editorial del CEN del PRI, 1984.

RULFO, Juan

"Nos han dado la tierra" en *El llano en llamas*, México, FCE, 1973, pp. 13-18.

RUÍZ MONDRAGÓN, Laura y ÁNGELES SÁNCHEZ, Guadalupe

Guía de expropiación de bienes ejidales y comunales del Archivo General Agrario, México, RAN, CIESAS, 2001.

SAMANIEGO LÓPEZ, Marco Antonio

"… El magonismo no existe": Ricardo Flores Magón en *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, núm. 49, enero-junio, 2015, pp. 33-53.

SALINAS SANDOVAL, María del Carmen

En busca de la libertad municipal: Toluca 1877-1940, Zinacantepec, Estado de México, El Colegio Mexiquense, 2018.

SÁNCHEZ GARCÍA, Alfonso

Historia del Estado de México, México, Gobierno del Estado de México, 1974.

El Circulo Rojinegro, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1984, colección, escritores del Estado de México 2

SCOTT, James

Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale University Press, 1985.

Los dominados y el arte de la Resistencia, México, Ediciones Era, 2000.

SILVA HERZOG, Jesús

El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

SIMPSON, Eyler

"El ejido: única salida para México" en *Problemas agrícolas e industriales de México*, México, Núm. 4, Vol. IV, 1952, pp. 7-350.

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Faustino José

Apuntes para la historia del juicio de amparo, México, Porrúa, 2002.

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis

Fuentes para la historia del juicio de amparo, México, Senado de la República, LIX Legislatura, Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, 2004.

Suprema Corte

Historia del amparo en México. Antecedentes constitucionales y legislativos, 1824-1861, t. II, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, 1999.

Ministros, 1917-1994, semblanzas, 2 t., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002.

Las propuestas de reforma que ha impulsado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Amparo, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.

TANNENBAUM, Frank

"La revolución agraria mexicana" en *Problemas agrícolas e industriales de México*, México, Núm. 2, Vol. IV, 1952, pp. 9-169.

TORRES-MAZUERA, Gabriela

La ruralidad urbanizada en el centro de México: reflexiones sobre la reconfiguración local del espacio rural en un contexto neoliberal, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

THOMPSON, Edward

"La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII" en THOMPSON, Edward, *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 62-134.

TOTO, Mireya

El amparo de la pequeña propiedad agraria, México, Grijalbo, 1986.

TURNER, Ethel Duffy

Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, Morelia, Michoacán, Editorial Erandi, 1960.

VÁZQUEZ URBÁN, Antonio

Tultepec. Monografía municipal, Toluca, Gobierno del Estado de México, Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.

YHMOFF CABRERA, Jesús

Monografía municipal. San Felipe del Progreso, Toluca, Gobierno del Estado de México.

El municipio de San Felipe del Progreso a través del tiempo, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1979.

ZARCO, Francisco

Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, 1856-1857, México, El Colegio de México, 1956.

ZEVADA, Ricardo

Calles. El presidente, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1983.

Fuentes hemerográficas

Diario Oficial

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores

El Colmillo Público

El Derecho, periódico de jurisprudencia y legislación

El Foro

El Informador

El Nacional

El Universal

Gaceta del Gobierno del Estado de México

Regeneración

Revolución

Semanario Judicial de la Federación

Recursos electrónicos

https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx

http://cronica.diputados.gob.mx/

Diccionario de escritores mexicanos. Siglo XX en https://www.iifilologicas.unam.mx/dem/

Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara en http://enciclopedia.udg.mx/

https://mapoteca.siap.gob.mx

https://naucalpan.gob.mx

http://www.memoriapoliticademexico.org

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/casas-cultura-juridica/nuevo-laredo-tamaulipas/biografia